

# Ciencia, tecnología y dictadura

## Producción de conocimiento e intervención militar en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria [1973 - 1983]

Autor:

Gárgano, Cecilia

Tutor:

Hurtado, Diego

2017

Tesis presentada con el fin de cumplimentar con los requisitos finales para la obtención del título Doctor de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires en Historia

Posgrado

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

TESIS DOCTORAL

**Ciencia, tecnología y dictadura**

**Producción de conocimiento e intervención  
militar en el Instituto Nacional de Tecnología**

**Agropecuaria (1973 - 1983)**

*Autor: Cecilia Gárgano*

*Director: Dr. Diego Hurtado*

*Co-director: Dr. Hernán Thomas*

*Fecha de entrega:*

*A la vida de mi abuela Alcira*

*Por su amor generoso, de alfajor en el bolsillo del guardapolvo, que me acompañó en cada aula desde pequeña y me ayudó a convertirme en la mujer que soy.*

# Índice

|   |           |
|---|-----------|
| Agradecimientos.....  | 7         |
| Resumen.....  | 11        |
| <b>Introducción.....</b>  | <b>12</b> |
| 1. ¿Por qué el INTA en dictadura? Interrogantes, puntos de partida y objetivos.....   | 12        |
| 1.1. Sobre la estructura de la tesis: estrategia narrativa, saltos temporales y niveles analíticos.....   | 20        |
| 1.2. Abordaje y construcción del <i>corpus</i> documental: archivos, materiales y testimonios.....  | 23        |
| 2. Ciencia, tecnología y dictadura en Argentina: problemáticas y estudios en curso....  | 34        |
| 2.1. Cuadro 1: Hitos relevantes en la regulación de la producción de CyT (1973-1983).....   | 43        |
| 2.2. Gráfico Presupuesto del INTA (1973-1983).....  | 46        |
| 3. Breve reseña histórica de INTA: la institucionalización de la investigación y extensión rural.....   | 48        |
| <br>  |           |
| <b>PRIMERA PARTE</b>  |           |
| <b>El INTA entre el tercer peronismo y la dictadura. Reconfiguración institucional, políticas sectoriales e intervención militar (1973-1976).....</b> | <b>59</b> |
| <b>Capítulo I. El INTA durante el tercer gobierno peronista (1973-1976).....</b>  | <b>60</b> |
| 1. Resumen.....   | 60        |
| 1.1. Proyecto reformista, transformación social y radicalización conservadora.....  | 61        |
| 1.2. La reordenación de la geografía institucional del INTA: transición democrática y nuevos equipos directivos.....                                  | 64        |
| 1.3. Cuadros 2: Profesionales de INTA con cargos directivos vinculados a la OUGT y Presidentes de INTA entre 1973 y 1976.....                         | 83        |
| 1.4. Cuadros 3: Presidentes de INTA entre 1973 y 1976.....  | 83        |
| 1.5. El rol del INTA en la política agropecuaria (1973/1974): Ley agraria e Impuesto a la Renta Normal Potencial de la Tierra.....                    | 84        |

|   |     |
|---|-----|
| 1.6. La recepción del anteproyecto de Ley Agraria y la visión sobre el INTA en la prensa: la “infiltración” .....     | 97  |
| 1.7. Conclusiones: cuadros institucionales, orientaciones y conflictos.....   | 104 |
| <b>Capítulo II. Seguimiento e intervención militar (1976-1983)</b> .....  | 106 |
| 1. Resumen.....   | 106 |
| 1.1. El INTA bajo la lupa: antecedentes y configuración de un mapa de datos sobre los trabajadores del organismo..... | 107 |
| 1.2. El grupo de Ecología de Castelar: radiografía de un equipo de trabajo pionero...115                              |     |
| 1.3. La intervención militar (1976): instrumentación de la cartografía represiva.....                                 | 122 |
| 1.4. Cuadro 4. Cesantías: distribución geográfica.....  | 130 |
| 1.5. El <i>saneamiento</i> : del lenguaje técnico a la depuración institucional.....                                  | 133 |
| 1.6. La reconfiguración de la “Familia INTA”: identidades, relatos y poderes en pugna.....                            | 136 |
| 1.7. Conclusiones: construcción y puesta en práctica de dispositivos de control.....                                  | 146 |

## SEGUNDA PARTE

|   |     |
|---|-----|
| <b>Agendas en disputa (1973-1983). Estrategias de extensión rural e investigaciones socio-económicas</b> .....  | 148 |
| <b>Capítulo. III. (Agendas en disputa 1). La reorganización de la extensión rural: del agrónomo de terreno al asesor de grandes productores</b> ..... | 149 |
| 1. Resumen.....   | 150 |
| 1.1. La extensión rural en Argentina.....   | 150 |
| 1.2. Antecedentes e influencias.....  | 152 |
| 1.3. Los comienzos de la extensión en el INTA: entre la asistencia educacional y la mirada asistencialista.....                                       | 157 |
| 1.4. Jóvenes, mujeres y “familia rural”: el INTA y sus canales, clubes 4-A y Hogar Rural.....   | 162 |
| 2. Agrónomos de terreno (1970-1976).....  | 166 |
| 3. Campo Herrera: historia en el surco del cañaveral. Una experiencia híbrida de extensión, investigación y auto-organización rural.....              | 180 |
| 3.1. Los avances de la cooperativa o “un tractor por un antropólogo”.....   | 186 |
| 3.2. Desmantelamiento y reconversión.....   | 191 |

|   |            |
|---|------------|
| 4. Políticas sectoriales, acumulación de capital en el agro y mercantilización de conocimiento.....                               | 194        |
| 4.1. Del contacto con las comunidades rurales a la transferencia de tecnología para grandes terratenientes .....                  | 202        |
| 5. Conclusiones: (re)apropiación privada de la extensión y despoblamiento rural.....  | 210        |
| <b>Capítulo IV. Economía y sociología rural en debate: de la ‘tranquera para afuera’ a la fragmentación del conocimiento.....</b> | <b>212</b> |
| 1. Resumen.....   | 212        |
| 1.1. El origen de los estudios socio-económicos del INTA: enfoques importados y paisaje nacional.....                             | 213        |
| 1.2. El equipo de Economía Castelar: el replanteo de la mirada del INTA sobre la estructura agraria (1973-1976).....              | 216        |
| 1.3. La Escuela para Graduados en Ciencias Agropecuarias: historia de una experiencia inconclusa de formación.....                | 232        |
| 2. La investigación socio-económica durante la dictadura: el reinado de los “micro-problemas”.....                                | 240        |
| 3. Conclusiones: del análisis de la realidad agropecuaria a la promoción del empresario rural.....                                | 246        |

### TERCERA PARTE

|  |            |
|--|------------|
| <b>Producción pública y apropiación privada de conocimiento científico tecnológico: historia de una dinámica de investigación.....</b> | <b>250</b> |
| <b>Capítulo V. Gallinas para el norte argentino. Experimentación científica, genética aviar y dictadura.....</b>                       | <b>251</b> |
| 1. Resumen.....  | 251        |
| 1.1. Historia de una trayectoria científica interrumpida: los orígenes de la “genética nutricional”.....                               | 252        |
| 1.2. Una rama muy concentrada: insumos importados y necesidades locales.....   | 255        |
| 1.3. Intervención y desmantelamiento.....  | 260        |
| 2. A modo de cierre.....   | 263        |
| 2.1. Gráfico. Distribución de cesantías por áreas de investigación (EEA Pergamino).....  | 263        |

|   |     |
|---|-----|
| <b>Capítulo VI. Semillas, conocimiento y propiedad. Mecanismos de apropiación y cooptación de conocimiento científico-tecnológico</b> .....             | 265 |
| 1. Resumen.....   | 265 |
| 1.2. Investigación pública en genética vegetal y apropiación de conocimiento.....   | 266 |
| 1.3. Interrogantes y problemas: .....   | 268 |
| 2. Mecanismos de distribución y comercialización de las semillas oficiales.....   | 271 |
| 3. El rol del INTA en trigo (o cómo la investigación oficial repuntó la producción triguera).....   | 273 |
| 4. Soja: el rol del sector público en los inicios del “boom”.....   | 278 |
| 5. Investigaciones en maíz: híbridos públicos o subsidiaridad del Estado.....   | 286 |
| 5. Conclusiones: inversión pública, ganancias privadas. Fortalecimiento y formalización de una tendencia.....   | 296 |
| <br>  |     |
| <b>Conclusiones y nuevos interrogantes</b> .....  | 301 |
| 1. Entre la reconfiguración institucional y las agendas en disputa (1973-1976).....   | 301 |
| 1.1. De agendas científicas y sujetos agrarios desplazados.....   | 303 |
| 1. 2. Disciplinamiento y “saneamiento” institucional.....   | 309 |
| 1. 3. La dictadura en la trayectoria del INTA: continuidades y rupturas en la producción pública de ciencia y tecnología agropecuaria en Argentina..... | 311 |
| 1.4. La apropiación privada de conocimiento como dinámica histórica: interrogantes pendientes.....  | 313 |
| <br>  |     |
| Anexo Documental: selección de imágenes y documentos.....   | 318 |
| Glosario.....   | 325 |
| Bibliografía.....   | 329 |
| Listado de fuentes.....   | 371 |
| Entrevistas realizadas.....   | 391 |

## Agradecimientos

Detrás de esta tesis hay una larga lista de agradecimientos que incluye nombres, lugares, espacios de trabajo y afectos, sin los cuales hubiera sido imposible llevarla adelante.

Dos becas doctorales, otorgadas en forma consecutiva desde 2010 por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas -CONICET-, me permitieron tener una dedicación interrumpida a lo largo de estos años. El Centro de Estudios de Historia de la Ciencia y la Técnica José Babini, de la Universidad Nacional de San Martín, fue el ámbito donde se radicó el trabajo, me brindó un espacio y una fuente de intercambio con colegas preocupados por problemáticas afines.

A Diego Hurtado, mi director y director del Centro, además de los múltiples comentarios, sugerencias y materiales de lectura, tengo que agradecerle la paciencia, el respeto frente a mis propias elecciones, y el acompañamiento sostenido a lo largo de este tiempo. A los integrantes del Centro Babini, y en especial a mis compañeros, Agustín Piaz, Ana Spivak, Daniel Blinder y Pablo Souza, por los aportes y el recorrido conjunto, las reuniones y recreos donde compartimos avatares de las investigaciones, y de la vida. A Hernán Thomas, por haberme aceptado en su equipo de investigación del Instituto de Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología de la Universidad Nacional de Quilmes, cuando era una estudiante de segundo año bastante curiosa y un poco díscola.

La Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires fue el ámbito donde me formé en la carrera de Historia, y descubrí en esta actividad una vocación y un oficio al que abracé con pasión. A Eduardo Glavich, que fue mi primer profesor en Puán, por haber respondido generosamente consultas múltiples durante mucho tiempo, y por acercarme a la lectura de *El Capital*, en uno de los talleres que hoy siguen recomenzando en la facultad. A Roberto Pittaluga, por las preguntas que abrió, sin saberlo, en el último seminario de grado que cursé.

El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales -CLACSO- eligió en uno de sus concursos un proyecto elaborado a partir de esta investigación, permitiéndome difundir resultados preliminares mediante su revista *Crítica y Emancipación*, para el que fue seleccionado el trabajo final. Al equipo de la revista *Realidad Económica* (del



IADES), que en 2011 publicó un primer artículo con avances de la investigación, le debo haber posibilitado, gracias a su difusión, el acceso a archivos del INTA. Al Comité Editorial de *Mundo Agrario*, por las sugerencias y por aceptar una contribución reciente originada en este trabajo.

El Centro de Ciencias Sociales y Humanas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas -CSIC- de España me permitió realizar una estancia en 2011, en la que pude recorrer una biblioteca monumental, presentar y discutir avances, y volver a Madrid, mi segunda casa en el mundo.

Este trabajo hubiera sido imposible sin los testimonios que ofrecieron trabajadores, familiares y ex trabajadores del INTA. A todos y cada uno de ellos, que me permitieron bucear en sus historias, me hicieron llegar fotos y documentos, mi profundo agradecimiento. Este trabajo de (y en) el campo me llevó a aproximarme a los indicios, en el decir del gran Carlo Ginzburg, para unir el rompecabezas de semillas, archivos, documentos y relatos. A Guido Prividera, por haber acompañado esta investigación desde sus inicios, por las charlas sobre la estructura agraria pampeana con miel y naranjas del INTA de por medio, por las canciones de Viento, por el acceso a la única causa judicial, y por bajar de las ramas para hablar conmigo. A Nicolás Prividera, por haber filmado esa película iluminadora que es *M*, y por haberme cedido generosamente materiales de su propia búsqueda. A la Comisión de Reparación Histórica de INTA, que en 2012 formaron miembros del instituto, por el camino recorrido juntos. En especial, a Oscar Taboga y Fabiana Bigi, por las lecturas y por responder mis dudas sobre el funcionamiento de los bichos y las plantas. Y a Mariano Giombini, por la garra y la confianza.

Desde el 20 de marzo de este año, la firma de un Convenio entre INTA y CONICET toma a esta investigación como base e inaugura un nuevo espacio colectivo, en el que buscaremos profundizar el estudio de la historia reciente del INTA y avanzar sobre las intervenciones militares de otros organismos de ciencia y técnica del país. La posibilidad de contar con una continuidad colectiva e interdisciplinaria para las preguntas que abre esta tesis es, sin dudas, el mejor final que podía tener. Mi agradecimiento a quienes se están sumando a este proyecto, que está radicado en el Centro Babini y cuenta con el trabajo de Ana Larcher, Ezequiel Eliano, Clara Sarsale,

Santiago Garaño, y Ana Spivak (a quien, además de lecturas y comentarios, tengo agradecerle haber encontrado una amiga en una colega).

A Mariano Zukerfeld, por la invitación a formar parte del grupo de estudio sobre Explotación Cognitiva, donde además de discutir uno de los capítulos de esta tesis, encuentro herramientas para el camino de investigación que continúa. Y a distintos grupos de formación, que a lo largo de estos años me ayudaron a pensar y a aprender a trabajar.

Esta investigación también tiene que ver con una fascinación por el campo, la tierra húmeda, los girasoles al borde del camino. Salir a la ruta, a las distintas rutas, para recorrer las estaciones experimentales del INTA, me devolvió a los recuerdos de verano de la primera infancia, en algún rincón de Santa Fe. A mis hermanos, Santiago y Nicolás, y a mi hermana, Natalia, por cuidarme y acompañarme siempre. A Marianito, que a sus diez años no entiende del todo de qué trabaja su hermana. A mi sobrinos, Sofía, Tomás y Vicente, y a la recién llegada Mora, por llenarme permanentemente de alegría, ser mi cable a tierra y porque los quiero mucho. A mi papá, Horacio, por transmitirme desde pequeña su amor por los libros y los viajes, y a Victoria, mi mamá, por acompañar mi camino, y recordarme que el conocimiento fue su mejor aliado en una niñez cuesta arriba. A ambos por desear cosas lindas para mí, y apostar conmigo a mis desafíos. A mi abuela Alcira, porque me hubiera gustado celebrarlo también con uno de sus matambres y porque la extraño mucho. Y a toda la familia, que es muy, muy numerosa.

A mis amigas y compañeras de Puán, por compartir y por celebrar. A Sofía Seras, por las mañanas de mate y tesis compartidas.

A Javi, por los paseos en moto que despejaron ideas y renovaron energías en este tramo final de escribir horas y horas.

A mis amigos de la vida, por haber estado tanto y por tener la certeza de que seguirán estando siempre en todo lo que venga. En especial a Foke y a Hernán, que durante los primeros dos años de esta tesis escucharon hablar de INTA del desayuno a la cena, en nuestra antigua casa de Venezuela. A Leo, por la ayuda generosa de economista. Por las largas horas de bar, a Santi. Por las discusiones políticas, y por las otras, a Seba. A Juan, por alegrarse con cada pequeño logro. Y a todos ellos, por

ayudarme desde hace ya muchísimos años a construir mi propia identidad, que también está desplegada en estas páginas.

Buenos Aires, abril, 2014.

## Resumen

Esta tesis se dedica a reconstruir y analizar la trayectoria del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), uno de los principales organismos del complejo científico-tecnológico argentino, entre 1973 y 1983. Período enmarcado por dos transiciones democráticas, y atravesado por el desarrollo de la última dictadura (1976-1983). Se estudian los contenidos, destinatarios y puesta en marcha de las agendas de investigación y extensión rural. En particular, se analizan cambios y continuidades, indagando qué ocurrió en áreas estratégicas del INTA durante su intervención militar.

Partiendo de la premisa que el estudio de una institución excede la descripción de su organigrama formal y planes de trabajo, se busca analizar las tensiones, iluminar las vinculaciones entre la trayectoria institucional, la dinámica socioeconómica y las transformaciones políticas en curso en el período bajo estudio. Asimismo, se explora la introducción de mecanismos represivos en el instituto, su instrumentación y efecto en las agendas de trabajo. Prácticas de investigación, reconfiguración de las burocracias estatales, políticas sectoriales, producción y apropiación de conocimiento, y reordenación del espacio rural, son abordadas en forma conjunta.

A partir de un amplio y heterogéneo *corpus* de materiales documentales, esta tesis asume el desafío de indagar en una compleja trama, integrada por contenidos de investigación y extensión rural, testimonios de trabajadores y ex trabajadores del INTA, producción de semillas, ejercicio de la violencia estatal, articulación entre investigaciones públicas y capitales privados.

En virtud del rol, histórico y relevante, del agro en Argentina, el estudio de este organismo abre también un abanico de problemáticas indivisibles del peso económico, político y cultural que este sector tuvo (y tiene) para el país.

## **Introducción**

### **1. ¿Por qué el INTA en dictadura? Interrogantes, puntos de partida y objetivos**

Este trabajo aborda el estudio de las condiciones de producción de conocimiento en Argentina en un área estratégica: las investigaciones vinculadas al sector agropecuario, nucleadas en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), en los años que precedieron a la última dictadura cívico-militar y durante su desarrollo. Se propone analizar las agendas de trabajo del organismo en diálogo con la dinámica socio-económica y política del período, los grados de penetración de mecanismos represivos en la institución y los cambios presentes en el agro. El objetivo general de esta tesis es reconstruir la historia del INTA en el período 1973-1983 y contribuir a la comprensión de los vínculos existentes entre la producción científica y tecnológica y el pasado reciente, en un área clave de la estructura económica local. Más específicamente, busca rastrear y problematizar cambios y continuidades en los contenidos, objetivos y destinatarios de los conocimientos producidos en el ámbito del INTA. En este sentido, entre los objetivos específicos de esta investigación se encuentran: i) estudiar vinculaciones entre transformaciones económicas del período y la orientación de la producción científico-tecnológica del INTA en algunas de sus principales áreas de acción; ii) explorar articulaciones entre las iniciativas políticas sectoriales y la orientación de las actividades de investigación y extensión rural estudiadas; iii) analizar la introducción de mecanismos represivos y su impacto en las agendas de trabajo del organismo; iv) problematizar conexiones entre los contenidos de investigación y extensión analizados y las principales transformaciones registradas en el espacio rural en este período. En relación al recorte temporal, si bien inicialmente la tesis se concentró en el período coincidente con la última dictadura (1976-1983), resultó necesario incorporar un análisis del panorama existente en el INTA y en la Secretaría de Agricultura y Ganadería -de la que dependía el instituto- en los años previos al golpe de militar (1973-1976), debido a que fue posible identificar en ellos tanto antecedentes significativos de transformaciones posteriores como iniciativas relevantes en materia agropecuaria que luego fueron desarticuladas. La importancia que adquirió a lo largo de la investigación el período 1973-1976 resultó sumamente relevante, quedando el rango

temporal definido por dos restauraciones democráticas (1973 y 1983) atravesadas por el período correspondiente a la última dictadura<sup>1</sup>.

Producto de una investigación doctoral realizada durante los últimos cinco años, la motivación inicial partió de un registro y una pregunta. En un marco de vertiginoso crecimiento de los estudios dedicados al pasado reciente, faltaban indagaciones -tanto en la historiografía, como en el campo de los estudios sociales de la ciencia y la tecnología- que analizaran la vinculación entre ciencia, tecnología y dictadura. Y, más específicamente, no existía un análisis del INTA centrado en esta problemática, aún siendo éste un organismo clave del complejo científico-tecnológico local y habiendo atravesado una intervención militar de significativa envergadura. ¿Por qué, entonces, analizar esta relación? Como ha indicado Pestre (2005), la ciencia moderna como institución históricamente fue del más alto interés para los poderes políticos, económicos y militares. El estudio de una institución de investigación científica y desarrollo tecnológico en este contexto histórico particular y bajo la resonancia específica del sector agropecuario en Argentina -debido a su relevancia en términos económicos, políticos y culturales- ofreció un amplio conjunto de problemáticas relevantes para explorar. En este sentido, junto al estudio en profundidad de las transformaciones registradas en el espacio social de INTA y de la orientación de sus actividades, esta tesis también se propone aportar a la generación de interrogantes que motoricen nuevas líneas de investigación.

¿Por qué el INTA? La elección del caso responde a tres razones prioritarias. En primer lugar, en función del rol histórico del agro en la estructura productiva del país, la investigación agropecuaria resultó tempranamente central y su institucionalización alcanzó, con la creación del INTA en 1956, un nuevo impulso orientado a la generación de tecnologías para el sector (León y Losada, 2002). El perfil agroexportador argentino, presente desde los inicios de la inserción local en la división internacional del trabajo, y la centralidad de la renta de la tierra en el proceso de acumulación local (Iñigo Carrera, 2007) ubicaron al instituto en una posición estratégica dentro del complejo científico y tecnológico nacional. Por otro lado, por su propio diseño institucional, que desarrolló

---

<sup>1</sup>En otro nivel más específico, el recorte temporal también se vincula al inicio de una reconfiguración organizacional del instituto, (conocida como "INTA II"), y de relevantes transformaciones tecnoproductivas a partir de la introducción de la biotecnología en una de las áreas de investigación abordadas, la producción de semillas, coincidentes con el retorno de la democracia.

una amplia presencia territorial a lo largo del país e integró la investigación con la extensión rural, también se ubicó como referente para sus pares latinoamericanos y se distinguió de otros organismos locales. Por último, si bien con el golpe de Estado de marzo de 1976 la intervención fue una constante en el conjunto de los ámbitos de investigación, en el INTA se desplegó un operativo militar donde la composición de su *cuerpo científico-técnico* se vio directamente involucrada. En este sentido, se trata de un objeto relevante para indagar en las vinculaciones entre ciencia, tecnología y dictadura. La elección del caso se sustenta, entonces, en la relevancia de: a) el sector agropecuario para la estructura productiva argentina; b) la forma de organización del instituto que imbricó la investigación y la extensión rural, esta última tarea de nexo directo con los productores privada del INTA c) su elevada presencia territorial a lo largo del país; d) la magnitud de su intervención militar a partir de 1976.

La tesis analiza el contenido de algunas áreas estratégicas de investigación del INTA y de sus tareas de extensión rural, en conexión con transformaciones operadas en el agro dentro del proceso nacional de acumulación de capital, en las políticas sectoriales (especialmente las registradas en los años previos al golpe), en los modos en los que operó el disciplinamiento en el organismo, y en la trayectoria de su propia cultura institucional<sup>2</sup>. La hipótesis general puede formularse de esta manera: durante la dictadura se produjo una re-estructuración de contenidos, objetivos y destinatarios de las tareas de investigación y extensión del INTA, que clausuró la existencia de agendas en disputa, aceleró un proceso de fragmentación y mercantilización del conocimiento producido y operó íntimamente articulado a: i) transformaciones políticas, en particular las registradas en materia de políticas agropecuarias y científico-tecnológicas; ii) cambios en el proceso de acumulación en general y en la configuración del ámbito rural en particular; iii) introducción de mecanismos represivos.

Analíticamente, es posible desagregar esta hipótesis general en tres hipótesis parciales. La primera, que *las tareas de investigación y extensión rural del INTA fueron objeto de una re-estructuración asociada a los cambios registrados en el proceso de acumulación local y a las políticas sectoriales*. La segunda, que *a partir de la*

---

<sup>2</sup> Pese a la amplia definición ligada al concepto de “cultura”, entendemos por “cultura institucional” un conjunto de rasgos propios de la matriz institucional que remiten a la conformación de las identidades profesionales, el sentido de comunidad, los ritos y dinámicas asociados a la pertenencia al organismo, los mandatos a los que estuvo asociado su accionar. Este aspecto se aborda en el capítulo II, en vinculación a la introducción de prácticas represivas al interior del INTA.

*intervención militar del organismo en 1976 se profundizó una tendencia que ya estaba presente en la forma de organización del trabajo científico-tecnológico del INTA: la apropiación privada del conocimiento producido.* La tercera hipótesis que es posible desagregar de la general es que *la introducción de mecanismos represivos modificó el perfil y orientación de las tareas de extensión rural e incidió en la organización de las agendas de investigación del instituto.*

Así como la elección metodológica del caso fue realizada en virtud de la importancia de la investigación agropecuaria en el país y de los rasgos principales de la institución -se trata del primer organismo en su tipo en toda América Latina, referente regional desde su creación, portador de una cobertura territorial inédita dentro del resto de las instituciones científicas del país- dentro de las tareas del INTA se estudiaron actividades de investigación y extensión rural, sus dos pilares centrales de acción.

Desde un marco de análisis que integra perspectivas de la historia social de la ciencia y la tecnología, la historia político-económica reciente y el campo de los estudios sociales de la ciencia y la tecnología (en adelante, CyT), se entiende a las instituciones de investigación científica y desarrollo tecnológico en tanto espacios materiales, normativos e ideológicos (Hurtado, 2010), cuya dinámica se encuentra en directa relación con el escenario sociopolítico y económico. Entendemos, asimismo, que no es posible des-atender la conexión existente entre las actividades científico-tecnológicas y sus condicionantes histórico-sociales (Katz, 1999). En este enfoque, la apropiación social de la ciencia y la tecnología es entendida como imbricada a las relaciones sociales de producción imperantes -lo que bajo el capitalismo implica su subordinación a la acumulación de capital- y sus manifestaciones y posibilidades articuladas a las diversas condiciones históricas involucradas<sup>3</sup>. Si bien esta investigación no tiene como objetivo analizar las transformaciones en el proceso de acumulación local

---

<sup>3</sup> Es decir, que entendemos al cambio tecnológico como un proceso social y distinguimos el rol estratégico que cumple en el capitalismo, por lo que no resulta posible comprender las transformaciones estudiadas en materia de CyT en forma descontextualizada y aislada de esta dinámica. En este sentido, la producción capitalista de ciencia y tecnología se encuentra ligada a crisis de valorización y realización recurrentes, y su principal contradicción radica en la escisión entre la emancipación social y el proceso innovador. Como indican, entre otros, Rose y Rose (1976), Katz (1996; 1988a; 1988b; 1999), Nuñez Jover (2001) los análisis que analizan la innovación por fuera de una comprensión del funcionamiento del capitalismo no logran explicar aspectos relevantes de su trayectoria. En esta dinámica global que atraviesa la producción (orientada en un sentido general a la obtención de ganancia por sobre la satisfacción de necesidades sociales), su forma de desenvolvimiento en espacios y tiempos diferentes conlleva diversas problemáticas y especificidades históricas. Partiendo de esta premisa general, nos interesa indagar la producción local de CyT orientada al agro.



en sí mismas, ni el rol general del cambio tecnológico en este proceso, entendemos que no es posible soslayar la vinculación entre las actividades locales de CyT y algunos rasgos del capitalismo argentino<sup>4</sup>. Nos interesa, en este sentido, problematizar las rupturas y continuidades que registra en el pasado reciente la producción y el proceso de apropiación de conocimiento orientado al agro en Argentina. Asimismo, el abordaje priorizó un proceso dialéctico entre la praxis de la investigación y las lentes teórico-metodológicas adoptadas que orientaron el recorte temático, evitando incorporar los problemas de investigación a un esquema de interpretación cerrado y previamente delimitado. Para esto, se adoptaron herramientas teóricas en función de las problemáticas que fueron enfocadas. En este sentido, con el propósito de explorar la vinculación entre la orientación de las áreas de investigación y extensión del INTA y las transformaciones registradas en la estructura productiva, se trabajó con estudios especializados sobre los cambios sucedidos en el sector agropecuario (Aparicio, 1982; Balsa, 2006; Dougnac, 2013; entre otros); así como con otras indagaciones sobre las vinculaciones entre la producción científica y tecnológica y el contexto económico y político vigente (Bercovich y Katz, 1988; 1990). Además, debido a que el factor cognitivo es un componente crucial de la investigación, se incorporaron estudios de dinámicas de grupos de investigación, que facilitaron el análisis de las transformaciones en las agendas de investigación (Shinn, 1982). Por otro lado, cabe aclarar que el estudio de una institución estatal fue hecho contemplando que el Estado cumple un rol no neutral, pese a no problematizar en profundidad esta dimensión<sup>5</sup>. Finalmente, dado que

---

<sup>4</sup> Cabe aclarar que, al menos desde fines de la década de 1970, esta mirada ha ocupado (y continúa ocupando) un lugar más bien marginal dentro el campo de los estudios sociales de la ciencia y la tecnología, donde los estudios de matriz relativista y constructivista han alcanzado mayor difusión. Estos estudios no constituyen un bloque homogéneo y presentan puntos de tensión entre sí. Seguimos aquí la interpretación de Shinn (2002: 114), quien, sin desconocer estas diferencias, aborda algunos de sus nodos problemáticos comunes y señala que han conformado una nueva “ortodoxia académica”, en la que el *continuum* entre ciencia y tecnología, naturaleza y cultura, tecnología y sociedad planteado por enfoques como el de la construcción social de la tecnología (SCOT) y la teoría actor-red (TAR), dificultan el estudio de la división del trabajo en el campo científico y tecnológico, de la dimensión asociada al poder y de los condicionantes económicos en la producción local de CyT. Como señaló Coriat (1976:187), retomando a Marx, si el “progreso técnico” también fuera analizado como el “progreso de las técnicas de producción capitalistas”, muchos debates ganarían en claridad, en especial el de la neutralidad de la ciencia y la tecnología.

<sup>5</sup> Existe una amplia y diversa bibliografía que toma al Estado como objeto de estudio. En función de concentrar el trabajo en nuestras preguntas de investigación, no realizaremos una revisión de estas posturas y teorías. Sin embargo, resulta pertinente aclarar que consideramos que el Estado no es un agente neutral, ni inocuo. Al mismo tiempo, retomamos la distinción planteada por Althusser (1984) cuando señala que éste puede no ser sólo objeto sino también lugar de la lucha de clases. Por otro lado, una referencia ineludible para pensar el rol del Estado en el plano local, centrada en el período anterior al aquí

la producción cognitiva analizada se vincula a eventos ocurridos en el escenario sociopolítico y económico a escala nacional, se incorporaron análisis de políticas sectoriales (entendiendo que éstas expresan relaciones de fuerza), historia sociopolítica y, principalmente, de historia económica argentina reciente (Azpiazu, Khavisse y Basualdo, 1996; Castellani, 2009; Franco, 2012; Iñigo Carrera, 2007; Lázzaro, 2013; Makler, 2006, entre otros) en donde se inserta la trayectoria estudiada.

En cuanto a las producciones que han tomado al INTA como objeto de estudio, éstas pueden agruparse en dos grandes grupos. En el primero se encuentran los estudios académicos que han explorado diversos aspectos ligados a la creación y trayectoria del organismo, tomándolo como objeto de estudio. Losada (2003; 2005) ha estudiado los orígenes del instituto y la institucionalización de la extensión rural con su creación<sup>6</sup>. Asimismo, León y Losada (2002) han indagado los antecedentes y señalado algunos aspectos relevantes de su puesta en marcha. Bercovich y Katz (1988) analizaron un grupo de trabajo del Instituto de Genética, perteneciente al Centro Nacional de Investigaciones Agropecuarias del INTA, y su obtención de nuevos híbridos de maíz. También Kreimer y Rossini (2005) han tomado la misma dependencia, en su caso para estudiar la creación de organismos vegetales genéticamente modificados (OVGMS) como nuevos objetos de conocimiento. Por su parte, Calandra (2009) ha trabajado los cambios en el instituto durante la década de 1990 y Pellegrini (2013) ha esbozado la trayectoria de la cantidad de personal y recursos presupuestarios.

Por otro lado, más numerosos son los trabajos generados por el propio INTA o realizados bajo su encargo. Dentro de este segundo grupo, INTA (1959; 1964; 1971; 1983) realizó diversas publicaciones institucionales en las que expuso su propia organización, áreas de incumbencia, objetivos y evolución de sus servicios de investigación y extensión. Asimismo, con motivo de sus aniversarios, realizó presentaciones retrospectivas, destacándose la historia documental elaborada en razón a su cuarenta aniversario y la síntesis presentada con motivo a su medio centenario (INTA, 1996; 2006). Un segundo tipo de publicaciones institucionales lo componen

---

estudiado pero fundamental para las transformaciones posteriores, lo constituye la ya clásica caracterización del Estado burocrático autoritario, véase O' Donnell (1982). Finalmente, antes que como bloque homogéneo, entendemos al Estado como una arena en disputa, y a las instituciones y sujetos que lo integran, como el terreno donde se libran estos conflictos (De Sousa Santos, 2006).

<sup>6</sup> El grueso de los trabajos (académicos e institucionales) referidos a la extensión rural se consignan en el tercer capítulo, específicamente dedicado a esta área de acción del INTA.

aquellas realizadas por directivos o integrantes del organismo, difundiendo las actividades realizadas por el instituto. En este sub-grupo, nos referiremos fundamentalmente a aquellas que trataron los comienzos del instituto y su evolución durante las décadas de 1960, 1970 y 1980. Reichart (1957; 1982), director del servicio de Extensión en distintos períodos, expuso los fundamentos que guiaron la creación del servicio y su trayectoria. Por su parte, Bordelois (1966), presidente del Consejo Directivo del INTA durante dos períodos desde 1963, expuso las causas de creación del organismo. En cuanto a informes que evaluaron el desempeño de la institución, se destaca el informe de la CEPAL realizado por Elgueta y Trivelli (1960) y el análisis crítico realizado por el Centro de Investigaciones en Administración Pública (CIAP, 1971) del Instituto Torcuato Di Tella. Éste último realizó distintos informes sobre la programación de las investigaciones, la acción interinstitucional y los mecanismos presupuestarios del INTA (CIAP, 1973a; 1973b; 1973c). Por otro lado, un análisis comparativo entre el INTA y otros organismos regionales en base a su personal fue realizado por Ardilla, Reichart y Rincón (1980). En este sentido, la formación del personal fue abordada por Trigo, Piñeiro y Ardilla (1982). La historia del INTA fue presentada por Moscardi (1988) y una reseña de los estudios económicos del organismo durante la década de 1960 por Penna (2003). Dentro de las publicaciones institucionales que abordan la situación posterior del organismo se destaca la de Cirio (1990), presidente del INTA durante la década de 1990, quien destacó positivamente el proceso de crecimiento de los convenios y licencias con el sector privado. También Devoto (2004) destacó las ventajas de las iniciativas de vinculación tecnológica del organismo. Pese a sus diferencias temáticas, estos trabajos producidos por el INTA o bajo su encargo presentan rasgos comunes. En su gran mayoría emplean un enfoque de divulgación, destinado a fomentar el conocimiento del organismo y, en general, suelen destacar los logros institucionales. Cabe destacar que en las diversas publicaciones institucionales que recopilan la trayectoria del instituto no es mencionada la intervención militar del organismo, a excepción de un trabajo del responsable del área de Gestión de Propiedad Intelectual del INTA, quien la menciona en un estudio sobre la “transferencia de conocimientos”, concentrado en un período más reciente (Linzer, 2008).

En cuanto a los interrogantes clave que guiaron la investigación, algunos fueron: ¿qué diferencias y similitudes es posible encontrar entre el rol cumplido por el INTA antes y después de la última dictadura militar?; ¿qué grado de interacción es posible establecer con las transformaciones económicas y políticas del período?; ¿cuáles fueron las particularidades de la producción del conocimiento dentro de INTA, sus estrategias de transmisión y de los modos de apropiación?; ¿qué rupturas y qué continuidades es posible identificar en esta dinámica? Para abordarlos, el estudio de las actividades de investigación y extensión rural se organizó bajo tres ejes de análisis:

- a) articulación entre agendas científicas, cambios socio-económicos y transformaciones políticas sectoriales;
- b) introducción de mecanismos represivos y efectos en las agendas de trabajo;
- c) rupturas y continuidades en la apropiación privada del conocimiento científico y tecnológico.

El estudio de los distintos niveles analíticos mencionados supuso múltiples problemáticas en torno a la organización y jerarquización de la información relevada, así como para su integración analítica. En otras palabras, ¿cómo trabajar en forma conjunta testimonios sobre las actividades del organismo antes y después de la dictadura, vivencias subjetivas ligadas a la intervención militar, contenidos de investigación específicos, transformaciones económicas estructurales, producción de semillas y estrategias de extensión rural? Dejar fuera del análisis los relatos de los trabajadores, y/o las transformaciones económicas registradas en el agro argentino en las últimas décadas, implicaba renunciar a mostrar justamente lo que la tesis intenta comprender: la producción de conocimiento como un terreno históricamente situado, subjetivamente implicado y económicamente participante (como generador de transformaciones y receptor de cambios en el proceso de acumulación de capital).

La definición de estos problemas de investigación implicó, necesariamente, la construcción de un *corpus* documental heterogéneo que permitiese abordarlos. Antes de precisarlo, explicitaremos algunas estrategias narrativas presentes en la organización de la tesis.

### **1.1. Sobre la estructura de la tesis: estrategia narrativa, saltos temporales y niveles analíticos**

La estructura de la tesis se organiza, junto a la presente introducción, en tres partes, cada una de las cuales está integrada por dos capítulos. Un séptimo capítulo lo componen las conclusiones finales. Esta organización responde a los criterios que guiaron el recorte temático sobre las áreas de acción del INTA que fueron seleccionadas para ser estudiadas en profundidad. En este sentido, debido a las propias características de la institución, fue necesario realizar una suerte de selección de casos al interior del caso. La estructura territorial del INTA y la diversidad temática cubierta por su accionar demandaron un nuevo recorte, que permitiera cumplir con uno de los objetivos perseguidos por la investigación: estudiar en profundidad agendas de trabajo del organismo y analizar sus trayectorias. Asimismo, junto a este objetivo -plasmado en la segunda y tercera parte de la tesis- consideramos necesario contemplar otros aspectos que fueron recogidos en la primera parte. Denominada “El INTA entre el tercer peronismo y la dictadura. Reconfiguración institucional, políticas sectoriales e intervención militar (1973-1983)”, esta primera parte está integrada por dos capítulos. El primero fue concebido como introductorio a la situación del organismo en 1973. Aborda la reconfiguración de parte de su cuerpo directivo como producto del retorno del peronismo al gobierno nacional. En este sentido, en un plano más descriptivo, se presenta un panorama de las internas políticas presentes en el organismo y se aborda la vinculación entre el INTA y la Secretaría de Agricultura y Ganadería de la Nación, de la que dependía. También, en apartados destinados a estas temáticas, se puntualizan y analizan transformaciones relevantes en materia de políticas agropecuarias, el rol del INTA en las mismas y la repercusión generada en torno a esta articulación. El segundo capítulo, centrado en la intervención militar que se inicia en 1976, se propone saldar dos elementos fundamentales. Por un lado, al no existir estudios previos, el capítulo busca aportar a una reconstrucción histórica de la intervención militar del INTA. Asimismo, se avanza en el estudio de la introducción de mecanismos represivos en el organismo. Con este objetivo se rastrean los antecedentes, abordando un ciclo represivo iniciado con anterioridad al golpe militar.

En relación a este ordenamiento temporal, cabe una aclaración que es válida para el conjunto de los capítulos. Aún sabiendo que una ordenación cronológica de tipo lineal en ocasiones favorece el proceso de lectura, hemos privilegiado una estructura provista de saltos temporales, que implican avances y retrocesos en la exposición. Esta estrategia narrativa, presente en la mayoría de los capítulos y entre las partes en las que se divide la tesis, se debe a que entendemos que favorece la comprensión de las rupturas y continuidades de los procesos estudiados. Fundamentalmente para los contenidos de investigación y extensión analizados, pero también para el estudio de la introducción de prácticas de disciplinamiento al interior del INTA, esta estrategia propone el ejercicio de reiniciar el estudio del período en los diversos capítulos y para las distintas temáticas abordadas.

La segunda y la tercera parte se adentran en profundidad en el estudio de las agendas de trabajo del organismo. Su construcción se corresponde a la selección temática realizada sobre el conjunto de las actividades del INTA a la que referíamos en un inicio. En este sentido, se combinó el estudio de áreas de trabajo de alcance nacional con experiencias focalizadas de investigación y extensión. Fueron priorizadas tres áreas de investigación del organismo y el área de extensión rural. A su vez, estas fueron agrupadas al interior de cada una de las partes. Así, la segunda parte de la tesis engloba el estudio de las agendas de extensión rural y de los estudios sociales del organismo; la tercera se concentra en investigaciones en genética vegetal y animal. A continuación, explicitamos sintéticamente los fundamentos que pesaron en la elección de las agendas.

La segunda parte se denomina “Agendas en disputa: investigación en ciencias sociales y estrategias de extensión rural (1973-1983)” y aborda, como indica su título, el estudio de estas dos áreas de acción del INTA a través de dos capítulos. Las actividades de extensión rural son estudiadas a lo largo del tercer capítulo de la tesis, primer capítulo de la segunda parte. Uno de los mandatos presentes en la creación del organismo consistió en el trabajo con “la familia rural” y el desarrollo de tareas de extensión que pusieran al alcance de los productores las tecnologías generadas. Asimismo, su competencia en esta área, unida a las actividades de investigación, fue una de las marcas distintivas del INTA. En este sentido, nos propusimos reconstruir las tareas de extensión rural debido a la importancia de estas actividades al interior del

instituto, y porque eran un medio relevante para analizar continuidades y rupturas en el perfil de los destinatarios de las tareas del organismo.

El cuarto capítulo de la tesis (segundo de la segunda parte) se dedica a los estudios de economía agraria y sociología rural. Esta elección obedece a dos razones fundamentales: la relevancia de los estudios sociales del INTA como articulador de las políticas de la cartera agropecuaria nacional impulsadas en 1973, y su detección como una de las principales áreas afectadas en cantidad de cesantías durante la intervención militar. Se exploran los antecedentes y las temáticas introducidas, analizando el grado de disrupción de las mismas, y también sus propias limitaciones. En este marco se incluye también el estudio de una experiencia de formación de posgrado, la Escuela para Graduados en Ciencias Agropecuarias, que funcionaba al interior del organismo.

La tercera parte de la tesis, “Producción pública y apropiación privada de conocimiento científico tecnológico: historia de una dinámica de investigación”, se concentra en dos áreas de investigación centrales dentro del INTA. El quinto capítulo, realiza una reconstrucción y análisis de una experiencia de investigación radicada en una de las principales estaciones experimentales del instituto. Se estudia una trayectoria de investigación radicada en la estación experimental de Pergamino, unidad distinguida por su antigüedad, cantidad de personal empleado, y grado de intervención militar a partir de 1976. Se estudian investigaciones en genética aviar, una área de alta competencia internacional y escaso desarrollo local. Se aborda su surgimiento, desarrollo y desmantelamiento a partir de la intervención militar.

El sexto capítulo analiza los estudios en fitomejoramiento vegetal. Se estudia el rol del INTA en la producción, adaptación y difusión de semillas en tres cultivos clave: trigo, maíz y soja. Esta área de investigación fue seleccionada debido a que, en el proceso de transformaciones registrado en la década de 1970 en la agricultura local, el cambio tecnológico principal estuvo protagonizado por el mejoramiento genético incorporado a las semillas (Gutiérrez, 1986). Asimismo, resulta una etapa fundamental para la introducción y primera expansión de la soja, por lo que consideramos relevante dar cuenta del rol del INTA.

Por último, un último apartado expone las conclusiones finales. Se realiza una recopilación de los nodos problemáticos abordados, puntualizando los resultados obtenidos. Al mismo tiempo, se precisan preguntas derivadas de la investigación, objeto

de futuras indagaciones. Cabe señalar que cada capítulo que integra la tesis posee una estructura similar, que comienza con un resumen inicial y cierra con un apartado de conclusiones. En este sentido, la estrategia elegida para las conclusiones posee esta doble presentación: las parciales de cada capítulo y las elaboradas en el capítulo final. Si bien el séptimo capítulo recupera los resultados de cada temática trabajada, fue pensado con la idea de no realizar una mera sumatoria y repetición de lo ya concluido, sino como una forma de integrar esos resultados y aportar también los interrogantes abiertos por la investigación.

Un apéndice documental -compuesto por resoluciones dictaminadas por la intervención militar del INTA (sobre la cesantía de integrantes del organismo y sobre la regulación de sus materiales fitogenéticos), una carta abierta escrita por un extensionista poco tiempo antes de ser asesinado por fuerzas de seguridad en 1974, e imágenes, cedidas por entrevistados y seleccionadas de la galería fotográfica del organismo- constituye el epílogo final. Se presenta también un glosario de abreviaturas, así como el listado detallado de referencias bibliográficas, fuentes documentales (agrupadas según su archivo de origen y, en el caso de los documentos del INTA, por áreas de investigación), y entrevistas realizadas.

## **1.2. Abordaje y construcción del *corpus* documental: archivos, materiales y testimonios**

La construcción del *corpus* documental implicó una tarea de relevamiento, selección e interpretación de fuentes primarias diversas. En simultáneo, requirió un trabajo de actualización bibliográfica permanente. En función de sistematizar los aportes ya realizados por otros autores y la incorporación de los nuevos niveles de análisis propuestos, se sistematizaron críticamente las fuentes secundarias. Mediante una constante actualización bibliográfica se amplió el relevamiento inicial presentado, y seguidamente su análisis y sistematización. La información fue organizada críticamente en función a los distintos niveles de análisis, mediante lecturas concéntricas que abarcaron primero cuestiones referidas al período, al ámbito agropecuario (políticas sectoriales, transformaciones productivas, etc.), bibliografía existente en la que el INTA es objeto de estudio o bien (mayoritariamente) incidentalmente referido, entre otras



temáticas que fueron siendo crecientemente acotadas y profundizadas. Un primer nivel de dificultad se vinculó al estudio, en forma específica y medianamente pormenorizada, de bibliografía sobre dos de las áreas de investigación analizadas, ya que consideramos condición necesaria el manejo de nociones fundamentales de las cuestiones técnicas<sup>7</sup>. En este sentido, el manejo de categorías disciplinares específicas provenientes de otros campos de estudio (biología, genética vegetal, genética animal, etc.), así como la comprensión de determinados fenómenos (selección, hibridación, etc.) resultó un elemento necesario para efectuar el análisis propuesto y, fundamentalmente, para realizar una correcta interpretación de los documentos primarios (tanto de *papers* como de entrevistas). Por otro lado, se decidió recurrir a bibliografía especializada disponible sobre las transformaciones en la estructura social agraria donde insertar los cambios de investigación y extensión analizados, así como a estudios cuantitativos existentes ligados a las áreas de investigación abordadas (sobre superficies sembradas, estructura de la industria semillera y otras variables) que, si bien no constituyen en sí el propio objeto de estudio, lo atraviesan transversalmente. Asimismo, como señala Palladino (2002) en su estudio sobre las prácticas de genetistas e historiadores, los archivos, al igual que las plantas, no son sólo repositorios del pasado, sino también activos formadores del pasado, el presente y el futuro. Con esa intención fueron abordados tanto los materiales documentales, como el estudio de las semillas en sí.

En cuanto al relevamiento y análisis de fuentes primarias escritas y orales, se consultaron mayoritariamente fuentes escritas disponibles de índole cualitativa y en menor medida de carácter cuantitativo (información contable, partidas presupuestarias estadísticas laborales). El trabajo con distintos tipos de fuentes y de archivos supuso distintos tratamientos, que permitieron ponderar las condiciones de producción de las mismas, y su utilización acorde a los interrogantes que motorizan la investigación. Asimismo, el cruzamiento entre los diferentes registros permitió generar criterios para corroborar los datos relevados. Describiremos este proceso de trabajo agrupando las fuentes consultadas en dos grandes grupos: documentos escritos y producción de

---

<sup>7</sup> En este sentido, manejar algunos aspectos básicos resultó central para una comprensión de la reorientación de las agendas. Por ejemplo, en el estudio de la producción de semillas fue necesario incorporar lecturas específicas para comprender la rentabilidad de determinadas investigaciones, identificar cuándo el acceso a la información resulta estratégico y comprender los procesos de trabajo involucrados. Una situación similar fue requerida en el estudio de las actividades en genética aviar del INTA.

fuentes orales. En el primer caso, los distinguiremos en función del origen del material (archivos públicos o privados) y de sus implicancias en el carácter del contenido.

A continuación, realizamos un breve punteo de los archivos y materiales consultados.

➤ Archivos públicos:

- Fondos documentales del INTA

Buena parte de las fuentes fueron consultadas en diversos archivos pertenecientes al INTA. Las publicaciones (éditas e inéditas) del instituto pueden ser agrupados en cuatro conjuntos: i) publicaciones de resultados de investigaciones (*papers* y revistas); ii) documentos internos de trabajo (producidos con el objetivo de circular al interior del instituto); iii) publicaciones de difusión (destinadas a difundir información entre productores y comunidades rurales); iv) memorias técnicas e institucionales. Una primera dificultad para el acceso a estos documentos fue el grado de dispersión de los mismos. Si bien el INTA cuenta con un centro documental, buena parte de los materiales no están catalogados, ni centralizados. A la necesidad de identificar material dentro del gran volumen de publicaciones del instituto, se sumó también la complicación para consultarlos. Por su estructura territorial, que cubre gran parte de la superficie del país, fue necesario identificar las estaciones experimentales agronómicas más relevantes para realizar entrevistas y tareas de archivo en sus respectivas bibliotecas. Estas fueron elegidas en función de dos criterios: relevancia temática en relación a las actividades del INTA estudiadas y grado de intervención militar. Así, fueron relevados archivos de las estaciones experimentales de Marcos Juárez (Córdoba), Oliveros (Rosario), Paraná (Entre Ríos), Famaillá (Tucumán), Pergamino (Buenos Aires) y del Centro Nacional de Investigaciones Agropecuarias (Castelar). En el caso del centro de Castelar y de las estaciones experimentales de Pergamino y Famaillá, se trataba también de las unidades que contaron con operativos militares de envergadura. La visita a la estación experimental de Famaillá (Tucumán) tuvo además un interés estratégico extra. A poca distancia de la estación experimental funciona una cooperativa agropecuaria (Cooperativa de Trabajadores Unidos Campo de Herrera) que fuera impulsada por el INTA, cuya trayectoria se aborda en el capítulo III.

Ambas, experimental y cooperativa, fueron visitadas para la realización de entrevistas y consulta de material.

Tanto las memorias técnicas o institucionales como las publicaciones del INTA pudieron ser consultadas. Se relevaron en forma sistemática los números 1° (diciembre de 1975) a 30° (abril 1983) de la revista *Extensión Rural* editada por el INTA. El material de difusión disponible (folletos y gacetillas) fue consultado, así como publicaciones y planes de trabajo de dos áreas que funcionaran como parte del sistema de extensión: los Clubes juveniles “4-A” y “Hogar Rural”. Por último, consultamos la galería fotográfica del INTA y materiales audiovisuales producidos por el instituto.

A diferencia de estas publicaciones, no sucedió lo mismo con los documentos internos de trabajo. Buena parte de este material fue identificado a partir de la realización de entrevistas a integrantes y ex integrantes del instituto, mediante la consulta de archivos privados o bien rastreando los mismos en distintas bibliotecas. En particular, para reconstruir las agendas del área de economía agraria y sociología rural fue clave el acceso a documentos producidos con el objetivo de circular al interior del INTA, que ya no figuran en sus archivos. Además de su identificación en forma primordial en bibliotecas particulares mediante entrevistas, la biblioteca de Geografía de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires fue un lugar privilegiado para la consulta de algunos materiales, que no se encuentran inventariados dentro de los propios archivos del INTA.

Un segundo tipo de fuentes del INTA fueron consultadas: las actas de sesiones del Consejo Directivo del organismo, relevadas en su totalidad para el período 1973-1983. El acceso a estos documentos inéditos, en un primer momento restringidos para su consulta a miembros del organismo, fue posible luego que circulase dentro del instituto un artículo con algunos resultados preliminares de la investigación (Gárgano, 2011). Esta situación implicó el ofrecimiento desde las autoridades a consultar parte de los archivos de la institución que permanecían sin relevar. El carácter de estos documentos, por su contexto de producción y elaboración, al ser transcripciones parciales de reuniones del directorio, podría no resultar sustancial. Sin embargo, la cantidad de información que fue posible extraer de ellos, tanto en términos documentales (resoluciones, planes originales de trabajo, etc.) como de problemas de

investigación (conflictos, posicionamientos frente a problemáticas internas del INTA y de coyuntura nacional, cosmovisiones, etc.) resultó sumamente enriquecedora. En particular, este grupo de fuentes fue significativo para reconstruir la situación del INTA en los años previos a la dictadura y el accionar civil de sus autoridades durante la intervención militar.

Fuera de los archivos del INTA se procedió a la consulta de los siguientes materiales:

- Archivo desclasificado de la ex Dirección de Inteligencia de la Policía de la provincia de Buenos Aires (DIPBA)

El archivo contiene un extenso registro de espionaje político-ideológico desde la creación de la DIPBA en agosto de 1956 hasta su cierre en 1998. En diciembre de 2000, fue transferido a la Comisión Provincial por la Memoria para que hiciera de éste un Centro de información con acceso público. Debido al carácter sensible de su fondo documental, fue objeto de un secuestro de la Cámara Federal de Apelaciones, que en 2003 fue levantado parcialmente y que continúa sobre el período 1976-1983, debido a las potenciales implicancias judiciales del material. El archivo fue desclasificado, y en octubre de 2003 se abrió al público. En cuanto a la organización del material, cabe aclarar que el mismo se organiza en diferentes mesas temáticas, cuyas referencias aluden al contenido de los materiales. Las fichas registradas incluyen referencias temáticas, personales, sobre partidos políticos, organizaciones estudiantiles, actividades religiosas. La Mesa “A” involucra referencias sobre actividades comunales, estudiantiles, políticas, y de prensa. La Mesa “B”, económicas, gremiales y laborales. La Mesa “C” congrega toda la documentación atinente a las actividades catalogadas como comunistas (se divide en Mesa “C” Varios y Mesa “C” Referencia Especial). La Mesa “D” involucra referencias sobre actividades religiosas y comunales y la Mesa “DS” (delincuentes subversivos) registra la información de lo que la Dirección de Inteligencia Policial llamaba “sabotaje”, “daños” “bélico” “actividad subversiva” “actividad panfletaria”. En esta mesa además se encuentra un registro de todas aquellas personas que fueron catalogadas como “subversivos”. Finalmente, la Mesa “Referencia”

mantiene la información que no puede ser clasificada y la Mesa “Doctrina” refiere a la metodología interna de la DIPBA.

Los dos primeros pedidos generales que realizamos fueron hechos en forma temática, buscando referencias al INTA en el período 1970-1976, y en el período 1976-1983. El 19 de enero 2011 fue elevado un pedido al archivo bajo la consigna “Presencia de espionaje ideológico-político en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria” (1970-1983), y una Carta elevada a la Cámara Federal solicitando autorización para acceder a los materiales (reportes, legajos, volantes, gacetillas, etc.) producidos durante la dictadura.

El segundo tipo de consultas fue particular, se solicitó la consulta personalizada de los casos identificados de detenidos-desaparecidos dentro del INTA y de algunos de los técnicos que fueron detenidos como resultado de los operativos militares desplegados<sup>8</sup>. Este material es analizado en el segundo capítulo.

En relación a la accesibilidad, este archivo se rige por la Ley de *habeas data* (2000) de protección de datos personales, resguardando la protección de los datos personales de las personas que fueron objeto de las tareas de inteligencia. Por esta razón, en los informes se tachan los nombres y referencias personales, a excepción de aquellas personas que solicitan en su nombre o (como en nuestro caso), con cuya expresa autorización se realizan las consultas. El hecho que los nombres de particulares se encuentren protegidos implicó que el cruce con material relevado en entrevistas fuera clave para identificar a los trabajadores del INTA aludidos en los informes.

- *U.S. Department of State Freedom of Information Act (FOIA)*, sitio web

El material proveniente de la ex DIPBA fue complementado con la consulta de archivos desclasificados de origen estadounidense, de libre acceso y digitalización. Se trata de los documentos desclasificados del Departamento de Estado de los Estados Unidos, pertenecientes a la colección *State Argentina Declassification Project (1975-1984)*, disponibles en <http://foia.state.gov/SearchColls/CollsSearch.asp>.

Fue realizado un relevamiento dirigido a identificar materiales en donde se aludiera a la situación del INTA. Estos registros (telegramas, memos, en su mayoría)

---

<sup>8</sup> No existe un listado oficial (ni institucional, ni gremial) de los detenidos-desaparecidos del INTA. Según lo asentado en CONADEP y lo registrado en distintas entrevistas, están confirmados cinco casos de desapariciones. Además, fue posible identificar tres asesinatos y decenas de detenciones

permitieron contar con referencias generales sobre la situación del INTA, en general, a raíz de su intervención y, en particular, sobre integrantes del Centro Nacional de Investigaciones Agropecuarias del instituto. Además, aportaron elementos para dar cuenta de las caracterizaciones elaboradas por funcionarios de la Secretaría de Agricultura y Ganadería designados por las Fuerzas Armadas.

- Archivo General de la Armada (AGA)

Fueron consultados los legajos disponibles del interventor militar designado como responsable de la intervención del INTA a partir del 24 de marzo de 1976. Para esto fueron realizados distintos pedidos, que posibilitaron el acceso a materiales donde se precisaban tanto datos históricos ligados a la intervención del INTA, como caracterizaciones realizadas por fuerzas militares sobre el organismo y percepciones sobre el rol del interventor. A pesar de algunas dificultades ligadas al acceso a la información, esta consulta facilitó el acceso a fojas de servicio, conducta y diversos materiales relevantes.

- Prensa escrita

Se consultaron editoriales y artículos de distintos medios gráficos, entre ellos: *La Nación*, *La Opinión*, *El Cronista Comercial* y *La Prensa*. También fueron relevados artículos en publicaciones específicas del medio agropecuario como *La Chacra* y *Clarín Rural*. En forma mayoritaria, fueron consultados en las fechas de cambios de autoridades durante la intervención militar del INTA, y de forma más sistemática para el período 1973-1976. Este relevamiento permitió reconstruir el contexto de la Secretaría de Agricultura y Ganadería y del INTA en los años previos al golpe de Estado. En este sentido, el grado de difusión y repercusiones mediáticas que tuvieron algunas de las iniciativas del período en materia de política agropecuaria permitió reconstruir tanto posicionamientos de los distintos sujetos sociales implicados, como el clima existente dentro del INTA. A partir de este panorama, profundizamos luego en el contenido de una de las medidas de la cartera agropecuaria nacional, el proyecto de Ley Agraria, mediante la consulta del texto original. Asimismo, los artículos periodísticos producidos durante la intervención militar aportaron datos sobre su instrumentación y sobre los argumentos esgrimidos para su desarrollo.

➤ Archivos privados

Cronológicamente, la investigación partió de la consulta de archivos privados. Algunos materiales fueron consultados a partir de la realización de las primeras entrevistas, en archivos familiares. En particular, uno de estos resultó central para la definición posterior de buena parte del mapa de entrevistas. Mucho tiempo antes de lograr las gestiones pertinentes que terminaron posibilitando su identificación vía el propio INTA, la lista de personal dejado cesante por “razones de seguridad” pudo ser conocida a partir del acceso a documentación conservada en forma privada por familiares de víctimas del terrorismo. Junto a esta información, el acceso a archivos familiares permitió acceder a un conjunto de fuentes que supuso la reconstrucción de las trayectorias políticas y profesionales de aquellos que fueron directamente afectados por la represión. Dentro de este material consultado, cabe destacar el acceso a la única causa judicial que al momento se ha iniciado por una desaparición ligada a una trabajadora del organismo. Por su especificidad en cuanto al tipo de registro, y por la información contenida, las 500 fojas de la causa fueron revisadas con fines diversos. Por un lado, contribuyó a completar el listado de entrevistas a realizar. Por otro, aportó información relevante tanto en términos fácticos (que hicieron a la reconstrucción de los hechos ligados a la intervención), como en relación a las cosmovisiones y representaciones ligadas a las memorias sociales de la intervención, encarnadas en los integrantes del organismo. Asimismo, la consulta de bibliotecas privadas de integrantes y ex integrantes del organismo permitió identificar y consultar materiales de investigación del INTA (publicaciones del organismo, presentaciones en seminarios internos, documentos de difusión y de circulación interna) que ya no figuran en su centro documental<sup>9</sup>.

---

<sup>9</sup> Cabe señalar en este sentido que, a partir de los primeros resultados de la presente tesis, INTA y CONICET han firmado el 20/03/2014 un Convenio -bajo ejecución del Centro Babini de la UNSAM- destinado a profundizar el estudio de la historia reciente del INTA, y de ampliarlo a las intervenciones militares de otros organismos de ciencia y técnica. Una de las principales actividades previstas en este Convenio en curso consiste en reeditar estos materiales y ponerlos nuevamente a disposición del centro documental del INTA.

➤ Producción de fuentes orales

El trabajo con documentos escritos fue simultáneo a la introducción de la historia oral como metodología de investigación. En este sentido, encontramos necesario describir las características del trabajo realizado, como así también los criterios que operaron en el proceso de selección y realización de las entrevistas. A pedido de algunos de los entrevistados, algunos aún en actividad en el organismo, fue mantenida la confidencialidad de los testimonios. Si bien no fue éste el común denominador de los casos, salvo excepciones, se decidió utilizar un mismo criterio unificador<sup>10</sup>. Por esta razón las referencias a las que aparecen vinculadas las entrevistas precisan datos relevantes para el análisis y la lectura (área o lugar de trabajo dentro del INTA, actividad o rol desempeñado), sin referenciar datos personales.

El conjunto de la muestra fue realizada en tres grupos, para los que se instrumentaron distintas estrategias metodológicas. El primer grupo lo componen trabajadores y ex trabajadores del INTA que fueron afectados en forma directa por las políticas represivas. Se trata de técnicos o investigadores que fueran dejados cesantes, y/o detenidos a partir de la intervención del instituto. Algunos fueron reincorporados con la llegada de la democracia y aún cumplen funciones, otros nunca retomaron el vínculo con el organismo. La realización de entrevistas en estos casos tuvo un primer objetivo: el acceso a información que no permanece registrada en las fuentes escritas disponibles. Se utilizó un método semi-estructurado, por permitir combinar la introducción de preguntas estandarizadas con una expresión más autónoma. En este sentido, se procedió a desarrollar una escucha activa y a fomentar espontaneidad en los relatos. Siguiendo a Halbwachs (2004), es posible pensar en un tiempo del testimonio. Se trata de un tiempo que no está cristalizado en el pasado evocado, ni en el “decir” presente. En sus palabras, “(...) hay que aportar una especie de semilla de la rememoración para que arraigue en una masa consistente de recuerdos” (Halbwachs, 2004: 28). Se realizaron entrevistas individuales, en algunos casos con segundas y terceras entrevistas. Luego de concluida esta fase, se realizaron tres entrevistas grupales, una de las cuales formó parte de una instancia de devolución a partir de resultados preliminares de la investigación.

---

<sup>10</sup> Las excepciones son funcionarios públicos del área agropecuaria, una destacada investigadora del campo CTS (Hebe Vessuri) y un investigador del INTA cuya trayectoria profesional es reconstruida en profundidad.



Un segundo grupo de entrevistas lo componen un número más reducido de investigadores y extensionistas, seleccionados por su trayectoria profesional y rol en el período de las investigaciones estudiadas. Para este grupo, si bien se prosiguió con el mismo método, se ampliaron las preguntas estandarizadas destinadas a recabar datos técnicos. Asimismo, este grupo resultó central para incorporar las visiones de la intervención de quienes no fueron directamente afectados. Junto a ellos, se incorporó el relato de otros investigadores y extensionistas que permanecieron o entraron al INTA en el período bajo análisis. En este sentido, cabe aclarar que por disponibilidad de acceso, el accionar de las autoridades del organismo fue mayoritariamente reconstruido y problematizado a partir de la consulta de documentos escritos (en especial, las actas de sesiones de Consejo Directivo del INTA). Finalmente, un tercer (y reducido) grupo, lo componen testimonios de distintos sujetos ajenos a la institución, seleccionados en base a su actividad.

La muestra está conformada, entonces, por un total de 57 entrevistas. Del total, el 88% (50 entrevistas) corresponden a integrantes y ex integrantes del INTA. Entre este sub-conjunto correspondiente a integrantes del INTA, el 38% (19 entrevistas) de los casos remiten a trabajadores del organismo que fueron dejados cesantes por la intervención militar. A su vez, dentro de este sub-grupo correspondiente a integrantes del INTA dejados cesantes, un 37% (7 integrantes) remite a casos de reincorporación al organismo con el retorno a la democracia. Las 7 entrevistas restantes (que representan el 12% del total de la muestra) las conforman investigadores, funcionarios del sector agropecuario en el período bajo análisis, productores rurales y familiares de miembros del INTA víctimas de la represión.

El cruzamiento de datos y el trabajo conjunto y simultáneo con los documentos escritos relevados fue una constante, que alimentó tanto el armado de las entrevistas como la búsqueda de información en los archivos. Si bien los grupos compartieron estrategias metodológicas, el abordaje para realizar cada uno requirió una preparación distinta, centrada en el manejo de información diversa y de la incorporación de distintos “códigos” de acuerdo a los ámbitos aludidos. Para el conjunto de las entrevistas realizadas resultó sustancial extraer y analizar tanto los datos aportados, en términos de reconstrucción empírica de la experiencia histórica, como así también las implicancias subjetivas y construcciones elaboradas por los distintos entrevistados. El propio tiempo

y espacio de la entrevista, en tanto relación dialógica, también constituyó un plano específico, que si bien no constituyó el centro del análisis realizado, requirió una atención particular. En términos de Bertraux (2005), se consideró la existencia de tres niveles de realidad, que posibilitaron la identificación y construcción de datos funcionales a los distintos niveles de análisis de la investigación. Todos los casos fueron realizados en base al sistema de construcción progresiva de la muestra o *snowballing*. El trabajo con una muestra abierta permitió la ampliación creciente del mapa de entrevistas a partir de la identificación de informantes, y de la incorporación de datos relevantes en cada relato. Asimismo, posibilitó herramientas metodológicas para identificar la saturación de la muestra.

Vale la pena detenernos en la representatividad de los casos. En este sentido, creemos que ésta no radica en su capacidad de expresión de la realidad de la mayoría de los trabajadores del INTA en el período, sino que se trata de un criterio cualitativo antes que cuantitativo. Dicho de otro modo, como señala Portelli (1996), es el horizonte de posibilidades (junto a los hechos en sí) el que es necesario explorar para poder dar cuenta de una subjetividad socialmente compartida. Junto a las experiencias vividas se alojan las imaginarias, también comunes, (por ejemplo, poder ser dejado cesante o no, detenido, potencialmente observado, o bien, entender como necesaria la tarea de “depuración” del organismo), que acarrear efectos concretos para aquellos que las atraviesan (publicar o no determinados trabajos, entablar o no vínculos con ciertos grupos, permanecer o no en la institución, etc.). En esta conceptualización también radica la potencialidad de la historia oral, tanto como reconocimiento de la subjetividad como vía de acceso a la realidad objetiva de lo sucedido (Portelli, 1996). Por último, cabe precisar que en la realización de todo el proceso de investigación estuvo presente la advertencia realizada por Enzo Traverso (2008) sobre la tarea del historiador, en relación a su capacidad de operar las distinciones necesarias entre la historia, la memoria, y la justicia, aunque sin negar esa imbricación<sup>11</sup>.

---

<sup>11</sup> En este sentido, la constatación de que algunos de los testimonios recabados no habían tenido su paso por la esfera jurídica, motivó una articulación por fuera de la investigación doctoral, ligada a la conversión de algunos de estos relatos en querellas. Actualmente el Dr. Rodolfo Yanzón lleva adelante la elaboración de una causa judicial colectiva para su presentación judicial, en la que participamos a partir de la contribución con material de archivo y de los casos relevados de personas desaparecidas, detenidas y cesanteadas. A diferencia de los criterios territoriales usualmente asignados a las presentaciones judiciales, es la pertenencia al INTA como común denominador la que es reivindicada en esta causa como criterio para englobar las distintas presentaciones individuales.

## **2. Ciencia, tecnología y dictadura en Argentina: problemáticas y estudios en curso**

En el marco de una creciente imbricación entre Estado, ciencia, tecnología e industria, cuyo escenario internacional estuvo dado por los ecos del fin de la Segunda Guerra, en pocos años Argentina procedió a crear un conjunto de instituciones específicamente dedicadas a la promoción de actividades científicas y tecnológicas en distintas áreas estratégicas. Si bien existían antecedentes desde principios del SXX, sobre todo en las áreas médica y agropecuaria, fue recién en la década de 1950 cuando se consolida el proceso de institucionalización a escala nacional y puede comenzar a hablarse de un complejo científico-tecnológico nacional (Myers, 1992). A partir de este momento se instrumentaron ámbitos específicos, organizados por el Estado nacional, pero con funcionamiento autónomo. Las instituciones de CyT se caracterizaron por una autonomía relativa significativa, que les permitía decidir sus programas de acuerdo a sus propias prerrogativas. Abarcaron campos determinados y estratégicos para el país (agro, industria, energía nuclear), y un grupo importante fueron creadas casi en simultaneidad. En 1950, la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), en 1956 el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), un año después el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), y en 1958 el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), inicialmente para fortalecer la actividad de investigación de las universidades (Oteiza, 1992). Algunos de estos organismos conocieron primeras experiencias de creación fallidas, como el caso del CONICET cuya primera formulación había sido hecha durante el segundo gobierno peronista (Hurtado, 2010). En 1968 fue creado el Consejo Nacional de Ciencia y Técnica (CONACYT) y en 1971 se dispuso la instrumentación de la “Finalidad 8”, como ítem específico para CyT en el presupuesto nacional<sup>12</sup>.

La creación de estos organismos, posterior al golpe de Estado de septiembre de 1955, coincidió con una marginación de la planificación de las actividades de CyT en relación a las políticas económicas, tal como se preveía, por ejemplo, para el segundo plan quinquenal peronista (Hurtado, 2010). En este sentido, registró un carácter

---

<sup>12</sup> Luego el CONACYT deviene en SUBCyT y en 1973 se transformó en la SECyT (Secretaría de Ciencia y Tecnología), bajo la órbita del Ministerio de Cultura y Educación (Oteiza, 1992).

fragmentario, por su escasa articulación. Este período, de creación del complejo, coincidió con la creciente internacionalización de grandes firmas, en su mayoría de origen estadounidense, que encontraron un impulso para su radicación en el país en el “*laissez faire* tecnológico” (Adler, 1987: 108) sostenido por los hacedores de política locales. Por otro lado, la actividad científica y (sobre todo) tecnológica en el país estuvo asociada a diferentes corrientes de pensamiento, que postularon la vinculación entre el progreso técnico y el despegue económico nacional, el incremento de la autonomía o, por el contrario, la existencia de una brecha tecnológica -en relación a las principales potencias- que expresaba y/o producía la dependencia de la periferia. En particular desde fines de 1950, el desarrollismo -tanto en su vertiente nacionalista como liberal- hizo foco en la cuestión científica y tecnológica. La UNESCO fue la institución que promovió entre los distintos gobiernos la importancia de apostar al potencial de desarrollo brindado por la ciencia y la tecnología, que se había puesto de manifiesto en los logros obtenidos en la Segunda Guerra Mundial. Su labor propagandística se realizó a través de su Oficina Regional para el Avance de la Ciencia en Montevideo (Vasen, 2013). Sin embargo, su retórica tuvo un peso mayor a su incidencia concreta, al menos en el caso argentino.

La creación del Instituto Nacional de la Investigación Científica en 1950 en México, del Conselho Nacional de Pesquisa brasileiro en 1951 y del CONICET argentino en 1958, daba cuenta de un proceso regional. En este sentido, los procesos políticos y sociales experimentados en lo sucesivo por América Latina, entre cuyos hitos se encontraban la revolución cubana (1959) y -en el plano local- el Cordobazo (1969) ofrecerían un marco particular para el planteo crítico de diversos intelectuales latinoamericanos que tomaron a la ciencia y a la tecnología como objeto de sus reflexiones. Denominados posteriormente como Pensamiento Latinoamericano en Ciencia, Tecnología y Desarrollo (Dagnino, Thomas y Davyt, 1996), entre sus exponentes se encontraban diversos autores (Amílcar Herrera, Jorge Sabato, Oscar Varsavsky), que -pese a sus diferencias- compartían la crítica a que las políticas científico-tecnológicas regionales definieran su agenda en función de los principales organismos internacionales, denunciando la dependencia cultural y económica vigente en los planteos para el área. La necesidad de situar los problemas locales en las agendas científicas también era un fuerte punto en común. El planteo más radical avanzaba aún

más, afirmando la necesidad de generar un “estilo” científico-tecnológico afín a una nueva sociedad socialista (Varsavsky, 1972: 46)<sup>13</sup>.

Una institución dedicada a la investigación y experimentación agrícola como el INTA no iba a estar desvinculada de mandatos, asociaciones y disputas vinculadas al imaginario social y a las condiciones materiales del desarrollo del capitalismo en el país. A estos grandes y pre-existentes trazos, iba a sumarse también la configuración de su propia identidad institucional y su transformación al calor de distintas coyunturas políticas y económicas que acompañaron su trayectoria.

En este sentido, el campo historiográfico constituido en torno al estudio de la historia reciente ha crecido en forma significativa en los últimos años, sin embargo, las condiciones de producción de ciencia y tecnología durante la última dictadura y su conexión con la dinámica económica y socio-política del período, no han sido exploradas en profundidad. Desde la economía y la historia económica, Nochteff (1994) ha analizado las políticas científicas y tecnológicas del siglo XX destacando cómo la transformación de la estructura industrial a partir de 1976 disminuyó la demanda de CyT. Por su parte, Azpiazu, Basualdo y Nochteff (1988:40) destacan la sincronía entre las políticas de apertura económica en base a un modelo de “valorización financiera”, la subordinación autoritaria de la mayoría de los actores sociales y la exclusión local del nuevo paradigma tecno-económico; mientras que Chudnovsky y López (1996) coinciden en señalar que la desregulación del régimen de importación de tecnología afectó la capacidad endógena de investigación y desarrollo. Si bien todos estos trabajos representan aportes relevantes para la comprensión de los vínculos entre política económica y desarrollo de las actividades de CyT durante la última dictadura, no buscan realizar estudios empíricos sobre las dinámicas institucionales de producción científica

---

<sup>13</sup> Se ha señalado que la política científica latinoamericana estuvo imbricada a una ideología “ofertista”, basada en un modelo lineal, que señalaba la necesidad de producir conocimientos básicos que luego se traducirían naturalmente en aplicaciones tecnológicas y bienestar social (Vasen, 2013). En este sentido, Hurtado y Mallo (2012) han afirmado que la lectura retrospectiva que en la década de 1990 se ha realizado sobre este proceso, identificando al “ofertismo” y al “modelo lineal” como las causas de los problemas de la región, en realidad no se corresponden con la realidad de la trayectoria de los organismos (solamente CONICET y las universidades entran en este esquema, según señalan), ni con las causas de las debilidades latinoamericanas en el área de CyT. Éstas, señalan, lejos de redundar en un modelo equivocado de “oferta” de los conocimientos generados, deben buscarse en los lazos de subordinación económica y cultural con respecto a las principales potencias.

y tecnológica, y su vinculación con los cambios registrados durante el período en la estructura productiva.

Desde la historia social de la ciencia y la tecnología, así como en los estudios sociales sobre la ciencia y la tecnología, distintas producciones hacen referencia a la relación entre ciencia, tecnología y sociedad durante la última dictadura. Vessuri (1992) indica que las ciencias sociales recibieron los ataques más frontales. Asimismo, la obra pionera compilada por Enrique Oteiza (1992) señala algunas características de las principales instituciones y, sin bien no presenta un análisis sistemático del período, destaca algunos rasgos relevantes tales como el aislamiento de las actividades científicas y tecnológicas, la persecución ideológica, así como también la reubicación de las actividades de CyT en ámbitos extra-universitarios carentes de autonomía y de libertad académica. En este sentido, el CONICET, estudiado en mayor profundidad para el período previo (Feld, 2009), vio menoscabado el procedimiento de evaluación de pares por los dispositivos de control instaurados (Oteiza, 1992) y fue protagonista de la proliferación de institutos propios (Casalet, 1992; Bekerman, 2008; 2013).

La CNEA, particularmente, fue caracterizada como un “caso paradigmático” (Oteiza, 1992: 42) debido a su consolidación como actor capacitado en el sector energético y el área de defensa. Al respecto, los trabajos de Hurtado (2005; 2011) y de Hurtado y Vara (2007) estudiaron de qué forma la política institucional industrialista de la CNEA, opuesta a la política económica dominante, terminó siendo funcional al complejo militar industrial. En particular, un artículo centrado en la trayectoria de CNEA durante la dictadura ha resaltado la posición estratégica del área nuclear en el imaginario de un sector de las Fuerzas Armadas y cómo fue decisivo en la asignación de ingentes recursos a las actividades de CyT del sector nuclear (alrededor de 4500 millones de dólares fueron invertidos en esta área en el transcurso de los siete años de dictadura) (Hurtado, 2009). Además de iniciar la construcción del acelerador de iones pesados (TANDem ARGentino), la CNEA y la empresa de tecnología INVAP S.E (Investigación Aplicada Sociedad del Estado) -desprendimiento de la CNEA- iniciaron un proyecto secreto para el desarrollo de la tecnología de enriquecimiento de uranio, que sólo fue hecho público días antes de que Alfonsín asumiera la presidencia del país. En este sentido, Thomas, Lalouf y Versino (2008) analizan la “trayectoria socio-

técnica” de INVAP S.E. tomando su creación en 1976 y suministran datos sobre su participación en aspectos secretos del Plan Nuclear argentino.

Con respecto al Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), Valeiras (1992) señala que se retrajeron las funciones relacionadas con la transferencia de tecnología al exterior y las acciones ligadas al desarrollo tecnológico autónomo, al mismo tiempo que se otorgó prioridad a la prestación de servicios técnicos. La apertura, el endeudamiento y la desregulación conspiraron en contra de los objetivos explícitos de la institución. Después de 1976, el INTI pasó a actuar como asesor, mediante procedimientos previstos en la Ley 22.426, de compañías que buscaban incorporar nuevas tecnologías importadas en sus procesos productivos (Adler, 1987). Este organismo fue puesto en manos de la Marina, y hacia 1980 su presupuesto dependía únicamente de los fondos del Tesoro Nacional. A su vez, algunas de sus áreas de trabajo, como el grupo dedicado a la electroquímica aplicada, fueron desarticuladas.

El párrafo precedente ejemplifica la situación descrita por Albornoz (2004), quien indica que durante el período bajo análisis la política científica y tecnológica fue fuertemente orientada hacia las temáticas consideradas de interés para el régimen. La capacidad de producción de conocimientos científicos y tecnológicos relevantes se vio seriamente afectada por las políticas instrumentadas. Esta relación es analizada por Nun (1995: 76), quien destaca que “desaparecieron de la agenda pública los problemas de la ciencia y la tecnología”. Con respecto a lo antedicho, es pertinente realizar una doble consideración. En primer lugar, indagar en qué medida la ausencia de una política de CyT explícita y articulada implicó -en los hechos- una orientación específica de las actividades de investigación y desarrollo. Y, en segundo término, analizar cualitativa y cuantitativamente cuáles fueron “los problemas de la ciencia y la tecnología” que efectivamente desaparecieron de la agenda y cuáles fueron sostenidos o introducidos.

Finalmente, si bien existe una amplia literatura sobre la represión ejercida en el ámbito universitario (Pérez Lindo, 1985; Kaufmann, 2003; entre otros), no ocurre lo mismo con otros ámbitos de investigación locales. Pérez Lindo (1985: 180) analizó el espacio universitario, destacando el “desmantelamiento intelectual” y el papel de las autoridades civiles en la cobertura intelectual del aparato militar<sup>14</sup>. Intervenciones, supresión de carreras y facultades, limitaciones al ingreso fueron sólo algunos de los

---

<sup>14</sup> Un antecedente relevante lo constituyó la llamada “Noche de los Bastones Largos” (1966).

mecanismos. Las restricciones al porcentaje de estudiantes inscriptos han sido destacadas por Rodríguez y Soprano (2009), al igual que los objetivos de las políticas diseñadas para las universidades. También Buchbinder (2005), en su estudio sobre la historia de la universidad en Argentina, presenta un sintético panorama sobre su funcionamiento durante el período dictatorial. En cuanto a los organismos de ciencia y técnica, en distintos artículos contemporáneos de circulación internacional se denunciaba la existencia de detenciones y despidos. Desde las páginas de *Science* se mencionaba la situación de la CNEA en un artículo titulado “*Repression in Argentina: Scientists Caught Up in Tide of Terror*” (Wade, 1976), también referida a partir del testimonio de físicos nucleares desde el exilio (Starr, 1977). Por su parte la *American Association for the Advancement of Science* publicaba en 1981 el informe “*Scientists and Human Rights in Argentina since 1976*”, donde recopilaba testimonios y casos de científicos, ingenieros, profesionales de la salud y estudiantes desaparecidos desde marzo del 1976 (AAAS, 1981). Por otro lado, en cuanto a estudios posteriores, el INTI (2006) publicó una breve recopilación de testimonios de trabajadores del organismo y el CONICET (1989) un informe institucional sobre este período. Más allá de estas referencias, a excepción de un trabajo que analiza en clave comparativa las memorias en disputa sobre el período en CNEA e INTA (Spivak y Gárgano, 2014) y de resultados preliminares de esta investigación (Gárgano, 2011; 2013; 2014), no se cuenta con estudios académicos que analicen la introducción de mecanismos represivos en instituciones del complejo científico-tecnológico local, ni su impacto en las agendas de investigación.

Por último, dentro de la bibliografía internacional que estudia la vinculación entre autoritarismos y prácticas de investigación y desarrollo tecnológico bajo otros contextos históricos, se destacan los trabajos de Renneberg y Walker (2001) y Josephson (2005), mientras que Saraiva y Wise (2010) reflexionan sobre las conexiones entre poderes militares, conocimientos científicos y producción de tecnologías. Por su parte, Dickson (1988) aporta una clave significativa al marcar un giro en las políticas de CyT en los Estados Unidos a partir de 1980, con un impacto general a nivel mundial y particular para América Latina.



Las contribuciones referidas constituyen un significativo punto de partida para estudios en la temática. En este sentido, dentro de las relevantes producciones aludidas fue posible identificar tres áreas de vacancia general y un área específica:

- I.** La ausencia de un estudio en profundidad de las trayectorias de instituciones de CyT durante la última dictadura (1976-1983).
- II.** La escasez de estudios que analicen la producción pública de ciencia y tecnología y su vinculación con las transformaciones económicas y políticas registradas en el período.
- III.** La falta de análisis que consideren la introducción de mecanismos represivos en instituciones de CyT y sus efectos en las agendas de trabajo.
- IV.** La ausencia de un estudio de la trayectoria del INTA en el período.

En relación a la orientación de las políticas científico-tecnológicas para el período bajo estudio (1973-1983), cabe señalar algunos hitos relevantes. Según Adler (1987: 15), a partir del retorno del peronismo en 1973 fue promovida una retórica de “autodeterminación” en el desarrollo nacional de CyT. Ésta se reflejaba en las referencias al área presentes en el *Plan para la Reconstrucción y Liberación Nacional* -elaborado por el gobierno con vistas a una planificación a tres años- y en la definición de áreas prioritarias de investigación delimitadas en los Planes Nacionales de CyT (Alimentos, Electrónica, Enfermedades endémicas y Vivienda). En este sentido, tres medidas relacionadas con esta orientación fueron la Ley 20.545, sancionada en 1973, que restringía la importación de tecnología extranjera en maquinaria y bienes intermedios. En la misma línea, una nueva regulación para las inversiones extranjeras directas (la Ley 20.577), implantó restricciones, estableció como empresa nacional a aquellas en la que la participación de capitales nacionales representaran el 80% del total o más, y fijó áreas estratégicas en las que se impedían las inversiones extranjeras: servicios públicos, actividades financieras, producción y comercialización agrícola (Adler, 1987). En 1974, una segunda disposición sobre transferencia de tecnología (la Ley 20.794) restringió los acuerdos de transferencia si la tecnología era de disponibilidad en el país o en los casos en los que no existían las garantías suficientes para garantizar el mantenimiento de las licencias derivadas del uso de la tecnología, el precio de la tecnología excedía los beneficios potenciales o era indeterminado, o en los

que no había licencias conjuntas obligatorias. Estas disposiciones tendían a regular la actividad, estableciendo protecciones para las producciones locales.

A partir de 1976, con el inicio de la dictadura, fueron modificadas las principales medidas en esta materia. Una de las primeras disposiciones modificó las pautas que regían la inversión extranjera. La Ley 21.382 eliminó las restricciones previas, cambió la definición de “empresa nacional”, que requería que el 80% del capital fuera nacional a una simple mayoría, suprimió las áreas estratégicas cerradas a las inversiones extranjeras y omitió las cláusulas dirigidas a evitar abusos en las licencias, eliminando por ejemplo prohibiciones al licenciente de establecer los precios de reventa, y favoreciendo así a los inversores extranjeros (Adler, 1987). Sobre estos aspectos se pronunciaba el ministro de Economía Martínez de Hoz, al afirmar que el Estado debía tener la menor participación posible en los contratos y, en lugar de restringir la transferencia de tecnología “con lo que podría llamarse un complejo de inferioridad, el Estado usará todos sus recursos para ayudar al sector empresarial a actualizar sus actividades también en lo que respecta a la tecnología” (Martínez de Hoz, citado en Adler, 1987: 115). Cabe aclarar que el carácter dual de la orientación económica sostuvo un particular modelo de gestión signado por la combinación de la tecnocracia liberal liderada por el equipo del ministro Martínez de Hoz y viejas prácticas corporativas e intervencionistas de ciertas fracciones de la gran burguesía, la burocracia estatal y las Fuerzas Armadas (Canitrot, 1980; 1982; Pucciarelli, 2004; Schvarzer, 1992). En este sentido, a pesar de las iniciativas que reflejaban las internas existentes al interior de las Fuerzas Armadas -como la creación del Ministerio de Planeamiento en 1976, o las políticas de des-industrialización selectiva que afectaban en modo divergente sectores y ramas- la tendencia a la liberalización del régimen de producción de CyT fue creciente.

Las leyes que promovieron la actividad de capitales concentrados de origen internacional, no eran una novedad en las políticas de CyT nacionales. Durante las décadas de 1950 y 1960, la promoción de las inversiones extranjeras permitió a las subsidiarias de las multinacionales establecerse con condiciones ventajosas en ramas como la industria automotriz, química y petroquímica, maquinaria agrícola y controlar

buena parte de la producción manufacturera doméstica<sup>15</sup>. Durante la dictadura encabezada por el general Onganía los incentivos a la radicación de multinacionales implicaron un incremento sustancial en las inversiones extranjeras, que ya venían en alza desde los planes desarrollistas sostenidos por el gobierno de Frondizi. No obstante, como señalan Bellini y Rougier (2008), si bien después de 1955 los planteos anti-intervencionistas y liberales nutrieron buena parte de la política económica, el Estado consiguió filtrarse dentro de la estructura de capital de muchas empresas privadas. Después de 1970 la inversión extranjera decrece y casi se detiene en el tercer peronismo (Adler, 1987). Durante la última dictadura el salto fue cualitativo. En sólo dos años, el grueso de las empresas industriales que hasta el momento tenían un control mayoritario en manos del Estado dejaron de estarlo por privatización, liquidación o transferencia (Bellini y Rougier, 2008). El país se había transformado para entonces en un territorio conveniente (y desregulado) para el capital extranjero.

En 1977 la tercera ley de transferencia de tecnología (Ley 21.617) eliminó la mayoría de las restricciones previas allanando el camino para el siguiente paso, la liberalización en extremo, mediante la cuarta ley de transferencia de tecnología (Ley 22.426), descripta como “la más liberal de América Latina” (Adler, 1987: 111) por su efectividad en eliminar los controles y restricciones previas. En este sentido, si bien no parece haber existido una “política explícita” (Herrera, 1971) orgánica y articulada para el área, es posible marcar que la ausencia de una política científica y tecnológica sistemática convivió con iniciativas implícitas, que incidieron directamente en la producción de ciencia y tecnología<sup>16</sup>.

Una síntesis los principales hitos relevantes en materia de disposiciones en CyT correspondientes al período 1973-1983, que han sido mencionados, pueden observarse sintetizados en el siguiente cuadro:

---

<sup>15</sup> Cabe aclarar que junto a estos condicionantes externos, la producción tecnológica local también estuvo asociada a las limitaciones endógenas por no poder cerrar los ciclos productivos en el país desarrollando industrias de base, lo que demandó históricamente la importación de insumos.

<sup>16</sup> La categoría de políticas “explícitas e implícitas” en CyT fue elaborada por Amílcar Herrera (1971 {1995}) para indicar la diferencia entre la política “oficial” (cuerpo de disposiciones y normas) y aquella que carece de estructuración formal pero que expresa la demanda científica y tecnológica del “proyecto nacional” vigente.

### 2.1. Cuadro 1. Hitos en la regulación de la producción de CyT (1973-1983)

| Año  | Disposición   | Contenido  |
|------|---|--|
| 1973 | Ley 20.545<br><br>Ley 20.577  | -Restricción a la importación de tecnología en maquinaria y bienes intermedios<br><br>-Regulación de las inversiones extranjeras directas: fijación de áreas estratégicas en las que se impedían las IED |
| 1974 | Ley 20.794  | Regulación de los acuerdos de transferencia de tecnología, si la tecnología era de disponibilidad en el país.  |
| 1976 | -Ley 21.382<br>-Creación del Ministerio de Planeamiento<br>-Creación del CAICYT | Supresión restricciones previas en materia de IED: eliminación de las áreas estratégicas y omisión de las cláusulas reguladoras de las licencias.  |
| 1977 | Ley 21. 617   | Tercera ley de transferencia de tecnología eliminó la mayoría de las restricciones previas   |
| 1978 | Desmantelamiento del Ministerio de Planeamiento                                 |  |
| 1979 | Préstamo del BID  | \$66 millones dólares contraídos para ser destinados al área CyT. 42 millones se destinan a CONICET  |
| 1980 | Desgravación impositiva   | Se elimina el impuesto al 0,25% de los créditos bancarios destinados a la industria, base del presupuesto del INTI.  |
| 1981 | Ley 22.426  | Cuarta ley de transferencia de tecnología: efectiva eliminación de controles y restricciones   |

Fuente: elaboración propia en base a Adler (1987) y UNCATD (1980).

Por otro lado, el terrorismo de Estado se ejerció en los ámbitos de CyT como en otros espacios laborales. Los organismos fueron intervenidos militarmente y puestos a disposición de las distintas fuerzas, que se repartieron su administración<sup>17</sup>. La introducción de mecanismos represivos en los ámbitos de producción de conocimiento contó con elementos comunes: implementación de cesantías por “razones de seguridad”, desmantelamiento de equipos de trabajo e interrupción de líneas de investigación, persecución ideológica, detenciones y secuestros en los propios lugares de trabajo. Como había sucedido ya en 1966, la complicidad civil encarnada en algunos directivos integrantes de los organismos es reconocida como la herramienta que permitió al accionar militar confeccionar las “listas negras”. Si bien las universidades nacionales, eje de la vida política estudiantil, encabezaron el embate represivo, también las distintas instituciones del complejo científico-tecnológico sufrieron la persecución a sus integrantes. La CNEA registra 15 casos reportados de desapariciones, además de un grupo de investigadores que fue detenido, retenido en un barco sometido a interrogatorios, y posteriormente liberado. En el INTI, Alfredo Giorgi, investigador del Centro de Plásticos, y María del Carmen Artero, secretaria del Centro de Química, fueron desaparecidos en 1978 (INTI, 2006). El área de Electroquímica Aplicada fue desarmada, junto a la implementación de numerosas “bajas”. El CONICET, además de ver menoscabado el procedimiento de evaluación de pares por los dispositivos de control instaurados, también sufrió la represión. Dante Guede, quien se desempeñaba en el Observatorio de Radioastronomía de Villa Elisa (La Plata), Martín Toursarkissian y Manuel Ramón Saavedra -que trabajaban en el Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia- permanecen desaparecidos (CONICET, 1989). En el INTA al momento se contabilizan cinco casos de desapariciones, tres asesinatos, decenas de detenciones y centenares de cesantías. El estado preliminar de las cifras da cuenta tanto del estado de las investigaciones en materia judicial (aún en curso), como de la vacancia del campo de estudios.

Junto a la llegada de la represión a estos ámbitos, con la lograda clausura de las actividades gremiales y políticas y la restricción que la censura impuso, el propio desarrollo de las tareas científicas y tecnológicas realizadas en el ámbito público fue

---

<sup>17</sup> Dentro de las indagaciones que estudian esta división tripartita, como la de Canelo (2008), restan indagar qué criterios pesaron en la ubicación del área de CyT en general y, en particular del INTA, que puesto bajo la órbita de la Marina.

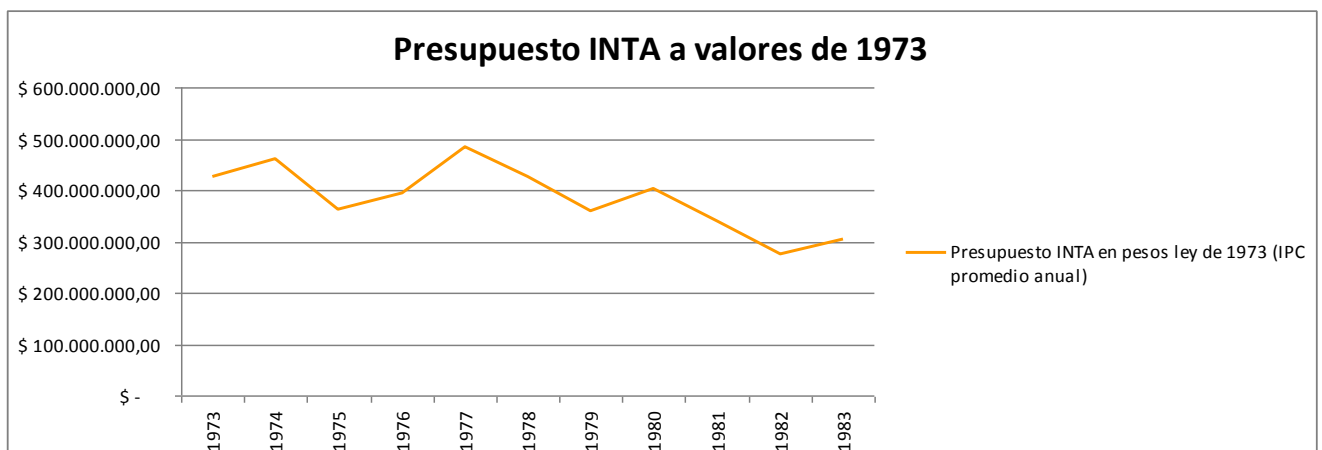
sujeto y objeto de las transformaciones económicas del período. Los parámetros de un ideario que proclamaba en forma insistente la necesidad de “achicar” el Estado, reducir su “ineficiencia”, lograr un “saneamiento económico”, eliminar “las políticas estatizantes”, “combatir la burocracia y asegurar la racionalización progresiva de la administración pública y las empresas del Estado” (Junta Militar, 1980: 19) se dirigió también contra el ámbito científico. En diciembre de 1979, la Junta publicaba un documento, “Bases políticas de las Fuerzas Armadas para el Proceso de Reorganización Nacional”, en donde se llamaba a un rol del Estado en el desarrollo de la CyT que no tuviera “prejuicios” respecto del origen de la tecnología o los conocimientos y promoviera la “eficiencia y ventaja comparativa” de los sectores productivos (Junta Militar, 1980). En un marco de restricción del gasto público, aumento descomunal del endeudamiento externo, ajustes salariales y financierización de la economía, como señalamos, también la desregulación del régimen de importación de tecnología afectó la capacidad endógena de investigación y desarrollo. Además del desmantelamiento, común a gran parte del sector público, algunas instituciones y áreas de trabajo dentro de las mismas registraron una aparente continuidad.

En este sentido, el impacto no fue simétrico para el conjunto de los organismos, ni para el conjunto de las líneas de trabajo al interior de los mismos. La distribución de los recursos agrupados en la “Finalidad 8” del presupuesto nacional indica que CNEA y CONICET incrementaron su participación, mientras que la del INTI descendió fuertemente y la de las universidades disminuyó drásticamente a partir de 1975 (Adler, 1987). Esta situación ha sido constatada por Bekerman (2011; 2013) en el caso de CONICET y por Hurtado (2009; 2010) para el caso de la CNEA. El crecimiento presupuestario de CONICET estuvo asociado a la proliferación de institutos propios (Oteiza, 1992). Asimismo, el desorbitante crecimiento de la CNEA fue simultáneo a la intensificación de lazos con la “patria contratista”, mediante la participación de grandes firmas -como Techint- que funcionaron asociadas como contratistas (Castellani, 2009; Hurtado, 2014). En este sentido, desde algunos sectores de CNEA cuyo relato ha sido poco difundido, se ha señalado que este período de crecimiento de la institución se encuentra asociado a fuertes imputaciones en torno a la modificación del perfil, alcance y efectivo éxito de las tareas de investigación y desarrollo encaradas por el organismo (Spivak, inédito). El INTA, además de incrementar considerable su fuente de recursos

independientes mediante convenios con el sector privado, no vio mermar su presupuesto en términos nominales (si bien, como veremos, esto no lo protegió del proceso inflacionario). Según Adler (1987) esta situación estuvo íntimamente relacionada al interés de las “élites” en la agricultura.

En cuanto a su presupuesto, los datos que hemos analizado muestran que, si bien éste no tuvo una reducción lineal, entre 1973 y 1983 registró una marcada tendencia a la baja, debido a que el aumento nominal del mismo no logró contrarrestar el proceso inflacionario en curso. Esto fue observado utilizando, en forma conjunta, partidas presupuestarias del INTA y del Ministerio de Economía, ajustadas en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC). Esta tendencia puede observarse en el siguiente gráfico:

## 2.2. Gráfico Presupuesto del INTA (1973-1983)



Fuente: Tesorería INTA (partidas presupuestarias), Ministerio de Economía (partidas presupuestarias nacionales 1973-1983), INDEC, Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Nota metodológica: el presupuesto se expresa en pesos ley de 1973. Serie histórica del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Variaciones porcentuales respecto de: mes anterior, diciembre del año anterior, mismo mes del año anterior. Empalme de las Series Base 1943, 1960, 1974 y 1988 con la Serie Base 1999=100.

Asimismo, en 1980 fue derogado por decreto (Decreto Ley 22.294) el gravamen establecido por la ley de creación del INTA, suspendiendo su autarquía. Ésta fue recuperada en 1983, mediante una disposición (el Decreto Ley 23.058) que le devolvió al restituir el gravamen del 1.5 por ciento a las exportaciones agropecuarias, que iba a

conservar hasta 1990<sup>18</sup>. Por otro lado, el personal del INTA se vio afectado por sucesivas disposiciones que redundaron en que al menos 794 integrantes del INTA fueran separados del organismo entre 1984 y 1981 en el marco de una depuración política e ideológica<sup>19</sup>.

En este sentido, cabe hacer algunas consideraciones, válidas para el estudio de las vinculaciones entre ciencia, tecnología y dictadura en términos generales. Aún si tomáramos como datos objetivos que entre 1976 y 1983 la cantidad de personal que abandonó el INTA no representó una diferencia sustancial relación a otros períodos y que su presupuesto no evidenció fluctuaciones considerables, ¿sería condición suficiente la evolución cuantitativa de presupuesto y personal para caracterizar a la institución? ¿Es posible homologar las cesantías producidas en este período con las registradas en otros momentos de la institución? Consideramos que -aún fuera de la determinación cuantitativa de los casos- no pueden equipararse cesantías producidas en distintos momentos de la vida de la institución con aquellas originadas en base a persecuciones que emanaron de políticas represivas. Más aún cuando detrás las mismas subyacen un conjunto de problemáticas, relevantes tanto para la propia comunidad institucional como para sus destinatarios. Al mismo tiempo, como en otros períodos, una caracterización de una trayectoria institucional precisa un análisis cualitativo. En otros términos, analizar qué se produce, para qué y para quién se orienta la producción de conocimiento resultan aspectos imprescindibles<sup>20</sup> Estos ejes, aún pendientes de

---

<sup>18</sup> A partir del 3 de marzo de 1990 todos los organismos descentralizados pasaron a estar sujetos a autorización del Ministerio de Economía para disponer de cada partida presupuestaria. El INTA perdió así la libre disponibilidad de su fondo patrimonial. El Decreto N° 2.049 del 5/11/92 anula la contribución *ad-valorem* del 1,50 % sobre las exportaciones agropecuarias y sustituye ese aporte por la asignación del equivalente a un punto porcentual (1%) del valor de las importaciones sujetas al pago de la Tasa de Estadística (INTA, 1996). Dos años después el Decreto N° 2.277/94 hace caer la Tasa de Estadística al 0 %, con lo cual se anula la principal fuente de recursos institucionales y el organismo permanece al borde de su privatización. En marzo de 1995 se anuncia la restitución de la Tasa de Estadística y, tras gestiones del Consejo Directivo, el día 14/3/95, se comunica oficialmente que el INTA vuelve a ser incluido en la misma. Referencias a la situación del INTA en 1990 pueden verse en Hurtado (2010).

<sup>19</sup> Se desarrolla este aspecto en el capítulo II, donde también se presenta un gráfico ilustrando la distribución territorial de las cesantías efectuadas como resultado de la primera resolución de la intervención militar.

<sup>20</sup> En este sentido, una ponencia centrada en la evolución del presupuesto y el personal del INTA entre 1956 y 2010 engloba a este período (1976-1983) dentro de una “fase de crecimiento” institucional (Pellegrini, 2013). Esto es argumentado en base a señalar que no registró, en estas dos variables, mermas sustanciales que alterasen la tendencia al alza presente desde la creación del organismo. Al analizar la evolución de personal, señalando la ausencia de deserciones masivas durante la intervención militar, uno de los casos testigo que es utilizado para explicar esta tendencia general es, precisamente, la estación experimental de Pergamino, en la que fue posible constatar la mayor cantidad de cesantías. En este sentido, es probable que en el material consultado (sobre el que como única referencia se cita “archivos



profundización en el análisis de la evolución del sector de CyT durante la última dictadura, son los que seguiremos en el estudio del INTA. Antes de sumergirnos de lleno en la historia reciente del instituto, y de abordar estas problemáticas, repasaremos algunos de sus trazos fundacionales.

### **3. Breve reseña histórica del INTA: la institucionalización de la investigación y extensión rural**

Históricamente, desde su primera inserción en la división internacional del trabajo, el agro ha cumplido un rol central en la economía argentina. El protagonismo de la renta de la tierra en el proceso de acumulación, la gravitación de las corporaciones terratenientes y la existencia de un nudo territorial neurálgico (la región pampeana) han sido destacados como rasgos sobresalientes del capitalismo argentino<sup>21</sup>. Al mismo

---

de INTA”) no haya tenido disponible esta información, que sí figura en los documentos originales (resoluciones de la intervención militar, legajos de personal y materiales de origen judicial). Por los resultados obtenidos, se infiere que han sido utilizados materiales ya procesados y recopilados por el instituto. En cuanto al presupuesto, el análisis de datos nominales impide poner en perspectiva el peso del proceso inflacionario. Fuera de las cuestiones metodológicas que hacen a la construcción de los datos, resulta relevante la discusión en torno a la caracterización derivada de los mismos, en otras palabras, qué elementos son necesarios para ubicar el crecimiento de una institución, en particular de CyT.

<sup>21</sup> El análisis de la clase dominante que originariamente impulsó el desarrollo agropecuario del país ha sido fuente de profundos y fructíferos debates historiográficos. Si bien han abordado un período histórico concreto, sus implicancias no se han reducido a la caracterización del mismo, sino que permanecen como referencias en las discusiones al respecto de la evolución de la economía nacional. Sabato (1991) discutió la tesis tradicional, que postulaba la concentración de la tierra en el espacio agro-pampeano y el consumo improductivo de los terratenientes como rasgos anti-económicos que explicarían el estancamiento, considerando que los grandes propietarios eran al mismo tiempo comerciantes y financistas. En su planteo, la “mentalidad” era sumamente moderna (Sabato, 1991: 45), siendo la clase dominante menos conservadora de lo sugerido por la interpretación tradicional y su comportamiento especulativo en base a la estancia mixta (ganadería de invernada combinada con agricultura) “más tarde frenaría el desarrollo capitalista del país” (Sabato, 1991: 46). La tesis “sabatina” ha generado diversas producciones críticas posteriores (Hora, 2001; Palacios, 1996; Rocchi, 1996; Sartelli, 1996). En sintonía con Sabato, Schvarzer (1996: 126) retoma oportunamente la distinción entre “unidad” e “identidad” propuesta por Milciades Peña para dar cuenta de las fracciones imperantes al interior de la clase dominante. Peña (1975) fue pionero en destacar que la burguesía industrial argentina había nacido fuertemente ligada a los terratenientes, destacando la lucha interfacciosa que lejos estaba de viabilizar un capitalismo independiente en la región. La actualidad de la discusión en torno a la escisión o fusión de industriales y terratenientes también ha sido referida, precisando la necesidad de entender la convivencia de intereses dominantes no convergentes. Dicho de otro modo, de analizar los comportamientos (“parasitarios”, “no innovadores”, o “modernos”) en el marco de las tendencias registradas en el proceso de acumulación de capital en la Argentina (Iñigo Carrera, 1998). En este sentido, el proceso de apropiación de la renta agraria ha sido analizado por Iñigo Carrera (2007), quien la destaca como el rasgo distintivo del proceso argentino de acumulación. En sus palabras, “(...) la renta de la tierra ha constituido una fuente sustancial de plusvalía para la economía nacional” (Iñigo Carrera, 2007: 45), pese a la existencia de mercados altibajos. La participación de los capitales locales industriales en la apropiación de la renta agraria, y la mediación del Estado en este proceso, es analizado por el autor en el largo plazo, señalando cambios en

tiempo, las diversas disputas políticas que han tenido al ámbito rural como escenario han sido -al igual que las construcciones culturales que lo han tenido como sujeto- también significativas. En este marco, la existencia de un organismo abocado a la tecnología agropecuaria adquiere una centralidad particular. En este sentido, nos preguntaremos a lo largo de estas páginas por la vinculación entre la trayectoria del INTA y algunas de las transformaciones políticas del período bajo estudio y por su rol en el proceso de cambios de la estructura económica y social agraria: ¿en qué medida las transformaciones de las condiciones de producción en el agro fueron acompañadas por cambios en las tareas de investigación y extensión del instituto?; ¿de qué manera se reconfiguró el tipo de relación entablada desde el INTA con la “familia rural”, los productores agropecuarios y la difusión de los conocimientos producidos? Y, finalmente, ¿cómo incidió dentro del organismo el régimen de disciplinamiento implementado en el conjunto de los espacios sociales durante la última dictadura? Antes de abordar el estudio de la trayectoria reciente del INTA, nos concentraremos en aportar un breve panorama de los principales trazos que acompañaron su creación.

El 4 de diciembre de 1956 fue creado el INTA, a través de un decreto firmado por el general Aramburu, que un año antes había derrocado al presidente Perón. Fue puesto en marcha en 1957, y luego -ya durante la presidencia de Frondizi- el decreto fundacional fue ratificado por el Congreso<sup>22</sup>. Las investigaciones vinculadas a la actividad agropecuaria poseían por entonces una larga trayectoria en el país. A fines del siglo XIX habían sido organizados los primeros centros de estudios agronómicos de nivel universitario y escuelas agrícolas, destinados a brindar asistencia técnica a los productores<sup>23</sup>. A principios del siglo XX se había instaurado el Servicio de Agronomías Regionales y la Oficina de Estaciones Experimentales, dependientes del Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Nación (León y Losada, 2002)<sup>24</sup>. A nivel mundial,

---

las modalidades que asume este proceso pero destacando su permanencia. Los planteos en torno a las rupturas y continuidades que establece en este punto el período inaugurado por la última dictadura en 1976, y el rol del INTA en estos procesos, son abordados a partir del capítulo III.

<sup>22</sup> El Decreto-Ley 21.680 que dictaminó su creación fue ratificado por la Ley 14.467, junto con otros decretos-leyes del gobierno anterior (INTA, 1996).

<sup>23</sup> En 1883 se inician estudios veterinarios y agronómicos en el Instituto de Santa Catalina, provincia de Buenos Aires. Al año siguiente es creado el Servicio de Inspección Agrícola (dependiente del Ministerio de Agricultura) y, en 1904, las primeras escuelas agrícolas. También la Facultad de Agronomía y Veterinaria de la Universidad de Buenos Aires (UBA), y la estación experimental Obispo Colombres, en Tucumán, son parte de estas primeras iniciativas (INTA 1995: 24).

<sup>24</sup> El Servicio de Agronomías Regionales comienza sus actividades en 1907, y pocos años más tarde -en 1912- son creadas las primeras cinco estaciones experimentales. En 1935 se produce la creación del

también existían destacadas experiencias orientadas a la promoción de las investigaciones en materia agropecuaria de larga trayectoria<sup>25</sup>. Un antecedente relevante fue la creación en 1948 del Centro Nacional de Investigaciones Agropecuarias (CNIA). Sin embargo, la organización local de un espacio de investigación, experimentación y extensión rural específicamente centrado en la generación y adaptación de tecnologías para el agro recién tuvo lugar con la creación del INTA, en 1956.

A fines de la década de 1950, en un marco de crisis caracterizado por el estancamiento registrado en los saldos exportables de los productos provenientes de la región pampeana (INTA, 1996), la necesidad de generar y aplicar tecnología agropecuaria cobró nuevo impulso. Junto a otras de las instituciones del complejo científico-tecnológico nacional, el INTA fue creado en el marco del llamado Plan Prebisch, elaborado por el economista argentino y secretario ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), Raúl Prebisch, entre octubre de 1955 y enero de 1956. El Plan, elevado al régimen militar autodenominado “Revolución Libertadora”, presentaba un diagnóstico de la situación económica argentina y un plan de acciones para su superación. Fue criticado por la apertura económica propuesta y la relación que delineaba con los capitales extranjeros<sup>26</sup>. Como señala Hurtado (2010), ante la ausencia de instituciones implícitas en la propuesta, algunas de las cuales habían sido disueltas por haber sido creadas por el gobierno de Perón, la aplicación de la mayor parte de las principales medidas sugeridas resultó poco viable. Sin embargo, las recomendaciones orientadas al desarrollo de la actividad agropecuaria fueron implementadas mediante la creación del INTA. El diagnóstico coincidente con la organización del organismo mencionaba la erosión y el retraso en la tecnificación y aplicación de conocimientos científicos al agro (Oteiza, 1992). También el contexto mundial de posguerra, en el que distintos países europeos asistían a transformaciones

---

Instituto Experimental y de Investigación Agrícola (provincia de Santa Fe), que pasará a cumplir un destacado rol en el área de fitotecnia. En 1944 es fundada la Dirección de Estaciones Experimentales, que pasa a centralizar las estaciones experimentales existentes hasta la creación del INTA. Sobre estos antecedentes, véase Ras (1977) y León y Losada (2002).

<sup>25</sup> Mientras que desde fines del SXVIII en Estados Unidos y Gran Bretaña ya existían alrededor de doscientas unidades orientadas a promover técnicas agrícolas, en este período es creado en Australia, en 1920, el Instituto de la Ciencia y la Industria para realizar investigaciones y estudios en Agricultura y Ganadería. En 1921 se establece en Francia una red de Estaciones Experimentales del Ministerio de Agricultura, y en 1929 se crea la Academia Lenin de Ciencias Agrícolas de la Unión Soviética (Arnon, 1972).

<sup>26</sup> Una de estas voces fue la de Arturo Jauretche, quien luego de publicar en 1956 el ensayo *El Plan Prebisch: retorno al coloniaje*, criticando duramente el informe, se exiliaría en Montevideo.

tecnológicas que los posicionaban como exportadores de productos que hasta entonces importaban, figuraba entre los argumentos de creación del INTA (Hurtado, 2010). En este marco, la fundación de un organismo público que se dedicase a tecnificar el campo debía tener como objetivos promover investigaciones y desarrollos locales y difundir los adelantos internacionales. Su fundación también estuvo impulsada por un grupo de ideólogos y profesionales del ámbito agropecuario, en actividad al interior del Ministerio de Agricultura y Ganadería, que tuvieron a su cargo elaborar el proyecto (Losada, 2005).

El agotamiento de las posibilidades de expansión horizontal de la frontera agrícola y la necesidad de incrementar los rendimientos por unidad de superficie hacían de la incorporación de tecnología al agro un imperativo para asegurar la existencia de divisas agropecuarias y la provisión de alimentos baratos, dos de los pilares fundamentales en los que descansaban los esquemas de sustitución de importaciones (Arceo y Basualdo, 1997). Así, en el planteo de Prebisch se afirmaba que al aumentar el ingreso de las actividades rurales se ampliarían los mercados nacionales para la producción industrial (INTA, 1991). El retraso en el sector agrícola constituía por entonces un tema central en la agenda internacional, y en particular a nivel regional. Poco tiempo después de la reunión en Punta del Este en 1961 del Consejo Interamericano Económico y Social, integrado por todos los países miembros de la OEA (incluida Cuba), surgiría la Alianza para el Progreso, promovida por Estados Unidos en el marco de la Revolución Cubana (1959) y en un álgido momento de la Guerra Fría, para evitar la propagación de estallidos sociales en el continente. También la necesidad de contribuir al proceso de industrialización por sustituciones excedía la particularidad nacional y se revelaba central en las agendas y en los debates agrarios de la región, en los que la modernización técnica del campo ocupaba un rol destacado (Faiguenbaum, 2011).

Primer organismo dedicado oficialmente a la investigación y extensión rural en el país y en toda América Latina, INTA fue creado como organismo autárquico, con capacidad de intervención en todo el territorio nacional. Tuvo una dotación inicial de 300 millones de pesos (moneda nacional) otorgada por el Estado y recibió un importante número de dependencias que estaban en manos del entonces Ministerio de Agricultura y Ganadería (Leon & Losada, 2002). Fueron cedidas 31 estaciones

experimentales que conformaban unas 27. 667 hectáreas y el CNIA ubicado en Castelar, en la zona oeste de la provincia de Buenos Aires, cuyos terrenos habían sido adquiridos en 1948 (Ras, 1977), durante el primer gobierno de Perón<sup>27</sup>. El INTA se organizó, desde su creación, en estaciones experimentales agronómicas (EEA) y agencias de extensión rural (AER) repartidas a lo largo del territorio nacional.

La integración de las tareas de investigación (dirigida a las problemáticas de la producción agropecuaria) y extensión (mediante tareas de enseñanza y del contacto directo con las comunidades rurales) distinguió al organismo de sus pares latinoamericanos, y lo ubicó como referente en la materia. La combinación de los servicios de investigación y extensión en una misma institución, mediante la descentralización de los servicios técnicos del Ministerio de Agricultura y Ganadería, y la radicación de profesionales en las áreas rurales, fue la mayor novedad que conllevó la creación del INTA. Mientras que hasta ese momento la investigación era terreno de las universidades y la extensión responsabilidad de las dependencias del Ministerio de Agricultura, el organismo pasó a concentrar ambas líneas de acción en forma conjunta. La estructura territorial -que cubrió buena parte de la superficie del país- fue fundamental para esta concepción. Esta organización descentralizada de los servicios se vinculaba a la marcada diferencia regional del país. En sus respectivas jurisdicciones las estaciones experimentales contaron con agencias de extensión rural cubriendo, con distinta densidad, virtualmente todo el espacio rural. El esquema de investigación básica se haría en Castelar, que recibiría problemáticas que no podían ser resueltas por las estaciones experimentales, debido a sus capacidades, tiempos o infraestructura. Estas “soluciones” retornarían a las estaciones experimentales, para su puesta en práctica. A su vez, las estaciones experimentales trasladarían estos conocimientos a las agencias de extensión rural, que se encargarían del nexo final: el contacto con los productores. El rol de los extensionistas, los encargados de recorrer el campo y tener una inserción directa en la vida rural, también era visto como un canal de transmisión de “abajo hacia arriba” de los problemas de los agricultores, aunque, como veremos, estas prácticas adoptaron modelos y enfoques diversos a lo largo del tiempo. Sobre esta organización interna, un informe del INTA explicaba:

---

<sup>27</sup> Años antes de la creación del INTA habían sido organizadas nuevas divisiones en el Ministerio de Agricultura (Direcciones de Investigaciones Agrícolas y Ganaderas), y transferidas a la órbita estatal estaciones experimentales que hasta el momento eran controladas por ferrocarriles británicos (Ras, 1977).

La célula de trabajo del INTA es la estación experimental, donde conviven experimentadores y extensionistas para discutir sus problemas comunes: los extensionistas llevan los nuevos conocimientos a los productores y traen a los experimentadores las inquietudes y los problemas de los productores (INTA, 1964: 8).

A pesar de esta concepción de la investigación y la extensión rural como dos esferas en retroalimentación, en la práctica este diseño distaba de funcionar articulada y linealmente. Un investigador del INTA, que ingresó como becario de iniciación al Departamento de Patología Vegetal de Castelar, afirma al respecto:

Nunca se cumplió. Debió haber lugares que sí, pero por lo general había recelos interior- Castelar [en referencia a las estaciones experimentales vs. el CNIA], muchas veces desde Castelar trabajábamos directo con el extensionista, saltando a la experimental. (...) Nos traían los problemas a los *'súper especialistas' de Castelar* (investigador, entrevista, 07-10-2009).

Las tensiones al interior del organismo entre las distintas competencias iban a estar relacionadas a la jerarquización de las actividades. Mientras que los investigadores gozaban de un alto grado de reconocimiento, no ocurría lo mismo con los extensionistas. En esta suerte de “pirámide” el CNIA de Castelar ocupaba la posición más destacada. Concentraba buena parte de los investigadores de mayor trayectoria en un predio de 884 hectáreas, donde se organizaron tres centros de investigación: el Centro de Investigaciones de Recursos Naturales, el Centro de Investigaciones en Ciencias Agronómicas y el Centro de Investigaciones en Ciencias Veterinarias (INTA, 1971).

Dentro de los objetivos fundacionales del INTA se encontraba el de “promover el desarrollo rural, haciendo de la tecnología un instrumento no sólo de crecimiento económico, sino también un medio para contribuir al bienestar de la familia” (INTA, web). En este sentido, su carta fundacional planteaba que iba a dedicarse a organizar, desarrollar y estimular la investigación, experimentación y extensión agraria bajo un mandato ligado al trabajo con “la familia rural”, y explicitaba la necesidad de sostener

la extensión rural mediante la “asistencia educacional, técnica y cultural del productor rural y su familia y el mejoramiento de la comunidad que integra” (Decreto-Ley 21.680, citado en Valeiras, 1992: 143). Mientras que el servicio de extensión adoptó en buena medida el modelo estadounidense, el *Institut National de la Recherche Agronomique* (INRA) francés sirvió de modelo institucional sin que esto implicara no confrontar el diseño inicial con las características geográficas, económicas y socio-culturales del medio rural local<sup>28</sup>.

Como una de las causas de la creación del instituto también se mencionaba que, si bien la investigación en híbridos de maíz había comenzado en el país en forma casi simultánea a la impulsada en Estados Unidos (país pionero en la materia), ésta había sido interrumpida en dos oportunidades por inestabilidad de recursos y profesionales, situación que se esperaba revertir mediante el rol del INTA (INTA, 1959).

Dentro de los artículos de su creación, se explicitaba que quedaba “expresamente excluida del INTA toda función de inspección y contralor de la producción agropecuaria” (Decreto-Ley 21.260/56 citado en INTA, 1959). Esta aclaración se vinculaba a la reticencia de las asociaciones de productores a la existencia de un organismo estatal con capacidad de intervención en el sector. El artículo 16 del decreto-ley de creación estipuló la conformación de un Fondo Nacional de Tecnología Agropecuaria, de carácter acumulativo, que sería la base del financiamiento del INTA. Éste, si bien preveía también aportes de los gobiernos provinciales, subvenciones y donaciones, pasó a estar integrado fundamentalmente por un gravamen *ad valorem* del 1,5% a las exportaciones agropecuarias. Esta forma de financiamiento del INTA se mantendría hasta la anulación de su autarquía financiera en 1980. Precisamente, ésta circunstancia fue la que motivó las críticas de la Sociedad Rural Argentina (SRA) a su creación. Como indica Losada (2005), la creación del INTA no fue un proceso sencillo, además de discutirse más de cuarenta borradores del proyecto, distintos frentes alzaron su voz contra la conformación del organismo. La SRA, entidad representante de las fracciones más concentradas del agro argentino, veía con especial preocupación que el financiamiento del INTA surgiera del 1,5% de las exportaciones (INTA, 1996). Este punto generaba fuertes tensiones, que se unían al temor de las grandes corporaciones terratenientes de que el instituto pudiera ligarse a una intervención en el sector. Cuando

---

<sup>28</sup> Las influencias del modelo institucional estadounidense se abordan en el capítulo III, dedicado a estudiar la actividad de extensión rural del INTA.

en 1958 se introdujeron modificaciones al decreto de creación del organismo que aclaraban que su rol iba a centrarse en la producción de tecnología agropecuaria, la entidad destacó que su función iba a ser “orientar la técnica agropecuaria, pero *no la política de la misma*” (SRA, citado en INTA, 1996: 36). Su oposición a la presidencia de Horacio Giberti (al frente del INTA desde 1959) le valió la renuncia en julio de 1961, después de que un hombre de la SRA (César Urien) fuera nombrado secretario de Agricultura y Ganadería y presentara una fuerte crítica al organismo en el Congreso (León y Losada, 2002).

Por su parte, las universidades manifestaban su preocupación por la posible burocratización de un organismo de la magnitud del INTA y miraban con desconfianza el avance sobre las tareas de investigación en el área (Losada, 2005). Eran reticentes al manejo de los fondos presupuestarios, y cuestionaban su autoridad para decidir la aprobación de planes y proyectos de investigación, que las Facultades podían proponer para la agenda del INTA. Desde el organismo, uno de los problemas registrados tempranamente se vinculaba a los perfiles profesionales que recibían de las casas de estudio. En 1960 un informe de evaluación del estado del organismo realizado a pedido del secretario de agricultura argentino a la CEPAL, realizado por un integrante de la misma CEPAL y uno de la OEA, remarcaba que los egresados de Veterinaria y Agronomía, y otras especialidades, tenían poca o ninguna práctica en investigación y extensión (Elgueta y Trivelli, 1960: 3). También destacaba que dentro del INTA se había desarrollado un “espíritu de cuerpo” (Trivelli y Elgueta, 1960: 17), característica que iba a moldear la identidad institucional a lo largo del tiempo. A su vez, la Facultad de Agronomía y Veterinaria de la UBA señalaba que no se había consultado a la opinión pública, ni informado a los institutos provinciales, ni a las universidades, críticas que también había recibido la formación de la CNEA (Hurtado, 2010). Al año 1960, las universidades no habían enviado a su representante para integrar el Consejo Directivo del INTA (Losada, 2005).

En cuanto a la estructura directiva del INTA, fue dispuesta la conformación de un Consejo Directivo encargado de administrar el Fondo Nacional de Tecnología Agropecuaria, nombrar y remover personal, fijar las políticas; y aprobar programas y planes de trabajo de investigación y de extensión (INTA, 1996). Junto al Consejo Directivo se organizó una Dirección Nacional, concebida como órgano técnico asesor,



responsable de coordinar las actividades de la institución y ejecutar el cumplimiento de las resoluciones y directivas del Consejo Directivo<sup>29</sup>. A su vez, esta Dirección Nacional estuvo integrada desde sus inicios (si bien las denominaciones fueron cambiando con el tiempo) por Direcciones Nacionales existentes en las diversas áreas (investigación, extensión, programación, evaluación, etc.).

Verdadero enlace con el poder ejecutivo, las universidades y las principales entidades agropecuarias del país, la estructura interna del Consejo Directivo contó con representantes de las facultades de agronomía y veterinaria, del Banco de la Nación (presencia que fue rápidamente suprimida), del Ministerio de Agricultura y de las principales entidades agropecuarias. Algunas, como la SRA y las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), representantes de los productores más capitalizados e históricamente actores políticos de peso en la coyuntura nacional (Basco, 1973), estuvieron habilitados para influir en las decisiones del organismo. Inicialmente, el Consejo estaba facultado para elegir entre algunos de sus propios miembros al presidente y al vicepresidente. En 1960, la Ley 15.429/60 estableció que estos dos cargos pasaran a ser desempeñados por los dos representantes de la SAyG (antes, Ministerio de Agricultura). El Consejo quedó integrado por tres representantes de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (presidente, vicepresidente y un vocal), un vocal en representación de las facultades de Agronomía y Veterinaria de las universidades nacionales y cuatro representantes del sector privado por las principales entidades agropecuarias, la SRA, la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro), CRA, y la Federación Agraria Argentina (FAA), que se incorporó en una segunda instancia. Todos los miembros integraron el Consejo con voz y voto<sup>30</sup>.

Hacia fines de 1959 el INTA se había organizado en siete Centros Regionales, 39 estaciones experimentales agropecuarias y 81 agencias de extensión rural. Cada

---

<sup>29</sup> Inicialmente denominada “Dirección General”, en 1969 el decreto 7.039 introduce en su reemplazo la figura de la Dirección Nacional (Ramírez, 2012).

<sup>30</sup> Como se puntualiza más adelante, durante la intervención militar fue ampliado el número de integrantes del Consejo directivo mediante la incorporación en 1977 de un vocal más por las Universidades y uno más por los productores, siendo ocupado éste por un miembro de la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (AACREA) desde 1980. El Consejo Directivo del INTA está integrado actualmente por un representante de cada una de las siguientes entidades agropecuarias: AACREA, CONINAGRO, CRA, FAA, SRA; tres miembros de la Secretaría de Estado de Agricultura, Ganadería y Pesca (dos de los cuales ocupan, respectivamente, los cargos de presidente y vicepresidente) y dos representantes por las Facultades de Agronomía y Veterinaria de las Universidades Nacionales. Todos poseen voz y voto en las decisiones del Consejo. Véase INTA (1996). La incorporación de AACREA al Consejo se retoma en el capítulo dedicado a la extensión rural.

Centro Regional tenía sede en una estación experimental, dirigida por el mismo director del Centro. A su vez, en cada estación experimental funcionaban Consejos Locales Asesores, formados por funcionarios del INTA, productores agropecuarios y representantes de servicios técnicos de organismos regionales. En 1960 se dejaron sin efecto los Centros Regionales y sus funciones fueron absorbidas por estaciones experimentales regionales. Para 1970 el INTA contaba con 13 estaciones experimentales regionales, 21 estaciones experimentales, una estación cooperativa de experimentación y extensión (en Hilario Ascasubi, provincia de Buenos Aires), 5 subestaciones experimentales, 10 campos anexos, 220 agencias de extensión, y tres centros de investigaciones en el Centro Nacional de Investigaciones Agropecuarias de Castelar (INTA, 1996).

Desde sus comienzos el INTA definió como líneas prioritarias de acción las investigaciones relacionados con los recursos naturales y las técnicas de explotación, estudios sobre “conservación y transformación primaria de los productos agropecuarios” y la extensión agraria (INTA, 1959: 8). Con equipos en áreas diversas, abarcó una vasta cartera de proyectos en aspectos relevantes para la producción agropecuaria del país. Desarrolló múltiples investigaciones vinculadas al estudio de condiciones ambientales y, sobre todo, a la producción animal y vegetal. Fue también responsable de la confección de todas las cartas de suelos del país y encargado de llevar “el Ministerio al campo” a través de sus extensionistas. Estableció que su accionar apoyaría la enseñanza agrotécnica en todos los niveles y se abocaría a “conservar el potencial productivo del suelo”, “contribuir al desarrollo de ciertas regiones como la Patagonia, el Noroeste y el Noreste Argentinos”, “aumentar la rentabilidad de empresas agropecuarias de escasos recursos”, “aumentar el nivel de vida familiar de productores rurales” y “motivar a la juventud rural” (INTA, 1964: 3), entre otras prerrogativas. Sobre el alcance de sus tareas de extensión, información oficial mencionaba que para 1963 estaba asistido el 93, 7% de las comunidades rurales existentes en el país (INTA, 1964).

Además de contar con el logro de algunos hitos, como la vacuna oleosa contra la aftosa, el INTA fue un agente clave en el proceso de transformaciones registrado en la década de 1970 en la agricultura local, cuyo cambio tecnológico principal estuvo protagonizado por el mejoramiento genético incorporado a las semillas (Gutiérrez,

1986). Pero su trayectoria no se vinculó únicamente a la organización de contenidos y áreas de investigación. O, más bien, estos además de guardar relación con lo sucedido en laboratorios y campos experimentales, lo estuvieron con las transformaciones políticas, sociales y económicas del país.

En 1973, después de años de proscripción, el retorno del peronismo al gobierno trajo aparejado un recambio de las burocracias estatales en general, y de la conducción del INTA en particular. ¿Cuál era para entonces la situación del organismo?

## **PRIMERA PARTE**

**El INTA entre el tercer peronismo y la dictadura**

**Reconfiguración institucional, políticas sectoriales e intervención  
militar (1973-1976)**

# CAPÍTULO I

## **El INTA durante el tercer gobierno peronista (1973-1976)**

### **1. Resumen**

Este capítulo aborda el proceso de reconfiguración institucional del INTA a partir de 1973 -en coincidencia con el retorno del peronismo al gobierno- y los conflictos desarrollados en su interior. Con el objetivo de reconstruir y analizar la situación del instituto entre 1973 y 1976, se desarrollan cuatro apartados. El primero contextualiza brevemente el momento histórico e introduce la problemática de la conformación de nuevos equipos de gobierno en los diferentes organismos estatales, con miras al sector agropecuario. El segundo explora la organización de la conducción del INTA en este período, su trayectoria y las tensiones presentes en el organismo. El tercero, indaga el rol del instituto en la política agropecuaria a partir de la cartera de proyectos desarrollada por la Secretaría de Agricultura y Ganadería entre 1973 y 1974. El cuarto apartado analiza la recepción de una de las medidas más controvertidas del paquete agropecuario, el proyecto de Ley Agraria, en conexión con algunas caracterizaciones sobre la situación del INTA registradas en la prensa, a partir de las que se explora la construcción de la figura de la “infiltración” en el organismo. Finalmente, en las conclusiones se puntualizan las temáticas trabajadas y se introduce el abordaje de la intervención militar del instituto, objeto del próximo capítulo.

## CAPÍTULO I

### El INTA durante el tercer gobierno peronista (1973-1976)

*“Un día era como un año en la historia del país. Y no dabas abasto a atender el frente que se había abierto, un frente tan grande de trabajo que no sabíamos dónde estar”.*

(Investigador del INTA hasta 1976, entrevista, 15-06-2010).

#### 1.1. Proyecto reformista, transformación social y radicalización conservadora

Después de más de diecisiete años de proscripción, en 1973 el peronismo volvió a presentar una fórmula electoral. Las disputas que habían estado tejiéndose en su seno, y alrededor de su amplia configuración, tensarían pronto sus contradicciones. El 25 de mayo Héctor Cámpora asumió la presidencia con el 49,5% de los votos<sup>31</sup>, inaugurando un período -el lapso entre su asunción y el golpe de Estado de 1976- que, de acuerdo a distintas ópticas, ha sido catalogado como el “canto del cisne” del modelo basado en la sustitución de importaciones (Rougier y Fizbein, 2006: 10), el “huevo de la serpiente” que habría de desplegarse a partir de marzo de 1976 (Sanz Cerbino, 2010), o bien un híbrido con elementos de quiebre y rasgos de prolongación. Un significativo y complejo conjunto de problemáticas desfila en este contexto, entre ellas la configuración política, ideológica y discursiva durante este período de un enemigo interno, englobada finalmente bajo la categoría de “subversivo” (Franco, 2012)<sup>32</sup>.

Al igual que sucede para el período posterior comprendido por la última dictadura, son escasos los estudios que analizan las trayectorias de las instituciones de

---

<sup>31</sup> La alusión a la “primavera camporista” condensa en buena medida las expectativas que generó la llegada al poder de un dirigente cercano al sindicalismo combativo y a la Juventud Peronista (JP) (Rougier y Fizbein, 2006).

<sup>32</sup> Desde una mirada politológica y sociológica, distintos análisis pioneros ligados a la configuración de la interna peronista y sus implicancias han trazado líneas interpretativas relevantes (De Riz, 1981; Di Tella, 1983; Torre y Henault, 1983; entre otros).

investigación científica y desarrollo tecnológico en esta etapa. Mientras que las transformaciones en el ámbito universitario han sido indagadas en estudios panorámicos (Buchbinder, 2005), y en otros centrados en esta etapa (Pérez Lindo, 1985; Bonavena, 2008; Izaguirre, 2011; Weinberg, 1987; entre otros), no ocurre lo mismo con el complejo científico-tecnológico nacional, a excepción de algunas referencias en miradas de larga duración (Oteiza, 1992; Hurtado, 2010). Para el caso del INTA en particular, no existen trabajos que analicen su situación en este período.

Con el triunfo electoral del peronismo en 1973 se configuró en el país un complejo escenario político signado por la transición de un régimen dictatorial a uno democrático. Luego de años de proscripción, la fuerza política mayoritaria se veía urgida a conformar nuevos equipos de gobierno para completar el traspaso del mando en los diferentes organismos estatales. El INTA entre ellos.

El sector agropecuario constituía un engranaje clave dentro del proyecto reformista del tercer gobierno peronista. Mantener altos niveles de productividad era una de las condiciones necesarias del proyecto de redistribución. Pese a las diferencias entre ambos momentos históricos, al igual que durante los primeros planes quinquenales, la transferencia de excedentes generados en el agro hacia la actividad industrial resultaba indispensable para sostener el buscado equilibrio o alianza de clases. En otras palabras, la renta de la tierra continuaba siendo un rasgo definitorio del proceso de acumulación local (Iñigo Carrera, 2007). Según el *Plan Trienal para la Reconstrucción y la Liberación Nacional* (en adelante, Plan Trienal) presentado por el gobierno, el sector agropecuario tenía reservado “un papel de singular importancia, en su doble función de abastecedor del mercado interno y generador de excedentes para crear capacidad de compra externa” (Plan Trienal, 1973: 32). Los objetivos definidos para el sector eran cuatro: iniciar una vigorosa política tendiente a obtener aumentos sustanciales en la producción; mejorar significativamente la distribución del ingreso en el sector y redistribuir regionalmente la producción y el ingreso agropecuario; promover el acceso a los medios de producción por parte de “los auténticos productores agropecuarios”, y aumentar “el grado de participación real de la población rural en el proceso de desarrollo político, económico y social” (Plan Trienal, 1973: 111). Según señalan Rougier y Fizbein (2006), las metas eran amplias y las precisiones difusas. En este marco, la cartera de proyectos elaborada por la Secretaría de Agricultura y

Ganadería entre 1973 y 1974 tuvo un papel destacado. El ingeniero agrónomo Horacio Giberti encabezaba un equipo encargado de generar el paquete de medidas del sector<sup>33</sup>. El INTA, donde Giberti había ocupado en 1958 el cargo de presidente en forma inconclusa, estaba llamado a ser el brazo ejecutor de buena parte de estas medidas, a generar los diagnósticos técnicos, relevar y a precisar la información territorial para su diseño.

Aunque inicialmente sostuvieron una actitud pasiva ante el “pacto social” que buscaba instalar el peronismo, la gran burguesía y los terratenientes pampeanos, piezas ineludibles dentro de las alianzas que históricamente acompañaron la configuración del proceso de acumulación de capital en el país, jugaron un rol desestabilizador clave en los prolegómenos del golpe militar de 1976 (Sanz Cerbino, 2010). Uno de los focos de conflicto que tomó estado público estuvo ligado a la resistencia que generaron ciertas medidas impulsadas por la Secretaría. Antes de explorar el contenido de algunas de las principales disposiciones del paquete agropecuario, su impacto, limitaciones y potencialidades dentro y fuera del INTA, ¿cuál era la situación del instituto en 1973?

---

<sup>33</sup> Horacio Giberti (1918-2009) egresó como ingeniero agrónomo de la UBA en 1942. En el terreno privado ofició de asesor, entre otros de la SRA de 1948 a 1958. Ese mismo año pasó a ocupar la presidencia del INTA (1958-1961), mandato que no logró terminar en gran medida por los conflictos sostenidos con las grandes corporaciones del agro, entre ellas la misma SRA (Losada, 2005). Ocupó distintos cargos en la función pública: inspector de Semilleros, jefe de la División de Avena, Cebada, Centeno y Alpiste del Ministerio de Agricultura de la Nación (1942-1946); coordinador del Sector Agropecuario del Consejo Nacional de Desarrollo (CONADE) y consultor del Consejo Federal de Inversiones (CFI) (1963-1967); director del Banco Nación (1971-1973). Junto a más de 200 artículos, entre sus principales obras se incluyen: *La producción agropecuaria en el decenio 1940-49*; su célebre *Historia económica de la ganadería argentina* (1954), *El desarrollo agrario argentino* (1964 y 1970); *Evolución y perspectivas del sector agropecuario argentino* (1988). Fue socio fundador y primer presidente de la Asociación Argentina de Economía Agraria (1971-1972), presidió el Instituto Argentino para el Desarrollo Económico (IADE) (1982-1983), el comité editorial de la revista *Realidad Económica* y fue codirector de la *Revista Interdisciplinaria de Estudios Agrarios*. Profesor en la Facultad de Filosofía y Letras (UBA) y de la Facultad de Agronomía (UBA), Universidad de la que recibió la mención de Profesor Honorario en 1994. Ocupó el cargo de secretario de Estado de Agricultura y Ganadería de la Nación entre julio de 1973 y octubre de 1974, el que abandonó en consonancia con la renuncia del ministro de Economía, el empresario José B. Gelbard. Para una revisión de su trayectoria véase Makler (2008).



## **1.2. La reordenación de la geografía institucional del INTA: transición democrática y nuevos equipos directivos**

El Consejo Directivo del INTA había terminado el año 1972 analizando en sus sesiones la nómina del personal involucrado en distintos paros de actividades, en particular en dos de las principales dependencias del INTA: el CNIA ubicado en Castelar, en el oeste del conurbano bonaerense, y la estación experimental de Pergamino, en el norte de la provincia de Buenos Aires<sup>34</sup>. Los reclamos salariales se unían al rechazo de la dictadura encabezada por el general Lanusse e introducían, junto a distintos posicionamientos sobre la coyuntura nacional, reclamos específicos sobre la organización del trabajo dentro del INTA<sup>35</sup>. La seccional Castelar de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), gremio mayoritario en el CNIA, había organizado un cese de actividades el 3 de octubre de 1972 y una manifestación el día de los festejos de un nuevo aniversario del INTA, el 4 de diciembre. Una de las primeras medidas tomadas por el cuerpo directivo consistió en cancelar los permisos de estadías de estudio de profesionales en el Centro. Para el caso de la estación experimental de Pergamino, se solicitaba la instrucción de sumarios administrativos para aquellos trabajadores que habían participado de una manifestación similar a la acaecida en Castelar, organizada en este caso por la Asociación de Profesionales del INTA (APINTA), gremio mayoritario a nivel nacional dentro del instituto. El 1 de marzo, el 29 y el 5 de abril de 1973, tres nuevos paros de actividades con alto grado de participación se llevaron a cabo en el CNIA, la sede central de INTA en Buenos Aires y las estaciones experimentales ubicadas en Famaillá (Tucumán), Paraná y Concepción del Uruguay (Entre Ríos), Rama Caída (Mendoza), San Juan, y Alto Valle (Río Negro). La conflictividad era creciente. Mientras que un alto grado de movilización gremial y política persistiría en el interior del INTA en todo este período, su cuerpo directivo estaba por cambiar.

---

<sup>34</sup> Para el 12 de diciembre de 1972 el director nacional del INTA era el Ing. Agr. Walter Kugler. La presidencia la ocupaba el Ing. Agr. Eduardo Lanusse. (CD INTA, Acta N 588, 12-12-1972). En adelante, para las referencias a actas del Consejo Directivo (CD) del INTA se sigue el mismo formato, indicando la leyenda “CD INTA”, seguida de número de acta, año y/o fecha completa. Un mismo formato se sigue para las resoluciones, indicando “Res.”, con número y fecha, en lugar de número de acta.

<sup>35</sup> Alejandro Agustín Lanusse ocupó de facto la presidencia de la nación entre el 26 de marzo de 1971 y el 25 de mayo de 1973. Para un análisis del Gran Acuerdo Nacional (GAN), uno de los hitos de su gestión, véase De Amézola (1999) y Pucciarelli (1999), entre otros.

Al igual que en la mayoría de las dependencias estatales, los cambios políticos a nivel nacional influían en la estructuración de los cuadros institucionales al interior del organismo. No solamente por los nombramientos que correspondían a designaciones efectuadas por el poder ejecutivo, sino también por la reorganización de otros cargos estratégicos. Como señalamos, la conducción del INTA estaba organizada desde su creación mediante un Consejo Directivo (CD) -máxima instancia decisiva- encargado de aprobar las principales medidas y dictar las resoluciones relacionadas con las actividades del instituto. Nexos de contacto con el Poder Ejecutivo y con los productores más capitalizados del agro, como señalamos, estaba integrado por tres representantes designados por el gobierno en curso (presidente, vicepresidente y un vocal por la Secretaría de Agricultura y Ganadería), cuatro representantes del sector privado por las principales entidades agropecuarias, y un vocal en representación de las facultades de Agronomía y Veterinaria de las universidades nacionales (dos, al separarse las carreras). La Dirección Nacional, encargada de operativizar los lineamientos del CD, estaba integrada por cuatro direcciones nacionales asistentes (Investigaciones Especiales, Extensión y Fomento, Programación y Evaluación y Administración). Con el retorno del peronismo en 1973, la conducción del INTA pasó a estar integrada por profesionales vinculados -como participantes orgánicos unos, periféricos otros y convocados por este grupo algunos más- a la Organización Única del Trasvasamiento Generacional (OUGT), conocida como Trasvasamiento.

El Trasvasamiento era una organización de cuadros peronistas de alcance nacional, nacida de la fusión entre la organización universitaria Frente Estudiantil Nacional (FEN) y la organización peronista Guardia de Hierro, ambas originadas en la década de 1960 (Taruela, 2005; Anchou, 2007; Crucchetti, 2007; 2008). Surgida a inicios de 1972, la OUGT sería disuelta en julio 1974, en simultaneidad a la muerte de Perón<sup>36</sup>. Mientras que el FEN era una organización estudiantil de alcance nacional de vertiente marxista, que se autodefinía como de “pasaje al peronismo” (Reta, 2009:1059), Guardia de Hierro era una organización con base en la Capital Federal vinculada al “peronismo histórico”, que había incorporado militantes provenientes del

---

<sup>36</sup> Enemistados con la Tendencia, condenaron la lucha armada y mantuvieron su apoyo incondicional a la figura de Perón. Luego de su muerte, una fracción de la organización -pese a su disolución formal- continuó activa y cercana a Isabel Perón, y posteriormente entablaron vínculos con un sector de las fuerzas armadas encabezado por Massera (Taruela, 2005).

Humanismo Católico (Crucchetti, 2007). Con la fusión, el FEN lograba trascender el ámbito universitario y “peronizar su proyecto” (Crucchetti, 2008: 32), referenciándose en una organización conocida como parte de la resistencia peronista y, a su vez, Guardia de Hierro engrosaba sus filas y ampliaba su alcance territorial (Reta, 2009). Genéricamente, los integrantes del Trasvasamiento fueron conocidos como “guardianes”, por ser la conducción de Guardia de Hierro la que hegemonizó la organización<sup>37</sup>. El Trasvasamiento se mantuvo en disidencia con la Juventud Peronista<sup>38</sup> y centró su actividad en la inserción barrial por circunscripción electoral, insertando a sus militantes en organizaciones intermedias como clubes deportivos, sociedades de fomento, etcétera (Anchou y Bartoletti, 2008). Las negociaciones entre el Trasvasamiento y el futuro equipo económico del gobierno Justicialista habían comenzado a fines de 1972. A través del Instituto Ramón Carrillo, un organismo de estudios y proyectos de políticas públicas de la organización, se canalizaron las principales medidas y aportes y se organizaron profesionales en vista de integrar como cuadros técnicos los equipos del peronismo en el gobierno (Anchou, 2013, inédito). Según un ex asesor de esta dirección nacional del INTA, “El Instituto Ramón Carrillo era la matriz de donde salían los técnicos que trabajamos en el INTA y la Secretaría de Giberti. La colaboración era permanente”<sup>39</sup>. Algunos, con profesiones afines al medio, también superponían su participación en este ámbito con la sostenida en la Comisión Agropecuaria del partido<sup>40</sup>. “Todos quienes estábamos en la Dirección Nacional del INTA éramos militantes de Trasvasamiento”, agrega el mismo ex integrante del INTA. Si bien no era una norma que regía para el conjunto de las designaciones, los nexos eran estrechos.

Encabezado por José Ber Gelbard, primero como secretario de Hacienda y Finanzas y como ministro de Economía luego de la Ley de Ministerios, el equipo

---

<sup>37</sup> Sin embargo, la denominación respondió más a la capacidad de cooptación de Guardia de Hierro que a la identificación entre ambas, la mayor parte de los militantes del Trasvasamiento provenían del FEN y la estructura de mandos y la metodología de militancia en los barrios fue tomada de Guardia de Hierro (Anchou, 2012).

<sup>38</sup> El episodio más notorio de la contienda entre las consignas “la patria peronista” y “la patria socialista” tuvo lugar el 9 de junio de 1972 cuando Rodolfo Galimberti fue ratificado en el cargo al frente de la Juventud Peronista. A partir de entonces, la OUTG convivió en tensa disidencia con la JP “oficial” (Anchou y Bartoletti, 2008; Crucchetti, 2008).

<sup>39</sup> Ex asistente de la dirección nacional (1973-1974), hasta su traslado a la estación experimental de Marcos Juárez en diciembre de 1974 y su posterior cesantía el 31/03/1976 (comunicación personal, 02/09/2013).

<sup>40</sup> Éste era el caso, entre otros, de Horacio Figueiras (INTA) y Oscar “Lalo” Fernández (SENASA).

económico del gobierno contaba con peronistas históricos -Alfredo Gómez Morales, Antonio Cafiero y Miguel Revestido-, hombres de la Confederación General Empresaria (CGE) - Giberti, Avelino Strógolo y Alberto Davié- junto a un grupo de intelectuales y técnicos (Fiszbein y Rougier, 2006)<sup>41</sup>. En la Secretaría de Agricultura, primero fue designado Strógolo<sup>42</sup>. Luego de su renuncia fue reemplazado por Giberti, quien también dejaría el cargo en forma anticipada. En relación a la estructuración de la Secretaría, tres subsecretarías (Agricultura, Ganadería y Economía) tenían que ser conformadas. Giberti designó al veterinario Héctor Camberos en Ganadería, a Pedro Lacau en Agricultura y a Martín Piñeiro -investigador del INTA- en Economía<sup>43</sup>. Tiempo después reemplazó a Camberos por Lacau, y en Agricultura nombró a Armando Palau. Las segundas líneas del área agropecuaria las integraban el INTA, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), las Juntas Nacionales de Carnes y Granos y el Consejo Agrario Nacional (CAN).

A diferencia de otras estructuras estatales, en las que inicialmente la Tendencia<sup>44</sup> logró ocupar posiciones, el INTA quedó bajo la órbita del sector rival, que en líneas generales tuvo poca injerencia en las estructuras de gobierno<sup>45</sup>. En el caso del INTA, tanto lazos personales que implicaban el mutuo conocimiento entre miembros de ambos sectores del peronismo, como la instrumentación de las políticas elaboradas en otra

---

<sup>41</sup> Gelbard había sido un interlocutor clave entre Perón y Lanusse, y en el acercamiento hacia 1972 de la CGE hacia el partido Justicialista y hacia la Confederación General del Trabajo (CGT). Meses antes de la asunción, la CGE presentó el documento “Sugerencias del empresariado nacional para un programa de gobierno”, en el que se desarrollaba un proyecto reformista con amplia presencia estatal, cuyo contenido tomaría como propio el programa inicial del gobierno de Cámpora. Un documento elaborado entre la CGT y la CGE fue el antecedente de las “Coincidencias programáticas” acordadas antes de las elecciones de 1973 por una amplia gama de organizaciones: la CGE, la CGT, el Movimiento Nacional Justicialista, la Unión Cívica Radical, el MID, el Partido Revolucionario Cristiano, el Partido Intransigente, el Partido Conservador Popular, la Unión del Pueblo Argentino y la Federación de Partidos del Interior, entre otros (Rougier y Fiszbein, 2006).

<sup>42</sup> Gerente general de la Federación Argentina de Cooperativas Agrarias (FACA), ocupó brevemente el cargo de secretario entre el 28 de mayo y el 12 de junio de 1973.

<sup>43</sup> Tanto Piñeiro como Lacau tenían vínculos con la Democracia Cristiana. El primero había sido becario de la Fundación Ford y se desempeñaba como investigador del área de Economía del INTA. Giberti lo consideraba su “mano derecha” dentro del equipo. Lacau, por su parte, había integrado el Ministerio de Agricultura durante la dictadura de Onganía. En su participación había impulsado un proyecto que, como veremos, fue el antecedente de una de las principales medidas de la Secretaría, el Impuesto a la Renta Normal Potencial de la Tierra.

<sup>44</sup> La llamada “Tendencia Revolucionaria” estaba integrada por el conjunto de agrupaciones (sindical, universitaria, de estudiantes secundarios, juvenil, femenina y de villas de emergencia) que respondían políticamente a las organizaciones armadas peronistas lideradas por Montoneros (Calveiro, 2013).

<sup>45</sup> Sin embargo, la dicotomía entre la izquierda y “la derecha” de la juventud peronista en las pujas por el control del Estado se revelaba compleja y mixturada. Un análisis de la trayectoria de la OUGT y su “parentesco” con organizaciones rivales puede verse en Crucchetti (2007; 2008).

esfera de gobierno (la SAYG) habilitaron nombramientos e ingresos. La volatilidad de la conexión entre los directivos del instituto vinculados al Trasvasamiento (algunos, originalmente a Guardia de Hierro) y la organización, al menos en materia de conducción del INTA, indicaba que no se trataba de un desembarco orgánico, ni estratégico, de la organización peronista en el instituto. Su llegada estuvo atravesada por la necesidad de contar con cuadros profesionales en las líneas medias afines (en sentido amplio) al gobierno, y por la existencia de ámbitos de sociabilidad previamente compartidos (de estudio, participación política y profesional) que facilitaron el armado del cuerpo directivo. En este sentido, el perfil de los funcionarios que ocuparon cargos de conducción dentro del INTA conjugaba, junto a su adscripción al peronismo y a su acercamiento (orgánico o periférico) al Trasvasamiento, una formación profesional especializada. En ocasiones, además, se trataba de funcionarios que habían hecho carrera profesional dentro del instituto.

Con la llegada al gobierno de Perón, el 12 de octubre de 1973, fue creado un frente dentro de la OUGT llamado “Unidad Gobierno”, destinado a conducir aquellos cuadros que ocupaban cargos en el gobierno. El jefe de esa unidad hasta diciembre de 1974 fue Ricardo “Freddy” Masera, quien se incorporó como asesor del interventor de la Junta Nacional de Carnes<sup>46</sup>. Según Ricardo Masera, a partir de conversaciones con Horacio Giberti y otros integrantes del equipo económico ligados al agro (entre los que se encontraba el subsecretario de Agricultura, Armando Palau) fueron acordados dos cargos claves para ser ocupados por la OUTG: el de presidente y vicepresidente del INTA (Masera, entrevista, 3/10/2011)<sup>47</sup>. Para presidir el INTA primero fue designado el ingeniero agrónomo Marcelo Bordas, un adherente del Instituto Ramón Carrillo y antiguo profesional del organismo. La vicepresidencia la ocupó el médico veterinario Horacio Figueiras, un investigador en la cátedra de Patología Médica de la Facultad de Veterinaria (UBA), que acababa de regresar de una especialización de posgrado en Suecia, activo cuadro profesional de la OUGT. Por su parte, Giberti explicó la designación de funcionarios en el INTA y en SENASA de “jóvenes profesionales vinculados a Guardia de Hierro” en función de una recomendación recibida “del

---

<sup>46</sup> El ingeniero agrónomo Gastón Valente. Poco después, Valente sufrió un ataque cardíaco y falleció en ejercicio de cargo, fue reemplazado por Jorge Pereda.

<sup>47</sup> Entrevista realizada por Ángeles Anchou a Ricardo “Freddy” Masera, miembro de la Conducción Nacional de la Organización Única del Trasvasamiento Generacional hasta diciembre de 1974. Agradecemos a la investigadora la generosa provisión del material.

veterinario más capaz que yo he conocido”<sup>48</sup>. El veterinario era Héctor Camberos, el primer subsecretario de Ganadería del equipo de la Secretaría<sup>49</sup>. En su caracterización de este grupo ligado a Guardia de Hierro, Giberti señalaba que “no había nada en común con la imagen que se transmite de ellos. Se los pintaba como tipos de derecha, racistas (...); sí tenían, en su visión, una “actitud posiblemente sectaria como peronistas”, que se reflejaba en los nombramientos que realizaban, donde “sólo nombraban amigos del peronismo en los cargos” (Giberti, citado en Ramírez, 2011: 359). Su visión es coincidente con otras afirmaciones de integrantes y ex integrantes del INTA, en el señalamiento de una discordancia con la caracterización usualmente asignada a este grupo<sup>50</sup>. Por otro lado, en la visión de uno de los principales colaboradores de Giberti en ese momento e integrante del INTA, “todos los puestos directivos de INTA eran de un grupo de Guardia de Hierro con quien teníamos buena relación personal, pero como que Giberti les dejó el INTA a ese grupo, y nosotros nos metíamos bastante poco en el INTA” (Piñeiro, entrevista, 25-06-2010)<sup>51</sup>. En los hechos, las articulaciones con el INTA estarían dadas por la necesidad de contar con los insumos para el diseño y aplicación de las políticas planteadas para el agro. En palabras de Alberto Golberg, investigador de la estación experimental de Pergamino del INTA que con la llegada de Cámpora pasó a cumplir funciones como director de Agricultura en la provincia de Buenos Aires, dominada por la Tendencia, “después de casi 18 años el peronismo *no tenía cuadros técnicos* y los necesitaba. Por eso el lugar de Guardia en el INTA” (Golberg, entrevista, 10-09-2010)<sup>52</sup>. Ahora bien, esta necesidad vigente en el armado de las estructuras estatales, así como el perfil profesional de los nuevos directivos, no los dejaría al margen de conflictos que, unidos a la coyuntura política nacional, configuraron nuevas disputas y tensiones al interior del INTA.

---

<sup>48</sup> El único acercamiento formal que Giberti señala remite a una cena en 1976 en la que fue invitado por Guardia de Hierro junto al dirigente de Federación Agraria, Humberto Volando. Para entonces la OUGT ya se había disuelto (Giberti, citado en Ramírez, 2011: 359).

<sup>49</sup> Ex decano de la Facultad de Agronomía y Veterinaria (UBA) entre 1958 y 1962.

<sup>50</sup> En este sentido, distintos autores también han señalado la complejidad del espectro ideológico ligado a Guardia de Hierro y a la -más desconocida- OUGT, y la existencia de una caracterización en tanto “derecha peronista” de ambas organizaciones en función de la trayectoria posterior de algunos de sus miembros (Crucchetti, 2008; Pozzi, 2013)

<sup>51</sup> Piñeiro fue director del Programa de Posgrado de Economía agraria de la Escuela para Graduados del INTA entre 1970 y 1973, año en el que se desempeñó como subsecretario de Asuntos Agrarios. Con la renuncia de Giberti, volvió al INTA al Departamento de Economía, hasta su cesantía en 1976.

<sup>52</sup> Investigador del INTA del área de ecofisiología vegetal desde 1969 hasta su cesantía y detención en 1976, y desde su reincorporación en 1987.

El 31 de julio de 1973, estando ya en funciones el nuevo presidente del INTA, el vicepresidente Figueras manifestaba que la intención de las nuevas autoridades era ubicar al INTA dentro del “nuevo proceso de la reconstrucción nacional” (CD INTA, Acta 603, 1973) y marcaba la necesidad de remover al entonces director del CNIA y a integrantes de la dirección nacional previa que continuaban en funciones. Héctor Salamanco, médico veterinario perteneciente a la estación experimental Balcarce del instituto y miembro de la OUGT, fue nombrado asesor técnico de la vicepresidencia. En abril, el ingeniero químico Néstor Omar Bárbaro (hermano de Julio Bárbaro<sup>53</sup>, dirigente de Guardia de Hierro) fue designado “asesor técnico científico” de la presidencia como parte de la reubicación de cuadros técnicos pertenecientes al Trasvasamiento (CD INTA, 1973, Acta 604).

Para diciembre, dos de los directores nacionales asistentes (los ingenieros Augusto L. Durlach y Ángel Marzocca) solicitaban ser relevados de sus funciones, en abierto disenso con la conducción nacional. A tres meses de asumir, Bordas presentó la renuncia a la presidencia del INTA<sup>54</sup>. En enero de 1974 Figueiras ocupó el cargo. Al mismo tiempo, según Giberti, “internamente en el INTA hubo un problema muy grande, porque los miembros de la comisión directiva que quedaban (representantes de las entidades) no dejaban de ser gorilas verdaderos” (Giberti, citado en Ramírez, 2011: 378). Mientras que algunos cargos clave (la presidencia, la vicepresidencia, la dirección nacional de Extensión, entre otros) fueron renovados en sintonía con el retorno del peronismo al gobierno, otros decisivos en la conducción del organismo permanecieron sin modificaciones. El Consejo Directivo continuó teniendo la representación de los intereses de las principales entidades agropecuarias, en abierta disidencia con los nuevos nombramientos y en un contexto de radicalización de los enfrentamientos sostenidos por estos sectores a las políticas agropecuarias impulsadas. Al mismo tiempo, los conflictos al interior del gobierno y del peronismo en sentido amplio, que estaba ya en pleno proceso de depuración, también tendrían un correlato en el interior del INTA. En

---

<sup>53</sup> Proveniente del Humanismo católico, Bárbaro se integró a Guardia de Hierro. En 1973 fue electo diputado nacional.

<sup>54</sup> Según uno de los conductores del Trasvasamiento, un agudo cuadro de stress lo obligó a renunciar, mientras que un ex asistente de la presidencia, asegura que la renuncia se vinculó a que “le dieron un susto”. Giberti, por su parte, señala que Bordas “estuvo dando vueltas todos esos días” (Giberti, citado en Ramírez, 2011: 379).

simultáneo, desde las bases continuaban los conflictos liderados por los principales gremios del instituto (ATE y APINTA).

Como expresión de las tensiones que suscitaba la reorganización del cuerpo directivo del INTA, una de las reuniones del Consejo Directivo planteó una situación que era, más bien, una suerte de demarcación de la nueva geografía institucional. El 14 de mayo de 1974 se emitió un comunicado en relación a una acusación de malversación de fondos al interior del organismo. Lejos de suscribirse a este plano, el hecho casi anecdótico funcionaba como amplificador de consignas y evidenciaba qué lugares se ocupaban en la coyuntura política del momento. El nudo de la cuestión lo ocupaba una revisión que la presidencia del INTA había encargado sobre un proyecto de creación de dos laboratorios, el de Enfermedades Virósas de los Animales y el laboratorio de Tecnología de Carnes, ubicados en el Centro Nacional de Investigaciones Agropecuarias de Castelar. El proyecto de creación de ambos se remitía a un encuentro en 1962 entre el entonces presidente Arturo Frondizi y el de Estados Unidos, John F. Kennedy. Allí se estableció la necesidad de eliminar la fiebre aftosa y propender al mejoramiento de la producción de carnes argentinas para su posterior exportación. El INTA sería, en la década siguiente, el productor de la vacuna oleosa contra la enfermedad. Mediante un plan financiado por la Agencia para el Desarrollo Internacional (AID) por intermedio de la Alianza para el Progreso, los Estados Unidos otorgaron un préstamo de 1.400.000 dólares, que fue aprobado por el decreto N° 910 del Poder Ejecutivo el 14 de febrero de 1967 (INTA, Res. 919/73). La revisión de las cláusulas contractuales del convenio, fue hecha a pedido de la nueva dirección nacional, por una comisión creada *ad hoc*. Como resultado, ésta afirmó que las cláusulas estipuladas demostraban “a las claras su carácter lesivo para la economía general del país y limitante para la toma de decisiones autónomas por parte de organismos oficiales” (INTA, Res. 919/73, Informe Preliminar). Mediante un seguimiento de las cuotas de pago, el contenido de las cláusulas y las licitaciones, fue reconstruido el convenio destacando una serie importante de irregularidades en su cumplimiento y cuestionando buena parte del contenido de sus fundamentos. A través de una revisión de las obras realizadas, costos y evaluaciones sostenidas por las comisiones responsables, el informe concluía “cuestionando la idoneidad de los estudios contratados, el de la comisión ejecutiva que lo fiscalizara y, finalmente, la responsabilidad del Consejo



Directivo del INTA como garante final” (INTA, Res. 919/73, Informe Preliminar). No se restringía a denunciar un comportamiento ímprobo de antiguos directivos del instituto, sino que remarcaba sus lazos con la posición subordinada que el país ocupaba en relación a las principales potencias, y en especial con la posición dependiente en materia agropecuaria en relación a los Estados Unidos. En sintonía con el discurso de época centrado en la consigna “liberación o dependencia”, remarcaba que el convenio había dejado como “saldo final, la dependencia y subordinación a las reglas de juego impuestas por los Estados Unidos, dependencia ésta que alcanza a comprometer la economía general del país y en particular del INTA”<sup>55</sup>. Este informe era acompañado por una nota en disidencia, presentada por el consejero representante de la SRA, en donde hacía constar que estimaba al contrato como “condicionante pero no lesivo a los intereses del país” (CD INTA, Acta 621, 1974). Mediante esta denuncia, se procedía también a cuestionar el rol de las antiguas direcciones del instituto y buena parte de sus cuadros institucionales, en un momento caracterizado por ser, precisamente, de recambio político e institucional. El conflicto puntual expresaba las tensiones entre nuevos funcionarios (designados a partir de 1973) y viejos dirigentes del organismo (en funciones en tiempos de proscripción peronismo). Estas internas evolucionaban bajo el acelerado ritmo político del momento. Una de las figuras cuestionadas en el informe, el ingeniero agrónomo Humberto Cavándoli, pronto iba a ser designado por el gobierno de María Estela Martínez de Perón como interventor del organismo, marcando el desplazamiento de la gestión iniciada en 1973. El episodio concentraba tanto la fricción entre las viejas y nuevas capas dirigentes del organismo, como la construcción de una retórica que acompañaba a esta (nueva) gestión. En este sentido, el tono presente en las consideraciones del informe se repetía en distintas manifestaciones del Consejo Directivo. Así, un acuerdo de cooperación entre INTA y la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) declaraba, sin precisar las tecnologías generadas, que se daría “prioridad a las tecnologías que tiendan a satisfacer las necesidades primordiales del pueblo” y listaba como prioridad “subordinar el desarrollo científico y tecnológico al logro de la felicidad de nuestro pueblo” (CD INTA, Acta 608, 2/10/1973). El “proyecto

---

<sup>55</sup> Continuaba, “La serie de irregularidades evidenciadas dentro de la Institución posibilita todo un manejo arbitrario que desemboca en la transgresión de la Ley de Obras Públicas en materia de adicionales, cuantiosos honorarios pagados a asesores y consultores y la reversión actual de los fondos del préstamo otorgado” (CD INTA, Resolución 919/73, Informe Preliminar).

nacional” impulsado por el gobierno implicaba para ambos organismos, según se enunciaba, “eliminar la *dependencia tecnológica* a través de una tecnología nacional independiente” (CD INTA, Acta 608, 02/10/1973, énfasis propio). Detrás de este discurso, anclado en un clima de época general y en las orientaciones planteadas para el sector científico en particular, se encontraban limitaciones estructurales a las transformaciones proclamadas, asociadas a la propia organización del INTA, por un lado, y al entramado económico y socio-político nacional, por otro.

Otra serie de posiciones reconocían en las nuevas autoridades el reflejo del ala conservadora del peronismo y, al mismo tiempo, intentaban aprovechar su gestión para introducir cuestionamientos en las orientaciones tradicionales del organismo. Un joven sociólogo ingresó al INTA en 1973 como asesor de la presidencia. Tuvo la tarea de organizar reuniones regionales, recorriendo el conjunto de las estaciones experimentales y agencias, con el objetivo de generar insumos de trabajo para la definición de una nueva política de extensión agropecuaria. Su llegada al INTA se había fundado en un contacto, mediante su propia militancia en las FAP<sup>56</sup>, en función de experiencias ligadas a la resistencia peronista, y a partir de su paso por la Universidad Católica Argentina (UCA), con miembros de Guardia de Hierro que por entonces tenían nexos aceitados con la dirección del instituto. “Julio Bárbaro me dio la tarjeta del presidente del INTA, Bordas, y así llegué. *Necesitaban cuadros técnicos*” (entrevista, 05-02-2013, énfasis propio), recuerda<sup>57</sup>. En un inicio, esta dirección del INTA tuvo un alto grado de permeabilidad, que para muchos fue interpretado como la posibilidad -según el mismo ex integrante de INTA- de “aprovechar *los intersticios*” (entrevista, 05-02-2013, énfasis propio) para generar nuevas orientaciones.

---

<sup>56</sup> Las Fuerzas Armadas Peronistas (FAP) integraban, junto a las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), Descamisados y Montoneros, las organizaciones armadas políticas peronistas que culminaron un proceso de unificación bajo el nombre de Montoneros en 1974. A diferencia del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), de orientación trotskista y creado como el brazo armado del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), las organizaciones peronistas participaron activamente del proceso electoral de 1973. Luego de la marginación de la Tendencia, transformada en ruptura pública con Perón en el acto del 1 de mayo, y de su muerte el 1 de julio, el 3 de septiembre de 1974 Montoneros pasó a la clandestinidad. Existe una amplia bibliografía centrada en las organizaciones guerrilleras de 1970, véase Calveiro (2013), (Carnovale, 2011), Pozzi (2004), entre otros.

<sup>57</sup> Sociólogo, incorporado a la Dirección Nacional asistente de Extensión y Fomento del INTA en 1973, hasta su cesantía en 1974. A fines de ese mismo año, ya separado del organismo y acusado de participar en un operativo que el ERP realizó en Catamarca (por lo que su residencia dentro de la estación experimental del INTA en esa provincia fuera atacada en un operativo policial), partió al exilio en diciembre.

Al mismo tiempo, los cambios en el instituto también se articulaban con la situación convulsionada del agro, en donde movimientos de base campesina como las Ligas Agrarias radicalizaban sus reclamos<sup>58</sup>. Precisamente, un pedido inédito en la historia de la estructura directiva del INTA, caracterizada por la presencia de representantes de las entidades agropecuarias más tradicionales y conservadoras, lo formularon las Ligas Agrarias Entrerrianas el 19 de marzo de 1974. Ya en 1971 las Ligas Formoseñas habían apelado al rol del INTA, al que solicitaban realizara estudios zonales para determinar las unidades económicas, a los fines de organizar la ocupación de tierras en la provincia (Galafassi, 2005). Esta vez, solicitaban una autorización para pasar a integrar el consejo local asesor del INTA en Paraná, pedido que era apoyado por la dirección de la estación experimental de Paraná del Instituto (CD INTA, Acta 616, 1974). La ubicación geográfica no era casual.

Situado fuera de la arena de debate del Consejo Directivo, en la estación experimental de Paraná, y alentado en buena medida por su director -el genetista Urbano Rosbaco-, se reunía un grupo conformado por técnicos e investigadores del instituto de distintos puntos del país y por profesionales externos al INTA ligados a la actividad agropecuaria. Además de haber participado en la formación de uno de los gremios del INTA, APINTA, habían organizado un grupo de discusión de política agropecuaria. El “grupo de Paraná” mantuvo encuentros en distintos puntos del país, a partir de los que elaboraron algunos documentos sin llegar a tener un formato más orgánico que el de un agrupamiento de profesionales de la actividad agropecuaria, mayoritariamente del INTA. Cuál tenía que ser el rol del organismo, y qué problemas estructurales del agro, históricos e irresueltos, requerían que se trabajase en su resolución eran parte central del debate. La llegada del peronismo al gobierno profundizó las tensiones en su interior entre quienes, identificados con distintas organizaciones de izquierda, veían al nuevo gobierno como un falso progresismo burgués y quienes abrazaron la causa peronista, ocupando en algunos casos cargos en los equipos de gobierno del área de agricultura<sup>59</sup>. El grupo, que fue objeto de un pormenorizado espionaje por parte de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la

---

<sup>58</sup> Se retoma esta temática en el capítulo III dedicado al estudio de las estrategias de extensión rural del INTA. Sobre las características del movimiento liguista véase el trabajo pionero de Ferrara (1973) y revisiones posteriores de Roze (2011) y Galafasi (2005).

<sup>59</sup> Se retoma la trayectoria de este grupo en el segundo capítulo.

provincia de Buenos Aires, se disolvió con el retorno del peronismo pero sus integrantes permanecieron en el instituto, algunos hasta 1976<sup>60</sup>.

Por otro lado, fuera del INTA también se registraba la presencia de nuevos nombramientos vinculados al radio de acción del Trasvasamiento en otros organismos relevantes del sector. Tanto en la intervención de la Junta Nacional de Carnes como en la de SENASA, las direcciones contaban con hombres de la OUGT<sup>61</sup>. Lo mismo ocurría con asesores de presidencia vinculados al sector. Gastón Valente, ex agregado agrícola en la embajada de Argentina en EE.UU, tenía un papel preponderante como miembro del equipo de Gelbard y era el principal interlocutor con la organización. Si bien no faltaban diferencias entre sí, las conducciones de la SAYG, la Junta Nacional de Carnes y las conducciones del INTA y SENASA trabajaban en forma coordinada<sup>62</sup>. Para el INTA, la articulación con la Secretaría era vital, y también para ésta era fundamental contar con un respaldo técnico representado por el instituto que viabilizara las medidas elaboradas. Siendo Figueiras presidente de INTA, se intentó organizar un plan destinado a fomentar la producción nacional de semillas y la organización de semilleros locales mediante el accionar de los sistemas estatales (fundamentalmente el INTA) y cooperativos. Este planteo le fue formulado al secretario Giberti y alcanzó una primera materialización con la contratación de un equipo de técnicos dentro del INTA, que en el lapso de 12 meses deberían avanzar en el contenido del proyecto<sup>63</sup>. Al igual que las principales medidas enunciadas desde la Secretaría de Agricultura, el plan no llegaría a concretarse.

A medida que se producía la reorganización de los cuadros institucionales del INTA, la situación política nacional generaba posicionamientos de las autoridades del instituto y afectaba directamente su interior. Transcurrieron los 45 días de gobierno de

---

<sup>60</sup> Buena parte de sus integrantes fueron dejados cesantes, entre ellos Urbano Rosbaco, director de la estación experimental de Paraná sede de las reuniones. La detención de algunos de sus miembros derivó en interrogatorios centrados en la actividad del grupo y en el secuestro y desaparición del ingeniero agrónomo Gastón Robles, participante externo al INTA de las actividades.

<sup>61</sup> Si bien las Juntas eran organismos autárquicos cuya designación no dependía de la SAYG, por su relevancia en la designación intervenía el ministro de Economía, que a su vez incorporó en la decisión a la Secretaría. Véase Ramírez (2011).

<sup>62</sup> En el SENASA, la dirección la ocupó Oscar "Lalo" Osvaldo Fernández, también del Trasvasamiento, entre el 17/06/1973 y 4/12/1973. Sus asesores eran los veterinarios Edgardo Caracotche y Hugo González. Como asesores de presidencia, se encontraban Adolfo Dallorso, Carlos María Dall (de la OUGT Sante FE) en el asesoramiento legal y el sociólogo Roberto Caimi en el equipo de comunicación, completando la participación de cuadros del Trasvasamiento como asesores técnicos (Anchou, inédito).

<sup>63</sup> Los ingenieros agrónomos José María Castro, Juan Carlos Zembo, Atilio Demarco y Juan José Garay, y el licenciado Miguel Ángel Godoy (CD INTA, Acta 613, 23-01-1974).

Héctor Cámpora, su renuncia y la nueva asunción de Perón, previa presidencia provisional del presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Lastiri, yerno de José López Rega y representante de los grupos más reaccionarios del peronismo (Calveiro, 2013). El alejamiento de Cámpora trajo consigo el enfrentamiento entre los gobiernos provinciales más cercanos a la Tendencia y el gobierno nacional (Bonavena, 2009), en el marco de la radicalización del conflicto social y la agudización de tensiones al interior del peronismo. Perón se respaldó en líderes sindicales como Lorenzo Miguel, encargados de librar la lucha contra los “infiltrados”, con el objetivo que los “verdaderos” peronistas retomaran el control del movimiento (Bonavena, 2009). En este contexto, se produjo el desplazamiento de los funcionarios vinculados a la Tendencia. Las intervenciones federales, instrumento constitucional de utilización excepcional, se extendieron en forma reiterada desde noviembre de 1973, como mecanismo de depuración dentro del peronismo y como vía – tal fue el caso cordobés- para disciplinar al sector más radical de la clase trabajadora (Servetto, 2010). El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Oscar Bidegain, fue uno de los primeros gobernadores desplazados en el marco de este conflicto<sup>64</sup>. Para la situación interna del INTA, la coyuntura nacional impactaría sobre todo a través del desmantelamiento del equipo liderado por Horacio Giberti en la Secretaría de Agricultura y Ganadería, que acompañó la salida del equipo económico con la renuncia del ministro Gelbard en octubre de 1974. En el transcurso, en julio la OUGT se disolvió y dejó de funcionar como organización. Paradójicamente, luego del desplazamiento de la Tendencia y de la ruptura pública entre Perón y la Juventud Peronista, la OUGT -que se reconocía como parte del “auténtico” peronismo- no alcanzó mayor participación, sino que profundizó su aislamiento. En el INTA, la conducción corrió la misma suerte que el equipo de la Secretaría.

El 1 de julio, ante la muerte de Perón, el presidente de INTA había convocado una reunión extraordinaria del Consejo Directivo, señalando en la convocatoria:

El Gral. Perón ha muerto, pero su causa es heredada por millones de argentinos que transitarán ineludiblemente el camino de la Revolución. La fe de la Nación no es más que el origen del Poder, y

---

<sup>64</sup> A poco de producido el ataque del ERP al cuartel del Ejército en Azul el 20 de enero de 1974, los legisladores provinciales amenazaron a Bidegain con un eventual juicio político, éste renunció y fue reemplazado por el vicegobernador Victorio Calabró, en febrero de 1974.

ese poder está en manos de la Digna Sucesora, que es la Señora Vicepresidenta a cargo del poder ejecutivo, señora María Estela Martínez de Perón. (...) El Gral. Perón ha muerto, pero la causa inmortal de los desheredados, que fue su lucha, ella sí; sin ninguna duda, es inmortal. Buenos Aires 1 de julio de 1974” (CD INTA, 624, 1974).

Figueiras solicitaba al Consejo la redacción de un documento, pidiendo quedar al margen de su redacción, dado que “su dolor como militante peronista lo inhibía de pensar en términos institucionales, con la claridad necesaria” (CD INTA, Acta 624, 1974). El documento, aprobado por unanimidad, anunciaba:

El Excelentísimo Señor Presidente de la República Argentina, Teniente General Don Juan Domingo Perón, ha muerto. Ante esta trágica circunstancia, el CD del INTA reunido en sesión extraordinaria manifiesta su hondo pesar y su profunda congoja ante la desaparición física del Líder del movimiento político más importante del país y de Latinoamérica. En estos momentos el CD del INTA siente la necesidad de recordar las palabras que dijera el Gral. Perón el 21 de junio de 1973, cuando convocara a todo el pueblo argentino: ‘Necesitamos una paz constructiva sin la cual podemos sucumbir como Nación’ (CD INTA, Acta 624, 1974).

Convocaba a todo el personal a “adherir a las manifestaciones de pesar que serán la expresión de la inmensa mayoría del Pueblo Argentino”, al tiempo que ratificaba la voluntad de “seguir hasta las últimas consecuencias sus lineamientos políticos y doctrinarios que han sido y serán el sostén iluminador de nuestros actos” (CD INTA, Acta 624, 1974) y explicitaba su apoyo al gobierno de María Estela Martínez de Perón. La muerte de Perón mostraría un escenario nacional dominado por una escalada creciente de violencia política. Meses más tarde, en noviembre, un comunicado del Consejo Directivo, elaborado “ante los hechos de violencia desencadenados últimamente en el país”, refería simultáneamente a dos hechos, frente a los que manifestaba su “enérgico repudio” (CD INTA, Acta 634, 1974). El primero, aludía al

asesinato del jefe de la policía federal, Alberto Villar, y su esposa<sup>65</sup>. El segundo, remitía al asesinato de un extensionista del instituto, el ingeniero agrónomo Carlos Llerena Rosas, secuestrado el 30 de octubre de uno de los locales gremiales de APINTA por la Alianza Anticomunista Argentina (AAA), la organización parapolicial dirigida por el mismo Villar y por José López Rega, ministro de Bienestar Social<sup>66</sup>. La declaración del instituto englobaba ambos casos, afirmando que:

Ante los hechos de violencia que casi a diario cobran víctimas en hombres de las Fuerzas Armadas y de Seguridad -ahora en la persona del Sr. jefe de la Policía Federal y su esposa-, dirigentes políticos, gremiales y universitarios, empresarios y civiles de cualquier orientación ideológica, y que han llegado también a cegar la vida de un técnico de la casa, Carlos Llerena Rosas... (CD INTA, Acta 634, 1974).

Resolvía manifestar su repudio “ante estos actos que conmueven a la totalidad del Pueblo Argentino” y contra “los hechos de violencia, cualquiera sea su signo político” (CD INTA, Acta 634, 1974). La violencia era interpretada como un intento de “destruir el proceso institucional iniciado por el teniente Gral. Juan Domingo Perón y conducido por la Presidenta de la República, Excma. Sra. María Estela Martínez de Perón”, a quien manifestaba su apoyo (CD INTA, Acta 634, 5-11-1974). Estos sucesos, afirmaba, eran “ajenos a la voluntad del Pueblo Argentino”, que “busca su grandeza en el trabajo, en paz y con justicia social” (CD INTA, Acta 634, 5-11-1974). La dirección del INTA reforzaba así su ubicación en la disputa política en curso en el interior del movimiento peronista (en pleno proceso de depuración interna) y en la coyuntura política del momento<sup>67</sup>.

A nivel nacional, en consonancia con la falta de gravitación que el ala izquierda del peronismo había perdido progresivamente, la cautela que las entidades

---

<sup>65</sup> Fue atribuido a Montoneros. Integrante de la AAA, Villar había protagonizado antes el secuestro y entierro clandestino de dos de los fallecidos en la masacre de Trelew (1972). Fue puesto al frente de la policía federal por el propio Perón (Franco, 2009).

<sup>66</sup> La Alianza Anticomunista Argentina, comenzó a hacer públicas sus acciones en noviembre de 1973, si bien éstas ya habían comenzado, fundamentalmente con la persecución sistemática a dirigentes y militantes de la JP (Franco, 2012). Se integró con oficiales de las Fuerzas Armadas y de la policía, y con “militantes de la derecha peronista” (Calveiro, 2013: 46).

<sup>67</sup> El asesinato del extensionista Llerena Rosas se retoma en capítulo subsiguiente.

agropecuarias mostraron en los comienzos del gobierno de Campora ya no era la misma. En palabras de Giberti, “(...) incluso Celedonio Pereda, presidente de la SRA, hablaba conmigo en forma muy distinta en mayo de 1973 que en mayo de 1974” (Giberti, citado en Ramrez, 2011: 364). En octubre, en plena discusion entorno al proyecto de Ley Agraria<sup>68</sup>, una amenaza atribuida a la AAA en donde se exiga la renuncia del gabinete de Agricultura bajo ultimatum de muerte, motivo la renuncia del subsecretario Lacau. Das despues, el 21 de octubre, Gelbard presentaba la renuncia y con la suya la del secretario de Estado de Agricultura y Ganadera, junto a todo su equipo.

El 19 de noviembre de 1974, en el INTA se anunciaba una nueva designacion de autoridades, a raz de los cambios operados en la composicion del equipo econmico del poder ejecutivo nacional (CD INTA, Acta 635, 1974). Un mes ms tarde, el conjunto de la direccion del INTA presentaba su renuncia.

El mecanismo era repetido: presentar la renuncia era una condicion necesaria tanto para ser ratificado en el cargo, como para ser reubicado en un puesto menor. Esta suerte corrieron los principales cuadros cercanos al Trasvasamiento y sus colaboradores. Desde julio la agrupacion se encontraba disuelta. Si el grado de articulacion entre la direccion de INTA con el Trasvasamiento haba resultado hasta entonces difuso, la disolucion incremento el aislamiento de la direccion. Ya no contaban con un apoyo externo, mientras que en el interior del INTA la situacion no era menos desfavorable. Fueron aceptadas las renunciaciones del director nacional interino (Hector M. Salamanco), los directores nacionales asistentes de Extension y Fomento Agropecuario (Jacinto Vellani) y de Programacion y Evaluacion (Horacio Hugo Stagno). Tambien del presidente y vicepresidente del INTA, del director del Centro Nacional de Investigaciones Agropecuarias y de los directores de dos de sus principales institutos de investigacion, el Centro de Investigaciones de Recursos Naturales (Nstor Ren Ledesma) y el Centro de Investigaciones en Ciencias Veterinarias (Jorge Hector Lombardo) (CD INTA, Resolucion 822, 16-12-1974). Mientras que se declinaron las renunciaciones de otros puestos de la direccion nacional, prolifero el recambio de cuadros institucionales en las lneas medias y en los cargos de asistencia designados por la

---

<sup>68</sup> El contenido y repercusiones en torno a esta medida, una de las principales de la cartera de agricultura, se explora en los proximos apartados.



dirección previa<sup>69</sup>. La presidencia y la dirección nacional del INTA fue ocupada transitoriamente por un ingeniero agrónomo del organismo, Jorge Del Águila, que luego iba a tener un rol destacado en la dirección del organismo durante la dictadura. Para diciembre, las principales autoridades del INTA habían cambiado.

Un miembro de la unidad de gobierno del Trasvasamiento identifica tres problemas que tuvo la conducción central del INTA, que la ubicaron en un permanente foco de conflictos internos. Por un lado, “el hervidero inconducible que era el CNIA de Castelar”, donde las movilizaciones gremiales y la participación de organizaciones de izquierda y de la izquierda peronista tenían un lugar fuertemente destacado. En segundo lugar, la férrea oposición de la SRA ante la contratación de un grupo de técnicos “porque los del Trasvasamiento, les habían hecho un favor dándole trabajo a unos militantes uruguayos”. Finalmente, “fundamentalmente por el impuesto a la renta potencial de la tierra” (entrevista, 06-03-2013)<sup>70</sup>, una de las medidas impulsadas por el equipo de agricultura liderado por Giberti. La contratación de un grupo de técnicos pertenecientes al Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias uruguayo que escapaban de la dictadura, había motivado virulentas reacciones en la prensa local. El diario *La Nación* aludía a esta situación, en un balance sumamente crítico de esta dirección nacional, señalando que:

La contratación de técnicos uruguayos, algunos de ellos salidos de su país luego de la derrota de la subversión y por sectores políticos de izquierda, se sumó al calvario de dificultades, de las que fueron víctimas los productores argentinos que no recibieron los servicios que se les debía prestar (*La Nación*, 13/10/1975).

Mientras que esta era una situación puntual insertada en la coyuntura nacional, la situación del CNIA de Castelar tuvo un peso mayor. El 3 de enero de 1974 *Militancia*, una de las publicaciones de Montoneros, dedicaba una nota a la situación del Centro del INTA. En ella recordaba una toma del establecimiento que los trabajadores del CNIA habían protagonizado durante la presidencia de Cámpora, en junio de 1973. Entre el 13

---

<sup>69</sup> Edmundo Billard continuaría como director nacional asistente en Investigación, José María Brun como director nacional asistente de Investigaciones Especiales y Carlos Schilder como director general de Administración del Instituto.

<sup>70</sup> Entrevista realizada por Ángeles Anchou.

y el 19 de junio habían pedido la renuncia de algunos de los directivos del CNIA. Meses después, afirmaba la publicación, “el pulpo instalado en el Ministerio de los Milagros pretende hacerlos volver, es a esa tarea, a la maduración de la organización que no lo permita, a que están abocadas las bases de INTA Castelar” (*Militancia*, 1974: 16). Al mismo tiempo remarcaba que “las actuales autoridades del INTA Castelar apoyan este proceso, que tiende a fortalecer la construcción desde el seno de la clase trabajadora” (*Militancia*, 1974: 17). El “pulpo” refería a José López Rega, ministro de Bienestar Social, a quien ubicaban junto a la plana gubernamental en el proyecto de “esa extraña mezcla de leyes de prescindibilidad y de arbolitos de obelisco” (*Militancia*, 1974: 16)<sup>71</sup>. En cuanto a las leyes de prescindibilidad, en el INTA estas disposiciones se instrumentaron en 1974 y tuvieron entre sus destinatarios activistas gremiales enfrentados a la conducción del organismo<sup>72</sup>.

En relación al trabajo sindical desempañado en el CNIA, la publicación la vinculaba a la presencia de la agrupación Felipe Vallese de la Juventud Trabajadora Peronista (JTP) -rama gremial de Montoneros- y al ateneo “Evita Combatiente”, una escuela de alfabetización para adultos creada por trabajadores del Centro, destinada a los obreros y personal de apoyo del CNIA y a residentes de las inmediaciones del predio. El grueso del trabajo gremial del Centro estaba impulsado por ATE, en disidencia al gremio de los profesionales (APINTA). La presencia de la JTP era un hecho, al menos a través de algunos integrantes del gremio, aunque esta situación no implicaba una presencia orgánica ni extendida de Montoneros en el INTA<sup>73</sup>. En este sentido, como en otros ámbitos laborales, distintas organizaciones tenían alguna presencia a partir de militantes que pertenecían al instituto sin que esto implicara (o, al menos, lograra) una estrategia de inserción de las mismas. La singularidad del CNIA de Castelar sí estaba dada por un alto grado de participación de su personal en asambleas gremiales y por protagonizar medidas de fuerza con alto acatamiento. Si bien los conflictos no habían estado dirigidos contra la conducción nacional del INTA, sino más

---

<sup>71</sup> Reforzando su posición en torno a la coyuntura nacional, en pos de una “Argentina Montonera y Socialista”, agregaban -citando a Cooke- “no nos satisface una de las variantes del sistema, porque estamos luchando contra el sistema mismo” (*Militancia*, 1974: 17).

<sup>72</sup> Se abordan la introducción de cesantías en el capítulo II.

<sup>73</sup> Esto no implica la ausencia de miembros de distintas organizaciones políticas, sino la falta de una presencia orgánica de las mismas al interior del INTA. En este sentido, pertenecientes al CNIA, dos militantes del OCPO (Organización Comunista Poder Obrero), Gustavo Giombini y José Costa, fueron detenidos y desaparecidos con la llegada de la dictadura, y un militante montonero, Miguel “Chufó” Villarreal, ingresado sin vida a la ESMA en 1978.

bien contra directivos que luego participarían de la posterior intervención del instituto en 1975, Castelar era un frente de conflicto para la conducción del organismo, por el elevado grado de movilización y participación de su personal.

El grupo ligado a Trasvasamiento que ocupó la dirección del INTA con la llegada de Cámpora al gobierno enfrentó, entonces, distintos conflictos simultáneamente. Por un lado, para el sector más conservador del INTA y fuertemente antiperonista, representaban una amenaza y una disrupción al orden institucional. En segundo lugar, sobre todo desde algunas de las principales dependencias del INTA (las estaciones experimentales de Pergamino, Castelar, Famaillá y Paraná), los cuestionamientos provenían de posiciones ligadas a distintas expresiones de la izquierda partidaria, la izquierda peronista, la actividad gremial y, en gran medida, de cuadros técnicos que en un contexto de movilización social cuestionaban la posibilidad de que el instituto acompañara y fomentara transformaciones en el sector agropecuario. Simultáneamente, para las fuerzas militares se ligaban a un entorno potencialmente “peligroso” y a que podían funcionar como conducto a posicionamientos radicales<sup>74</sup>. Finalmente, la participación del INTA en la elaboración y (frustrada) puesta en práctica de las medidas impulsadas desde la Secretaría de Agricultura, que estaban siendo resistidas por los sectores más conservadores del medio rural, lo englobaba dentro de la ofensiva protagonizada por estas entidades. Los distintos factores confluyeron en el desplazamiento de la dirección nacional. Primero, bajo una nueva designación de autoridades en diciembre de 1974. Finalmente, mediante una intervención dispuesta por el Poder Ejecutivo en mayo de 1975, el INTA comenzó a ser “reorganizado”.

---

<sup>74</sup> Véase los argumentos citados del legajo de la Armada del interventor militar en el siguiente capítulo.

**1.3. Cuadro 2. Profesionales de INTA con cargos directivos vinculados a OUGT (1973-1974)**

| Cargo en INTA  | Miembro de OUGT   | Adherente al Instituto Ramón Carrillo |
|--|-------------------|---------------------------------------|
| Presidente   |                   | Marcelo Bordas                        |
| Vicepresidente/<br>presidente                              | Horacio Figueiras |                                       |
| Asesor de<br>Presidencia/<br>Director Nacional<br>Interino | Héctor Salamanco  |                                       |
| Asesor de Presidencia                                      | Néstor Bárbaro    |                                       |
| Delegado de la<br>Dirección Nacional (Cuyo)                |                   | Miguel Ciliberto                      |

Fuente: elaboración propia en base a entrevistas y comunicaciones personales con miembros activos y retirados del INTA y a actas de sesiones del Consejo Directivo del INTA (1973/1974).

**1.4. Cuadro 3. Presidentes del INTA entre 1973 y 1976**

| PRESIDENTES  | Formación de grado | PERÍODO                  |
|--|--------------------|--------------------------|
| Marcelo A. BORDAS  | Ingeniero agrónomo | 12/07/1973 – 23/11/1973  |
| Horacio D.<br>FIGUEIRAS                                  | Veterinario        | 06/12/1973 – 03/12/1974  |
| Jorge A. DEL<br>AGUILA                                   | Ingeniero agrónomo | 04/12/1974 al 07/05/1975 |
| Humberto<br>CAVANDOLI (interventor<br>designado por PEN) | Ingeniero agrónomo | 08/05/1975 al 11/12/1975 |
| Adalualdo U.<br>GARCIA                                   | Ingeniero agrónomo | 12/12/1975 al 04/02/1976 |

Fuente: elaboración propia en base a actas de sesiones del Consejo Directivo del INTA.

Entre las medidas agrarias planteadas desde la Secretaría entre 1973 y 1974, dos iniciativas se destacaron por la repercusión que generaron, el contenido implicado y la articulación que implicaban con el INTA para su implementación: el proyecto de Ley Agraria y el Impuesto a la Renta Normal Potencial de la Tierra. En los siguientes apartados revisaremos el contenido de estas medidas, el rol asignado al INTA en ellas, y la recepción de las mismas en vinculación a los argumentos utilizados para las intervenciones.

### **1.5. El rol del INTA en la política agropecuaria (1973/74): Ley Agraria e Impuesto a la Renta Normal Potencial de la Tierra**

En un breve lapso temporal, la elaboración de un paquete de medidas agropecuarias y los conflictos que acompañaron su implementación condensaron problemáticas sectoriales y evidenciaron las pujas históricas que estaban presentes en la definición del rumbo político del país. Como ha señalado Mario Lattuada (1986), las políticas agropecuarias tuvieron en este período dos fases bien diferenciadas: la de la acción, entre 1973 y fines de 1974, y la de la inactividad, hasta el golpe de 1976. En este apartado nos concentraremos en la primera etapa, en la que el equipo liderado por Giberti entre julio de 1973 y octubre de 1974 impulsó una serie de medidas, y en la articulación que existió entre el INTA y la Secretaría para su formulación y aplicación.

El paquete agropecuario formulado en 1973 contemplaba disposiciones referidas, fundamentalmente, al manejo y posesión de la tierra, a la comercialización de productos agropecuarios y a la recaudación impositiva asociada a la actividad. Entre las leyes agrarias se encontraba la Ley 20.518, que suspendió los juicios de desalojo contra arrendatarios y aparceros, y el fomento de beneficios crediticios e impositivos a la misma franja de productores mediante la Ley 20.543 de “Fomento Agrario”, que buscaba evitar el despoblamiento del campo. Regulando la comercialización de la producción agropecuaria se dictaron otras dos medidas: la Ley 20.535, que facultaba al Estado para intervenir competitivamente en la comercialización de carnes, y la 20.573 que le otorgaba la responsabilidad en la comercialización de granos y algunos

derivados<sup>75</sup>. El diario *La Opinión* destacaba que la implementación de las leyes de comercialización de granos y carnes ampliaría las atribuciones de las respectivas Juntas reguladoras. El matutino anunciaba que con estas medidas se propiciaba reservar la comercialización de trigo y maíz al accionar de la Junta Nacional de Granos y “rescatar de los monopolios importadores y de las empresas multinacionales la política de comercialización externa de carnes para manejarla de acuerdo a los intereses nacionales” (*La Opinión*, 20-06-1973). Dos iniciativas se destacaron en este conjunto, tanto por su contenido como por las virulentas reacciones que suscitaron en las entidades agropecuarias, el Impuesto a la Renta Normal Potencial de la Tierra (IRNP) y el proyecto de Ley Agraria.

Junto a la necesidad de modificar el estancamiento de los saldos exportables, que habían crecido lentamente en los años sesenta, la situación internacional estimulaba la centralidad del sector en la cartera gubernamental. Para mediados de 1973 el Mercado Común Europeo se posicionaba como un mercado seguro para la ubicación de los productos locales (Rougier y Fizsbein, 2006), otorgando una coyuntura favorable a la actividad. Al mismo tiempo, el sector agrario no estaba en las mismas condiciones que había estado en los años de la década de 1940 de realizar transferencias de su excedente, lo que impulsó la generación de políticas sectoriales que fomentaran la producción y la productividad agropecuarias (Lázzaro, 2013). Ya desde la plataforma electoral peronista, de manera difusa y sin definiciones específicas, se distinguía a la tierra como un “bien de producción” y no de especulación. Así como se sostenía que la tierra debía ser de quien la trabajara, estaba claro que el incremento de la producción era un eslabón imprescindible del proyecto reformista. Un criterio de corte eficientista, destinado a incrementar la productividad del sector, se combinaba con la búsqueda de una mayor redistribución del ingreso. El “Mensaje al campo”, que acompañaba la propuesta, proponía la transformación de zonas de riego y secano en “polos de desarrollo” que traccionarían la actividad comercial en sus zonas de influencia, asistidos por Consejos

---

<sup>75</sup> Como señalan Rougier y Fizsbein (2006), la ley disponía que la comercialización se hiciera a través de la Junta de Granos, cooperativas de productores o empresas de capital nacional. Este último punto desató el debate entre la cámara de diputados y la de senadores (ambas con mayoría peronista). Los diputados rechazaban la participación de empresas privadas, argumentando que sería muy difícil detectar el carácter “nacional” de las firmas. Se impuso la posición del senado, que abogó por incluirlas. Hasta 1976, para los granos se estableció un control de precios para su comercialización en el exterior y en el mercado interno; mientras que para las carnes se fijaron únicamente precios máximos para el comercio exterior (Makler, 2006).

Asesores Regionales compuestos por representantes del INTA, la Junta Nacional de Carnes y Granos, las provincias y representantes de los productores. El rol reservado al sector en el Plan Trienal requería “movilizar toda la capacidad productiva del sector en las áreas actualmente bajo explotación y las que se incorporen expandiendo la frontera agropecuaria” (Plan Trienal, 1973: 32). Para esto, los instrumentos diseñados partían de “un nuevo concepto de imposición al sector a través del impuesto a la renta normal potencial de la tierra, la ley de bosques y el programa de viviendas rurales” como vías de estímulo a la actividad (Plan Trienal, 1973: 32). En el Plan, el INTA tenía estipulados algunos objetivos específicos por cultivo, para los que comprometía el accionar de distintas estaciones experimentales y agencias de extensión rural encargados de difundir la tecnología y prácticas de manejo agronómico disponibles, favorecer el incremento de las áreas cultivadas y los volúmenes de producción. Asimismo, el instituto tenía a su cargo parte sustancial de la implementación y formulación de la nueva legislación orientada al sector, en tanto y en cuanto debía proveer insumos técnicos para hacerla practicable.

Uno de los integrantes del equipo técnico de Giberti, Daniel Crispiani, puntualiza cuáles eran estas tareas solicitadas desde la Secretaría de Agricultura al INTA, éste debía “Plantear unidades económicas por región, establecer rendimientos esperados, proveer información catastral y hasta identificar carencias alimentarias para la implementación del Plan Agrario Nacional” (Crispiani, entrevista, 03-12-2012). Había ingresado al gabinete de la Secretaría de Agricultura y Ganadería a partir de la recomendación de un titular de cátedra de derecho agrario de la Universidad del Salvador en la que ejercía como docente. En este ámbito también se había contactado con miembros de Guardia de Hierro, sin sumarse a la agrupación. Con una militancia estudiantil en Franja Morada en sus épocas de estudiante de derecho en la Universidad de Buenos Aires (UBA), y una militancia jesuita en su juventud, integrante y director del IADE luego, había sido ubicado en su puesto más por su trayectoria académica que por sus filiaciones políticas. Nuevamente, la necesidad de contar con cuadros especializados se repetía en el armado de los equipos de gobierno. Su tarea consistía principalmente en concurrir a la mesa de negociación con las entidades agropecuarias (SRA, CRA, FAA, y hasta representantes de las Ligas Agrarias). Según recuerda, la situación de Giberti fue conflictiva desde los inicios, ya que “[Giberti] siempre estuvo

aislado dentro del peronismo y era visto con desconfianza por su nexos con el PC” (Crispiani, entrevista, 03-12-2012). En sintonía con esta caracterización, según Rougier y Fiszbein (2006: 183), Giberti era “un hombre con escasa conexión con los grupos tradicionales del partido, quienes en modo despectivo lo consideraban un técnico y un ‘izquierdista’”. En el mismo sentido lo recuerda un investigador de INTA, que siendo estudiante de Agronomía en la Universidad de la Plata (UNLP) fue incorporado por Giberti en un relevamiento sobre el uso de tractores que para entonces desarrollaba como consultor en el ámbito privado<sup>76</sup>. Tiempo después se incorporó a un proyecto de investigación -nuevamente por iniciativa de Giberti- que involucraba historiadores<sup>77</sup> y geógrafos en el estudio de la estructura agraria local, a partir del cual accedería posteriormente al INTA<sup>78</sup>. Para 1973, hacía ya seis años que había ingresado al INTA, junto a dos compañeros de estudios que también habían participado en el relevamiento. En su caso, se había incorporado al Departamento de Economía de la estación experimental Balcarce. En 1970, con motivo de la creación del posgrado en Economía agraria en la Escuela para Graduados del INTA, había realizado la maestría en Economía agraria y luego de dos años se reincorporaba a la estación experimental. Designado subsecretario de Agricultura, Giberti convocó a los antiguos estudiantes, ahora activos investigadores del INTA. Uno de ellos, desempeñaría la vicepresidencia del instituto en esta etapa<sup>79</sup>. Según recuerda el mismo investigador, para llevar adelante las políticas impulsadas desde la Secretaría “la mano de obra era la del INTA”. La articulación con el INTA descansaba en la creación de Grupos Regionales, destinados a efectuar diagnósticos zonales que incluyeran relevamientos sobre las condiciones de explotación de la tierra, la tecnología aplicada y en uso al momento y la disponible en el INTA y las características de las estructuras sociales agrarias involucradas. La identificación de las capacidades productivas por zona era vital para la formulación y aplicación de la nueva recaudación impositiva. En palabras de este investigador:

---

<sup>76</sup> Nos referimos a la consultora Latinoconsult, para la que Giberti en 1964 dirigió una encuesta a nivel nacional dirigida a productores y grupos de contratistas con el objeto de poner en el mercado una nueva línea de tractores. A un grupo de estudiantes de Agronomía de la UNLP se los contrató como encuestadores.

<sup>77</sup> Entre los que se encontraba la historiadora Nidia Areces, egresada de la carrera de Historia de la Universidad Nacional de Rosario, quien mantenía estrecha vinculación con historiadores de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA que fueron consultados sobre los lineamientos del proyecto.

<sup>78</sup> A raíz de la vinculación entre Giberti y el entonces Jefe del Departamento de Economía agraria del INTA, el ingeniero agrónomo Horacio Halliburton, en base a las experiencias previas fue recomendado para integrar el área de Economía del INTA.

<sup>79</sup> Héctor Félix Daniele, vicepresidente del INTA en 1974 durante la gestión de Horacio Figueiras.



(...) la Secretaría de Agricultura desde el Poder Ejecutivo tenía el aval político y la formulación. Pero *la ejecución técnica estaba en manos del INTA*. No había otra clase de institución así. Las facultades de agronomía no llegaban más allá de la vereda de la facultad. Los ministerios de agricultura de las provincias eran más burócratas y más atrasados todavía que el de la Nación... (Investigador hasta 1976, entrevista, 15-06-2010, énfasis propio).

Además de colaborar en el área de Economía agraria de la Secretaría -cuyo responsable también pertenecía al INTA, Martín Piñeiro-, integraba y coordinaba el Grupo Regional de INTA Balcarce y su zona de influencia. Dentro de las tareas requeridas resultaba fundamental contar con un mapa de suelos, que permitiera contar con la información de los distintos partidos y provincias para hacer practicable las medidas. Si bien “toda esa implementación, que terminaba siendo político-administrativa, corría por cuenta de la Secretaría de Agricultura, quien había recabado los datos y quien el día de mañana la iba a ejecutar en campo era la gente del INTA” (entrevista, 15-06-2010). Así, la información estadística y censal sobre el estado de la tenencia y la propiedad de la tierra, así como de la relación entre unidades productivas y cantidad de productores sería provista por el INTA. Estas tareas serían necesarias, sobre todo, para dos de las principales medidas llevadas adelante por la Secretaría.

Una de estas medidas, que concentró una fuerte repercusión y que demandaba una articulación con el INTA, fue el Impuesto a la Renta Normal Potencial de la Tierra (IRNP). Su aplicación se complementarían con el proyecto de la Ley Agraria, formulado posteriormente (Léon y Rossi, 2003). El IRNP gravaba con una suma fija el suelo, con el objetivo de combatir la existencia de tierra ociosa presente en los latifundios. Consideraba al producto potencial como aquel que podía dar la tierra si era explotada con un grado de eficiencia promedio, gravando a todos aquellos que produjeran por debajo de éste. Desalentar las tenencias improductivas y combatir la especulación eran dos de sus objetivos fundamentales. La implantación de este impuesto constaba de dos etapas: la primera consistía en un impuesto nacional de emergencia sobre las tierras libres de mejoras, que podía calcularse teniendo en cuenta el Impuesto a las Ganancias y tendría vigencia durante 1974; la aplicación se haría en una segunda etapa, desde comienzos de 1975 (Lázzaro, 2013). El Impuesto a las Ganancias también se pensaba

como compensatorio para aquellos productores que produjesen por encima de la renta normal y pudieran ser por ello beneficiados. El diario *La Opinión* aludía a la implementación del impuesto explicando su aplicación prevista en tres etapas. Un primer año de implementación *in crescendo* de un impuesto a las tierras aptas, a partir de 1974 un impuesto nacional de emergencia a las tierras libres de mejoras, y una vez cumplido el relevamiento catastral, la implementación final del impuesto a la renta potencial (*La Opinión*, 19-06-1973). El antecedente directo del IRNP había sido elaborado por el tributarista Dino Jarach, a instancias del investigador del INTA y ministro de Agricultura del presidente Illia, Walter Kugler. Posteriormente, durante la dictadura de Onganía, fue retomado por algunos integrantes del Ministerio de Economía, pero volvió a quedar sin aplicación<sup>80</sup>. El impuesto llegó a ser ley recién durante la gestión de Giberti en 1973. Según sus propias afirmaciones, “(...) como era un proyecto de ley ya hecho, yo lo tomé, modifiqué dos palabras y lo mandé al Parlamento por vía del Ministerio de Economía” (Giberti, citado en Ramírez, 2011: 319). Paradójicamente, su aplicación tentativa a nivel nacional sirvió como argumento para modificar la recaudación impositiva bonaerense, que pasó a fijarse sobre las distintas partidas inmobiliarias y dejó de tener como sujetos a sus titulares<sup>81</sup>. La nueva recaudación impositiva en el área bonaerense vigente desde 1974, al dejar caer sobre todos los inmuebles de propiedad de un mismo contribuyente, paradójicamente favoreció la elusión impositiva mediante el fraccionamiento artificial de las partidas catastrales (Basualdo y Arceo, 1997).

Según Daniel Crispiani (entrevista, 03-12-2012), “La novedad del IRNP consistía en ser más radical que otras iniciativas previas en aplicar un impuesto punitivo como castigo a la posesión de tierra ociosa”, y el INTA “acompañaba técnica e ideológicamente la medida”. La articulación planteada con el instituto implicaba, como señalamos, la provisión de un catastro de suelos, en los que se midiera la aptitud de las

---

<sup>80</sup> Nos referimos al ingeniero agrónomo Rafael García Mata, secretario de agricultura entre el 10/07/1967 y el 18/06/1969, ubicado por Giberti como un tecnócrata del “ala izquierda de la derecha” del gobierno de Onganía (Giberti, citado en Ramírez, 2011: 318), e integrantes del Ministerio de Economía como Gastón Bordelois y Pedro Lacau, éste último integrante del equipo de agricultura en 1973.

<sup>81</sup> Por Ley 8.169 se establece en abril de 1974 la actuación sobre cada inmueble en forma independiente, aún cuando fueran propiedad de una misma persona física o jurídica (Arceo y Basualdo, 1997). Según Arceo y Basualdo (1997), la acentuada subdivisión catastral de la tierra registrada en el período funciona en buena medida para eludir el pago al impuesto sobre la propiedad inmobiliaria rural, mientras que estas subdivisiones no afectan la concentración de la tierra, ya que las distintas parcelas siguen estando controladas por sus propietarios originales, y la presión fiscal aumenta sobre pequeños y medianos productores.

tierras, que permitiría aplicar el impuesto. El Ministerio de Economía delegó el relevamiento catastral en el INTA. Entre las principales tareas del organismo estaban dividir el país en zonas y determinar las áreas representativas por zona, establecer las actividades agropecuarias de cada zona, calcular la superficie típica de las explotaciones por región, establecer los precios medios de las principales producciones, estimar los costos de producción de las unidades tipo, determinar la renta media potencial por hectárea en cada zona y, finalmente, la renta óptima ideal de la tierra en cada área (Crispiani, 1973). El Instituto de Suelos del CNIA de Castelar realizó estudios, insumos para la identificación de la aptitud de las tierras necesaria para aplicación de la medida. La coordinación también involucraba a los distintos equipos de extensión rural a nivel nacional. A instancias de la Secretaría, se fueron organizando reuniones con los extensionistas de INTA en las que participaban Horacio Giberti, el subsecretario de Agricultura (Armando Palau), el subsecretario de Ganadería (Pedro Lacau) y el subsecretario de Economía (Martín Piñeiro), que era a su vez -como mencionamos- integrante del instituto. El objetivo era transmitir a los extensionistas lineamientos vigentes de la política agropecuaria y que el Servicio Nacional de Extensión del INTA difundiera entre sus integrantes las disposiciones y resoluciones de la Secretaría (CD INTA, 1974, Acta 625).

Como mencionamos, el impuesto era parte de un paquete de medidas. Este paquete agrario, según sus propios ejecutores “era reformista, pero tendía a modificar cosas importantes... modificar la estructura pero sin revolución social”. En este esquema, “el campo tenía que subvencionar a la industria” (Crispiani, entrevista, 03-12-2012), como ya había sucedido en la experiencia intentada años atrás con el IAPI. Dentro de los problemas de su aplicación, se detectaban la posibilidad de que funcionara como estímulo de la evasión impositiva y de que favoreciese una tendencia a la concentración de la tierra, ya que las explotaciones de mayor capital que pudieran obtener rentas superiores a la media, se verían beneficiadas, para lo que resultaba fundamental su articulación con el proyecto de Ley Agraria (Crispiani, 1973). A diferencia de éste, el IRNP llegó a ser sancionado. Posteriormente, sería derogado durante la dictadura, mediante la Ley 21.399, el 2 de septiembre de 1976.

Otra de las medidas más controversiales del paquete de medidas desarrollado en este período fue el proyecto de Ley Agraria (en adelante, Anteproyecto Ley Agraria).

La resistencia que generó la medida por parte de las corporaciones agropecuarias, y las alusiones al INTA registradas en estas declaraciones difundidas por la prensa, ameritan indagar en su contenido.

Planteaba, a lo largo de 195 artículos, algunos principios básicos para instrumentar el régimen de uso de la tierra. Partiendo de señalar que la tierra “debe cumplir una función social para la que está naturalmente asignada; constituye un bien de trabajo y no de renta y vale por lo que produce”; sostenía que debía asegurarse “una justa redistribución de las riquezas que de ella se extraen” (Anteproyecto Ley Agraria, 1974) para lo que planteaba un conjunto de normativas<sup>82</sup>.

Si bien existían antecedentes previos, destinados a mejorar el acceso a la tierra mediante el asentamiento de colonos, la transformación de arrendatarios y apareceros en pequeños propietarios o la subdivisión de tierras, su existencia hasta el momento había sido en forma de proyectos legislativos aislados y frecuentemente resistidos por terratenientes y estancieros (Girbal Blacha, 1988). Recién en 1940 había sido creado el Consejo Agrario Nacional, primer instrumento legal que definió una política integral de colonización de tierras (León y Rossi, 2006), y sus alcances no habían generado transformaciones profundas en el acceso a la tierra.

Las primeras medidas del proyecto legislaban sobre el dominio agrario, introduciendo una serie de limitaciones tendientes a restringir la individualidad de las explotaciones y modificaciones en el régimen hereditario, habilitando la extinción del dominio por el no uso de la tierra. Entre las restricciones, el quinto artículo del primer capítulo “Limitaciones y restricciones al dominio”, incluía limitaciones a los extranjeros para adquirir tierras en zona de frontera, arrendamientos forzosos en caso de mantenerse las tierras trabajadas por debajo de su potencial y obligaciones para los titulares de las explotaciones de participación en actividades comunitarias, tales como conservación de suelos, saneamiento vegetal y animal, cooperativas (Anteproyecto Ley Agraria, 1974). En segundo lugar, introducía una innovación en materia de legislación sobre tierra, ya que avanzaba por primera vez en normas referidas a la protección y manejo del suelo, a

---

<sup>82</sup> En 1974 la estación experimental de Famaillá publicó el texto completo del proyecto bajo la edición del INTA. Las citas subsiguientes corresponden a dicha edición; remitimos a los títulos y capítulos aludidos para facilitar su ubicación, debido a la extensión del proyecto y a la ausencia de una circulación vigente de esta edición.

los fines de garantizar su conservación y acrecentar su fertilidad<sup>83</sup>. Declaraba de utilidad pública y sujetas a expropiación las tierras erosionadas, agotadas, degradadas o en las que se ubicaran lagunas permanentes o nacientes cursos de agua, que fueran necesarias para llevar adelante programas de recuperación edafológica. La contribución del INTA en este plano se ligaba a la confección de la carta de suelos del país, la propagación de técnicas culturales de manejo, conservación y recuperación de los suelos y la capacidad de proponer al Poder Ejecutivo la expropiación de tierras necesarias para llevar a cabo programas de recuperación.

A los fines de posibilitar el máximo aprovechamiento “social y económico” de los “recursos naturales suelo y agua”, planteaba en el artículo 61 del segundo capítulo del tercer Título (“Ordenación y desarrollo agrario”) un “reordenamiento de la estructura agraria” (Anteproyecto Ley Agraria, 1974). Éste no significaba transformar las condiciones de propiedad de la tierra, pero sí fijaba requisitos para los inmuebles rurales comprendidos en el perímetro del área regable, declarando en el artículo 67 “de utilidad pública y sujetos a expropiación” los inmuebles que tuvieran una superficie equivalente o superior a cinco unidades económicas (Anteproyecto Ley Agraria, 1974). Pero esta política no comprendía sólo a los grandes latifundios. Junto a los grandes latifundios improductivos el minifundio era visualizado como un problema a resolver dentro de la estructura agraria, para lo que distintos planes promovían la reubicación de ocupantes y propietarios y un régimen de colonización de tierras<sup>84</sup>. Entre otras variables, incluía la constitución de un fondo de previsión y desarrollo comunitario, la adjudicación de tierras a cooperativas de producción y la posibilidad de entregar tierras bajo la forma de usufructo vitalicio. Entre sus objetivos, según se consignaba en el artículo 87 del cuarto Título (dedicado a la colonización), figuraban “expandir las fronteras agropecuarias”, “transformar a los arrendatarios y aparceros en propietarios”, “mejorar las condiciones de trabajo rural y elevar el nivel de vida” de productores y asalariados rurales (Anteproyecto Ley Agraria, 1974). La organización de las colonias y

---

<sup>83</sup> Reconocía como antecedente el documento programático “Coincidencias programáticas del plenario de organizaciones sociales y partidos políticos” del 20 de septiembre de 1972, que en su punto 13 sentaba las bases para una política agropecuaria, entre las que propugnaba la sanción de una ley de conservación de suelos y uso racional de agua para riego.

<sup>84</sup> Si bien permitía la desafectación de las tierras trabajadas en forma directa hasta una superficie máxima de cuatro unidades económicas, en el artículo 70 declaraba que serían sometidos a un programa de concentración parcelaria “aquellos inmuebles o fracciones de inmuebles ubicados dentro del polígono afectado, cuya superficie sea inferior a una unidad económica, aún cuando se encuentren trabajados en grado racional y *en forma directa* (...)” (Anteproyecto Ley Agraria, 1974).

la adjudicación de las tierras se harían, según lo afirmaba el artículo 95, mediante la división en parcelas trabajadas “por una familia agraria que aporte la mayor parte del trabajo necesario, permita subvenir a sus necesidades y a una evolución favorable de la empresa” (Anteproyecto Ley Agraria, 1974).

El apelativo a la “familia agraria” se relacionaba directamente con el discurso del INTA que ubicaba a la “familia rural” como destinataria de sus acciones. El texto planteaba la posibilidad de organizar los predios en “unidades económicas multifamiliares” asignadas a una cooperativa de producción. Una vez otorgadas, tomarían posesión inmediata del predio otorgado, en el que deberían residir permanentemente. Mientras que el Consejo Agrario Nacional promovería para las colonias distintas obras públicas (electrificación, transporte, trabajos hidráulicos, servicios médicos), la experimentación y extensión agrarias serían provistas a través del accionar del INTA<sup>85</sup>. También se proponían algunas modificaciones a la legislación referida a arrendamientos y aparcerías rurales, declaraba la expropiabilidad de las llamadas colonias de renta, (introducidas por la ley 14.451 en 1959) y modificaba el régimen de los contratos accidentales<sup>86</sup>. Finalmente, definía al Consejo Agrario Nacional como la autoridad de aplicación y planteaba un plan de financiamiento para las tareas requeridas en base a un sistema de “bonos agrarios”. Estos títulos de valores serían entregados a los productores expropiados en directa proporción con el grado de uso de la tierra alcanzado<sup>87</sup>.

El proyecto implicaba un salto cualitativo en materia de políticas agrarias, por proponer un grado de intervención sobre la propiedad y manejo de la tierra inédito hasta el momento. Como señala Lázaro (2013) la novedad radicaba en que por primera vez se buscó regular en forma orgánica lo concerniente a la tenencia y el uso de la tierra, con un criterio concreto y definido por la ley. Al mismo tiempo, como recuerda un

---

<sup>85</sup> En colaboración con las Universidades Nacionales y el Ministerio de Cultura y Educación proponía promover la enseñanza técnica agraria. Véase el artículo N° 97 (Anteproyecto Ley Agraria, 1974).

<sup>86</sup> Instauraba el derecho preferente de compra a favor del arrendatario o aparcerero en caso que el propietario decidiera enajenar el predio, prohibía dar en arrendamiento superficies inferiores a la unidad económica y preveía mecanismos de regulación del precio del arrendamiento o la aparcería.

<sup>87</sup> Es decir, que a un uso más eficiente de la tierra le corresponderían bonos de condiciones más favorables, y viceversa. Sobre este sistema de pago se recordaban como antecedentes distintos congresos de la Federación Agraria Argentina, en los que ésta entidad fomentaba su uso, y el Congreso Argentino para la Reforma Agraria organizado por la CGT en 1965, en el que se declaraba que cuando fuera necesario expropiar, se haría según la productividad de la tierra, cubriendo la mayor parte mediante el empleo de bonos. Véase en el Título VI, “Autoridad de aplicación y régimen financiero”, los primeros dos capítulos (Anteproyecto Ley Agraria., 1974).

investigador del centro de Castelar del INTA, “estaba claro que el enfoque del INTA así como el del paquete sectorial en su conjunto, no era un proyecto a la usanza de las reformas agrarias latinoamericanas. No se trataba ni de expropiar tierra ni de repartir tierra” (entrevista, 13-08-2010). En este sentido, en una exposición en la Facultad de Agronomía de la UBA organizada por el Centro de Estudiantes, Giberti afirmaba que era una “herramienta coherente con el sistema que estamos [sic], de capitalismo dirigido” (Giberti, 1974: 3).

El avance cualitativo de los planteos del proyecto descansaba en las medidas planteadas en relación a la propiedad y puesta en producción de la tierra. La consideración del uso, además de la posesión, como fuente de dominio de la tierra; la facultad de expropiación de tierras en manos del Estado, la declaración de tierras como de “interés público” y su control por el Consejo Agrario Nacional, y la identificación de las unidades económicas familiares y multifamiliares como sujetos agrarios, para los que proponía un plan de legislación específico constituían un adelanto novedoso en materia de legislación agraria. Esta iniciativa no tuvo la misma trayectoria que el IRNP. El proyecto nunca devino ley, y se enfrentó a un escenario dominado por la resistencia de las grandes corporaciones agropecuarias y por la disputa de poder al interior del peronismo. Según el testimonio de Giberti,

Como eran los primeros tiempos del gobierno de Cámpora, [el IRNP] salió rapidísimo, incluso con la participación entusiasta de Confederaciones Rurales. Después, en cambio, cuando elaborábamos el proyecto de Ley agraria, ya la relación de fuerzas y el panorama político habían cambiado totalmente, imperaban López Rega y compañía; y entonces al proyecto lo trataron lo más despectivamente posible (Giberti, citado en Ramírez, 2011: 333).

La depuración iniciada al interior del peronismo y la proliferación de un entramado jurídico que posibilitó su realización excedió ampliamente la figura de López Rega, cuya “demonización” -como ha señalado Marina Franco (2009; 2012)- simplifica y oscurece la comprensión de la escalada represiva que desembocaría en el golpe de

Estado. Pero, efectivamente, la relación de fuerzas no era la misma al momento de aprobación del IRNP, que cuando se instaló el debate en torno a la Ley Agraria<sup>88</sup>.

Al nivel de los ejecutores, para algunos integrantes del INTA las nuevas tareas que articulaban con las medidas de la Secretaría eran tomadas como una contribución, la propia difusión de tecnología agropecuaria era concebida como una herramienta capaz de incidir en la estructuración de los sistemas de tenencia y propiedad de la tierra:

Esa era nuestra participación en el plan de gobierno, el Plan Trienal famoso, el librito azul, donde todo lo que había de tecnología, todo lo que había de desarrollo agropecuario, todo lo que era innovador, cambio, todo eso, cuando llegó el momento de decir “¿quién ejecuta esto?”, el INTA. Y entonces empezás a trabajar, lógicamente, en función de ese proyecto desde tu lugar de trabajo (investigador EEA Balcarce, entrevista, 15-06-2010).

Sin embargo, esta postura distaba de ser homogénea y hegemónica al interior del INTA, más bien era vivido por muchos con resistencia o sin un involucramiento directo. En palabras de un investigador, “para una institución tan grande y tan dispersa en el territorio, las directivas nacionales son una cosa y lo que se construye en la práctica concreta es otra” (entrevista, 17-09-2010). Ambas circunstancias moldearon los alcances y las limitaciones que estas iniciativas tuvieron al interior del instituto. Los cambios políticos a nivel nacional dictaminaron su rumbo:

La renuncia de Cámpora, la nueva asunción de Perón, los gobernadores, (...) Era una caldera, una olla con un puchero que rebalsaba. Un día era como un año en la historia del país. Y no dabas abasto a atender el frente que se había abierto, un frente tan grande de trabajo que no sabíamos dónde estar (investigador hasta 1976, 15-06-2010).

---

<sup>88</sup> El fracaso del proyecto reformista se vincula también a las transformaciones de la estructura social agraria. Balsa (2006: 142) remarca la incidencia de terratenientes capitalistas medios, más dependientes de la renta del suelo, que lideraron la oposición.



El proyecto de Ley Agraria tomó estado público en coincidencia con la muerte de Perón, en julio de 1974<sup>89</sup>. La versión final fue redactada por la Secretaría de Agricultura y Ganadería el 24 de septiembre de 1974 y el Ministerio de Economía lo elevó a la Presidencia, pidiendo que sesiones extraordinarias se dedicaran a su tratamiento (Poggi, 2012). Nunca fue enviado al Congreso. En octubre, Gómez Morales reemplazó a Gelbard en el Ministerio de Economía, quien había presentado su renuncia en medio de los conflictos desatados al interior del peronismo. Presionado, Giberti presentó a su vez la suya, junto a todo su equipo, y fue reemplazado por el ingeniero agrónomo Carlos E. Emery<sup>90</sup>. En 1974 se cerraría un ciclo, breve e intenso, de las políticas agropecuarias locales (Lázzaro, 2013).

Una de las primeras medidas de Emery consistió en dejar cesante al equipo de técnicos que la Secretaría había contratado para realizar el estudio de regionalización (ya iniciado) destinado a implementar en profundidad el IRNP, que estaban adscriptos al INTA y trabajaban junto a los técnicos del instituto. Un investigador del INTA, que cumplía licencia por su participación en el equipo de Agricultura de la Secretaría, recuerda su regreso al organismo:

Lo mismo que pasaba en la Secretaría de Agricultura pasó en el INTA. La presidencia del INTA renuncia, se va, viene otra presidencia, al venir otra presidencia viene otra dirección nacional, que no son directores por concurso sino, en general, empiezan a aparecer los designados casi como interventores. Y en las estaciones experimentales no hay cambios en general de directivos, pero empiezan a llegar *las listas* (entrevista, 27-05-2010, énfasis propio).

El 30 de diciembre de 1974 fueron dejados cesantes doce integrantes del INTA pertenecientes a las experimentales de Salta, Paraná, Pergamino, Mendoza, Manfredi

---

<sup>89</sup> La Secretaría de Agricultura y Ganadería de la Nación envió a consulta a la Comisión Nacional de Política Concertada el proyecto el 30 de mayo de 1974. Ingresó el 4 de junio y luego fue girado al Subcomité Específico de Tenencia de la Tierra. Allí fue tratado a lo largo de once sesiones (Poggi, 2012a). Según Lattuada, “la lucha contra el ante-proyecto sólo fue una batalla más entre los distintos sectores internos del peronismo por ocupar el poder vacante” (1986: 253-254, citado en Poggi, 2012a:11)

<sup>90</sup> Emery había sido ministro de Agricultura de Perón entre 1947 y 1952. Ocupó Reemplazó la cartera agrícola en reemplazo de Giberti el 29 de octubre de 1974, hasta el 10 de agosto de 1975. Lo reemplazó el Ing. Agr. Lucio G. Reca (21/08/1975 al 3/02/1976), a su vez sucedido por el Ing. Agr. René P. Delpech hasta el golpe de Estado.

(Córdoba) y Oliveros (Santa Fe), en el marco de las disposiciones que autorizaron la prescindibilidad de personal de la administración pública (CD INTA, Acta 639, 1974; CD INTA, Res. 835, 1974).

Producida la renuncia de Giberti y equipo, el proyecto de Ley Agraria pasó al olvido y se postergó indefinidamente la aplicación del IRNP (Rougier y Fiszbein, 2006). Si bien reconocía distintos antecedentes<sup>91</sup>, el anteproyecto de Ley Agraria resaltó entre las medidas propuestas para el sector por el alcance de sus contenidos y, en un momento histórico atravesado por el conflicto social, recrudesció las posiciones de las entidades agropecuarias. El alto grado de repercusión que suscitó la medida incluyó también diagnósticos sobre la situación interna del INTA. ¿Cuáles eran algunas de estas posturas y qué conexión tuvieron con la trayectoria que seguiría el INTA?

#### **1.6. La recepción del anteproyecto de Ley Agraria y la visión sobre el INTA en la prensa: la “infiltración”.**

El rol de las entidades agropecuarias frente a la legislación agraria planteada entre 1973 y 1974 ha sido estudiado fundamentalmente por Carlos Makler (2006), mientras que los contenidos y las repercusiones suscitadas por estas medidas han recibido la atención de distintos analistas<sup>92</sup>. Asimismo, la cobertura mediática que recibió el proyecto de Ley Agraria fue estudiado por Marina Poggi (2010; 2011a, b; 2012) desde la perspectiva de análisis del discurso y los procesos comunicacionales<sup>93</sup>.

---

<sup>91</sup> Entre las que figuraban las “Pautas programáticas para el gobierno justicialista de la reconstrucción nacional” proclamadas en enero 1973, parte de la plataforma de la UCR, las “Coincidencias programáticas del plenario de organizaciones sociales y partidos políticos”, de noviembre de 1972 y el Acta de Compromiso del Estado y los Productores para una Política Concertada de Expansión Agropecuaria y Forestal, de septiembre de 1973. En las Pautas se afirmaba “que la tierra debe ser un para quien la trabaja y un medio de producción; de ninguna manera un medio de renta o especulación” y se promovía el cooperativismo “en todas sus formas”. Por su parte, la UCR anunciaba en su plataforma que llevaría a cabo una “efectiva reforma agraria”; mientras que en el Acta de Compromiso se afirmaba la necesidad de “mejorar sustancialmente la estructura social agraria” mediante la intervención en grandes áreas subutilizadas fiscales y privadas (*El Economista*, 26/07/ 1974). La incorporación del concepto de reforma agraria en las plataformas se amalgamaba al discurso de época, en consonancia con el grado de movilización social del momento.

<sup>92</sup> Encabezados por Lattuada (1986; 1988; 2008), se encuentran referencias a este proceso entre otros autores en Bustamante (2011); Lázzaro (2013) Balsa (2006), León y Rossi (2003), Rappaport (2005).

<sup>93</sup> Estudia en este sentido la producción del diario La Nación en 1973 (Poggi, 2010), los discursos de *La Tierra* y *La Opinión* sobre la Ley Agraria (Poggi, 2011a y b) y los de la revista *Anales de la Sociedad Rural Argentina*. También realiza un análisis de la cuestión agraria en la prensa entre 1975 y 1976 (Poggi, 2012b).

En sus estudios sobre las publicaciones de los diarios *La Opinión* y *La Nación*, así como en los referidos a los *Anales de la Sociedad Rural* y *La Tierra* (publicación de la Federación Agraria), se reconstruyen posicionamientos en torno a la cuestión agraria. En las distintas noticias analizadas por la autora no se registran menciones al INTA. Precisamente, este apartado no busca realizar un análisis exhaustivo de los posicionamientos y discursos de las principales entidades agropecuarias, ni de la forma que el proyecto de Ley Agraria fue cubierto por la prensa gráfica, sino que se propone identificar qué vinculaciones existieron entre los argumentos esbozados por distintos sujetos agrarios en relación a esta medida y los referidos para caracterizar al INTA en este período, a partir de algunas referencias ubicadas en la prensa.

El diario *La Nación* reprodujo el contenido del anteproyecto el 5 de junio de 1974, generando un debate en el que participaron las principales entidades del campo. Según señala Rapoport (2005: 559), CARBAP pidió la eliminación del proyecto, Federación Agraria lo apoyó sólo inicialmente, la SRA lo catalogó de reforma agraria encubierta y las Ligas Agrarias se pronunciaron a favor de profundizar la medida. El debate continuó, sobre todo en septiembre y octubre de 1974 (Lattuada, 1986). Repasaremos brevemente los posicionamientos, a partir de una entrevista al entonces todavía secretario de Agricultura que el diario *El Economista* publicó el 26 de julio de 1974, titulada “Evolución y no Reforma Agraria”. Se le preguntaba: “El Anteproyecto de Ley agraria, ¿implica una reforma agraria?”. La respuesta de Giberti fue calificar al mismo como una “evolución agraria dirigida, por entender que ‘reforma agraria’ debe conservarse para cambios mucho más completos, intensos y profundos” (*El Economista*, 26/07/1974). En este sentido, distintos sujetos agrarios encolumnaron su apoyo al proyecto partiendo de reclamos que avanzaban en la necesidad de radicalizar su contenido. Los dirigentes de la Coordinadora Nacional de las Ligas Agrarias se reunieron con Gelbard para exigir que el Anteproyecto fuera sometido a un debate público y subrayaron que apoyaban la iniciativa porque podría servir para lograr “profundas transformaciones en la estructura del agro” (*El Cronista Comercial*, 02/09/1974). En la misma línea se pronunció la Federación Campesina Latinoamericana, en su cuarto encuentro con sede en Resistencia. Allí, distintas organizaciones campesinas, entre las que figuraban once delegaciones de provincias argentinas, emitieron un comunicado donde calificaban al anteproyecto como “un

significativo avance en pro de una verdadera reforma agraria en el país.” Solicitaban que el tiempo de 10 años previsto para que la tierra no trabajada fuera declarada de utilidad pública se redujera a 5 años y reclamaban un mayor número de representantes campesinos en el Consejo Agrario Nacional; al mismo tiempo exigían al Congreso que el proyecto fuera “aprobado en el más breve plazo” (*El Cronista Comercial*, 02/09/1974 1974). También la Unión de Productores Agropecuarios de la República Argentina (UPARA), que afirmaba contar al momento con 70.000 adherentes, apoyó públicamente la iniciativa, que según su delegado restablecería “la función social de la tierra”<sup>94</sup>. Desde el Partido Intransigente y el Partido Comunista, con reticencias basadas en la distancia del anteproyecto con el de una reforma agraria, entendían al mismo como “un importante paso” (*El Cronista Comercial*, 29/08/1974) y exigían al Poder Ejecutivo que informara las razones por las que había sido demorada su remisión al Congreso.

Un mes después de entrevistar a Giberti, el mismo diario publicó las respuestas de la FAA, CARBAP y la SRA frente a un mismo cuestionario sobre el contenido del anteproyecto. La FAA planteaba un apoyo condicionado a la introducción de algunas modificaciones, en especial en los criterios fijados para los adjudicatarios de una colonia, afirmando la existencia de problemas inocultables en materia de tenencia de la tierra en la misma línea que los señalados por el anteproyecto<sup>95</sup>. Distinta era la posición de las otras dos entidades, representantes de las grandes corporaciones terratenientes. La SRA afirmaba que se trataba de “un proyecto de ley inconveniente para el desarrollo del sector agropecuario, por cuanto aumenta la inseguridad en materia de propiedad privada de la tierra” (*El Economista*, 02/08/1974). Destacaba la inexistencia de latifundios improductivos y de minifundios, afirmando que en realidad el rasgo distintivo del agro estaba dado por “una enorme movilidad en la tenencia de la tierra”, y atribuía la “idea totalmente errónea de la realidad argentina” vertida en el anteproyecto a que sus autores “generalmente viven en la ciudad, enfrascados en lecturas de tipo marxista, e ignoran totalmente lo que sucede a lo largo y a lo ancho del país” (*El Economista*, 02/08/1974,

---

<sup>94</sup> Reunida en Mar del Plata el 29 de julio de 1974, el entonces secretario general (José María García) anunciaba futuras concentraciones en apoyo a los lineamientos del anteproyecto (*El Cronista Comercial*, “UPARA se definió a favor del proyecto de ley agraria”, 29/07/1974).

<sup>95</sup> Tales como “las tierras fiscales desaprovechadas, las ubicadas en zonas de frontera, las que están en manos privadas y son irracionalmente explotadas; el minifundio y el latifundio; la necesidad de proveer a la conservación, la urgente necesidad en radicar a productores, técnicos y obreros rurales sin tierras, amén de otros aspectos vinculados al uso y tenencia de la tierra que nunca fueron encarados racionalmente” (*El Economista*, 02/08/1974). La Federación terminó retirando su apoyo al proyecto, si bien en un inicio lo apoyó utilizando estos argumentos.

énfasis propio)<sup>96</sup>. En la misma línea se pronunciaba CARBAP, mediante su portavoz Jorge Aguado, calificando a la Ley Agraria de “anti-argentina” y de “tendencia marxista”, y denunciando, en un telegrama remitido en junio de 1974 al presidente Perón,

(...) la grave infiltración ultra-izquierdista existente a nivel de la Secretaría de Agricultura y Ganadería [...] Denunciamos el proyecto de ley agraria que deliberadamente lesiona los legítimos intereses de todo productor agropecuario [...] promoviendo con irresponsabilidad la desunión y quizás la violencia en la comunidad nacional (CARBAP, 1974: 25, citado Sanz Cerbino, 2010:6).

La misma acusación de “infiltración” pesaría sobre el INTA. La preocupación de las grandes entidades agropecuarias y las tensiones que suscitaban estas iniciativas al interior del instituto fueron significativamente referidas. En este sentido, estas posturas se entroncaban con preocupaciones previas, ahora radicalizadas, que las organizaciones terratenientes venían manifestando tanto sobre los proyectos de reforma agraria emanados de procesos revolucionarios como el cubano, como sobre las políticas generadas por organismos del tipo del CIDA (Comité Interamericano de Desarrollo Agrícola) compuesto por CEPAL, la FAO, OEA, BID, IICA, que desde 1960 estudiaron a fondo las estructuras agrarias de países de la región (en especial de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala y Perú) en el marco de las políticas de reforma agraria promovidas por la Alianza para el Progreso (Gresores y Muro de Nadal, 2008). Sin embargo, en este contexto el peso de estas acusaciones tuvo otras implicancias.

---

<sup>96</sup> El subrayado es nuestro. En una versión algo adelantada a lo que se conocería luego como “teoría del derrame”, señalaban que, a diferencia de los “conflictos de todo orden” que generaría la ley, “La justicia en la distribución se logra mucho mejor con una producción agropecuaria en fuerte crecimiento (...) Cuando el agro prospera, ello va acompañado inevitablemente por mejoras en las condiciones sociales y económicas de los trabajadores rurales y de los campesinos, acentuándose la movilidad social ascendente que es fundamental en nuestra sociedad”; y, combinando el diagnóstico económico con los principales presupuestos rectores de la “mano invisible” afirmaban, “Entonces habrá justicia, en el sentido de que los que más trabajan, los más capaces y más emprendedores, tendrán mejores oportunidades de progreso personal” (*El Economista*, 02/08/1974, énfasis propio). En el mismo sentido se pronunciaba días después, al alertar que “Con el nombre de ‘cooperativas de producción’ se crean explotaciones colectivas en donde ninguno de los que trabajan es dueño de la tierra, suprimiendo la actividad individual y negando el derecho de progresar a los que la componen” (*El Cronista Comercial*, 29/08/1974).

Como señalamos, la Secretaría contó con el asesoramiento de técnicos e investigadores del INTA en la elaboración del IRNP, y distintos investigadores del organismo participaron en reuniones de discusión del anteproyecto de la Ley Agraria. La existencia de una estructura científico- técnica resultaba esencial, tanto para llevar adelante las investigaciones sobre el estado de los suelos, como para coordinar la extensión rural con las comunidades rurales. Advirtiendo desde los principales diarios sobre el carácter “estatizante” de estas medidas, también comenzó a señalarse la existencia de una “infiltración marxista” en el INTA. El 13 de octubre de 1975 bajo el título “La situación del INTA”, desde las páginas del diario *La Nación* se afirmaba que el INTA había sufrido “una grave declinación de su potencial promotor de la tecnología del agro” (*La Nación*, 13/10/1975). Ésta era explicada en función de la situación de la institución “a partir de medidos de 1973, luego de asumir el gobierno la administración del Dr. Cámpora” (*La Nación*, 13/10/1975). Las críticas se dirigían al ingreso de personal sin concurso previo, y a problemas presupuestarios, sobre lo que se agregaba:

Pero aun esto tiene trascendencia menor que la *infiltración ideológica* ocurrida por conducto de los nuevos nombramientos, entre los cuales se ha denunciado reiteradamente la participación de *elementos subversivos de filiación marxista*, que no serían ajenos a la inspiración que tuvo el proyecto de ley agraria, luego felizmente desechado (*La Nación*, 13/10/1975).

Vista en un comienzo como inocua y capaz de contener cualquier iniciativa disruptiva, la dirección nacional que conducía el instituto desde 1973 pasó a ser considerada como inoperante y hasta peligrosa. Muchos de los que habían perdido protagonismo con la llegada de Cámpora al gobierno volverían a ocupar puestos centrales, y otros que entonces habían ocupado cargos directivos pasarían a puestos menores, trasladados a distintas estaciones experimentales. La publicación tradicional del medio *La Chacra* vinculaba a los directivos con denuncias sobre manejo indebido de fondos y resaltaba la existencia de un contexto “preocupante” en el que “(...) se ha acusado a algunos técnicos de *permitir y fomentar la ideologización de las tareas de investigación* que redundaba en actividades extrañas a sus objetivos específicos” (*La Chacra*, 13/06/1975, énfasis propio).

Mediante un decreto del Poder Ejecutivo del 6 de mayo de 1975 (1169/75), el INTA fue intervenido por primera vez en su historia. El Consejo Directivo fue provisoriamente disuelto, y en su reemplazo fue designado como interventor un ingeniero agrónomo del organismo, Humberto Cavándoli, que había permanecido en abierta confrontación con la dirección anterior. Como mencionamos, fueron renovadas las designaciones de los cargos directivos de la dirección nacional, designados directores interinos en el CNIA de Castelar y en algunas estaciones experimentales<sup>97</sup>. Al mismo tiempo, una serie de traslados fueron dictados para distintos profesionales, entre los que se destacaban la reubicación de quien había ocupado la Dirección Nacional de Extensión y Fomento<sup>98</sup>.

Cavándoli tenía una larga trayectoria dentro del INTA. Había dirigido el Instituto de Biología Animal, y cuando se produjo la renuncia de la conducción del INTA que había asumido con la llegada de Cámpora al gobierno, fue primero designado vicepresidente del Consejo Directivo. Consultado por la revista *La Chacra*, a menos de un mes de su designación, explicaba que el INTA se intervenía para “adecuarlo a las necesidades actuales en materia agropecuaria, previo análisis a fondo de su actual situación” (*La Chacra*, 23/06/1975). Un argumento similar reproduciría la intervención militar en marzo del siguiente año. Desde la revista se presentaba la situación del INTA, afirmando que “A nadie escapaba la irregular situación por la que venía atravesando el INTA desde largo tiempo atrás y que diera un cambio de sus autoridades” (*La Chacra*, 23/06/1975). Sobre este “reordenamiento” continuaba informando el diario *La Nación*,

---

<sup>97</sup> Como director nacional fue designado el ingeniero agrónomo Norberto Hugo Comercio, que presentó la renuncia y fue reemplazado por Fernando Spinelli Zinni el 1 de septiembre de 1975. En la dirección nacional asistente de Investigaciones Especiales, Jorge María Brun, y en la de Investigación Juan Billard. Entre otros puestos relevantes, como director interino del CNIA, fue nombrado Humberto Osvaldo Cisale; como director interino de la estación experimental de Paraná, Pedro Raúl Marco, y en la estación experimental de Balcarce se designó como jefe interino del departamento de producción animal a Pablo Eduardo Casaro (INTA, 1975, Resoluciones, Libro 299).

<sup>98</sup> Como se mencionaba en el primer apartado del capítulo, el 6 de junio de 1975 Jacinto Rolando Vellani fue reubicado nuevamente como extensionista en la Agencia de Extensión Rural Magdalena de Pergamino, (INTA, 1975, resolución 59). Entre otros casos, el 26 de mayo José Tiranti, del área de economía de la estación experimental de Corrientes, fue trasladado a Hilario Ascasubi (INTA, 1975, resolución 33); el 4 de junio Jorge Domínguez de Famaillá a Pergamino (INTA, 1975, resolución 48) y el 12 de Mayo Alfonso Bujan fue destinado a la estación experimental de Anguil, en La Pampa. En todos los casos los traslados implicaban un cambio de residencia, discontinuar los lazos y ámbitos de influencia establecidos en los lugares de trabajo originales y funcionaban como una advertencia sobre el accionar de los aludidos.

A fines del año pasado se decidió el cambio de autoridades y luego se procedió a la intervención, lográndose la moderación de las perturbaciones ocurridas y de las tendencias ideológicas que se habían apoderado de este sector (*La Nación*, 13/10/1975).

Sin embargo, advertía sobre la necesidad de no perder de vista al instituto y, adelantando las tareas que terminarían de materializarse con el golpe de Estado, recomendaba que se debiera:

(...) dentro de los programas de racionalización que serán indispensables para *sanear* la administración nacional, *prestar la mayor atención posible al INTA*, tanto *por razones técnicas y presupuestarias como ideológicas* (*La Nación*, 13/10/1975).

Para entonces, María Estela Martínez de Perón había designado -en junio de 1975- a Celestino Rodrigo al frente del Ministerio de Economía. El “rodrigazo” preanunció la política económica que desplegaría la dictadura, uniendo la devaluación de la moneda al incremento de tarifas y al freno a los aumentos salariales acordados. Las corporaciones terratenientes lo consideraron “insuficiente” y dieron paso a múltiples paros agrarios y ganaderos<sup>99</sup>.

La segunda intervención del INTA, en este caso dispuesta por las Fuerzas Armadas, iba a producirse casi un año más tarde que la primera, el 24 de marzo de 1976. Nuevamente desde el diario *La Nación*, luego de meses de iniciada la intervención militar, se refería a la situación del instituto titulando “La recuperación del INTA”, mencionando que “en años recientes fue sumido en el caos, minado principalmente por una *infiltración* ideológica que utilizó los centros de estudio y de difusión para sus disolventes actividades” (*La Nación*, 29/10/1976)<sup>100</sup>. La “reorganización” del INTA había comenzado.

---

<sup>99</sup> Como señala Sanz Cerbino (2010), mientras que el 16 de febrero de 1976 las entidades agrarias se suman al *lock out* encabezado por la Asamblea Permanente de Entidades Agrarias Empresarias (APEGE), el paro agrario estaba convocado por CRA para el 27 de marzo, tres días antes se produjo el golpe militar.

<sup>100</sup> Continuaba, “(...) que no reparó en asignar recursos para la desarticulación del agro, inclusive para facilitar el desplazamiento de la guerrilla” (*La Nación*, 29/10/1976). Llamativamente, el argumento que relacionaba (en formas inverosímiles que implicaban ataques bacteriológicos del ERP con ayuda de investigadores del INTA y uso de los aviones del organismo como correo de Montoneros) se repetía en



## 1.7. Conclusiones: cuadros institucionales, orientaciones y conflictos

La situación del equipo que tuvo a su cargo la dirección del INTA entre 1973 y 1975 fue paradójica. Esta conducción no se ubicaba, dentro de la disputa abierta al interior del peronismo, ligada a los sectores cercanos a la Tendencia, sino en línea con los planteos del, así autodenominado, “verdadero” peronismo. Sin embargo, su composición fue más compleja que la que podría saldarse en una categorización binaria. Tanto por servir como canal de penetración al interior del INTA de otros sectores más radicales de diferentes adscripciones políticas, como por quedar ligado a conflictos gremiales del organismo vinculados a organizaciones de la izquierda peronista, su situación se volvió aislada y endeble.

Asimismo, la ejecución en este período de distintas acciones dirigidas a complementar el accionar de la Secretaría de Agricultura, aportando recursos técnicos, capacidades en investigación y extensión para la formulación y proyectada aplicación de las medidas agropecuarias, le valió a la conducción del INTA la resistencia que las principales entidades opusieron a las medidas, así como las críticas de que éstas eran objeto por parte de planteos de mayor radicalización de las transformaciones propuestas. Mientras que este grupo identificado con el sector más conservador del peronismo logró ocupar puestos estratégicos dentro de la dirección del INTA, otros intentaron aprovechar las fisuras producidas en la estructuración tradicional del organismo para introducir modificaciones en la orientación de sus actividades. Participando en algunos cargos de gestión, o bien sosteniendo debates desde sus propios lugares de trabajo como técnicos o investigadores, convivían también con una creciente movilización gremial, en especial en algunas estaciones experimentales y en el Centro Nacional de Investigaciones Agropecuarias ubicado en Castelar. En esta trayectoria, el paquete de medidas sectoriales que intentaba implementar el equipo liderado por Giberti desde la Secretaría de Agricultura jugó un rol fundamental. Discutidas al interior del INTA, estas medidas reservaban un lugar específico para éste en tanto encargado de llevar adelante las investigaciones e implementaciones técnicas necesarias (cálculos de rendimientos por hectáreas según zonas, delimitación catastral, organización de colonizaciones agrícolas, etc.) como brazo ejecutor de la política agropecuaria. En un momento clave

---

los informes de la dirección de inteligencia de la provincia de Buenos Aires y en los interrogatorios realizados a trabajadores del Instituto. Véase el capítulo siguiente.

para la historia política del país, atravesado por grandes expectativas de transformación social, el paquete de medidas planteadas suscitó un profundo debate público, que acaparó parte importante de la prensa. De criterio más bien eficientista y reformista, pero con “intromisiones” hasta el momento inéditas en cuestiones como la propiedad de la tierra y la reorganización impositiva del sector, medidas como el anteproyecto de Ley Agraria motivó virulentas reacciones de parte de entidades como SRA, CARBAP y CRA, que fueron simultáneas a los públicos llamados de atención sobre la situación interna del INTA.

La intervención del instituto en mayo de 1975, la primera que registraba desde su creación, preanunció la que se concretaría en menos de un año, en marzo de 1976 por las Fuerzas Armadas. Ambas se gestaron en un clima de acusaciones a la situación vivida en el interior del INTA en 1973 y 1974. Junto a las características de su cuerpo directivo en este período, y a los conflictos de base que se vivían al interior del organismo, una asociación directa a las medidas de la cartera agropecuaria planteadas en estos años y a una supuesta “infiltración” en las filas del INTA sirvieron como argumento y motivación para su seguimiento y control.

## CAPÍTULO II

### Seguimiento e intervención militar (1973-1983)

#### 1. Resumen

Nos adentraremos en el estudio de la intervención militar del INTA en 1976 y de los antecedentes presentes en los años previos ligados a la configuración de un “mapa” de datos sobre trabajadores del organismo, posteriormente utilizado para implementar la represión durante la intervención militar. El objetivo de este capítulo es reconstruir la historia de la intervención, analizar la introducción de mecanismos represivos en la institución y explorar prácticas y discursos que acompañaron su instrumentación. El primer apartado indaga el accionar de la ex Dirección de Inteligencia de la Policía de la provincia de Buenos Aires (DIPBA) en los años previos al golpe de Estado, a través de los informes elevados y las caracterizaciones presentes en los mismos. El segundo analiza la trayectoria y desestructuración de un equipo de investigación del Centro Nacional de Investigaciones Agropecuarias, el grupo de Ecología. El tercer apartado, reconstruye la intervención militar del INTA a partir del comienzo de la dictadura. El cuarto, analiza discursos presentes en el Consejo Directivo, siguiendo el uso de la categoría de “saneamiento” y su desplazamiento del lenguaje técnico a la depuración institucional. El quinto apartado analiza mecanismos propios de la dinámica institucional del organismo, su instrumentación en la implementación de la violencia estatal y en la orientación de sus actividades, a partir de relatos en tensión de miembros activos y retirados de INTA. Finalmente, en las conclusiones se puntualizan los resultados y se introduce la temática de la segunda parte: el estudio de las agendas de investigación y extensión del organismo.

## CAPÍTULO II

### **Seguimiento e intervención militar (1973-1983)**

“[el director de la estación experimental] era como un patrón de estancia, un dueño y señor. Así como podía ser autoritario como un patrón con sus peones, independientemente que sean del campo científico, también era un protector con su familia, la familia INTA”  
(Investigador, entrevista, 10-11-2009).

#### **1.1. El INTA bajo la lupa: antecedentes y configuración de un mapa de datos sobre los trabajadores del organismo**

Al interior del INTA, los años previos al golpe de Estado estuvieron acompañados por la introducción de diversos mecanismos que promovieron su seguimiento y control. Por un lado, fue objeto de infiltración por parte de servicios de inteligencia del Estado, que dieron cuenta del accionar de algunos de sus integrantes, registraron actividades, construyeron caracterizaciones e hipótesis y confeccionaron el mapa sobre el que se desplegaría posteriormente el accionar militar. Por otro, fue terreno de aplicación de distintas normativas que rigieron para el conjunto de la administración pública y de los espacios laborales, a través de las cuales se instrumentaron cesantías, traslados y reordenación de equipos de trabajo. Al mismo tiempo, y en relación a estos dos planos y a los conflictos presentes en su propia estructura interna, se avanzó en la reorganización de sus actividades de investigación y extensión rural. Nos concentraremos en este apartado en identificar qué elementos eran señalados por los “informantes” actuantes en el instituto, qué conflictos se registraron, qué medidas fueron implementadas en este sentido y cómo se confeccionó a partir de estas variables la cartografía represiva, que sería implementada posteriormente. En este sentido, la naturaleza burocrática presente en la violencia estatal no fue privativa de este proceso histórico, si bien los diferentes contextos poseen particularidades propias no

homologables<sup>101</sup>. Cabe aclarar que nos referimos a la “represión” en el sentido explicitado por Águila (2013), es decir, en tanto ejercicio de la violencia estatal o paraestatal orientada a combatir la conflictividad social y la violencia insurgente.

A nivel nacional, en los años previos al golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 es posible identificar la existencia de un ciclo represivo de largo plazo<sup>102</sup>. Tanto la violencia paraestatal como la proliferación de leyes y disposiciones que radicalizaron la función represiva del Estado crecieron, definiendo y normalizando desde el propio estado de derecho la necesidad de combatir la “subversión”. En este sentido, también en INTA es necesario enmarcar la represión en un proceso de larga duración para comprender sus alcances, instrumentación e implicancias.

Todo un entramado de “medidas de excepción” (Franco, 2012) avanzó sobre la administración pública, el mundo laboral, el ámbito educativo y la circulación de la información, incrementando el control político e ideológico. Dentro de estas disposiciones, para el ámbito laboral y sindical se destacó la Ley de Asociaciones Profesionales, aprobada en noviembre de 1973, que apuntaló el poder de la CGT en detrimento de los sindicatos más combativos, en simultaneidad a un conjunto de disposiciones que limitaron acciones centrales como el derecho a huelga y acentuaron el disciplinamiento de la clase trabajadora (De Riz, 2000; Franco, 2012). En este contexto, el 31 de octubre de 1973 se aprobó una ley de prescindibilidad para la administración pública. Impulsada con el objetivo de remover la herencia de la dictadura previa, la Ley

---

<sup>101</sup> Nos referimos a distintos estudios que han dado cuenta de este rasgo, en particular a trabajos vinculados al Holocausto. En este sentido, Arendt acuñó la expresión “banalidad del mal”, dando cuenta de la existencia de un orden burocrático en la producción del genocidio al analizar el juicio al criminal de guerra nazi Adolf Eichmann (Arendt, 1999). Browning (2002), por su parte, afirma que muchos de los que ejecutaron el Holocausto fueron “asesinos de oficina”, en los que la naturaleza burocrática facilitó su participación en el exterminio masivo; mientras que una visión del genocidio moderno como “el trabajo de un jardinero”, donde el Holocausto fue llevado a cabo de “forma moderna”, entendida ésta como “racional, planificada, científica”, es planteada por Bauman (1997: 116). En relación a esta última postura, en 1944 Adorno y Horkheimer ya entendían al nazismo como la crisis de todo el pensamiento occidental.

<sup>102</sup> Seguimos aquí la interpretación de Marina Franco, quien se propone complejizar la comprensión del fenómeno del Terrorismo de Estado registrando continuidades históricas y responsabilidades civiles en un ciclo represivo de larga duración, sin que esto implique modificar “un ápice la responsabilidad criminal de las Fuerzas Armadas (...)” (Franco, 2012: 33). El 5 de febrero 1975, el decreto 261 dispone “aniquilar el accionar de los elementos subversivos” presentes en la provincia de Tucumán, dando origen al Operativo Independencia. Sucesivos decretos ampliarían el marco legal al conjunto del territorio nacional (D’ Andrea Mohor, 1991, citado en Canelo, 2008). Este operativo suele tomarse como el inicio de la represión que se sistematizaría a partir de 1976. El análisis de Franco (2012) remarca la responsabilidad del período constitucional previo y del arco partidario en el establecimiento de medidas de “excepción” que fomentaron la violencia estatal.

20.549 permitía dejar cesante personal del Estado a criterio de cada dependencia, y prohibía al personal afectado su reingreso al ámbito estatal por cinco años<sup>103</sup>. Una segunda ley extendió su alcance, previsto en origen hasta el 31 de marzo de 1973, hasta diciembre de 1974. Según Marina Franco, “para muchos técnicos y profesionales la ‘prescindibilidad’ fue el inicio de largos exilios o de situaciones más graves en términos de persecución política” (Franco, 2012: 95).

Mientras que en el ámbito universitario la aplicación de estas medidas estuvo acompañada por la designación de Oscar Ivanissevich como ministro de Educación, gestión signada por la supresión de la autonomía universitaria, la prohibición de las actividades políticas (Buchbinder, 2005) y una fuerte depuración explícitamente dirigida a las organizaciones políticas revolucionarias y a las filas estudiantiles identificadas con la izquierda peronista (Izaguirre, 2011), en los organismos de CyT también comenzaron a registrarse modificaciones<sup>104</sup>. ¿Cuál fue la situación en el INTA? Como señalamos anteriormente, las primeras cesantías enmarcadas en estas medidas se registraron el 31 de diciembre de 1974 y afectaron a personal de distintas estaciones experimentales y agencias de extensión rural. Dentro de los incluidos, se encontraban el jefe de la agencia de extensión rural de Pergamino, activistas gremiales, e investigadores que habían colaborado en la primera etapa del tercer gobierno peronista en actividades del área agropecuaria<sup>105</sup>. Como recuerda un investigador del instituto, antes de producido el golpe de Estado “el huevo de la serpiente ya estaba en la institución” (entrevista,

---

<sup>103</sup> Impulsada por el presidente interino Lastiri, véase las referencias a su implementación en Franco (2012).

<sup>104</sup> Oscar Ivanissevich, de larga trayectoria como militante en el peronismo ortodoxo, asumió la cartera educativa dos semanas después de la muerte de Perón, el 14 de agosto de 1974. Según un documento del Consejo Superior del PJ, su objetivo explícito era el de “eliminar el desorden” y garantizar una “depuración ideológica” del espacio universitario (Bonavena, 2008). Como interventor de la UBA designó a Alberto Ottalagano. Su perfil político respondía a las máximas que Ivanissevich había dejado establecidas, que expresaban la abierta lucha desatada fuera y también dentro del peronismo: “no al gobierno tripartito, no a la prestación de servicios al pueblo por parte de los estudiantes de la Universidad, no a la ‘infiltración marxista’” (Izaguirre, 2009: 5). En los 100 días que duró su gestión de rector interventor de la UBA (17-09-74 al 26-12-74) hubo 4 desaparecidos y 11 muertos, (14 estudiantes, y el profesor Silvio Frondizi), que se correspondían al 50% de las bajas de universitarios de todo el país en el mismo período (Izaguirre, 2009).

<sup>105</sup> Los cesanteados fueron Jorge Adámoli (EEA Salta), Dina Sejzer (EEA Salta), René Benavidez (EEA Paraná), Julián Pabón (EEA Paraná), Dina Foguelman (EEA Pergamino), Jorge Eduardo Ratcliffe (EEA Pergamino), Alberto Kippen (AER Pergamino), Héctor Luis Ferreyra (EEA Mendoza), Pedro y Félix Rojo (EEA Manfredi), Eduardo Salles (EEA Oliveros), Octavio Looor Zambrano (EEA Oliveros), Carlos Soler Prats (AER San José de la Esquina). (INTA, 1974, Res. 835).

15/06/2010)<sup>106</sup>. Estas disposiciones tendrían una continuidad en la Ley 21.260, sancionada y promulgada el 24 de marzo de 1976, dirigida especialmente al personal del sector público, para el que autorizaría la implementación de bajas “por razones de seguridad”.

También en 1974, un extensionista de INTA denunciaba ser parte de una persecución ideológica dentro del organismo sostenida por los poderes locales ligados al medio rural. En una carta abierta titulada “Sucede en Dorrego”, afirmaba que luego de prestar servicios durante tres años en actividades propias de su rol como extensionista, se le había pedido sin previo aviso la renuncia, que se negaba a presentar por haber obtenido el cargo por concurso y considerar que se trababa de “una forma de persecución política” (Llerena Rosas, 3/11/1972). Manifestando haber cumplido con las tareas asignadas y remarcando que “fuera de una institución estatal tendría que trabajar al servicio de empresas privadas, muchas veces no argentinas, aunque mejor remunerado”, explicaba que en la dirección de la estación experimental del INTA le había sido presentada una nota firmada por representantes de entidades agropecuarias en la que se exigía su renuncia. Como respuesta, llamaba públicamente a la conformación de una mesa redonda, señalando que la situación debía resolverse “por medios civilizados donde predomine la razón y no la fuerza” (Llerena Rosas, 3/11/1972). Carlos Llerena Rosas fue primero relevado de su cargo como jefe de la agencia de extensión rural de Maipú, y reubicado en la estación experimental de Balcarce. Tiempo después, el 30 de octubre de 1974, era asesinado por la AAA. Militante del Frente de Izquierda Popular (FIP) fuera del INTA, y secretario gremial del área de prensa de APINTA, según recuerdan familiares y ex compañeros, su posición también se estaba destacando en ese momento por sostener -a diferencia de otras posiciones mayoritarias dentro del gremio- una rotunda negativa ante la posibilidad que la asociación gremial del instituto APINTA se integrase a la CGT; en línea con las tensiones sindicales que por entonces enfrentaban a la burocracia sindical encolumnada detrás del dirigente Lorenzo Miguel y los sectores más combativos del movimiento obrero. En otras palabras, según el testimonio de un familiar, su asesinato se vinculaba a que “Querían escarmentar a los

---

<sup>106</sup> Investigador de la estación experimental de Paraná, en entrevista colectiva a graduados de la Escuela para Graduados del INTA.

gremios chicos” (J. Llerena Rosas, entrevista, 28-96-2011)<sup>107</sup>. En este sentido, junto a la presencia de agentes de inteligencia, los testimonios referidos a la situación del INTA en este período también destacan el accionar de “grupos de choque” en los años previos ligados a los gremios. Según la declaración testimonial de una ex investigadora del CNIA de Castelar, dibujante y auxiliar de investigación del Instituto de Botánica, “no fue sólo la inteligencia militar, no sólo los directivos de INTA, sino también la derecha peronista que estaba en la dirección nacional de ATE” (Elicabe, 2004)<sup>108</sup>. Al respecto, afirma un ex secretario general de APINTA que “ser gremialista” fue, en este período, “una forma de proteger al INTA Castelar” del accionar de distintas organizaciones políticas<sup>109</sup>.

Al día siguiente del asesinato de Carlos Llerena Rosas, el FIP sacaba un comunicado resaltando su compromiso político y su participación como activista gremial, y como técnico de INTA, en el que afirmaba:

Carlos Llerena Rosas, miembro del Comité Nacional y del Comité de Provincia de Buenos Aires y ex candidato a intendente de Cnel. Dorrego, ha sido ultimado por la banda asesina que está diezmado los cuadros del movimiento obrero. Además de ser un militante revolucionario, el compañero caído fue un abnegado defensor de los intereses obreros como dirigente sindical de APINTA y un insobornable defensor del patrimonio nacional como técnico de INTA (FIP, 1974)<sup>110</sup>.

---

<sup>107</sup> Afirma, además, que el día del secuestro su hermano viajó expresamente a Buenos Aires para participar de la realización de un congreso de la CGT en la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) dos días antes de lo previsto, en el que se discutiría el ingreso del gremio APINTA, posición que como mencionamos no compartía. El mismo se llevó a cabo en simultaneidad al velorio de Carlos Llerena Rosas.

<sup>108</sup> Declaración testimonial de Silvia Eva Elicabe, dibujante y auxiliar de investigación del Instituto de Botánica del CNIA del INTA, en “N/N sobre privación ilegal de la libertad” bajo expediente N 14.576/2004 tramitada ante el Juzgado N 3, Sec. N 6, Tribunal de Comodoro Py

<sup>109</sup> “Castelar estaba prácticamente copado por el ERP, la JTP, etc., etc. y comencé a vislumbrar que había que detener todo ese atropello (...) por algunas situaciones donde enfrenté a esas organizaciones, los afiliados de APINTA me eligieron secretario general de la seccional (...) Comenzamos a poner freno a hechos que nada tenían que ver con los objetivos institucionales. Después de marzo del 76 continué con mis tareas habituales en genética y otras (dibujo técnico, análisis de laboratorio, cruzamientos a campo, etc.)”. Francisco Rodríguez, Departamento de Apoyo del CNIA. Testimonios recopilados en una publicación del organismo sobre la historia del CNIA. Véase INTA (2003: 26).

<sup>110</sup> Titulado “Hasta la Victoria Compañero Llerena”, el comunicado del FIP era firmado por Gabriel Alberto Claverie (Secretario de Prensa) y Víctor Hugo López (Secretario General) en Cnel. Dorrego, 31 de octubre de 1974.



Aludiendo al conflicto suscitado por la formulación del proyecto de Ley Agraria, que por entonces se encontraba en pleno debate y al que vinculaba a la muerte de Llerena Rosas, agregaba:

Quienes conocían su acción inquebrantable en apoyo de la Ley Agraria y su lucha sin desmayos contra el parasitismo oligárquico, no pueden abrigar dudas sobre los fines de este cobarde crimen. Resuenan aún las palabras amenazantes de Celedonio Pereda [presidente de la SRA], denunciando a *los infiltrados del INTA*, y está en pie el odio y la histeria de la Sociedad Rural, CARBAP, de todos los partidarios de la oligarquía ganadera, contra aquellos que han osado levantar la voz para denunciar el parasitismo y el carácter expoliador de los grandes terratenientes de la pampa húmeda” (FIP; 1974, énfasis propio).

En las noticias de distintos medios gráficos se afirmaba que había sido secuestrado “en un Ford Falcon sin patentes” (*La Voz de General Guido*, 08/11/1974)<sup>111</sup>. En sus fichas personales asentadas en el Archivo de la DIPBA, junto a su actividad política y gremial se consignaba un apartado titulado “INTA CNEL. DORREGO”. En éste se mencionaba su labor como extensionista y se registraba en detalle la existencia de los “Clubes juveniles 4-A”. Estos eran un canal institucional del INTA específicamente dedicado al contacto con las juventudes rurales, a través de los que se organizaban diversas actividades recreativas y capacitaciones. Habían sido creados en la década de 1960 a imagen del sistema de extensión rural estadounidense, y constituían uno de los pilares de la actividad de extensión del INTA<sup>112</sup>.

Como en otros espacios, también en INTA toda actividad gremial, política y partidaria fue foco específico de seguimiento. Las tareas de inteligencia realizadas al interior del organismo en los años previos al golpe militar reiteran referencias a las asociaciones gremiales presentes, ATE (Asociaciones de Trabajadores del Estado) y APINTA (Asociación de Profesionales del INTA), junto a averiguaciones vinculadas a la militancia o participación política de los trabajadores del instituto en organizaciones y

---

<sup>111</sup> Fue uno de los primeros casos incluidos en el juicio a la Junta con el objeto de analizar la participación de la AAA. Véase (*Perfil*, 8/10/1985).

<sup>112</sup> Un análisis de las actividades de extensión rural del INTA se realiza en el capítulo III.

partidos políticos<sup>113</sup>. En 1973, ya se había elevado el pedido de investigar la presencia de personal del INTA vinculado al Partido Comunista Argentino (PCA), lo que era argumentado en función de informar que “el PCA y sus colaterales habrían impartido instrucciones en el sentido de incrementar el grado de infiltración, adoctrinamiento y captación en el sector que comprende el INTA” (DIPBA, Mesa C., Legajo 451). Esta actividad era relacionada con la intención del partido de profundizar su actuación en el ámbito rural, la que también se mencionaba en vinculación con las Ligas Agrarias y UPARA. Otro de los focos eran las cooperativas agropecuarias vinculadas con el INTA. Sobre la “infiltración” que estos grupos podían realizar en el INTA, el informe “Infiltración de Elementos Comunistas en el INTA” explicaba que no había sido registrada al momento (mayo de 1973) en sus autoridades, y que era probable que ésta se realizara “en los medios del interior”. En especial, afirmaba: “se considera probable de infiltración los sectores de Santa Fe y litoral, donde las condiciones de trabajo son más proclives a aceptar un tipo de cambio que eventualmente se pueda propiciar en base a ideologías del comunismo” (DIPBA, Mesa C, Varios, Legajo 451). La conflictividad agraria, persistente al momento en distintas regiones del país, aparecía como un foco de potencial conflicto.

Las descripciones en los informes de espionaje se acompañaban con acusaciones fabuladas, aludiendo, por ejemplo, a posibles ataques bacteriológicos con aviones de INTA o a supuestos contendores de armas dentro de sus instalaciones, que pese a su inverosimilitud, acarrearón acciones represivas concretas<sup>114</sup>. En conexión con la veracidad de los informes que circulaban a pedido de los servicios de inteligencia, que insistían en preguntarle por el uso de los aviones del organismo como correo de Montoneros, agrega que “Tenían la idea absurda de que estaba relacionada con Montoneros” (entrevista, 15-11-2011).

Los informes también reconstruían la actividad gremial de distintas estaciones experimentales. En el caso de la estación experimental de Pergamino, las referencias

---

<sup>113</sup> Véase archivo DIPBA, registro de la nómina de la comisión directiva del sindicato de APINTA en Pergamino, con datos personales e ideología política atribuida a cada uno (DIPBA, “Asociación del personal del INTA, APINTA”, Mesa B. legajo 156); sobre el CNIA y la estación experimental San Pedro (DIPBA, “Infiltración Extremista INTA Castelar y San Pedro”, Mesa DS, Varios, Legajo 1785). También el Batallón 601 informa “sobre infiltración extremista en el INTA” y brinda “información sobre delegados gremiales de ATE INTA” (DIPBA, “ATE”, Mesa B, Carpeta 90, legajo 5).

<sup>114</sup> Un ejemplo de esta modalidad se observa en las referencias al equipo de Ecología, al que nos referimos a continuación, al que se lo acusaba de “estar trabajando en agresión bacteriológica destinada a usarse contra unidades militares” (DIPBA, Mesa DS, Varios, Legajo 3769).

estaban ligadas fundamentalmente a la actividad del gremio APINTA de reciente creación, en la que se enfrentaban tres listas distintas<sup>115</sup>. Las conquistas laborales del momento habían alcanzado algunas modificaciones en las rutinas de trabajo que incluían la unificación del traslado de personal, que hasta entonces transportaba en forma separada obreros y profesionales, la implementación de una guardería infantil y el cuestionamiento al modo de elección del director de la estación experimental, del que pretendían participar<sup>116</sup>. En ese sentido, según recuerda un investigador de la estación experimental que participaba de la actividad gremial, “las reivindicaciones eran sociales y también sobre las tareas del INTA”. Pocos días antes del golpe, el 19 de marzo, se produjeron tres detenciones de integrantes de la estación experimental de Pergamino. Una de las personas detenidas, técnica del laboratorio de suelos, recuerda haber recibido una advertencia previamente, “Néstor Bárbaro, que estaba en el Consejo Directivo, me dijo ‘Vos estás en un montón de listas’. Ya se hablaba de listas en 1973” (entrevista, 26/11/2010)<sup>117</sup>.

En noviembre de 1975 el Batallón 601 -servicio de inteligencia militar del ejército- solicitó a la DIPBA un informe sobre un grupo de personas, pertenecientes al Centro Nacional de Investigaciones Agropecuarias del INTA ubicado en Castelar. Titulado “Adoctrinamiento marxista en INTA Castelar”, comenzaba con un cable, en el que se afirmaba la existencia de una escuela de adultos, en donde, según el informe, “se impartiría instrucción marxista” (DIPBA, Mesa DS, Varios, Legajo 4082). A partir de esta información, se procedió a investigar a los trabajadores de INTA que participaban, y su posible vinculación con alguna organización política. Como señalamos, la “Escuelita” Eva Perón había sido organizada por trabajadores del CNIA de Castelar. Su principal público eran obreros y personal de apoyo del INTA, para los que se organizaban planes de alfabetización. La tarea era parte de una militancia gremial, en la que ATE tenía un lugar destacado. El 15 de diciembre de 1975 se detallaban estas

---

<sup>115</sup> El gremio se había creado en 1969. “Una era una lista peronista de derecha, otra de centro donde se mezclaban radicales, peronistas, gente del PC; y había una de izquierda” (entrevista, 12/07/2010), según caracteriza un economista de la estación experimental de Pergamino, dejado cesante en 1976 y reincorporado en 1985.

<sup>116</sup> El pedido era que la designación del director fuera producto de una terna producida por todos los trabajadores de la estación experimental y ofertada a la Dirección Nacional (entrevista colectiva a integrantes y ex integrantes de la estación experimental, 17/07/2011).

<sup>117</sup> Como en otros casos ya mencionados, fue obligada a firmar la cesantía por el jefe de personal de la estación experimental, quien se la llevó en persona al penal de San Nicolás donde permanecía detenida. Se reincorporó al INTA en democracia, pero nunca volvió a ser nombrada como planta permanente y en la reducción de personal operada en 1990 volvió a ser cesanteada.

actividades, señalando la presencia de “activistas e instructores ideológicos ubicados dentro de la línea trozkista [sic]”. Como explicaba el personal de inteligencia, fuera del predio principal del CNIA pero, dentro del INTA, funcionaba una escuela primaria. En una construcción lindera, también dentro de la propiedad del INTA, funcionaba, la escuela para adultos organizada por trabajadores del instituto agremiados en ATE y en contacto con la JTP. Se dejaba constancia que, finalizado el horario de clases en la escuela, se impartía un “adoctrinamiento marxista” (DIPBA, Mesa DS, Varios, Legajo 4082). Según Giberti, posteriormente la confusión por parte de las fuerzas militares entre “la Escuela”, en alusión a la Escuela para Graduados en Ciencias Agropecuarias (una experiencia pionera en la formación de posgrado clausurada en este período, que abordaremos en los próximos capítulos) y “la Escuelita”, ambas ubicadas en el predio de Castelar, iba a dar lugar a la detención de docentes de las maestrías (Ramírez, 2011)<sup>118</sup>.

Entre los integrantes de la “Escuelita”, figuraban miembros de un grupo de investigación del CNIA dirigido por Jorge Morello<sup>119</sup>. Precisamente, sobre este grupo de trabajo se sucedieron sucesivos pedidos de informes desde la DIPBA. Su trayectoria imbricó distintos componentes relevantes. ¿Qué fue del “grupo de Ecología” del CNIA de Castelar?

## **1.2. El grupo de Ecología de INTA Castelar: radiografía de un equipo de trabajo pionero**

Jorge Morello había formado parte de la camada de profesores renunciando de la Universidad de Buenos Aires en 1966, durante la dictadura encabezada por Onganía. En ese momento ingresó al INTA. A través de un acercamiento con el entonces director nacional del instituto, Ubaldo García, le fue encargado un relevamiento en el noroeste del país destinado a generar un inventario de grandes unidades ecológicas de la región. A través de un convenio entre el Centro Regional Chaqueño del INTA y la provincia de Formosa, en 1968 se conformó el Laboratorio de Ecología y Cartografía, bajo dirección

---

<sup>118</sup> Como veremos, también la propia actividad de la Escuela para Graduados era motivo de conflictos.

<sup>119</sup> Ex investigador INTA Castelar, ecólogo, Dr. en Ciencias Naturales por la Universidad Nacional de la Plata, miembro del GEPAMA (Grupo de Ecología y Paisaje del Medio Ambiente-FADU) y profesor emérito de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU) de la UBA hasta su fallecimiento el 27 de agosto de 2013.

de Morello, en la estación experimental El Colorado del INTA<sup>120</sup>. Fue enviado al Chaco con la misión de inventariar la zona a partir de un mapa que diera cuenta de las heterogeneidades ambientales, que a su vez sirviera de insumo para el planeamiento de actividades del INTA. Mediante un convenio con la NASA, lograron acceder a imágenes térmicas obtenidas por satélites, que primero eran probadas en aviones que recorrían el Amazonas y sobrevolaban el Chaco argentino. Luego de un año de trabajo en la estación experimental del INTA en Chaco, recibió la visita del director nacional. En reconocimiento al trabajo iniciado, se lo autorizaba a crear su propio equipo de investigación. Al fin llegaba al lugar “donde se concentraba el saber” (Morello, entrevista, 5-11-2009). Esa era la visión que Morello, como muchos integrantes del INTA, tenían del Centro Nacional de Investigaciones Agropecuarias del instituto ubicado en Castelar. Corría el año 1969. Morello se puso al frente del Grupo de Ecología, dependiente del Instituto de Botánica Agrícola del CNIA, y comenzaron las investigaciones ligadas a la conservación ambiental, área de desarrollo aún escaso en el país.

Inicialmente, el equipo estuvo conformado por catorce integrantes, entre los que había cinco becarios del CNIA, dos investigadores contratados por el Centro Regional Chaqueño y la provincia de Salta, dibujantes cartógrafos, estudiantes y ayudantes técnicos cuya contratación también dependía de fondos externos al INTA<sup>121</sup>. Esta situación era resistida por las autoridades del CNIA de Castelar que veían con preocupación nuevos ingresos de personal al Centro que no pasaban por las designaciones habituales, frente a los que Morello argumentaba que “una de las tareas fundamentales más en Castelar es la de formar ecólogos en Inventarios de Recursos,

---

<sup>120</sup> El Centro Regional cubre el accionar del INTA en las provincias de Chaco y Formosa, a través de las estaciones experimentales del INTA El Colorado, Colonia Benítez, Las Breñas, Sáenz Peña e Ingeniero Juárez.

<sup>121</sup> Según la nómina de personal elevada por Morello, inicialmente el equipo estaba conformado por: Dina Sejzer, bióloga, coordinadora del trabajo de fotointerpretación, contratada por el Centro Regional Chaqueño; Guillermo Goldstein, biólogo, coordinador del trabajo de fotointerpretación, contratado por el gobierno de Salta; Miguel Sarraceno, estudiante de Agronomía, contratado por el Centro Regional Chaqueño; Rodolfo Burkhart, estudiante de Agronomía, becario del CNIA; Silvia Hynes, estudiante de Ciencias Biológicas, becaria del CNIA; María Cristina Saucedo, estudiante de Agronomía, becaria del CNIA; Roberto Candia, dibujante cartógrafo contratado por el gobierno de la provincia de Formosa; Prudencio Vidal Medina, dibujante cartógrafo, perteneciente a la estación experimental El Colorado; Marta Tomassella, ayudante cartógrafa, con sede de trabajo en Castelar; Marta Sierra, secretaria dactilógrafa (estudiante de Biología) con sede en Castelar; Tomás Schilichter, estudiante de agronomía, becario del CNIA; Néstor Mocoroa, estudiante de Agronomía, becario del CNIA; Inés Malvárez, estudiante de Ciencias Biológicas, becaria del CNIA; Carlos Villordo, dibujante cartógrafo, contratado por la provincia de Chaco (INTA-CNIA, 1969).

que se incorporen paulatinamente al personal permanente del Centro regional Chaqueño” (Morello, 1969)<sup>122</sup>.

Dentro de la Facultad de Agronomía UBA, existía otro equipo de trabajo liderado por Alberto Soriano<sup>123</sup>. Según Morello, con Soriano “más o menos habíamos dividido el país, él iba a trabajar de Río Negro a Tierra del Fuego y yo en la llanura Chaco-Pampeana”. En la visión de quienes por entonces pasaron a integrar como becarios el equipo de Morello en el CNIA de Castelar, el equipo de la UBA era visto como conservador, en términos del tipo de productores y zonas geográficas relevadas, mientras que el trabajo de Morello despertaba inquietudes por prometer una visión alternativa:

Soriano trabajaba más en función de la mejora de la producción y de la organización de la producción en términos de aceptar las condiciones de tenencia de la tierra, con grandes terratenientes, mientras que Morello la jugaba más bien a trabajar con organismos del Estado y en función de una redistribución de la producción y de la tierra más equitativa (ex becario, entrevista, 5-08-2010).

En este sentido, la elección de regiones comprometidas como periféricas por la problemática social y geográfica era una de las marcas distintivas del equipo. Según recuerda una investigadora del INTA, que ingresó al grupo como becaria siendo todavía estudiante, continuaron trabajando fundamentalmente en relevamientos de territorios ecológicos en el Chaco. A partir de esta tarea, recuerda que “Lo acusaron de estar trabajando en el ERP en el monte, lo que nunca se sabe es que el financiamiento que tenía Morello venía de la NASA, con objetivos bélicos para Vietnam” (entrevista, 12-07-2010) . La fuente de financiamiento fue objeto de grandes discusiones, porque las mejores fotografías aéreas provistas por la NASA les permitían probar filtros para conocer el tipo de vegetación y los niveles de humedad, entre otras variables ambientales, pero a la vez, uno de los filtros detectaba emisiones humanas.

---

<sup>122</sup> En nota dirigida al director del Instituto de Botánica Agrícola, 24/10/1969.

<sup>123</sup> Ingeniero agrónomo por la UBA en 1942, Soriano fue titular desde 1957 de la cátedra de Fisiología vegetal y Fitogeografía de la Facultad de Agronomía y luego profesor emérito de la UBA, fundador del Instituto de Investigaciones Fisiológicas y Ecológicas vinculadas a la Agricultura (IFEVA) y de la Escuela para Graduados de la Facultad de Agronomía. Falleció el octubre de 1998.

El Grupo de Ecología era resultado de la incorporación de nuevas camadas de investigadores y becarios, en su mayoría biólogos de formación con una minoría de ingenieros agrónomos (a contramano de la tendencia dominante en el instituto), que muchas veces entraban en conflicto con líneas tradicionales de la institución. Mientras que para uno de sus ex integrantes estos cuestionamientos eran “en buena medida una cuestión ideológica” asociada a la propia trayectoria de Morello, según el propio Morello los conflictos fueron desatándose por las actividades de sus becarios.

Los becarios dirigidos por Morello, junto a otros trabajadores de Castelar, protagonizaban por entonces una serie de reclamos ligados a las condiciones (pedido de guarderías y licencias) y a los productos del trabajo de las distintas experimentales (consiguieron organizar un sistema de reparto de los excedentes no perecederos producidos en distintas experimentales entre los empleados del CNIA, por número de hijos). De sus integrantes, algunos tenían una activa participación en las tareas de alfabetización en “la Escuelita” y en una acción gremial, política y barrial. Según un miembro del equipo, por entonces delegado gremial de ATE INTA e integrante a su vez de la JTP, “hacíamos una contribución técnica, confiados en que podía servir pero no estaba tanto por ese lado el compromiso” (entrevista, 4/03/2011). En este sentido, la disociación, desde su propio punto de vista, entre las actividades de investigación y las desarrolladas como parte de una militancia gremial y/o política, se corresponde con visiones similares de otros integrantes del INTA. El eje de la actividad política y gremial poco tenía que ver con las agendas del instituto. Sin embargo, en estas esferas escindidas se advierten conexiones cuando se indaga en los contenidos de las investigaciones, las disputas asociadas a los mismos y las vinculaciones con las políticas sectoriales que por entonces configuraban distintas pujas en el escenario nacional. En este sentido, también los objetivos y destinatarios de los conocimientos producidos en el equipo eran motivo de debate. Según Morello, muchos de los nuevos investigadores pedían el traslado a estaciones experimentales más pequeñas, en donde pudieran trabajar en torno a las necesidades de las comunidades rurales y en función de productores descapitalizados. Dentro de los destinos solicitados, que buscaban realizar un trabajo que trascendiera del Centro de Investigación en un trabajo de mayor inserción territorial, se

encontraba la estación experimental de Famaillá, a 35 kilómetros de San Miguel de Tucumán, en el noroeste argentino<sup>124</sup>.

El contexto político y social del país atravesaba también estas prácticas y hasta las concepciones existentes sobre el sentido general de las actividades desarrolladas y la función normativa de la política tecnológica del INTA. Sobre la orientación de las investigaciones propuesta, afirma sobre los contenidos el mismo integrante del equipo

Se entendía que trabajar sobre la evaluación de recursos naturales, que era lo que hacíamos ahí en Ecología, era una forma de racionalizar y sistematizar el valor de la tierra y a la larga contribuir a que la producción se sistematice, se oriente, se planifique (entrevista, 04-03-2013).

Era, afirma, “un análisis más que nada técnico de superación de lo que era el latifundio, de lo que era el uso de la tierra tradicional latifundista” (entrevista, 4/03/2011). En este sentido, el cuestionamiento al rol tradicional del INTA estaba presente, sobre todo en relación a sus destinatarios. Según una de sus integrantes, integrante del equipo como estudiante de Agronomía desde su ingreso al INTA en 1969, en cuanto a los contenidos de la agenda de investigación del grupo, primaba la preocupación por los desarrollos regionales, al igual que la existencia de un “enfoque mucho más holístico, integrando la población, para que las comunidades rurales pudiesen seguir conviviendo con el paisaje”. El hilo conductor estaba dado por fomentar la práctica de una “ecología integrada”, que imbricara el estudio de los patrones de invasión de las especies vegetales, en conexión con las actividades productivas locales y distintos aspectos sociales involucrados que sumaban al trabajo técnico, en otros términos, “para quién tenía que trabajar el INTA” (entrevista, 12-07-2010), agrega.

Por entonces, la línea de investigación de economía agrícola adquiere un fuerte impulso a través de los estudios de posgrado iniciados en la Escuela para Graduados del CNIA, lo que motiva distintos acercamientos con otros profesionales del Centro. Estas actividades también implicaban una renovación institucional y una resistencia interna.

---

<sup>124</sup> La reconstrucción de un equipo de trabajo perteneciente a esta estación experimental, vinculado a la primera cooperativa agropecuaria de trabajo del país, se aborda en el tercer capítulo.



Miembros del equipo empiezan a concurrir a algunos de los seminarios ofrecidos y a colaborar en actividades de docencia en la escuela.

En 1973, el grupo sufre una primera reorganización con el retorno de Morello a la UBA, en el marco de la organización de las cátedras nacionales, quien parte llevando consigo algunos de los integrantes a la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Sin embargo, el equipo continúa funcionando bajo otra dirección. Entre sus principales tareas, es convocado a impulsar los estudios de regionalización con miras a la introducción del Impuesto a la Renta Normal Potencial de la Tierra, en sintonía con la alineación del INTA a las medidas sectoriales impulsadas desde la Secretaría. Desde el grupo de Ecología comenzaron a participar en la regionalización de las zonas agrícolas, “La base científica para determinar la aptitud de uso de las tierras y estimar su valor productivo, a eso se abocó el sucesor”, afirma el investigador.

Morello señala que el equipo fue desestructurado mediante presiones internas y externas, que incluyeron inicialmente la recepción de amenazas atribuidas a la triple AAA. Desde su conformación, el grupo había enfrentado distintos inconvenientes internos. En 1969 se le prohibió el uso de las instalaciones del Centro a cualquier miembro del grupo que no contara con autorización expresa de las autoridades y se le exigió a Morello presentar una nómina detallada del personal bajo su dirección (INTA, 1969). En diciembre de 1972 el director del CNIA dirigió una nota al director nacional del INTA en la que trataba la trayectoria del grupo. Allí mencionaba que conocer el personal bajo dirección de Morello, tal como se había requerido en 1969, había estado justificado luego por “circunstancias más graves”: el asesinato de uno de los estudiantes integrante del equipo “en un enfrentamiento armado con las fuerzas policiales” (INTA-CNIA, 1972)<sup>125</sup>. Agregaba que, habiendo pasado la etapa inicial del equipo en Castelar, abogaba por “descentralizar las tareas” reubicando los estudios en distintas estaciones experimentales del norte argentino. Años después, en 1975 el Batallón 601 solicitó a la DIPBA un pedido de informe sobre Morello. La DIPBA inició una averiguación sobre su persona, recibió del INTA la nómina de personal presentada anteriormente por Morello, la que elevó a su vez al ejército. La acompañaba un informe en el que, junto a las tareas de relevamiento ecológico desarrolladas por el equipo, se lo acusaba de “aprovechar, y al parecer por encargo del ERP, para instalar depósitos de armas y

---

<sup>125</sup> Nota dirigida por Arturo Enrique Ragonese, director del CNIA, a Walter Kugler, director nacional del INTA el 29/12/1972 El estudiante era Néstor Mocoora, militante de las FAP (Militancia, 1973).

municiones en la selva” y de trabajar en “ataques bacteriológicos” (DIPBA, Mesa DS, legajo 3769, 1975)<sup>126</sup>.

“Me avisan que han encontrado mi teléfono en las listas de la gente que habían agarrado y que tratara de salir. Conseguí un vuelo y salí” (Morello, entrevista, 5-11-2009), afirma. Partió al exilio llevando consigo a otros tres investigadores, con los que continuó trabajando en México. Otro de sus miembros fue secuestrado poco antes<sup>127</sup> y una integrante del equipo, Marta Sierra, reubicada en la guardería de Castelar, donde continúa trabajando hasta ser secuestrada de su domicilio el 30 de marzo de 1976.

La militancia gremial y política de algunos investigadores y becarios, los conflictos en torno a las políticas agropecuarias impulsadas en diálogo con realineación en ciernes dentro y fuera del INTA, y las tensiones presentes dentro de uno de los centros de mayor jerarquía, pesaron como factores de distinto peso relativo para la desestructuración del grupo<sup>128</sup>.

Para ese momento, el estado de las investigaciones realizadas por el equipo indicaba que estaba próxima la introducción del uso de imágenes satelitales, en consonancia con una fuerte preocupación por los desarrollos regionales. Según evalúa una antigua integrante del equipo y actual investigadora del INTA: “Los equipos más diezmados, atacados e incluso los *conocimientos negados* como tales fueron aquellos que desde las diferentes disciplinas, trataron de integrar los aspectos sociales con los productivos, y de reconocer las profundas diferencias e inequidad entre los sectores rurales” (Saucede, 2007: 103).

¿Es posible, entonces, identificar “conocimientos negados” en el organismo? En este sentido, junto a referencias que aludían específicamente a la filiación partidaria, política y/o gremial, claro objetivo de las tareas de inteligencia y del accionar represivo, los informes también registraron reportes sobre actividades de investigación y extensión del organismo. Antes de explorar su conexión con el estado de las agendas de trabajo del organismo, abordaremos la implementación de los datos recabados que había de producirse con la intervención militar.

---

<sup>126</sup> El informe, bajo el título “Se solicita actividades del Dr. Morello” fue realizado por la sección regional de la DIPBA de San Justo.

<sup>127</sup> Miguel “Chufó” Villarreal, militante Montonero, participante externo del equipo como técnico de CNEA, quien llega sin vida a la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).

<sup>128</sup> Con el retorno de la democracia, Morello fue invitado por el INTA a reincorporarse. No regresó a la institución y pasó a ocupar la dirección de Parques Nacionales.

### **1.3. La intervención militar del INTA (1976): instrumentación de la cartografía represiva**

A partir del autodenominado “Proceso de Reorganización Nacional” que en 1976 usurpó el poder, el INTA fue intervenido al igual que el conjunto de las dependencias estatales. El 24 de marzo de ese año, asumieron el general Jorge Rafael Videla, el almirante Emilio Massera y el brigadier Orlando Ramón Agosti. Con el objetivo de neutralizar conflictos internos, el modelo institucional elegido en la militarización del aparato estatal descansó en un reparto tripartito del poder entre las tres Fuerzas (Canelo, 2008; Castiglione, 1992)<sup>129</sup>. En el mismo sentido, la Junta Militar fue organizada como el órgano máximo de gobierno. Este criterio de reparto fue utilizado tanto en el ejercicio del plan represivo como en las intervenciones a gobernaciones, sindicatos, obras sociales, directorios de empresas estatales y organismos públicos.

La intervención realizada durante la última dictadura en las instituciones que integran el complejo científico-tecnológico local constituye, como hemos señalado, una temática escasamente explorada en los estudios sobre el pasado reciente a excepción de algunos estudios de caso (como el CONICET y la CNEA), y de estudios más panorámicos sobre la evolución histórica de la política de investigación científica y tecnológica en el país que han incorporado algunas referencias a la situación de los organismos en este período<sup>130</sup>. Así como los estudios económicos y sociales de la ciencia prácticamente no han incorporado trabajos empíricos sobre la producción local de ciencia y tecnología de los principales organismos en este período; el impacto represivo en los organismos de ciencia y técnica no ha sido indagado por los estudios sociales de la ciencia, ni por la historiografía abocada al período. Para el INTA en particular no existen trabajos previos que aborden su situación en este período, ni desde el punto de vista de la evolución de sus actividades científicas y tecnológicas, ni en relación al impacto de la violencia estatal, por lo que no es posible contar con fuentes

---

<sup>129</sup> El esquema no inhibió los históricos conflictos entre la Armada y el Ejército, sino que los expresó en la cúpula del poder militar en la figura de Videla y Massera (Canelo, 2008).

<sup>130</sup> Una revisión de esta bibliografía se realizó en el apartado “Ciencia, tecnología y dictadura: problemáticas y estudios en curso”, parte de la Introducción.

secundarias que aporten datos para la reconstrucción histórica de su situación a partir de 1976.

Uno de los primeros comunicados de la Junta militar explicitó que todo el personal ligado a la prestación de servicios públicos esenciales pasaba a estar directamente subordinado a la autoridad militar. Ubicado bajo la órbita de la Marina, al frente del INTA fue designado primero un interventor militar, el capitán de Fragata de Infantería de Marina Alberto Rafael Heredia. En octubre de 1976, una nota firmada por el capitán de navío Hugo Montagni, delegado naval de la Junta Militar en el Ministerio de Economía, fechada el 6 de octubre de 1976 y asentada en la foja de conceptos que evaluaba su accionar como interventor del INTA, destacaba que había cumplido “importantes funciones en un medio desconocido y conflictivamente ideológico marxista, habiéndose desempeñado con alto grado de eficiencia” (Archivo General de la Armada, Foja de Conceptos de Alberto Rafael Heredia, 1976)<sup>131</sup>. En el mismo tenor, en un pedido de reconsideración de una evaluación desfavorable que Heredia dirigió el 15 de noviembre de 1978 al presidente de la Junta de Calificaciones (el almirante Armando Lambruschini) expresaba que:

Por orden del Secretario General Naval me hice cargo del INTA. En ese momento es de conocimiento de la Superioridad que el INTA era un centro de Instrucción de la Subversión, por lo cual este destino era desde mi punto de vista eminentemente operativo. La tarea cumplida por el suscripto también lo confirma y es de conocimiento del Comando de la Armada interpretando que fue bien evaluada (AGA, legajo militar de Alberto Rafael Heredia, 1978).

Las referencias al INTA coincidían con las caracterizaciones previamente registradas en distintos soportes (los informes de la DIPBA, las referencias en la prensa). La tarea “eminentemente operativa” del interventor militar duró cinco meses, en los que se implementaron el grueso de las cesantías y se coordinó un operativo militar en el Centro de INTA Castelar. Posteriormente, Heredia fue nombrado delegado de la Junta Militar en la Secretaria de Agricultura y Ganadería y ocupó diversos

---

<sup>131</sup>. Dentro de su legajo militar, en la foja de conceptos se evaluaban distintas “cualidades” (disciplina, confiabilidad, porte militar, expresión escrita y oral, imaginación) así como los cargos desempeñados.

cargos<sup>132</sup>. La intervención del INTA recayó en un civil, David Arias, de profesión abogado y activo inversor del grupo La Martona S. A. (Castellani, 2009). Arias fue nombrado por decreto, “a propuesta del ministro de Economía” (Cilley, 2004), según la declaración testimonial de quien ocupara la presidencia de INTA al momento del golpe de Estado de 1976.

Como señala Canelo (2008), la alianza cívico-militar que promovió el golpe de Estado estuvo conformada por una nueva generación de militares y por cierta derecha tradicional que confluyó inicialmente con una nueva corriente del liberalismo económico, de corte liberal tecnocrático (O’ Donnell, 1977; citado en Canelo, 2008). El diagnóstico en común entre civiles y militares consistía en señalar la necesidad de refundar la nación bajo un proyecto que supliera la ausencia de una élite dirigente virtuosa, tras el agotamiento del de la Generación del Ochenta. Esta “refundación” se asentaría en dos planos, la “lucha contra la subversión” y la “normalización económica” (Canelo, 2008: 13)<sup>133</sup>. Para el primero, se erigió una acción sistemática que combinó la orquestación de un dispositivo ilegal con herramientas jurídicas e institucionales. Este dispositivo se basó fundamentalmente en el accionar represivo de “grupos de tareas” a escala nacional, centralizados por las Fuerzas Armadas, y en el establecimiento de centros clandestinos de detención (ubicados en dependencias policiales, militares y civiles) donde eran conducidas, retenidas, torturadas, y en muchas ocasiones asesinadas las personas detenidas-desaparecidas<sup>134</sup>.

El accionar represivo desplegado en el INTA incluyó detenciones y secuestros a trabajadores del organismo, implementación de cesantías, reorganización de los cuadros institucionales y aplicación de traslados de personal como herramienta punitiva. La

---

<sup>132</sup> Asesor del Ministerio de Bienestar Social (1977), jefe de la Comisión de las FFAA en el Congreso (1978), en 1981 solicitó el retiro voluntario. Había ingresado en 1947 a la Marina de Guerra como cadete del escalafón de infantería de marina. En 1977 alcanzó el grado de capitán de navío. (AGA, Legajo de Servicios de Alberto Rafael Heredia).

<sup>133</sup> Como señalamos en la introducción, Schvarzer (1992) y Canitrot (1980; 1982), seguidos posteriormente por Pucciarelli (2004), han remarcado la presencia de viejas prácticas corporativas e intervencionistas que produjeron tensiones entre la orientación liberal sostenida por el ministro Martínez de Hoz y fracciones de las Fuerzas Armadas y la gran burguesía.

<sup>134</sup> Un análisis del funcionamiento de estos centros y de la lógica del aparato represivo puede verse en Calveiro (1998).

intervención estuvo acompañada por cambios en los criterios de selección del personal, y en relación a las tareas desempeñadas<sup>135</sup>.

El 29 de marzo de 1976, día de cobro, el CNIA ubicado en Castelar fue objeto de un operativo militar de gran despliegue. El predio fue rodeado “con tanques, con camiones y tropa” y al personal le “fueron leyendo los nombres de una lista” (Elicálbe, 2004), en base a la cual algunos eran subidos en distintos camiones y otros comunicados de su inclusión en el listado de cesantías. Gran parte del personal fue conducido al comedor del Centro e interrogado, sometidos algunos a simulacros de fusilamiento. Decenas fueron detenidos posteriormente y permanecieron por sesenta días en una comisaría de zona. Los testimonios registrados judicialmente se refieren a alrededor de doscientas detenciones<sup>136</sup>. Días antes del operativo, un investigador del Instituto de Zoonosis y delegado gremial de ATE-INTA había sido detenido y liberado en el predio del INTA Castelar. Cuando se produjo el operativo el 29 de marzo fue nuevamente detenido, simultáneamente cesanteado y retenido en una comisaría de El Palomar hasta el dos de mayo. En su cautiverio, en el que fue severamente torturado y obligado a firmar la cesantía<sup>137</sup>, convivió -según declarara- con otros detenidos pertenecientes al INTA, “personas del sindicato, delegados y profesionales” (Benedetti, 2004).

Según consta en documentos desclasificados, los acontecimientos fueron seguidos de cerca por el gobierno estadounidense. Mediante diversos telegramas se informaba la existencia de arrestos en institutos de investigación, en los que se mencionaba la situación del INTA. Bajo el título “*Firings and Arrest in Argentina Technological Institutes*” (FOIA, web), un telegrama emitido el 12 de abril de 1976 mencionaba la existencia de arrestos y de 300 cesantías en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), y describía la situación del INTA<sup>138</sup>. Refería la existencia de una “vendetta” durante la presidencia de Cámpora, que había afectado a investigadores del instituto con antecedentes de vínculos con los Estados Unidos,

---

<sup>135</sup> Cambios en las agendas de investigación y extensión son analizados en los siguientes capítulos, junto a un informe institucional referido a estas temáticas elaborado por la intervención como balance de los primeros dos años.

<sup>136</sup> Muchos de los cuales figuran en la causa judicial citada, llevada adelante por los hijos de Marta Sierra, técnica del INTA que integraba el equipo de Ecología del Instituto. Agradecemos nuevamente a los querellantes, Guido y Nicolás Prividera, por facilitar el acceso a la documentación.

<sup>137</sup> Situación que se repite en distintos casos similares.

<sup>138</sup> Los documentos citados pertenecen a los materiales desclasificados del Departamento de Estado de los Estados Unidos que integran la colección *State Argentina Declassification Project (1975-1984)*, disponibles en <http://foia.state.gov/SearchColls/CollsSearch.asp>.

situación que estaba revirtiéndose siendo los “anti-americanos” y “extremistas izquierdistas” los despedidos:

*(...) particularly in INTA, there was an anti American vendetta during Campora presidency wich resulted in considerable difficulty for researchers with history of ties to U.S. Situation now appears to be largely reversed, and it is the anti Americans and leftist extremist who are being sacked. We would not report not to be surprised, how ever, if mistakes were made in some borderline cases. Thus, while general thrust of current clean out will improve U.S-Argentine collaboration possibilities, there may will be individual cases of nature cited reftel [reference telegram], and Embassy will endeavor to report as suggested (FOIA, web).*

(...) durante la presidencia de Cámpora hubo, especialmente en el INTA, una vendetta antinorteamericana que causó gran dificultad a investigadores con una historia de vínculos con E.E. U.U. Actualmente la situación parece haberse revertido considerablemente, siendo los izquierdistas y anti norteamericanos los que sufren despidos. Nos nos sorprendería si se cometieron errores en algunos casos límite. De este modo, aunque el actual impulso general de *saneamiento* [sacar los izquierdistas y anti norteamericanos] mejorará las posibilidades de colaboración entre E.E. U.U. y Argentina, puede haber casos individuales de una naturaleza como la mencionada en el telegrama de referencia y la embajada se compromete a reportar del modo sugerido (FOIA, web).

Así, se reconocía que el “saneamiento” sería favorable a las colaboraciones entre Estados Unidos y Argentina, al tiempo que se reconocía la existencia de algunos “errores”, entre los que se incluía a antiguos becarios de programas financiados por agencias norteamericanas. Por otro lado, por entonces la comunidad científica internacional comenzaba a hacerse eco de las denuncias recibidas por colegas argentinos. El informe de la AAAS (1981) incluía años después menciones a

investigadores de la CNEA y el INTI, pero no contaba con datos sobre la situación del INTA.

Pertenecientes al mismo Centro de Investigaciones ubicado en Castelar, otros cuatro integrantes del INTA fueron secuestrados y permanecen desaparecidos. Dos de ellos, Gustavo Giombini y Carlos Costa, técnicos del Instituto de Suelos, delegados gremiales y militantes políticos, fueron detenidos en la vía pública y en su puesto de trabajo de INTA, respectivamente<sup>139</sup>. María José Rapela, ingresada embarazada a la ESMA, trabajaba como bibliotecaria del mismo instituto, y Marta Sierra había integrado el equipo de Ecología y para entonces cumplía funciones en la guardería del Centro<sup>140</sup>.

Miembro de la agencia de extensión rural de Río Cuarto, Rita Alés de Espíndola fue secuestrada y desaparecida<sup>141</sup>. A los asesinatos de Carlos A. Llerena Rosas y Néstor Mocoroa, producidos antes del golpe militar, se sumó el de Juan Carlos Prádanos, investigador de la estación experimental de Ascasubi, secuestrado por un grupo de tareas tres días antes del golpe y posteriormente asesinado.

Simultáneamente al operativo en Castelar, fue ocupada por personal militar la estación experimental de Famaillá, en la provincia de Tucumán, presencia que se extendería por dos años. La estación experimental de Pergamino registró, también, presencia militar en dos oportunidades. Seis trabajadores fueron detenidos. Como mencionamos, entre ellos se encontraba el jefe de la agencia de extensión rural, que ya había sido dejado cesante, y técnicos que habían participado de la conformación seccional del gremio, APINTA<sup>142</sup>.

En coincidencia con las actividades desempeñadas por muchos de quienes fueran víctimas del terrorismo de estado dentro del INTA, un investigador del CNIA -desde 1968 hasta su cesantía en 1976- declaró que los cesanteados eran “militantes políticos y activistas gremiales” (Ramazzotti, 2004). También la existencia de tensiones

---

<sup>139</sup> Carlos Costa, de 26 años, fue detenido el 13/08/1976 en el CNIA de Castelar (CONADEP, legajo 2901). Gustavo Rodolfo Giombini, de 28 años, en su domicilio el 11/08/1976 (CONADEP, legajo 311). Ambos militaban fuera del INTA en OCPO.

<sup>140</sup> Marta Sierra, de 35 años, fue detenida en su domicilio mientras cumplía licencia por maternidad el 30/03/1976 (CONADEP, legajo 155). María José Rapela fue detenida junto a su esposo el 30/07/1977 (CONADEP, legajo 445).

<sup>141</sup> El matrimonio Espíndola fue secuestrado a fines de 1977 en Los Sauces, Córdoba y retenidos en el centro clandestino La Perla. Rita Alés estaba embarazada, su hija nació en cautiverio y fue recuperada por sus familiares.

<sup>142</sup> Durante el mes de mayo de 1973, antes de que se desarrollaran los comicios, había sido designado como nuevo jefe de la estación experimental de Pergamino, el Ing. Agr. Jorge Alejandro Josifovich, (CD INTA, Acta 660, 22-05-1973). El conjunto de los testimonios de ex integrantes e integrantes cesantes de la estación experimental, que registra el mayor índice de cesantías de todo el INTA, alude a su responsabilidad en la confección de las listas.



personales y rivalidades académicas son señaladas en distintos relatos, como elementos que estuvieron presentes en la conformación de las cesantías. En este sentido, durante la dictadura las rivalidades pre-existentes entre equipos de investigación también se sirvieron en ocasiones del marco de “autoritarismo interno” instalado en el organismo (Alemany, 2003).

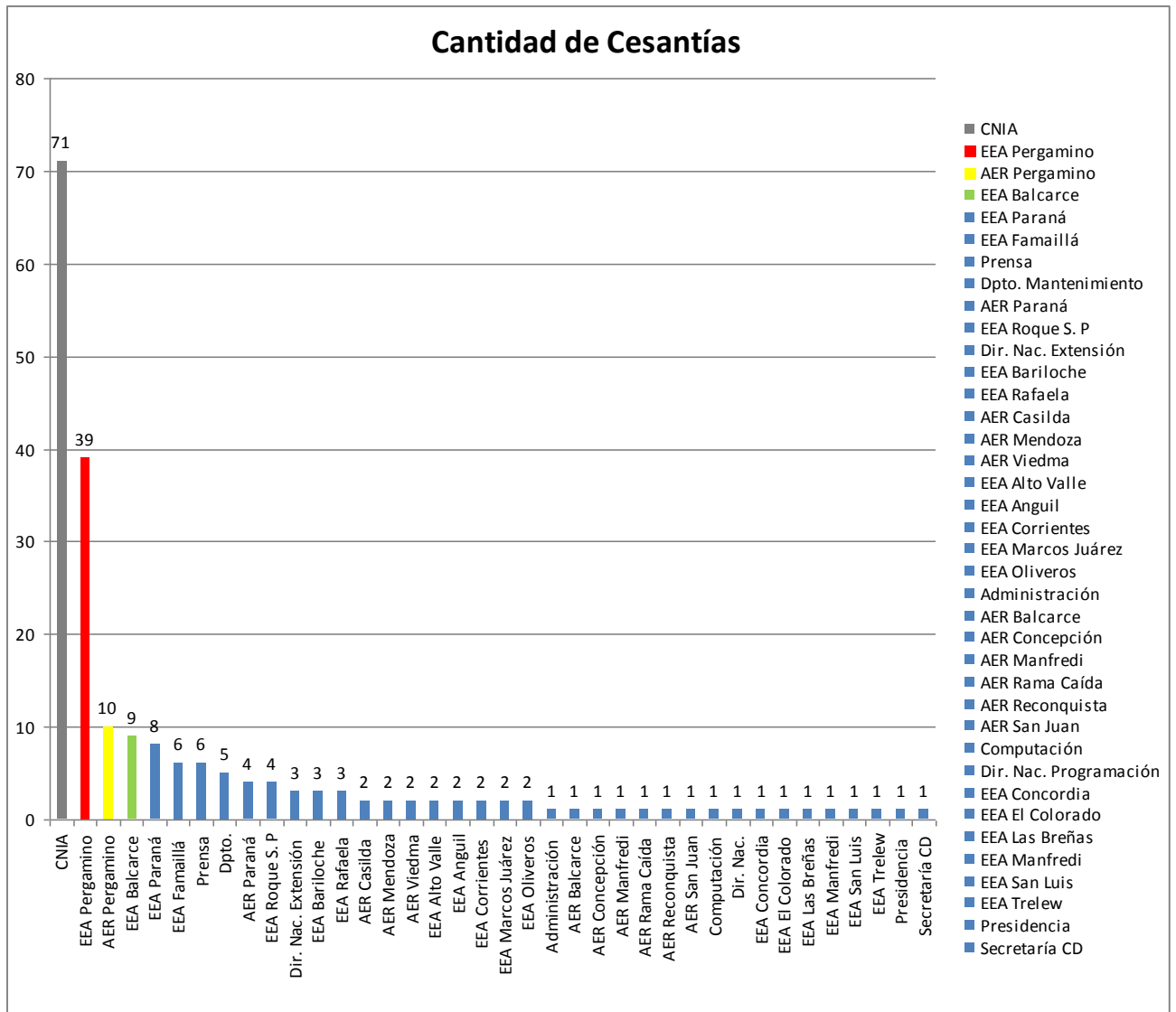
La intervención militar modificó la conducta de trabajo tanto en el CNIA como en las estaciones experimentales. Según declaraciones testimoniales de ex integrantes de INTA recopiladas en una causa judicial, una sirena indicaba el horario de entrada y el de salida, existían “controles” militares en las entradas, se debía informar a primera hora de la mañana la cantidad de presentes y de ausentes, “pasaba un soldado a buscar las listas” (Ramazzoti, 2004), lo que generaba una situación en la que, según declaró una administrativa del organismo, “teníamos miedo a desaparecer” (Platz, 2004). Junto a estos relatos, existen también otros que remarcan que el trabajo se desarrollaba en el marco de cierta normalidad. Así, una docente de la guardería del CNIA que ingresó en 1976 declaró que “todo estaba muy tranquilo, no vio nada extraño, ni pasaba nada extraño” (Vitali, 2004).

En junio de 1976 fue asesinado el jefe del Departamento de Suelos del CNIA de Castelar. Según integrantes del Departamento muerte fue atribuida a alguna organización política armada, en gran parte por su apoyo manifiesto al régimen y por haber sido reconocido como provisor de las listas usadas en la organización de las cesantías de su Departamento (entrevista, 14-09-2011). Si bien ninguna organización se atribuyó el hecho, integrantes del centro recuerdan la presencia de volantes y gacetillas distribuidos aludiendo al caso. El velatorio fue llevado a cabo en la sala de reunión del Consejo Directivo, y en nombre de la institución fue orador el director nacional, Fernando Spinelli Zinni (INTA, Res. 40/1976).

Como ya había sucedido durante la dictadura de Onganía, los pedidos de informes a la SIDE fueron el trámite inmediato anterior a la contratación de personal técnico del Estado, como vía de veto a potenciales candidatos con antecedentes políticos indeseables (Sidicaro, 2004). Esta situación se combinó en el interior del INTA con la explicitación de “nuevos criterios de ingreso de personal” (INTA, 1978: 2) utilizados para cubrir nuevas convocatorias de cargos.

La Ley 21.260 autorizaba a dar de baja por “razones de seguridad” a empleados públicos sospechados, según fundamentaba su texto, de estar vinculados a actividades “de carácter subversivo o disociadoras”. Las bajas alcanzaban a personal de planta permanente, transitorio o contratado que prestara servicios en la administración pública Nacional, Organismos descentralizados, autárquicos, empresas del Estado y de propiedad del Estado, y cualquier otra dependencia del Poder Ejecutivo. En el INTA, el interventor militar firmó la primera resolución el 31 de marzo de 1976, que autorizó -enmarcada en la Ley 21.260- a “dar de baja por razones de seguridad” a 194 personas en las distintas unidades del organismo a nivel nacional (INTA, Resolución 1/76). Para 1976 el organismo contaba con 1437 integrantes dedicados a tareas de investigación y extensión rural, 877 investigadores y 560 extensionistas (INTA, 1978).

La primera tanda de personal cesante, aquella que se dispuso como primera medida de la intervención, fue la única en la que se consignó en forma conjunta la procedencia del personal implicado. La distribución territorial de estas cesantías puede observarse en el siguiente gráfico: **1.4. Cesantías: distribución territorial (1976).**



Fuente: elaboración propia en base a (CD INTA, Resolución N° 1/76). [Personal declarado cesante por la intervención militar, 31-03-1976]

La cantidad de cesantías que afectaron las dos áreas nodales, investigación y extensión, fue significativa. Después de la primera resolución, la circulación de “listas” de cesantías fue haciéndose progresiva. Según relataba en abril de 1976 en una carta familiar, una integrantes del INTA que luego iba a ser desaparecida:

Llegó hoy a la tarde una lista de prescindibles que dicen que es sanguinaria y que serían 150 personas. Ya han echado cerca de 500 aplicando la ley de seguridad del Estado y prescindibilidad. Temblamos desde hace un mes por cada lista... Dicen ‘viene hoy’ y cuando llega nos desinflamos hasta la próxima, en este caso es mañana jueves (Rapela, correspondencia, 28/4/76).

Al día siguiente agregaba una posdata en la que aclaraba, “PD. 29/4/76. Me aplicaron la ley de prescindibilidad. Estoy cesante” (Rapela, correspondencia, 29/4/76). Dos meses después agregaba, “Todavía estoy sin trabajar, pero me indemnizaron, me pagaron ‘en cuotas’ durante 6 meses” (Rapela, correspondencia, 17/6/76). No concretaría el cobro, un mes después era secuestrada por un grupo de tareas y retenida en la ESMA, último centro clandestino del que provienen referencias sobre su persona.

En algunos casos, integrantes del INTA alcanzados por las cesantías dispuestas en la primera resolución de la intervención militar interpusieron recursos de reconsideración contra la medida. En ocasiones se hacía lugar al pedido. Esto implicaba que dejaban de estar considerados en las bajas por “razones de seguridad”, y pasaban a estar comprendidos en las bajas “por razones de servicio”, enmarcadas en la Ley 21.274. En los hechos, continuaban fuera del organismo, aunque se autorizaba la liquidación de una indemnización, que no solía concretarse<sup>143</sup>. En el caso de un ex asesor de la dirección nacional previa, que fuera primero trasladado de su lugar de trabajo y luego enmarcado en las cesantías de marzo de 1976, en respuesta a su pedido de reconsideración, el interventor militar respondía afirmando que pasaba a reubicar su caso “con la finalidad de producir por razones de servicio un real y completo proceso depurativo de la Administración Pública” (INTA, Res. 52/1976).

---

<sup>143</sup> En algunos casos en rechazo a la medida resuelta, en otros nunca se autorizó el pago pese a la comunicación oficial del mismo.

La intervención fue acompañada por la designación de directores interinos en las unidades experimentales, la renovación de la conducción de departamentos y centros de investigación y de las 225 agencias de extensión rural, así como la “modificación de los criterios de selección del personal” (INTA, 1978: 6).

El proceso social regresivo consolidado por la última dictadura cívico-militar, además de ser ejecutado por militares y tecnócratas que ocuparon el Estado, contó con múltiples agentes en los distintos espacios sociales “accionando para disciplinar y producir un nuevo orden” (Balsa, 2006: 141). Dentro del sector agrario, las fracciones más concentradas lideraron primero los obstáculos a los intentos reformistas impulsados para el sector durante la primera fase del tercer gobierno peronista y luego apoyaron e integraron los gobiernos que promovieron la concentración y la desregulación estatal (Balsa, 2006). Protagonistas de buena parte de las transformaciones del proceso de acumulación, las principales corporaciones agropecuarias -con voz y voto dentro del Consejo Directivo de INTA- fueron también parte significativa de la base social en la que descansó el régimen militar y cuyo accionar incidió en forma decisiva en los prolegómenos del golpe (Sanz Cerbino, 2010).

Sobre algunos contenidos de los discursos presentes en las reuniones del Consejo Directivo del INTA, que otorgan elementos para pensar las modificaciones en su interior, nos adentraremos a continuación.

### **1.5. El saneamiento: del lenguaje técnico a la depuración institucional**

Después de cuatro años de intervención, en noviembre de 1980 el decreto 2.348 dictaminó la “normalización” del INTA y reorganizó el funcionamiento de su Consejo Directivo. En un acto presidido por el entonces secretario de Agricultura, Jorge Zorreguieta, fueron puestos en funciones las nuevas autoridades del organismo<sup>144</sup>. El Consejo Directivo retomaba su composición habitual, con representantes del sector privado, el ejecutivo (en esta oportunidad, designados por la Junta) y las universidades

---

<sup>144</sup> A partir de la dictadura, la intervención militar a cargo del capitán de navío Alberto Heredia se extendió entre el 24/03/1976 al 21/04/1976, su sucesor David M. Arias ocupó el cargo de interventor desde el 22/04/1976 al 19/11/1980. A partir de entonces, con la reorganización del Consejo Directivo, presidieron el INTA: el Ing. Agr. Enrique E. Gobée (20/11/1980 al 05/04/1981); Ing. Agr. García Cuerva (06/04/1981 al 11/01/1982); Ing. Agr. Enrique E. Gobée (12/01/1982 al 09/08/1982); Ing. Agr. Guillermo Covas (10/08/1982 al 03/12/1983). Con el retorno de la democracia fue designado el Ing. Agr. Carlos López Saubidet (14/12/1983 al 12/03/1985).

nacionales<sup>145</sup>. El nuevo presidente recibió el nombramiento recordando que el INTA había sido “afectado antes de su intervención por una penetración disolvente que actuó destruyendo trabajos de investigación, experimentación y extensión” (*La Prensa*, 21/11/1980). El 5 de mayo del año siguiente Gobeé fue remplazado y Santiago Cuerva, hasta el momento en funciones como consejero representante de CRA, asumió la presidencia del Consejo Directivo.

En el interior del INTA, en particular dentro su Consejo Directivo, integrado por representantes de las principales entidades agropecuarias y también por profesionales del instituto de larga trayectoria en el mismo, se distinguen distintos discursos en torno a la figura del *saneamiento*. Esta categoría, propia del quehacer técnico ligado al control animal y vegetal, fue desplazándose hacia el *saneamiento institucional*. En los hechos, implicó una depuración interna bajo persecuciones ideológicas y políticas, que también incorporó en ocasiones rivalidades académicas y personales preexistentes. En sintonía con el discurso de la época, también se amalgamó a la idea de “sanear” la administración pública y recortar el gasto público como vía para incrementar su productividad. Nos adentraremos en esta problemática a partir de la reconstrucción de una de las sesiones del Consejo Directivo del INTA.

El 14 de abril de 1981 el Consejo realizaba una de sus habituales reuniones. En esa oportunidad, uno de los puntos del orden del día se refería a la consideración de las medidas a tomar en el seno de la Institución dentro del marco de restricción presupuestaria dispuesta. El presidente del INTA, luego de manifestar que “el Consejo Directivo comparte la necesidad de reducir el gasto público en los más diversos órdenes del país”, compartió las recomendaciones que habían llegado desde la Secretaría de Agricultura, mediante una nota firmada por el entonces secretario de Agricultura y Ganadería, Jorge Aguado. En ella se detallaban los pasos a seguir: reducción de cargos ocupados en planta y de personal contratado, congelamiento salarial y ajuste presupuestario general, dentro del que se establecía la prohibición de adquirir automotores, bienes inmuebles o equipo, “derivando las necesidades en tal sentido a la

---

<sup>145</sup> Con la finalización de la intervención en 1980, además de la presidencia, vicepresidencia y un vocal por la Secretaría de Agricultura y Ganadería, en representación de las entidades fueron designados Ronaldo Jorge Mohtlingk (SRA), Bernardo Francisco Hertelendy (AACREA), Víctor Hugo Santirso (CONINAGRO), René Bonetto (FAA) e Ignacio Santiago Cuerva (CONINAGRO), que pronto pasaría a ocupar la presidencia. Por las facultades de Agronomía fue designado Amado Jesús Mena y por las de Veterinaria Alfredo Manzullo. (CD INTA, Acta 1, 1981; *La Prensa*, 21/11/1980).

contratación de servicios con empresas privadas” (CD INTA, Acta N ° 9, 1981). La necesidad de racionalización encontraría argumentos diversos dentro de las autoridades del INTA. Su formulación iba a ligarse directamente con la reorganización del espacio (material y social) del instituto. El director nacional, Jorge A. Del Águila, señalaba que “la única forma de ir eliminando progresivamente gente en planta permanente” era a través de “la reimplantación de una ley de prescindibilidad”, la que era entendida como una herramienta de ordenamiento del organismo:

(...) si nosotros dispusiéramos de esa ley de prescindibilidad sería una lección muy saludable para la gente joven que se incorpora a la institución, porque en un ambiente muy estrecho como el de las estaciones experimentales ellos ven perfectamente quiénes son los técnicos que realmente trabajan y los que producen y otros que no le hacen ningún bien a la institución (CD INTA, Acta N ° 9, 1981).

La reimplantación de la ley de prescindibilidad era argumentada como herramienta capaz de “hacer el *saneamiento* que corresponda”. Sobre a quiénes era necesario apartar del instituto, se quejaba el director nacional de que, bajo la normativa vigente, “lo que se elimina como jubilables no son los que ocasionan mayores problemas a la institución”. Según explicaba el director nacional:

Desde el año 1974 hasta el año 1980 hay 600 personas *que han sido eliminadas*, salvo las cesantías dispuestas por la Resolución del Interventor Militar, Capitán Heredia. En el año 1978 se hace nuevamente *una buena limpieza*, lo mismo que en el año 1979 y después deja de tener vigencia la ley de prescindibilidad que nos permitía a nosotros seguir con ese proceso que era muy interesante (CD INTA, Acta N ° 9, 1981, énfasis propio).

Efectivamente, además de las 194 cesantías dispuestas por la intervención militar enmarcadas en “razones de seguridad”, entre 1974 y 1980 fueron dejados fuera del organismo alrededor de 600 trabajadores del INTA. En cuanto a las dispuestas en 1979 y 1980, no constan en los archivos del organismo las resoluciones de la

intervención posteriores a 1976, si bien en forma reiterada es afirmada por trabajadores del INTA la existencia de cesantías posteriores a la primera resolución.

Frente a algunas intervenciones sobre el riesgo de que la “racionalización” paralizara al organismo, continuaba el director nacional aludiendo por un lado a la voluntad de contribuir al proceso de ajuste a nivel nacional, y por otro destacando los efectos al interior del INTA. Las medidas, según explicaba, debían “ser aleccionadoras” para el conjunto de los trabajadores del organismo. Si bien algunos eran partidarios de atenuar en lo posible los efectos de estas políticas nacionales en el instituto, tenía vigencia un discurso que imbricaba la identificación nacional y los deberes de los argentinos en pos del Proceso de Reorganización en marcha: “Yo no quise decir que el INTA debe ser una cosa aislada. Como argentino, soy consciente que debemos hacer lo posible dentro de nuestro ámbito”<sup>146</sup>, aclaraba un consejero luego de manifestar su preocupación por el inminente recorte presupuestario. Como señalaba su director nacional, el instituto representaba un caso modelo dentro del esquema de ajuste propuesto. Así, mientras se destacaba que “debe haber pocos organismos en el país donde exista esa idea de *ir saneando* mientras las necesidades lo requieran” (CD INTA, Acta 9, 1981, énfasis propio). La metáfora del *saneamiento*, oriunda del quehacer técnico, se alineó así a la necesidad de “limpiar” el cuerpo de la Nación.

En un organismo como el INTA, los cambios en la escena política nacional fueron siempre acompañados por un reordenamiento de los principales cuadros institucionales. Muchos de los que ocuparon cargos jerárquicos durante la dictadura habían pasado a un segundo plano durante el lapso cubierto por el gobierno de Cámpora, y tenían -en su mayoría- una larga carrera desarrollada en el seno de la institución. Otros integraban una suerte de elenco estable, alternando entre distintas funciones a lo largo de diversos gobiernos. Dentro del instituto, el aparato tecnocrático resultó un complemento imprescindible para el accionar militar. Esta articulación operó en una doble vía: en relación a la introducción de mecanismos represivos, por un lado, y -como veremos en los próximos capítulos- a la puesta en práctica de lineamientos sobre las tareas del INTA.

---

<sup>146</sup> Consideraciones del Ing. Agr. Guillermo E. Joandet, integrante de la dirección nacional asistente (CD INTA, Acta N ° 9, 1981).



## 1.6. La reconfiguración de la “Familia INTA”: identidades, relatos y poderes en pugna

El INTA estuvo signado desde su creación por un mandato institucional, que definió a “la familia rural” como uno de sus destinatarios, junto a la empresa agropecuaria. El mejoramiento de la “comunidad” fue pautado como una de las contribuciones esperables del organismo. Así, aunque de forma imprecisa y modificada a través del tiempo, la “familia rural” fue concebida como la unidad social básica de interlocución, especialmente a través de las tareas de extensión rural (Losada, 2005). Ahora bien, la figura de “familia” no se circunscribió únicamente a la población rural implicada. También fue construida al interior del instituto, como estructura institucional que a través de diversos mecanismos configuró una particular dinámica. En este sentido, junto a los factores económicos vinculados al rol de la producción agropecuaria argentina en el proceso de acumulación local y a los vaivenes políticos del rumbo nacional, también los componentes ideológico y normativo establecieron pautas (explícitas e implícitas) de funcionamiento, jerarquías e identificaciones que moldearon la matriz institucional<sup>147</sup>.

La conformación de una identidad en el INTA estuvo marcada por un alto sentido de pertenencia de muchos de sus miembros, unido a una estructura fuertemente corporativa. Así, su funcionamiento es descrito en forma reiterada por sus integrantes en base a algunas metáforas: “El INTA es una *corporación* que funciona separadamente, y como es una *corporación*, funciona como si fuera la *iglesia*” (entrevista, 11-11-2009), afirma un investigador. En palabras de una economista del instituto: “Está todo acá dentro. Es como la *iglesia* católica, por eso perdura. La *iglesia* católica tiene 2000 años porque se acomodó a los distintos momentos de la historia, y en INTA pasó igual” (entrevista, 17-07-2011). Las referencias a la estructura de la “*iglesia*” en línea con la “*corporación*”, así como otras que comparan su funcionamiento con el del correo o el ejército por su alcance territorial y por la verticalidad de su

---

<sup>147</sup> Un análisis del trabajo de institución de la familia como dispositivo social a través de diversos ritos dirigidos a generar un conjunto de lazos y un “espíritu de familia”, puede verse en Bourdieu (1994). La temática, de reflexión clásica en disciplinas como la antropología y la sociología, ha suscitado una vasta cantidad de contribuciones. A los fines de este trabajo, y por su proximidad en tanto parte integrante de la burocracia estatal local, remitimos a algunos de los trabajos vinculados al estudio de la “familia judicial” realizados por el equipo de Antropología Política y Jurídica de la Sección Antropología Social de la Facultad de Filosofía y Letras (UBA) (Tiscornia, 2004; Martínez, 2004; Sarrabayrouse, 1998, 2004).

funcionamiento, señalan dos aspectos principales. En primer lugar, la alta capacidad de adaptación a diversos momentos políticos y coyunturas nacionales, que es visto en sintonía con la perdurabilidad del organismo. En este sentido, se destaca que no se trata de “una institución con una línea ideológica determinada” (entrevista, 13-05-2010). En segundo lugar, la capacidad de esta estructura corporativa de albergar y contener las tensiones internas. La cohesión, construida a través de diversos mecanismos y ritos e impulsada en base a una filiación común (tener la “camiseta del INTA”), promovió la organicidad<sup>148</sup>. Al mismo tiempo, esas identificaciones comunes fueron apropiadas en modo divergente. Esto permitió, en distintas coyunturas y -como veremos- en los años previos a la dictadura, la resignificación de determinados elementos asociados al *ethos* del instituto desde su creación (la “familia rural”, la “comunidad”, la “familia INTA”) y su puesta en práctica en otros marcos conceptuales. La identificación y el sentido de pertenencia de los investigadores cohesionó las iniciativas que proponían instalar en la agenda del organismo y el enfoque que proseguían de la realidad agropecuaria. Al mismo tiempo, la contracara de la estructura de “paraguas” del instituto, bajo la cual se impulsaban líneas de acción disidentes, era -frecuentemente- el aislamiento del equipo u orientación con menor relación de fuerzas a su favor. Como señala Bourdieu, “en todas las familias, y en el seno de la misma familia, todos los miembros no tienen la misma capacidad ni la misma propensión a amoldarse a la definición dominante” (Bourdieu, 1994: 138).

En este sentido, dentro del lenguaje nativo del organismo es frecuente la distinción de una línea “productivista”, entendida como una concepción de la investigación y la tecnología agropecuaria cercana al determinismo tecnológico, en tanto la búsqueda de niveles de producción eficientes y altos rendimiento es asociada a una traslación lineal de mejoras, al tiempo que se repele la participación del organismo en actividades que rebasen “lo técnico”. En la vereda opuesta, se reivindica el trabajo desde “la función pública” destinado a resolver necesidades de la población rural y favorecer un desarrollo productivo del medio que fomente un modelo agropecuario inclusivo. Entre estas dos grandes líneas y a través de su historia, un variopinto cuadro

---

<sup>148</sup> Con respecto a los ritos asociados a la dinámica del INTA, estos incluían (e incluyen) desde participaciones festivas anuales en fechas de conmemoración de creación de unidades o del organismo (los 4 de diciembre), ceremonias de entrega de medallas a su personal por años trabajados, actividades recreativas, organización de carteleras en distintos institutos de investigación con fotografías de los hijos e hijas del personal, ingresos al Instituto a partir de vínculos de parentesco, entre otros.

de posiciones. Entre ellas, una que rescataba en este período el sentido “eficientista” entendido como el “desarrollo de las fuerzas productivas del agro”, necesario para generar condiciones superadoras para la vida de la población rural.

En estas tensiones, también el sentido de pertenencia tenía un reverso. En palabras de un investigador de la estación experimental de Paraná: “Es muy verticalista. Está la idea de tener la camiseta del INTA, hablan siempre de eso. Como que uno no puede decir cosas fuera que puedan molestar al *establishment*” (entrevista, 26-11-2010). En este sentido, el INTA no permaneció al margen de otras dinámicas ligadas al funcionamiento de las burocracias estatales. El poder cristalizado en las instituciones también evidencia, los conflictos en vastas áreas estatales en las que la estrategia exitosa de grupos de interés consiguen ocupar espacios “dejando fuera –o arrinconados en oficinas polvorientas e incómodas- a quienes pierden las pequeñas batallas por el monopolio del recurso estatal y, en demasiadas ocasiones, a los colectivos sociales que están llamados a atender” (Tiscornia, 2004: 5). La “familia INTA” contemplaba, entonces, una dinámica fuertemente corporativa, que permitía la coexistencia entre sectores y tendencias heterogéneas, y hasta antagónicas. Esta articulación se tradujo en ocasiones en fuertes disputas, que evidenciaban el peso de distintos sectores en su interior que expresaban intereses económicos y sociales divergentes.

También el establecimiento de redes personales (de ayuda mutua, así como de rivalidad entre equipos y áreas de trabajo) jugó históricamente un rol significativo en la configuración institucional del INTA. Los criterios implicados incluyeron afinidades profesionales, trayectorias compartidas en casas de estudio previo ingreso al organismo, y también, como hemos referido para este período, ámbitos compartidos de militancia política y gremial.

Por otro lado, los testimonios sobre la intervención militar del INTA, así como sobre los años previos al golpe, constituyen un terreno de tensión que involucra estos elementos. En este sentido, cabe señalar que son escasos los estudios sobre instituciones, trayectorias científicas o de conocimientos, desarrollos y aplicaciones de tecnología, que han incorporado el análisis de la memoria y las vinculaciones entre historia y memoria (Abir-Am, 1999; Galinson, 1997; Hetch, 1997, 1998; Pestre,

1999)<sup>149</sup>. En este sentido, en los distintos registros -entrevistas en profundidad, y testimonios plasmados en documentos institucionales y de origen judicial- es posible identificar diversos niveles (Bertraux, 2005) que aportan tanto a la reconstrucción de la experiencia histórica, como a las memorias que también ponen en evidencia y dan cuenta de una subjetividad socialmente compartida (Portelli, 1996)<sup>150</sup>.

En cuanto a la violencia estatal, la instrumentación de los mecanismos de disciplinamiento en el espacio social del INTA durante el período correspondiente a la última dictadura también utilizó parte de su dinámica institucional. Así, la relación de los directores de algunas estaciones experimentales con el personal es explicada en términos de una analogía asociada a la simbología del medio rural, como señala una investigadora de una estación experimental en referencia al rol de su director en esos tiempos, “era como un patrón de estancia, un dueño y señor. Así como podía ser autoritario como un patrón con sus peones, independientemente que sean del campo científico, también era un protector con su familia, la familia INTA” (entrevista, 09-10-2009). Esta estructura de familia, metáfora que como señalamos expresa el alto grado de corporativismo y un fuerte sentido de pertenencia entre sus miembros -construido en ocasiones horizontalmente, en otras como un sentido de deber institucional- operaba como justificativa de esa protección. Esta cercanía no estuvo desprovista de conflictos, en la medida que también, según señala un entrevistado, había “Tipos que te marcaban, más si estabas en una experimental chica” (entrevista, 11-11-2009). Al mismo tiempo, la protección se pone en tensión a la luz de los testimonios que mencionan las responsabilidades civiles de directivos de la institución en la confección de “listas” y observando las herramientas punitivas que se aplicaron en la institución (como los traslados) o los nuevos criterios de ingreso de personal. Así, una investigadora afirma

---

<sup>149</sup> En el plano local, en Spivak y Gárgano (2014) se presenta una reflexión sobre esta problemática centrada en los casos de CNEA e INTA. Por otro lado, los estudios sobre la memoria constituyen un vasto campo de estudio, en el que cabe destacar el trabajo pionero de Halbwachs (1925) en su estudio de la rememoración personal como parte de la experiencia colectiva histórica. Su trabajo sobre la memoria colectiva, que aún es objeto de distintos cuestionamientos, situó el problema como un fenómeno complejo y el señalamiento de que memoria e identidad están en relación. En este sentido, uno de los aportes que retoma y al mismo tiempo cuestiona su trabajo es el estudio de Pollak, quien toma a la memoria y a la identidad como valores disputados en conflictos sociales (Pollak, 2006).

<sup>150</sup> Si bien no lo desarrollamos en este espacio, resulta pertinente señalar que el propio relato de la institución sobre su historia ha omitido cualquier referencia a este período, a pesar de tener distintas publicaciones propias sobre su trayectoria en la que se aluden las distintas coyunturas nacionales (INTA, 1996, 2006). Retomando el planteo de Pollak (2006) sobre la idea de “memoria encuadrada” de Henri Rousso, éste es un caso donde puede observarse cómo se produce la construcción oficial de la memoria institucional.

que en muchos casos “la gente que está en cargos gerenciales, o que se han jubilado pero han estado en cargos gerenciales muy altos, es la gente que elaboró las listas negras” (entrevista, 15-08-2010). Otra investigadora vincula el peso que a estas situaciones imprimía la concentración del poder local. En relación a la figura del director de la estación experimental del INTA en Balcarce, quien era a su vez director del Departamento de Economía de dicha experimental, interventor de la obra social y decano de la Facultad de Agronomía (que funciona como unidad integrada a la experimental del INTA), refiere que éste era “la suma del poder público”, y que existían “reportes periódicos, y él se reunía con los militares. Nosotros entendíamos que había información que se pasaba” (entrevista, 15-06-2010). En este sentido, la repetición de situaciones de personas detenidas que fueron obligadas a firmar la cesantía estando en cautiverio alude también a esta imbricación<sup>151</sup>.

También en los argumentos de quienes ocuparon cargos directivos durante la dictadura, la alusión a la comunidad del INTA aparece cuando se cuestiona el ejercicio de sus funciones en este período. Extensionista del instituto desde 1966, Fernando Spinelli Zinni fue designado al frente de la dirección nacional de Extensión y Fomento en forma interina en 1975, luego de que se removiera la dirección previa. Ocupó el cargo hasta 1978, luego pasó al frente de la dirección nacional de Programación y Evaluación por cinco años, pasados los cuales continuó siendo parte del INTA hasta su jubilación en 1992. Consultado en un juicio iniciado por la desaparición de una integrante del instituto, declaró sobre la existencia de cesantías: “ (...) no recuerdo el número, pero se dieron de baja alrededor de doscientas personas”. Preguntado, a pedido de la querrela, por qué permaneció en su cargo, afirmó:

(...) porque tengo una adhesión espiritual a la labor que desempeñamos desde el punto de vista científico y tecnológico, y de extensión. Si todos los técnicos del INTA se hubieran alejado se hubieran detenido investigaciones que llevan años concretarlas y que al interrumpirse vuelven a cero (...) alguien tenía que dirigir la parte

---

<sup>151</sup> “El jefe de personal del INTA me hace firmar la cesantía del INTA y me deja cesante por la ley de Seguridad Federal. En ese momento yo estaba a disposición del PEN”, según consta en una reciente declaración testimonial de (Golberg, 15/11/2011). Efectuada en el marco de una presentación judicial colectiva en curso, iniciada por integrantes del organismo y familiares de víctimas de la represión.

científica tecnológica de la institución. A mi juicio [no] haberlo hecho hubiera significado una cobardía moral (Spinelli Zinni, 2005).

Aquí, el argumento centrado en el futuro aprovechamiento de las investigaciones y en la necesidad de hacerse cargo de “la parte científica tecnológica de la institución” por un lado retoma (aunque en un sentido divergente) la idea de “misión” asociada al trabajo en el organismo y, por el otro, describe una aparente escisión entre la propia actividad científica y técnica y los contextos históricos bajo los que se desarrolla. Contexto que, al ser parte integrante de la propia organización del trabajo, ingresos y egresos de personal, rutinas laborales, contenidos de investigación y enfoques utilizados resulta, en los hechos, inseparable de las acciones del organismo. Esto no implica, ciertamente, que los efectos hayan redundado en formas simétricas en todas las áreas y equipos. Implica que la división, analítica y valorativa, que instala al quehacer científico y tecnológico en un terreno neutral, responde más a las subjetividades implicadas que a la trayectoria de las actividades.

Al mismo tiempo, trabajadores del INTA recuerdan situaciones de trabajo durante la dictadura en una rutina de normalidad. En este sentido, afirma un ex directivo de la estación experimental Balcarce: El INTA siempre creció y no tuvo problemas internamente por las situaciones del país. Tuvo *un poquito de problemas* Castelar, que los gremios entraron en conflicto. Pero acá no hemos tenido ni huelgas, ni paros...” (entrevista, 2009, énfasis propio). Luego de destacar las posibilidades de trabajar en condiciones “normales”, una investigadora afirma: “Todos tuvimos una estrategia de supervivencia en las instituciones, los que nos quedamos, que fue la autocensura (...) para permanecer había que ser así”. En la cotidianeidad del trabajo, agrega, “era como que todo estaba debajo de la superficie” (entrevista, 11-11-2009). El disciplinamiento no implicaba necesariamente una coerción cotidiana, pero las marcas propagaban su efecto. En este sentido, las huellas en los *cuerpos* científicos y técnicos ligadas a la violencia estatal también registraron marcas en relación a los reingresos en democracia de parte del personal que había sido dejado cesante durante las intervenciones militares.

El 12 de septiembre de 1984 el INTA dirigió un mensaje a todo el personal que había sido dejado cesante entre 1976 y 1983. En base a la modificación del cuerpo normativo que había amparado las cesantías en la administración pública (las leyes

21.260 y 21.274), el INTA procedió a reconvocar al personal afectado. Las notas, enviadas con un texto uniforme a los domicilios registrados en los legajos, señalaban “la necesidad de dar reparación moral y material a los ex agentes alcanzados por las normas” (INTA, Res 334/1984) y proponían su reincorporación “en la medida de las posibilidades que ofrezca la situación de emergencia por la que atraviesa el país y en especial el sector público” (INTA, Res. 334/1984). La resolución, firmada por el interventor dispuesto a partir del comienzo del gobierno de Raúl Ricardo Alfonsín -el ingeniero agrónomo Carlos López Saubidet- resolvía en su primer artículo: “Reivindicase moralmente al personal del INTA” declarado prescindible, y explicitaba a continuación que la reincorporación estaba sujeta a la renuncia, por parte de los aludidos, a cualquier acción legal en contra del Estado y a la disponibilidad de vacantes internas (INTA, Res. 334/1984). Según algunos trabajadores del organismo, esta respuesta institucional fue también resultado de un conjunto de movilizaciones que auto-organizaron los cesanteados con el advenimiento de la democracia. Los reclamos por reasignación de lugar de trabajo, que en muchas ocasiones implicaban que la posibilidad de retorno permanecía sujeta a la asignación de destinos diferentes a los desempeñados en el pasado, o por pedido de reconsideración de categoría laboral y antigüedad motivaron también algunas acciones judiciales contra el instituto.

En este marco, la continuidad/discontinuidad de líneas de trabajo previas, junto a la convivencia con integrantes que habían permanecido en sus puestos, sumada a una falta de revisión institucional en el momento de la transición democrática, configuró nuevas tensiones. El caso de un ex integrante de un equipo de Física de Suelos de la estación experimental Pergamino revela algunos de los elementos presentes en estas situaciones.

Ingeniero agrónomo, había ingresado a la planta permanente del INTA en 1971, e integraba un equipo como parte de un convenio entre el INRA francés y el INTA. Con sede en la estación experimental de Pergamino, trabajaban en un proyecto dedicado a la mejora de la producción de maíz, desde el punto de vista grafo-climático. Es decir, centrado en estudios de suelos, clima y fisiología vegetal. El equipo, integrado por seis miembros y su contraparte francesa, cesó sus tareas en 1976. Mientras que los investigadores del INRA fueron advertidos poco antes del golpe por su embajada y convocados a regresar, los del INTA fueron declarados cesantes junto a otros

integrantes de la estación experimental. Su participación en el grupo se extendió hasta abril de 1976, cuando fue declarado cesante. En su relato, la cesantía aparece vinculada a un conflicto interno de la estación experimental, que protagonizara junto a otros compañeros: “denunciamos a un jefe de departamento por malversación de fondos en la experimental. Yo creo que esa fue la causa”, afirma. Al mismo tiempo, existía una rivalidad entre este equipo, más ligado a estudios de conservación del suelo, y el de Química de Suelos, centrado en el estudio del uso de fertilizantes químicos en los cultivos intensivos. En sus palabras, “no trabajábamos en la línea que en ese momento era la que había que seguir, que era la de los agro-químicos” (entrevista, 12-04-2010). Un incidente con una de las principales empresas productoras de fertilizantes de la zona, a quien se negaron a acceder a un pedido sobre los resultados de estudios obtenidos, también es mencionado en la reconstrucción de la tensión previa a las cesantías.

En 1984 recibió la nota de INTA, ofreciendo su reincorporación. A diferencia de otros, en los que la situación más frecuente fue la reubicación en estaciones experimentales o agencias de extensión diferentes a las de origen, en este caso el reingreso se produjo en la experimental de Pergamino. La reinscripción es recordada como una suerte de reparación incompleta, o al menos sujeta a la ausencia de una revisión profunda que pusiera en cuestión lo sucedido, y con una suerte de detenimiento temporal:

Y el primer día que llego me dan la misma oficina que tenía y el mismo escritorio. Inclusive yo tenía un vidrio sobre el escritorio con un montón de cosas y estaba igual. Nueve años después volvía. Como si no hubiese pasado nada. Y esa era la historia: “Acá no pasó nada”.  
Cómo que no (entrevista, 12-04-2010).

Bajo el “mismo escritorio”, permanecía aún un informe producido en 1974 por el equipo antes de ser desarmado, “encontré todos los trabajos que habíamos hecho nosotros envueltos en un nylon. Los empecé a desempolvar y estaba todo”. En el informe se advertía una situación hasta entonces no considerada posible para el estado de los suelos. Señalaban que la práctica de la agricultura continua iba a generar pérdida de fertilidad, vinculada al exceso de labores. Paradójicamente, el reingreso coincidió



con una reunión en Pergamino de técnicos del área, en los que se cuestionaba que el INTA no había previsto oportunamente la degradación de los suelos.

Las tensiones en la lectura de la dictadura también se centran en la interpretación del carácter del período en relación a la orientación de sus tareas de investigación y extensión rural en cuanto a contenidos y destinatarios. En esa dirección, se distinguen al menos tres posturas. La primera, alude a la continuidad de las tareas del INTA, pensado más allá de las distintas coyunturas políticas y económicas como organismo autárquico que logró trabajar “sin problemas” y “adaptarse” a los diversos contextos nacionales<sup>152</sup>. En este plano también podemos ubicar una producción académica, centrada en la evolución del personal y el presupuesto del INTA desde su creación a la actualidad. En el trabajo de Pellegrini (2013), que posee la virtud de proponerse aportar datos estadísticos que no han sido aún recabados, como mencionamos anteriormente, se plantea que el período correspondiente a la última dictadura no constituyó “un hito” en la trayectoria de la institución, sino que el período es caracterizado como una fase de “crecimiento”. En este sentido, aunque el organismo perdió por decreto su autarquía financiera y realizó, en línea con el recorte del gasto público y la racionalización de la administración pública, ajustes en fondos y personal, también sostuvo gran parte de sus planes de investigación y realizó convocatorias para ingresar profesionales. Ahora bien, en esta visión, el incremento en la dotación de personal y la estabilidad presupuestaria constituyen *per se* un dato objetivo de crecimiento institucional, en desconexión con el análisis de la orientación de sus actividades, con el destino dado a los fondos implicados y con la problemática situación de depuración interna vivida en el organismo, que constituye el reverso de estos ingresos, atravesados a su vez por nuevos criterios.

La segunda postura remarca, por el contrario, que la última dictadura implicó una ruptura en la trayectoria del instituto, ligada a una reorientación de actividades, objetivos y destinatarios. Como afirma una entrevistada, “el trabajo de extensión y de investigación estuvo menos ligado a problemáticas de la comunidad y de los pequeños productores” (entrevista, 15-07-2020). Según otro investigador, el desarrollo tecnológico “se focalizó, muy ligado a intereses económicos bien claros” (entrevista, 27-05-2010), en alusión al avance de la modernización agrícola que por entonces incrementó la polarización social en el medio rural y la expulsión de productores poco

---

<sup>152</sup> “El INTA siempre creció y no tuvo problemas internamente por las situaciones del país” (ex director del Departamento de Producción Animal EEA Balcarce, entrevista, 11-11-2009).

capitalizados y trabajadores rurales (Hocsman, 2013). Finalmente, una tercera visión ubica la continuidad de las tareas del INTA en dictadura como parte de la prolongación de una orientación previa y que aún continúa. Se trata, según expresa una economista del organismo, de “una orientación sumamente productivista. Con un objetivo, generación de tecnologías que impacten en los rendimientos ( ) pre-existente en el INTA, y (que) continuó con los militares” (entrevista, 10-11-2010). Estas dos últimas lecturas destacan el interrogante sobre el alcance de las tareas del instituto, esto es para quién y para qué se orientaban sus actividades y productos. ¿Qué conexiones entablan estas interpretaciones con las transformaciones registradas en algunas de las actividades y estudios del INTA? ¿Qué rupturas y qué continuidades se observan en las agendas de investigación y extensión del INTA?

El estudio de las agendas de trabajo del INTA buscará hacer foco en la orientación seguida por el organismo en áreas clave de su accionar, tanto a partir de 1976, como en los años previos. En ese sentido, se buscará indagar qué experiencias se desarrollaron en estos años al interior del instituto. Si hasta aquí fue abordado un plano ligado a los cambios institucionales y directivos, buscaremos indagar qué disputas se desarrollaron en la “base” del organismo, a nivel de sus integrantes. Asimismo, mientras que hemos avanzado en la reconstrucción de la introducción de mecanismos represivos al interior del INTA, profundizaremos su vinculación con la orientación de las agendas de investigación y extensión, objeto de los capítulos subsiguientes.

### **1.7. Conclusiones: construcción y puesta en práctica de dispositivos de control**

En función del análisis de la situación del INTA en los años previos al golpe militar, es posible afirmar la existencia de un dispositivo de tipo administrativo civil, constituido por el accionar de personal civil de inteligencia en el interior del INTA, el pasaje de información entre el instituto y los servicios de inteligencia, y el acceso a información precisa sobre lugares de trabajo, integrantes y actividades, que resultó vital en la construcción del mapa de datos primero y, en la instrumentación de la cartografía represiva, después. En palabras de los querellantes de la única causa judicial referida a una víctima perteneciente al INTA, existió “una concatenación entre el actuar burocrático y el actuar represivo” (Prividera y Prividera, 2004) que viabilizó el ejercicio de la violencia estatal. El eje de estas tareas se concentró alrededor de la actividad política y gremial de trabajadores del instituto. En este marco, y a partir de vinculaciones que implicaban trayectorias personales, agendas de trabajo, conflictos internos y articulaciones con las políticas sectoriales en curso, también comenzaron a ser observadas las actividades de investigación y extensión. La breve reconstrucción de un equipo del CNIA de Castelar, el grupo de Ecología, expone algunos de estos elementos en juego.

La intervención militar del INTA, dispuesta a partir del 24 de marzo 1976, utilizó la cartografía represiva elaborada previamente mediante la instrumentación de detenciones, secuestros y cesantías a trabajadores. Luego de cuatro años, en 1980 fue reorganizado el funcionamiento del Consejo Directivo. A partir de algunos discursos, registrados en las actas de sesiones del Consejo, fue posible identificar la incorporación del lenguaje técnico centrado en las tareas de saneamiento animal y vegetal, al saneamiento institucional, entendido como depuración al interior del INTA. La detección de este desplazamiento permite pensar la reorganización institucional como un proceso en el que se combinaron -en distintos niveles y responsabilidades- dinámicas y conflictos internos con la implementación de la intervención y recorte sobre el sector público, que configuraron su accionar.

Finalmente, el análisis de algunos mecanismos ligados a la conformación de una identidad en el espacio del INTA, a partir de la construcción de la figura de “familia” (la

familia INTA) incorporó algunos elementos tendientes a profundizar el funcionamiento de su dinámica institucional. A partir de algunos testimonios de integrantes y ex integrantes del organismo, se indagó el rol de estos elementos en la instrumentación de la violencia estatal y en la orientación de las actividades del organismo. Este último eje se retoma en los próximos capítulos, a partir del estudio de rupturas y continuidades registradas en las agendas de investigación y extensión del INTA.

## **Segunda parte**

### **Agendas en disputa (1973-1983)**

#### **Estrategias de extensión rural e investigaciones socio-económicas**

## **CAPÍTULO III**

### **(Agendas en disputa 1)**

#### **La reorganización de la extensión rural: del agrónomo de terreno al asesor de grandes productores**

##### **1. Resumen**

El capítulo comienza con un somero recorrido por la trayectoria de la extensión rural en Argentina, abordando tanto estudios previos en la materia, como los principales hitos del servicio. En sucesivos apartados, se abordan sus antecedentes e influencias y los comienzos de la extensión en el INTA. En este punto, se refiere específicamente a dos canales institucionales, los “clubes 4-A” y “Hogar Rural”, dirigidos a dos colectivos sociales, jóvenes y mujeres.

El apartado “Agrónomos de terreno (1970-1976)” analiza diversas orientaciones en la materia durante esta década, y aborda sus objetivos. Asimismo, se reconstruye una singular experiencia desarrollada en el marco del INTA, el asesoramiento brindado por el organismo a la primera cooperativa agropecuaria de trabajo del país, la cooperativa Campo de Herrera, ubicada a escasa distancia de la estación experimental de Famaillá (Tucumán) del INTA. Se aborda la trayectoria de esta experiencia híbrida de extensión, investigación y auto-organización rural. Además, se analiza el proceso de transformación del perfil de la extensión rural, en sintonía con la orientación de las políticas sectoriales y el creciente proceso de concentración de capital en el agro. En las conclusiones se puntualizan algunas de estas transformaciones, señalando a la (re)apropiación privada de la extensión del INTA y al despoblamiento rural como dos esferas interrelacionadas.

## CAPÍTULO III

### (Agendas en disputa 1)

#### **La reorganización de la extensión rural: del agrónomo de terreno al asesor de grandes productores**

*“El extensionista era el médico clínico, el agrónomo de terreno, que estaba asentado en cada pueblo y le consultaban desde la hojita con una mancha, la gallina que anda mal, la helada...”* (Técnica de INTA, entrevista, 12/07/2010).

##### **1.1. La extensión rural en Argentina**

La extensión rural tuvo en Argentina un desarrollo temprano, en coincidencia con la importancia de la actividad agropecuaria en la estructura productiva del país. Los estudios disponibles sobre su trayectoria han indagado diversas temáticas. La institucionalización de la extensión como producto de la creación del INTA ha sido detalladamente analizada por Losada (2003), mientras que visiones panorámicas como las de Carriart (2002) y Basco (1998) han estudiado, respectivamente, cambios desde la óptica de los productores y distintas modalidades de asistencia técnica involucradas. Entre otros estudios, las transformaciones en el agro pampeano y los roles familiares en la década de 1960 a partir de las prácticas de extensión de distintos actores han sido estudiadas por (Gutiérrez, 2009). Por su parte, Paz (1989) ha abordado la actividad extra-estatal en extensión, en especial para la región del noroeste. Carballo (2007) realiza en un artículo un recorrido panorámico sobre los cincuenta primeros años del INTA en el área, con eje en el estudio de la agricultura familiar, y presenta en un trabajo previo (Carballo, 2002) referencias sobre las condiciones del servicio de extensión. Por otro lado, desde la perspectiva de la comunicación rural, el estudio de Massoni (2002) ha aportado elementos para el análisis de las estrategias de difusión y contacto. La

mayor cantidad de trabajos, producidos por académicos y por investigadores y extensionistas de INTA, se concentran en los cambios de las actividades de extensión del INTA durante la década de 1990 (Alemany, 2000; Calandra, 2009; Cantu y Cimadevilla, 1997; Llovet y Fernández Besada, 1990; Reichart, 1994; entre otros). Asimismo, entre los trabajos que han analizado el rol de la extensión del INTA, diversos estudios han analizado la adaptación de los extensionistas a las transformaciones productivas recientes (Larrañaga y Blanco, 2007; Thornton y Cimadevilla, 2003, 2008; Tort, 2008). El INTA ha producido una serie de publicaciones, que han enfatizado los logros en el pasado y en el presente del instituto en la materia (Anuch, 1981; Reichart, 1971, 1982, 1994; entre otros). En esta línea, Alemany (2003), extensionista del INTA desde 1978, ha avanzado un paso más en cuanto a problematización de las propias prácticas del INTA y propuesto una periodización para la extensión dentro del instituto en la que distingue el “paradigma educativo” (1956-1976) del “transferencista” (1976-2000). Finalmente, dentro de la bibliografía internacional que ha tomado a la extensión rural argentina como objeto de estudio, Albaladejo (2006) ha estudiado la sociabilidad de los extensionistas de INTA y la declinación institucional de la extensión durante la década de 1990.

Un punto en común entre todos estos diversos y valiosos aportes es que, o bien no consideran a la práctica de la extensión rural desarrollada por el INTA en el período correspondiente a la última dictadura y en los años previos (1973-1976), o bien caracterizan a la misma mediante algunos enunciados generales. En este sentido, en aquellos trabajos en la que es referida, la década de 1970 aparece señalada como un período en donde se ensayaron estrategias provenientes de la educación popular (Alemany, 2003; 2012), mientras que la dictadura es aludida mencionando su efecto en el reemplazo de personal (Gutiérrez, 1990), y señalado un cambio de “paradigma” de una orientación de tipo educativa a otra transferencista (Alemany, 2003; 2012). Estas referencias no están acompañadas, en sintonía con las propias motivaciones de los trabajos en cuestión, por el análisis de experiencias desarrolladas por el INTA en este período, ni por la reconstrucción de la actividad durante la intervención militar. Éste es, precisamente, el objetivo de este capítulo: reconstruir y analizar las estrategias de extensión ensayadas en los años previos al golpe militar, y el rol que pasa a ocupar la extensión rural con la intervención del organismo en 1976. La hipótesis de este capítulo



es que existieron estrategias de extensión rural en disputa al interior del INTA que constituyeron una alternativa al enfoque tradicional dominante, cuya trayectoria se vio directamente afectada por la escalada represiva presente en el país desde principios de la década de 1970, por limitaciones inherentes al ámbito estatal en el que fueron gestadas y por las transformaciones socio-económicas y productivas que registró el espacio rural.

Antes de entrar de lleno en estas experiencias, sus alcances y limitaciones, repasaremos tanto los antecedentes e influencias que moldearon a la extensión rural, como sus primeros tiempos al interior del INTA.

## **1.2. Antecedentes e influencias**

A fines del siglo XIX fueron creados en el país los primeros centros de estudios agronómicos de nivel universitario y las escuelas agrícolas, destinadas a brindar asistencia técnica a los productores (INTA, 1995). En 1907 se organizó el Servicio de Agronomías Regionales y en 1911 la Oficina de Estaciones experimentales, ambas dependientes del Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Nación. Para la década de 1920 ya se había desarrollado una red de agronomías regionales de alcance nacional. Según señala Alemany (2012), se desempeñaron sin mayores modificaciones hasta el golpe de 1943, cuando tuvo lugar un proceso de reformulación de sus actividades. Fundamentalmente, incorporaron actividades de control y fiscalización, funciones de fomento agropecuario y prestación de servicios directos a los productores (Barrientos, 2002). En 1944, al reorganizarse el Ministerio de Agricultura y Ganadería, la Dirección General de Enseñanza Agrícola crea la Dirección de Enseñanza Extensiva, que entre sus funciones tenía crear Clubes Agrícolas en coordinación con las escuelas rurales, si bien su accionar fue limitado (INTA, 1967). Durante el primer gobierno peronista las actividades de extensión permanecieron centradas fundamentalmente en fomentar la siembra para aumentar el área sembrada, realizar la venta oficial de semilla fiscalizada y fiscalizar la producción de semilla seleccionada (Alemany, 2012). En menor medida, se trabajaba en la asistencia técnica a través de la difusión de material de divulgación y la organización de reuniones (Griot, 1960). Sobre la debilidad del sistema en términos de efectiva llegada a los productores, se refería uno de los primeros directores de la estación experimental de Pergamino antes de la creación del INTA: “Estos funcionarios

están dedicados en un 90% de su tiempo a trabajos de rutina y sólo dedican un 10% para tareas de educación al productor” (Kugler, 1956, citado en Alemany, 2012: 34). En la misma línea se pronunciaba algunos años antes un informe sobre las características de la extensión en Argentina, encargado a Taylor -figura pionera de la sociología rural norteamericana- por el Departamento de Estado y la Oficina para las Relaciones Exteriores Agrícolas del Departamento de Agricultura (OFAR) de los Estados Unidos, en el marco de distintas investigaciones sobre Sudamérica y el Caribe (Balsa, 2007). En el informe, Taylor coincidía con esta visión y destacaba que los técnicos argentinos -a diferencia de los extensionistas norteamericanos- dedicaban mucho tiempo al trabajo de inspección y regularización, y poco a la educación de adultos. En otros términos, señalaba una brecha entre la academia, los productores y la promoción de CyT (Alemany, 2012). La articulación con el sistema de extensión estadounidense iba a cobrar pronto nuevo impulso<sup>153</sup>. Por un lado, mediante diversos intercambios, capacitaciones y estadías de profesionales que iban a moldear en buena medida el perfil de la actividad, en sintonía con los contenidos y enfoques dominantes en la práctica a nivel internacional. Por otro, a partir de la creación del INTA, mediante la replicación organizacional del sistema.

En el marco de la crisis agraria que comenzó a visibilizarse a partir de 1949, y de una reorientación de las políticas agropecuarias destinadas a apuntalar el sector -cuya participación resultaba imprescindible para la búsqueda industrialización- la extensión rural recibió una nueva atención. Fue incorporada como problemática en el Plan Económico de Emergencia 1952 y en el II Plan Quinquenal, en el marco de distintas iniciativas (Balsa, 2013)<sup>154</sup>. El mismo año el servicio de las “Agronomías regionales piloto” inició funciones específicas y exclusivas de extensión en Pergamino, Concepción del Uruguay y Mendoza (Losada, 2003). En 1954 la Dirección de Agronomías Regionales organizó el Servicio de Extensión, creando en 1955 la

---

<sup>153</sup> Existe una abundante literatura sobre el sistema de extensión rural estadounidense. Entre otros aportes relevantes pueden consultarse estudios sobre su origen y desarrollo (Bay, 1976; Röling, 1988), análisis de percepciones, influencias teóricas y audiencias de los extensionistas (Lacy et al, 1980), y vinculaciones entre los programas de extensión y las políticas económicas (Mc Dowell, 1985).

<sup>154</sup> En 1954 el Ministerio de Agricultura y Ganadería impulsó el Plan de Agronomías Regionales para el Desarrollo Agropecuario y la Dirección de Fomento Agrícola realizó tareas de extensión. En simultaneidad, la articulación con el Área de Entrenamiento y Demostrativo de Extensión Agrícola de San Ramón, Uruguay, del Proyecto Cooperativo del Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas (IICA) y el Gobierno Uruguayo, facilitó la especialización de los primeros ingenieros agrónomos argentinos especializados en extensión agropecuaria (Alemany, 2012).

“División Clubes Juveniles” y el “Hogar Rural”<sup>155</sup>. Un año después, con la creación del INTA estos dos servicios pasaron a la órbita del instituto (INTA, 1967). A pesar de los antecedentes existentes, recién con la fundación del organismo se institucionalizará la investigación y extensión dirigidas al sector agropecuario.

Durante los años cincuenta, bajo la premisa que América Latina debía incorporar las tecnologías disponibles a nivel internacional que -según se diagnosticaba- mejorarían la productividad y con ella las condiciones de vida de la población rural, el IICA asignaba particular importancia a la capacitación de profesionales latinoamericanos (Losada, 2003). Los servicios de extensión eran concebidos como el canal preferencial para transmitir las nuevas técnicas para cultivar la tierra. Como señala Losada (2003:10), en esta estrategia la incorporación de tecnología ocupaba el centro de la solución de la problemática rural, dejando de lado “los principales problemas del agro latinoamericano”: estructura de la propiedad y la tenencia de la tierra.

Bajo el auspicio del IICA y enmarcado en el Programa de Cooperación Técnica de la OEA, se organizó en Uruguay el primer Curso de Extensión para América Latina, cuya premisa era que la extensión debía promover la oferta de tecnología agropecuaria dirigiéndose a la familia rural en su totalidad, de donde se derivaba el fomento al trabajo con las mujeres en economía doméstica y con los hijos de los productores como parte de un servicio dirigido a la comunidad (Gutiérrez, 1990). A su regreso al país, extensionistas regionales organizaron un ciclo de capacitaciones para otros extensionistas y, en 1955, un seminario en la estación experimental de Pergamino dictado por técnicos de la OEA recibió a cuarenta agrónomos regionales (Alemany, 2012). El andamiaje teórico que signó el enfoque de la extensión difundida por estos organismos estuvo centrado en el modelo estadounidense y fue bajo los parámetros de los principales exponentes de la sociología rural norteamericana que se sentaron las bases en torno a las definiciones de su contenido, objetivos y alcances. Esta situación era visibilizada por los docentes invitados, entre los que figuraba Everett Rogers, “el ideólogo de la adecuación del modelo clásico de extensión norteamericano al mundo subdesarrollado” (Alemany, 2012: 42) ¿En qué consistía este modelo? Sevilla Guzmán y Alemany (2007) señalan que la “extensión convencional” surge a partir de la influencia de la sociología rural norteamericana, bajo dos influjos teóricos principales.

---

<sup>155</sup> El primer club se fundó el 4 de julio de 1954 en Trancas, provincia de Tucumán, meses después el segundo en Lobos, provincia de Buenos Aires (INTA; 1967).

El primero a fines del siglo XIX, en el marco del impacto que experimentan las comunidades rurales norteamericanas en el acelerado proceso de acumulación de capital producido por la industrialización post guerra civil, lo encabezan estudios como la teoría del *continuum* rural-urbano, que buscaban impulsar procesos educativos que cambiaran las mentalidades conservadoras y atrasadas de los agricultores (Sevilla Guzmán y Alemany, 2007). El segundo influjo teórico que nutre la extensión convencional lo integran los teóricos de la “modernización agraria”, encabezados por Rogers, que sientan las bases para la orientación de la extensión en el marco de la “revolución verde” que, mediante la difusión de los paquetes tecnológicos, consolida el uso industrial de los recursos naturales (Sevilla Guzmán y Alemany, 2007). Como señalamos, es éste segundo enfoque el que es exportado a América Latina.

El planteo de Rogers ponía su acento en la necesidad de transformar los comportamientos de la población rural de la periferia. Esta concepción, centrada en barrer “resistencias culturales” identificadas al atraso, tenía en el componente educativo un énfasis particular. La extensión rural cobrará un fuerte impulso de la mano de su modelo “Investigación- difusión”, resultado de estudios sobre adopción y difusión de nuevas ideas entre agricultores, efectuados por un comité de la Sociedad de Sociología rural del Norte y Centro de U. S. A en 1955. Este modelo, de gran impacto y continuidad en la práctica de la extensión, “con el tiempo tendería a beneficiar a la agricultura capitalista, e indirectamente a los fabricantes y distribuidores de insumos, a las agroindustrias y a las instituciones financieras” (Paz, 1989: 5). La premisa de favorecer la adopción de tecnología agropecuaria se desarrolló en simultaneidad a la de instar a la internalización de una racionalidad económica capitalista en las economías campesinas, siguiendo el modelo estadounidense de los *farmers*. Al mismo tiempo, estuvo marcado por la difusión de las tecnologías producidas en las principales potencias.

Según Paz (1989) la extensión rural estuvo signada por dos enfoques principales, la visión estructuralista y el modelo neoclásico. Retomando a Daniel Astori (1984), señala que ambos enfoques, el estructuralista y el neoclásico, carecieron de una explicación que diera cuenta del carácter específico de las formaciones sociales latinoamericanas y su inserción en el modo de producción dominante. El neoclásico, impulsado en América Latina por Agencias Internacionales en la región y Programas de

Ayuda Externa de los Estados Unidos desde 1951 (Paz, 1989), señaló a un tipo social, el campesinado, como una de las trabas para la modernización del agro. Al igual que para la explicación del cambio tecnológico en sí mismo, este enfoque identificó los “estímulos económicos” para la producción agropecuaria como factores exógenos, desconectados de su dinámica histórica, reduciendo la problemática agraria a la asignación de recursos escasos<sup>156</sup>. Entre las definiciones de extensión rural difundidas por el IICA, se enunciaba

Extensión es un sistema educacional creado para *impartir conocimientos a la población rural, al productor, su esposa y sus hijos*. Extensión expresa una forma de enseñanza cuyo desarrollo y aplicación directa concierne ya a la finca o granja, ya al hogar, ya a la comunidad, con breves u ocasionales pausas. (...) Extensión provee de educación a la población rural (IICA, 1954: 9, citado en Alemany, 2012, énfasis propio).

Tanto el componente educativo, como los interlocutores, quedaban de este modo enfáticamente explicitados. Sobre estos últimos, sin embargo, permanecía el interrogante, ¿a qué franja social, o a cuáles, hacía referencia la máxima “al productor rural, su esposa y sus hijos”? Si esta concepción provenía, como señalamos, de un determinado contexto que atravesaba la producción de conocimiento, a su vez su adopción en cada medio rural, bajo las respectivas transformaciones socio-económicas y políticas locales, iba a configurar también nuevos escenarios. ¿Qué materializaciones alcanzaron en el INTA argentino estas definiciones? ¿Cómo fueron apropiadas y transformadas en las décadas siguientes? En otras palabras, ¿qué alcances (y qué limitaciones) asumió en el país la práctica que afirmaba: “Extensión es un sistema educacional que usa como aulas de clase o laboratorios los campos de cultivo o de pastoreo, los establos, las huertas, los gallineros, las cocinas y las comunidades” (IICA, 1954: 9, citado en Alemany, 2012: 37)?

---

<sup>156</sup> Si bien la influencia de la extensión rural norteamericana y de su difusión en América Latina y el Caribe por la FAO y el IICA fue notable, también intervinieron actores locales como la Junta Nacional del Algodón y las maestras y maestros rurales (Alemany, 2012).

### **1.3. Los comienzos de la extensión en el INTA: entre la asistencia educacional y la mirada asistencialista**

La extensión rural cobró con la creación del INTA en 1956 una dimensión nueva. Si bien incorporó enfoques y estructuras preexistentes, la creación del instituto supuso un alcance inédito hasta el momento. A través de la diseminación de una red de Agencias de Extensión Rural (AER) a lo largo del país que posibilitaron la ampliación de la cobertura territorial, fue concretándose la idea de “llevar el Ministerio al campo”. Por otra parte, por primera vez la práctica de la extensión era concebida en unidad con la investigación agropecuaria. La definición de estos dos pilares de acción (investigación y extensión) bajo un mismo marco institucional fue lo que distinguió al INTA de sus pares. Si bien esta articulación no iba a ser sencilla, ni linealmente traducida del modelo organizacional inicial a la práctica, el planteo en sí mismo resultaba una novedad y otorgaba nuevos recursos a la tarea. El contacto con la población rural se incrementó a través de los extensionistas, que habrían de tejer distintas vinculaciones con las comunidades locales.

La puesta en marcha del INTA no fue un proceso aislado. Como señala Paz (1989), a mediados de los años cincuenta resolver el problema de la descentralización de las actividades de investigación y extensión rural en organismos de administración autónoma fue clave para cumplir con los objetivos de la modernización agrícola. La creación de organismos similares en distintos países, como el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) de Ecuador (1959), el INIA de México (1960), el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) (1963), el INIA de Chile (1964) y otros similares, lo atestigua<sup>157</sup>. Este proceso fue acompañado por la puesta en marcha de organismos internacionales de investigación agropecuaria como el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT) en 1966, el Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) en 1967, y el Centro Internacional de la Papa (CIP), en 1971, entre otros.

---

<sup>157</sup> En Brasil, si bien durante 1960 se fortalece la investigación agropecuaria, recién en 1973 se produce la creación de la *Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária* (EMBRAPA), mientras que en Uruguay se producen importantes transformaciones en el Centro de Investigaciones Agrícolas Alberto Boerger (CIAAB), dependiente del Ministerio de Agricultura (Paz, 1989).

Sobre la base del sistema de extensión estadounidense y del *Experimental Station System*, los nuevos modelos institucionales partieron de considerar la disponibilidad de la tecnología a nivel internacional para su adaptación y difusión a América Latina. Junto a la asistencia técnica, el financiamiento emanado de organismos internacionales fue de gran peso en esta etapa. Las agencias de la ONU tuvieron un rol destacado, en especial la CEPAL, la FAO, el Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social (ILPES) y el Banco Mundial (BM). También lo tuvieron las Fundaciones, en particular la Fundación Rockefeller, los organismos de las agencias bilaterales para el desarrollo, como la Agencia Internacional para el Desarrollo (AID), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Secretaría General de la OEA. En este contexto se institucionaliza la extensión rural en Argentina, con la creación del INTA.

Como señalamos, dentro de las influencias presentes en la organización de la extensión rural en INTA, el sistema estadounidense fue la principal. Con una antigua tradición en la materia, cuyos comienzos datan de fines del siglo XVIII, Estados Unidos se constituyó tempranamente en un centro referente<sup>158</sup>. La práctica de extensión era definida como “dar instrucción y demostraciones en agricultura” bajo el lema “*Help the people help themselves*” (Rasmussen, 1989: 1). A diferencia de lo que sucedió en Argentina y en buena parte de América Latina, la extensión rural estadounidense estuvo siempre imbricada al sistema universitario. Un sistema tripartito, compuesto por una agencia de extensión rural, la Universidad y una estación experimental, fue la base del sistema de extensión, que surgió con un fuerte componente educativo. Mediante la *Morrill Land-Grant Act*, de 1861, el gobierno federal dispuso los medios para que cada Estado desarrollara un *college* dedicado a la agricultura. Fue seguida por legislación adicional, orientada a diversificar y expandir estas instituciones. Entre ellas, en 1887, la *Hatch Act* proveyó fondos para impulsar estaciones experimentales, la *Adams Act*, de 1906, lo hizo para investigación agrícola y, en 1914, la *Smith-Lever Act* para la extensión del conocimiento producido a los farmers (Fitzgerald, 1986). Se entendía que, por su contacto directo con el medio, la extensión era la encargada de reportar los problemas a los investigadores. Bajo la misión de “ayudar a la gente mediante un

---

<sup>158</sup> En 1785 fue creada la primera organización para promover la agricultura, en 1810 aparecieron las primeras publicaciones del *Farm Journal*, y en 1818 las del *American Farmer*. En 1862 se organizó el Servicio Estatal de Extensión (por Estados) y en 1914 el entonces presidente Woodrow Wilson firmó el *Smith Sever Act*, haciendo del Servicio de Extensión “el arma educacional del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos” (Rasmussen, 1989:56). Véase también Röling (1988).

proceso educativo que utiliza conocimiento científico” (Rasmussen, 1989:4), la extensión rural hizo foco en difundir una dieta saludable, buenas prácticas de manejo agronómico, prevención de plagas y enfermedades. En cuanto a los extensionistas, la piedra angular la conformaba el *Cooperative Extension System*, dentro del cual funcionaban los grupos *4-H Leader*. En ellos los hijos de los *farmers* norteamericanos eran el público principal. Por otro lado, el *International Four-H Youth Exchange* (IFYE) fue concebido como un instrumento de “ayuda” para los jóvenes del medio rural del tercer mundo. Los “Grupos de Voluntarios”, y los “Girls Club” (club de chicas), junto a los programas especialmente destinados a “*Farmers and Farm Families*”, fueron también desde temprano parte de la columna vertebral de la extensión (Rasmussen, 1989).

Pronto, estos esquemas serían imitados en distintos países de América Latina. Como veremos, el INTA no sólo adoptó buena parte del sistema norteamericano, en especial en lo que hizo al funcionamiento de algunos de sus canales institucionales, como Hogar Rural, los Clubes Juveniles 4-A y los grupos de Voluntarios, sino que también compartió parte de la idiosincrasia que rodeó el funcionamiento de la extensión estadounidense. En los Estados Unidos, una institución que históricamente tuvo una significativa gravitación dentro del medio rural fue la Iglesia. En el caso de la extensión rural, las recomendaciones estrictamente agronómicas y sanitarias pensadas para dos colectivos sociales específicos, mujeres y jóvenes del campo, estuvieron acompañadas por la instrucción de las conductas y el seguimiento de las pautas de socialización de estos grupos. Pese a las grandes diferencias entre uno y otro medio social, la influencia religiosa -en concreto el peso de la Iglesia Católica- fue también relevante en Argentina para la orientación de la extensión<sup>159</sup>. La combinación con la propia historia política y

---

<sup>159</sup> Véase en este mismo capítulo para una mención a estas referencias en las publicaciones del INTA orientadas a la juventud. Sobre la actualidad de estas modalidades al interior del INTA, resultan llamativas las referencias que circulan dentro del sistema de *mailing* del organismo que distribuye correos a todo el personal. Junto a diversas notificaciones, se informan también los fallecimientos de integrantes del organismo, y hasta de los familiares de estos. Este mecanismo, que refuerza la pertenencia a la comunidad institucional, registra frecuentemente expresiones de este tipo,: “Elevamos una plegaria a Dios por el eterno descanso de su alma, y rogamos por una cristiana resignación de familiares ante tan irreparable pérdida. Buenos Aires, 20-01-2014” (INTA, 2014, comunicación de correo electrónico). A diferencia de otros ámbitos de investigación, como determinadas casas de estudios del espacio universitario, en el INTA estas referencias se multiplican también en mensajes institucionales y marcas espaciales (como crucifijos) presentes en algunas de sus unidades y oficinas. En un plano mayor, abundan los relatos de integrantes del organismo en los que se comenta la vinculación de algunos funcionarios como miembros activos del *Opus Dei*, brazo ortodoxo de la iglesia católica fundado en España en 1928, que en Argentina comenzó sus actividades en 1950.



económica del país, y en especial con las transformaciones sociales del agro, daría otros resultados.

Otro punto importante de conexión, en donde los Estados Unidos marcaron la vanguardia que luego habrían de instrumentar otros servicios de extensión de distintas partes del mundo, fueron los métodos usados para las demostraciones. Ya en las primeras décadas del siglo XX se utilizaron estrategias tendientes a acercar las recomendaciones a la población rural. Así, además de la realización de exhibiciones, se instrumentaron publicaciones específicamente ideadas con este fin al menos desde 1920. Algunas de las tempranas demostraciones ensayadas desde los sistemas de extensión universitarios, como la *Demonstration Train* (1903) en Iowa State College o la figura del *Travelling Instructor*, del Massachusetts Agricultural College, serían adaptadas al medio local. En rigor, el mayor punto de contacto estuvo dado por la máxima de “transferir conocimiento del laboratorio al campo” (Rasmussen, 1989: 47). Mientras que en el sistema de extensión estadounidense esto estaba atravesado por la premisa de “llevar la Universidad a la gente” (Rasmussen, 1989:1), en Argentina sería el INTA el encargo de llevar el Ministerio -y la CyT- al campo.

Mientras que el pensamiento cepalino de corte desarrollista y estructuralista latinoamericano tuvo una fuerte gravitación en la organización del instituto, para la organización del sistema de extensión lo tuvo la sociología rural norteamericana, por entonces imbuida del esquema de Rogers. Con el par modernidad/atraso de trasfondo, que identificaba al tradicionalismo rural como una traba para la adopción de innovaciones científico-técnicas, su difusión fue hecha en estrecho contacto con las perspectivas del desarrollo, de la mano de enfoques etapistas como el de Walt Rostow (1960) que asumían que las sociedades menos desarrolladas habrían de recorrer el mismo camino que las desarrolladas. Este dualismo propio de los planteos de los intelectuales de la modernización -entre los que se encontraban Neil Smelser, David Apter y Talcott Parsons- fue traducido a la visión sobre el agro, identificando a la agricultura tradicional como exponente del atraso (Galafassi, 2006). Bajo esta perspectiva se planteaba el pasaje lineal de la sociedad de tipo tradicional, imbuida de lazos de afectividad, patrones de conservadorismo, y soluciones desactualizadas o erróneas, hacia la sociedad moderna signada por una racionalidad económica capitalista, universalismo, y soluciones técnico-científicas (Machado, 1975). La problemática del

liderazgo, detectar e impulsar líderes como agentes del cambio, era también una de las marcas más importantes en el contacto con la población rural definido en este enfoque.

En América Latina este período de la extensión, así como la propia creación de los organismos como el INTA, se encuentra además indisolublemente vinculado a la crisis de los esquemas de sustitución de importaciones y al impulso de la “Alianza para el Progreso” (1961), lanzada durante la presidencia de J. F. Kennedy. Bajo el fantasma de la revolución cubana (1959), con el objetivo de prevenir nuevos estallidos sociales, su diseño buscará inyectar a la periferia nuevos recursos (si bien estos tendrán mayor peso en el plano discursivo que en el material) y, en especial a las zonas rurales. Durante esta década se propagaron también planes de investigación y asistencia técnica orientados a la reforma agraria en distintos países de la región. Como señalaban algunos estudios contemporáneos, el financiamiento del BID cumplió un rol destacado bajo la premisa de prevenir y contener el conflicto social y el “contagio” de la experiencia cubana (Giménez Landines, 1969; Oliart, 1976). En este marco, durante la década de 1960 fue difundido un modelo de insumos de alta rentabilidad, que buscó incrementar la productividad del sector mediante la difusión de semillas genéticamente modificadas, maquinaria agrícola, asistencia técnica, uso de plaguicidas y fertilizantes (Paz, 1989). La difusión de estos insumos, con sus respectivos planes de promoción e investigación, fue acompañada desde la extensión rural por la idea fuerza de que el problema de la pobreza, y en particular de la pobreza rural, era de tipo educacional y que era necesario “cambiar la cabeza” de la población más afectada. En este sentido, una de las principales críticas al resultado de la difusión del modelo de Rogers es que redundó en “una extensión agrícola asistencialista y paternalista” (Paz, 1989: 9), unida a la necesidad de evitar los desbordes sociales mediante una integración subordinada de las franjas de agricultores de menores recursos. En rigor, en el caso argentino la extensión del INTA no se dirigió inicialmente en forma prioritaria a los agricultores “de menores recursos”, sino que más bien concentró sus esfuerzos en los productores medianos y, en menor medida, grandes. Una visión más optimista describe a la organización del sistema de extensión rural del INTA como una “cruzada educativa”:

Organizar una verdadera cruzada educativa capaz de demostrar los beneficios de la modernidad y ayudar a salir del estancamiento y los bajos niveles de vida del sector rural, fue la misión explícita con que

se crea el Servicio Nacional de Extensión del INTA” (Alemany, 2012: 32).

¿Cuáles fueron, entonces, los interlocutores del INTA? ¿Cómo definieron sus estrategias de contacto? Y, ¿de qué forma fueron modificándose en relación a las transformaciones políticas y socio- económicas en curso?

#### **1.4. Jóvenes, mujeres y “familia rural”: el INTA y sus canales, Clubes 4-A y Hogar Rural**

Con la creación del sistema de extensión del INTA, la actividad centró su funcionamiento en las AER, repartidas a lo largo del territorio. El equipo de trabajo lo integraba el jefe de cada agencia -ingenieros agrónomos, técnicos agrícolas o veterinarios de formación- junto a otros dos integrantes. Uno de ellos era el “asesor de Clubes 4-A”, un técnico agrícola especialmente dedicado al trabajo con las juventudes rurales. Otra, la asesora de “Hogar Rural”, era generalmente maestra rural o técnica del instituto especializada en “Economía doméstica”. Estos dos canales institucionales, los Clubes 4-A y Hogar Rural, estaban dirigidos a dos colectivos sociales, mujeres y jóvenes.

Se entendía que de esta manera, al sumarse estas acciones al asesoramiento técnico a los productores, se abarcaba al conjunto de la “familia rural”. A partir de 1954 se habían organizado los Clubes Juveniles Rurales, que dos años más tarde tomaron el nombre de Clubes Juveniles Rurales 4-A (Acción, Adiestramiento, Amistad, Ayuda). Como planteamos, el modelo provenía del sistema de extensión rural estadounidense. Con la creación del INTA, pasaron a depender de él. Destinados a jóvenes de ambos sexos de 10 años en adelante, el emblema de los Clubes fue un trébol, con una “A” en cada uno de sus pétalos: “Acción para el progreso rural, Adiestramiento para capacitarme, Amistad para el mejor entendimiento y Ayuda para el bien común” (INTA, 1969: 1). Su objetivo era “trabajar con la juventud para su desarrollo como ciudadanos, ayudarlos a encontrar soluciones adecuadas para sus problemas y crear en ellos una actitud favorable hacia el uso de la nueva tecnología” (INTA, 1969: 2). Centrados en actividades recreativas (campamentos, deportivas, culturales) y de difusión de técnicas

agronómicas, en 1967 existían 445, con la participación de 11.628 jóvenes de ambos sexos y 90 asesores del INTA (INTA, 1967).

Otro de los objetivos del servicio de extensión del INTA consistía en “ayudar a las amas de casa a mejorar los aspectos sociales, económicos y sanitarios del hogar y la vida familiar” (INTA, 1962). En 1960 tuvo lugar el Segundo Curso Internacional de Economía Doméstica en Extensión Agrícola, organizado por el IICA en Concepción del Uruguay, donde se reafirmaba la alineación local a los objetivos promovidos en los programas internacionales (Gutiérrez, 1990). Con este espíritu fueron promovidos en INTA los llamados Clubes de Hogar Rural. En 1966 funcionaban 407 en los que participaban 7.640 mujeres (INTA, 1969). En rigor, el trabajo de extensión rural con mujeres venía siendo promovido por organismos como el IICA y reconocía algunos antecedentes locales tempranos. En 1915 había sido creada la Escuela del Hogar Agrícola en Tandil, dependiente del Ministerio de Agricultura de la Nación, que se había orientado a la formación de maestras rurales, ofreciendo becas para docentes del interior del país a las que otorgaba el título de “maestra del hogar rural” (Gutiérrez, 2007: 126, citado en Alemany, 2012). Posteriormente, en 1948, el Ministerio de Agricultura había creado el Instituto Superior de Profesoras del Hogar Agrícola localizado en Bolívar, provincia de Buenos Aires, donde se impartía a las alumnas cursos de economía doméstica, granja, agricultura, manualidades (Tort, 2008).

Como señala Gutiérrez (2009), mientras que la “familia rural” era entendida en tanto familia nuclear (el productor, su esposa y sus hijos), el trabajo con jóvenes y mujeres poseía una fuerte impronta de género que promovía el lugar de éstas en tanto amas de casa, esposas y madres. En un folleto de difusión preparado en 1962 por una asesora de Hogar Rural de una agencia de extensión rural de la provincia de Chaco, titulado “¿Qué es un Club Juvenil Rural 4-A?”, se explicaba mediante ilustraciones: “Sus hijos practicarán técnicas nuevas para criar animales, cultivar plantas, manejar máquinas, etc. Sus hijas, cocina, bordado, corte y confección, manualidades, primeros auxilios, etc.” (INTA, 1962: 2). Poco tiempo después, la justificación se extendía al objetivo de “formar hombres y mujeres sanos y fuertes, honrados y capaces, rectos y laboriosos, útiles a la comunidad y a la Patria” (INTA, 1969b: 3). El mandato del trabajo con “la familia rural” estaba anclado en representaciones concretas de la fisionomía de ésta, y en comportamientos deseables, que se buscaba propagar. En este

sentido, un folleto de 10.000 ejemplares dirigido conjuntamente a los Clubes Juveniles Rurales 4-A y a grupos rurales del Movimiento Rural de la Acción Católica Argentina incluía entre las pautas de socialización promovidas las siguientes recomendaciones a los jóvenes: “No debe pedirse una chica en casamiento si no se está: 1. perfectamente seguro de quererla SIEMPRE, (...) 6. Perfectamente seguro de que cada hijo que llegue será una bendición de Dios” (INTA, 1962b: 7)<sup>160</sup>. Para ellas, se recomendaba,

No puede decir que sí si no está: perfectamente segura de que después de Dios a nadie querrá más que a su marido; (...) 3. Perfectamente segura de que hará lo posible por no malgastar el dinero que el marido gane (...) 6. Perfectamente segura de que sus hijos serán la corona que la adornará en el cielo. 7 Perfectamente segura de que el cariño que se apoya en Dios dura PARA SIEMPRE (INTA, 1962b: 7).

En el mismo sentido, se insistía en folleto del INTA en la condición de sacramento del matrimonio, sobre el que se aclaraba: “para nosotros los cristianos: EL UNICO VERDADERO CASAMIENTO ES EL DE LA IGLESIA (INTA, 1962b: 10, mayúsculas en original). Dentro de la vida conyugal, y del “Hogar Rural”, algunas consideraciones, como “Si él es jefe ella no es esclava”, o “Si él es cabeza, ella es corazón” (INTA, 1962b: 10), explicitaban el rol esperado para las mujeres, sobre las que se advertía: “Ella, porque es más sentimental, más sensible, más tierna y porque vive más dentro del hogar, DEBE CONSEGUIR que ese hogar sea un hogar de amor” (INTA, 1962b: 15, mayúsculas en original). De esta forma, las técnicas y procedimientos científicos propios de la modernización agrícola eran promovidos en conjunción con los roles familiares tradicionales (Gutiérrez, 2009). Jóvenes y mujeres eran vistos como los medios para fomentar el arraigo rural y la difusión tecnológica exitosa.

---

<sup>160</sup> Entre los principales movimientos juveniles agrarios en la segunda mitad del siglo XX se destacaron, además de los clubes 4-A del INTA, el movimiento juvenil de la FAA desde 1930 (que contaba en 1964 con 244 centros juveniles en todo el país), las juventudes de la Asociación de Cooperativas Argentinas desde 1944 y movimientos católicos de jóvenes rurales, véase Gutiérrez (2009).

En cuanto al funcionamiento interno de los clubes juveniles, los estatutos y reglamentos disponían que podía asociarse “todo joven, varón o mujer” (INTA, 1964: 2), que expresaran por escrito el deseo de pertenecer a la asociación. Esta prerrogativa suponía, posiblemente, una demarcación en cuanto a las franjas sociales implicadas, teniendo en cuenta las tasas de analfabetismo imperantes en el medio rural<sup>161</sup>. Al cumplir los dieciocho años las mujeres debían pasar a pertenecer al Club Hogar Rural de la zona, en caso que existiera. Funcionaban dirigidos por comisiones directivas (presidente, vicepresidente, secretario y 2 vocales), elegidas anualmente por voto secreto. La comisión era la encargada de convocar a reuniones periódicas de socios, y a sostener el contacto con la AER local. Los socios no abonaban (ni podían abonar) ningún tipo de cuota, mientras que sí se permitía la obtención de fondos propios a cada Club formados por aportes voluntarios, ferias o donaciones. El asesoramiento técnico estaba bajo responsabilidad de un extensionista de la agencia de extensión de influencia, quien realizaba un seguimiento pormenorizado de sus actividades. La difusión de prácticas agronómicas y recomendaciones varias sobre control de plagas vegetales, recomendaciones para la siembra y cosecha de distintos cultivos, también era objeto de las publicaciones que el INTA realizaba y distribuía entre los “socios participantes”. Para 1969 el rol de los Clubes se explicaba afirmando que facilitaban “la formación de la personalidad del joven, en los aspectos culturales, sociales, técnicos y económicos” (INTA, 1969). Se les proponía realizar proyectos de trabajo en sus propias chacras, junto a otras actividades recreativas y culturales. Los proyectos podían ser individuales, donde un socio desarrollaba un plan bajo ciertas técnicas, o colectivos, planeados “con la ventaja de enseñar a los jóvenes a convivir y trabajar en equipo e iniciarlos en una acción cooperativa” y realizar “proyectos comunitarios”, enfocados al “mejoramiento de la comunidad” (INTA, 1969: 5). Junto a estas actividades se desarrollaban las recreativas. Fundamentalmente, organizadas en base a campamentos, excursiones y giras educativas, proyecciones de cine en los pueblos y funciones teatrales.

Respondiendo a la pregunta, *¿De quién es?* la misma publicación explicaba que, dirigidos por los jóvenes, “El Club Rural 4-A pertenece a la comunidad donde desarrolla sus actividades” (INTA, 1969:6). Y, en este marco, apelaba a interpelar algunos sujetos para lograr su participación: maestros, a quienes se convocaba a

---

<sup>161</sup> Para 1967 la población mayor de 35 años alcanzaba una media en el grado de escolaridad de 3° grado (INTA, 1967).

difundir las actividades y cooperar con el asesor del Club; dirigentes políticos, a los que se les solicitaba financiamiento y promoción; padres, a los que se instaba a enviar a sus hijos y, finalmente al “industrial o comerciante” al que se hacía un llamado a apoyar “moral y económicamente” las actividades (INTA, 1969: 6). La extensión del INTA se planteaba, de esta manera, a sí misma como un vector de difusión de los “beneficios” del incremento de la productividad agrícola, en términos de una

(...) elevación del nivel de vida social y económica de la familia campesina, para propender a la formación de una población rural instruida, competente, próspera y sana, en condiciones de disfrutar las comodidades que brindan los adelantos de la vida moderna (INTA, 1958, citado en Massoni, 2002: 37).

Sobre estas prácticas y concepciones iniciales fue definiendo su rol la extensión rural. Manteniendo su núcleo de atención en la familia como unidad social básica (Losada, 2003) y su accionar en actividades que incluían las prácticas agronómicas, problemas habitacionales, sanitarios y nutricionales de la población rural, su sentido iba a ponerse en cuestión al calor de las transformaciones políticas y socio-económicas nacionales.

## **2. Agrónomos de terreno (1970-1976)**

Si bien desde sus inicios el fortalecimiento del sector privado fue una de las razones de ser del organismo, y su rol como instrumento de la política agropecuaria careció muchas veces de definiciones precisas, su incidencia real en el territorio adquirió distintas manifestaciones a lo largo de su historia, que muchas veces superaron los propios objetivos del organismo. En otras palabras, bajo un mismo andamiaje institucional convivieron proyectos y orientaciones diversas, e iniciativas encarnadas en grupos o figuras que tradujeron de modo disímil, y en ocasiones antagónico, la letra que instaba a ejercer un trabajo en beneficio de la comunidad y “la familia rural”. El reconocimiento social del organismo también fue creciendo y modificándose, al igual que la construcción del sentido de pertenencia e identidad de sus integrantes. En particular, durante los años previos a la última dictadura, el instituto no permaneció

ajeno al alto grado de movilización social y política que atravesaba al país. Junto a distintas iniciativas a nivel gremial, existieron cuestionamientos a su rol tradicional, que buscaron poner en cuestión para quién y cómo debía producir conocimientos y tecnología agropecuaria.

En oposición a la extensión rural tradicional, Sevilla Guzmán y Alemany (2007) han señalado la existencia en América Latina de un enfoque crítico de menor alcance, la “extensión rural alternativa”, situado en la década de 1960 y principios de 1970, cuyo marco teórico fundamental lo constituyó la teoría de la concientización del educador brasileño Paulo Freire (1969), y algunas vinculaciones con las teorías de la dependencia (Sevilla Guzmán y Alemany, 2007). La educación popular y la investigación participativa fueron las principales propuestas metodológicas que se opusieron a la orientación verticalista previa. En el plano local, Paz (1989) ya había distinguido como “extensión alternativa” a algunas prácticas de educación popular impulsadas desde ámbitos extra estatales, señalando que no se reducían a la asistencia técnica sino que incluían el desarrollo comunitario y se distanciaban de la transmisión vertical y acrítica del conocimiento identificada con la extensión rural tradicional. En relación al INTA, Alemany (2003; 2012) ha mencionado que durante la década de 1970 se incorporaron

(...) elementos de la teoría de la concientización y de educación popular, (especialmente en el trabajo con juventudes y mujeres), en la cual la tarea esencial de la extensión pasaba a ser acompañar a las poblaciones rurales para fortalecer el proceso de toma de conciencia de la situación de subordinación existente y ayudar a su transformación. (Alemany, 2012: 42)

¿Cuáles fueron, entonces, las estrategias y modalidades que asumió la extensión rural del INTA en estos años? ¿Cuáles sus alcances y limitaciones? Como recuerda una ex integrante del INTA, “Nunca se definió *qué era la familia rural*” (Ex integrante del INTA, entrevista, énfasis propio). Socióloga de formación, ingresó en 1962 como extensionista a Pergamino. Una de sus funciones era la de docencia en los cursos inductivos, que el INTA organizaba para los extensionistas ingresantes de todo el país. “Yo hablaba de la estructura social agraria por regiones y del cambio social” (ex integrante del INTA, entrevista, 2011). Los canales institucionales eran así utilizados



para intentar instalar nuevas agendas. Años después de haber ingresado como extensionista, pasó a integrar el área de investigación en Economía y Sociología rural de la estación experimental, hasta su cesantía en 1976. Una de las investigaciones realizadas incluyó una articulación con el área de extensión. Se trataba de un estudio de regionalización dentro de la zona maicera, para el que definieron de acuerdo a la experiencia de los extensionistas cuáles eran los estratos socioeconómicos para la región. Avanzar sobre definiciones asibles sobre la “familia rural” y problematizar quiénes eran los interlocutores a los que se dirigía el INTA requería indagar sobre el mapa de sujetos agrarios existente: quiénes, cuántos, bajo qué condiciones de acceso a los recursos, involucrados en qué dinámicas productivas.

La inserción comunitaria de los extensionistas incluía también otros frentes. Fuertes articulaciones con las escuelas rurales en muchas ocasiones eran el vector, a partir del que se facilitaba el contacto con los pobladores. Los docentes eran frecuentemente quienes ponían a funcionar propuestas del servicio de extensión. Según puntualiza un ex integrante de la agencia de extensión rural del INTA en Venado Tuerto, en funciones entre 1961 y 1976 -cuando fue cesanteado y pasó a recorrer los mismos territorios pero como vendedor de productos de la firma Cargill- y desde su reincorporación en 1988:

La escuela rural era nuestra base para iniciar cualquier entrada en la zona de su cobertura. Nos presentábamos ante la o el docente a cargo, que en general de lunes a viernes vivía en el mismo medio rural. En general las actividades se realizaban en la escuela, salvo cuando el evento era una charla técnica o la visita a un lote experimental, para lo que se iba al campo (Zorzin, 2012: 20).

En este sentido, el contenido educativo también estaba presente en las modalidades de contacto. En palabras de otro extensionista del INTA: “Los equipos de extensión hacían extensión como educación no formal. No estaba pensado como una transferencia de tecnología” (ex extensionista, entrevista, 09/10/2009). Este par dicotómico, educación no formal/ transferencia de tecnología, alude a dos circunstancias. Una retrospectiva, y otra ligada a las transformaciones por las que iba a transitar la actividad. En la retrospectiva se pone de manifiesto el rol que los

extensionistas cumplían mediante su inserción territorial, rebasando el asesoramiento meramente técnico. En este sentido, el accionar de la extensión rural estaba acompañado por la promoción de diversos ámbitos de socialización. Quien fuera durante quince años supervisora del servicio de Extensión del área pampeana recuerda al cine como estrategia de acercamiento:

Las primeras invitaciones que formulábamos para ver cine también eran la base para empezar a hablar otros temas. Metíamos un documental, o un corto, o una película entera que nos permitiera una buena discusión de los temas que nos importaban. Pero con una citación para ver cine, se te llenaba. Todo el mundo iba. Todos los estratos de la comunidad rural iban porque no había otra cosa mejor. *Y dar cine en una chacra era una fiesta* (ex extensionista, entrevista, 4/9/2011).

En 1972, en un informe de la FAO sobre el estado del Servicio de Extensión del INTA, entre los materiales educativos relevados junto a folletos y pizarrones portátiles se incluían películas, proyectores de cine, franelógrafos y diapositivas (FAO, INTA, 1972).

Hasta la creación del INTA era frecuente que en distintas zonas los servicios provinciales de extensión cobraran por las consultas. Esta circunstancia generaba, según reconstruye una extensionista del área pampeana, que en un comienzo la población “era un poco reticente a acercarse pensando que había que pagar” (ex extensionista, entrevista, 02-09-2011). Con el tiempo, la inserción favoreció el contacto. Uno de los canales institucionales mediante el que se generaban inserciones con las comunidades locales eran los clubes juveniles 4-A. Como señalamos, iniciaron su actividad de la mano de la creación del INTA, imitando el servicio de extensión estadounidense. Si bien accionaban institucionalmente, tenían su propia sede física en ámbitos ligados a la socialización de los jóvenes. Mayormente en escuelas rurales, que habitualmente cobijaban muchas de las actividades sociales del lugar, o bien en clubes sociales o deportivos. La particularidad de este funcionamiento otorgaba al INTA una mayor capilaridad en sus estrategias de contacto. Para 1970, bajo el título “El futuro es de los

jóvenes”, una publicación del INTA explicaba el rol de los Clubes 4-A dentro del área de Extensión del organismo:

La Extensión Agrícola, para poder cumplir la función que le compete en la educación, debió extender su primitivo radio de acción, reducido al productor rural, y abarcar también a su mujer y a sus hijos. A éstos últimos se dirige la tarea de los Clubes 4-A (INTA, 1970: 2).

Entendidos como “entes educacionales”, tendientes a “favorecer la socialización juvenil a través de la mutua cooperación” (INTA, 1970: 5), establecían como objetivo principal la formación integral de la juventud rural. Esta máxima era entendida como un acompañamiento en “la definición en el orden vocacional” y en “la integración social de cada uno de ellos con su medio” (INTA, 1970: 5). En términos concretos, para entonces funcionaban como canales de difusión de conocimientos sobre tareas agrícolas, brindando cursos de capacitación, pasantías y becas, y centrando su labor en proyectos por zona abocados a la realización de cultivos mejorados, crianza de animales, trabajos de huerta, preparación y conservación de alimentos, mejoramiento de la vivienda y planes sanitarios. Según el diagnóstico del propio instituto, estas actividades permitían

(...) no sólo mejorar en alguna medida cuanto al respecto ya existe en el hogar o en el campo, sino también extender la acción del grupo mediante reuniones recreativas, culturales, sociales o artísticas, fomentar ideas o prácticas sobre cooperación, coordinar planes de beneficio común e interesarse en la ejecución de obras en su zona de influencia (INTA, 1970: 7).

La finalidad de los Clubes era entendida como una misión educativa, destinada a fomentar actividades que desarrollaran “el espíritu de la comunidad”. Este andamiaje institucional adquirió contenidos diversos, signados por su historicidad, por el contexto social y político de su accionar, y por los modos diversos en los que fue encarnada por sujetos individuales y colectivos. Algunas orientaciones previas, como la preocupación por la potencial formación de “líderes” juveniles, continuaron teniendo una fuerte gravitación. En este sentido, un sesgo asistencialista permanecía plasmado en la

filosofía que rodeaba la actividad de extensión, visible en ciertos materiales institucionales que aludían a la “Filosofía de Extensión Rural” (Reichart, 1971). En línea con esta visión, en la década de 1970 cobraban fuerza los estudios enmarcados en la promoción del Desarrollo Rural Integrado, cuya popularidad en América Latina ha sido vinculada a la difusión de lineamientos provenientes del BM (Paz, 1989). Por otro lado, un enfoque histórico-estructuralista fue alejándose de esta visión, a la que señaló como incompetente para atacar la marginación de amplios sectores sociales rurales.

Los contenidos de las tareas de extensión no solamente se transformaron al calor de la difusión de los enfoques dominantes y su adaptación al medio local. También lo hicieron en interacción con las transformaciones socio-económicas del espacio rural, y con los cambios políticos que signaban por entonces el marco referencial de su accionar: “En el 73, 74, 75 se trabajó con temas calientes, más comprometidos. Y de ahí en adelante con otra envergadura. Acá hubo momentos en que muchos querían comprometerse con un cambio real de la situación del país” (extensionista, entrevista, 04-09-2011), señala una extensionista del organismo. Los “temas”, fuertemente anclados en las disputas y discursos prevalecientes del momento, incluían desde la dependencia tecnológica y económica nacional, hasta interacciones con territorios rurales que, como veremos, eran por entonces focos de conflicto social.

En este marco, y de la mano de la reorganización institucional que se vivía en el INTA desde 1973 a raíz del retorno del peronismo al gobierno, fueron generados algunos cambios en la conducción del sistema de extensión. La ocupaba por entonces Norberto A. R. Reichart, un ingeniero agrónomo de larga trayectoria en el instituto, pionero en la organización del sistema de extensión rural dentro del INTA y enfrentado abiertamente con los planteos que el peronismo proponía para el sector. Fue declarado prescindible al frente de la dirección de Extensión, pese a que el consejero por la SRA insistiera en manifestar que “la situación en el INTA había llegado a un límite insostenible” (CD INTA, 1974, Acta 613). En el debate, el representante por el Poder Ejecutivo apoyaba la decisión, argumentando que dentro del INTA “el problema más grave es el enfoque dado a la extensión”, y la necesidad de realizar fuertes cambios, lo que incluía “cambiar al director del servicio” (CD INTA, 1974, Acta 613). El cargo fue ocupado por Jacinto Vellani, un extensionista perteneciente a la estación experimental Pergamino.

En un momento de recambio institucional como el que se experimentó en el INTA en 1973, el peso de las jerarquías y de la conformación de la comunidad institucional impactó en la organización de la propia actividad científica y en las estrategias de difusión y contacto del organismo. Manifestándose sobre la importancia de la estructura del servicio de extensión rural, en un momento en donde se planteaba la posibilidad de reorientar sus objetivos y tareas, se preguntaba el nuevo director nacional del servicio de Extensión y Fomento,

Yo me pregunto si *con la estructura orgánica del ejército y de un hospital*, y con el organigrama del ejército y del hospital puedo, a pesar de las personas que ponga en ese organigrama, hacer investigación y extensión agropecuaria. (CD INTA, Acta CD 616, 19/03/1974, énfasis propio).

La inercia institucional operaba así mostrando el peso de las propias estructuras de trabajo del INTA como límite para las transformaciones. En otras palabras, pese que nuevas personas con nuevos enfoques fueran incorporadas, el organigrama real (no solamente el formal) expresaba las limitaciones presentes.

En la dirección del área de extensión también asumió un maestro normal nacional, responsable a nivel nacional del trabajo con las juventudes rurales, y una maestra normal nacional, como jefa de extensión del servicio de Hogar Rural. Precisamente, este último canal aparecía como línea de acción destacada del INTA dentro de su participación en las medidas surgidas del Acta de Compromiso Nacional. Allí se informaba sobre este rol, señalando que el INTA garantizaba un

(...) cumplimiento de una intensa labor para el desarrollo armónico de la población rural a través de la familia. A ese efecto se realiza una acción directa por medio del Servicio de Hogar Rural tendiente al aumento del bienestar del grupo familiar mejorando sus condiciones de vida y, subsidiariamente, a un mejor aprovechamiento del potencial de recursos humanos. *El vínculo con el grupo se establece por medio de la mujer, que se convierte así en un verdadero agente de cambio, y la acción se orienta principalmente hacia los problemas relacionados*

*con la educación para la salud, vivienda y saneamiento básico rural* (formación de cooperativas para construir casas, provisión de agua potable, eliminación de aguas hervidas y residuos, etc.), administración del hogar, electrificación hogareña, nutrición humana y actividades comunitarias (SAyG, INTA, 1973: 2, énfasis propio).

El rol de la mujer, ligado en los comienzos del INTA a concepciones sobre su “misión” en la vida familiar emanadas de la doctrina católica, aparecía ahora enlazado a su importancia como “agente de cambio” en función de problemáticas ligadas a necesidades sociales de la población rural. Por entonces, el servicio de Hogar Rural era también el encargado, mediante un convenio celebrado con el Instituto Biológico y Laboratorios de Salud Pública que dependía del Ministerio de Bienestar Social, de tomar muestras de agua en las zonas de influencia de las agencias de extensión destinadas a realizar análisis químicos y bacteriológicos (CD INTA, Acta 260, 1973).

Asimismo, durante 1973 fue elaborado por el INTA el Programa de Promoción de Servicios Familiares y Comunitarios Rurales. Presentado a comienzos de 1974 por el área de extensión, señalaba como antecedente “el continuo deterioro experimentado en las condiciones de vida del poblador rural”, por lo que se proponía dotar al habitante rural “no sólo de apoyo tecnológico sino también y, fundamentalmente, de aquellos elementos esenciales que constituyen la promoción social integral de la familia rural” (CD INTA, Acta 631, 1974). En este plan de acciones se criticaban acciones previas “de tipo asistencialistas en las que el individuo constituía un agente pasivo del proceso” (CD INTA, Acta 631, 1974). Tenía como eje el trabajo sobre la vivienda rural, y la organización de actividades de capacitación complementarias. El proyecto, que no llegó a ser ejecutado, estaba destinado a comunidades rurales que agruparan un mínimo de 40 a 50 familias, previsto para ser desarrollado por tres años y coordinado por la red de agencias de extensión rural del INTA.

En relación a la articulación entre el INTA y las políticas sectoriales en curso, uno de los primeros informes de la nueva gestión de la Dirección Nacional Asistente en Extensión y Fomento relataba una reunión de extensionistas del área pampeana con el equipo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, encabezado por el secretario Horacio Giberti (CD INTA, Acta 625, 11-07-1974). La reunión había sido convocada por la Secretaría para transmitir a los extensionistas lineamientos vigentes de la política

agropecuaria. Entre estos, se destacaba el énfasis puesto sobre acciones de regionalización y la necesidad de profundizar la llegada a áreas alejadas del centro neurálgico pampeano. En este accionar, jugaba un rol destacado la regionalización del INTA que se estaba poniendo en marcha. A partir de la estructuración de zonas estratégicas (NOA, NEA, Pampeana, Central, Patagónica y Andina), se buscaba priorizar el funcionamiento de los circuitos regionales<sup>162</sup>.

En este sentido, el INTA también contemplaba por entonces su actuación en zonas de frontera, como en el caso de la estación experimental de Misiones, en donde técnicos y funcionarios del INTA se reunieron en más de una oportunidad para coordinar acciones. En una de ellas afirmaban que debían cumplir “más allá de la difusión de técnicas de producción, una tarea de índole comunitaria,” haciendo hincapié en la baja densidad de población de la zona, la “inadecuada distribución de la tierra” (CD INTA, Acta 625, 11-07-1974), la existencia de explotaciones agrarias de subsistencia, alto índice de analfabetismo, y un bajo nivel de vida. De este diagnóstico se desprendía que el rol del INTA debía cumplir un papel “protagónico y dinámico” (CD INTA, Acta 625, 11-07-1974). La infraestructura y el personal del INTA podría ser en estos casos la vía para poner en ejecución planes que intervinieran fomentando el arraigo de la población rural y persiguiendo algunos objetivos básicos, entre los que figuraban “organización y consolidación de comunidades rurales”, “difusión de una tecnología que permita el manejo racional de nuestros recursos”, “desarrollo socio-económico de las zonas críticas y el bienestar efectivo de sus habitantes”, “presencia activa [del INTA] en los planes de colonización” (CD INTA, Acta 625, 11-07-1974). El “Acta de Cerro Azul”, firmada en Misiones en 1974, se proponía así lograr una acción agropecuaria integral en las áreas y zonas de frontera de todo el país.

El Plan de Acción en áreas de Frontera fue finalmente aprobado por el CD del INTA el 17 de septiembre de 1974. Contemplaba la creación de 11 agencias de extensión rural en las áreas de frontera creadas por la Ley 18.575, que iban a sumarse a

---

<sup>162</sup> Existieron distintos proyectos de regionalización del INTA, desde su creación a la actualidad. En esta etapa el plan se destinó a descomprimir la atención dirigida a la zona pampeana a través de un plan de regionalización que reordenara el trabajo territorial a nivel nacional: NOA (Jujuy, Salta, Santiago del Estero, Catamarca y Tucumán), NEA (Formosa, Chaco, Misiones, Corrientes y departamentos 9 de Julio, Vera, Gral. Obligado y San Javier de Santa Fe), Pampeana (Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires), Central (Córdoba, San Luis, La Pampa, departamentos de La Rioja), Patagónica (Santa Cruz, Chubut, Neuquén, Río Negro, Tierra del Fuego e Islas Malvinas Antártida e Islas del Atlántico Sur) y Andina (Mendoza y San Juan, y departamentos de La Rioja). (INTA, 1974).

las seis agencias ya existentes en Calafate, Esquel, Junín de los Andes, Tartagal, Orán y Laguna Blanca. Las nuevas fueron diagramadas para las provincias de Misiones, Chaco, Salta, Neuquén y Chubut. Debían contar con un mínimo de tres técnicos, uno abocado al asesoramiento agropecuario, otro a cuestiones vinculadas al “trabajo familiar” y un tercero a “lo concerniente al desarrollo de la juventud rural” (CD INTA, Acta 630, 1974). Según escribía el presidente del INTA al secretario de Agricultura Horacio Giberti: “La población rural constituye el elemento básico y protagónico de nuestro *objetivo institucional*”<sup>163</sup>. El Plan estipulaba una acción conjunta con otros organismos estatales (el Servicio Nacional de Agua Potable, la Secretaría de Estado de Vivienda y Urbanismo, Agua y Energía de la Nación, el Ministerio de Cultura y Educación, la Secretaría de Estado de Coordinación y Promoción Social, servicios provinciales y locales) y estaba incluido en un plan de acción del INTA que había sido aprobado en enero de 1974. La “Propuesta de Promoción de Servicios Familiares y Comunitarios Rurales” (INTA, 1974), cuya aplicación inicial se destinaba al Nordeste, el Noroeste y la Patagonia. El plan, que dialogaba directamente con las medidas de colonización impulsadas en el proyecto de Ley Agraria, era asentar comunidades en estas zonas que recibieran el asesoramiento directo del INTA. Las críticas al proyecto provinieron de dos de los consejeros que integraban el CD. Uno de ellos, representante de la SRA, afirmó que “los servicios de Asistencia Social” estaban “desvirtuando en cierta manera las funciones principales del INTA”; cuya función principal identificaba con “hacer tecnología agropecuaria, y su consecuencia traerá beneficios para la población rural” (CD INTA, Acta 632, 15/11/1974). Se evidenciaba así la línea “productivista”, una óptica cercana al determinismo tecnológico en tanto la difusión de tecnología *per se* podría generar un “derrame” hacia la sociedad, conjugada en este caso con una firme oposición a que el INTA tuviera injerencia en las políticas públicas destinadas al sector. Un segundo consejero secundó esta posición, señalando su preocupación sobre nuevas designaciones de profesionales producidas en el organismo. Según la transcripción del acta, “algunas designaciones con títulos que en algunos casos le causaron preocupación, entre ellos sociólogos, arquitectos, antropólogos, psicólogos, etc. Y no veía por ningún lado técnicos agrícolas, veterinarios, etc.” (CD INTA, Acta 632, 15/11/1974). Las

---

<sup>163</sup> Nota del Presidente del INTA Horacio Figueiras a Horacio Giberti, fechada el 17 junio 1974 (INTA, 1974, Actas 631). Subrayado propio.



críticas evidenciaban la resistencia interna que un sector, con fuerte capacidad de decisión, oponía a las transformaciones impulsadas.

Al mismo tiempo, la coyuntura dentro del INTA era vista por algunos de sus integrantes como una posibilidad de utilizar los intersticios, abiertos por el recambio de autoridades y la falta de definición de una política institucional, para generar nuevos planteos sobre la orientación del INTA. Incorporado como asesor de la presidencia del INTA en 1973, un sociólogo tuvo a su cargo la organización de actividades específicamente dedicadas a la reconfiguración del área de extensión rural del instituto. A partir de una estadía en Chile a fines de la década de 1960, había tomado contacto con el método extensionista impulsado por Paulo Freire<sup>164</sup>. El plan era implementar algunas de las herramientas elaboradas por Freire para la extensión rural, y tomar contacto con la realidad del medio. En el marco de la discusión de la orientación tradicional del INTA, el contacto con los extensionistas tenía por objetivo generar una política de extensión por regiones, para que “dejara de ser una máquina de ofrecer productos extranjeros” (ex asesor de presidencia, entrevista, 05-02-2013). Organizados en talleres y reuniones de discusión a lo largo del país, llegó a elaborarse un documento con los principales lineamientos propuestos para la tarea de los extensionistas.

En este sentido, junto a los cambios “desde arriba” -introducidos mediante la realineación de cuadros institucionales en las distintas burocracias estatales a partir de 1973- existían experiencias “desde abajo”, protagonizadas por personal de la institución, que desbordaban los cauces institucionales. El reconocimiento social con el que contaban los técnicos y extensionistas por parte de las comunidades rurales estaba ligado a su fuerte presencia territorial. El contacto directo con las condiciones de existencia de las poblaciones rurales venía promoviendo que se instalara dentro de la tarea extensionista la reflexión en torno a qué transformaciones eran necesarias para el agro argentino. En este marco, los distintos escenarios territoriales ofrecían panoramas

---

<sup>164</sup> El educador brasileño publicó en 1969 *¿Extensión o Comunicación? Sobre los profesionales y el conocimiento en el (no) diálogo de saberes*, en donde -en un contexto de reforma agraria enmarcada en las propuestas de la Alianza para el Progreso- centraba su concepción educacional libertaria en la cuestión agraria. El planteo partía de un análisis crítico de la extensión rural en tanto expansión unidireccional de conocimiento. En particular, Freire problematizaba el rol en el cambio social de los ingenieros agrónomos y técnicos agrícolas dedicados a tareas de extensión rural, con el objetivo de contribuir a la democratización de la vida rural. Véase Freire (1969) y Williamson (2013), Barrientos y Bergamín (1998), entre otros.

diferenciados. Por entonces, uno de los conflictos asociados a la problemática rural lo protagonizaban en el noreste del país las llamadas Ligas Agrarias.

El proceso liguista se desarrolló entre fines de 1970 y 1976, cuando un amplio espectro de productores (desde campesinos minifundistas hasta chacareros medianos) ubicados en el litoral argentino protagonizaron una sucesión de movilizaciones a las que dieron una organización provincial, regional y finalmente nacional bajo la denominación de “Ligas Agrarias”<sup>165</sup>. Según su propia difusión, para 1973 agrupaban más de 20.000 familias y 54.000 jóvenes (Roze, 2013). En línea con las transformaciones productivas que venía experimentando la región, la explotación sufrida por pequeños productores por parte de los monopolios comercializadores -sobre todo en la región chaqueña aldononera- y el acceso a la tierra, en el marco de una estructura latifundista, eran las principales problemáticas que buscaban revertir (Galafassi, 2006). Si bien sus principales articulaciones involucraban a integrantes del Movimiento de Sacerdotes por el Tercer Mundo y a distintas organizaciones políticas y partidos, una ex integrante de la Liga Agraria Correntina (LAC), recuerda la presencia de técnicos de INTA en la zona: “A través del INTA también, que daba cursos de cooperativismo, ahí empezamos conocer lo que son los sindicatos. Más que nada nos manejábamos en la zona de Goya, Santa Lucía, Cruzú Cuatía” (ex integrante de la LAC, entrevista, 13-12-2009). Precisamente, en el noreste del país la dirección regional del INTA impartió la consigna de coordinar y articular con las Ligas agrarias la promoción de cooperativas de trabajo y producción. La recepción no fue uniforme en todas las provincias. En el caso de Corrientes, en pleno corazón del área tabacalera, la responsabilidad fue asumida por el director provincial de Extensión. Junto a otros técnicos, que habían tenido una activa participación en el asesoramiento de dos cooperativas provinciales. Para 1972, la Dirección Regional de INTA realizó una propuesta a la Liga Agraria Correntina: desarrollar cooperativas de trabajo en Corrientes, promocionadas por las Ligas y asesoradas técnicamente por el INTA. Los

---

<sup>165</sup> Galafassi (2006) señala que el proceso de conformación de las Ligas fue gradual, antecedido por la fundación del Movimiento Rural de la Acción Católica en 1958 y transformado en un movimiento reivindicativo, estuvo atravesado por el surgimiento de la Teología de la Liberación y por los procesos políticos que experimentó entonces Latinoamérica. El movimiento liguista fue fuertemente reprimido durante el gobierno de María Estela Martínez de Perón y terminó de ser desarticulado por la dictadura. Véase Galafassi (2006) sobre las Ligas formoseñas y Galafassi (2005) sobre las Ligas de la región chaqueña. Entre otros estudios, el trabajo ya clásico de Ferrara (1973) es una referencia ineludible, aún cuando ha sido objeto de diversas críticas posteriores (Roze, 2013; Galafassi, 2005).

dirigentes de las Ligas, si bien expresaron su acuerdo con el desarrollo de cooperativas de trabajo y producción y saludaron el asesoramiento del INTA, rechazaron la propuesta. La negativa era argumentada en función del compromiso que implicaba involucrar buena parte de sus militantes para que la experiencia resultara exitosa, debido al momento por que atravesaba el movimiento liguista<sup>166</sup>. Se priorizaba que los dirigentes mantuvieran su compromiso con el crecimiento de la organización, y se avizoraba la existencia de cooperativas agropecuarias como parte de una etapa posterior, de la mano del crecimiento y afianzamiento de las Ligas. Según recuerda un ex integrante del equipo de capacitación regional de la Liga Agraria del Noreste, “Si la opción era alguna cooperativa de trabajo exitosa *versus* el afianzamiento del movimiento, estaba claro que la prioridad era el afianzamiento del movimiento y, por lo tanto, no a un compromiso de esa naturaleza” (ex asesor técnico Ligas Agrarias, entrevista, 9/06/2010).

El interés del INTA se correspondía con su participación en la promoción de cooperativas de productores. El modelo de referencia era la Cooperativa de Campo Herrera, en Tucumán, donde -como veremos- el INTA había tenido una participación significativa desde su creación. Pequeños productores correntinos con poca tierra, o sin ella, bien podían replicar la experiencia. La articulación incluyó, de hecho, espacios de capacitación esporádicos entre integrantes de la conducción de Campo Herrera, y del equipo técnico del INTA que trabajaba con ellos, con los miembros de la LAC para “explicar lo que hacían” (integrante de Campo Herrera, entrevista, 21-09-2010).

Frente a la negativa, el INTA retaceó su compromiso institucional y la articulación descansó mayormente en la responsabilidad personal de algunos extensionistas, que en función de sus propios posicionamientos políticos e ideológicos

---

<sup>166</sup> Galafassi, en sintonía con Roze (2013), cuestiona el carácter revolucionario del movimiento liguista presentado en el trabajo pionero de Ferrara (1973). Sostiene que, bajo un discurso más radicalizado, las Ligas más bien buscaban generar condiciones más equitativas de coexistencia entre diferentes fracciones del capital y del mundo de trabajo (Galafassi, 2006). En este sentido, cabe aclarar que no es objeto de nuestro estudio analizar el carácter “revolucionario” o “reformista” del movimiento liguista. Tampoco las polémicas clásicas que están de trasfondo de algunos de estos debates, como por ejemplo si puede ser el campesinado u otro sujeto agrario un sujeto revolucionario, o bien si éste rol es privativo de la clase obrera. En un contexto de álgido conflicto social, el movimiento liguista expresaba las contradicciones derivadas de la organización (espacial, económica y política) de la producción agropecuaria; en este sentido, la vinculación establecida con el INTA es señalada para dar cuenta de las tensiones en torno a los interlocutores del organismo. Este señalamiento no busca indicar una orientación “revolucionaria” del Instituto en este período, la que estaría, además, condicionada al hecho de ser en sí mismo una esfera del Estado que garantiza las relaciones de producción existentes. Busca reconstruir y analizar la heterogeneidad de frentes que involucraba su accionar, explorando sus alcances y limitaciones.

mantuvieron su cercanía. Estas articulaciones no estuvieron desprovistas de conflictos. Según reconstruye el mismo asesor técnico de la Liga Agraria del Noreste:

A medida que fue pasando el tiempo, claramente fue cada vez *más personal que institucional*. Con los técnicos de algunas agencias de extensión la relación fue excelente, en otros casos fue pésima con denuncias y críticas en cuanto a que los servicios del INTA no participaban en la solución de demandas del tipo de tecnología productiva de los pequeños productores, que estaban comprometidos con otros sectores (ex asesor técnico Ligas Agrarias, entrevista 9/06/2010, énfasis propio).

Esta circunstancia, además de remitir al conflicto concreto en curso en relación a las Ligas, tenía también una razón de ser dentro de la propia construcción identitaria de los extensionistas al interior del INTA. Mientras que institucionalmente prevalecía un reconocimiento de mayor jerarquía para los investigadores, con el Centro de Investigaciones de Castelar como máxima referencia, para los extensionistas éste provenía de su contacto directo con el medio. Este “compromiso más afectivo, más de relacionamiento con los extensionistas que con los investigadores” (ex extensionista, entrevista, 04/9/2011, énfasis propio) tenía su basamento en la propia práctica:

El vernos circular por el medio, la oportunidad de bajar y estar al pie de la camioneta consultando un problema hacía que el acceso fuese muy aceptado, muy fácil. Entonces el reconocimiento también estaba en una relación más personalizada, *a través de las personas y no de la institución* (ex extensionista, entrevista, 04/9/2011, énfasis propio).

En este sentido, entre los extensionistas hubo quienes mantuvieron una relación cauta y distante con la experiencia liguista, con apoyos puntuales y esporádicos, quienes se pronunciaron abiertamente en contra, y quienes la apoyaron rebasado el compromiso de la institución. En este marco, y a partir de la escalada represiva que recayó sobre el movimiento (que terminó de ser desarticulado en 1976), el margen de acción del organismo y de los extensionistas involucrados fue mermando. “El *dejar hacer del*

*INTA* se va limitando cada vez más pero es a la vez una toma de conciencia de lo difícil que se estaba poniendo la situación, sobre todo para los técnicos con mayor compromiso político”, agrega el mismo asesor (entrevista, 9/06/2010, énfasis propio). Salvo excepciones, en las que algunos extensionistas priorizaron su identificación con el movimiento a su relación de dependencia con INTA, la vinculación se volvió más oculta y difusa. En este sentido, se ponía de manifiesto el doble efecto de un mismo mecanismo. El “paraguas” institucional que permitía el accionar de líneas alternativas y disidentes al interior del INTA también generaba una distancia, que inhibía la profundización de este tipo de contactos.

Como mencionáramos, detrás de los contactos que el INTA mantuvo con algunas de las Ligas se encontraba como referente una experiencia de asesoramiento a una cooperativa agropecuaria en el noroeste argentino. En este sentido, cabe aclarar que si bien el cooperativismo constituye un amplio campo de estudios dentro de la historia agraria argentina, nuestro interés está puesto en reconstruir y analizar esta experiencia a la luz de la trayectoria del INTA.

Ubicada aún hoy a escasos metros de la estación experimental del INTA en Famaillá, la Cooperativa de Trabajadores Unidos Campo Herrera continúa funcionando. Su vinculación con el instituto no es, sin embargo, igual a la que se planteó en un inicio, ni a la que habría de plasmarse en la década de 1970. El peso de esta experiencia tuvo, dentro y fuera de la institución, un impacto profundo y asimétrico. El reconocimiento de organismos internacionales a la labor del organismo, los lazos establecidos con las familias del ingenio, el desmantelamiento y persecución de equipos de trabajo y el lugar que dentro del imaginario asociado a la historia del INTA posee dentro de sus miembros son parte de esta trayectoria.

### **3. Campo Herrera: historia en el surco del cañaveral. Una experiencia híbrida de extensión, investigación y auto organización rural**

En 1966, en plena crisis de la industria azucarera, la dictadura al mando del general Juan Carlos Onganía dictaminó la intervención y el cierre de once ingenios en la provincia de Tucumán, en el noroeste argentino. Al cierre sobrevino la protesta social y el éxodo de más de 200.000 habitantes, en su mayoría obreros y campesinos,

que poblaron los cinturones de las grandes urbes (Pucci, 2007). Uno de estos ingenios, el ingenio Bella Vista, iba a transformarse a través de la intervención del INTA en la primera cooperativa agropecuaria del país<sup>167</sup>.

Luego de un álgido conflicto protagonizado por 350 obreros de campo despedidos a los que se les adeudaban meses de salario, la Compañía Azucarera Bellavista S. A., propietaria del establecimiento, cedió 2.000 hectáreas al gobierno provincial como parte de pago de una deuda empresarial con el fisco, destinadas a los trabajadores a fin de paliar la crisis ocupacional. El Ministerio de Bienestar de la Nación solicitó entonces el asesoramiento del INTA. El instituto ya conocía al ingenio, ubicado a escasos metros de su estación experimental regional Famaillá. El objetivo fundamental para el que había sido convocado era contar con una asesoría sobre cómo debían ser explotadas las tierras. Durante 1967 un equipo del Centro Regional del Noroeste del INTA preparó un informe centrado en analizar tanto el aspecto técnico-agronómico, como las condiciones socio-económicas existentes. El INTA fue contundente: la parcelación generaría un minifundio agravado, que empeoraría las condiciones de vida y de trabajo. De ser divididas, las dos mil hectáreas ofrecidas a los 350 cañeros sólo permitirían la conformación de minifundios individuales de 5,7 hectáreas, situación que era alertada negativamente por el instituto. La recomendación del INTA fue explotar la propiedad en una sola unidad sin parcelar. La propuesta, la conformación de una cooperativa, a la que el INTA debería asesorar. Para arribar a esta conclusión, el informe del instituto explicitaba cuál había sido el punto de partida:

Hemos partido de una premisa base: que las sociedades organizadas para obtener lucro como motivo fundamental (sociedades comerciales) no contemplan dentro de sus fines específicos la promoción de los aspectos sociales, comunitarios o individuales de las personas vinculadas. (...) En cambio, tanto la teoría como la experiencia nacional y mundial en torno al sistema cooperativo

---

<sup>167</sup> Campo de Herrera es una localidad rural ubicada a siete kilómetros de la ciudad de Famaillá y a tres de la localidad de Bella Vista. La zona se conoció como Campo de los Herrera (de donde toma su nombre la cooperativa) debido a una merced real que el rey Carlos I otorgó a mediados del SXVI a los capitanes Herrera, oficiales de los conquistadores realistas. Según reseña uno de sus impulsores, el ingenio fue fundado en 1914 en el poblado del mismo nombre, en la llanura tucumana, y en sus comienzos ocupaba 800 hectáreas. Sobre esa base, prosiguió la colonia cañera denominada Finca Tulio y otras siete colonias anexas (West, 1989). La cooperativa fue fundada el 10 de junio de 1967 en el Departamento de Famaillá, provincia de Tucumán.

muestra que éste se vale de una economía sólida para encarar la actividad de fondo, íntimamente relacionada con aspectos de solidaridad, convivencia, progreso económico, elevación moral e intelectual, etc., de sus socios (INTA, 1969, citado en Domínguez y Hervas, 1973: 141).

La Federación Obrera Tucumana de la Industria Azucarera (FOTIA), donde estaban sindicados los obreros despedidos, apoyó la propuesta del INTA y colaboró en los trámites iniciales (West, 1989). En 1967 se constituyó formalmente la cooperativa y un año después recibió la personería jurídica. En 1969 el INTA publicó un informe donde relataba los primeros dos años de experiencia con la cooperativa. En un inicio, el predio tenía 1500 hectáreas en las que se cultivaba caña de azúcar, y otras 500 que incluían montes, potreros, caminos, acequias y poblados (Domínguez y Hervas, 1973). En la primera etapa, los técnicos del INTA recorrieron las casas de las colonias del ingenio, relevando la opinión de los ex obreros sobre el ofrecimiento de tierras y el proyecto cooperativo. Muchos no aceptaron la propuesta y emigraron de la provincia. En una segunda instancia, el INTA participó de la elaboración del estatuto de la cooperativa. El 10 de junio de 1967, en una asamblea integrada por 119 socios, fueron designadas las autoridades y oficializada la cooperativa como Cooperativa “Trabajadores Unidos”, Limitada, de Producción y Trabajo (Domínguez y Hervas, 1973).

Como había señalado desde un comienzo el INTA, las tierras ofrecidas por la compañía azucarera estaban gravadas con hipotecas a favor del Banco de la Provincia de Tucumán, y contaban con múltiples embargos a favor de obreros cesanteados, acreedores cañeros, proveedores y reparticiones municipales, provinciales y nacionales. Las deudas provenían de la cesión del 75% de las acciones mediante un fideicomiso a la firma Gettas y Fiad, operación que había culminado con la desestabilización de la empresa y la contracción de las numerosas deudas. Las tierras no se entregaron como indemnización, sino que fueron canjeadas por las deudas que la empresa mantenía con la gobernación provincial, y vendidas a las familias del ingenio. En su nuevo *status* de socios cooperativos pasaron a hacerse cargo de las deudas heredadas, mediante un crédito hipotecario del Banco de la Provincia de Tucumán. Esta operación fue autorizada por el gobierno de la intervención militar de la provincia y, para hacerlo,

solicitó primero la opinión del instituto. La propuesta del INTA, no venderlas en forma individual sino mantener la unidad productiva, dio origen a la cooperativa.

Según informaban los técnicos, el plan bancario no respondía “a una operación de fomento” (Domínguez y Hervas, 1973: 148) debido a los intereses estipulados y al escaso plan de amortización. Pese a esta situación, frente a la profunda crisis social que atravesaba la provincia, con niveles inéditos de desempleo y migración, la posibilidad de sostener la fuente de ingresos y la autonomía que permitía la nueva organización representó para los ex trabajadores del ingenio una situación que contrastaba con la vivida por la mayoría de los cañeros tucumanos. En plena crisis azucarera marcada por la sobreproducción y la caída del precio del azúcar, el cierre de los ingenios y la prohibición de cultivar caña de azúcar afectaba a más de diez mil familias minifundistas (Pucci, 2007). En julio de 1967 fue firmado el boleto de compra venta. A contramano de la tendencia general, donde los pocos ingenios supervivientes habían cesado de contratar personal permanente, y en un marco nacional signado por la dictadura encabezada por Onganía en ciernes, la cooperativa comenzaría a crecer.

Acoplándose a la ley de cooperativas, vigente desde 1926, se conformaron los órganos de gobierno: una Asamblea de Socios, un Consejo de Administración y Síndicos. Desde sus comienzos, solicitó y consiguió el traslado de la dependencia policial, reemplazada a favor de un reglamento de convivencia propio, aprobado en la Asamblea. El promedio etario de los jefes de familia comenzó siendo de 46 años, de los que el 18% era analfabeto, y contando los que habían recibido instrucción hasta tercer grado, alcanzaba el 84% (Domínguez y Hervas, 1969). Este rango incluía casi 20 años de experiencia de sindicalismo organizado (Bilbao y Vessuri: 1986). Para 1970 la población total residente en tierras de la cooperativa era de 935 habitantes, 509 hombres y 426 mujeres (Vessuri, 1977).

Durante los primeros tres años, el director de la estación experimental de Famaillá, Roberto Fernández Ulivarri, asumió las funciones gerenciales y un equipo de técnicos de la estación experimental siguió de cerca el funcionamiento operativo. Pasados esos primeros años, fue la cooperativa la que logró contratar un auditor externo y un asesor contable (socio de la cooperativa, entrevista, 21-09-2010). Ulivarri era por entonces un destacado genetista. Las variedades de caña de azúcar que había logrado



obtener eran de las más buscadas en el mercado. Su figura, como impulsor del proyecto, iría transformándose junto a la propia experiencia.

Las tareas del INTA se abocaron inicialmente a prestar asesoramiento en la recuperación de tierras de potreros y montes, eliminar cañaverales improductivos, proveer de energía eléctrica a la zona y brindar capacitaciones periódicas para tractoristas y mantenimiento de maquinaria a los trabajadores. El plan de producción inicial fue formulado por el INTA, que tomó a su cargo la dirección técnica y organizativa de la cooperativa. El primer año se cultivaron a mano los cañaverales, y se realizó la primera zafra. Gracias a la gestión de Ulivarri -director de la estación experimental- ante la Dirección Nacional del Azúcar, fue conseguido un cupo de 3.300 toneladas, elemento clave para realizar la venta de la caña de azúcar, lo que posibilitó a la cooperativa asegurarse un ingreso básico anual y cancelar el crédito. Junto al asesoramiento técnico, desde el INTA comenzó a configurarse una relación con los pobladores, y a plantearse distintos diagnósticos sobre la tarea que se estaba realizando. En principio, según lo reconocían los integrantes de la estación experimental de Famaillá involucrados en el proyecto, la actividad apelaba a uno de los sentidos originarios de la creación del organismo, fuertemente repetido en la jerga institucional: el trabajo con la “familia rural” (Domínguez y Hervas, 1973). Ahora bien, ¿cuál era el sentido que desde el INTA se otorgaba a esta tarea?

En un comienzo, la mirada sobre el “fenómeno cooperativa” contempló elementos diversos. Algunos entroncaron con la filosofía promovida desde el instituto y retomaron los enfoques socio-económicos en boga para la década de 1960 (fuera y, sobre todo, dentro del INTA) sobre la problemática agropecuaria. En esta línea, dentro de la propuesta elevada por el INTA al Ministerio de Bienestar Social, uno de los objetivos planteados para la cooperativa era que fuera “una empresa eficiente, competitiva, en continua expansión y desarrollo” (INTA, 1967, citado en Domínguez y Hervas, 1973: 141). En este sentido, después de dos años de iniciada la experiencia, en un informe institucional se destacaba la “falta de sentido económico” y la “falta de sentido administrativo” como resultado de la “persistencia de ciertos elementos originales” (Domínguez y Hervas, 1973: 156). Sintetizando la visión que subyacía en el asesoramiento, y en línea con las premisas vigentes en los estudios socio-económicos de administración rural impulsados por el instituto, afirmaban que “transformarlos en

*empresarios eficientes* es el más complicado logro de todos los que pueda fijarse la cooperativa como organismo económico” (Domínguez y Hervás, 1973: 158, énfasis propio). Otro elemento retomaba un aspecto que, aunque informal, había pesado fuertemente desde los inicios de la acción del INTA: el contacto con la iglesia católica. En este caso particular, el mismo informe institucional remarcaba dentro de las tareas de promoción comunitaria la de “asistencia espiritual”. Según reseñaban los técnicos del INTA, mientras que en un inicio el cura párroco de Famaillá visitaba la cooperativa, tiempo después, “El doble papel -religioso y axiológico- que una labor pastoral podía llevar a cabo, motivó a solicitar la colaboración del Decanato sacerdotal del departamento de Famaillá” (Domínguez y Hervás, 1973: 180). En el escrito no se explicitaba quién había realizado la gestión (si había sido o no el INTA), pero el resultado fue la recepción de un sacerdote tres días por semana en la cooperativa. “De su tarea pastoral y educativa hablará el tiempo, pero queremos resaltar la importancia que reviste para el medio como *vector de una depurada escala de valores*” (Domínguez y Hervás, 1973: 180, énfasis propio), apuntaba el informe del INTA.

Al mismo tiempo, la tarea comenzaba a plantear algunos ejes más bien disruptivos o, al menos, novedosos dentro de los contenidos vigentes en la extensión rural. Uno de estos se refería a los interlocutores que debía tener el INTA, y en un sentido más general, las iniciativas del área agropecuaria. Partiendo de una caracterización de la estructura de tenencia de la tierra del área cañera, se afirmaba que “El minifundista y el pequeño productor” debían ser objeto de una política agraria (Domínguez y Hervás, 1973: 86). Se planteaban las directrices de la tarea de extensión rural señalando que “Circunscribirse a cuestiones relacionadas con las técnicas agropecuarias en forma exclusiva significa auto-colocarse vallas” (Domínguez y Hervás, 1973: 97). En este sentido se definía, como proyección y como resultado en relación al trabajo con la cooperativa, a la práctica de extensión:

La extensión agropecuaria deja de ser entonces cuestión del productor agrícola o del productor pecuario, para transformarse en un accionar positivo que coloque en términos de vigencia a *una gran masa de población rural*” (Domínguez y Hervás, 1973: 97, énfasis propio).

Para argumentar esta orientación se retomaban los propios fundamentos de creación del INTA, citando del decreto-ley que dictaminara su creación los pasajes correspondientes al ejercicio de la extensión rural como asistencia técnica, educacional y cultural, y como herramienta para mejorar la comunidad (Domínguez y Hervas, 1973). También se marcaban diferencias en cuanto a una orientación ya arraigada, que señalaba la falta de adopción de la tecnología agropecuaria disponible como efecto del atraso cultural. Al respecto, indicaban que era frecuente encontrar en otros análisis referencias a la “resistencia al cambio”, asociada a “una particular idiosincrasia, irreversible e inmodificable” (Domínguez y Hervas, 1973: 135), y oponían a esta mirada la necesidad de afrontar las condiciones de vida y trabajo, tamaño de los fundos, entre otras variables. En este marco, el trabajo con la cooperativa era planteado como una herramienta para combatir el éxodo rural y como experiencia piloto para otras regiones. Estas tensiones entre las prácticas tradicionales y la aparición de nuevos enfoques sobre el rol del INTA tomarían nuevo impulso en los años siguientes. El trabajo con la cooperativa, que desde sus inicios había sido visto con recelo desde algunos sectores de la institución, estaba por convertirse en un frente de batalla.

### *3.1. Los avances de la cooperativa o “un tractor por un antropólogo”*

Dentro del equipo de técnicos que trabajaba con la cooperativa figuraba un ex integrante del equipo de Ecología de Castelar, que había pedido el traslado con el objetivo de tener una inserción territorial que estaba ausente en los trabajos del CNIA de Castelar. También fue incorporado el antropólogo Santiago Bilbao. Su traspaso a la estación experimental de Famaillá fue arreglado, enviando, a su vez, un tractor a la experimental del Chaco, de donde provenía. “Ése era el valor simbólico de un antropólogo en el INTA” (sociólogo del INTA, entrevista, 17-08-2010), apunta con ironía un investigador del organismo. Bilbao había ingresado al INTA por concurso y se desempeñaba como investigador, realizando trabajos sobre la zona ganadera chaqueña. A instancias del director nacional del INTA, y habida cuenta de la baja actividad de científicos sociales en la zona, fue recomendado para sumarse al trabajo con Campo Herrera.

El trabajo con las familias que integraban el ingenio recuperado estaba acompañado por investigaciones que indagaban en la estructura de propiedad

tucumana, la caracterización del obrero cañero y el problema del minifundio (Bilbao, 1972). También incluían el estudio de las condiciones de alojamiento, régimen laboral, nivel de desempleo, seguridad social, nivel educativo y estado de salud de la población rural de la zona (Fernández Ulivarri, 1973). Se entendía la figura de cooperativa agrícola, basada en el grupo familiar y orientada al mantenimiento de la familia como unidad productiva, como una alternativa necesaria para una región que -según especificaban- concentraba el 60% de los minifundios y el 37% de los asalariados rurales (Fernández Ulivarri, 1973). A partir de estas indagaciones, se fue configurando una experiencia híbrida de investigación y extensión rural. La práctica extensionista, de contacto directo con los miembros de la cooperativa, era planteada en simultaneidad al estudio de las raíces históricas de la estructura social agraria tucumana, sus efectos presentes y sus posibles proyecciones. En este sentido, el trabajo excedía con creces el “asesoramiento” en función de “bajar” la tecnología disponible y convertir a los ex obreros del ingenio en “empresarios eficientes”.

Este enfoque los distanciaba de la orientación vigente en un inicio, tanto en la forma de operar dentro de la cooperativa, como en los contenidos de las investigaciones que servían de marco al proyecto. En el primer eje, comenzaron a impulsarse las deliberaciones en formato asambleario y a situarse las caracterizaciones a partir de ciertas precisiones históricas y culturales. Así, por ejemplo, a diferencia del impulso inicial, se destacaba que dentro de los “valores obreros” la figura de “dueño” estaba asociada a la inexistencia de trabajo de la tierra y a ausentismo, al tiempo que comenzó a plantearse la necesidad de recuperar la tradición sindical presente en la experiencia de la mayoría de los miembros de la cooperativa (Vessuri, 1977). En el segundo plano, en un extenso documento interno de trabajo dedicado al estudio de las formas productivas de la provincia, se analizaba el proceso de reclutamiento, estacionalidad y características de los asalariados rurales ocupados en la caña de azúcar. El estudio incluía definiciones sobre la explotación familiar, descripciones sobre las organizaciones gremiales existentes, estadísticas sobre el éxodo rural hacia las ciudades capitales de la zona de influencia de la experimental de Famaillá, y señalaba a la desocupación y a la migración forzada como las principales problemáticas (Bilbao, 1973). Las investigaciones tenían puntos de contacto con los estudios que por entonces se llevaban a adelante en el CNIA de Castelar. Bilbao participó de encuentros en la

Escuela para Graduados y con el Departamento de Economía del Centro, aunque el intercambio no barría algunas diferencias. Según las reconstruye la socióloga Hebe Vessuri, esposa de Bilbao y por entonces partícipe de la experiencia a través de su vida familiar y de sus propias indagaciones (Vessuri, 1974), mientras que en Castelar estaban “los científicos”, en Famaillá actuaban “científicos que se arremangaban, iban a trabajar en el campo real” (Vessuri, entrevista, 30-07- 2010). Ésta era también la visión que primaba entre algunos miembros del INTA que pedían su traslado a estaciones experimentales menores, y más cercanas a regiones con agudas problemáticas socio-económicas.

Mientras que algunas líneas de trabajo que ya estaban presentes en los primeros años de vida de la cooperativa se profundizaron, otras fueron ampliando los alcances de la experiencia y replanteando el sentido que, desde el INTA, tenía. A instancias de la asesoría del área de Hogar Rural del INTA fueron realizadas campañas de vacunación masiva a la población no escolar en general, y en particular dentro de la cooperativa. El trabajo del INTA también incluyó diversificar el área cañera mediante el cultivo de maíz, trigo y tabaco, preparar a los socios para realizar el control de calidad de la caña de azúcar y para iniciar la fabricación de ladrillos como actividad complementaria, y destinada a ampliar las viviendas existentes. También se organizó una tejeduría semi-industrial y, mediante la agencia de extensión rural Monteros, un club deportivo y una biblioteca pública<sup>168</sup>. A lo largo de dos hectáreas, con asesoramiento técnico de la agencia de extensión rural y de la estación experimental, fue organizada la huerta, que se mantendría por treinta años. A cargo de un técnico de INTA durante los primeros años, producía las principales hortalizas de estación, que eran repartidas en forma equitativa entre la población de la cooperativa. Un almacén comunitario completaba la infraestructura del predio.

Junto a la organización de actividades y al asesoramiento en la producción de la cooperativa, comenzaron a organizarse talleres de discusión y formación. Organizados bajo la conducción de Bilbao, estaban destinados a los socios de la cooperativa, quienes asistían computando su participación como horas de trabajo remuneradas. Cooperativismo, participación comunitaria, los cursos apuntaban a problematizar el

---

<sup>168</sup> El taller de tejido era organizado por la asesora de Hogar Rural del INTA, María Antonia Coria. 35 mujeres dispusieron de 10 máquinas de tejer industriales y 25 máquinas de coser, con las que confeccionaban ropa de trabajo para ser vendidas a las tienda de la cooperativa (West y Sarraceno, 1974).

sentido de la experiencia a partir de sus propios protagonistas. Se apuntaba, entre otros ejes, a discutir “lo que significaba ‘dueño’ y ‘obrero’ tanto para el grupo técnico y el grupo receptor” (Bilbao y Vessuri, 1986: 140), como a través de la nueva organización cooperativa. Quien por entonces oficiaba de jefe de campo, ex compañero de Bilbao en un equipo docente de la Universidad de Tucumán, los consigna como talleres “de formación doctrinaria” (West, 2009: 8). Según Vessuri, el trabajo que se llevaba adelante en la escuela de Campo Herrera, donde Bilbao se encontraba con los socios terminada la jornada de trabajo, afirma que todo ese trabajo:

(...) era oficial, estaba organizado por el INTA. No se trabajaba en horas de oficina porque la gente estaba en el campo. Tenían el asesoramiento técnico del INTA y el asesoramiento social del INTA para organizar la cooperativa (Vessuri, entrevista, 30-07-2010).

Ése era el ámbito en donde se discutía el trabajo que se estaba realizando y sus implicancias, junto a otros problemas de la comunidad, entre los que destacaba la migración de los hijos ante la falta de trabajo y las posibles estrategias para generar ocupaciones para las generaciones más jóvenes. En una reflexión posterior, Bilbao y Vessuri (1986: 124) destacaban “el proyecto ideológico del equipo técnico” como uno de los elementos relevantes de la experiencia. Para ellos, y sus antiguos compañeros, se trataba de un “experimento” en el que podían probar que para la explotación de las tierras por un número elevado de obreros era preferible la explotación en gran extensión y no la división en parcelas individuales, y que un proceso educacional colectivo que apuntalara el desarrollo comunitario podía realizarse “más eficientemente con un sistema cooperativo que con una sociedad de capital” (Bilbao y Vessuri, 1986: 125).

En 1972, en paralelo al fin de la prohibición que desde 1967 pesaba sobre la capacidad productiva de los ingenios azucareros, la cooperativa afianzó su producción cañera, y con ella el nivel de vida de sus integrantes. Impulsados en buena medida por los técnicos que asesoraban la experiencia, comenzó a perfilarse también un acercamiento con otras dos cooperativas de la zona, con el objetivo de unificar los cupos azucareros y diversificar los cultivos<sup>169</sup>. Mediante acuerdos gestionados por el

---

<sup>169</sup> El cupo azucarero es una autorización estatal que regula la venta de azúcar. La medida fue tomada en 1966 a raíz de la crisis de sobreproducción de la industria azucarera tucumana.

INTA con las facultades de Arquitectura y Medicina se profundizó también la asistencia sanitaria y las construcciones de viviendas.

La experiencia en el territorio también era acompañada por distintos trabajos que analizaban los resultados preliminares y los exponían en distintos encuentros académicos (Bilbao, 1971; 1972; West y Sarraceno, 1974). Esta modalidad era poco usual en las actividades de extensión, frecuentemente más disociadas de las tareas de investigación a pesar de las directrices. Más infrecuente aún era que las tareas de extensión del INTA, más bien orientadas al mediano y gran productor, se dirigieran al proletariado rural. Aún cuando la vinculación entre el instituto y la cooperativa radicaba en el hecho de que los ex obreros pasaban a ser pequeños productores, el estudio de las condiciones de trabajo era en sí algo novedoso, así como lo era la articulación sostenida y profundizada con productores de tan baja capitalización. La propia figura del director de la estación experimental, como impulsor del proyecto, fue transformándose. En línea con otros testimonios, partiendo de una concepción social cristiana “empieza a darse cuenta del potencial que tenía esta forma de organización, en una provincia tan en crisis”, recuerda Vessuri (entrevista, 30-07-2010). En 1973, durante un seminario sobre estructuras agrarias realizado en Berlín, presentó una ponencia sobre la cooperativa en la que explicaba, “Este proyecto apunta a la búsqueda de soluciones a los problemas de los asalariados rurales y minifundistas del norte del país” (Fernández de Ulivarri, 1973: 4).

Sin embargo, al interior del INTA, desde los comienzos existían fuertes resistencias, que estaban por radicalizarse. Por un lado, el sentido político amalgamado a la misión social que para algunos técnicos involucrados en esta experiencia tenía que tener la labor del INTA trascendía el compromiso institucional. Si bien la “mística” a la que se asociaba la idea de “misión” que le cabía al instituto en su contacto con la población rural retomaba algunos de los componentes de su propia filosofía original, también se distanciaba con creces de su orientación tradicional<sup>170</sup>. Aún a pesar de que el instituto hiciera una difusión de estas actividades, tanto en el terreno donde se movían los investigadores, técnicos y extensionistas, como en las instancias tomadoras de decisión a nivel nacional, existían cuestionamientos a esta tarea, que los situaban en una

---

<sup>170</sup> “Se veía la mística del INTA en relación a la misión con la que estaban comprometidos algunos de sus técnicos”, afirma Vessuri (2010, entrevista, 13-04-2011). Esta idea de “misión social” aparece, aún con sentidos diversos, en forma reiterada en los discursos de integrantes y ex integrantes del INTA.

posición marginal al interior del organismo. Para 1973, en plena reorganización de los cuadros institucionales dentro del INTA en coincidencia con el retorno del peronismo al gobierno, el accionar del jefe de la estación experimental de Famaillá era motivo de debate. Según planteaba en una de las reuniones de Consejo el director nacional asistente de investigación, criticando su tarea, “La institución está incursionando en problemas que escapan a los fines específicos que determinaron su creación y son más bien de incumbencia del Ministerio de Bienestar Social” (CD INTA, Acta 598, 8-05-1973). A nivel local, los conflictos no eran menores: “el resto de la estación experimental les tenía un odio espantoso. Tenían a su favor que éste era un proyecto del director de la estación experimental”, recuerda Vessuri (entrevista, 30-07-2010). En el marco de una organización social fuertemente conservadora, la novedad que representaba el trabajo con la cooperativa no era bien recibido por muchos de los integrantes de la estación experimental de Famaillá. En paralelo, la conflictividad social de la región y del país crecía a pasos agigantados.

### *3.2. Desmantelamiento y reconversión*

En 1974 se organizó una reunión del INTA con jóvenes en Chaco. Uno de los asistentes era el mismo técnico del INTA que había redactado uno de los primeros informes institucionales de la cooperativa en 1969, que el INTA había vuelto a editar en 1973. A su regreso, volvió con una advertencia:

El ‘gordo’ Domínguez, que tiempo después fue director de la experimental y trabajaba en Campo Herrera, se entera que las Tres A denunciaban a esta gente del INTA. Eran Santiago, Hugo West y un agrónomo del INTA, Miguel Sarraceno. Que ellos eran boleta, que los iban a liquidar. Llegó con esa noticia (Vessuri, entrevista, 30-07-2010).

Poco tiempo después, el 12 de diciembre de 1974, en tres operativos simultáneos fueron detenidos Bilbao, Sarraceno (ambos del INTA) y Hugo West, por entonces jefe de campo de la cooperativa. Los tres fueron puestos al poco tiempo a disposición del PEN y permanecieron detenidos alrededor de 8 meses. Mientras que un funcionario del INTA alertó ese mismo día a Bilbao, anunciando que personal del



ejército había ido a buscarlo a la estación experimental, Hebe Vessuri señala sobre las detenciones:

A ellos tres [Bilbao, Sarraceno y West] de alguna manera los entregaron. El jefe de campo de la estación experimental de INTA, que había sido padrino de mi hija, el gallego Hervás, fue quien los denunció (...) el argumento de él era que había que entregar a alguien, que Santiago tenía más fortaleza moral que otros y que iba a aguantar. Había sido padrino de comunión de mi hija. Éramos muy amigos, hasta que me enteré... Él era informante de los militares, al parecer (Vessuri, entrevista, 13-04-2011).

Después de circular por diversos penales, entre los que figuraron Devoto y una cárcel de máxima seguridad en Chaco, fueron liberados y consiguieron exiliarse en Venezuela. Estando ya fuera del país, fueron dejados formalmente cesantes del INTA. Por su parte, el director de la estación experimental de Famaillá fue trasladado a Salta, desde donde continuó asesorando a la distancia a los directivos de la cooperativa.

Una vez producido el golpe militar, la presencia de un destacamento militar permanente en la zona acarreó algunas situaciones de conflicto con integrantes de la cooperativa. No obstante, durante estos años ésta mantuvo su funcionamiento, incluyendo la renovación periódica de sus autoridades mediante la asamblea de socios. El precio fue el aislamiento y la transformación de buena parte del sentido que hasta el momento habían buscado dar a la experiencia. Según uno de sus impulsores, colaborador en su momento del equipo dirigido por Bilbao y aún hoy activo partícipe de la vida de la cooperativa: “La cooperativa fue atacada desde distintos sectores sociales por ser un modelo centrado en la propiedad común y obrera de los medios de producción, lo cual se asociaba a la organización colectivista, demonizada por aquella época” (West, 2009: 3). También fueron suspendidos los proyectos de integración con otras cooperativas, “se cancelaron abruptamente con el Operativo Independencia, en cuyo marco se desmanteló el plantel de técnicos y profesionales que trabajaban y asesoraban a Campo Herrera” (West, 2009: 9). Si bien, mediante contactos mucho más esporádicos e inorgánicos, algo del asesoramiento técnico del organismo se mantuvo, se perdió totalmente el trabajo de discusión y acompañamiento que buscaba instalar el

debate y la reflexión sobre el sentido de la experiencia, tanto dentro de la cooperativa como al interior del INTA.

Para entonces, la persecución a las organizaciones de trabajadores y cañeros independientes nucleados en la FOTIA y la Unión de Cañeros Independientes de Tucumán (UCIT) redundó en una fuerte caída del salario, que estuvo acompañada por la caída del precio del azúcar y el creciente aumento inflacionario. Esta situación no tardó en repercutir al interior de Campo Herrera, que fijaba los “retornos” de acuerdo a la tabla salarial de los trabajadores cañeros permanentes. Según afirma West, quien después del exilio se reincorporó a la cooperativa donde aún hoy permanece, Campo Herrera se vio obligada a “adquirir un perfil de empresa económica capitalista típica, pasando los objetivos sociales y comunitarios a segundo plano, reduciéndolos al mínimo o abandonándolos ocasionalmente” (West, 2009: 10)

Por su parte, en el INTA no volvieron a gestarse trabajos de investigación ni de acción con un perfil similar. Durante la intervención militar, el material que describía el trabajo con la cooperativa fue destruido, según apunta un técnico de la estación experimental Famaillá, “hicieron una fosa grande y lo taparon” (técnico de la EEA Famaillá, entrevista, 20-09-2010)<sup>171</sup>. Uno de los edificios de la experimental permaneció ocupado al menos por dos años por fuerzas de gendarmería y prefectura, como base de operaciones.

En 1984, con la restauración democrática, algunos técnicos retomaron el contacto con la cooperativa. Sin embargo, al igual que otros que habían sido dejados cesantes en los años previos al golpe de estado, no se vieron alcanzados por la posibilidad de reincorporación que sí alcanzó a aquellos que habían sido dejados cesantes entre 1976 y 1983. Luego de solicitar sin éxito su reinscripción en el INTA en 1985, Bilbao continuó realizando investigaciones orientadas al estudio de organizaciones campesinas en Venezuela. En 1988 una ex alumna de la Escuela para Graduados de Castelar, que había interrumpido su vínculo con el INTA, reingresó postulándose para integrar el Instituto de Economía y Sociología rural, recientemente creado. A contra mano de los enfoques que primarían en el mismo, más bien cercanos a los informes estadísticos y a la econometría, propuso al asociativismo rural como una

---

<sup>171</sup> Cabe mencionar que los documentos alusivos a la experiencia aquí citados no forman ya parte del centro documental del INTA, ni es posible acceder a ellos dentro del instituto. Fueron consultados en bibliotecas personales de ex integrantes del organismo.

tecnología que precisaba ser estudiada. Reflejados los resultados en un artículo, uno de los casos tomados fue Campo Herrera (Tort y Lombardo, 1983)<sup>172</sup>. Según recuerda una de las autoras del informe, para 1988 los miembros de la cooperativa “habían entrado con todo el enfoque productivista, de la competitividad y era un desastre” (Tort, entrevista, 2010). Buscando realizar entrevistas a protagonistas de la experiencia, las dos investigadoras se contactaron con el ex director de la estación experimental de Famaillá. “Cuando hicimos este trabajo en el ’88, no le reconocían su trabajo como científico para jubilarse, lo hicieron un paria total” (Tort, entrevista, 10-05- 2010), afirma la misma investigadora.

La trayectoria de esta experiencia no permaneció desligada de las transformaciones más generales por la que atravesó el servicio de extensión del INTA que se ligaron, a su vez, a los cambios experimentados en el espacio rural.

#### **4. Políticas sectoriales, acumulación de capital en el agro y mercantilización de conocimiento**

Como han resaltado distintos especialistas, la dictadura de 1976 marcó un punto de inflexión dentro del patrón de acumulación local. En este proceso, la especulación financiera fue combinada con la expansión local de los sectores extractivos, agropecuario, pesqueros, energéticos y minero (Azpiazu y Schorr, 2010). La política económica del régimen militar se basó en sostener la liberalización generalizada de los mercados (particularmente, el financiero) y la apertura económica al exterior. El 2 de abril de 1976, el ministro de Economía Martínez de Hoz anunció las bases del “Programa de Recuperación, Saneamiento y Expansión de la Economía Argentina”, que iba a tener al congelamiento salarial, la liberalización de precios y la devaluación como tríada clave (Azpiazu, Khavisse y Basualdo, 1996). En agosto de 1976 se sancionó la Ley 21.382, que desreguló completamente el régimen de inversiones extranjeras, mientras que el Decreto 3008/76 redujo significativamente los aranceles de importación. A estas medidas se les sumó la “racionalización” del aparato estatal y la reforma

---

<sup>172</sup> La cooperativa atravesaba una profunda crisis, era el primer año en su historia en el que sus integrantes habían tenido que volver a salir a trabajar como zafreiros porque el trabajo no cubría las necesidades de la comunidad (Tort y Lombardo, 1983). En la década de 1990 se pondría en marcha una cabaña avícola dentro de la cooperativa mediante el programa ProHuerta del INTA.

financiera de mediados de 1977, que otorgó la liberalización de las tasas de interés y de los requisitos para la expansión de las entidades financieras (Azpiazu, Khavisse y Basualdo, 1996). Como señala Basualdo (2006), la reestructuración de la puja distributiva significó un significativo aumento de la explotación de la fuerza de trabajo, una pérdida de los asalariados de 13 puntos del PBI se trasladó al capital y desató una lucha en las fracciones dominantes por su apropiación, expresada en el mercado e incontrolable proceso inflacionario que signó el período.

Durante los primeros años, se introdujeron cambios significativos en el marco regulatorio vinculado al agro, que acompañaron y promovieron la concentración del sector. Las principales medidas apuntaron a suprimir los derechos de exportación, eliminar las retenciones y las diferencias de cambio, liberalizar el comercio exterior y otorgar una reducción arancelaria a insumos clave (insecticidas, herbicidas, fertilizantes). Una nueva Ley de Granos (22.108) habilitó a la actividad privada a construir y explotar instalaciones terminales de almacenaje y embarque de granos, y otra -Ley 22.211- permitió las desgravaciones impositivas. La Junta Nacional de Granos fue reducida en sus funciones y privatizada parte de sus estructuras, mientras que el Consejo Agrario Nacional fue disuelto en 1980. Estas medidas se entroncaban con la reforma del régimen de comercialización de granos y la eliminación del monopolio estatal de su exportación (Makler, 2006). En el sector ganadero, la sanción de la Ley 21.740 liberalizó el mercado de exportación de la industria frigorífica y puso fin al accionar de la Junta Nacional de Carnes. Además, se estableció la desgravación fiscal automática para la adquisición de maquinaria agrícola. A fines de 1976 los derechos de exportación de los productos agropecuarios, que oscilaban entre un 10% y un 50%, se redujeron a la mitad, quedando entre un 5% y un 25% (Azpiazu, Khavisse y Basualdo, 1996).

En materia de legislación agropecuaria, las principales medidas del período 1973-1974 fueron discontinuadas. Como tratamos en el primer capítulo, el IRNP fue derogado en 1976 y el proyecto de la Ley Agraria nunca volvió a tener tratamiento. En 1980 se derogó la ley de colonización, mientras la política de tierras del período se limitó a promulgar una nueva ley de arrendamientos que privilegió el acuerdo entre partes en desmedro de la participación estatal (Bustamante, 2011). La nueva legislación de arrendamientos y aparcerías rurales disminuyó a tres años el plazo mínimo de los

contratos y estableció que la renta debía consistir en un monto en dinero. Los arrendatarios y aparceros sufrieron una fuerte precarización, siendo las unidades familiares sin asalariados permanentes las más afectadas y las que contaron con menores capacidades para resistir el reordenamiento de la estructura social agraria (Balsa, 2006). Estas transformaciones incrementaron progresivamente la participación de los inversores financieros en el agro, dando impulso a los *pools* de siembra (Grober, 2008, citado en Bustamante, 2011: 90). De esta forma, mediante la modificación de las leyes de arrendamiento a través de la eliminación de los artículos que marcaban la intervención estatal en la proyección de los arrendatarios, la flexibilización de la legislación agropecuaria se profundizó cualitativamente (Hocsman, 2013). Al mismo tiempo, la política monetaria y la reforma financiera a elevadas tasas de interés produjeron el endeudamiento masivo de muchos productores<sup>173</sup>. El histórico desequilibrio entre la región pampeana -dotada de ventajas diferenciales a escala internacional- y el “resto del país” fue profundizado por las políticas de apertura económica, impuestas en forma creciente a partir del golpe de Estado. Como indica Aparicio (1982), se destacaron proyectos referidos a la privatización de tierra pública y a la expansión de la frontera agropecuaria.

Lejos de constituir una esfera escindida, las políticas sectoriales expresaban la relación de fuerzas vigente<sup>174</sup>. La reorientación de las políticas agrarias no estuvo desvinculada del creciente proceso de concentración y centralización de capital registrado en el sector. En este sentido, la política de apertura al mercado mundial sostenida por la dictadura otorgó un lugar destacado a la producción primaria, maximizando la renta agraria. Estudios especializados han enfatizado la inserción del sector agropecuario post 1976 en la “valorización financiera”, a través de la diversificación de inversiones de los grandes terratenientes. La tradicional actitud basada en el “ciclo ganadero” (alternancia entre la producción de carnes y granos según los cambios en los precios relativos) habría de incorporar al sector financiero como depositario de los excedentes, en sintonía con las condiciones creadas por la Reforma

---

<sup>173</sup> A fines de 1978 se fija un ritmo devaluatorio anticipado y decreciente. La creciente apertura de la economía termina perjudicando a los sectores productores de bienes sujetos a competencia internacional, lo que implica que para la segunda mitad de 1980 tanto la UIA como la SRA criticaran fuertemente la misma. En 1982 la Comunicación A 251 del BCRA introducía la transformación de la deuda privada en pública (Azpiazu, Khavisse y Basualdo, 1996).

<sup>174</sup> O bien “la configuración económica y social en las distintas fases de una formación económica-social, así como de las contradicciones que la caracterizan” (Arceo y Basualdo, 1997: 70).

Financiera de 1977 (Basualdo, 1995). A partir de 1977 se invierte la proporción tradicional mantenida entre agricultura y ganadería, produciéndose una liquidación de ganado vacuno sin que aumentara consecuentemente la superficie agrícola (Basualdo y Khavisse, 1993). Esta tendencia fue acompañada por una acentuada reducción de la inversión sectorial y un aumento del endeudamiento del sector, destinado a gastos de capital trabajo. Debido a esta situación, los autores afirman que hay una salida del excedente, derivado de la renta agrícola y de la liquidación ganadera, ubicado en la esfera financiera. La cúpula de los propietarios ya no definiría su comportamiento de acuerdo al precio relativo agrícola o ganadero, sino también a partir de las tasas de interés. Esta imbricación con la especulación financiera les habría permitido consolidar su posición en el agro regional e incrementar la concentración de la propiedad de la tierra (Basualdo y Khavisse, 1993). Estos planteos derivan de un estudio pionero. Según Azpiazu, Khavisse y Basualdo (1986: 9), en el marco del agotamiento de la segunda fase de la industrialización por sustitución de importaciones y de una nueva fase de crisis internacional, la dictadura impulsó un proyecto excluyente y regresivo que exigió una reestructuración productiva, cuya clave consistió en que la industria dejó de ser “el factor dinamizador” de la economía nacional. La “nueva” fracción dominante que lideró este proceso estuvo integrada por “grandes capitales, tanto nacionales como extranjeros, que controlan la propiedad de múltiples firmas locales ubicadas en una diversidad de actividades económicas” (Azpiazu, Khavisse y Basualdo, 1986: 189). Mientras que en una primera etapa (1976-1979) la economía todavía continuó por carriles “industrialistas”, (aunque basados en la demanda de los sectores de altos ingresos, en detrimento de los bienes de consumo masivos); en una segunda fase (1980-83), al converger las altas tasas de interés, la subvaluación cambiaria y la reducción arancelaria con la redefinición del aparato estatal y la distribución regresiva del ingreso, estalló la crisis que alteró los patrones de la ISI, produciéndose así la quiebra de capitales (nacionales y extranjeros) pequeños y medianos, y consolidándose los integrados y/o diversificados. Emerge así un nuevo poder económico, constituido por capitales de antigua existencia en el país pero que desde fines de 1970 ocuparon un lugar central del proceso de acumulación, grupos económicos nacionales y empresas transnacionales diversificadas y/o integradas que, por la importancia de sus activos en el país y sus inversiones en el exterior, tuvieron la capacidad para condicionar el proceso económico

global (Azpiazu, Khavisse y Basualdo, 1996). La tesis de los autores ha producido diversos debates en torno a las continuidades y rupturas que implicó el período comprendido por la última dictadura en relación a la estructura productiva argentina en general, y en particular al rol de la industria en la misma, así como en torno a la implicancia y significado de la preeminencia de un esquema de “valorización financiera” a partir de la misma<sup>175</sup>. Sin entrar de lleno en estos debates, resulta pertinente puntualizar algunos aspectos que involucran al rol del sector agropecuario. Como señalan los autores, hasta 1976 es posible distinguir a las empresas transnacionales (ET) en el centro del proceso de acumulación, seguidas por el capital nacional. En cambio, a partir de la dictadura el centro lo ocupan una fracción de capital local, grupos económicos (GE) junto a una fracción del capital extranjero, las empresas transnacionales diversificadas e integradas (ETDI), que a principios de 1970 no tenían más que el 28% y el 38,8%, respectivamente de sus firmas en el sector industrial (Azpiazu, Khavisse y Basualdo, 1996). De este modo, los GE aparecen como la fracción nacional que lidera el proceso de concentración y centralización del capital, tanto en el sector industrial como en el agropecuario, y es “punta de lanza” del capital extranjero más competitivo (aquel diversificado y/o integrado, las ETDI). Sin embargo, como también señalan los autores, para ese entonces estas fracciones ya controlaban las empresas industriales de mayor tamaño relativo (Azpiazu, Khavisse y Basualdo, 1996: 191). Su expansión durante la dictadura, producto de la quiebra de capitales menores, su absorción de firmas y un fuerte apoyo estatal, se inscribe ciertamente en el componente “desindustrializador” asociado a la política económica del régimen militar<sup>176</sup>. No

---

<sup>175</sup> Con respecto al deterioro de la industria como objetivo del gobierno militar, Canitrot apunta que uno de los objetivos del gobierno militar era sostener los niveles de empleo, por lo que las Fuerzas Armadas se proponían “disciplinar el comportamiento social de empresarios y obreros industriales, pero no acabar con la industria” (Canitrot, 1983: 39). En oposición a esto, Basualdo (2006) señala que la nueva doctrina militar aunó el ajuste económico y el disciplinamiento social, y remarca la importancia de la fuga de capitales que colocaron fondos en el mercado financiero internacional, desvinculándolos de los cambios en la economía local. El bloque dominante quedó conformado por una alianza entre la oligarquía diversificada, el capital extranjero y la oligarquía pampeana, a la vez que, según el autor, se logró romper la alianza popular, entre la burguesía nacional y la clase trabajadora (Basualdo, 2006).

<sup>176</sup> Una parte fundamental de la tesis de los autores consiste en demostrar el peso del sector financiero en detrimento del productivo, como un rasgo sobresaliente de la reestructuración económica del período. Efectivamente, el grueso de los excedentes apropiados por estos capitales (GE y ETDI) fueron colocados en inversiones en el sector financiero, que trascendió las fronteras nacionales en consonancia con la política aperturista. Pero esta internacionalización creciente de la reproducción ampliada de estas fracciones dominantes, en una etapa considerada por los autores como de “valorización financiera del capital” (Azpiazu, Khavisse y Basualdo, 1996: 193), no dejó de tener como condición de posibilidad su inserción en la economía real. Ésta, a su vez, fue privilegiada por su capacidad de convertirse en líderes

obstante, es necesario explicarla además por revelarse como sujetos centrales en el proceso de acumulación nacional con anterioridad al golpe (Iñigo Carrera, 2007). En este sentido, cabe señalar que los casos testigo indagados por los autores, tomados por ser representativos de la fracción que lidera el proceso de acumulación de capital, son de base agraria. Todos, según la reseña histórica aportada en cada caso, presentan una inserción en el país de larga data, afincada en rubros tradicionales vinculados a explotaciones agropecuarias, a partir de la que realizan su diversificación económica que les permite su estabilidad primero y su adaptación a aquellos rubros económicamente mejor posicionados, después.

Desde la década de 1960, la renta diferencial había ido acotando su capacidad de compensación, siendo el endeudamiento externo y la depreciación salarial (vía inflación) los mecanismos complementarios implementados (Iñigo Carrera, 2007). En la década siguiente, pese al apoyo político que buena parte de los terratenientes otorgó a la dictadura en ciernes, la insuficiencia fue tal que por primera vez se aplicó un impuesto nacional que gravó directamente la renta de la tierra (Iñigo Carrera, 1998). El Estado mantuvo su capacidad de apropiación de la renta agraria, y a su vez, limitó la transferencia a los capitales industriales, algunos de los cuales sortearon esta pérdida mediante la caída salarial por debajo del valor de la fuerza de trabajo (Iñigo Carrera, 1998). En este marco, la dinámica de acumulación mundial ofreció una nueva recuperación y expansión al sector agropecuario. Junto a la suba de precios generalizada -encabezada por el petróleo- las mercancías agrarias también despuntaron, reactivándose los mecanismos de transferencia del agro hacia otros sectores. La apertura al mercado mundial otorgó un lugar privilegiado a la producción primaria, que se insertó en la especulación financiera a través de la diversificación de inversiones de los

---

del proceso de acumulación a partir de una posición relativamente superior, la diversificación a partir de la estructura agraria. Esto no implica negar el peso de la Reforma Financiera (1977) y sus derivados. A partir de ésta, el endeudamiento pasa a ser la norma en todas las firmas industriales, y sólo estos grupos logran un acceso diferencial por su inserción en el sector financiero. De igual manera, su participación en el sector agropecuario permite su diversificación y les otorga flexibilidad en sus inversiones. En este sentido, a la profunda re-estructuración/ dislocación económica y social que impone la última dictadura, le corresponde como rasgo distintivo la restauración del poder del capital frente a los avances de la clase trabajadora, unida a la restauración de las condiciones económicas para el protagonismo de los sectores dominantes del bloque agro-exportador. La capacidad de estos de acoplarse a las ramas económicas menos perjudicadas por las políticas sostenidas, diversificándose en las actividades más rentables, detentó una flexibilidad re-editada, que unida a la imposición de una coacción represiva inédita que restableció y profundizó las condiciones de acumulación, aseguraron su rol protagónico, en una nueva fase de concentración y transnacionalización del capital.



grandes terratenientes y presionó para eliminar los gravámenes y la normativa particular para el sector (Arceo y Basualdo, 1997). En este sentido, en una perspectiva histórica integrada, los sucesos posteriores a 1976 expresan que, lejos de haber perdido capacidad de injerencia en la situación política nacional, este sector de la clase dominante -tanto en su fracción “tradicional” como “moderna”- expresó en la última dictadura un nuevo momento de convergencia entre su poder económico y político<sup>177</sup>.

El sector agropecuario pampeano lideró el proceso de concentración local, que estuvo signado por la incorporación de híbridos y nuevas especies que impulsaron un salto en la productividad agrícola, dejando atrás el estancamiento. Esto transformó su actitud tradicional basada en el “ciclo ganadero” (Arceo y Basualdo, 1997). La velocidad del crecimiento de la producción agrícola pampeana, junto al aprovechamiento de la creciente demanda internacional, se nutrió de los avances técnicos y científicos que intensificaron los rendimientos. El gran proceso de concentración y centralización se explicó, en gran parte, por la creciente dependencia de insumos externos, que beneficiaría a las empresas extranjeras, acentuando las economías de escala de grandes terratenientes. El crecimiento del sector agrícola se evidenció en la evolución del PBI. Entre 1970 y 1976 el porcentaje correspondiente a las actividades agrícolas era de 49,8% y el 45,4% correspondía al sector pecuario, mientras que para 1988 la proporción era de un 62,1% y un 35,1%, respectivamente (Barsky y Gelman, 2009)<sup>178</sup>. Para mediados de la década del ochenta, en sintonía con las políticas impuestas desde 1976 y el fuerte deterioro del mercado interno, las economías regionales atravesaban una crisis profunda (Aparicio, 1982; Manzanal y Rofman, 1989; Rofman y Romero, 1997).

---

<sup>177</sup> Si bien a lo largo de la historia del país es posible identificar períodos en los que los sectores de base agraria aunaron poder político y económico (1880-1930), en instancias posteriores en las que carecieron de la representación política directa, conservaron el control de las bases productivas.

<sup>178</sup> Los autores contextualizan este proceso de transformaciones en el agro en el marco de una “modernización social” (Barsky, Gelman, 2009: 436), entendida como mejora de caminos, difusión de automotores y telefonía rural, que habría beneficiado a “los productores y sus familias”. Queda sin definir cómo están compuestas esas familias de productores, qué grado de dependencia (y autonomía) poseen con respecto al mercado y en qué medida se vieron afectados por los cambios del sector. El análisis económico es sesgado, en tanto la descripción del período 1970-1985 evalúa el impacto en el “sector agrario”, distinguiendo entre el área agrícola y la pecuaria, pero sin indagar en el universo social, los distintos tipos de productores y su posicionamiento en las transformaciones imperantes. Así, la “modernización social”, que aparentemente acompaña las transformaciones productivas, oculta la realidad económica y social de los trabajadores rurales, los productores des-capitalizados, la agricultura de subsistencia y un variopinto abanico de sujetos agrarios.

En relación a las transformaciones en las condiciones de producción a partir de 1970, Balsa (2006: 139) distingue los requerimientos de capital y extensión de las explotaciones, el contexto económico de alta inflación y altas tasas de interés y el cambio en las políticas agrarias luego del fracaso del impuesto a la renta normal potencial de la tierra y el posterior retroceso de la intervención estatal. En este sentido, una de las claves del proceso de concentración estuvo dada por la tendencia decreciente en los ingresos netos por hectárea trabajada. Cada vez se requerían más hectáreas para obtener los ingresos suficientes que sostuvieran al productor y a su familia (Balsa, 2006). Si bien históricamente la producción agropecuaria, en especial la radicada en Pampa Húmeda, ha podido apropiarse de una renta diferencial aprovechando las ventajas existentes (Hocsman, 2013), tampoco el agro pampeano estuvo exento de agudas problemáticas sociales y económicas.

La expansión agrícola, en la que el uso de semillas modificadas resultó crucial, se caracterizó por mantener el acceso a las innovaciones restringido a los grandes productores capitalizados, mientras que los minifundistas y familiares no contaron con las condiciones para reimplantar las nuevas variedades, incorporar los insumos y maquinaria “de punta”, ni realizar los tratamientos sanitarios correspondientes. Al igual que en todo proceso de concentración y centralización del capital, la expansión registrada en el medio rural, lejos de haber modificado los históricos problemas del sector, agravaría las condiciones de vida y de trabajo de la población implicada (Aparicio, 1982), produciendo situaciones de extrema pobreza, junto a nuevas problemáticas sociales, económicas y ambientales. En esta dinámica, se configuró una “relación intrínseca entre el capital, los sistemas de producción desarrollados y las políticas públicas que por medio de dispositivos legales impusieron condiciones, o mediaron ante la resolución de la conflictividad agraria” (Hocsman, 2013: 89).

La re-evaluación de las tareas de investigación y extensión del INTA impulsada durante su intervención militar señalaba que el objetivo era que estas respondieran a “las necesidades de la política agropecuaria nacional, tanto en el plano técnico como en el económico” (INTA, 1978: 11). Se remarcaba la necesidad de “adecuarlo [al INTA] a las necesidades actuales en materia agropecuaria” y de “contribuir dentro del accionar específico del instituto al logro de la expansión de la frontera agropecuaria.” (INTA, 1978: 2).

La reorganización del agro, fuertemente ligada a las fluctuaciones en la demanda internacional, alcanzaría en las décadas subsiguientes nuevos umbrales signados por la concentración en manos de un puñado de transnacionales del comercio agrícola a nivel mundial y por el constante incremento de la emigración rural a nivel local y regional (Katz, 2012). Las unidades familiares sin asalariados permanentes fueron las más afectadas y las que contaron con menores capacidades para resistir el ‘reordenamiento’. En este contexto, después de que naufragara la iniciativa del anteproyecto de Ley Agraria, la cuestión de la tierra permaneció como una cuenta pendiente en las políticas agrarias. Una memoria técnica de la estación experimental de Famaillá, donde se había asentado el trabajo con la cooperativa agropecuaria Campo Herrera, sintetizaba en 1983 una situación que era común para el conjunto del sector y en particular para las economías regionales: “La descapitalización de los productores, el desaliento y la quiebra financiera hicieron que solamente las empresas de mediana y gran magnitud recurrieran a la consulta y aplicación de tecnología” (INTA, 1983). La afirmación describía acertadamente la consolidación de un público, minoritario y concentrado, como principal usufructuario de las tareas del organismo.

#### **4.1. Del contacto con las comunidades rurales a la transferencia de tecnología para grandes terratenientes**

La intervención del INTA iniciada en marzo de 1976 situó algunos puntos prioritarios considerados necesarios para “reorganizar” el accionar del organismo, que fueron recogidos y sintetizados en materiales producidos durante su intervención. La extensión rural fue uno de ellos. Entre los puntos más destacados de la “estrategia” enunciada se encontraba la designación de directores interinos en las unidades experimentales, con el objeto de “implementar un proceso de cambio en la conducción y manejo de las experimentales” (INTA, 1978: 5), la renovación de la conducción de departamentos y centros de investigación y de las 225 agencias de extensión rural, así como la “modificación de los criterios de selección del personal” (INTA, 1978: 6). El área de extensión, vía de contacto directo, fue particularmente reorganizada. Esto era argumentado, según dejaba constancia un informe sobre los primeros dos años de intervención, en función de un funcionamiento deficitario atribuido al área: “En los

últimos años el Servicio de Extensión padeció un acentuado déficit en el cumplimiento de funciones de jefes regionales y supervisores de área, lo que se traducía en deterioro de coordinación y control” (INTA, 1978: 11). Este diagnóstico redundó en un notable incremento de “las funciones de supervisión” (INTA, 1978: 12) sobre los extensionistas, y una fuerte centralización nacional de las actividades de extensión de las distintas regiones.

En 1975, luego de la primera intervención del INTA dispuesta en mayo por el Poder Ejecutivo, el Departamento de Comunicaciones en Extensión Rural del Instituto había comenzado a editar una revista, destinada a los extensionistas del INTA y de otros organismos. Si bien retomaba una experiencia de publicación anterior, se proponía -según la editorial a cargo del director nacional del INTA ( el ingeniero Spinelli Zinni)- dejar sentados los fundamentos que la extensión iba a tener en “El INTA NUEVO” que se prometía como una “avanzada de la tecnología agropecuaria, al servicio de la Nación y el hombre argentino” (INTA Extensión Rural, 1975: 1, mayúsculas en original). En julio del año siguiente, el director interino del Servicio de Extensión se refería en la misma publicación a una reciente campaña del trigo, reseñando el rol de la extensión del INTA en conexión a los cambios en materia de políticas agropecuarias. Aludiendo a un incremento en la producción de granos, señalaba: “El nuevo nivel de precios, *unido a un conjunto de medidas que se están implementando*, abre nuevas posibilidades a una actividad que durante mucho tiempo encontró serias limitaciones económicas para su desarrollo” (Lemos, 1976: 1). El incremento del área sembrada era entendida en el marco de una revalorización de los granos a escala nacional y un “replanteo en los esquemas productivos”, que influía directamente en el quehacer extensionista:

Apenas anunciado este *cambio radical de la política agropecuaria*, el extensionista se encontró de pronto en su trabajo ante un panorama nuevo, mucho más permeable y receptivo: *su audiencia comenzó a cambiar* tornándose más numerosa y más interesada (Lemos, 1976: 1).

¿De qué se trataba el cambio? Y, ¿en qué sentido había comenzado a “cambiar la audiencia” de los extensionistas del INTA? Por entonces, los cambios en las políticas sectoriales acompañaban la intensificación de la producción cerealera, signada por la modernización agrícola que incrementaba la polarización social en el medio rural y la

expulsión de productores poco capitalizados y trabajadores rurales (Aparicio, 1992; Hocsman, 2013). En este sentido, desde el INTA se señalaba la necesidad de impulsar la “expansión de la frontera agropecuaria”, advirtiendo no obstante sobre la necesidad de conservar el suelo, “para que a través de las generaciones *pueda seguir sirviendo rentablemente a la empresa privada, al país y al mundo*” (INTA, 1978:6, énfasis propio). Según afirma una entrevistada, “el trabajo de extensión y de investigación estuvo menos ligado a problemáticas de la comunidad y de los pequeños productores” (investigadora del INTA, entrevista, 15-06-2010). ¿Cuál fue, entonces, el enfoque previsto para la extensión? La entrada masiva de becarios en el área con un “perfil apropiado para la transferencia de tecnología” (Alemany, 2003: 8) produjo un fuerte impacto en las agencias de extensión, y fue la contracara de la depuración inicial que se realizó en el área. En 1979 se afirmaba desde las autoridades del servicio que existía una gran expectativa “con respecto a la acción futura de los técnicos que está capacitando el INTA. El enfoque físico-económico social de la empresa permite abarcar todos los aspectos que influyen y determinan su desarrollo” (Integración. Investigación y Extensión Rural, 1979: 2). Entrevistado para una publicación del INTA en 1982, quien fuera designado jefe regional de extensión en el área de incumbencia de la estación experimental Pergamino mencionaba sobre las implicancias de este “enfoque”:

Mi llegada en el año 1976 coincidió con una serie de cambios que se produjeron en el organismo, y en tal sentido comenzamos un *replanteo de nuestra estrategia de trabajo*, dentro del marco del *proceso de reprogramación encarado por el INTA en todo el país (...)* En el desarrollo de los objetivos de enseñanza se utilizaron las metodologías conocidas pero *se trató de enfatizar la acción con los profesionales de la actividad privada*. Este grupo de técnicos, que es muy numeroso, se convirtió en una de las clientelas a las que dedicamos preferente atención (Baqué en INTA, 1982: 31, énfasis propio).

Esta alusión a la transformación del perfil de los interlocutores de las actividades de extensión del INTA ponía en evidencia la incorporación de un nuevo público, los técnicos del sector privado, como “clientela” a la que se dirigía el instituto.

Indirectamente, se dirigía a un destinatario final, las empresas agropecuarias, de las que los técnicos eran meros intermediarios. Esta orientación fue acompañada por otras estrategias de extensión que priorizaron el contacto con productores fuertemente capitalizados, al tiempo que fueron dejando atrás las inserciones comunitarias destinadas a la población rural. En este sentido, desde 1977 se intensificaron las experiencias en campos de productores efectuadas por las agencias de extensión rural del INTA. Tratamientos de fertilizantes, introducción de variedades y de diversas prácticas de manejo fueron ensayados en estas propiedades, caracterizadas por su extensión, lo que permitió a esta franja de productores incrementar sus niveles de productividad y rendimiento (INTA, 1978). Por otro lado, en 1982 el mismo responsable de uno de los principales servicios de extensión del INTA en todo el país señalaba: “Hoy en día prácticamente no quedan técnicos afectados al trabajo con jóvenes” (Baqué en INTA, 1982: 33). Según se proponía, la labor con juventudes debía ser canalizada en otras instituciones. En este sentido, según reconstruye un actual investigador, ex extensionista y voluntario en un grupo de colaboradores del INTA dedicado al contacto con jóvenes que funcionaba bajo la coordinación de una maestra rural en la provincia de Buenos Aires:

Con el gobierno militar el trabajo con la familia rural empieza a decaer fuertemente y a perder toda línea conductora. Reconvierten a los asesores de Juventudes en otra cosa, pasan a ser ayudantes técnicos, y se empieza a premiar el trabajo de transferencia tecnológica. Y empieza a separarse, en los hechos, no así en el discurso, el trabajo con el productor rural y su familia (que es el mandato de la ley del INTA). El doble discurso se mantuvo, pero en los hechos no (ex extensionista, entrevista, 09/10/2009).

Esta escisión entre discurso y práctica, vinculada a los objetivos y contenidos de la extensión rural desarrollada por el INTA, es referida también en relación a la organización interna del servicio. Al decir de otro extensionista del instituto: “La extensión en terreno permanece institucionalmente, pero todas las cabezas que ideaban qué hacer se eliminan totalmente” (ex extensionista, entrevista, 17-07-2011). Una ex integrante de Hogar Rural señala que, si bien el servicio continuó, “nos cambiaron las

funciones. Lo que se perdió fue el servicio de trabajo social, más que ningún otro” (ex asesora de Hogar Rural, entrevista, 02-09-2011). En relación al impacto regional sobre la extensión, agrega que en la región pampeana la intervención “no afectó tanto como en el NOA o como en ciertos lugares del NEA, pero se sintió mucho más el Golpe para los extensionistas que para los investigadores, aún en esta zona. Porque trabajábamos justamente en lo estructural y no tanto las mejoras técnicas” (ex asesora de Hogar Rural, entrevista, 02-09-2011). Lo que se generó, entonces, fue un divorcio entre el discurso institucional, que continuaba dirigiéndose a “la familia rural” y la práctica de la inserción en territorio del INTA, que fue adquiriendo un perfil empresarial tanto en el mensaje promovido como en su *modus operandi*.

El rol del extensionista, que al decir de una agrónoma integrante de INTA desde 1969, antes era “el médico clínico local, que estaba asentado en cada pueblo” (técnica de INTA, entrevista, 12/07/2010, énfasis propio), se alejó del contacto directo con las comunidades rurales y sus problemáticas, y fue redefinido drásticamente. Pasó de ser “el agrónomo de terreno” instalado en la comunidad, a ser asesor técnico de terratenientes. La producción de tipo minifundista y las necesidades de los agricultores de subsistencia quedaron fuera de la agenda. Al fines de la década de 1970 ya era frecuente que se pensara al espacio rural en tanto despoblado, por ende “que había menos gente viviendo en el campo y que había que intensificar la productividad” (ex extensionista, entrevista, 9/10/2009). Como señalan los propios investigadores, en el INTA prevaleció una visión de la extensión concebida como asistencia técnica destinada a mejorar el rendimiento de determinados cultivos. La presencia a nivel territorial disminuyó y transformó su perfil. Las mismas retóricas ligadas a la importancia de las actividades socio-culturales, al papel de la juventud rural y la educación cooperativa, continuaban siendo abundantemente mencionadas. En la práctica, muchas de estas instancias se iban modificando, llegando algunas -como los Clubes 4-A- a desaparecer. Buena parte de los “valores” asociados al cooperativismo y al trabajo con juventudes (solidaridad, ayuda mutua, etc.) se articulaba crecientemente con una visión de corte empresarial, que bien entroncaría con el nuevo perfil dado a la extensión. El supervisor de Juventudes de la experimental Pergamino señalaba: “Apelar a los valores de la cooperación, al idealismo de los pioneros, la nobleza y humanismo de sus principios no tiene mayor trascendencia si en la práctica no va acompañado de una

sólida conciencia del manejo empresarial”. Las acciones “de los pioneros”, entendidos como los fundadores del INTA en general y del Sistema de Extensión en particular perdían, en esta visión, todo sentido si no se amoldaban a la nueva lógica definida para la extensión y su público. El logro de una “administración eficiente” y de una “conducta empresarial” estaban ahora entre las directrices de los extensionistas.

Como señala Alemany (2003), el nuevo proyecto institucional de extensión se concentró en la transferencia de los paquetes tecnológicos generados por la investigación agropecuaria. En su análisis de los “órdenes simbólicos” dentro del INTA, Calandra señala que si bien la extensión fue abandonando su componente educativo y trasladándose al sector privado, “los productores nunca registraron, según parece, el cambio de foco del INTA respecto de sus audiencias, ya que siguen pensando que son el centro de sus acciones” (Calandra, 2009: 211). Si bien una problematización en profundidad requeriría un trabajo empírico relevando distintas franjas de productores, resulta llamativa la afirmación de la autora. En principio cabe la pregunta sobre qué tipo de productores fueron los que no registraron el “cambio de foco”.

La relación con la población rural todavía hoy es fuertemente recordada por los extensionistas del organismo: “Los extensionistas tenían actividades de todo tipo, desde técnicas hasta socio-culturales. Cuando yo fui de becario a San Pedro se hablaba mucho todavía del cine que pasaba el INTA en el pueblo, iban los sábados y pasaban (...) En el ’83 eso no estaba más...”. En cambio:

En la época del gobierno militar empieza con más fuerza *esta cuestión de la transferencia y el bombo*. Esto de pensar que con grandes reuniones, con muchos folletos, vas a cambiar la mentalidad del productor... Hacer marketing, mejorar la venta, que todos los productores sean pequeños empresarios. Ese discurso que ya estaba pero que recibe cada vez más énfasis (extensionista, entrevista, 09-10-2010).

En este sentido, mientras que se refuerza un aspecto presente dentro de la extensión tradicional ya desarrollada por el INTA, se debilita otro y, simultáneamente, se des-estructuran los debates y las experiencias que ponían en cuestión cuál tenía que ser la orientación del organismo. En el primer caso, se refuerza la idea de que es



necesario cambiar “la mentalidad” del productor. Si en un origen este enfoque estaba asociado a la difusión de la modernidad por vía de las nuevas técnicas en un agro social y económicamente “atrasado”, ahora esta idea fuerza se inscribe plenamente en la lógica mercantil y en las configuraciones económicas en curso. Este aspecto conserva, al menos en un plano retórico, la justificación cercana al determinismo tecnológico que asociaba linealmente mayor difusión tecnológica, mayores rendimientos, elevación del nivel de vida de la población. En el segundo, otro aspecto de la extensión -aquel que instaba a un trabajo integral con un fuerte contenido socio-cultural dirigido a diversos sujetos rurales- es desalentado progresivamente. El decaimiento progresivo de las actividades con jóvenes (principalmente) y mujeres, y de las estrategias de contacto que los acompañaban, es parte de este proceso. Al mismo tiempo, las disputas que habían surgido a partir de experiencias alternativas, que reforzaban la inserción territorial y comunitaria al tiempo que criticaban sus fundamentos previos en pos de trascender la asistencia y contribuir al replanteo de las condiciones de vida de la población implicada, fueron desestructuradas de raíz. El nuevo perfil, “de la transferencia y el bombo”, cuyas metodologías serán las “grandes reuniones” y masivas tiradas de “folletos” tendrá su esplendor en la décadas subsiguiente. Así, según apunta una integrante del INTA: “Se van privatizando los propios técnicos del INTA, ‘te asesoro, pero facturo’. Se pierde el rol de lo que era la extensión, que queda como un departamento de publicaciones que recibe los folletos (...)” (investigadora del INTA, entrevista, 12-07-2010). En relación a este perfil, un ingeniero agrónomo recuerda su ingreso como becario en 1977:

El sistema de extensión se desmanteló en la época en la que entré. Hubo un desarme *coincidente con la creación de consorcios en el campo*, los grupos CREA, pero agarraban 10 ganaderos y le pagaban a un asesor para que fuera a sus campos (...) pero no al nivel de pequeños productores, ni mucho menos (investigador de INTA, entrevista, 17-08-2010, énfasis propio).

Inspirado en los grupos franceses CETA (*Centre d'Etudes de Techniques Agricoles*), integrados por reducidos números de agricultores, el primer Consorcio Regional de Experimentación Agrícola (CREA) del país se fundó en 1957 (Basco, 1988). En 1960, siendo ya cuatro los grupos, se fundó la Federación Argentina de

Grupos CREA, luego denominada Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (AACREA), que nuclea todos los CREA. En este sentido, el accionar de estos emprendimientos privados, los consorcios regionales, no era nuevo para la década de 1980, pero sí tuvo por entonces un impulso creciente. Cada grupo operó conformado por diez o doce empresarios del sector agropecuario. La extensión fue asumida por un “asesor”, profesional de las ciencias agropecuarias, encargado de gerenciar el plan de trabajo para las empresas del grupo, recopilar información técnica y económica, hacer un seguimiento de las innovaciones adoptadas, preparar reuniones mensuales y articular con otros asesores de la misma región. Su función fue la de “ayudar al empresario en el ajuste de la tecnología que aplica”, considerando que “tan importante como la tecnología, es el *desarrollo del empresario y de la empresa*. Esto posibilita el avance tecnológico y la búsqueda de respuestas concretas a los problemas de la empresa” (AACREA, web, énfasis propio). En cuanto a las metodologías, la misión de transferencia fue garantizada fundamentalmente multiplicando la realización de experiencias en los campos de los miembros de los CREA, y a través de publicaciones técnicas y programas para el control de las empresas agropecuarias. En este sentido, más que reemplazar funciones de extensión rural que antes desarrollaba el INTA, el accionar de los CREA fue convergente con el perfil de la actividad impulsada por el organismo. Esta situación también coincidió con la incorporación de un vocal de AACREA al Consejo Directivo del INTA. En 1977, estando intervenido el organismo, el Decreto-Ley 21.673/77 aumentó a diez el número de miembros del Consejo Directivo, designando un vocal más por los productores y otro por las Universidades Nacionales al separarse las carreras de Veterinaria y Agronomía. En 1980, el Decreto 1.428/80 dispuso que el representante de los productores fuera designado por la AACREA, que se sumó así al Consejo. En el marco de una dinámica de acumulación signada por la disputa de las ganancias provenientes de la actividad agroexportadora y un medio rural caracterizado por la existencia de profundas inequidades sociales, la presencia de estas corporaciones no sería menor. La franja de agricultores que no alcanzó a instrumentar los insumos tecnológicos, de alta concentración de capital, así como la población rural que era antes objeto de diversos planes de extensión quedó prácticamente sin cobertura.

En relación a los nuevos criterios de ingreso de personal, una de las encargadas de la admisión de nuevos extensionistas antes de la intervención militar señala que en las entrevistas “les preguntaba qué entendían por mejorar la situación rural de la región. Yo lo tenía bastante en cuenta en la selección, *no era un perfil técnico*” (ex supervisora de Extensión, entrevista, 04-09-2011). También la articulación entre investigación y extensión fue modificándose. La interconexión vinculada al relevamiento de las condiciones de arrendamientos y tenencias, y a la realización de encuestas y censos trabajada en forma conjunta tendió a disminuir, mientras que temáticamente los enfoques “productivistas” confluyeron, al consolidarse un discurso ligado a la “eficiencia”. Estas transformaciones, lejos de constituir un proceso aislado a la situación del organismo puertas adentro, se vincularon a la reorganización del espacio rural y a la progresiva mercantilización de las actividades científicas y tecnológicas orientadas al sector.

## **5. Conclusiones: (re)apropiación privada de la extensión y despoblamiento rural**

Las tareas de extensión rural encaradas por el INTA atravesaron distintas etapas, en las que la realización de un proceso educacional, cuya unidad social básica era la familia rural, tuvo un lugar destacado. La prerrogativa de modificar la “mentalidad” del productor agropecuario estuvo atravesada, simultáneamente, por una visión verticalista imbuida de la dicotomía modernización *versus* atraso, como por diversas estrategias de inserción que fueron generando un reconocimiento de los extensionistas en las comunidades rurales.

Las estrategias de acción comunitaria del INTA se desarrollaron bajo el lema del trabajo con “la familia rural”. Esta estrategia de “extensión educativa” tuvo un doble filo. Por un lado, acarrió una concepción -arraigada en los esquemas dominantes para la extensión a nivel internacional- que situó a la práctica como una tarea sumamente verticalista, y fuertemente unida al individualismo metodológico, donde lo fundamental era “convertir” al productor en un “agente racional” y eficiente. Por otro lado, y en el contacto con la realidad latinoamericana en general y argentina en particular, este vínculo posibilitó el ensayo de nuevas experiencias. Asimismo, aún con sus limitaciones, la presencia territorial de los agentes de extensión alcanzó un lugar dentro

de las comunidades, que sirvió luego de plataforma para estas revisiones. Así como el Estado movilizó a los técnicos a través del INTA, al mismo tiempo, estos fueron generando aproximaciones diversas -en cuanto a los enfoques y tareas impulsadas- de contacto con la población.

A menudo desbordando el cauce institucional, la figura del extensionista del INTA se convirtió, en determinadas situaciones, en un vehículo para el replanteo de las condiciones de vida de la población implicada y mantuvo una vinculación -pese a la histórica disociación entre ambas actividades- con los debates que por entonces cruzaban a la investigación agropecuaria. En este sentido, durante la década de 1970, la visión de cuño culturalista y la vigencia del enfoque estructuralista fueron reorientados bajo otras estrategias de extensión que priorizaron nuevas formas de contacto con la población rural. También tuvo un lugar la disputa en torno a para qué y para quién, conectada a otros debates sobre la realidad latinoamericana. Su desarrollo no fue lineal ni, mucho menos, homogéneo. Encontró resistencias internas y externas, limitaciones económicas y políticas asociadas a los vaivenes de la coyuntura nacional y a los marcos de acción posible dentro de las políticas planteadas, también en debate, para el agro.

La intervención militar iniciada con la dictadura afectó la orientación de la actividad. La reorganización de sus funciones implicó el descabezamiento de parte de sus directivos, cesantías y reubicación extensionistas, el abandono del trabajo con las juventudes rurales y la interrupción de la única actividad del organismo dirigida a trabajadores rurales. Se promovió un perfil de la extensión dedicado a la promoción de tecnología entre agricultores de nivel empresarial, que transformó su inserción territorial y apuntaló las orientaciones pre-existencias de asistencia técnica que no implicaban un debate en torno a problemas nodales del sector, tales como el acceso a la tierra.

Esta realineación fue simultánea a las profundas transformaciones del espacio rural que, alineadas con los cambios económicos y socio-políticos significativos del período, se caracterizaron por un constante incremento de la emigración rural a nivel local y regional (Katz, 2012). Junto a los cambios en las estrategias de contacto, ¿cuál fue la situación de los contenidos que desde la investigación se proponían en el INTA para los estudios sociales? Su estudio es objeto del próximo capítulo.

## **CAPÍTULO IV**

### **(Agendas en disputa 2)**

#### **Economía y sociología rural en debate: de la “tranquera para afuera” a la fragmentación del conocimiento**

##### **1. Resumen**

Este capítulo aborda el estudio de las agendas de investigación del INTA en Economía agraria y Sociología rural para el período 1973-1976 y el efecto de la intervención militar del organismo (1976-1983) en estas áreas de investigación. A partir de cuatro apartados se reconstruye la trayectoria de investigación del organismo, los contenidos, enfoques y principales problemas involucrados, y su relación con el entramado socio-político y económico. El primer apartado repone sintéticamente los orígenes de las investigaciones y el perfil que configuró en un inicio las tareas del organismo. El segundo, analiza las transformaciones registradas en los estudios socio-económicos en los años previos a la última dictadura cívico-militar y problematiza la existencia de agendas en disputa. El tercero, aborda el estudio de una experiencia de formación de posgrado desarrollada en el INTA desde 1968 hasta su clausura a partir de la intervención militar del Instituto en 1976, la Escuela para Graduados en Ciencias Agropecuarias. Finalmente, el cuarto explora los efectos de la intervención en los contenidos y destinatarios de las investigaciones. Las conclusiones puntualizan la existencia de una reorientación de la agenda de trabajo del INTA en estas áreas, e introducen el estudio de otras actividades de investigación del organismo, que son objeto del próximo capítulo.

## CAPÍTULO IV

### **Economía y sociología rural en debate: de la “tranquera para afuera” a la fragmentación del conocimiento**

*“Hasta ese momento en el INTA se había estado trabajando solamente de la tranquera para adentro....”*

(Economista del INTA, entrevista, 11-11-2009)

#### **1.1. El origen de los estudios socio-económicos del INTA: enfoques importados y paisaje nacional**

Los comienzos de los estudios del INTA en economía agraria y sociología rural estuvieron signados, en la década de 1960, por la influencia de enfoques de origen estadounidense dominantes en ambas disciplinas. Esta situación estaba estrechamente ligada, además de al propio desarrollo disciplinar, al peso que el modelo de extensión rural de los Estados Unidos había ejercido como referente institucional en la creación del INTA. Como había sucedido en el área de extensión, los intelectuales de la modernización -en especial los exponentes de la sociología rural norteamericana- tuvieron una fuerte impronta en la orientación de los estudios sociales del INTA. El modelo neoclásico fue también un componente significativo del perfil de las investigaciones en Economía.

Durante los primeros años de vida del organismo se organizaron diversos cursos de formación en economía agraria, en especial en algunas de sus estaciones experimentales. Una de las unidades que concentró la actividad fue la estación experimental de Pergamino, donde en 1956 se desarrolló el primer Curso Internacional de Administración Rural, patrocinado por la Organización de Estados Americanos (OEA). También la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación (FAO) estableció planes de cooperación con el INTA, a través de los que técnicos del Instituto fueron capacitados en los métodos de análisis para la administración de los establecimientos rurales, estudios de productividad y rentabilidad

(Pizarro, 1988)<sup>179</sup>. En 1958 se llevó a cabo el primer seminario, Introducción Teórica a los Principios y Métodos de la Administración Rural. Como indicaba el título, y al igual que en el conjunto de los estudios económicos que serían impulsados por el INTA, el objetivo era claro: propiciar el conocimiento de la administración de la hacienda rural. Según reseña un investigador del área, “El objetivo era habituar y capacitar a los productores para el ejercicio propio del análisis económico de sus empresas y la planificación anual de sus actividades empresariales según parámetros de costos y precios de los mercados actualizados” (Pena, 2003). Los resultados económicos de las empresas rurales y su estudio en base a criterios de mercado eran tópicos dominantes. La capacitación sumó, junto a los cursos de administración rural, estudios de comercialización que motivaron convenios con universidades extranjeras. A mediados de la década de 1960, entre otras instancias de colaboración, el INTA solicitó a Texas A&M University la realización de un curso, y en 1963 dos investigadores de la Universidad de Iowa dictaron en la experimental de Pergamino el primer curso en Economía agrícola de posgrado, destinado a investigadores y extensionistas provenientes de distintas unidades del INTA<sup>180</sup>.

En 1965 se organizó formalmente el Programa Nacional de Estudios Económico-Sociales del INTA. El planteo inicial fue que en cada estación experimental funcionaran equipos de economistas especializados en administración rural y comercialización agropecuaria. El primer campo de estudios fue el que concentró mayores esfuerzos y profesionales. Asimismo, el diseño concebía una estrecha vinculación con el rol asignado a los extensionistas, que impulsarían la organización de grupos de productores o “clubes de gestión” de sus establecimientos (Penna, 2003). De esta forma, los trabajos se concentraron en estudios de Comercialización, Administración y Economía de la producción. Según una reseña del INTA, la principal finalidad de los trabajos se orientaba a ayudar al productor agropecuario “en su toma de decisiones, sobre la forma más conveniente de emplear y combinar sus recursos productivos (tierra, capital y trabajo) con vistas a tener los máximos ingresos sin

---

<sup>179</sup> Este programa estuvo a cargo del Dr. Walter A. Schaefer Kehnert, proveniente de la Universidad de Gottingen (Alemania), quien tuvo a su cargo el entrenamiento de doce técnicos de distintas estaciones experimentales del INTA entre diciembre de 1957 y junio de 1959 (Pizarro, 1988; Schaefer, 1959).

<sup>180</sup> La actividad contó con la financiación de la *Agency for International Development* (AID) de los Estados Unidos, los destinatarios fueron diecisiete integrantes del INTA de distintas estaciones experimentales y agencias de extensión rural de todo el país. A partir de esta actividad se intentó consolidar la presencia de economistas en las distintas unidades del INTA. Véase Pizarro (1988).

resentir la productividad de la tierra” (Pizarro, 1989: 6). Finalmente, en 1969 la Secretaría de Agricultura y Ganadería de la Nación y la Secretaría del Consejo Nacional de Desarrollo (CONADE) establecen en forma conjunta las áreas de competencia, en materia de Economía Agrícola, correspondientes a dichos organismos y al INTA. En consonancia con la orientación que venía desplegándose en el Instituto, se especificaba que el INTA debía circunscribir su accionar en el marco de la economía de la producción y la administración Rural a estudios de empresas, evaluaciones económicas de las investigaciones tecnológicas, cálculos de rentabilidad y grado de eficiencia de las explotaciones agropecuarias.

La trayectoria de los estudios de Sociología rural en el INTA no estuvo, por su parte, dissociada de la trayectoria seguida en términos más generales por la disciplina. El enfoque predominante surgió signado por una visión culturalista, que concentró sus principales esfuerzos en el estudio de los comportamientos de la población rural y en su “resistencia” a la adopción de las tecnologías. Esta mirada, que identificó en el campo el lugar del atraso en contraste con el progreso urbano, del que los nuevos conocimientos científicos y técnicos eran expresión, también atravesó -como señalamos- la práctica de la extensión rural. La escuela norteamericana, liderada por los estudios de Everett M. Rogers, estaba centrando su atención en la innovación tecnológica en agricultura como temática central<sup>181</sup>. Su obra clásica, *Difusión de Innovaciones*, publicada originalmente en 1962, estableció una línea de investigación que enfatizó el rol de los “líderes” en la difusión de innovaciones (Navarro, 2005). Cabe aclarar que Rogers y muchos de sus seguidores fueron modificando postulados y estrategias a medida que acumulaban experiencias de análisis en distintos territorios (Navarro, 2005). La evolución natural hacia el desarrollo era uno de los presupuestos de las teorías de la modernización (Galafassi, 2006), en las que el estudio de los comportamientos vinculados a la adopción o resistencia a las innovaciones técnicas constituía un tópico frecuente. En un marco dado por la crisis del esquema de sustitución de importaciones, que alimentaba la prerrogativa de incrementar los rendimientos agropecuarios.

---

<sup>181</sup> Estudios posteriores comenzaron a poner el acento en los efectos perjudiciales sufridos por los agricultores menos capitalizados, los fenómenos de emigración de población rural y a cuestionar la visión paternalista presente en algunas de las orientaciones previas (Jefferman y Henkins, 1972).



A diferencia del peso que lograron los estudios económicos, la incorporación en el INTA de una agenda centrada en los estudios sociales en ligazón con la problemática rural fue más bien marginal y asistemática (Cascardo y Pizarro, 2002). Desde sus inicios, los estudios en este campo estuvieron estrechamente ligados a la actividad de los extensionistas, en tanto la información relevada sobre los grupos sociales rurales y sus actividades era suministrada al servicio de extensión, con el objetivo de resolver problemáticas ligadas a la vida de las poblaciones rurales (Arroyo, 1961). Los tópicos analizados incluían, junto al estudio de los niveles de vida, trabajos relacionados con “liderazgo; conducta de los productores rurales como miembros de cooperativas agropecuarias, procesos de difusión y adopción de prácticas agrícolas” (Pizarro, 1989: 9). En menor medida, también comenzaban a realizarse estudios sobre la estructura agraria, la tenencia y distribución de la tierra, el empleo y distribución de la mano de obra rural. En especial, en aquellas regiones en las que la explotación de la tierra configuraba problemáticas específicas asociadas a la actividad agrícola y/o ganadera, los estudios se concentraron en indagar en las dinámicas locales. Así, por ejemplo, en la región noroeste el cultivo de caña de azúcar motivó una serie de estudios sobre el minifundio cañero, su origen y trayectoria (Bilbao, 1972; INTA, 1969).

En 1969 había comenzado a funcionar una escuela de posgrado en el Centro Nacional de Investigaciones Agropecuarias de Castelar, que constituía la primera experiencia de formación de graduados realizada dentro del INTA. Además del contenido de las orientaciones, en donde figuraban una maestría en Extensión Rural y otra en Economía agraria, el impulso a los estudios socio-económicos tuvo también un núcleo significativo en Castelar, debido al rol protagónico que comenzó a tomar el Departamento de Economía del Centro. ¿Cuál era el contenido de las agendas de trabajo y qué tensiones expresaba?

## **1.2. El equipo de Economía de Castelar y el replanteo de la mirada del INTA sobre la estructura agraria (1973-1976)**

El 24 de junio de 1974, la Dirección Nacional del INTA convocó a una reunión de reprogramación del Programa de Estudios Económicos y Sociales, en el que se enmarcaban las actividades de investigación de los distintos equipos de economía y

sociología rural del instituto. El objetivo era coordinar acciones entre los equipos regionales, debatir los contenidos de investigación y generar una agenda de trabajo para el área. El lugar de encuentro fue el Centro Nacional de Investigaciones de INTA en Castelar. En esa reunión, los miembros del Departamento de Economía de Castelar presentaron un escrito para ser discutido con el conjunto de los economistas y sociólogos de la institución. A partir del debate del contenido de las investigaciones con los profesionales del área de las distintas unidades del país y de un diagnóstico de las principales problemáticas del sector agropecuario argentino, se estableció una orientación programática para el accionar del INTA.

Los fundamentos expuestos en el documento evidenciaban la orientación que buscaban del organismo. Mediante un recorrido histórico por las etapas de la inserción mundial del sector agropecuario nacional, identificaban los principales problemas de éste: crecimiento exógeno y desequilibrio regional (INTA, 1974). En su análisis, la creación del organismo era ubicada en un contexto de apertura de la economía a capitales y tecnologías extranjeras y “pauperización de pequeños y medianos productores y de asalariados rurales” (INTA, 1974: 1). Las funciones de investigación y extensión rural realizadas en esa primera fase del INTA eran evaluadas negativamente, en sintonía con la ausencia de una política agropecuaria orgánica que definiera con claridad la inserción y el rol del organismo en el sector.

A partir de una caracterización y valorización de los distintos proyectos políticos y económicos impulsados en las distintas etapas históricas del país, perfilaban un plan de investigación que señalaba los problemas en los que se hacía necesaria la intervención de la institución. Remarcaban que el objetivo final de la investigación no podía fijarse a partir de intereses disciplinares ni parciales, ya que debía “contribuir al cuestionamiento y transformación de no pocas relaciones económico-sociales injustas” (INTA, 1974:5). Junto a distintos discursos cercanos a la retórica que el gobierno peronista empleaba en los planteos para el sector y alineándose con sus objetivos, también remarcaban que los mecanismos tradicionales de políticas agropecuarias implementados (control de precios, impositivos) “representan condiciones necesarias pero no suficientes para resolver los problemas de desocupación, extensión de sectores de subsistencia y ampliación de la brecha regional” (INTA, 1974: 4). En resumen, presentaban una visión crítica de las capacidades previas del INTA en el área y definían

la agenda de los estudios económicos y sociales a partir de un diagnóstico estructural. En este diagnóstico del sector remarcaban “como un rasgo central de nuestro desarrollo la dependencia de nuestro país de los centros de decisión política y económica localizados en los países hegemónicos” (INTA, 1974: 40).

Estos planteos entroncaban con el impulso que por entonces estaba recibiendo entre buena parte de los intelectuales latinoamericanos el enfoque denominado “Teoría de la Dependencia”. Este cuerpo teórico se oponía a las explicaciones dominantes del desarrollo y la modernización lineal, de cuño funcionalista y liberal. Marcaba la necesidad de entender al subdesarrollo no como un proceso endógeno, sino vinculado a la explotación ejercida desde núcleos geopolíticos estratégicos (internacionales, nacionales o regionales), que basan su propia acumulación en la apropiación de recursos de otras áreas periféricas (Cardoso y Faletto, 1969)<sup>182</sup>. En Argentina, bajo el contexto político nacional vinculado al retorno del peronismo al gobierno, estos planteos también se articulaban con otras consignas bajo lemas como “Liberación o dependencia”. Las definiciones del equipo del INTA, fuertemente impregnadas de la alta difusión que para el momento ostentaba la Teoría de la Dependencia en sus distintas vertientes, explicitaban que:

Con el concepto de dependencia se quiere señalar que el crecimiento económico del país se produjo en función de impulsos externos,

---

<sup>182</sup> Cardoso y Faletto (1969) señalaban cómo la crisis regional de los esquemas de sustitución de importaciones habían puesto en jaque las teorías del desarrollo y en evidencia la incapacidad del dualismo modernismo/tradicionalismo como clave explicativa. La necesidad de comprender el subdesarrollo en clave estructural era argumentado indicando que “la situación de subdesarrollo se produjo históricamente cuando la expansión del capitalismo comercial y luego del capitalismo industrial vinculó a un mismo mercado a economías que, además de presentar grados diversos de diferenciación del sistema productivo, pasaron a ocupar distintas posiciones en la estructura global del sistema capitalista” (Cardoso y Faletto, 1969: 23). En Argentina, la publicación *Cuadernos de Pasado y Presente* dedicó un número al debate sobre los modos de producción en América Latina. Carlos Sempat Assadourian, Horacio Ciafardini, Juan Carlos Garavaglia, Ernesto Laclau y Ciro Flamarión Santana Cardoso debatieron desde sus páginas la existencia de modos de producción (esclavismo, feudalismo, capitalismo) en la región. A partir de una revisión crítica de la tesis de Andre Gunder Frank, señalaba Laclau (1973: 41, énfasis propio) “(...) si queremos mostrar que *también en esta época el desarrollo genera el subdesarrollo* lo que debemos probar es que el mantenimiento de relaciones de producción precapitalistas en las áreas periféricas es una condición inherente al proceso de acumulación en los países centrales”. En algunos casos, planteos provenientes del materialismo histórico acercaban posiciones con las teorías dependentistas (Marini, 1973). La Teoría de la Dependencia estuvo posteriormente conectada a la Teoría del Sistema Mundial, y ya durante el influjo del neoliberalismo acotó notablemente su gravitación al tiempo que generó lecturas “post dependentistas”. Una crítica desde el marxismo a este cuerpo teórico puede verse en O’Brien (2007). Una revisión, en Dos Santos (1998).

basados en los intereses y necesidades de expansión política y económica de los países hegemónicos (INTA, 1974: 5).

Esta caracterización era presentada en función de identificar las consecuencias que este proceso había generado en la estructura agraria argentina. En este sentido, el desequilibrio regional era señalado como el factor estructural prevaleciente de esta configuración, al que se debía prestar una atención prioritaria a través de los planes de acción del INTA.

Por otro lado, la integración inter-disciplinar en relación al conjunto de las actividades del INTA también era motivo de reflexión. Pronosticando un crecimiento del rol de las ciencias sociales dentro del organismo, la propuesta consistía en asegurar una interacción permanente con el conjunto de las disciplinas, en especial con aquellas involucradas directamente en su accionar (Agronomía, Veterinaria, Biología, Ecología, etc.). En este sentido, se enfatizaba la necesidad de establecer una visión integral, en donde las tareas científico-técnicas no se divorciaran de la realidad social. La fragmentación y el parcelamiento del conocimiento eran rechazados en función de la propia práctica y de la conceptualización que realizaban del trabajo científico. Entendían que si bien la propia naturaleza de sus tareas de investigación, “preponderantemente empírica”, los llevaba por problemas metodológicos a estudiar “aspectos aislados de la realidad”, como en el caso de los “problemas típicos de micro-economía”, esa restricción debía enfrentarse

(...) con plena conciencia de cuál es la inserción de ese *micro-problema* en el contexto más amplio de la realidad socioeconómica, sin el cual ese *conocimiento parcial* pierde sentido y puede carecer en consecuencia de contenido relevante (INTA, 1974:18, énfasis propio).

Estas definiciones se incluían en una revisión crítica del desarrollo de las ciencias sociales en el país en general, y de los estudios en Economía agraria y Sociología rural en particular. En línea con la mirada dependentista presente en el análisis de la evolución del sector agropecuario, señalaban que en los rasgos del desarrollo de estas disciplinas en el país se evidenciaba “la dependencia cultural, científica y tecnológica” (INTA, 1974: 39). Los elementos destacados eran la

asimilación acrítica de teorías, metodologías y prácticas de investigación originadas en el exterior, el “parcelamiento de la realidad y del conocimiento” (INTA, 1974: 40), la “extrapolación mecanicista de las ciencias naturales a las sociales”, y la “concepción acumulativa lineal del desarrollo de la ciencia” (INTA, 1974: 41). Estas conceptualizaciones se vinculaban a otros trabajos elaborados previamente, en particular en un documento de circulación interna sobre política tecnológica y problemática agropecuaria se mencionaba críticamente que “una parte de la comunidad científica considera que todo trabajo científico, base del progreso tecnológico, es siempre bueno en sí mismo y no puede ser juzgado en términos ideológicos” (Piñeiro, Martínez y Armelín, 1973: 3). Sobre esta visión, afirmaban:

Esta concepción de la *neutralidad del progreso tecnológico*, cuando el mismo está referido a la estructura productiva, es a nuestro juicio totalmente indefendible porque la generación de un excedente económico a partir del progreso tecnológico está acompañada, en nuestro sistema económico, por una *distinta capacidad de apropiación del mismo por parte de los distintos grupos sociales* (Piñeiro, Martínez y Armelín, 1973: 3, énfasis propio).

También coincidían en señalar el fenómeno de dependencia cultural reflejado en las pautas de evaluación científica, en las que “la excelencia académica establecida por las revistas de aceptación internacional sigue las pautas del trabajo científico establecidas en los países desarrollados” (Piñeiro, Martínez y Armelín, 1973: 7).

En particular para el campo de la Economía agraria, se reconocían sus primeros antecedentes locales como disciplina especializada en el ámbito universitario en la década de 1940, ligada a una concepción de economía de la producción, y a los estudios económicos sobre productos como una actividad de rutina en la esfera de la administración pública vinculada al sector agropecuario (INTA, 1974). En cuanto a los estudios en Sociología rural, fuera de la difusión del estudio de Taylor, *Rural Life in Argentine* por parte del Ministerio de Agricultura en 1940 y de la realización por éste de algunos trabajos descriptivos, “con una óptica de bienestar de la población rural” (INTA; 1974: 41), se destacaba un desarrollo disciplinar tardío y acotado. En ambas disciplinas, la creación del INTA era visto como un cambio cualitativo importante.

Según afirmaban, “con su creación por primera vez se lleva a cabo un esfuerzo consistente para aplicar las actividades de investigación económico-social al sector agropecuario” (INTA, 1974: 44). Sin embargo, mencionaban que el área había crecido excesivamente parcelada disciplinarmente y desconociendo temáticas centrales del sector.

Sobre la trayectoria previa del INTA en economía agraria, alertaban acerca de la existencia de estudios de las unidades de producción y de los productos agropecuarios en desconexión con problemáticas fundamentales propias de la dinámica del sector agropecuario local. En cuanto a las actividades en sociología rural, advertían el peso de los enfoques que analizaban los obstáculos a la adopción del cambio tecnológico únicamente en términos culturales, acotados a una dimensión psicosocial asociada con la “sociología de la modernización” (INTA, 1974:45). En este sentido, los estudios socio-económicos efectuados desde Castelar implicaban una renovación. Junto al contenido de las investigaciones, el Departamento de Economía de Castelar también tenía una función estratégica por el rol que cumplía dentro del esquema del INTA<sup>183</sup>. En este sentido, realizaban un balance crítico de los enfoques dominantes. ¿Cuál era, entonces, la agenda de trabajo propuesta para el área?

Como mencionamos, era en la situación dependiente del país en materia agropecuaria y en función de transformaciones económicas y sociales que planteaban la agenda de trabajo para el área. Cinco líneas de investigación, vinculadas entre sí, conformaban el Programa de Investigaciones. En “Economía y Política del Cambio Tecnológico”, el eje estaba dado por “la brecha creciente entre los beneficios potenciales del progreso tecnológico y sus adelantos concretos (beneficios no socializados)” (INTA, 1974: 32). Los objetivos consistían en evaluar los costos “sociales y privados” de las nuevas tecnologías, describir el proceso de generación de innovaciones agropecuarias y proponer una estrategia de desarrollo tecnológico para el sector. “Modelos Regionales de Planeamiento” tenía por objetivo final integrar los diferentes modelos regionales en un modelo nacional de planeamiento agropecuario,

---

<sup>183</sup> Entre sus funciones tenía a su cargo el apoyo institucional a las estaciones experimentales, (a través de la recepción de requerimientos de las experimentales y de la coordinación y participación en proyectos de investigación), a los Centros de Investigaciones de Castelar (mediante la participación en equipos interdisciplinarios), a la dirección nacional (asesoramiento y realización de proyectos de investigación de carácter nacional) y a la Escuela para Graduados en Ciencias Agropecuarias, mediante la capacitación y provisión de docentes y la formulación de parte de los planes de estudio. Véase INTA (1974).

que considerara las dinámicas de las distintas economías regionales. “Unidades de Producción” estaba destinada a armar una tipología de las mismas. Por último, “Análisis de la Estructura y Funcionamiento del subsistema de comercialización” y “Población, Ingreso, Empleo y Estructura Agraria” planteaban analizar algunos componentes de la estructura agropecuaria. En especial, el régimen de propiedad de los recursos naturales consistente en “sistemas de tenencia, concentración de la propiedad, *usos de tales recursos y efectos sociales de esta distribución*” (INTA, 1974: 36, énfasis propio). A partir de este análisis, identificaban su efecto en la población rural. Para esto, proponían un relevamiento de las migraciones internas, los desequilibrios regionales y de “Las situaciones en las que se encuentra la fuerza de trabajo en el sector (familiar, asalariada, asalariados transitorios, minifundistas, etc.)” (INTA, 1974: 37). Esta reformulación de las prioridades y objetos de la agenda de investigación del área había comenzado a explicitarse previamente, en especial a partir de la reorganización institucional que el INTA experimentaba desde 1973. Nos referiremos a continuación a una de las propuestas, similar a otras elaboradas en este período, por condensar buena parte de los problemas y enfoques presentes en el abordaje económico y social.

En el marco de una regionalización de las actividades del Instituto, el Departamento de Economía de Castelar fue convocado a generar diversos insumos (diagnósticos, propuestas de abordajes, análisis de políticas tecnológicas en las regiones). En noviembre de 1973, en un encuentro de profesionales del Instituto del área Chaco-Formosa, los economistas de Castelar presentaron un documento centrado en la política institucional del INTA en el NEA, en donde insertaban el análisis de la problemática regional en las prioridades sectoriales y en el rol que debía tener el INTA en estas problemáticas (Martínez, Trigo y Costa, 1973). Desde la introducción, se aclaraba que las reflexiones se enmarcaban en una situación particular del organismo, en el que éste se encontraba desde 1973 “embarcado en una tarea de replanteo de sus actividades” (Martínez, Trigo y Costa, 1973:1). En este replanteo, identificado con un mayor compromiso de la institución con el desarrollo social del sector, la cuestión regional adquiriría un nuevo peso. Dentro de una mirada crítica de la raigambre de la estructura agraria pampeana, en cuya raíz se encontraba el latifundio y la gran propiedad colonial apropiada en forma previa a su puesta en producción, y de los problemas derivados de la organización histórica de la propiedad y explotación de la tierra, se

expresaba la necesidad de terminar con algunos errores analíticos presentes en el estudio del sector agropecuario. En especial, la extrapolación de criterios y medidas de política económica elaboradas para la región pampeana a otras regiones, y el análisis la región pampeana “como si fuera el sector agropecuario argentino” (Martínez, Trigo y Costa, 1973: 2). En este sentido, afirmaban que “cualquier aproximación a la realidad del sector agropecuario argentino debe -a nuestro juicio- plantear su problemática en función regional” (Martínez, Trigo y Costa, 1973: 3). El resto del diagnóstico, centrado en las especificidades de la región nordeste, identificaba las consecuencias que había dejado en la estructura regional la inserción argentina en el esquema de expansión imperialista a partir de la segunda mitad del siglo XIX. El énfasis estaba puesto en señalar cómo, a diferencia de la zona pampeana, la mayoría de las regiones permanecieron, a excepción de algunos rubros (como el descubrimiento de las propiedades tánicas del quebracho colorado), marginadas de la estructura agro-exportadora, caracterizada como “el proyecto dependiente” (Martínez, Trigo y Costa, 1973: 5). En la caracterización histórica, la etapa inaugurada con la crisis de 1929 y el proceso local de industrialización por sustitución de importaciones era señalada como un marco de inserción de las economías regionales. Este momento, sin embargo, se había configurado, según planteaban, bajo “el desarrollo de una relación de dependencia interna de las regiones marginales con respecto a la zona pampeana” como proveedoras de fuerza de trabajo y de materias primas (Martínez, Trigo y Costa, 1973:6). Finalmente, situaban después de 1955 (sin mencionar el derrocamiento de Perón, pero aludiendo al mismo) la crisis del esquema de inserción regional, con la consecuente descapitalización de medianos productores y pauperización de los pequeños. Este punto era también objeto de algunas de las tesis de maestría en curso en la Escuela para Graduados, a partir del estudio de distintos casos (Costa, 1973). Una de estas tesis tenía como objetivo, precisamente, registrar las características económico-sociales de los pequeños productores y sus familias en la región maicera, y determinar el nivel de superficie en hectáreas que definía un minifundio en dicha región (Torchelli, 1973).

Se destacaba también la expansión de firmas multinacionales a partir de 1966, y la consolidación de un proceso de concentración del aparato comercializador que vinculaba la región nordeste con la zona pampeana (Martínez, Trigo y Costa, 1973). A partir de este recorrido histórico y caracterización de las etapas del sector, identificaban



los problemas vigentes para 1973: desocupación, ampliación de sectores de subsistencia y deterioro constante del sector rural de menores ingresos. La declinante participación de la región en el Producto Bruto Nacional (PBI) era mostrado como síntesis de “una clara agudización del problema del desequilibrio regional argentino” (Martínez, Trigo y Costa, 1973: 7), excediendo el estudio de esta región en particular y señalando a este desequilibrio como problema fundamental del sector.

En el plano propositivo, planteaban la necesidad de una adecuación de la política tecnológica agropecuaria que permitiera crear herramientas tecnológicas acordes a distintos tipos de productores, en tanto -señalaban- “*no existe un paquete tecnológico único* que pueda ser utilizado por todos los tipos de empresas existentes en la región” (Martínez, Trigo y Costa, 1973: 9, énfasis propio). En este sentido, presentaban un diagnóstico crítico de los intentos de intervención estatal en el mercado. A través de referencias al accionar de la Junta Nacional de Granos y a las políticas de precios y crediticias vigentes, señalaban que los productores servían “en más de un caso como ‘pantalla’ para planteos que, en última instancia, no representan mejoría sino para los sectores agro-industriales que controlan las distintas etapas del proceso” (Martínez, Trigo y Costa, 1973: 13). Al mismo tiempo, identificaban a la política de tierras y colonización como el elemento central de largo plazo, capaz de establecer una verdadera transformación dentro de la reformulación de la política sectorial. Ésta no debía, en su planteo, “acelerar la mera incorporación de tierras al mercado, que en nada ha contribuido en el pasado a solucionar los problemas regionales”, sino que, explicitaban:

A nuestro juicio, la política de tierras y colonización debería, en primer lugar, reconocer que prácticamente la totalidad de las tierras aptas libres de monte se encuentran de una u otra forma ocupadas de hecho. Reconociendo esta situación, la estrategia de acción en esta materia pasaría por la discusión de dos orientaciones básicas de acuerdo a los sectores que va dirigida: a) explotaciones familiares y, b) sector minifundista (Martínez, Trigo y Costa, 1973: 13).

Dentro de las explotaciones familiares, planteaban que aunque las políticas se orientaran a afianzar la propiedad de la tierra, la inclusión de restricciones al dominio

debían apuntar a “evitar que la tarea de colonización resulte en una mera incorporación de tierras al mercado, y permita el arraigo efectivo del productor” (Martínez, Trigo y Costa, 1973: 14). Para el sector minifundista, se recomendaba la ejecución de “programas de transformación agraria, llegando incluso al apoyo por parte del Estado de formas no tradicionales (asociativas y/o estatales) de organización de la producción” (Martínez, Trigo y Costa, 1973: 14). Por otro lado, en función de un diagnóstico que identificaba al uso extensivo de las explotaciones y a la existencia de tierras improductivas como el mayor problema de la agricultura pampeana, se impulsaba para esta región la necesidad de contar con medidas que permitieran aumentar los volúmenes de producción y rendimiento. Este punto guardaba una estrecha relación con el rol que el sector estaba llamado a cumplir en la estructura económica. Históricamente, la importancia de la actividad agroexportadora se evidenciaba en los períodos de “cuello de botella” de los intentos de reconversión industrial, y este momento no era la excepción. En otras palabras, la acumulación de capital en Argentina continuaba teniendo como rasgo definitorio la transferencia de divisas desde el capital agrario (Iñigo Carrera, 1998). Como explicitaba el Plan Trienal, el incremento sostenido de la actividad agropecuaria constituía una condición necesaria tanto para la “redistribución”, como para impulsar la actividad industrial.

La provisión de esta información, es decir, el hecho de que los investigadores del área de Economía y Sociología rural del INTA tuvieran a su cargo la confección de diagnósticos de problemáticas regionales y estructurales del agro argentino, funcionaba tanto como insumo de las políticas agropecuarias como de orientador del plan de actividades del Instituto. Así, por ejemplo, en el caso de las explotaciones familiares, se planteaba que la política de colonización de tierras debía estar acompañada por estrategias de extensión rural dirigidas específicamente a esta franja de productores. Si bien algunas de las acciones a realizar involucraban actividades tradicionales del organismo, como el asesoramiento para la diversificación regional en base a criterios agro-económicos, otras poseían antecedentes aislados pero carecían de una trayectoria de acción sistemática del organismo. Éste era el caso, según planteaban los economistas del Centro de Castelar, del rol del INTA en materia de políticas de tierras y colonización, donde a pesar de contar con distintas capacidades institucionales no había tenido un rol destacado (Martínez, Trigo y Costa, 1973). En rigor, el INTA había sido

ya designado como un actor relevante en diversos planes de colonización llevados a cabo en el pasado, pero muchos de estos habían permanecido inconclusos o con un alcance limitado<sup>184</sup>. En este sentido, la definición del rol del INTA en las medidas surgidas del Acta de Compromiso Nacional también explicitaba algunas articulaciones entre sus tareas y las políticas sectoriales en curso. Así, se destacaba entre las principales líneas de acción llevadas adelante por el INTA la confección del mapa de suelos de la región pampeana y su colaboración con los de las demás provincias, información que, según se remarcaba, sería “de gran utilidad, entre otros usos, para el perfeccionamiento de la aplicación del impuesto a la renta normal y potencial de la tierra, próximo a establecerse” (SAyG, INTA, 1973: 1). Junto a programas de manejo y conservación de recursos naturales, búsqueda de rendimientos más elevados en las cosechas, asistencia técnica en planes nacionales de desarrollo en áreas de regadío con el objeto de evitar la migración rural y estudios de comercialización, se puntualizaba dentro de las tareas del INTA el auspicio de la formación de cooperativas de productores para la comercialización y de cooperativas de producción (SAyG, INTA, 1973).

Los debates también incluían el rol del INTA en medidas como la revisión de las leyes de arrendamiento y la elaboración del entonces en curso proyecto de Ley Agraria<sup>185</sup>. Según un investigador del área, “trabajaban fundamentalmente los de Economía haciendo números y los de Suelos haciendo mapas” (ex investigador del área de Economía del INTA, entrevista, 2010). La articulación entre los distintos equipos regionales de Economía del INTA y la Secretaría de Agricultura y Ganadería también estaba siendo entablada a través de un Programa de Investigación que agrupaba a investigadores de todo el país. Se trataba del Sistema de Información para el Plan Nacional de Abastecimiento de productos e insumos de origen agropecuario (SIPNA), que había surgido en el Centro de Castelar en 1974 y era producto de un acuerdo entre

---

<sup>184</sup> Por ejemplo, en las políticas impulsadas en este sentido durante los primeros gobiernos peronistas. Un análisis de los alcances y limitaciones de estas iniciativas, con alguna referencia al rol del INTA y al de otras dependencias (el Consejo Agrario Nacional, el Banco de la Nación Argentina), puede verse en Balsa (2013).

<sup>185</sup> La edición del proyecto de Ley por la estación experimental de Famaillá del INTA para su circulación interna también denota la presencia de la temática al interior del instituto. Una revisión del rol que se le otorgaba como base científico-técnica necesaria para la concreción de las medidas propuestas (sobre todo en lo referido a las investigaciones en suelos) y como centralizador del contacto con las cooperativas agropecuarias mediante los extensionistas, puede verse en el Capítulo I, junto al estudio de las repercusiones en la prensa en torno a esta articulación y a la medida.

la Secretaría de Comercio, la Secretaría de Agricultura y Ganadería y el INTA. Estaba financiado por el Ministerio de Economía, y tenía por objetivo diseñar e implementar un sistema de relevamiento de información referente a producción, costos y comercialización de cultivos industriales, frutas y hortalizas de las economías extra-pampeanas en función de los requerimientos de ambas Secretarías de Estado. El INTA profundizaría el conocimiento institucional “como prerrequisito para cualquier intento de planeamiento del sector” (SIPNA, 1974: 2). El objetivo final se vinculaba a orientar la política sectorial de corto plazo y contribuir a la fijación de precios. Si bien los contenidos del SIPNA no planteaban grandes modificaciones con respecto al abordaje de la problemática agropecuaria, sus lineamientos fueron novedosos en tanto diferenciaban productores primarios según tamaño y grado de integración con la comercialización, distinguiendo productores independientes, productores que integraban alguna etapa posterior a la producción, productores completamente integrados, productores cooperativizados, y calculando los costos de producción por tipo de productores. Esta distinción era realizada a partir de criterios socio-económicos, fundamentalmente en relación al acceso a la tierra (extensión y situación de la tenencia), uso de mano de obra (relación entre mano de obra familiar y mano de obra asalariada transitoria y permanente), acceso a equipamiento e inserción en el mercado (SIPNA, 1974). En este sentido, según afirma una investigadora ex integrante del Programa, era una novedad porque los servicios de economía “hasta el momento se ocupaban sólo de los costos de producción de los distintos productos, sin considerar lo que ocurría tranqueras para afuera”. Agrega la misma investigadora que este enfoque se distanciaba de la línea tradicional del INTA en tanto “Hasta ese momento en el INTA *se había estado trabajando solamente de la tranquera para adentro*, los costos de producción, la rentabilidad del productor, etc.” (Entrevista, 11-11-2009, énfasis propio).

Una vez finalizado el relevamiento de los tipos de productores involucrados dentro de cada rubro, el objetivo era desarrollar “un conjunto diferenciado de relaciones tecnológicas para cada uno de los sistemas de producción considerados” (SIPNA, 1974: 12). La producción de tecnología agropecuaria adquiriría, de este modo, una planificación situada a partir de las condiciones de producción de las áreas geográficas y los cultivos involucrados. En otras palabras, se planteaba la necesidad de generar desarrollos tecnológicos acordes a los distintos tipos de productores detectados, siendo el

relevamiento que identificaba los segmentos en la estructura agraria el primer paso necesario para la producción de la tecnología.

La responsabilidad de llevar adelante el Programa fue del Departamento de Economía del CNIA de INTA Castelar, que también conducía la Maestría en Economía agraria dentro de una formación de posgrado, la Escuela para Graduados en Ciencias Agropecuarias. Mientras que el equipo central estaba radicado en el Centro de Castelar, el resto de los equipos técnicos de economía y sociología rural se distribuían a lo largo del país a partir de una localización regional. En la región NEA intervenía la estación experimental de Corrientes, la de Roque S. Peña (Chaco) y las agencias de extensión rural de Laguna Blanca (Formosa), San Martín (Chaco) y Goya (Corrientes). En la región NOA, las estaciones experimentales de Famallá (Tucumán) y Salta. En la región Patagonia, las estaciones experimentales de San Carlos de Bariloche y Alto Valle (Río Negro). En la “región centro”, la estación experimental Manfredi (Córdoba). La región pampeana estaba cubierta mediante el accionar de las estaciones experimentales de Balcarce (Buenos Aires), Concepción del Uruguay, Concordia y Paraná (Entre Ríos). Finalmente, la región de Cuyo por las estaciones experimentales de Mendoza y San Juan. El Programa involucraba la participación de 60 técnicos bajo la dirección del director del Departamento de Economía de Castelar<sup>186</sup>. Del total, 57 pertenecían a la planta permanente del INTA, dos eran adscriptos al proyecto con sede en universidades nacionales (la Universidad Nacional de Rosario y la UBA), y uno pertenecía a la Escuela para Graduados (SIPNA, 1974). Los principales destinatarios eran los hacedores de las políticas, ya que proveía a la Secretaría de Agricultura la información necesaria como para implementar una política activa de control de precios.

Entre otras tareas en las que el INTA avanzaba como articulador de las iniciativas sectoriales en curso, el área de Economía de la estación experimental Pergamino -una de las de más larga trayectoria y fuerte gravitación- tuvo a su cargo la evaluación del Plan Trienal y uno de sus subprogramas. El informe comenzaba aclarando que

El Plan fijado para el período comprendido entre 1974 y 1977  
constituye la expresión económica y social de un programa político y

---

<sup>186</sup> El ingeniero agrónomo Juan Carlos Martínez, jefe a cargo del Departamento de Economía y profesor de la Escuela Para Graduados.

forma parte de un proyecto de plan de gobierno. Representa como tal, la etapa inicial de un proceso de más largo plazo que persigue la construcción de una sociedad libre, justa y soberana, donde el hombre se realice dentro de una comunidad que realiza (INTA, 1974b:1).

Explicitaba, como en otros discursos, la filiación política al gobierno peronista desde la dirección del INTA. Corría el mes de diciembre de 1974. Para ese entonces, además de los enraizados conflictos subyacentes dentro del INTA detrás de este aparente alineamiento, la muerte de Perón ya había explicitado las fisuras que venían anunciándose al interior del movimiento, lideradas por el avance de los sectores más conservadores. La convulsionada escena nacional no estuvo ausente en el espacio del INTA, ni en las reivindicaciones gremiales sostenidas dentro del organismo, ni en las discusiones sostenidas en materia de política tecnológica, ni en los planes de trabajo. Las consignas asentadas en la “autonomía nacional” también reservaban, al menos en el plano discursivo, un rol central al complejo científico-tecnológico y en particular a la producción de tecnología para el sector agropecuario, colocado una vez más en el centro de escena económica nacional. ¿Cómo era evaluado por el INTA el rol atribuido al sector agropecuario en el Plan Trienal? ¿Qué distancias existieron entre las proclamas y la efectiva orientación de las actividades? ¿Qué rupturas y qué continuidades se registraron para ese momento en el accionar del INTA?

El Plan preveía una expansión de la producción, asentada en un crecimiento de la inversión, en un aumento de la productividad del capital instalado y en la duplicación del volumen de las exportaciones de mercancías entre 1973 y 1977. El papel históricamente destacado del sector agropecuario en la estructura productiva local era señalado recordando que para entonces ocupaba el 14,9% del total de la fuerza de trabajo asalariada del país, contribuía con un 15% en la integración del PBI y representaba de un 90 a 95% del valor total de las exportaciones (INTA, 1974b: 3). Pese a esta centralidad en el mercado externo, se destacaba positivamente la transformación operada en los últimos años, según la cual el destino de la producción agropecuaria había sido orientado hacia el consumo interno. Así, se afirmaba que el mercado interno absorbía “más del 75% del total [de la producción agropecuaria] quedando apenas una cuarta parte como saldo exportable” (INTA, 1974b:2). No obstante, en la evaluación histórica del sector se reconocía que “el grueso de las exportaciones totales proviene

aún de los productos agropecuarios de la región pampeana, que de esta manera cumple una función esencial” (INTA, 1974b:6). El crecimiento económico basado en la producción de la pampa húmeda y orientado a satisfacer las demandas internacionales que consolidó el llamado “modelo agro-exportador”, era revisitado señalando la vigencia de sus problemáticas principales: “crecimiento regionalmente desequilibrado y una especie de colonialismo interno” (INTA, 1974b: 6). También destacaban los efectos de las formas de apropiación de la tierra: coexistencia de grandes áreas sub-utilizadas con propiedades minifundistas. La estructura agraria resultante, combinada con el sistema de comercialización y transporte requeridos por la orientación agro-exportadora, era analizada críticamente por limitar el crecimiento económico del país y por ser fuente de profundas inequidades sociales. Sostenían que dicha estructura “se convirtió en un medio de succión de los excedentes económicos del campo a la ciudad y de la ciudad al exterior” (INTA, 1974b:7). Los principales problemas registrados en las regiones extra-pampeanas eran referidos a la desocupación y al deterioro económico del sector rural de menos ingresos. Para la región pampeana, se alertaba sobre la disminución de los rendimientos, determinada por el agotamiento de los suelos, los procesos erosivos y la invasión de malezas.

Según el mismo informe del INTA, el país habría de lograr una mayor producción agropecuaria en pos de facilitar el proceso de capitalización industrial. Coincidió así con las metas del Plan Trienal, que remarcaba la doble funcionalidad del sector, como abastecedor del mercado interno y generador de excedentes para crear capacidad de compra externa. Las metas fijadas dentro de la actividad agrícola preveían el aumento en la producción de cereales forrajeros y, en especial, de soja. En el caso de la ganadería, la atención se focalizaba en la región pampeana. Las políticas agrarias incluían la fijación y el control de precios por productos y regiones, la promoción de una política crediticia y la recaudación impositiva. En éste último aspecto, el eje estaba dado -como hemos mencionado- por el IRNP, a través del cual se esperaba lograr una disminución en el precio de la tierra que debería tender a “reflejar el valor de su productividad, en lugar de su valor especulativo” (INTA, 1974b: 11). En cuanto a las líneas de créditos, aquellas orientadas a promover la adopción de tecnología por parte de los productores más chicos y de cooperativas agropecuarias delegaban en los agentes de extensión del INTA la supervisión técnica, quienes junto a los técnicos de los

ministerios provinciales contaban con la llegada directa a las comunidades rurales. Dentro de la evaluación de los lineamientos generales del Plan Trienal, la apreciación del INTA resaltaba aquellos objetivos prioritarios definidos para el sector, “Desarrollar una estructura productiva de las características necesarias para asegurar relaciones sociales conducentes a la felicidad de los habitantes rurales”; “Asegurar una justa y equitativa distribución del ingreso entre todos los participantes del proceso productivo”; “Asegurar la independencia económica y tecnológica” (INTA, 1974b: 15). En este sentido, la evaluación era tan amplia y abstracta como el Plan mismo y contenía más un espíritu de acción que la especificación de los medios que se dispondrían para lograrlo.

Por otro lado, sí se encontraban materializaciones dirigidas a otro de los objetivos -promover la integración regional- a partir de las agendas de investigación propuestas por el organismo y por sus propios planes de regionalización. Asimismo, los debates que se sostenían al interior del INTA, al nivel de quienes trabajaban en la definición y ejecución de las agendas, incluían tanto una resistencia a los cambios impulsados, un acompañamiento, como posiciones que desde posturas críticas radicalizaban la necesidad de impulsar transformaciones profundas que modificaran las condiciones de vida de la población rural, a las que el INTA pudiera contribuir. En este sentido, mientras que un sector (presente tanto en el Consejo Directivo del organismo, como en las filas medias) conservador y fuertemente anti peronista, acusaba que en el Instituto había desembarcado una “infiltración”, buena parte del cuerpo directivo (presidencia, vicepresidencia y aquellos directivos que habían logrado ser nombrados) encarnaba el acompañamiento a las iniciativas gubernamentales. Las posiciones más críticas, en las que la oposición tenía como signo la radicalización de los posicionamientos, no solamente eran heterogéneas sino que incluían distintos niveles de participación. Así, mientras que en las demandas gremiales primaban las reivindicaciones sociales, más vinculadas a las condiciones de trabajo y a definiciones políticas ligadas al escenario nacional, algunas incluían también pedidos ligados a las actividades del Instituto. Desde algunos investigadores, la renovación de las temáticas y la posibilidad de introducir estudios que hasta entonces habían tenido un escaso peso en la orientación de los estudios económicos y sociales del INTA era visto como una oportunidad:



Generar una información estadística y censal de cómo estaba en esos momentos la tenencia de la tierra, era saber quiénes eran los que detentaban la propiedad y quiénes detentaban la tenencia. Y poder intervenir (ex investigador del CNIA, entrevista, 04-03-2010).

Uno de los ámbitos en donde se desarrollaban por entonces estos cuestionamientos era un centro de posgrado que funcionaba en el CNIA de Castelar: la Escuela para Graduados en Ciencias Agropecuarias.

### **1.3. La Escuela para Graduados en Ciencias Agropecuarias: historia de una experiencia inconclusa de formación**

En el Centro de INTA Castelar funcionaba desde 1967 una Escuela para Graduados en Ciencias Agropecuarias (EPG), en donde los miembros del Departamento de Economía de Castelar se desempeñaban como docentes e investigadores. El propio programa de enseñanza de posgrado estaba planteado en estrecha vinculación a la orientación de investigaciones del Departamento (INTA, 1974). La EPG era una experiencia pionera en la formación de investigadores de posgrado en el país. Era producto de un Convenio firmado entre el INTA, el Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas<sup>187</sup> (IICA), la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y la Universidad de Buenos Aires (UBA). Había incorporado las áreas de Economía y Sociología Rural, y otorgaba a sus egresados el título de *magíster scientiae*<sup>188</sup>. Fueron dictados cursos de posgrado en diversas áreas temáticas (Economía, Producción Animal; Genética, Extensión; Suelos, Fitopatología y de Producción Vegetal, Fisiología Vegetal, Patología Animal y Utilización de la Maquinaria) con un total de 325 alumnos, de los cuales el 40 % pertenecía al INTA, el 37% a otras instituciones argentinas, y un 23% provenía de otros países latinoamericanos y del Caribe en convenio con el IICA (INTA, s/a).

---

<sup>187</sup> Creado en Costa Rica en 1942, con sede en Turrialba.

<sup>188</sup> Según un informe institucional del INTA, la necesidad de contar con personal técnico con un entrenamiento superior motivó que en 1966, los ingenieros agrónomos Ángel Marzocca y Ricardo Arroyo, del INTA, presentaran un proyecto para crear la Escuela ante la Facultad de Agronomía y Veterinaria de la Universidad de Buenos Aires, instituciones a las que se le suma, posteriormente, la Universidad de La Plata. Las tres, en conjunto, establecieron luego contactos con el IICA para la realización del Convenio que finalmente fue firmado en 1967 (Penna, 2003).

¿Cuál era la orientación que se impartía en la EPG? Dentro de la Maestría en Extensión, el plan de estudios contemplaba formación en Economía, Sociología, Psicología Social, y Antropología Cultural, entre otras asignaturas<sup>189</sup>. Se apuntaba así por primera vez a una formación de los extensionistas a partir de diversas herramientas conceptuales que problematizaban su labor, eminentemente práctica y hasta entonces formada en el campo. El plantel docente contaba con investigadores del INTA, profesores de la UBA y la UNLP, miembros del IICA y de la FAO (IICA, 1969). En el caso de la maestría en Economía Agrícola, en origen predominaron los estudios *Marketing y Farm Management*. Bajo una orientación neoclásica, se abordaba la administración de las empresas rurales. El plan de estudios inicial abarcaba distintos niveles en Matemática, Estadística, Principios de Economía Agraria, Teoría Macroeconómica, Metodología de la Investigación, Investigación de los Recursos Naturales y Economía de la Producción (IICA, 1969). Los profesores provenían del INTA, de la Universidad de Texas y de otras instituciones locales como el Instituto Di Tella y la Universidad del Salvador<sup>190</sup>.

En este sentido, la formación que originalmente se impartió en la EPG ofreció una continuidad con la orientación de los estudios en Economía y Sociología Rural que ya venían desarrollándose en el organismo. También en relación a los enfoques dominantes a nivel internacional, el programa de la Escuela no ofreció en un comienzo mayores novedades<sup>191</sup>. Esta continuidad se expresaba también en la reinscripción de profesionales del INTA, que habían viajado a los Estados Unidos a realizar estudios de posgrado en el área con financiamiento de la Fundación Ford.

A mediados de la década del sesenta, la Fundación Ford en Argentina había coordinado un programa de becas para financiar la realización de estudios doctorales en Economía Agrícola en los Estados Unidos. La Escuela incorporó a su cuerpo docente a algunos de los egresados del Programa. Doctorados en Economía Agraria, retornaron al Instituto y pasaron a desempeñarse en la Escuela coordinados por Martín Piñeiro, que asumió la dirección de la Maestría en Economía. Según Piñeiro, uno de los

---

<sup>189</sup> También incluían las asignaturas de Fundamentos de Extensión, Modelos de Investigación, Psicología Educativa, Métodos de Extensión y Sociología rural (IICA, 1969).

<sup>190</sup> Los primeros docentes del área fueron Miguel Almada (Instituto Di Tella), Norma P. de Pereira (INTA), Clive R. Harston (Universidad de Texas), Marta C. de Tizziani (INTA), Ernesto Gabba (Universidad del Salvador), Violeta Sonvico (INTA) y William Brown (Universidad de Texas), (IICA, 1969).

<sup>191</sup> El coordinador fue el Dr. Clive Harston, de Texas A&M University (Penna, 2003).

beneficiarios del programa, a pesar de la formación recibida en el exterior de matriz neoclásica y poco disonante con los estudios de Economía y Sociología tal como venían siendo realizados en el INTA, comenzó a gestarse un cambio “cualitativo”:

Fue un cambio cualitativo y cuantitativo sustantivo, porque de un manejo con economistas del INTA de otra generación, que se ocupaban más de administración de empresas agrarias y marketing, de pronto aparecemos nosotros, doctorados, todos tipos jóvenes, de 30 años, y también hay un cambio de temáticas (Piñeiro, entrevista, 25-07-2010).

Junto al surgimiento de un equipo profesionalizado en una subdisciplina de escaso desarrollo en el país, el cambio en las temáticas incluía un salto de escala y de contenidos. En línea con el auge de visiones de cuño estructuralista, los investigadores y docentes de la Escuela comenzaban a trabajar “mirando a los grandes problemas. Ése es el gran cambio que representa Castelar” (Piñeiro, entrevista, 25-07-2010). La orientación de las actividades no se reducía a un cambio de enfoque teórico y epistemológico, sino que configuraba nuevos cursos de acción para la práctica del INTA. Según quien fuera director del Posgrado de Economía Agraria hasta que se produjo la intervención militar del Instituto, “no se trataba de que hubiera diferencias ideológicas con respecto a lo que venía en el INTA” (Piñeiro, entrevista, 25-07-2010). Sin embargo, afirma que sostenían “un cambio de enfoque, de perspectivas, de cómo se ve el mundo, y de los temas que se tratan...”. Planteaban “la necesidad del desarrollo de las fuerzas productivas del agro y la necesidad de que eso ocurriera en un contexto de distribución del ingreso, de integración, de resolución de la pobreza”<sup>192</sup>. En este sentido, se producía un cuestionamiento a la línea tradicional del Instituto.

El equipo de trabajo, nutrido principalmente por profesionales que habían cursado su formación de posgrado como parte del convenio entre el INTA y la Fundación Ford, incorporó también dos sociólogos (Floreál Forni y Raúl Vicio), y un economista formado en Economía Política en Oxford. Los alumnos, por su parte, tenían dedicación exclusiva por dos años para completar la formación en la Escuela. Según recuerda un ex investigador y docente de la Escuela, la formación recibida en el

---

<sup>192</sup> *Ídem*, Bs. As., 25 de junio, 2010. Subrayado propio.

exterior, ligada en gran parte a la promoción del libre mercado, comenzó a registrar una “doble ruptura”<sup>193</sup>. Por un lado, la participación de algunos de estos investigadores en distintas instancias ligadas a la política agraria nacional, a las que se habían incorporado a partir del retorno del peronismo y fundamentalmente en el ámbito de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, hacía que “la enseñanza de esa orientación no condicionara con los cargos públicos y las políticas orientadas desde esos cargos que muchos estábamos ocupando” (ex docente EPG, entrevista, 25-06-2010)<sup>194</sup>. Por otro, en los alumnos “se había conformado una conciencia de orientación más social de las políticas agrarias (...)”. Como afirma un ex docente de la EPG hasta la intervención, se cuestionaba “que el INTA estaba orientado a los grandes y medianos productores, desconociendo una realidad importante de la Argentina”, esto provocaba una suerte de “ruptura conceptual” atravesada por un posicionamiento ideológico y por una crítica operativa, ya que “si no prestás atención a los productores pequeños, desarrollás equipamiento, tecnología adaptados a los grandes” (ex docente de la EPG, entrevista, 27-05-2010)<sup>195</sup>. También existía una demanda de mayor inclusión de investigadores provenientes del área de las ciencias sociales. Todos estos planteos, como indica otro integrante de la Escuela, “chocaban un poco con la línea tradicional del INTA” (ex docente de la EPG, entrevista, 13-08-2010).

En la Escuela comenzaban a introducirse los enfoques ligados a las “nuevas corrientes Latinoamericanas”, especialmente cepalinas y estructuralistas. A partir del contenido de algunos de sus programas y documentos internos, es posible identificar que primaba una mirada económica de la realidad agropecuaria de tipo heterodoxa, que

---

<sup>193</sup> En un principio, “el programa de postgrado estaba un poco ceñido a los programas de estudio estadounidenses. Casi todos éramos egresados de universidades norteamericanas, y la visión allí era por así decirlo mucho más orientada al libre mercado que lo que se estaba propiciando en ese momento.” (ex docente EPG, entrevista, 27-05-2010).

<sup>194</sup> La articulación con la Secretaría de Agricultura y Ganadería y con el Ministerio era frecuente entre este grupo de investigadores del INTA, ya fuera desempeñando cargos en ocasiones en la gestión pública o brindando asesoramiento a distintas iniciativas entre las que destaca el ya mencionado IRNP.

<sup>195</sup> Ex docente e investigador de la EPG. En 1967 gana una beca para realizar doctorado en Economía Agraria en California, Estados Unidos. En 1972 retorna y se incorpora a la estación experimental de Salta. En 1973 comienza a dar clases en la EPG y con la asunción de Cámpora asume el cargo de asesor del ministro de Asuntos Agrarios en la provincia de Buenos Aires. En 1974 se reincorpora al INTA, en donde dicta un curso de política agraria en la EPG. Continúa con dedicación exclusiva en docencia e investigación en la Escuela hasta la intervención militar, cuando es dejado cesante y detenido en su domicilio como parte del operativo militar realizado en INTA Castelar.

cuestionaba sólo en parte la orientación tradicional en la materia, de matriz neoclásica y “productivista”<sup>196</sup>.

Por otro lado, un núcleo de investigadores, alumnos y docentes de la EPG, comenzaron a esbozar un planteo más radical que cuestionó la organización interna de la Escuela y el perfil de los conocimientos producidos. Reclamaban un cambio en el sistema de evaluación y en la orientación de los programas de estudios. La dirección de la Escuela, que recaía en el IICA, también cosechaba los mayores reclamos. En este marco, en julio de 1973, se produjo una toma del establecimiento. Como recuerda una investigadora del INTA, alumna por entonces de la Escuela, pedían “que la organización fuera otra y que había que trabajar otras problemáticas. Que las materias estuvieran relacionadas con las problemáticas del país” (ex alumna EPG, entrevista, 17-11-2011). Según otra integrante de la EPG, en referencia a la toma y al destino que correría en breve la Escuela, “en el ’73 los alumnos tomamos la EPG, para nosotros eran imperialistas y después para los militares eran subversivos” (ex alumna EPG, entrevista, 10-05-2010). Ante los conflictos con el alumnado que había protagonizado la toma, se produjo la renuncia del director de la Escuela y se designó a un nuevo director provisorio.

Pese a la situación conflictiva, el Consejo Directivo del INTA remarcaba que era importante “consolidar la participación del INTA en cursos de posgrado que tengan vinculación con las universidades nacionales” (INTA, 1973, Acta 604). La toma fue exitosa, y como resultado se introdujeron modificaciones en el plantel docente, los contenidos de las asignaturas y la dirección de la Escuela. Ésta había estado a cargo del IICA desde julio de 1972, y pasó a depender del INTA. Entre otras modificaciones, se incorporaron especialidades temáticas, entre las que figuró Desarrollo Regional. Distintas tesis de posgrado comenzaron a concentrarse en cultivos y problemáticas de zonas económicamente críticas: algodón en Chaco, azúcar en Tucumán y áreas minifundistas. En promociones anteriores, otras temáticas novedosas fueron objeto de las tesis de Maestría en Economía Agraria. Así, hubo quienes abordaron la cuestión de la renta agraria en la región pampeana y quienes discutieron la no neutralidad de la

---

<sup>196</sup> En este sentido, la atención continuaba fijada en la “conducta” de los “agentes económicos”, generando un punto de contacto con el individualismo metodológico acuñado por la Escuela Neoclásica. Véase Trigo, Quagliani y Díaz Bonilla (1975). El término “productivista” es tomado de diferentes entrevistados, quienes lo utilizan para caracterizar un enfoque centrado en la obtención de altos rendimientos y competitividad, y desprovisto de un análisis de la estructura económica y social agraria.

tecnología, temáticas que institucionalmente no habían sido abordadas con anterioridad a la Escuela.

En 1974, el informe del IICA que recogía sus acciones durante 1973 en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile registraba un discurso que en poco tiempo iba a transformarse sustancialmente. En sintonía aún con las directrices emanadas de la Alianza para el Progreso, el “Programa de Reforma Agraria y Organización Campesina de la Zona Sur” del IICA incluía su participación en programas nacionales de “ordenamiento de la estructura agraria en Argentina, asesoramiento a las instituciones de Reforma Agraria en Chile y reforma agraria y organización campesina en Paraguay” (IICA, 1974:57). En particular, para Argentina se dejaba constancia de haber brindado “asesoramiento en la elaboración de proyectos de ordenamientos de estructuras agrarias dentro del Plan de Colonización para la Reconstrucción Nacional” (IICA, 1974: 58). La centralidad de la cuestión agraria y su conflictividad a nivel regional tenía su corolario en la orientación de este tipo de organismos institucionales, que en poco tiempo transformarían el discurso centrado en la “reforma agraria” por el de la eficiencia de “la empresa rural”. Un segundo informe anual del IICA destacaba dentro de su actividad regional la labor sostenida en la Escuela, y mencionaba el cambio de autoridades derivado de la toma del establecimiento:

En Argentina los esfuerzos del IICA se concentraron en mantener funcionando la Escuela para Graduados en Ciencias Agrícolas. En enero de 1974 se firmó un nuevo convenio operativo entre las Universidades y el INTA, que a mediados de año designó un director y consolidó el funcionamiento del Consejo Superior. El IICA procuró mantener su apoyo a la Escuela, confirmando las becas asignadas y traspasando sus equipos y demás bienes al control de las nuevas autoridades (IICA, 1974: 51).

Así, pese a la situación conflictiva, se confirmó el sostenimiento de las becas de estudio ya otorgadas, y el reconocimiento a las nuevas autoridades. El convenio al que aludía el informe del IICA había sido firmado en la ciudad de La Plata el 10 de enero de 1974. La nueva designación de autoridades designó a un Consejo Superior al frente de la Escuela integrado por un representante de la UBA, uno de la UNLP y uno del INTA.

En una articulación con el ámbito universitario inédita en la trayectoria del INTA, se estableció que la Escuela mantendría su sede en el predio del CNIA de Castelar acoplándose a los lineamientos del Nucleamiento de Enseñanza Agropecuaria Superior e invitando al resto de las universidades nacionales a participar de la gestión. Entre las funciones del nuevo Consejo se estableció que éste debería:

- a) Velar constantemente para que las actividades de la Escuela se desarrollen con un alto nivel de calidad, tratando de integrar la formación técnica con la económico-social y política que implique la preparación de técnicos capaces de servir a los intereses del pueblo en el marco de la Reconstrucción Nacional.
- b) Adecuar permanentemente los planes de enseñanza y los programas de estudio a la consideración de los problemas nacionales y latinoamericanos (CD INTA, ACTA 613, 10/01/1974).

También incluía la necesidad de “dar a la enseñanza para graduados un enfoque eminentemente interdisciplinario” (CD INTA, ACTA 613, 10/01/1974), que articulara la docencia agropecuaria superior, la investigación agropecuaria y la extensión rural. El INTA tomó a su cargo la asistencia económico-financiera de la Escuela, mientras que la UBA y la UNLP se comprometieron a poner a disposición de la Escuela personal docente, laboratorios, campos experimentales, vehículos y demás instalaciones (CD INTA, ACTA 613, 10/01/1974). Además, otorgaban a los alumnos regulares de la Escuela las mismas prerrogativas y derechos que los vigentes para sus propios estudiantes universitarios, entre los que figuraban el acceso a bibliotecas, comedores estudiantiles y servicios médicos. Sin embargo, a partir de 1975, en los informes del IICA cesaron las menciones a la Escuela para Graduados. Para mayo de 1975 el INTA ya había sido intervenido por el Poder Ejecutivo y removidas sus principales autoridades. Dentro de las primeras medidas impulsadas por el interventor, de larga trayectoria previa dentro del INTA, estuvo la de conformar una comisión *ad hoc* para analizar la situación de la Escuela. Argumentando en razón de “la situación irregular en la que se desenvuelve la Escuela para Graduados en Ciencias Agropecuarias, y considerando que el INTA tiene en estos momentos a su cargo toda la infraestructura” (CD INTA, Res. 109bis, 30-06-1975), fue conformada la comisión, luego designado un

representante interventor del Consejo Directivo en la Escuela y finalmente, en agosto de 1975, designadas nuevas autoridades<sup>197</sup>.

El nuevo director, Mariano Miguel Ponce, formuló un extenso diagnóstico de la situación de “acefalía”. Afirmaba que “la Escuela para Graduados en Ciencias Agropecuarias carece actualmente de autoridades”, en relación a la existencia de cargos vacantes, situación que se pretendía solucionar momentáneamente con una nueva designación, afirmando que era necesario “preservar el patrimonio de la Escuela hasta tanto se regularice su situación de gobierno” (INTA, Res 242, 18-08-1975).

La Escuela permaneció en una situación irregular y de baja actividad hasta marzo de 1976. Una vez producida la intervención militar del INTA, miembros del Departamento de Economía y docentes de la EPG fueron detenidos durante el operativo militar en Castelar, y la Escuela fue formalmente cerrada. Luego del cierre y de que desarmaran la biblioteca y el Departamento de Economía, un administrativo a cargo comenzó a contactarse con los alumnos. Una de ellas pudo acceder a las cajas en donde habían quedado las encuestas relevadas en tareas de campo para su tesis. Después de que “se llevaron a todo el Departamento y vinieron las tanquetas” (ex alumna EPG, entrevista, 13-05-2010), en alusión al operativo militar orquestado en Castelar, se desvinculó del Instituto hasta la llegada de la democracia, al igual que muchos otros investigadores.

El IICA prosiguió sus informes en el país mencionando la realización de actividades conjuntas, que ya no incluyeron la formación de graduados. Entre noviembre y mayo de 1976 participó en seminarios sobre aspectos administrativos y de gestión del INTA. En el discurso empleado para referir a la situación regional, las referencias a las “reformas agrarias” y a los “planes comunitarios”, que habían acompañado la retórica de los organismos internacionales encargados de promover el desarrollo rural en América Latina, dieron paso a la promoción de las empresas agrarias y la innovación. En su informe anual de 1977 destacaba la realización, en co-auspicio con el INTA, de una reunión internacional sobre estudios de la empresa ganadera y su aplicación al desarrollo agropecuario, con participantes de Argentina, Chile, Paraguay y

---

<sup>197</sup> El interventor del INTA era el ingeniero Humberto Cavándoli, la comisión la integraron el veterinario Augusto Durlach y los ingenieros agrónomos Mariano M. Ponce y Martín F. Naumann Poco después, Durlach fue designado representante del Consejo Directivo en la Escuela (CD INTA, Res. 109 bis, 30-06-1975).



Uruguay (IICA, 1977). La única referencia a la intervención militar de los organismos de investigación agropecuaria mencionaba “algunos cambios en los niveles directivos” (IICA, 1978: 5). Con referencia a su participación en medidas impulsadas desde la Secretaría de Estado de Agricultura y Ganadería y en capacitaciones brindadas en el INTA, enfatizó la noción de “transferencia”, que pronto protagonizaría la forma de contacto e inserción que el instituto iba a privilegiar desde sus planes de investigación y extensión rural.

## **2. La investigación socio-económica durante la dictadura: el reinado de los “micro-problemas”**

El primer día de la intervención militar del INTA, el CNIA de Castelar fue objeto de un operativo. Como señalamos, producto de éste fueron detenidos decenas de trabajadores del Centro y muchos otros dejados cesantes. Entre los detenidos se encontraba quien había sido uno de los ex subsecretarios de Giberti en la SAyG y director de una de las maestrías de la Escuela para Graduados. Para Piñeiro, mientras que el desmantelamiento del Departamento de Economía de Castelar respondió a la resistencia que generaban (fuera y sobre todo, dentro del INTA) los enfoques propuestos que se alejaban del tradicional *farm management*, su detención y la de otros integrantes del equipo se debió a “un conjunto de malos entendidos” (Piñeiro, entrevista, 25-07-2010). En otras palabras, en su visión habían sido confundidos con activistas gremiales y militantes políticos. En su recuerdo del operativo de Castelar señala que “tuvo como objetivo principalísimo instalar el miedo (...) Estás en tu escritorio, de pronto las tanquetas, 500 militares metiéndose y llevando gente presa vendada... Vos al día siguiente te quedás quietito. El poder intimidatorio es brutal” (Piñeiro, entrevista, 25-07-2010).

La situación de Piñeiro y de otros integrantes del Departamento de Economía del CNIA fue tratada en ese momento por James Rudbeck, agregado agrícola de los Estados Unidos, quien el 4 de abril de 1976 remitía un memorándum al embajador. Al igual que otros investigadores del INTA, Piñeiro había cursado estudios de posgrado con financiamiento de la Fundación Ford, en el marco de una convocatoria destinada a realizar especializaciones de posgrado en Economía Agraria. En el memorándum se

describía una reunión entre el agregado estadounidense y el entonces secretario de agricultura, Lucio Reca<sup>198</sup>. En este encuentro, Reca confirmó el despido de 15 trabajadores del Centro de Investigaciones de INTA Castelar, entre los que se encontraban delegados gremiales e investigadores. En particular, mencionó a siete investigadores del área de Economía y a su director, que habían sido detenidos en sus propios escritorios y llevados en uno de los micros a un destino no especificado. Entre los despedidos, al agregado le había confirmado que: *“Martín Piñeiro, Eduardo Trigo, Alfredo Monza, José Costa y Raúl Fiorentino were picked-up at their desks by the security forces and taken to jail in a bus [fueron detenidos en sus escritorios por fuerzas de seguridad y llevados en un autobús a la cárcel]”*, acusados bajo cargos de “subversión”. Como afirmaba el agregado estadounidense, el Departamento de Economía *“in effect it has been srtripped [en efecto, ha sido desmantelado]”*. De los detenidos, tres -Piñeiro, Trigo y Fiorentino- habían realizado especializaciones de posgrado financiadas por la Fundación Ford, por lo que eran motivo de revisión de sus antecedentes y trayectoria. Los argumentos utilizados por el secretario Reca para explicar la situación del INTA, según informaba el agregado estadounidense, eran que el INTA en general y el CNIA Castelar en particular llevaban tiempo siendo observados por las fuerzas de seguridad, por ser un “centro de subversivos y de entrenamiento a subversivos” (FOIA, web)<sup>199</sup>. El agregado agrícola estadounidense afirmaba que -como antecedente negativo- Reca había destacado el rol de Piñeiro como funcionario de la gestión de Giberti en la Secretaría de Agricultura. La situación de estos investigadores también fue motivo de reparo mediante el cónsul de Porto Alegre. En un telegrama enviado a la embajada argentina, se mencionaba que un profesor de la Fundación Ford (Darrell Fineup), asentado en Brasil por convenio con el estado de Michigan, había recibido denuncias desde Buenos Aires sobre investigadores del INTA detenidos. El memo destacaba que estos tenían hijos estadounidenses, nacidos durante los estudios de posgrado, y que Fineup garantizaba la integridad del personal del INTA

---

<sup>198</sup> Ingeniero agrónomo (UBA) y doctor en Economía por la Universidad de Chicago, fue secretario de Agricultura y Ganadería de la Nación entre 1975 y 1976.

<sup>199</sup> En el original, *“a center for subversives and for training of subversives”*. El memorándum *“Ford Foundation Call employers at Castelar”* había sido enviado el 8 de abril de 1976 al embajador de los Estados Unidos por James Rudbec.

y consideraba los cargos “por subversión” como un absurdo<sup>200</sup>. Después de un mes, Piñeiro y el resto de los integrantes del Departamento fueron liberados. Otros trabajadores del CNIA permanecieron retenidos, o fueron liberados en grave estado, como en el caso del delegado gremial de ATE INTA Agustín Moglie, abandonado con una herida de bala en las inmediaciones del predio de INTA (Moglie, 2004).

En relación a la clausura de agendas en disputa como efecto de la introducción de mecanismos represivos en el INTA -dirigidos primordialmente a la organización política y gremial de sus trabajadores- uno de los informes de la DIPBA venía realizando un prolijo seguimiento. Centrado en la actividad de la estación experimental de Pergamino, registraba un relevamiento realizado sobre el accionar del “grupo de Paraná”, como mencionamos, un grupo de discusión de política agropecuaria integrado por investigadores y extensionistas del INTA de distintas dependencias. Si bien el grupo se había disuelto con el retorno del peronismo en 1973 por diferencias entre sus integrantes en relación al apoyo o no al nuevo gobierno, los informes registrados determinaron que algunos de sus integrantes fueran perseguidos, en ocasiones detenidos e interrogados en forma detallada por las actividades del grupo. Reunidas bajo el título “INTA de Pergamino. Posible actuación de célula izquierdista”, las descripciones existentes lo señalaban como “una posible célula de carácter extremista”, de “carácter puramente intelectual”, integrada por “ingenieros agrónomos vinculados al INTA” (DIPBA, Mesa C, Legajo 451). Insistían en la necesidad de determinar si los participantes pertenecían al INTA, y si alguna actividad oficialmente convocada por el Instituto se vinculaba a estas reuniones. Habían identificado al jefe de la agencia de extensión rural de Pergamino como uno de los referentes, dejado cesante en 1974 y luego detenido junto a otros integrantes de la estación experimental Pergamino con el advenimiento del golpe. Los informes describían reuniones del grupo en Paraná, Entre Ríos, Capital Federal, Pergamino, Rosario y Córdoba, y remarcaban que si bien se trataba de “una célula puramente intelectual e ideológica”, la zona de acción y el contacto con “jóvenes campesinos” le confería una alta “peligrosidad”. Nuevamente, la actividad con las juventudes rurales era foco de atención, y vista como un peligro

---

<sup>200</sup> “DETENTION OF FORMER FORD FOUNDATION GRANTEEES IN ARGENTINA”, abril 1976 Documentos desclasificados del Departamento de Estado de los Estados Unidos, pertenecientes a la colección *State Argentina Declassification Project (1975-1984)*, disponibles en <http://foia.state.gov/SearchColls/CollsSearch.asp>

potencial. En este sentido, se reiteraban pedidos de antecedentes sobre el funcionamiento de los Clubes 4-A del INTA, destinados a la extensión rural enfocada a jóvenes del medio rural, y de sus integrantes. Las conclusiones afirmaban que, a partir de sucesivas tareas de inteligencia desarrolladas a lo largo de 1972 y 1973, habían detectado “una notoria infiltración marxista dentro de los cuadros de su personal técnico y administrativo” (DIPBA, Mesa C, Varios, Legajo 451). La base de esta afirmación estaba dada por el registro de una serie de contactos y reuniones entre técnicos de la estación experimental del INTA Pergamino, y su vinculación con otras unidades del INTA, especialmente en Santa Fe y Entre Ríos. En palabras de un investigador de la estación experimental de Pergamino detenido junto a otros seis trabajadores de la misma sede:

Me interrogaban exclusivamente sobre la situación del INTA, y no sobre mi actuación en La Plata, donde había tenido participación política más relevante. El interrogatorio se refería a mi actuación en INTA, yo había formado parte de un grupo de estudios que funcionaba en la estación experimental de Paraná (...) Después sobre mi actuación en la asociación gremial del INTA y preguntas más de contexto para ver qué era el INTA (entrevista, 12-09-2010)<sup>201</sup>.

¿Qué efectos tuvo la intervención en las agendas de investigación de Economía Agraria y Sociología Rural? Un docente e investigador de la EPG, sintetiza el cambio en la orientación de la investigación del área dentro del INTA como una pérdida del rol de la tecnología “en el desarrollo integrador del agro, diluyéndose así el análisis de problemas estructurales, que vinculan al sector agroalimentario con el resto de la economía argentina” (ex investigador de la EPG, entrevista, 08-09-2010). La coordinación del Programa SIPNA, que tenía sede en Castelar, fue reubicada en la

---

<sup>201</sup> En este sentido la información “compartimentada” que manejaban favoreció el desenlace en algunos casos (como en éste, en donde no rastrearon su participación política ligada a la Tendencia y restringieron las averiguaciones a su rol en el INTA). Había ingresado al INTA en 1969, luego de realizar un posgrado en ecofisiología en la Universidad de París reingresó a la estación experimental de Pergamino. En 1973 pidió licencia para desempeñarse como director de Agricultura en la provincia de Buenos Aires, en colaboración con la Tendencia, aunque sin militancia orgánica en ninguno de sus frentes. Con la renuncia del gobernador Bidegain, y con él la de todo el equipo, retornó a la experimental de Pergamino hasta su cesantía y detención en 1976. En 1986 volvió del exilio y se reincorporó al INTA con sede en la Universidad Nacional de La Pampa. Se jubiló en 2012. (Entrevistas, 12/09/2010; 15/11/2011; 10/10/2012).

estación experimental Balcarce. Junto a él, se trasladaron dos investigadores como coordinadores del Área de Comercialización. Una de ellas pertenecía a la estación experimental de Alto Valle, pero había sido alumna reciente de la EPG, con cuyos integrantes había mantenido una articulación permanente. El programa, que había sido implementado por la Secretaría de Agricultura para generar información que permitiese aplicar un control de precios sobre mercancías agrarias, continuó funcionando. Sin embargo, según recuerda una de las coordinadoras, “dejaba de tener utilidad en la Secretaría de Agricultura, porque ya no había una política de establecimiento de precios” (ex investigadora del INTA, entrevista, 15-06-2010). En 1977, una economista que ingresaba como docente e investigadora a la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNMP, que funcionaba y funciona como Unidad Integrada al INTA, empezó a trabajar en el Programa, pero éste “ya no se usó para su objetivo original” (economista del INTA, entrevista, 11-11-2009). Pese al traslado, sus funciones habían sido acotadas y su funcionalidad había perdido sentido, permaneciendo más bien como una estrategia de visibilización de la estación experimental que lo había recibido.

En cuanto al Departamento de Economía de Castelar, fue desarticulado casi en su totalidad. Del elenco de los doce profesionales radicados con dedicación exclusiva a las tareas de investigación, los únicos dos sociólogos, -Raúl Bisio y Floreal Forni- se desvincularon del INTA. El resto de los investigadores fueron dejados cesantes por la intervención militar y parte de ellos detenidos en el operativo desplegado en Castelar el 29 de marzo de 1976<sup>202</sup>. El recambio del plantel de investigadores implicó que también se modificaran los objetos de estudio y los objetivos perseguidos en las investigaciones.

Desde cuestiones formales -“nos sugirieron que no les llamáramos planificación sino planeamiento” (economista del INTA, entrevista, 15-06-2010), apunta una investigador- hasta los contenidos abordados. En cuanto a las continuidades y rupturas que prevalecieron en los enfoques, según una investigadora del área, la dictadura no implicó un quiebre profundo en la medida que la trayectoria del INTA ya estaba marcada por una “visión productivista”, que identificaba la generación de tecnologías

---

<sup>202</sup> Juan Carlos Martínez, Carlos Armelín, Héctor Barreyro, José Costa, Carlos Chevallier Boutel, Gustavo Nores (hizo uso de licencia para ocupar el cargo de vicepresidente de la Junta Nacional de Carnes), Martín Piñeiro (hizo uso de licencia para ocupar la Subsecretaría de Economía agraria), Gustavo Saín y Lidia Chernobilsky (computadora científica) (INTA, 1973; 1974).

con alto impacto en los rendimientos agropecuarios como objetivo prioritario<sup>203</sup>. La existencia de una mirada centrada en la producción por hectárea, en el logro de una “eficiencia productiva” escindida del diagnóstico de los problemas estructurales del sector agropecuario nacional y del análisis de su rol en la inequidad social, no era nueva en el organismo. Estos enfoques tendrían continuidad y vigor con posterioridad a la dictadura, incorporando también otros elementos ligados a las transformaciones del período<sup>204</sup>. Por otro lado, la perspectiva de otra investigadora del área puede tomarse en relación a la idea de la dictadura como “hiato” en el perfil que buscaban imprimir algunos investigadores a las tareas del INTA:

En los '80 se ve la recuperación de la preocupación por la pequeña agricultura, a pesar de que se hizo el INTA como una cosa monolítica para la modernización. *Recuperación porque estaba antes*. Porque están las Ligas Agrarias, está Campo de Herrera, hubo técnicos de INTA metidos en todo eso (economista de INTA, entrevista, 11-11-2009).

Un técnico agrónomo del área de Economía de la estación experimental de Pergamino, que antes de su cesantía realizaba un trabajo de campo para una investigación sobre el estado del minifundio en la región maicera, señala en alusión a su reincorporación al INTA que actividades que otrora se vinculaban a la implementación de planes de colonización y relevamientos de condiciones de tenencia pasaron a “ser más superficiales”, en conjunción por un “nuevo panorama” donde “la mayoría de los productores ya no viven en los campos, habían alquilados sus propiedades a contratistas para el cultivo de soja y se habían convertidos en rentistas. (técnico de INTA, entrevista, 02-06-2011). En este sentido, el cambio del perfil de las investigaciones también se ligó a las transformaciones productivas.

---

<sup>203</sup> “una orientación sumamente productivista. Con un objetivo, generación de tecnologías que impacten en los rendimientos ( ) pre-existente en el INTA, y (que) continuó con los militares” (ex investigadora, entrevista, 15-06-2010). Este fragmento de entrevista es citado en la primera parte, en el apartado correspondiente a la reconfiguración de “La Familia INTA”, como una de las posturas continuistas en torno a la interpretación de este período de la historia del organismo por sus propios integrantes.

<sup>204</sup> En este sentido, el enfoque “productivista” presente dentro del INTA se entronca desde los '80, y sobre todo en la década del '90, con la transformación del instituto en una suerte de consultora científico-tecnológica.

Al mismo tiempo, la predominancia de un “ala productivista”, fuertemente alineada a los sectores económicamente más concentrados del agro argentino, se vio fortalecida por la reorientación de las políticas agrarias efectuadas por los militares en el poder y por los mecanismos represivos, que clausuraron la existencia de enfoques alternativos y la posibilidad de consolidar una agenda de trabajo ligada a las problemáticas de la estructura social agraria. Junto a la reducción cuantitativa del área, cualitativamente, los enfoques socio-económicos transformaron sus objetos de estudio y objetivos de investigación. Se abocaron a realizar estudios de mercado, administración o marketing, en los que quedó desterrado el análisis de los grandes problemas estructurales del sector agropecuario nacional:

Las investigaciones en economía se reducen a *temas neutros*, cálculos de costos, rentabilidad, etc. etc. Se pierde la visión dentro del INTA del análisis de problemas estructurales, que vinculan al sector agroalimentario con el resto de la economía argentina (ex investigador de Economía, entrevista, 27-05-2010, énfasis propio).

La aparente “neutralidad” implicó abandonar una conceptualización del cambio tecnológico en materia agropecuaria ligado su rol dentro de la dinámica de acumulación local, y a sus efectos en la estructura social agraria. El análisis de los sistemas de tenencia y propiedad de los recursos naturales, los relevamientos del estado de la fuerza de trabajo en el sector, el desequilibrio regional, fueron reemplazados por el estudio de “micro-problemas” que retomaron el anterior énfasis dado a la Administración Rural y pusieron un nuevo acento en el ‘comportamiento empresarial’ señalado como necesario para modernizar el agro.

### **3. Conclusiones: del análisis de la realidad agropecuaria a la promoción del empresario rural**

En los años previos al golpe de Estado, las investigaciones en economía agraria y sociología rural experimentaron una renovación en sus objetos de estudio, enfoques teóricos, y en la composición de los equipos de investigación. Existió un intento, desde un conjunto de investigadores, de modificar el rumbo de las investigaciones y el

diagnóstico de las problemáticas. El ámbito de la Escuela para Graduados en Ciencias Agropecuarias, y el Departamento de Economía del Centro de Castelar funcionaron como núcleo de este proceso.

El desplazamiento del estudio de los costos de producción y la administración hacia el abordaje integral de aspectos nodales de la cuestión agraria, tales como la distribución y uso de los recursos naturales, los sistemas de tenencia de la tierra y la composición de la estructura social agraria, era novedoso en la trayectoria de las investigaciones del INTA. Las líneas de investigación estaban definidas en función del diagnóstico del sector agropecuario, que guiaba el establecimiento de prioridades en la agenda. En este sentido, se reiteraba la necesidad de abordar el estudio de los casos específicos en vinculación a las problemáticas estructurales presentes en el sector. Algunos diagnósticos y estudios sobre el desarrollo de las economías regionales y del rol del sector agropecuario en la economía nacional promovieron cuestionamientos en torno al rol tradicional del INTA. El cambio en la conceptualización del objeto de estudio fue acompañado por nuevos planos de intervención, en los que se discutía la función y capacidades del organismo. Qué, para qué y para quién producía conocimientos científicos y tecnológicos el INTA fueron cuestionamientos presentes en un sector del organismo, en un momento histórico nacional atravesado por expectativas de transformación social.

En cuanto a sus limitaciones, además de los condicionamientos que impactaron negativamente en la continuidad de las investigaciones, el propio planteo tenía sus restricciones para alcanzar los objetivos que declaraba perseguir. Compartían los diagnósticos por entonces en auge de la Teoría de la dependencia que, contra las teorías de la modernización, sostuvo la necesidad de transformar las relaciones asimétricas entre núcleos centrales y regiones explotadas (Galafassi, 2005). El mayor punto de contacto estaba dado por la oposición a los enfoques de cuño funcionalista-liberal, que postulaban la evolución natural hacia el desarrollo, pero también por las debilidades que han sido señaladas para esta escuela<sup>205</sup>. Si bien el accionar de estos investigadores al

---

<sup>205</sup> Referencias en torno discusiones sobre el alcance de la Teoría de la Dependencia, véase nota 26. Algunos autores han señalado que este cuerpo teórico, al hacer del intercambio desigual una noción clave, ha explicado el desarrollo trunco de las regiones periféricas en función de las necesidades de las centrales, sin problematizar otros aspectos relevantes. En especial, Martin, A., Dupont, M., Husson, M. Samary, C. y Wilno, H. (2002: 116) señalan las relaciones de dominación presentes al interior de las zonas



interior del INTA fue limitado y heterogéneo, sistematizar los objetivos que primaban en la agenda de investigaciones permite señalar también qué líneas fueron discontinuadas a raíz de la intervención del organismo. En este sentido es posible identificar que se proponían diagnosticar y caracterizar:

1. Problemas estructurales ligados al carácter dependiente del sector agropecuario nacional.
2. Sistemas de tenencia y usos del suelo, y efectos del régimen y concentración de la propiedad de los recursos naturales.
3. Condiciones de trabajo y nivel de ocupación de productores familiares, asalariados rurales permanentes, transitorios y minifundistas.
4. Intervenciones en el histórico desequilibrio regional.

La visión crítica sobre la existencia de un perfil tecno-productivo alejado de las demandas sociales del conjunto de la población rural y del divorcio entre la praxis científica y la realidad socio-económica constituía, de este modo, un eje que estructuraba el trabajo a desarrollar. En este sentido, existía en el INTA una “agenda de investigación en disputa” ya que las iniciativas desarrolladas desde estos ámbitos de investigación implicaban una ruptura con respecto a la orientación tradicional del organismo.

Como producto de la intervención militar en el organismo se produjo una reestructuración selectiva en los contenidos y destinatarios de las tareas de investigación y extensión. En este sentido, fueron discontinuados los enfoques que realizaban diagnósticos críticos del sector agropecuario nacional y proponían orientar las tareas de CyT del organismo en función de las principales problemáticas de éste, así como las actividades de inserción en las comunidades rurales desarrolladas por los extensionistas. Simultáneamente, se consolidó una línea de trabajo funcional a los intereses de las grandes corporaciones terratenientes, dando inicio a un proceso de fragmentación y mercantilización del conocimiento producido en el instituto.

Esta reorientación de enfoques, problemáticas y objetivos de las investigaciones fue simultánea a la intensificación del proceso de concentración del capital agrario y a la consecuente desaparición de explotaciones y productores. Junto a la crisis de la pequeña producción familiar, la transformación en los patrones productivos inició un

---

periféricas, en tanto las clases dominantes de los países del tercer mundo “se benefician de la dominación de su propio país y participan de ella”.

complejo proceso de tercerización de actividades que alteró sustancialmente la composición de la estructura social agraria, profundizó la explotación de la fuerza de trabajo rural y comenzó a generar un conjunto de problemáticas sociales y ambientales que alcanzaría su pico de conflicto en las décadas posteriores (Dougnac, 2013). Como señalamos, estas transformaciones fueron acompañadas y promovidas por las iniciativas sectoriales sostenidas y por los cambios registrados en el proceso de acumulación. El avance de la expansión agrícola fue simultáneo al de su contracara, el desplazamiento y marginación de los sujetos agrarios menos capitalizados, que no accedieron a los cambios tecnológicos ni a las ganancias derivadas de la exportación de los cultivos en auge. En este proceso de transformación del agro, el mejoramiento de semillas cumplió un rol sustancial. ¿Cuál fue el rol del INTA? ¿Qué problemáticas asumió en esta área de investigación la producción y apropiación de conocimiento desde el ámbito público? Éste eje es, precisamente, uno de los ejes de la tercera parte. Antes de abordarlo, nos adentraremos en el estudio de una experiencia de investigación, radicada en una de las principales estaciones experimentales del organismo.

## **TERCERA PARTE**

### **Producción pública y apropiación privada de conocimiento científico tecnológico**

## **CAPÍTULO V**

### **Gallinas para el Norte argentino**

#### **Experimentación científica, genética aviar y dictadura**

##### **1. Resumen**

Este capítulo analiza una experiencia pionera de investigación y experimentación orientada a la actividad agropecuaria argentina, radicada en una de las principales estaciones experimentales del INTA, la experimental de Pergamino. Se estudia una de sus líneas de investigación abocada a desarrollar una línea genética aviar nacional, analizando esta trayectoria y su desmantelamiento durante la intervención militar.

El primer apartado reconstruye los comienzos del equipo de investigación, situado en la década de 1960, a partir de la trayectoria de su investigador responsable. Se abordan los primeros pasos del equipo de trabajo, sus motivaciones, materiales y objetivos. El segundo, aborda algunas de las características de la producción avícola, de la conformación de un mercado altamente concentrado a su alrededor y de la importancia de la generación de líneas genéticas en este escenario. El tercer apartado se centra en el desmantelamiento del equipo, producido durante la intervención militar del INTA. Finalmente, una última sección repone los principales ejes y presenta -en conexión con el desarrollo realizado- datos cuantitativos sobre el impacto de las políticas represivas en las distintas áreas de investigación de la estación experimental donde se asentaba la experiencia analizada.

## CAPÍTULO V

### **Gallinas para el Norte argentino Experimentación científica, genética aviar y dictadura**

#### **1.1. Historia de una trayectoria científica interrumpida: los orígenes de la “genética nutricional”**

Creada en 1912 como parte del servicio de estaciones experimentales regionales, la estación experimental agropecuaria de Pergamino quedó bajo la órbita del INTA con la creación del instituto en 1956. Destacada por su ubicación geográfica en plena zona núcleo, en el norte de la provincia de Buenos Aires, así como por su extensión y cantidad de profesionales asignados, ocupó históricamente un lugar relevante en las actividades del organismo. Habría de destacarse particularmente por sus investigaciones en mejoramiento genético vegetal, en especial en híbridos de maíz y en la introducción de trigos de gran rendimiento cruzados a partir de germoplasma de origen mejicano. También, por algunos de sus estudios en sociología rural y economía y por su peso en el área de extensión, sobre todo con los clubes juveniles 4-A.

Para 1959, la estación experimental aún se encontraba en proceso de reorganización y conformación de sus equipos de trabajo. Un joven traductor de la FAO, graduado de la Facultad de Agronomía de La Plata, se incorporó al INTA y fue enviado a realizar un máster en zootecnia centrado en alimentación avícola en Auburn University, Alabama. A su regreso, luego de dos años de acercamiento al estudio de las gallinas, tuvo como misión organizar un equipo dedicado al mejoramiento genético aviar dentro de la experimental de Pergamino.

En un comienzo, los únicos animales y corrales estaban en Oliveros, lugar de asiento de otra de las estaciones experimentales del organismo. A medida que en Pergamino fueron instrumentándose las instalaciones necesarias para comenzar a realizar ensayos experimentales, el grupo fue tomando impulso. En sintonía con aquella primera formación de posgrado en Alabama, sostenida por el INTA, uno de sus

primeros trabajos en Pergamino estuvo vinculado a investigar y experimentar sobre alimentación en gallinas ponedoras. Buscando reemplazar la alimentación tradicional, comenzaron a experimentar con nuevos elementos hasta entonces no utilizados con esos fines.

La tarea estuvo atravesada por otro objetivo fundamental planteado por el equipo de trabajo: realizar una contribución que combatiera la deficiencia nutricional de las regiones más postergadas del país. Las zonas coincidían en parte con antiguos establecimientos de la firma conocida como La Forestal, la compañía de origen inglés alrededor de la que, desde fines del siglo XX, se habían organizado numerosos pueblos-fábrica abocados a la explotación del tanino<sup>206</sup>. Con el declive de la actividad taninera, y la retirada formal de la empresa en 1966, los pueblos forestales cayeron en el abandono. Señalando en un mapa las provincias más afectadas, “empezamos a pensar cuáles eran las regiones del país más pobres, norte de Santa Fe, Chaco, Formosa, Santiago del Estero, el este de Salta. Pensamos cómo podrían criar animales en su ambiente, donde había sorgo y algodón” (Kraft, 2013, entrevista). La idea era “que pudieran tener gallinas que no necesitaran insumos y que mejoraran su dieta”. Con este objetivo inicial, la investigación afrontaría al menos tres obstáculos.

El primero, experimentar con elementos nuevos, el sorgo y la harina de semillas de algodón, sin antecedentes en su uso para la alimentación animal y con demostrados efectos nocivos en su ingesta. El segundo, los intereses afectados por las potenciales derivaciones de la investigación. El tercer obstáculo era, en realidad, la condición necesaria de cualquier investigación que incursiona en una nueva temática: la continuidad del proyecto y de sus principales elementos (profesionales, técnicos, instalaciones, animales sometidos a experimentación).

Usadas para pruebas de laboratorio desde 1893, el consumo de aves y huevos fue creciendo en paralelo a la estructuración de diferentes industrias vinculadas a su explotación comercial. En particular, la producción de alimentos balanceados y de productos farmacéuticos destinados al cuidado de pollos y gallinas fue conformando un mercado altamente concentrado y de configuración transnacional. Para 1973, una de las

---

<sup>206</sup>. *The Forestal Land, Timber and Railways Company Limited* llegó a fundar cerca de 40 pueblos, ubicados en su mayoría en el norte de Santa Fe y sudeste de Chaco, y utilizaban 400 kilómetros de vías férreas propias. Entre 1919 y 1921 se sucedieron importantes luchas obreras, en las que se hizo frente tanto a brutales condiciones laborales como a la realización de los pagos salariales en forma de pagarés, que eran canjeados en establecimientos de la propia empresa. Véase Jasinsky (2013).

principales características de este rubro en países periféricos tenía ya consolidado un obstáculo fundamental: la necesidad de importar las líneas genéticas de las gallinas reproductoras constituía el primer eslabón de una cadena atravesada por la dependencia tecnológica (Gai, 1973).

De resultar exitoso, el proyecto del INTA abría la puerta a la generación de una línea genética nacional, lo que podría reducir la importación que usualmente daba inicio a la producción local. También prometía incorporar nuevos reemplazos en una cadena cuya producción era cada vez más integrada: las gallinas no necesitarían alimento balanceado (éste sería reemplazado por productos como el sorgo y la harina de semillas de algodón, de amplia disponibilidad local), ni insumos veterinarios, ya que las que no resistían la nueva alimentación serían faenadas y las aves “exitosas” reproducidas entre sí.

Una vez realizados los primeros ensayos, la mayoría de las aves respondieron negativamente: crecían cada vez menos. Después de algunas pruebas, en el equipo comenzaron a preguntarse por qué algunas resistían y otras no. Según recuerda su principal investigador, “esperábamos, con una selección dirigida por la resistencia a una alimentación determinada, traer a la luz a genes dormidos que permitiesen utilizar principios nutricionales ignorados o descuidados” (Kraft, 2012, entrevista). A base de realizar cruzamientos entre las sobrevivientes a la nueva alimentación, y de registrar meticulosamente la evolución del peso de las aves, pudieron advertir que las sobrevivientes eran las que descendían de aves tratadas con sorgo, “como si hubieran heredado una condición oculta que se manifestaba después de 3, 4 o 5 generaciones, que sí respondían bien al sorgo” (Kraft, 2013, entrevista).

En el marco de esta investigación, primero fueron alimentadas durante sucesivas generaciones con una dieta de alto contenido de sorgo “anti-pájaro” (la variedad *birth resistance* creada en Estados Unidos en 1964), un grano con alto contenido de tanino, una sustancia astringente, depresora de crecimiento y nociva en su ingesta, originalmente incorporada al sorgo para evitar que las aves depredaran las cosechas. La dieta a base de sorgo fue completada con harina de semillas de algodón (20%), cuya ingesta también estaba desaconsejada en grandes porcentajes por contener gossypol, un alcaloide venenoso que el algodón produce como defensa natural contra las plagas, otro depresor del crecimiento.

La desconfianza ante el uso de elementos no utilizados antes para estos fines, y probadamente nocivos, generaba fuertes cuestionamientos por parte de las autoridades de la estación experimental. Mientras que los resultados eran expuestos en los principales congresos académicos a nivel internacional, al interior el trabajo se desarrollaba en un marco de poco crédito al proyecto, criticado por la falta de experiencias previas que sostuvieran las investigaciones. Las críticas técnicas y científicas, que cuestionaban la necesidad de contar con una mayor cantidad de animales para las experimentaciones, la dispersión de los datos obtenidos y la falta de antecedentes, también contenían una visión en torno al rol del INTA. En una reunión planteada para evaluar el proyecto, organizada en Castelar en el CNIA, el responsable del Instituto de Genética planteaba que era muy difícil que el INTA pudiera llevarlo a la práctica, que “a lo sumo podrá demostrar que ese factor [la genética nutricional] existe y las grandes empresas que hacen selección decir que funciona e incorporarlo” (INTA, 1967). Junto a estos cuestionamientos, había también presiones internas “ligadas a los importadores de Pergamino” (Kraft, 2012, entrevista), representantes de casas matrices de grandes compañías productoras de líneas genéticas, lo que hacía que “tuviéramos pocos animales, para que no se descubriera lo que estaba haciendo”. Así, mientras en la estación experimental el grupo mantenía en reserva los adelantos, presentaba los resultados en congresos de la especialidad celebrados fuera del INTA.

En los círculos científicos y académicos a nivel local e internacional donde se iban presentando los resultados preliminares en forma de ponencias y artículos, el reconocimiento era creciente. Los primeros resultados de la experimentación fueron presentados en 1966 en Kiev, en el XIII Congreso Mundial de Avicultura, tradicionalmente reconocido como el principal encuentro científico de la especialidad (Castelló Llobert, 1984), donde se encontraban representados 52 países. Dos años después, las investigaciones le valían al responsable la atención de una de las principales compañías farmacéuticas a nivel internacional.

## **1.2. Una rama muy concentrada: insumos importados y necesidades locales**

Si bien desde 1857 fue incorporándose a las economías domésticas, a escala industrial la actividad avícola local se consolida a comienzos de la década de 1950,



fundamentalmente centrada en las provincias de Entre Ríos y Buenos Aires (Espíndola, 2008). A partir de 1960 se destaca la presencia de empresas transnacionales, situación compartida con otros países de la región (Espíndola, 2008); y para 1970/1980 registra una segunda fase de modernización, con la introducción de nuevas tecnologías para nutrición, manejo y sanidad. En consonancia con Domínguez (2007), quien remarca el peso de la producción de tipo familiar en Entre Ríos y de capitales nacionales en la actividad, Espíndola (2008) señala que el proceso de internacionalización de la producción convivió con la presencia de capitales locales. Asimismo, el desarrollo mundial de la avicultura estuvo signado por la estandarización creciente de un paquete tecnológico basado en la uniformidad de la raza de gallinas productoras, y el uso de productos veterinarios especiales y de alimentos balanceados con formulaciones específicas, que se incrementó notablemente a partir de la década de 1980 (Noriega y Perales, 1993.). En distintos países de la región, los circuitos avícolas crecieron en paralelo a la ausencia de un manejo autónomo de la soberanía alimentaria de las poblaciones implicadas (Pengue, 2001). Según Rodríguez (2009), el incremento a partir de 1970 de la dependencia externa proteica venezolana se inscribió en un contexto regional de similares características. Desde otra óptica, con una explicación centrada en las culturas empresariales y otros elementos afines al individualismo metodológico, Senesi y Palau (2008) plantean que entre 1976 y 1983 el complejo avícola argentino experimentó un fuerte proceso de integración y coordinación vertical, liderado por pocas y grandes firmas. Para 1989, mientras China ocupaba el primer lugar en la producción de huevos a nivel mundial, Argentina figuraba como el quinto país productor americano (precedido de Estados Unidos, Brasil, México y Canadá), con su producción del paquete tecnológico monopolizada por firmas de origen estadounidense (Noriega y Perales, 1993).

Desde la clausura del Mercado de Concentración Municipal de Aves y Huevos, creado en 1935, y la prohibición de comercialización de aves vivas por razones de sanidad, una amplia red de transportistas, consignatarios, obreros e intermediarios fue reemplazada por grandes plantas de faena. La particular integración vertical de la rama estuvo dada porque las mismas firmas que controlaban la faena y la comercialización pasaron también a fabricar alimento balanceado. Las mismas firmas productoras de

balanceado proveían los pollos BB<sup>207</sup>, compraban después las aves criadas por los engordadores, y luego los faenaban y comercializaban. Al mismo tiempo, la fusión entre las principales compañías farmacéuticas a nivel mundial y las principales cabañas determinaron la gran concentración del sector. Tradicionalmente, el primer eslabón de la cadena productiva comenzaba con la importación de los huevos que, incubados en cabañas avícolas, daban luego origen a los pollos reproductores. A su vez, estos eran vendidos a los “planteleros”, encargados de su cría hasta la obtención de gallos y gallinas reproductoras, que daban finalmente origen a los pollos parrilleros. Los “engordadores”, el siguiente paso en la cadena, eran los responsables de engordarlos por aproximadamente 10 semanas, y de comprar y aplicar distintos insumos veterinarios, fundamentalmente alimento balanceado y vacunas. Como última instancia, grandes empresas fijaban el precio al engordador y comercializaban las aves. Para 1973, las firmas que dominaban esta fase de la cadena productiva en Argentina eran principalmente filiales locales de empresas estadounidenses: Cargill, Provita, Sagra y San Sebastián (Giai, 1973).

Históricamente, las líneas originarias no eran producidas en el país. Ocupado sobre todo por Estados Unidos, el mercado también tenía participación de Israel y Holanda. La ausencia de líneas genéticas nacionales en la década de 1960 ya era vista como determinante para la dependencia tecnológica que caracterizaba a la rama. Sobre las posibilidades de obtenerlas, en 1973 un artículo dedicado a la temática señalaba:

[...] obtener esas líneas genéticas hubiese sido posible coordinando una labor de Universidades nacionales con el INTA. (...) Sin embargo, este tipo de inversión en investigación es desalentada y aun frenada, sobre todo si está encaminada a desplazar el negocio de importación de grandes intereses multinacionales (Giai, 1973: 61).

Precisamente, el equipo de INTA Pergamino liderado por Siegfriedo Kraft buscaba producir líneas que no necesitaran productos farmacéuticos producidos en el exterior. A la novedosa experimentación en alimentación que buscaba reemplazar el balanceado comercial por elementos disponibles en ambientes geográficos locales, para lograr aves reproductoras que se adaptaran a ambientes habitados por población de

---

<sup>207</sup> Por “pollo BB” se alude al pollo recién nacido, que proviene de la incubación de huevos de gallinas.

bajos recursos y graves problemas nutricionales; el equipo sumó también investigaciones dirigidas a obtener una alta resistencia a enfermedades usuales. Bajo la misma prerrogativa, lograr una selección aviar dirigida que permitiese el uso de una nueva (además de barata y disponible) alimentación, incorporaron el estudio de resistencias inmunológicas. En especial, algunos ensayos estaban dirigidos a generar una selección de grupos resistentes a la coccidiosis, una enfermedad parasitaria muy común producida por parásitos (coccidios) en el intestino delgado. La enfermedad, que en 1926 motivó la creación de las “jaulas de postura” para pájaros con el fin de evitar el contagio del animal por el contacto con sus propias heces, se asociaba al uso de coccidiostáticos para combatirla.

En 1968 Kraft viajó como ponente a la Segunda Conferencia de la Asociación Mundial de Producción Animal (WAAP) que, patrocinada por distintos organismos estadounidenses entre los que figuraban la propia WAAP y la FAO, tuvo sede en Maryland. En esa oportunidad, el trabajo mostraba los resultados de experimentación con aves dirigidos a generar resistencia a la coccidiosis, y explicaba que el objetivo era superar la necesidad de utilizar fármacos para combatirla (Kraft *et al.*, 1968). Esto, según percibían, “frente a las grandes corporaciones era otro insulto” (Kraft, 2012). Junto a una distinción recibida en el evento, la presentación le valdría la visita del director de una de las principales compañías farmacéuticas productoras de Amprol, el coccidiostático más reconocido por entonces como fármaco encargado de combatir la enfermedad.

A los pocos días de finalizado el Congreso, el presidente de una de las principales compañías farmacéuticas estadounidenses arribó a la estación experimental de Pergamino. Buscaba consultar al investigador que había presentado el *paper* sobre resistencia inmunológica. Una vez reunidos, el investigador del INTA explicó que utilizaba el coccidiostático, pero que “pretendía no hacerlo en un futuro y para eso seleccionaba las que vivían bien sin Amprol”. Deslizó además una sospecha al comentar que no le extrañaría “si la compañía compraba las cabañas genéticas [las que producen los huevos o los pollos bebés]” (Kraft, 2012, entrevista). La preocupación remitía a la posibilidad de que se desarrollase el proceso inverso al buscado por la investigación: generar gallinas dependientes del fármaco. Si bien nunca existieron pruebas al respecto, al poco tiempo las revistas de agricultura anunciaban la fusión entre las principales

compañías farmacéuticas y las cabañas avícolas. En este contexto, desarrollar líneas genéticas nacionales constituía un escollo: la posibilidad de no depender del alimento balanceado, ni de fármacos o insumos veterinarios, aunque no estuviera planteada en una escala industrial era vista con recelo en un contexto en el que los actores ligados a la investigación pública y los representantes del sector privado participaban de un mismo entorno. Los importadores locales de la zona, representantes de casas matrices extranjeras, compartían eventos sociales y académicos con los investigadores del INTA y mantenían lazos fluidos con ellos, al igual que sucedía en otros rubros del sector.

A la tarea del equipo radicado en la experimental, su principal investigador fue aportando herramientas que eran producto de su trabajo de años recolectando aves de orígenes diversos respecto de tolerancia de climas, alimentación y enfermedades, en función de “tener algún día razas argentinas de carne y de postura lo más resistentes posible a nuestras condiciones del interior” (Kraft, 1966). Mientras los resultados preliminares iban siendo presentados en sucesivos foros internacionales, algunos huevos provenientes del África llegaron a la estación experimental pergaminense del INTA a raíz de un contacto establecido en el XIV Congreso Mundial de Avicultura, realizado en Madrid en 1970. Allí, además de volver a presentar los avances del grupo (Kraft, 1970 a, b), Kraft fue invitado por los encargados de la ayuda agrícola externa alemana para Túnez (también participantes del Congreso) a visitar la capital de Liberia, donde radicaban sus actividades. A doscientos kilómetros, en Banga, una pequeña aldea, las aves sobrevivían a condiciones sanitarias deficientes y además ponían huevos de cáscara dura, característica que por facilitar el transporte y manejo era siempre muy buscada. Producto de ese intercambio, fueron luego incubados algunos ejemplares en la estación experimental. Tres hembras ponedoras y dos machos dieron inicio a una nueva línea genética, la “liberiana”, que durante otras nueve generaciones fue cruzada con distintas estirpes comerciales para aprovechar algunas de las características originarias: dureza de cáscara y extrema rusticidad (Kraft, 2009).

Para 1968, el proyecto había alcanzado un avance cualitativo. La octava generación, para la cual fue acuñado el término “Genética Nutricional” (Kraft *et al.*, 1968), mostraba una supervivencia creciente a la nueva alimentación. Del 20% original, los ejemplares sometidos al tratamiento nutricional tenían, a la octava generación, una supervivencia de un 85% (Kraft, 2009). El resto de la alimentación se completaría,

después de lograr una población estable y más numerosa, con la libre ingesta que los animales pudieran obtener en el medio natural para el que estaban destinados.

Sin la utilización de insumos veterinarios, (las vacunas nunca fueron utilizadas, ya que se buscaba emular las condiciones que tendrían las aves en las zonas carentes de recursos para las que estaban destinadas), el trabajo requería más constancia que grandes inversiones. En comparación con las estirpes comerciales híbridas, alimentadas a base de alimentos balanceados de máxima calidad, su calidad industrial era menor pero las primeras tenían “un precio que el poblador del norte santafesino o del interior chaqueño o formoseño jamás podría pagar” (Kraft, 2009).

Habiendo alcanzado un adelanto sustantivo respecto del punto de partida original, restaba la segunda fase: probar las nuevas líneas de animales, únicas en su tipo, en el interior del país y comprobar su resistencia allí a las condiciones alimenticias planteadas (Kraft, 2009). El proyecto preveía también, en caso de lograr los resultados esperados, instrumentar su exportación a regiones de África e India, también caracterizadas por una gran disponibilidad de sorgo y algodón, y por poblaciones con grandes déficits de proteínas en su alimentación. Sin embargo, los años de ensayos y experimentaciones estaban por terminar.

### **1.3. Intervención y desmantelamiento**

En 1976 la investigación había evolucionado con algunas dificultades, entre ellas la falta de animales, pero, no obstante, mostraba una población estable. Mil doscientas familias de aves, alrededor de treinta y tres mil animales, integraban la población total y la selección la integraban 35 familias de aves, alrededor de 2400 aves seleccionadas y endocriadas (Kraft, 2012, entrevista).

Una vez producido el golpe de Estado, la intervención militar del INTA reconfiguró en buena medida el mapa institucional. En la estación experimental de Pergamino, mientras el director y algunos responsables de secciones permanecieron en sus funciones, 46 trabajadores (operarios, técnicos, extensionistas e investigadores) fueron dejados cesantes por “razones” de seguridad el 2 de abril de 1976, dos fueron separados a fines del mismo año, y seis trabajadores fueron detenidos y privados ilegalmente de su libertad. Otros cuatro, entre quienes figuraba el entonces jefe de la

agencia de extensión, habían sido ya prescindidos en 1974 en la primera “limpieza” que se produjo antes del golpe de Estado. Una gran cantidad, en todas las categorías, desarrollaba actividad gremial.

Dentro de las cesantías producidas en el área de investigación, una fue la de Siegfried Kraft. Estando ya cesante y teniendo prohibido el ingreso al predio del INTA, consiguió entrevistarse con el interventor militar en Buenos Aires. El pedido concreto que llevó era que se preservasen los ensayos e investigaciones realizados en avicultura. A partir de una comunicación entre el interventor y el director de la estación experimental de Pergamino, el aviso fue que continuarían su curso.

Tiempo antes, el director del Instituto de Ciencias Médicas de Rosario había viajado a Pergamino a ver los ensayos y, estando al tanto de la situación de la estación experimental, propuso llevarse los animales exitosos a la Escuela de Agronomía de la Universidad Nacional de Rosario. Sin embargo, este movimiento fue interpretado por Kraft como una traición a la institución: “yo pensé que no podía robarle al INTA sus propios materiales. En eso operó la mística del INTA. Era como traicionar al ejército” (Kraft, 2013, entrevista). La conformación de una identidad institucional dentro del instituto, signada por un alto sentido de pertenencia de muchos de sus integrantes, y también por una estructura fuertemente corporativa, mostraba así sus efectos. También, el papel que el establecimiento de redes personales (de ayuda mutua, así como de rivalidad entre equipos y áreas de trabajo) jugaba en la dinámica institucional. Sin el apoyo “protector” de antiguos directivos a nivel nacional, aislado en el marco de su estación experimental y con la rivalidad manifiesta del director de la misma, la posición de Kraft se había debilitado.

Finalmente, el 20 de diciembre de 1976 Jorge Rafael Videla, jefe del ejército y designado presidente de facto por la Junta Militar, realizó una visita a Junín. Por su proximidad, el itinerario contemplaba una visita a la estación experimental de Pergamino. Una tormenta impidió que el avión aterrizara y la visita nunca se concretó. Sin embargo, parte del personal militar que escoltaba la actividad llegó por tierra a Pergamino. Una de las tareas realizadas consistió en buscar (sin éxito) a Kraft en su domicilio y requisar la casa de su principal ayudante, integrante del mismo equipo de trabajo en la estación experimental del INTA y encargada de llevar el registro del peso de las aves. Sin encontrarla en su domicilio, procedieron a desvalijar la vivienda y a

llevarse a su padre maniatado, para dejarlo finalmente en un pueblo cercano. Aparentemente sin demasiados elementos o comprensión sobre su contenido, la frase que repetía el personal militar usado como fuerza de choque era “que se dejen de joder con las gallinas”. Al día siguiente, la ayudante presentaba la renuncia al INTA.

Para diciembre de ese mismo año estaba prevista la cesión de los animales a la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), con el objetivo de someter a nuevas pruebas los ensayos y fomentar la reproducción por avicultores de todo el país, emulando una experiencia similar desarrollada en Francia por el INRA. No llegó a concretarse. Poco tiempo después de la actuación del personal militar en Pergamino llegó a la estación experimental del INTA una orden que parecía conjugar la irracionalidad extrema con la pericia: eliminar las aves que integraban los ensayos experimentales. La totalidad del material genético fue destruido y las 35 familias obtenidas, integradas por miles de aves endocriadas y seleccionadas, fueron destinadas a faena. El equipo de investigación fue dispersado y cesanteado.

Después de cuatro años de circular por oficios y ocupaciones varios (repartidor de leña, asistente en una semillería, veterinario en un criadero), que sólo tenían en común la interrupción reiterada del trabajo, “llegaba una llamada desde el INTA”, “me volvían a echar”, Kraft se trasladó a la provincia de Córdoba y comenzó a ejercer como profesor en la Universidad Nacional de Río Cuarto. Sin personal a cargo, su actividad se centró más en la docencia. La investigación, sostenida por años no encontró continuidad. Como hemos señalado, con el retorno de la democracia, el INTA ofreció reincorporar al personal separado del organismo por normativas de la Junta Militar (SAyG-INTA, 1984). A pesar de que muchos reingresaron, los retornos no fueron sencillos. En muchos casos implicaba volver a un mismo espacio, con antiguos directivos o integrantes sospechados de participar en la implementación de las cesantías y la conformación de “listas negras”. En otros, la antigüedad, el lugar o el puesto de trabajo eran materia de conflicto. No faltó quienes iniciaron acciones judiciales y quienes denegaron el ofrecimiento. En el caso de Kraft, se le ofrecía retornar al INTA pero en Concepción del Uruguay, donde nunca antes había trabajado. No aceptó y pasarían muchos años aún para que el capítulo de las gallinas ponedoras pudiera ser incorporado a la historia de la institución.

## 2. A modo de cierre

La trayectoria reconstruida, radicada en una de las principales y más antiguas estaciones experimentales del INTA, contiene algunas particularidades, ligadas a su objeto y a los objetivos de trabajo, que motivaron su reconstrucción. Al mismo tiempo, su desarrollo se encuentra ligado a la situación general, no sólo del organismo, sino también de la propia estación experimental en este período. En relación con la situación de la estación experimental de Pergamino, donde se asentó el trabajo de investigación analizado, el número de cesantías fue de los más altos del INTA. Del total de las cesantías registradas durante la intervención militar en la estación experimental, el 10 % se desempeñaba en funciones administrativas, el 14% como obreros, el 27% eran extensionistas y el 49% desarrollaba tareas de investigación (científicos y técnicos). Dentro de las distintas áreas de investigación, como se ilustra a continuación, las más afectadas en cantidad de cesantías de técnicos e investigadores fueron Suelos (36%), Producción vegetal-fitomejoramiento (24%), Economía (20%) y Producción animal (avícola y porcinos, 20%).

### 3.1. Distribución de cesantías por áreas de investigación (EEA INTA Pergamino)



Fuente: Elaboración propia sobre la base de Secretaría de Estado de Agricultura y Ganadería; INTA; capitán de fragata Alberto Rafael Heredia [interventor militar] (1976). “Resolución N° 1/76 y Planilla Anexa”. Buenos Aires: INTA [Personal declarado cesante por la intervención militar]. Entrevistas a integrantes de la EEA INTA Pergamino.



Acompañada de múltiples mediaciones y complejas vinculaciones, establecidas entre la continuidad de programas y planes de investigación y la profundización de la apropiación privada de los conocimientos científico-tecnológicos generados en el ámbito público, una experiencia pionera de investigación abocada a generar una selección aviar dirigida fue desestructurada. Por su contenido, motivaciones y potencialidades, muestra una de las facetas más explícitas en la relación entre actividades científicas y el régimen dictatorial. Si bien la desarticulación de arriba hacia abajo no fue la única variante en esta dinámica, sí fue una de sus manifestaciones. En este caso, en una trayectoria de investigación signada por la búsqueda de un camino alternativo que conjugara experimentación científica, autonomía tecnológica y compromiso social.

Desde 1989, el impulso a la autoproducción de alimentos sería fomentado por el programa ProHuerta del INTA y, aunque centrado en la generación de huertas familiares, incorporaría la provisión de animales de pastura (las gallinas negra INTA) y de carne (los pollos camperos). Sin embargo, las investigaciones que entre 1956 y 1976 se desarrollaron en Pergamino no tuvieron continuidad dentro del INTA ni fuera de él. La generación de líneas genéticas en aves fue cubierta por el sector privado, que ocupó los eslabones estratégicos en la cadena de producción avícola, desde la generación de tecnologías (frecuentemente a partir de grandes empresas transnacionales, en ocasiones de los mismos grupos que las principales semilleras) hasta los proveedores intermediarios de insumos. Por su parte, los productores menos capitalizados frecuentemente no pudieron acceder a estos materiales. Ningún desarrollo tecnológico fue especialmente dirigido a las poblaciones que continuaron habitando las tierras otrora controladas por La Forestal, las que, luego de intensiva explotación, siguieron mostrando altísimos índices de desnutrición y carencias básicas insatisfechas. Años después, un informe institucional señalaba: “El INTA ha quedado rezagado y el sector multinacional presenta en esta área [la producción aviar] una dinámica que es difícil de alcanzar” (INTA, 1989).

## **CAPÍTULO VI**

### **Semillas, conocimiento y propiedad**

#### **Mecanismos de apropiación y cooptación de conocimiento científico-tecnológico**

##### **1. Resumen**

Este capítulo explora algunos mecanismos de transferencia, cooptación y apropiación privada de conocimientos orientados a la actividad agropecuaria, producidos en Argentina en el ámbito público. A partir del estudio de la trayectoria histórica del INTA en la generación, adaptación y difusión de semillas mejoradas, se explora su dinámica de investigación en tres cultivos estratégicos: trigo, soja y maíz. La obtención de híbridos de maíz posee un tratamiento en mayor profundidad, debido a que -como se desarrolla- en su producción el conocimiento plausible de ser apropiado posee una significancia particular.

El estudio se centra en las décadas de 1970 y 1980, coincidentes con el período correspondiente a su intervención durante la última dictadura, a través de una mirada panorámica de larga duración que recupera también las primeras etapas previas. Con el objetivo de identificar continuidades y rupturas en su trayectoria, se exploran vinculaciones con transformaciones sectoriales, políticas y económicas.

## CAPÍTULO VI

### Semillas, conocimiento y propiedad

#### Mecanismos de apropiación y cooptación de conocimiento científico-tecnológico

No hay cosa más estratégica que la semilla. El mejor vector tecnológico que tiene un productor es la semilla. (...) Y desde el punto de vista del país, también. Si manejás la calidad de los cultivares, manejás la calidad de la producción agropecuaria argentina. Entonces, hay un rol indelegable ahí que tiene que tener el Estado.

(Fitomejorador del INTA, entrevista, )

##### 1.1. Investigación pública en genética vegetal y apropiación de conocimiento

La apropiación privada de conocimiento y su transformación en mercancía ha constituido una constante histórica en la instauración de las relaciones sociales capitalistas desde sus orígenes<sup>208</sup>. Este capítulo explora algunos mecanismos de transferencia y de apropiación por parte del sector privado de los conocimientos producidos en Argentina en el ámbito público, orientados a la adaptación, creación y difusión de semillas en algunos cultivos estratégicos, y su vinculación con la dinámica socio-económica reciente. Mediante la reconstrucción de la trayectoria del INTA, se analiza en particular el período comprendido por la última dictadura. Este enfoque busca analizar, en un contexto de creciente centralización y concentración del capital, de qué forma los conocimientos producidos públicamente por el INTA fueron apropiados,

---

<sup>208</sup> Como señala Nuñez Jover, la interpretación marxista de la ciencia permanece en los márgenes de la cultura académica. Sin embargo, “Cada vez es más claro que no se puede discutir ciencia y tecnología sin examinar sus interacciones dinámicas, sus relaciones de constitución recíprocas con las sociedades donde se desarrollan. La fuerza de las ideas de Marx radica en su propuesta de que toda teoría de la ciencia tiene que remitirse a una teoría de la sociedad donde se revelan los principales intereses, actores y fuerzas que la mueven. [...] la subordinación del desarrollo tecnocientífico, y con él de los valores, políticas e instituciones que lo hacen posible, a la lógica de reproducción de capital es una realidad aún más palpante que la constatada por Marx a finales del siglo XIX” (Nuñez Jover, 2001: 99).

en qué diferían (o no) las racionalidades que guiaban el ámbito público y el privado, cómo se transformó históricamente esta dinámica y cuál fue la especificidad que adquirió en el pasado reciente.

A nivel internacional, el avance -situado alrededor de la década de 1970- hacia la privatización de la ciencia y la tecnología ha sido señalado por distintos especialistas (Rose y Rose, 1976; Nuñez Jover, 2001). En este sentido, Pestre (2005) marca una transformación en la producción de saberes para este período y discute los efectos de la creciente apropiación privada del conocimiento científico. En cuanto a la investigación orientada al agro, Palladino (2002) señala que, luego de la transformación durante 1960 del fitomejoramiento en la era de la ingeniería genética, para 1970 la reorganización de la investigación agrícola se caracterizó por una integración de la actividad académica y los servicios de extensión rural con políticas económicas tecnocráticas y corporativistas. Asimismo, en Estados Unidos, para 1980 dos transformaciones del marco regulatorio de la actividad de CyT se vinculaban a esta problemática. El Acta de Transferencia de Tecnología de Stevenson-Wydler, que facilitó los convenios entre laboratorios públicos, universidades y empresas, y la Enmienda Bayh-Dole a las leyes de patentes, que otorgó a las universidades y centros de investigación la posibilidad de percibir derechos de propiedad intelectual por trabajos realizados con fondos públicos (Krimsky, 1991).

El estudio de la trayectoria institucional del INTA en la creación, adaptación y difusión de semillas no fue una elección arbitraria: se trata de un área de investigación íntimamente ligada a las transformaciones productivas que registra la actividad agrícola del período. Para ese entonces, la agricultura argentina experimentaba un proceso de transformaciones, con eje en la región pampeana, vinculado como hito local a los ecos que la llamada “revolución verde” generaba a nivel internacional. Luego de una primera recuperación durante 1960, a lo largo de la década de 1970 el crecimiento de la producción agrícola pampeana se tornó vertiginoso, hasta alcanzar una cosecha record a nivel nacional en 1984-1985 (Balsa, 2006: 133)<sup>209</sup>. Mientras que las décadas de 1950 y 1960 se destacaron por la difusión de maquinaria e implementos agrícolas (fundamentalmente, la tractorización y la cosechadora de maíz, que redujo en gran

---

<sup>209</sup> Si bien durante la década de 1960 la producción agrícola pampeana recuperó el nivel alcanzado en las décadas de 1920 y 1930, en torno a las 16 millones de toneladas, fue en estos años cuando se llegó a las 36 millones de toneladas de cereales y oleaginosas en la región pampeana y 44 millones de toneladas en todo el país (Balsa, 2006).

medida el trabajo manual), la década de 1970 se distinguió por la introducción de semillas mejoradas (de trigo, maíz, sorgo granífero y girasol) (Barsky y Gelman, 2009). Las innovaciones tecnológicas, basadas fundamentalmente en la adopción de agroquímicos, la utilización de semillas nuevas y los procesos de mecanización, fueron analizadas como un elemento clave dentro de este proceso (Obschatko, 1988).

La contracara de esta expansión estuvo dada, como ya señalamos, por las crisis de las economías regionales y el agravamiento de las condiciones de producción de los productores familiares y minifundistas (Alemany, 2009). Si bien la mecanización de la producción y la difusión de técnicas de cultivo y prácticas agronómicas de manejo fueron un aporte necesario para el incremento de la producción del sector, el núcleo del cambio tecnológico estuvo protagonizado por el mejoramiento genético incorporado a las semillas. Las nuevas variedades de alto rendimiento de trigo (los “trigos mexicanos”) y los híbridos de maíz (así como de sorgo y girasol) constituyeron el eje de las semillas mejoradas obtenidas. En este período, también se produjo la introducción de lo que décadas más tarde se revelaría como un cultivo clave: la soja. Como señalaba la ingeniera agrónoma Marta Gutiérrez en un temprano diagnóstico de la actividad, este proceso de cambio técnico se produjo en un contexto institucional y normativo construido a lo largo de varias décadas y tuvo “su origen en la actividad del sector público y en *determinadas formas de articulación público/privada*” (Gutiérrez, 1986: 1)<sup>210</sup>. El INTA fue un agente clave en este proceso. Con el objetivo de explorar la dinámica de investigación del instituto, nos concentraremos en los siguientes apartados en analizar su rol en tres cultivos fundamentales para la agricultura local.

## **1.2. Interrogantes y problemas**

La “selección vegetal” fue realizada por siglos en forma espontánea por millones de agricultores a lo largo del mundo. En la medida que la semilla se convirtió en mercancía, su forma de producción también fue modificándose. Uno de los puntos clave de este proceso, situado a comienzos del siglo XX, fue el desarrollo científico. En

---

<sup>210</sup> El subrayado es propio. Precisamente, esta “articulación” que la autora menciona es materia de nuestras indagaciones y reflexiones. Desde otro ángulo y con percepciones por momentos encontradas, remitiremos en forma reiterada al trabajo de Gutiérrez, en gran medida por considerar su condición de integrante del INTA con el consecuente acceso a material empírico relevante.

particular, la difusión de técnicas de hibridación sobre la base de las leyes de la herencia de Mendel y los principios de hibridación de Vilmorin (Cataife, 2002). Pero la semilla no fue la única que se transformó en mercancía. Más lentamente, también lo hizo el propio conocimiento científico-tecnológico. Como indican Kreimer y Zukerfeld (2014), si bien la relación entre producción y uso de conocimientos ha sido abordada por diversos enfoques provenientes del campo CTS, el de la economía de la innovación y en los estudios sobre propiedad intelectual, en general estos no han indagado las tensiones producidas a partir de la utilización, con fines de lucro, de conocimientos producidos sin ánimos mercantiles<sup>211</sup>.

El INTA fue un agente fundamental en el desarrollo de la genética aplicada al sector agropecuario en el país. Como se señala en un informe institucional reciente: “Los recursos fitogenéticos son mucho más que insumos básicos para los programas de mejoramiento de las especies cultivadas: son base de la alimentación de la humanidad” (INTA, 2009: 5)<sup>212</sup>. En ese sentido, su relevancia social posee un rol clave.

Durante la década de 1960 la creación y difusión de semillas mejoradas atravesaron la configuración del espacio rural argentino y, en particular, el pampeano (Pizarro, 2003). La tecnología utilizada para obtener cultivares y producir semillas mejoradas tuvo a la genética como matriz disciplinar, unida a la experimentación en campo. Los plazos requeridos para la investigación, en tiempos en donde aún no intervenían los marcadores moleculares propios de la biotecnología, requerían entre 5 y 15 años. El mejoramiento genético de las plantas cultivadas permitió lograr un aumento de los rendimientos, la resistencia a enfermedades y plagas, y la mejora de la calidad de las cosechas (Hartmann, 1997; Howell, 1998).

Las semillas mejoradas se dividen entre especies autógamas (como el trigo y la soja), y aquellas para las que existen métodos de hibridación (como el maíz, el sorgo y el girasol). Dentro del primer caso, el agricultor puede hacer su propia semilla, ya que la semilla que dio origen a la planta y el grano cosechado contienen la misma información genética. Opera en este sentido, como una “tecnología autorreproducible” (Gutiérrez, 1986: 3). Esto implica que una nueva creación de una especie autógama es fácilmente

---

<sup>211</sup> Para una revisión crítica de diversas perspectivas ligada al capitalismo cognitivo, véase la realizada por Sztulwark y Míguez (2012). Para uno de los exponentes de esta corriente, véase Vercellone (2011).

<sup>212</sup> Según la FAO (1998) se denomina “recursos fitogenéticos” a “todo material genético de origen vegetal de valor real o potencial para la alimentación y la agricultura”.

reproducibile. En cambio, en el caso de las alógamas el grano cosechado no puede ser usado como simiente, lo que obliga al agricultor a comprar semilla todos los años. De otro modo, los rendimientos decrecen paulatinamente. La hibridación rompió la identidad genética entre la semilla (medio de producción) y el grano (producto final), instando a los productores a recurrir al mercado para obtener semillas en cada cosecha (Katz y Bercovich, 1990). El acceso a la información de las líneas que forman el cultivar híbrido opera en este caso como un elemento clave, en donde el obtentor juega un rol sustancial. El monopolio de la información sobre la fórmula (la combinación de líneas) que da origen al híbrido, se convirtió en un factor de peso dentro de la industria semillera.

Dentro de los híbridos, la semilla de maíz es la más importante de toda la industria. Por esta razón -su relevancia y el rol que el conocimiento jugó en su producción en tanto híbrido- el estudio de los mecanismos de apropiación del conocimiento científico-tecnológico generado por el INTA se realiza en mayor profundidad en el apartado dedicado a este cultivo. Al mismo tiempo, el estudio del rol del organismo en dos especies autógamas fundamentales -trigo y soja- permite comprender el destacado papel que cumplió el sector público, desarrollando investigaciones en áreas incapaces de generar conocimientos plausibles de ser apropiados comercialmente.

¿Qué conexiones existieron entre estas investigaciones, la dinámica socio-económica del período y las transformaciones políticas en curso? ¿Qué continuidades y qué rupturas tuvo esta línea de trabajo del INTA durante su intervención militar? Para responder estos interrogantes, analizaremos la trayectoria histórica del INTA en maíz, trigo y soja. Se abordan las dinámicas de investigación involucradas, analizando cómo diversos elementos funcionaron como mecanismos de apropiación de conocimientos. Marcos regulatorios, prácticas científicas, establecimiento de redes de cooperación, obtención y uso de resultados, serán abordados como parte fundamental de estas dinámicas.

## 2. Mecanismos de distribución y comercialización de las semillas oficiales

Antes de explorar el rol del INTA en estos tres cultivos estratégicos, cabe hacer algunas aclaraciones sobre sus mecanismos de articulación para multiplicar y comercializar semillas. Desde sus orígenes, el instituto contó con los planes y programas de mejoramiento vegetal de las distintas estaciones experimentales y recibió como herencia del Ministerio de Agricultura todas las variedades vegetales que habían sido obtenidas previamente dentro su ámbito. Luego, fue creando nuevos grupos de mejoramiento en sus distintas unidades.

En un principio, la única posibilidad que el INTA tenía de multiplicar y distribuir variedades era dentro del ámbito de sus estaciones experimentales. Como no tenía capacidad de multiplicación, ni comercial para difundirlas, impulsó la conformación de “asociaciones cooperadoras”. Entidades jurídicas separadas del instituto, integradas por productores de cada zona y presididas por el director de cada estación experimental, funcionaban con un Consejo local comercializando productos obtenidos de sus planes de investigación. Como explica una ingeniera agrónoma del organismo, “muchas Cooperadoras que surgieron en experimentales que tenían grupos poderosos de mejoramiento en variedades se constituyeron también en semilleros [privados]” (entrevista, 01-03-2012). Tiempo después, cuando la multiplicación interna y las asociaciones cooperadoras no bastaron, el INTA impulsó la creación de cooperativas de productores de semillas originales, para las que creó la figura de “distribuidor autorizado”. Así, en 1971 se constituyeron cooperativas que pasaron a ser distribuidores del INTA en distintas regiones de la zona semillera y comenzaron a comercializar a una escala más grande las semillas de las variedades del organismo<sup>213</sup>.

A diferencia de las asociaciones cooperadoras, que utilizaban bienes que el INTA les daba en comodato y derivaban las ganancias obtenidas a las experimentales, las nuevas “cooperativas” debían pagar al INTA un 5% del valor de la semilla fiscalizada y comercializaban a su riesgo. Estaban integradas por los productores de mayor capacidad comercial de cada zona, y, agrega la misma técnica, “eran empresas

---

<sup>213</sup> Principalmente en Marcos Juárez, Oliveros, Paraná, Manfredi, y Pergamino. En este último caso, ProDuSem (Productores de Semillas Selectas) luego se transformó en una S.A., que para 1987, en el marco de la nueva política de vinculación tecnológica del INTA, firmó un convenio para financiar el Programa Trigo del INTA a cambio de obtener la licencia de sus variedades. Luego fracasó y fue desarticulada, al igual que las de Paraná y Oliveros. Continúan la de Marcos Juárez y Manfredi.



que estaban constituidas en productoras de semillas y agrupadas en cooperativas, una manera de tener mayor competitividad en el mercado porque nucleaba a un grupo de multiplicadores” (entrevista, 01-03-2012). En este sentido, el funcionamiento “cooperativo” se vinculaba más bien a la forma de asociación, antes que a la clásica acepción del término<sup>214</sup>. Tanto los precios como las condiciones de venta estaban sujetos a la aprobación de la Dirección Nacional de INTA y eran uniformes para el conjunto de las cooperativas y asociaciones cooperadoras. Un servicio, “Fomento Agropecuario”, controlaba la producción de semillas (las propias, las de cooperadoras y las de cooperativas o distribuidores autorizados) estableciendo los planes de producción y acordando precios de las variedades.

El INTA realizaba la investigación y el desarrollo tecnológico y las “cooperativas” multiplicaban y comercializaban las semillas. En esta dinámica, mientras que el INTA utilizaba en alguna medida la estructura comercial de estos productores, les permitía a cambio prescindir de la inversión en investigación y desarrollo tecnológico.

En 1974, el organismo manifestaba la necesidad de velar por aumentar la multiplicación de sus cultivares (CD INTA, Acta 621, 14/05/1974). Con este espíritu fue modificada la resolución 205/71 que regulaba el accionar de las cooperativas. Se estableció que el distribuidor autorizado debería abonar al INTA “en razón de su paternidad y como criador del cultivar, así como por la supervisión del cultivo, de la cosecha y del acondicionamiento de la semilla original y por el uso de la sigla INTA” (CD INTA, Acta 621, 14/05/1974) una retribución en efectivo del 2% sobre el valor establecido. Este porcentaje fijado como arancel era uniforme para todos los cultivares, y pasaba a cobrarse sobre el precio de lista en venta al público de cada cultivar. Sin embargo, las multiplicaciones propias disminuyeron paulatinamente, a falta de una estructura comercial interna:

---

<sup>214</sup> Si bien el INTA no cuenta con un listado oficial completo, y menos de su composición por tipo de productores, se trataba de los más relevantes de cada zona.

Superficie y producción de semillas originales de INTA de multiplicación exclusiva en establecimientos del INTA

| <b>Año</b> | <b>Superficie</b> | <b>Producción</b> |
|------------|-------------------|-------------------|
| 1975/76    | 21,6%             | 21, 2%            |
| 1976/77    | 9,6%              | 4,6%              |
| 1977/78    | 5,2%              | 5,2%              |

Fuente: elaboración propia en base a INTA (1978).

Para 1985, según reseñan desde el área de vinculación tecnológica del organismo, “había desaparecido la multiplicación propia. Lo único que mantuvo es el mantenimiento de la pureza varietal de las variedades ya obtenidas, y la producción de la semilla prebásica” (entrevista, 01-03-2012). Esta transformación también afectó a las cooperativas. La reducción de su margen de acción fue simultánea a la concentración y transnacionalización del sector. Este proceso de concentración venía desarrollándose a la par de su accionar, desde la década del 1960. Y fue adquiriendo manifestaciones cada vez mayores. Si bien mientras que la articulación entre el INTA y estas organizaciones asociadas fue primordial no se tradujo en una distribución horizontal ni masiva de sus recursos, conocimientos o semillas, el instituto mantenía en este esquema un elevado poder de regulación y control, asociado a una superior autonomía en su accionar, que disminuiría significativamente. El resto pasó a delegarse mayormente en licenciarios, de la mano de nuevas configuraciones que -como veremos- adquirió la política de vinculación tecnológica del organismo.

### **3. El rol del INTA en trigo (o cómo la investigación oficial repuntó la producción triguera)**

Para la década de 1950 existía un estancamiento en el rendimiento de los trigos locales<sup>215</sup>. El INTA fue, entre otras cosas, una solución para esta problemática. Uno de los imperativos que marcó la creación del INTA fue la misión de abastecer de tecnologías generadas en centros de investigación de las principales potencias. Por las características del proceso tecnológico ligado al fitomejoramiento genético, el acceso a

---

<sup>215</sup> Vinculado al alto grado de parentesco de los materiales existentes (Calzolari, Polidoro y Conta, 1984).

redes internacionales resultó desde los comienzos central y fácilmente realizable. El germoplasma<sup>216</sup>, eje de las investigaciones, podía ser fácilmente trasladado. Y el marco de la “revolución verde” fomentaba la difusión tecnológica. Sin embargo, la adopción no iba a ser tan sencilla. El INTA, lejos de jugar un papel de mero intermediario, iba a tener un papel fundamental en la generación y difusión de nuevos trigos, que iban a propagarse por las pampas.

La “revolución verde” fue el nombre con el que se conoció la transformación de la producción agropecuaria a nivel mundial, a partir de una fuerte inversión tecnológica en la producción agrícola destinada a incrementar los rendimientos de los principales cultivos. Esta “difusión” no estaba, como veremos, desprovista de intereses y conflictos. Si bien su comienzo es situado en la década de 1960, los programas de asistencia técnica fueron introducidos en América Latina desde 1940 y 1950 (Fitzgerald, 1986). Su difusión implicó una transformación radical de la agricultura, dominada por la mecanización y la generación de semillas genéticamente modificadas de alto rendimiento, unidas a un paquete de fertilizantes, pesticidas y herbicidas. Estos cambios estuvieron acompañados por la expansión a nivel mundial de la industria química, bioquímica y farmacológica. Uno de sus escenarios principales fue el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT), y uno de sus actores protagonistas el científico Norman Borlaug<sup>217</sup>, director del Programa Trigo del centro cargo hasta su jubilación oficial en 1979.

El CIMMYT había surgido de un programa piloto en México en 1943, patrocinado por el Gobierno de México y la Fundación Rockefeller. El proyecto fue desarrollar redes internacionales para poner a prueba nuevas variedades experimentales. Bajo la dirección de Borlaug, el CIMMYT desarrolló variedades de trigo (“los trigos enanos”) que respondían mejor a los fertilizantes que las variedades anteriores, crecían en diferentes latitudes, eran resistentes al vuelco (por su enanismo) y a una devastadora

---

<sup>216</sup> La variabilidad genética intraespecífica o los materiales genéticos que permiten perpetuar una población o especie vegetal, presente en este caso en las semillas.

<sup>217</sup> Nacido en Iowa, Borlaug (1914-2009) estudió fitopatología en la Universidad de Minnesota y obtuvo su doctorado en 1941. Entre 1944 y 1960 fue el científico de la Fundación Rockefeller a cargo de mejoramiento de trigo bajo el Programa Cooperativo Agrícola de México. Más tarde se desempeñó como consultor del Ministerio de Agricultura de México, y fue asignado al Programa de Alimentación Interamericano de cultivos como director asociado de la Fundación Rockefeller (CIMMYT, web). Para un estudio del rol de la Fundación Rockefeller en México, y de el impacto de la “revolución verde” en este país, véase Fitzgerald (1986).

enfermedad del trigo conocida como la roya del tallo (CIMMYT, web). Para la década de 1950, México era autosuficiente en la producción de trigo y los investigadores del proyecto, financiados por la Fundación Rockefeller, emprendieron una campaña vigorosa para exportar el modelo de innovación en otros países, como India y Pakistán, cuya población superaba la producción de trigo y arroz, entre otros. En 1967, India importó 18.000 toneladas de semillas de las variedades de trigo mejoradas, y durante 1967-1971 los dos países duplicaron su producción triguera (CIMMYT, web). El éxito de las nuevas variedades, junto con la difusión de las prácticas agronómicas de manejo que implicaban el uso de fertilizantes, provocó la adopción generalizada de las variedades mejoradas y las nuevas técnicas de cultivo. Las nuevas variedades de trigo revolucionaron la producción triguera en México desde mediados de 1950, y desde mediados de 1960 fueron extendidas a la India, Pakistán y América Latina. El fenómeno llegó así a ser llamado la “revolución verde”. Según el propio CIMMYT (web) “Los beneficios sociales y económicos de este movimiento fueron reconocidos en todo el mundo cuando el Nobel de la Paz fue otorgado a Norman Borlaug en 1970” y las variedades de trigo mejoradas “evitaron la hambruna y el hambre en el sur de Asia y otras partes del mundo”. Desde entonces, diversos autores han analizado críticamente el fenómeno. Entre los puntos señalados, se ha hecho hincapié a que -con el argumento de contrarrestar las hambrunas en distintas regiones- la modernización tecnológica del agro tuvo como contrapartida la aparición de fuertes transformaciones sociales, económicas y ambientales (Pengue, 2005). En este sentido, se ha señalado que los campesinos de menor escala no lograron adaptarse a los cambios y que las prácticas de extensión rural difundidas desde los Estados Unidos chocaron con los patrones culturales locales (Fitzgerald, 1986). También que esta “revolución verde” fue sostenida como alternativa, en línea a los fundamentos de la Alianza para el Progreso, a las “revoluciones rojas” que circulaban por el tercer mundo. Asimismo, fue convergente a la movilidad de capitales - en ascenso luego de la caída de Bretton Woods- que fomentó el accionar de grandes firmas, empresas transnacionales, laboratorios químicos, semilleras y comercializadoras exportadoras, que pasaron a controlar la mayor parte del mercado agrícola internacional (Teubal, 2001). En este escenario, el uso de insumos externos que conformó el paquete tecnológico (agroquímicos, semillas mejoradas y renovadas técnicas de irrigación) se incrementó notablemente (Perelmuter, 2011).

El INTA poseía el mayor campo experimental de trigo de toda Sudamérica, situado en su estación experimental Marcos Juárez. El científico Norman Borlaug sugirió la creación de un programa de cooperación científico-técnica. El “Programa Cooperativo Internacional”, planteado entre el CIMMyT, el INTA y la Fundación Ford se concretó en 1961. A través de esta articulación, el INTA introdujo los llamados “trigos mejicanos”, las líneas Norin 10 x Brevor y sus derivados. Destacados profesionales, entre ellos el propio Borlaug y John Lonnquist, participaron personalmente en la diagramación y realización de planes de mejoramiento de trigo y maíz que se asentaron en distintas estaciones experimentales del INTA; en especial en las de Pergamino, Bordenave, Paraná, Famaillá, Balcarce y, sobre todo, en Marcos Juárez. A partir de esta articulación, se introdujeron los famosos “trigos mejicanos” que revolucionaron el rendimiento del cultivo y se extendieron ampliamente por la agricultura argentina. Además de incrementar los rendimientos, el nuevo material introdujo variabilidad genética al germoplasma que ya estaba difundido, mejorando su resistencia inmunológica (Calzolari, Polidoro y Conta, 1984). Mediante la introducción del germoplasma mexicano y la realización de las investigaciones necesarias (a partir de cruza con variedades locales), en 1970 el INTA lanzó su nueva variedad, resistente al vuelco y de rendimientos significativamente mayores a los existentes<sup>218</sup>.

Durante la década de 1970 la zona norte triguera del país, tradicionalmente controlada por variedades pertenecientes a la firma Klein, fueron reemplazadas por variedades del INTA; mientras que la región sur continuó dominada por los trigos de Buck<sup>219</sup>, quien a diferencia del otro gran criadero nacional, incorporó rápidamente los nuevos trigos (Gutiérrez, 1986). En 1974, dentro de los objetivos del Plan Trienal impulsado por el Poder Ejecutivo, se estipulaba que el INTA debería incrementar el área cultivada y los rendimientos por hectárea, disponer de un volumen de producción anual que asegurara el abastecimiento de la industria molinera y disponer de saldos exportables. A través de 15 agencias de extensión rural distribuidas a lo largo de la zona

---

<sup>218</sup> La evaluación de la obtención de cultivares de trigo a partir de estos cruzamientos también fue hecha por el INTA, la calidad de la producción triguera local resultante era evaluada positivamente. Calzolari, Polidoro y Conta (1984) y Nisi y Galich (1983).

<sup>219</sup> La relación entre el INTA y Buck fue siempre cercana, el INTA llegó incluso a capacitar durante una estadía de 45 días a Hilda Buck en la Unidad Inmunología Vegetal del Departamento de Genética, a fin de profundizar sus conocimientos sobre las distintas enfermedades del trigo (INTA, resolución de Consejo Directivo N° 175, julio de 1975.)

triguera<sup>220</sup>, que involucraban a 110 extensionistas, el INTA estimaba llegar a 100.000 productores (CD INTA, ACTA 631, 1974).

Para 1975, lideraban el mercado, sobre todo en las subregiones del norte de la zona triguera. La producción de semilla original de trigo del INTA abastecía aproximadamente la cuarta parte del mercado nacional, y entre el 22 y el 28% de la semilla original de trigo del país era provista por sus cooperativas de productores de semillas (Gutiérrez: 1986). En una posición equivalente se situaban los criaderos de capital nacional Buck y Klein, y en último lugar las transnacionales.

Los trigos de origen mexicano difundidos por el INTA también fomentaron la introducción de la soja en el país. Debido a su ciclo corto y a que tenían una cantidad mucho menor de rastrojos, según explica un investigador del INTA que comenzó a trabajar como mejorador de soja en 1979, estos “permitían al productor inmediatamente atrás del trigo sembrar soja, facilitando así hacer el doble cultivo trigo-soja” (entrevista, 28-02-2012).

De acuerdo con un informe de INTA publicado en agosto de 1989, la superficie ocupada por cultivos de trigo producidos por INTA representaba entonces más del tercio total del área sembrada en el país. Los cultivares surgidos a partir de los cruzamientos realizados con germoplasma de origen mexicano también fueron incorporados por los semilleros y criaderos privados, que usaron este nuevo material genético debido a su alta productividad y resistencia al vuelco, lo que se traducía, en estimaciones del INTA, en un 90 a 95% de superficie cultivada con estos materiales en el país. Es decir, un tercio de los cultivares eran producto de la labor del INTA. Un 35% correspondiente a la semilla original y más del 60% a la semilla multiplicada por los semilleros (INTA, 1989).

Dentro de las creaciones del INTA los cultivares de especies autógamias de cereales y oleaginosas fueron las creaciones más abundantes, el trigo en primer lugar. Esta situación se explicaba en buena medida por el tipo de especie, que como indicamos implicaba la ausencia de atractivos comerciales en la fase de generación de las variedades. Según Alapin (2008: 30): “Las variedades autógamias, por razones evidentes, no interesaban a las empresas multinacionales de semillas, ya que esto no les garantizaba la captura de un mercado”. Sin embargo, los beneficios directos de la

---

<sup>220</sup> Fundamentalmente, Pergamino, Balcarce, Marcos Juárez, Rafaela, Paraná y Anguil.

introducción de los “trigos mejicanos”, como los indirectos que apuntalarían la expansión de la rotación trigo/soja, sí serían crecientemente aprovechados por los capitales privados. El INTA no tendría participación significativa en el posterior “boom” del cultivo. Había, eso sí, jugado un rol crucial en su difusión mediante su participación en los nuevos trigos y, como veremos a continuación, también tendría un rol directo en la introducción de la soja.

#### **4. Soja: el rol del sector público en los inicios del “boom”**

Si bien los primeros esfuerzos sistemáticos se sitúan a mediados de la década de 1950, los primeros antecedentes de la introducción de soja en Argentina datan de fines de SXIX (Harries y Ripoll, 1998). La instalación definitiva del cultivo en el país se produciría a lo largo de la década de 1970 -en la campaña 1976/77 la producción local alcanzaría el millón y medio de toneladas, el 2% de la cosecha mundial- y años más tarde, durante 1990, tendría lugar el “boom”<sup>221</sup>.

En la primera etapa relevante para la introducción de la soja (fines de 1950 y comienzos de 1960), se destacó la filial local -Agrosoja<sup>222</sup>- de un laboratorio extranjero, que realizó el primer intento comercial exitoso en 1956<sup>223</sup>. Un elemento distintivo de la iniciativa comercial de Agrosoja fue la existencia de un convenio con el ámbito público, que le permitió a la firma disponer de un plan de investigaciones agrícolas dedicadas a la introducción del cultivo. El organismo en cuestión fue la Dirección Nacional de Investigaciones Agrícolas, dependiente del entonces Ministerio de Agricultura de la

---

<sup>221</sup> No nos referimos en esta oportunidad a las particularidades que han caracterizado el uso de las semillas transgénicas resistentes al herbicida glifosato (soja RR) a partir de 1996, sino a la primera etapa de introducción del cultivo en el país, período por otra parte significativamente menos estudiado.

<sup>222</sup> En 1955 Ramón Agrasar fue designado como gerente de Agrosoja, filial de la firma Brandt Laboratorios S.A, y un año más tarde realizó las primeras importaciones de semilla de sorgo híbrido, generando una expansión de este cultivo, hasta ese entonces de menor importancia. Este éxito, resultante de los trabajos de Agrasar, fue determinante para que Dekalb demostrara creciente interés en Argentina, constituyéndose la sociedad Dekalb Argentina S.A. de la cual fuera su Presidente hasta 1987. En 1961 inició el mejoramiento del maíz flint, comenzando las ventas en 1965. Luego de conocer en 1971 al doctor Norman Borlaug, incidió en que Dekalb incursionara en el mejoramiento del trigo en Argentina, continuando luego con el girasol, lo que llevó a una explosiva superación de los rendimientos unitarios a partir de 1976. Véase Anales de la Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria (2000).

<sup>223</sup> Dentro del ámbito privado, una de las primeras plantas en procesar soja fue Indo SA, perteneciente al grupo La Plata Cereal. La Bolsa de Cereales de Buenos Aires fue otro de los espacios impulsores, en cuya revista desfilaron múltiples intervenciones a favor de la introducción del cultivo.

Nación, dirigido por quien sería uno de los pioneros del INTA<sup>224</sup>. El convenio establecía que el organismo oficial pondría a disposición el campo experimental, el personal auxiliar y la maquinaria agrícola necesarios para los ensayos de soja a realizar, y la empresa contribuiría con el costo de los ingenieros investigadores (Martínez, 1997)<sup>225</sup>. Los núcleos donde se realizarían los ensayos pronto pasarían a la órbita del INTA. Se trataba de las estaciones experimentales de Chaco y Pergamino. El INTA jugaría, en la etapa inmediatamente posterior, un rol destacado en la adaptación y difusión de cultivares de soja, realizando ensayos y definiendo el mapa agroecológico.

En la estación experimental de INTA Pergamino, luego de un año de ensayos se creó en 1957 la Sección Soja, la primera del país. La colección de cultivares se inició con 96 introducciones, provenientes de varios países de Asia, Europa y América. Los ensayos permitieron analizar comparativamente el rendimiento de los cultivares, las densidades de siembra, además del uso y aplicación de herbicidas. A partir de estos ensayos, detectaron que uno de los cultivares importado por Agrosoja (el cultivar “Lee”, destinado a la zona norte del país) tenía un comportamiento comparativamente superior a los otros cultivares importados para ensayar en la región. El investigador a cargo, responsable de la Sección Soja de la Experimental, pasó a ser en 1960 gerente técnico de Agrosoja SRL, y a partir de estas investigaciones la empresa logró en tiempo record la implantación de soja como cultivo extensivo. Las campañas se realizaron en Santa Fe, Córdoba y norte de Buenos Aires, y para 1961-1962 se amplió a Tucumán, donde se usaba para erradicar la caña de azúcar de zonas marginales. Según este investigador, que pasó a integrar las filas de Agrosoja luego de liderar los ensayos en la estación experimental de Pergamino, la implantación definitiva de la soja en Argentina ocurrió en 1962. Luego de siete años de iniciada la experimentación en la experimental, y a sólo dos años agrícolas de haber iniciado la campaña nacional de soja, una firma lograba una ganancia nada desdeñable, en palabras del investigador intiano pasado al ámbito privado, “una riqueza genuina” (Martínez, 1997: 2).

---

<sup>224</sup> El ingeniero Ubaldo García.

<sup>225</sup> Ex Jefe y fundador de la Sección de Soja en la estación experimental de Pergamino (INTA), Raúl Martínez en 1960 pasó a ser director técnico de la empresa Agrosoja S.R.L. Ex Investigador del Programa Soja en el Convenio Agrosoja SRL-INTA. Ex profesor e investigador de la Universidad Nacional de San Luis.



Durante el gobierno de Arturo Illia (1963-1966) otro hombre del INTA ocupó la Secretaría de Agricultura y Ganadería. El ingeniero Walter Kugler<sup>226</sup>, nombre que posee hoy la experimental de Pergamino a la que pertenecía, tuvo un accionar destacado en la decisión gubernamental que en 1965 estableció los primeros precios mínimos para la oleaginosa<sup>227</sup>. Años más tarde, Kugler establecería la fiscalización obligatoria para la semilla de soja. De acuerdo con una temprana publicación que brindaba información técnica sobre el cultivo de soja en el país, dentro de la Facultad de Agronomía de la UBA se dieron los primeros pasos en el estudio de su comportamiento agroecológico en 1958, y con la creación de la Red Nacional de Ensayos de Soja, en donde intervino fuertemente el INTA, comenzó a avanzarse en su expansión (Saumell, 1975). En 1970 se formó la Comisión Permanente para el Cultivo de la Soja y su cultivo fue declarado de interés nacional para 1972<sup>228</sup>.

Dentro del INTA, una de las estaciones experimentales de mayor incidencia fue la de Cerrillos (Salta), desde donde se coordinaba el Programa Nacional de Soja. En un comienzo, se pensaba que la soja estaba más bien destinada a las zonas del noroeste<sup>229</sup> y noreste, pero a fines de la década de 1960 y principios de 1970 incluyó a la zona pampeana. Las agencias de extensión de la pampa húmeda, entre las que se destacaban las de Casilda y San José de la Esquina y la experimental de San Pedro, impulsaron este proceso. La agencia de extensión de INTA Casilda organizó la primera reunión de

---

<sup>226</sup> En 1929 terminó sus estudios secundarios en la Escuela de Agricultura Santa Catalina, como perito en agricultura y ganadería, en 1933 egresó de la Universidad Nacional de La Plata, donde fue profesor de la cátedra de Genética y Fitotecnia. En 1948 realizó una estadía en la Universidad de Minnesota, enfocada en estudios sobre genética vegetal. Desde 1937 fue director de la experimental de Pergamino y en 1956, con la creación del INTA, se incorporó al instituto. Fue director general asistente de investigaciones agrícolas del INTA durante 1967-68, y coordinador general del Programa Cooperativo de Mejoramiento de Maíz y Trigo INTA-CIMMYT entre 1968 y 1970.

<sup>227</sup> Barsky (2008:31) describe esta situación afirmando que, “la gestión como secretario de Agricultura del ingeniero Walter Kugler logró que en 1965 la Junta Nacional de Granos estableciera patrones para su comercialización, fijando un precio mínimo y, al año siguiente, un precio sostén, que era el precio ofrecido en el mercado por la Junta.”

<sup>228</sup> A diferencia de las entidades patronales agropecuarias, que todavía no divisaban su potencial, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, la Junta Nacional de Granos, la Facultad de Agronomía y Zootecnia de Tucumán, la Facultad de Agronomía y Veterinaria del Nordeste, el Ministerio de Asuntos Agrarios de Santa Fe, la Comisión de Transformación Agraria de Córdoba, el Instituto Agroindustrial de Oleaginosas y la estación experimental de Irayzoz de Buenos Aires también eran mencionados como actores relevantes en la difusión del cultivo (Saumell, 1975).

<sup>229</sup> Para 1960 Tucumán necesitaba algún tipo de cultivo para sustituir la caña de azúcar de las regiones marginales. La Secretaría de Asuntos Agrarios de esa provincia, con la intermediación de una Cooperativa de La Ramada de Abajo y de la mayoría de sus asociados, convocan a la empresa Agrosoja SRL. El ingeniero Raúl Martínez, gerente técnico de Agrosoja e investigador del INTA, fue el responsable por parte de la empresa de este emprendimiento.

difusión de la soja a productores el 6 de agosto de 1971. Desde el INTA se desarrollaron entre 1958 a 1972 las técnicas de este cultivo, en palabras de uno de los investigadores a cargo, “*de ese modo se configuró la gestación del boom de la soja*” (Martínez, 2010: 143, énfasis propio).

Durante la tercera presidencia peronista volvieron a introducirse semillas de soja, esta vez provenientes de Estados Unidos. A nivel internacional, el contexto signado por la crisis del petróleo sumado a las complicaciones de Estados Unidos por sostener sus exportaciones y a una fuerte caída de la oferta de harina de pescado (utilizada como fuente de proteína por la industria de los balanceados), configuraron un marco propicio y necesario para el despegue. El subsecretario de agricultura, Armando Palau, ajustó los detalles logísticos de la importación de variedades evaluadas por INTA Casilda y otras unidades de INTA, y los aviones Hércules de la Fuerza Aérea trasladaron las toneladas de soja (Martínez, 2010).

El 29 de agosto de 1975 fue creado el Programa Soja del INTA, separándolo del Programa de Oleaginosas vigentes. Entre las razones que se invocaban argumentando la importancia de la creación de un programa de investigaciones *ad hoc* para este cultivo, se mencionaba que “la importancia actual del cultivo y las posibilidades de su expansión, imponen reordenar y acrecentar las actividades de investigación y extensión relacionadas con esta especie” (CD INTA, Resolución 280, 29-08-1975)<sup>230</sup>. Antes, ya se había dejado constancia de la necesidad de organizar las multiplicaciones de cultivares superiores en las experimentales del INTA. La semilla obtenida era ofrecida a todos los semilleros registrados en la Secretaría de Agricultura y Ganadería, como vía de promoción del cultivo (CD INTA, Acta N ° 630, 1974). El INTA organizó el Programa Nacional de Soja y estableció una red de ensayos de evaluación de variedades. Una película fue producida por el instituto, como estrategia de difusión del cultivo, donde se hacía énfasis en la soja de segunda sembrada sobre trigo. Simultáneamente, se difundía la primera variedad de trigo mejicano Marcos Juárez INTA, “que encajó maravillosamente como antecesor de soja: era de bajo porte, dejaba poco rastrojo, era

---

<sup>230</sup>Como señalamos previamente, desde mayo de 1975 el INTA se encontraba intervenido por el Poder Ejecutivo. Al frente del Programa fueron asignados un técnico del Departamento de Genética, José Bernardo Goldenberg, y un extensionista, jefe de la agencia de extensión de INTA Casilda, Enrique Diego Averroes Roquero.

precoz y rendía un 25% más que las variedades tradicionales” (Martínez, 2010: 142). La rotación trigo-soja avanzaba a paso firme por el suelo argentino.

Con el incremento de la superficie sembrada con soja, que se expandía por todo el sur de Santa Fe, el sudeste de Córdoba y el Noreste de Buenos Aires, aparecieron también algunos inconvenientes. En muchos de los nuevos lotes, el cultivo crecía con poco desarrollo por deficiencias en la nodulación y en otros distintas plagas amenazaban los cultivos. El INTA también intervino en la solución de estos problemas. El CNIA de Castelar comenzó a producir y distribuir inoculante, y procedió también a la identificación y monitoreo de plagas. También produjo investigaciones ligadas a contrarrestar efectos nocivos del uso del paquete de herbicidas, utilizado para combatir malezas.

En 1974 los objetivos ligados al cultivo, señalados para el INTA dentro del Plan Trienal, mencionaban la necesidad de fomentar la difusión del cultivo en las zonas extra-pampeanas, desarrollar la genética y fitotecnia nacional y la industrialización integral a nivel regional (CD INTA, Acta 621, 1974). De los tres, sólo iba a cumplirse el primero, a expensas de los otros dos.

Adolfo Boy, ex director de la estación experimental de San Pedro, ha ligado los cambios en las tareas de investigación y extensión a la expansión de la soja, unida a su vez a las transformaciones en la demanda internacional. El derrumbe de la industria pesquera de anchoas en la costa de Perú en la década de 1970, debido a los efectos de la “Corriente del Niño”, habría incidido fuertemente en el reemplazo de este insumo básico en la elaboración de alimento balanceado para nutrición animal por la soja (Boy, 2005). Tanto en América del Norte como en Europa, la demanda habría crecido fuertemente, sustituyendo pescado por soja, impulsada también por una fuerte sequía en el país del norte.

En este contexto de alza del precio internacional de la soja y de su rápida difusión en Brasil y Argentina, la orientación de las actividades de investigación y extensión también se fue modificando. Centrada primero en horticultura y fruticultura como actividades principales, la experimental de INTA San Pedro pasó a concentrar sus esfuerzos en el manejo sanitario del nuevo cultivo estrella (Boy, 2005). Simultáneamente, se multiplicaban las introducciones de variedades públicas provenientes de las universidades estadounidenses, para las que no era necesario pagar

licencias a la hora de la siembra (Rasmussen, 1989). Fue a partir de estas introducciones que el INTA seleccionaría e inscribiría nuevos materiales, y luego comenzarían a inscribirse variedades privadas, a partir de los programas locales de cruzamiento (Martínez, 2010).

Un extensionista de la agencia de extensión rural del INTA Casilda, que había ingresado en 1962, fue el representante enviado por el organismo a un comité organizado por la SAyG en 1973, destinado a realizar una promoción regional del cultivo. Era también el coordinador del primer Plan Soja del INTA para la región pampeana, y el autor de “Soja para el futuro”, una película a color de veintisiete minutos de duración, que el instituto difundía por entonces entre los agricultores. Producida su cesantía en 1976, pasó a trabajar para el sector privado. En esta primera fase de difusión relevante del cultivo la superficie sembrada con soja creció progresivamente. En 1970-71 la superficie nacional sembrada era de 37.700 hectáreas, con una producción de 59.000 toneladas, y para 1975-76 ascendía a 442.500 hectáreas y 695.000 toneladas (INTA, 1982). Esto implicó una expansión superior a 1.100 % en 6 campañas agrícolas. En esta fase, el INTA fue el encargado de proveer la información técnica y realizar los ensayos pioneros en campo.

Entre las décadas de 1970 y 1980, además de incrementarse significativamente la superficie sembrada con soja, se incrementaron también los rendimientos por hectárea (Alapin, 2008). En cuanto a los actores protagonistas de las transformaciones que acompañaron la introducción del cultivo, el INTA y las universidades realizaron investigación básica en genética y mejoramientos. El instituto, además, instó su difusión a través de las agencias de extensión. Las empresas privadas, por su parte, se dedicaron a los desarrollos de genética aplicada, centrándose en las líneas más exitosas (Alapin, 2008).

Pronto, la transformación de la soja en productos derivados daría un fuerte impulso a las actividades agro-industriales, en un contexto de predominante desestructuración de la actividad industrial. El avance de la producción agrícola para la exportación, con eje en cereales y sobre todo en oleaginosas, fue acompañado por un contexto de precios de exportación favorables. La superficie sembrada con oleaginosas aumentó en un 75% entre 1976-1977 y 1980-1981, a diferencia del período anterior, en el que la tasa de crecimiento de los cereales aventajó al de las oleaginosas hasta la

irrupción de la soja en 1973-1974 (Becerra, Baldatti y Pedace, 1997). El incremento de la producción, fuertemente atada a la demanda externa, pronto provocaría profundas dislocaciones en la estructura social agraria. Como señalan Giarraca y otros (2005), el proceso de “sojización” ligado a la desaparición de buena parte de los productores familiares, daría paso a partir de esta década a una “agricultura sin agricultores”.

La agriculturización se extendió a partir de sucesivas políticas fiscales que favorecieron la sustitución de cereales por oleaginosas y la hegemonía de la agricultura continua (Becerra, Baldatti y Pedace, 1997). El auge del ciclo agrícola, protagonizado por el despunte de las oleaginosas, se acompañaría en forma creciente por múltiples problemas sociales, ambientales y económicos, contracara de la flamante “modernización”. Las dislocaciones en la estructura social agraria que acompañaron este proceso incluyeron alteraciones en la organización social del trabajo rural, en el régimen de propiedad y tenencia de la tierra, además de significativas implicancias socio-culturales. El aumento del contratismo, la desaparición de agricultores familiares y pequeños productores, la extensión de los contratos accidentales como sistema de arriendo, y la consolidación de la polarización social en el medio rural -producto del encarecimiento del paquete tecnológico básico- fueron algunas de sus consecuencias más visibles (Aparicio, 1982; Balsa, 2006). Un eje central vinculado al cultivo de la soja, que incidió fuertemente en las pautas de diversificación de las empresas involucradas, fue el paquete tecnológico al que estuvo unida su difusión. La venta de agroquímicos y la producción de semilla de soja pasaron a estar estrechamente ligadas para las firmas que, por su estructura y capacidad de acumulación, pudieron abarcar ambas ramas<sup>231</sup>. La tecnología de insumos, controlada por estos grandes capitales concentrados, aventajó ampliamente a la de procesos. Dentro de esta expansión, un elemento relevante fue el cambio en el método de siembra (Alapin, 2008). La llamada “siembra directa” comenzó a utilizarse en la campaña agrícola 1977-1978. Nuevamente, el INTA aparecía como un espacio clave del proceso.

La siembra directa de soja de segunda sobre trigo, que implicó una innovación significativa en el manejo del suelo para el cultivo, fue introducida en el país por

---

<sup>231</sup> Característica propia del desarrollo de la industria semillera a nivel internacional. A principios de 1970 algunas compañías líderes de la industria de semillas estadounidense fueron compradas por grandes firmas de la rama química y farmacéutica. Gutiérrez (1986) menciona dos de los casos más conocidos, Dekalb (por Pfizer) y Northrup King (por Sandoz).

técnicos de la estación experimental agronómica Marcos Juárez en 1976. Implicó un cambio radical en la labranza de la tierra. Los argumentos que justificaron su adopción señalaron la conservación del suelo y el aumento de la productividad de los cultivos (ya que al no remover el suelo y dejar rastrojos en la superficie, permitía conservar su humedad, materia orgánica y protegerlo de la erosión) (Alapin, 2008:12). Ahora bien, las transformaciones estuvieron acompañadas por un recambio en la provisión de insumos, herbicidas, sembradoras y fertilizante y su acceso se transformó en un punto clave (Alapin, 2008: 12). El INTA fue pionero en la realización de estudios ligados a la instauración de la siembra directa desde la década de 1960, seguido por AACREA y AAPRESID (Asociación Argentina de Productores de Siembra Directa). En los términos de Alapin (2008:14), los primeros veinte años de este proceso innovador, en las que el INTA fue central, aportaron la “factibilidad tecnológica” que hizo posible su consolidación en la década de 1990. En una visión contrapuesta, Ekboir (2002) narra la historia de los primeros ensayos, explicando el interés del sector privado como respuesta a la lentitud y falta de interés en la temática del público. En este sentido, según Gutiérrez (1986: 83) la falta de “interés del empresariado nacional” por el cultivo se debía al tipo de especie vegetal, ya que al ser una especie autógama podía ser reproducida por los agricultores sin perder su pureza varietal. Así, afirmaba, “el empresariado nacional todavía no ha incursionado significativamente en la creación de cultivares de soja, mientras que el INTA mantiene un programa con cierto dinamismo.” (Gutiérrez, 1986: 83). ¿Cuál fue, entonces, el rol del INTA en la industria de semillas de soja?

Como mencionamos, en principio cumplió la tarea de introducir y seleccionar diversas líneas importadas, en función de las condiciones locales. Además de organizar una colección de germoplasma de alrededor de dos mil entradas en la experimental de Pergamino, adelantó al sector privado en la creación de cultivares, avanzando en un primer momento con selecciones de variedades públicas introducidas en Estados Unidos y Brasil<sup>232</sup>. Si bien su peso fue más destacado en la selección de materiales importados, el INTA incursionó en la creación de cultivares propios que inscribió en el Registro Nacional de Propiedad de Cultivares. Para 1983, la producción de semilla de soja

---

<sup>232</sup> Hood. Sel Cerro Azul INTA, Bragg Sel. Cerillos INTA, etc. Los cultivares del INTA eran producto de selecciones realizadas sobre cultivares extranjeros, y en menor medida (“Oro Verde”, “Chamarrita” y “Carcaraña”) los cruzamientos eran realizados en el ámbito local.

original se concentraba en seis criaderos privados<sup>233</sup> y uno público, el INTA. De las 5.600 toneladas producidas en ese año, más del 50% del total pertenecía al Instituto. Aún con un aparentemente bajo 3,4%, lideraba el mercado del total de semilla fiscalizada, seguido por empresas que ocupaban porciones del 1 al 3% (Gutiérrez, 1986: 86). La mayor parte de los cultivos sembrados en el país en el período eran de origen público estadounidense o brasilero, cuya semilla original producía el INTA. Junto a la Facultad de Agronomía de la UBA, la Comisión para el Fomento de la Soja, y en un período previo el Ministerio de Agricultura y Ganadería; las estaciones experimentales del INTA fueron centrales en la introducción y adaptación de diversas líneas importadas y, sobre todo, en la realización de extensos ensayos regionales, producto de su amplia cobertura territorial.

En otras palabras, cuando todavía no se trataba de un cultivo comercialmente seguro y descomunadamente rentable, el rol del INTA consistió en asegurar su introducción y difusión, y en sostener planes relevantes de investigación que no se desarrollaban en otros ámbitos. Centralmente, en la estación experimental de Marcos Juárez, seguida por las de Pergamino, Paraná y Famaillá, y en menor medida, en las estaciones de Manfredi, Bordenave y Misiones, el INTA contó con personal especializado en fitomejoramiento del cultivo. Si bien, a diferencia de lo ocurrido en maíz y el trigo donde fue un actor central en las principales innovaciones, el rol del INTA fue clave en la difusión del cultivo, condición necesaria para la posterior expansión comercial, de la que el sector público no participaría<sup>234</sup>.

## **5. Investigaciones en maíz: híbridos públicos o subsidiaridad del Estado**

La semilla híbrida contiene dos rasgos fundamentales que la vuelven un negocio altamente rentable: el vigor híbrido (que supone un incremento sustancial en los rendimientos), y la imposibilidad de multiplicarse (que impide que el agricultor pueda

---

<sup>233</sup>De capital nacional, Crawford Keen y Cía. S. A., OFPEC S.R.L, O. Calderó y Cía., y Palaversich. Filiales de transnacionales, Asgrow y Northrup King. (Gutiérrez, 1986: 85).

<sup>234</sup> De 30.000 en 1970, las hectáreas sembradas con soja pasaban a 2.220.000 en 1983 (Gutiérrez, 1986: 89). En 1992 el área de siembra de soja supera a la de trigo, y en 1996 se inscriben las primeras variedades resistentes a glifosato (Martínez, 2010: 144). El corte definitivo se produjo en este momento, ya que el INTA “No pudo lanzar al mercado las variedades con el gen RR, no teníamos la licencia de MONSANTO para comercializarlas. Las anteriores, sí, tuvimos variedades, pero cuando el productor se tiró a la soja transgénica, nosotros desaparecimos del mercado.” (entrevista, ingeniera agrónoma del INTA, del área de vinculación tecnológica, 1-03-2012).

auto proveerse de semilla en cada cosecha)<sup>235</sup>. La producción de híbridos se originó en el sector público norteamericano. En Argentina, el Instituto de Investigación Agrícola de Santa Fe fue el primero en desarrollar e inscribir híbridos de maíz en 1945. Luego lo hicieron la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires y la estación experimental Pergamino del INTA, que pasaría a concentrar la actividad oficial (Gutiérrez, 1986: 27). Como señala Hebe Vessuri (2005) en su reconstrucción de la trayectoria de Salomón Horovitz Yarcho, un destacado protagonista de la genética profesional sudamericana, para 1930 Argentina carecía de personal entrenado en genética vegetal aplicada y esto se reflejaba en la oferta comercial de semillas. Recién en la década de 1950, con la creación del INTA, la actividad pública en el área de semillas híbridas adquirió fuerza, y en 1960 la producción comercial de híbridos comerciales alcanzó resultados.

Las investigaciones del INTA estuvieron siempre abiertas para su uso y acceso, mientras que la actividad privada fue incorporando sucesivas restricciones que resguardaron sus materiales. Para 1970, en paralelo a la creciente concentración del mercado de la actividad semillera, fue transformándose la protección jurídica de las innovaciones. La legislación internacional, basada en la defensa de la propiedad de los obtentores -el *Plant Breeders Right*- buscó limitar la multiplicación por parte de terceros y la venta de las semillas obtenidas sin previo pago de regalías. En Argentina, la Ley 20.247 de Semillas y Creaciones Fitogenéticas, promovida por las grandes empresas productoras de semillas, otorgó esa “protección” al sector privado. Sancionada en 1973, entró en funcionamiento en 1978 e introdujo el concepto de protección de la propiedad de las creaciones fitogenéticas, es decir el derecho del obtentor (Ronner, 2013). El debate internacional sobre el marco regulatorio centrado en la protección de la propiedad intelectual para variedades vegetales se había instalado desde fines de 1950, con los primeros acuerdos internacionales que legislaron sobre los derechos de los fitomejoradores y sus empresas, entre los que se destacó la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV) firmada en 1961 por un conjunto de países europeos (Ronner, 2013). En 1978 Argentina adhirió a la UPOV, incorporando la prohibición de la “doble protección”, es decir, que un tercero pudiera desarrollar

---

<sup>235</sup> A partir del descubrimiento realizado en 1903 de la heterosis o “vigor híbrido”, comenzó la investigación para la obtención de maíces híbridos. Los primeros fueron desarrollados en los Estados Unidos hacia 1931 (Howell, 1998).



actividades de mejoramiento vegetal sobre variedades previamente protegidas. Este marco regulatorio incrementó la protección hacia los derechos de los obtentores del sector privado, los únicos capaces de registrar y restringir sus creaciones. En este sentido, la nueva legislación profundizó disposiciones que ya se encontraban vigentes. Mantuvo categorías que habían sido introducidas en el país a partir de una resolución del año 1959, que regulaba la inscripción de híbridos comerciales. Esta resolución de la Secretaría de Agricultura y Ganadería había impuesto la existencia de dos categorías para los híbridos: de “pedigrí abierto”, cuyas líneas permanecerían abiertamente declaradas y con libre disponibilidad; y de “pedigrí cerrado”, cuyas líneas componentes serían guardadas en secreto, sin ser declaradas y por lo tanto sin libre acceso. El primer caso correspondía a los híbridos del sector público (es decir, al INTA), y el segundo al sector privado, lo que le otorgó una protección similar a una patente (INTA, 1996)<sup>236</sup>. El carácter cerrado del pedigrí, al mantener en secreto las líneas que componen las líneas comerciales, también impedía expresar -en forma declarada- el peso de las líneas públicas en las creaciones privadas<sup>237</sup>. Por el contrario, el carácter abierto que comenzó a regir para el sector público garantizó el libre acceso a los materiales desarrollados por las investigaciones oficiales. De este modo, como señala el ingeniero agrónomo Daniel Rossi, en esta fecha se instituyeron las condiciones para la apropiación privada de creaciones públicas en materia de híbridos de maíz (Rossi, 2007).

En 1962 el INTA obtenía el híbrido “Abatí 1 INTA”. Las empresas con capacidades para incursionar en la producción y comercialización de híbridos, amparadas en la nueva legislación y en el acceso al material desarrollado por el instituto, incrementan significativamente sus inscripciones. Las investigaciones del INTA, radicadas fundamentalmente en su estación experimental de Pergamino, habían comenzado pocos años antes de la creación del instituto. A la difusión del “Abatí 1”, le siguieron nuevas investigaciones de mejoramiento que culminaron con el “Abatí 2”. Difundido a partir de la campaña agrícola 1968-1969, durante los primeros años de la

---

<sup>236</sup> Cabe aclarar que la analogía es válida en relación a la protección, pero no, como sí sucede con las patentes, para la libre disponibilidad. En otras palabras, mientras que una patente implica un pago a partir del cual lo patentado tiene libre difusión, en este caso el carácter cerrado del pedigrí era, a la vez, la garantía de su secreto comercial y la condición para la apropiación de los beneficios derivados de la comercialización de los híbridos.

<sup>237</sup> El *pedigree* abierto obligó a revelar las fórmulas, fiscalizar los lotes de semilla parental y ceder las líneas endocriadas a quien lo solicitara.

década de 1970 llegó a representar casi un 20% del total de semilla híbrida producida en el país (Gutiérrez, 1986).

A nivel internacional, tanto el CIMMyT con sede en México, como las universidades extranjeras y, en menor medida las estaciones experimentales agronómicas de los Estados Unidos, abastecieron de material genético a las empresas transnacionales o locales (Rasmussen, 1989). En el plano nacional, el INTA fue el organismo encargado de articular con estas contrapartes, tanto en el desarrollo de líneas extranjeras, mediante investigaciones adaptativas, como en la generación de creaciones propias. La participación de las líneas públicas en los híbridos privados se convirtió así en una condición necesaria para su expansión.

Como señalan Katz y Bercovich (1988), el sector privado fue apropiándose de las líneas desarrolladas por el sector público, de libre disponibilidad, hasta marginar del mercado a los híbridos oficiales<sup>238</sup>. En palabras de un fitomejorador del INTA especialista en maíz, “la industria de semillas se formó gracias a una gran actividad de fomento, que hizo el sector público. [...] Argentina dentro de los países de importancia agropecuaria fue de los primeros en tener una tecnología de punta”. Y, en particular sobre esta etapa inicial, agrega que:

El INTA desarrollaba germoplasma y era de *libre acceso*. Entonces, toda la industria de semillas del sector privado lo que hizo fue *comenzar produciendo híbridos cuyas líneas progenitoras habían sido desarrolladas por instituciones públicas como el INTA* (entrevista, 21-09-2011, énfasis propio).

Esta modalidad de cooptación estuvo presente durante toda la etapa de conformación y expansión del sector en 1950 y 1960, e intensificaría sus modalidades, como veremos, en la década siguiente.

En 1973 el INTA recibió una visita del director del CIMMyT, Haldore Hanson, y del responsable del Programa Maíz del Centro. Éste último puntualizó que la

---

<sup>238</sup> La firma pionera en semillas híbridas de maíz, Cargill, antes de lograr su primer híbrido comercial, “Cargill Record 1” en 1955, funda su criadero en 1946 y comienza a trabajar en base a los materiales (públicos) del Instituto Ángel Gallardo, para lo que también recurre a la contratación de uno de los principales responsables de la creación de los híbridos oficiales. También el criadero Santa Úrsula incursiona en la rama a partir de la contratación de un reconocido investigador ligado a la Facultad de Agronomía y Veterinaria, véase Gutiérrez (1986: 28).

identificación de problemas tecnológicos para la producción de maíz en la década 1970-1980, la definición de las necesidades de los programas nacionales de producción en los países en vía de desarrollo y el avistamiento de acciones interinstitucionales orientadas a incrementar la producción de maíz, estaban entre los principales objetivos del CIMMyT. Bajo el título “Rol del maíz en las necesidades de alimentos del mundo para 1980”, Hanson expuso cuatro aspectos fundamentales que habrían de considerarse en los programas de maíz de la década: crecimiento demográfico, tendencias en la producción de alimentos, el problema de las proteínas (referido al consumo proteico) y el uso de fertilizantes. Mientras que Hanson hizo hincapié en la necesidad de duplicar la producción, la Dirección Nacional del INTA agregó otra observación:

Esta Dirección Nacional considera que deberían analizarse otras alternativas de mayor impacto relacionadas con aspectos socio-económicos más que tecnológicos. De ser así, es posible que los esfuerzos en la producción de tecnología recomendada en este Simposio como la principal solución *sea desplazada a segundo plano como elemento productor de cambio* en los países de referencia [países en desarrollo] (CD INTA, Acta N° 591, 06-07-1973, énfasis propio).

Los argumentos propios de la expansión de la “revolución verde”, centrados en el desfase entre el crecimiento demográfico y el ritmo de crecimiento de las cosechas, eran señalados por el INTA como insuficientes en tanto elementos “productores de cambio” en los países de la región. El énfasis puesto en abordar “problemas socio-económicos” constituía una orientación poco frecuente en el organismo, más bien vinculado a los planteos que marcaban a la producción de tecnología como solución a múltiples problemáticas del sector, sin ahondar en las condiciones de producción de la misma, su grado de alcance entre las distintas franjas sociales del agro, y la conexión con otras problemáticas fundamentales del sector (como el acceso a la tierra). En este sentido, este señalamiento -pronunciado en 1973- se articulaba con la vinculación que el organismo estaba manteniendo con algunas de las iniciativas de la cartera agropecuaria promovidas desde la Secretaría de Agricultura y Ganadería, así como con la discusión sobre la orientación de sus actividades presentes en otras áreas de investigación. Por

otro lado, este eje no se vinculaba solamente a los posicionamientos que se esbozaban desde la dirección del instituto. También, y fundamentalmente, se ligaban a los planteos críticos que por entonces enarbolaban algunos integrantes del organismo, referidos tanto al destino de los productos de su trabajo, como a quiénes debían ser los destinatarios del INTA.

Los mecanismos de apropiación y transferencia de conocimientos producidos en el ámbito público no solamente se vinculaban a la apropiación de recursos genéticos, también se ligaban a la cooptación de profesionales y saberes. Según recuerda una investigadora del instituto del área de Suelos, “era muy habitual que una vez que INTA formaba un técnico joven fuera cooptado por la industria privada, cuando ya estaba formado, *con todo el conocimiento*” (entrevista, 18-08-2012)<sup>239</sup>. Junto a este proceso, en ocasiones el producto final de largos años de investigación era también objeto de apropiación, ya que “otras veces [el sector privado] cooptaba también investigadores formados que se iban *con la bolsa a cuestas* ¿Cuánto vale una bolsa de semillas híbridas recién obtenida, única en su tipo? Eso ocurrió varias veces, y todo el mundo lo sabía”, agrega (entrevista, 18-08-2012, énfasis propio). Separada del organismo junto a otros trabajadores en 1974 en la primera tanda de cesantías implementadas en el INTA (atravesada ya por persecuciones ideológicas y gremiales), esta investigadora señala que éste era un tema de agenda y preocupación dentro de un grupo de discusión de política agropecuaria, desarmado a raíz de la escalada represiva que acompañó la llegada del golpe militar de 1976<sup>240</sup>. Este grupo, conformado a principios de la década de 1970 por integrantes del INTA de distintos puntos del país, cuestionaba la orientación tradicional del instituto. A cambio, proponían “líneas alternativas de investigación y extensión que no se centraban en la modernización tecnológica sino en la inclusión del pequeño productor”. Algunos fitomejoradores, creadores de semillas híbridas, también apoyaban estas iniciativas “motivados por recuperar incluso su propia investigación” (entrevista,

---

<sup>239</sup> Este mecanismo de transferencia de conocimientos ha sido analizado por Oteiza (1996), quien hizo hincapié en la movilidad de científicos (portadores de conocimientos) como parte del proceso de “fuga de cerebros”.

<sup>240</sup> Las tareas de infiltración por parte de agentes de la policía de la provincia de Buenos Aires dentro del INTA que precedieron al golpe de Estado fueron abordadas en el segundo capítulo. Como señalamos, este grupo en particular es aludido en 1975 en el informe “INTA de Pergamino. Posible actuación de célula izquierdista” (DIPBA, Mesa C, Carpeta Varios, Legajo N ° 451, folios 1 a 30). Al menos uno de sus integrantes fue secuestrado y detenido, y por el tipo de interrogatorio al que fue sometido en prisión, resultaba evidente que las fuerzas policiales y militares tenían información detallada de sus integrantes, así como de datos internos del INTA.

18-08-2012). En un sentido más general, y en el marco de un amplio grado de movilización política a nivel nacional atravesado por grandes expectativas de transformación social, discutían “*quién tenía que ser el destinatario de las investigaciones de INTA*” (entrevista, 18-08-2012, énfasis propio). En este sentido, un investigador del área de Economía e integrante de una de las comisiones gremiales de la estación experimental de Pergamino señala que uno de los pedidos del momento consistía en “una ley de semillas con *‘pedigree cerrado’*, es decir que las semillas producidas por el INTA las pudiera comercializar sólo el INTA, no dárselo a las multinacionales para que después las multiplique” (entrevista, 12-07-2012).

Además de cumplir un rol destacado en la investigación dedicada al cultivo, también los servicios de extensión del INTA fueron claves para la difusión de los híbridos y su adopción en el medio rural. En 1973, los híbridos oficiales inscriptos eran ocho, y dentro del período 1965-1970 el porcentaje medio de semilla de híbridos de pedigrí abierto alcanzaba el 22% del total de semilla híbrida.

Sin embargo, para el período 1975-1980 el porcentaje de semilla híbrida del sector público había bajado casi 20 puntos (era del 2,7%) y para 1983 sólo existían dos híbridos oficiales (Gutiérrez, 1986). La transferencia de tecnología del ámbito público al privado culminaba con una reorientación de la política tecnológica del INTA. El 12 de junio de 1979, el interventor civil del INTA designado por la dictadura firmaba una resolución tendiente a direccionar la actividad institucional en mejoramiento genético vegetal. En ella consideraba:

Que es altamente conveniente complementar los esfuerzos de la actividad privada y del Instituto, promoviendo la actividad fitogenética general, y evitar a la vez duplicación de esfuerzos. Que a la entrega de material de crianza, se suma la importante distribución de Semilla Original de numerosos cultivares INTA, que realiza la institución *promoviendo prioritariamente la producción de semilla fiscalizada por los semilleros privados*. Que tal accionar se inscribe dentro de la política económica de subsidiaridad del Estado fijada por el Superior Gobierno” (INTA, Resolución de Consejo Directivo 310, 1979, énfasis propio).

Y resolvía que el INTA proporcionaría a todo criadero que lo solicitara el material de crianza de las diversas especies, incluidas poblaciones de los primeros ciclos de selección y líneas de híbridos registrados (CD INTA, Res. 310/79, 12-06-1979). Según recuerda un investigador del organismo, “algunos no entregaban el material, lo escondían.” Si bien la resolución regía para todo el material pre-competitivo, era especialmente importante en maíz, “porque ahí tener las líneas de híbridos en estado pre competitivo era fundamental” (entrevista, 01-03-2012). Entre 1976 y 1986 el INTA no inscribió ningún híbrido, si bien se ha estimado que dos líneas públicas permanecieron presentes en el 80% de los cultivares (Katz y Bercovich, 1988). Junto a la disminución de los híbridos inscriptos, también se redujo la difusión entre los agricultores de los híbridos oficiales de maíz. El principio general de “subsidiaridad” del Estado, planteado como regla básica por el equipo económico liderado por el entonces ministro de economía José A. Martínez de Hoz, aparecía así vinculado directamente a las actividades del INTA. Se producía, en términos de Saraiva y Wise (2010: 424), una “co-evolución” entre la agenda de la investigación científica y la política económica. En este sentido, junto al desmantelamiento producido desde el Estado sobre la actividad científica, también desde el ámbito científico y tecnológico se accionó activamente produciendo insumos (el conocimiento y la regulación de su apropiación) para las transformaciones en curso<sup>241</sup>.

Como mencionábamos, desde fines de la década del 1950 los capitales dedicados a la producción de híbridos aprovecharon la acción sostenida por el Estado en las tareas de investigación, en la formación de genetistas y producción de cultivares. El grueso de las investigaciones se originó y financió en el sector público, primordialmente en el INTA. Durante la dictadura, esta tendencia alcanzó nuevos umbrales y fue sostenida como parte de una política general donde la prioridad manifiesta se concentró

---

<sup>241</sup> Resta, en este sentido, profundizar el estudio en los ámbitos que se expandieron en este período. En el caso de la producción nuclear, hace falta avanzar en la articulación sostenida entre científicos, tecnólogos y empresarios en función de desentrañar cómo el crecimiento de la CNEA se articuló a la expansión de la “patria contratista”, situación que es señalada por Hurtado (2009; 2010). En este sentido, resulta fecundo el análisis de Saraiva y Wise (2010) sobre la producción científica durante el fascismo europeo, pese a las profundas diferencias históricas entre los procesos analizados. En especial, cuando señalan que el rol jugado por los científicos -por ejemplo en la producción genética vegetal en España- vinculado a materializar algunas de las transformaciones en curso fue más importante para la política económica de estos estados, que las adhesiones políticas o ideológicas personales o al fascismo. En el caso español, esto se vinculó a la política de autarquía y al asilamiento en el que entró el régimen franquista. En Argentina, resulta relevante analizar qué lugar ocuparon los ámbitos de CyT en la expansión de contratos con ámbitos privados impulsada desde el Estado.

en el beneficio privado. Las principales empresas que para el fin del período analizado dominaban el mercado de semillas híbridas eran filiales de grandes capitales, en su mayoría de origen extranjero<sup>242</sup>. A pesar del carácter fuertemente concentrado y transnacionalizado de la rama, la entrada de nuevos capitales que lograron posicionarse en poco tiempo y a partir de escasos trabajos de fitomejoramiento expresaba el papel clave que cumplió la libre disponibilidad de las líneas oficiales. En este sentido, en este rubro pareciera pertinente la caracterización de explotación cognitiva de conocimientos científicos (Kreimer y Zukerfeld, 2014)<sup>243</sup>.

La resolución de 1979, que de alguna manera reglaba e intensificaba una situación pre-existente, recién fue derogada en 1987. El mismo año, el INTA ponía en marcha una nueva política de vinculación tecnológica, cuya implementación se incrementaría a lo largo de la década de 1990: los convenios con empresas para licenciar variedades. Según la responsable de la Gerencia de Gestión de Vinculación Tecnológica del INTA, el nuevo sistema de convenios “se basaba en compartir con una empresa privada los riesgos de una producción en la etapa de investigación” (entrevista, 01-03-2012). Los desarrollos ya no corrían por el presupuesto interno del INTA solamente, sino que pasaba a existir un financiamiento privado, con la retribución de que si había un desarrollo tecnológico apropiable (una patente, un derecho de obtentor, una variedad, una marca), esa parte privada obtenía una licencia por el aporte realizado y, según agrega, “se le daba *una licencia exclusiva para la explotación comercial de ese desarrollo*” (entrevista, 01-03-2012).

Si bien el INTA se reservaba la propiedad intelectual, daba a la empresa asociada la facultad de explotar el desarrollo comercialmente en forma exclusiva. En este marco, según puntualiza una ingeniera agrónoma del organismo, “lo más tentador e importante que tenía el INTA para ofrecer eran las variedades vegetales, los equipos de

---

<sup>242</sup> Cargill y Continental (principales exportadoras de grano, detentoras de una gran integración vertical), Sandoz/Northrup King, Pfizer/Dekalb, Ciba-Geigy/Funks, Upjohn/Asgrow (empresas productoras de híbridos que protagonizaron fusiones con grandes farmacéuticas) y Pioneer (para 1985, la firma líder en maíces híbridos en los Estados Unidos). Dentro de los capitales nacionales se destacaba Santa Úrsula S. A. y otras de menor escala (como El Boyero o Rumbos) que importaban e introducían líneas extranjeras. Para una caracterización de la industria y las principales firmas, véase Gutiérrez (1986: 40, 49).

<sup>243</sup> Los autores llaman explotación cognitiva a una relación social en la que se produce una apropiación, con fines de lucro, de conocimientos originados sin fines de lucro, en intercambios voluntarios y legales, a partir de la que se obtiene un excedente comercial. Distinguen analíticamente otros tres tipos de explotación cognitiva: de conocimientos tradicionales, informacionales y laborales (Kreimer y Zukerfeld, 2014).

mejoramiento” (entrevista, 01-03-2012)<sup>244</sup>. En este sentido, la dinámica de investigación local no permaneció al margen de la tendencia internacional hacia el incremento de la privatización de la ciencia y la tecnología. Esta política de vinculación tecnológica fue destacada positivamente por estudios contemporáneos a la misma. Así, se señalaba que estos acuerdos se inscribían dentro de una política más amplia “de cooperación pública/privada que viene extendiéndose en muchos países”, en la que “el INTA ha tomado la vanguardia en los países de América Latina” (Gutiérrez, 1991: 688)<sup>245</sup>. La “nueva” política sellaba oficialmente las condiciones de transferencia de la tecnología desarrollada por el INTA a sectores concentrados del sector privado. Explicitaba de este modo la división dentro del proceso productivo: el INTA asumía las tareas de investigación y desarrollo y las empresas, la producción y comercialización.

La resolución, que reevaluaba el intercambio de material de crianza del INTA producido en el proceso de fitomejoramiento, estableció que los “cultivares, líneas, materiales en proceso de selección y en proceso de evaluación y productos de un programa de mejoramiento” serían cedidos a quienes lo solicitaran pero “según las condiciones que el INTA determinará en cada caso” (CD INTA, Res 99/ 1987)<sup>246</sup>. Esta cláusula habilitaría al INTA a establecer los convenios de vinculación tecnológica con las empresas que quisieran acceder a sus materiales e investigaciones<sup>247</sup>. Entre las argumentaciones se esgrimía que los cultivares oficiales obtenidos por el INTA representaban “un complemento de la actividad privada en fitomejoramiento” (INTA, 1987, énfasis propio), reconociendo su valor estratégico para la continuidad de la producción agrícola nacional, y destacando que a los investigadores del INTA los caracterizaba “su amplitud y fluidez en sus contactos profesionales, asegurando a los fitomejoradores privados nacionales y extranjeros *un acceso fácil a materiales de*

---

<sup>244</sup>Según la interpretación de Calandra (2009: 211), esta situación se expresaría durante la década de 1990 en una tensión entre los investigadores que apoyaron los convenios y aquellos que los consideraron una “traición” al espíritu del INTA; según la autora estos últimos superaron discursiva y materialmente a los primeros a los que califica de “puristas”. Si bien el período escapa a nuestro estudio, entendemos que estas resistencias antes que basarse en principios cientificistas tenían como raíz una mirada crítica al proceso privatizador en curso.

<sup>245</sup> Fuck y Bonacelli (2009) analizan el rol del INTA y Embrapa en producción e investigación en semillas, exponiendo los marcos regulatorios que poseen ambos organismos en la materia, focalizando en la propiedad intelectual.

<sup>246</sup> A diferencia de los materiales de colección, clones, ecotipos y poblaciones, sin trabajo de mejoramiento previo por parte del INTA, que sí serían cedidos a pedido.

<sup>247</sup> “En el caso de sorgo y trigo se ha entregado el programa entero. Todas las variedades” (entrevista, 1-03-2012).



*interés público*” (CD INTA, Res. 99/1987, énfasis propio). En este sentido, no se cuestionaba el espíritu de la resolución previa (y del direccionamiento del conocimiento producido por el INTA) sino que se reconocía que, en función de la aprobación del desarrollo de acuerdos de vinculación tecnológica que implicarían la cesión de materiales bajo “condiciones negociadas en cada caso”, la vieja resolución “si bien contribuyó en el pasado a la distribución de materiales del INTA, obstaculiza las posibilidades de negociación anteriormente aludidas”( CD INTA, Res. 99/ 1987).

A mitad de la década de 1980 la producción de híbridos en el país era controlada por un puñado de empresas transnacionales (Cargill, Dekalb, Asgrow, NK y Pionner, fundamentalmente). A diferencia de 1979, la nueva restricción de 1987 habilitaba al INTA a pautar una retribución (en forma de regalías), que le permitiría incrementar sus recursos. Al igual que en 1979, el establecimiento de pautas para la cesión o transferencia de materiales privilegiaría la transferencia de las investigaciones realizadas en el ámbito público fuera de su órbita.

## **6. Conclusiones: inversión pública, ganancias privadas. Fortalecimiento y formalización de una tendencia.**

El INTA cumplió un rol fundamental en el desarrollo de la genética aplicada al sector agropecuario en Argentina. Durante las primeras etapas, la experimentación y difusión genética de cultivos fue mayoritariamente oficial, sobresaliendo el papel del INTA en la generación y difusión de nuevos trigos mejorados y maíces híbridos, junto a la introducción temprana de cultivares de soja. Se destacó a partir de 1970 por introducir las variedades del llamado “germoplasma mejicano” en el país y se abocó a su mejoramiento, desarrollando nuevos trigos sobre la base de cruzamientos entre variedades mexicanas y argentinas<sup>248</sup>. Incursionó tempranamente en el mejoramiento genético de maíz, logrando híbridos exitosos, y fue pionero en la realización de investigaciones para la adaptación y difusión de la soja, en un momento en el que aún el cultivo no contaba con la popularidad que alcanzaría en los años subsiguientes.

---

<sup>248</sup> “Precoz Paraná” (1971), “Marcos Juárez INTA” (1971), “Leones INTA” (1973), “Diamante INTA” (1974), “Surgentes INTA” (1975). En esta época se destacó también la obtención de la primera variedad argentina de algodón por cruzamiento varietal, el “Quichua INTA” (1970). Véase INTA (1996: 143).

A lo largo del período dictatorial, junto a la introducción de mecanismos represivos, el INTA como institución pública dedicada a la investigación y experimentación en tecnología agropecuaria, registró un sustancial incremento en la apropiación privada de su trabajo científico y técnico, que favoreció la consolidación de los sectores más concentrados del agro y se alineó con los principales cambios registrados en el sector a nivel nacional. El eje de las tareas de investigación y extensión del INTA mantuvo también fuertes conexiones con la reificación de la concepción que definió el rol subsidiario de las intervenciones estatales (en este caso en materia de tecnología agropecuaria) como garantes del sector privado. En un área central de investigación como fitotecnia, el instituto orientó sus actividades hacia la investigación básica, centrada en la provisión de los recursos genéticos fundamentales para desarrollar nuevas variedades (Alapin, 2008). El sector privado, principalmente transnacional, ocupó la totalidad del mercado de híbridos y el INTA perdió la relevancia que tuvo en maíces híbridos. Mientras que retuvo entre sus actividades la mejora de poblaciones y la provisión de germoplasma, delegó la fase siguiente de terminación de las variedades. De este modo, permitió que las fases más competitivas y rentables pudieran ser concretadas fuera del ámbito estatal, por el sector empresarial con capacidades de I+D.

Esta situación es similar a la señalada por Dagnino (2009), quien marca la existencia de una alianza informal entre comunidades de investigación y empresas privadas, que posibilita que el Estado asegure la financiación de la renta de las empresas y su apropiación de conocimiento. Mientras que Kreimer y Thomas (2006) señalaron que algunos conocimientos “aplicables” son aplicados a nivel internacional pero no a nivel local, en este caso los conocimientos científicos aplicables (disponibles y producidos por una institución pública) fueron aplicados por una fracción del sector privado (mayormente de matriz extranjera, aunque no en forma absoluta).

Asimismo, se ha señalado que la producción de conocimiento realizado por investigadores de países periféricos en el marco de grandes redes transnacionales, es industrializado en los países centrales, que las coordinan (Kreimer, 2010). En este sentido, la trayectoria de la producción de híbridos de maíz expone cómo la industrialización del conocimiento generado por el INTA ha sido realizada en forma creciente fuera de su órbita. Mayormente por capitales de origen internacional, aunque no en forma exclusiva, esta tendencia estuvo presente desde los comienzos de la

estructuración de la industria semillera en el país, a la que el instituto apuntaló fuertemente mediante sus investigaciones.

Como señalamos, en el período correspondiente a la intervención militar, se introdujeron cambios significativos en materia de políticas sectoriales, que acompañaron y promovieron la concentración del sector agropecuario. Los destinatarios de los conocimientos producidos, junto a los objetos de estudio y los enfoques aplicados, fueron los mismos que se beneficiarían de las nuevas condiciones de acumulación del momento. Las tareas de mejoramiento genético vegetal, las investigaciones abocadas a la introducción, adaptabilidad y difusión de cultivares, así como la propagación de nuevas prácticas agronómicas realizadas por el INTA, también jugaron un rol central en el protagonismo que el sector agrícola cobró frente al ganadero, y aportaron condiciones necesarias para la posterior eclosión de las oleaginosas, lideradas por la soja. En un marco de creciente fuga de capitales, aumento descomunal del endeudamiento y de la especulación financiera, frecuentes ajustes por la vía devaluación y depresión salarial, la exportación de soja y sus derivados reforzarían el histórico peso de la clase terrateniente dentro del proceso nacional de acumulación de capital y acompañarían la concentración del sector<sup>249</sup>.

Fueron los grandes productores capitalizados los que pudieron reimplantar las nuevas variedades y esperar su entrada en producción, realizar los tratamientos sanitarios correspondientes e incorporar los insumos y maquinaria “de punta”. No ocurrió lo mismo con aquellos, en su mayoría minifundistas y familiares, que no contaron con la capacidad financiera de sobrellevar los costos y hacer frente a los tiempos de producción. En este sentido, el eje de las tareas de investigación y extensión del INTA mantuvo fuertes alineaciones, tanto con la promoción general de los sectores más concentrados del agro, como en la concepción del rol subsidiario de las intervenciones estatales.

El centro del esfuerzo en investigación para el desarrollo tecnológico agropecuario fue financiado por el Estado. Si los costos fueron cubiertos en forma colectiva, no ocurrió lo mismo con los beneficios. El sector público sostuvo, de este modo, la investigación y experimentación en rubros que no eran redituables

---

<sup>249</sup> Como señala acertadamente Dougnac (2013), el problema no es la soja, sino que ésta (y más precisamente, sus formas de explotación) es una de las expresiones epocales derivada del creciente dominio del capital sobre la agricultura.

comercialmente, y/o por su alto riesgo y bajo costo, no habían sido incorporados por el ámbito privado; y poseían una baja potencialidad de funcionar como monopolios transitorios por vía del cambio tecnológico<sup>250</sup>. En este sentido, los cultivares públicos continuaron predominando en aquellas especies que no otorgaban beneficios rentables atractivos.

La intervención militar clausuró, también en esta área, la existencia de “agendas de investigación en disputa” que desde distintas posiciones políticas discutían cuál debía ser el destino de los productos generados por el INTA, y cómo debían protegerse los conocimientos generados. Por otro lado, paulatinamente el INTA fue perdiendo protagonismo e incrementando tareas de validación y testeo de tecnologías, situación que llegaría a cristalizar con mayor ímpetu en la década de 1990, cuando se concretara el proyecto de privatizar las áreas nodales del entramado productivo del país y corriera el riesgo de transformarse en “una agencia de validación de tecnologías no nacionales”<sup>251</sup>.

Portador de una gran potencialidad y una capacidad inédita de contacto debido a su estructura territorial y a la importancia de la actividad agropecuaria en el país, a lo largo de su historia el INTA nunca fue objeto de un proyecto a nivel gubernamental que intentara direccionar su actividad científica y tecnológica promoviendo la pertenencia de sus investigaciones en el ámbito público. No existió, por ejemplo, una industria pública de semillas que articulara las capacidades técnicas en un emprendimiento enmarcado en el sector. En este sentido, reflejó los límites de los proyectos políticos a nivel nacional y las limitaciones económicas del país. Al mismo tiempo, la centralidad de la actividad agropecuaria en la estructura productiva le otorgó estabilidad y continuidad en el tiempo.

En estas líneas de continuidad, los saltos y las rupturas no fueron menores. Si bien los mecanismos de transferencia de conocimientos del ámbito público al privado estuvieron presentes en toda su trayectoria, acorde a los propios fundamentos de

---

<sup>250</sup> Visible en el caso de las especies autóгамas, con las que se puede resebrar y no hay un secreto plausible de ser conservado como en los híbridos. Principalmente, el INTA mantuvo su peso en los casos del algodón, maní, arroz, cereales de invierno, lino y cártamo.

<sup>251</sup> Según una agrónoma del organismo, quien además agrega que en esos momentos se intensificaría la “desactivación de todo lo que fuese mejoramiento genético de semilla”. En la óptica de un fitomejorador de soja del instituto, el INTA conserva una palabra autorizada en términos de validación, su “sello” vale en tanto “el INTA dice ‘esto es bueno, esto sirve, esto no sirve’”, situación que es vista como una limitación parcial en tanto “sería mucho más valioso que el INTA tenga sus materiales, porque de esa manera *podríamos tener más autonomía* quizás” (entrevista, 28-02-2012, énfasis propio).

creación del organismo, el grado que lograron en el período estudiado alcanzó nuevas implicancias, tanto por su articulación con la reorientación de la política agropecuaria y las principales transformaciones económicas a nivel nacional, como por la relevancia de las investigaciones públicas realizadas por el instituto en buena parte de los principales cambios registrados en la agricultura local.

El INTA se erigió en el canal que direccionó la apropiación privada de las inversiones realizadas por años en cooperación científica-técnica regional e internacional, formación de profesionales, obtención de materiales y capacidades técnicas. Esta situación estuvo íntimamente ligada al rol de intermediario que jugó el Estado, principal productor del marco regulatorio que regló la actividad de investigación en el área de semillas, que aseguró la transferencia de conocimientos e, indirectamente, la financiación de las rentas privadas<sup>252</sup>.

La desestructuración registrada post dictadura se encuentra también ligada a un efecto catalizador, amplificado por su articulación con la orientación de la política económica a nivel macro, la profundización creciente de esta forma de organización del trabajo científico y tecnológico del INTA. La ruptura también fue cualitativa por su magnitud, cumplida su fase de “apuntalamiento” del sector privado, después de años de fuertes inversiones públicas, y con altas capacidades en fitotecnia, el INTA perdió el papel relevante que ostentó por años. De esta forma, el conjunto social financió la apropiación privada del conocimiento producido públicamente.

---

<sup>252</sup> Según Althusser, el Estado, que es el estado de la clase dominante, no es ni público ni privado, sino la condición de toda distinción entre público y privado. La distinción (entre lo público y lo privado) es, en ese sentido, interna del derecho burgués (Althusser, 1984). En este trabajo entendemos, en el sentido planteado por el autor, que resulta relevante identificar el funcionamiento concreto de las instituciones (sean estas privadas o públicas), antes que su denominación formal. Ahora bien, cabe aclarar que, sin desconocer el rol que cumple el Estado en tanto garante de las relaciones de producción, sí encontramos una diferencia cualitativa en los márgenes de acción que permiten los ámbitos e instituciones de la órbita estatal, en tanto canales plausibles de generar iniciativas destinadas a la resolución de necesidades sociales. Asimismo, como señaláramos en la introducción, el Estado es entendido como una arena en disputa, cuyas instituciones y sujetos que la componen, lejos de ser un bloque homogéneo operan mediados por tensiones y conflictos.

## **Conclusiones y nuevos interrogantes**

### **1. Entre la reconfiguración institucional y las agendas en disputa (1973-1976)**

El retorno del peronismo al gobierno en 1973, luego de casi 18 años de proscripción, supuso una fuerte reordenación de las burocracias estatales, en las diversas esferas. Como abordamos en la primera parte, en este marco, se evidenció la necesidad de contar con cuadros técnicos que ocupasen cargos en las distintas dependencias. En el caso del INTA, la reconfiguración institucional fue un proceso complejo en el que convivió la renovación parcial de buena parte de su cuerpo directivo, el ingreso de nuevos integrantes al organismo, el desarrollo de conflictos de base y la articulación con los proyectos de la cartera agropecuaria nacional. Los cargos de dirección fueron ocupados mayormente por técnicos que conjugaban trayectoria en el área agropecuaria, y cercanía política (orgánica e inorgánica) a la agrupación peronista OUGT. Al mismo tiempo, tanto la intensa movilización gremial, como el accionar de investigadores y extensionistas, que planteaban una revisión de la orientación tradicional del INTA y, en ocasiones, intentaban utilizar esta reordenación institucional para operar en sus intersticios, supusieron un escenario conflictivo. Por otro lado, la permanencia de representantes de las principales corporaciones agropecuarias dentro de la estructura directiva expresó la resistencia, detrás de la que también se alinearon sectores del instituto, tanto a la nueva dirección como a las iniciativas que, desde distintas posiciones, ponían en cuestión para qué y para quiénes debía trabajar el INTA.

Dentro de estas experiencias, la Escuela para Graduados en Ciencias Agropecuarias fue uno de los ámbitos en el que se plantearon renovaciones de enfoques y temáticas, y donde también se evidenciaron los conflictos (a partir de la toma del establecimiento) al interior del instituto. La agenda de estudios económicos y sociales, estudiada en el cuarto capítulo, incorporó debates nodales de la cuestión agraria, tales como la distribución y uso de los recursos naturales, los sistemas de tenencia de la tierra y la composición de la estructura social agraria, que implicaron un desplazamiento de la

mirada tradicional, centrada en el estudio de los costos de producción y la administración de haciendas rurales.

Las tareas de extensión rural, abordadas en el tercer capítulo, también vislumbraron tensiones en relación a la crítica de su impronta verticalista y a diversas estrategias de inserción en las comunidades rurales. A menudo desbordando el cauce institucional, la figura del extensionista del INTA se convirtió, en determinadas situaciones, en un vehículo para el replanteo de las condiciones de vida de la población implicada y mantuvo una vinculación -pese a la histórica disociación entre ambas actividades- con los debates que por entonces cruzaban a la investigación agropecuaria. Durante la década de 1970, la visión de cuño culturalista fue reorientada bajo estrategias de extensión que priorizaron nuevas formas de contacto con la población rural. Su desarrollo no fue homogéneo, encontró resistencias -internas y externas- y variaciones territoriales. En este sentido, la conflictividad agraria encarnada en ciertas regiones del país motivó la existencia de algunas experiencias de articulación. A menudo en función de compromisos más individuales que institucionales, se establecieron contactos con las Ligas Agrarias, al tiempo que se profundizó la inserción comunitaria. En Famaillá, provincia de Tucumán, como se abordó en la reconstrucción del equipo de trabajo dedicado a la interacción con la cooperativa agropecuaria Campo Herrera, se organizó una singular experiencia, que conjugó la extensión rural, la investigación y la auto-organización rural.

Las limitaciones económicas y políticas asociadas a los vaivenes de la coyuntura nacional y a los marcos de acción posible dentro de las políticas planteadas, también en debate, para el agro, acotaron el margen de acción de estas iniciativas. También lo hicieron la temprana introducción de medidas “aleccionadoras” que dispusieron las primeras cesantías y detenciones enmarcadas en persecuciones ideológicas y políticas.

En un contexto de agudización del conflicto social a nivel nacional, la articulación entre el organismo y la Secretaría de Agricultura y Ganadería de la Nación fue fuertemente resistida. Algunas de las medidas elaboradas por este equipo, si bien no proponían una reestructuración radical de la estructura agraria, fueron particularmente atacadas. En especial, las que apuntaban a un reordenamiento (como el IRNP o la Ley Agraria) de uno de los recursos más disputados: la tierra. De criterio más bien efficientista y reformista, pero con “intromisiones” hasta el momento inéditas en

cuestiones como la propiedad de la tierra y la reorganización impositiva del sector, motivaron virulentas reacciones de parte de entidades como SRA, CARBAP y CRA, que fueron simultáneas a los públicos llamados de atención sobre la situación interna del INTA. Discutidas al interior del instituto, reservaban un lugar específico para éste en tanto encargado de llevar adelante las investigaciones e implementaciones técnicas necesarias (cálculos de rendimientos por hectáreas según zonas, delimitación catastral, organización de colonizaciones agrícolas, etc.) como brazo ejecutor de la política agropecuaria. El paquete de medidas suscitó un extenso debate, cubierto detalladamente por la prensa, en el que se reiteraron los llamados de atención sobre el INTA, al que se proponía vigilar tanto por razones “técnicas como ideológicas”. En este sentido, una asociación directa a las medidas de la cartera agropecuaria planteadas en estos años y a una supuesta “infiltración” en las filas del INTA, sirvió como argumento y motivación para su seguimiento y control. La renuncia de Giberti (secretario de Agricultura y uno de los primeros presidentes de INTA) y su equipo, se produjo en medio de la depuración instaurada al interior del peronismo, y de una progresiva escalada represiva a nivel nacional, que tendría su corolario y redimensión con el advenimiento del golpe de Estado. En este marco, el INTA fue intervenido por primera vez en su historia en mayo de 1975, por disposición del Poder Ejecutivo. Poco menos de un año después, comenzaba la intervención militar.

### **1.1. De agendas científicas y sujetos agrarios desplazados**

En 1978 un informe, producido como balance de los primeros dos años de intervención militar, refería a la situación en la que se encontraba el INTA cuando el advenimiento del golpe de Estado. Destacaba que, previamente, “(...) el organismo había sufrido, tal vez como pocos, las lamentables consecuencias soportadas por el país en su conjunto que hiciera necesaria la intervención de las FF.AA”, ya que señalaba que había sido “elegido como objetivo y medio para un accionar ajeno a los fines de su creación” (INTA, 1978: 5). Esta argumentación, similar a otros argumentos que, como señalamos, circularon por diversos medios gráficos, era acompañada por una descripción del rol del organismo. En relación a los programas de trabajo llevados adelante por la institución, se afirmaba que estos “(...) se hallaban paralizados o semi-



paralizados. El material de trabajo era escaso, obsoleto, y a veces inexistente” (INTA, 1978: 5). Este diagnóstico, de parálisis y atraso, era contrastado con las acciones emprendidas a partir de 1976 en base a la utilización del presupuesto y a partir de una “estrategia de intervención”. En ésta, tanto los cuadros directivos como los medios y los nuevos ingresos de personal pasaron a estar orientados en base al enfoque que tendría que tener el INTA, centrado en el impulso de:

(...) una política de investigación básica, aplicada y de extensión al productor, sobre aquellos productos agropecuarios que por su reconocida demanda internacional co-ayudarán a la aceleración de la recuperación económica, objetivo claramente definido por las más altas autoridades nacionales (INTA, 1978:6).

En este sentido, junto a la introducción de un entramado represivo dirigido contra trabajadores del organismo, algunos de los contenidos de investigación y extensión del INTA experimentaron en este período transformaciones cualitativas.

El área de extensión rural, vía de contacto territorial directo, fue particularmente reorganizada por considerar que se encontraba con un “(...) acentuado déficit en el cumplimiento de funciones de jefes regionales y supervisores de área, lo que se traducía en deterioro de coordinación y control” (INTA, 1978: 11) y fue suprimido el trabajo con las juventudes a través de los Clubes juveniles 4-A. La presencia a nivel territorial disminuyó y transformó su perfil, alentando en forma creciente el contacto con productores fuertemente capitalizados. Las estrategias de extensión registraron una continuidad en relación a una orientación vigente desde el comienzo de las actividades del INTA: aquella que se proponía cambiar la “mentalidad” del productor. Este enfoque se profundizó, promoviendo un discurso que se dedicó a fomentar conductas “empresariales” entre los productores. Al mismo tiempo, se produjo una ruptura en los planteos críticos que, motivados por el contacto directo con las condiciones de vida de la población, buscaban problematizar cuál debía ser el sentido del trabajo con “la familia rural”. El cuestionamiento al carácter verticalista y paternalista del trabajo de extensión impulsado previamente por el INTA, y el énfasis en la tarea del extensionista como vector de concientización fueron marginados. En este proceso, y como parte del ciclo represivo iniciado con anterioridad a 1976, junto a la reordenación global de la

actividad fue descontinuado el trabajo -de extensión e investigación- que estaban desarrollando integrantes de la estación experimental de Famaillá, en el noroeste argentino, con la cooperativa agropecuaria Campo Herrera, la primera en su tipo del país. La audiencia a la que dirigió sus esfuerzos la extensión del INTA se concentró en agricultores de nivel empresarial y técnicos del sector privado. En este pasaje, la inserción comunitaria de los extensionistas disminuyó significativamente. Mientras que el discurso institucional continuó dirigiéndose a “la familia rural”, la práctica de la inserción en territorio del INTA fue adquiriendo un perfil empresarial tanto en el mensaje promovido como en su *modus operandi*. La alineación de una nueva “clientela”, como pasó a ser denominada en la jerga institucional, se produjo en simultáneo al progresivo despoblamiento rural, que por entonces conformaba el reverso del proceso de agriculturización en ciernes.

En la misma línea, la agenda de estudios en Economía Agraria y Sociología Rural dejó de lado problemas estructurales del sector y la acuciante desintegración a nivel nacional. Pasó a concentrarse en cálculos y costos a nivel micro de explotaciones rurales, en forma fragmentada y en desconexión con las grandes problemáticas sociales y económicas del agro. En estas áreas de investigación también fueron profundizadas orientaciones previas, aquellas centradas en la Administración Rural. Simultáneamente, fueron desestructurados los planteos que, desde diversas posiciones, buscaban problematizar el fin último de la actividad, sus objetos de estudio, su articulación como insumo de las políticas agropecuarias y el rol de los investigadores. La preocupación en torno a problemáticas situadas local y regionalmente, la revisión de la adopción acrítica de categorías importadas, la preocupación en torno al relevamiento de las condiciones de vida y trabajo de diversas franjas sociales de agricultores, y del grado de acceso a los recursos naturales (en los que la tierra ocupaba un rol destacado), quedaron fuera de la agenda. El perfil fue así modificado y desmantelados buena parte de los equipos. Esta situación fue acompañada por la clausura de la Escuela para Graduados en Ciencias Agropecuarias, donde se dictaban maestrías del área, que desde 1969 funcionaba en el CNIA como parte de una experiencia interinstitucional.

En cuanto al accionar del INTA en otras líneas fundamentales de su agenda, la producción de conocimiento científico-tecnológico también registró continuidades y sufrió rupturas. Un caso de experimentación científica asentado en la estación

experimental de Pergamino, una de las principales del instituto y de las más afectadas por las políticas represivas, fue desmantelado luego de casi dos décadas de trabajo. Orientada a generar una línea genética aviar, un área sensible debido a su gran concentración comercial y escaso desarrollo local, fue discontinuada en un momento en el que comenzaba a mostrar avances relevantes. Específicamente ideados en función de generar gallinas ponedoras, destinadas a zonas -geográfica y socio-económicamente-periféricas, los ensayos científicos terminaron como producto de la cesantía del investigador principal, y la matanza de los animales que integraban la selección.

El área de fitomejoramiento vegetal también experimentó modificaciones, que implicaron la profundización de algunas dinámicas de investigación y la reorientación de otras. El capítulo sexto, dedicado a analizar la trayectoria del INTA en tres cultivos relevantes -trigo, maíz y soja-, permitió observar cómo la apropiación por parte del sector privado de conocimientos producidos en el ámbito público ya venía jugando un rol destacado en la década previa, y había sido fundamentales para la conformación de la industria semillera local. Durante la intervención militar, se procedió a impulsar la cesión de recursos fitogenéticos al ámbito privado, que concentró la fase (altamente rentable) de terminación de las variedades. En este sentido, la intervención del INTA tuvo un efecto catalizador, amplificado, como hemos analizado, por su articulación con transformaciones económicas en curso, con la reordenación del espacio rural, y la profundización la forma de organización del trabajo científico y tecnológico del INTA. Fue posible delinear una trayectoria histórica dentro de esta dinámica de apropiación, compuesta por tres momentos estratégicos. Uno inicial, a fines de la década de 1950 y durante 1960, en la que el organismo concentró la investigación en el área y garantizó la activación del sector privado. Un segundo momento, cristalizado y explicitado por una resolución de la intervención militar del año 1979, donde después de años de fuertes inversiones públicas, y con altas capacidades de investigación en fitotecnia, el INTA apuntaló a los capitales de mayor proyección, consolidó su rol en el traspaso de estos conocimientos y continuó incursionado en actividades de investigación poco atractivas comercialmente. En particular, en la producción de híbridos de maíz y en la introducción de trigos de origen mejicano -resultado de años de cooperación científica con el CIMMyT- el INTA venía ocupando posiciones destacadas. También, en la temprana introducción, adaptación y difusión de la soja en el país. Su rol fue relegado a

la entrega de materiales genéticos, y a la cobertura de aquellas instancias de investigación que -como las investigaciones en especies autóгамas, en especial de la soja, en una fase en que aún no gozaba de rédito comercial- eran poco atractivas para el sector privado. Un tercer momento, solamente esbozado debido al arco temporal de esta tesis, ubicado a partir de la formalización de los Convenios de Vinculación Tecnológica en 1987, cuando el INTA, al mismo tiempo que accede al cobro de regalías por la cesión de sus investigaciones, consolida una estrategia de “articulación” con empresas, utilizada en parte como estrategia de supervivencia<sup>253</sup>.

En el caso de los híbridos de maíz, paradójicamente, el libre acceso a los conocimientos científicos y técnicos producidos por el instituto (elemento básico en cualquier búsqueda de su democratización y acceso masivo) intensificó su apropiación por parte de los sectores más capitalizados y concentrados del sector. El marco regulatorio que, desde 1959, planteó condiciones disímiles para el sector público (regido por el “pedigree abierto”) y el privado (protegido por el “pedigree cerrado”), se articuló con nuevas disposiciones que, en la práctica, hicieron que el libre acceso a los conocimientos desarrollados por un organismo como el INTA permitiera su incorporación al secreto comercial de los híbridos privados. No existió, en este sentido, ninguna iniciativa por direccionarlos en un emprendimiento público. No solamente durante la última dictadura, cuando cobró fuerza el rol subsidiario del Estado, si no también antes (y después), a diferencia de otros ramas (como el petróleo o algunos rubros industriales), no fue organizada ninguna experiencia de producción pública de semillas que utilizara las investigaciones realizadas.

Prácticas científicas, obtención de resultados, marcos jurídicos y conformación de la industria semillera, conformaron un mismo entramado, en el que intervinieron diversos mecanismos de apropiación, cooptación y cesión de conocimientos orientados al agro. Mediante el organismo, el Estado, principal productor del marco regulatorio que regló la actividad de investigación en el área de semillas, sostuvo la transferencia de conocimientos, y de inversiones realizadas en forma sostenida por años en cooperación científica-técnica, formación de profesionales, obtención de materiales y capacidades técnicas, financiando las rentas privadas. A través del INTA, promovió la consolidación

---

<sup>253</sup> Una mirada sintética sobre la actualidad de esta modalidad puede verse en <http://www.unsam.edu.ar/tss/aportes-del-sector-publico-a-la-produccion-de-arroz/>

de una fracción del sector. Asimismo, el uso de las nuevas variedades de semillas, y de los insumos a los que estuvieron asociadas, sólo pudo ser hecho por los productores de mayor capitalización.

En sintonía con esta orientación de las actividades de investigación y extensión que primó en el INTA, la reorganización que experimentó el agro argentino se distinguió por un fuerte proceso de “modernización”, centrado en la expansión agrícola, cuya contrapartida estuvo dada por la crisis de pequeños productores, minifundistas, el agravamiento de las condiciones de la fuerza de trabajo rural y la crisis de buena parte de las economías regionales (Aparicio, 1992; Balsa, 2006). Fuertemente ligada a las fluctuaciones en la demanda internacional, esta expansión alcanzaría en las décadas subsiguientes nuevos umbrales signados por la concentración en manos de un puñado de transnacionales del comercio agrícola a nivel mundial y por el constante incremento de la emigración rural a nivel local y regional (Katz, 2012).

Destinatarios de los conocimientos producidos y protagonistas de la expansión agrícola coincidieron, al igual que lo hicieron los sujetos agrarios que quedaron fuera de las agendas de trabajo y aquellos desplazados por los principales efectos socio-económicos. Si bien esta ecuación tuvo saltos y fluctuaciones, los contenidos de investigación y extensión estuvieron marcados por la concentración del espacio rural y, simultáneamente, fueron insumos de las transformaciones que apuntalaron el fortalecimiento de la pampa húmeda, bajo un patrón extractivista que continuaría profundizándose.

En este contexto, también muchos programas de investigación experimentaron durante la intervención militar una continuidad. En este sentido, durante este período, hubo quienes desarrollaron tramos fundamentales de sus carreras de investigación, equipos que continuaron trabajando y otros que hasta crecieron o nacieron en estos años. Estas situaciones, junto a otras que permitieron el desarrollo de ciertas autonomías, se produjeron en paralelo a la clausura de las disputas en torno a cómo -para qué y para quiénes- era necesario orientar las actividades del organismo. Su efecto, lejos de acotarse a casos individuales, tuvo una fuerte impronta en la trayectoria del INTA.

## **1. 2. Disciplinamiento y “saneamiento” institucional**

Durante la última dictadura, se instrumentaron en el INTA mecanismos represivos que fueron articulados a la dinámica institucional. Dirigidos fundamentalmente a combatir la actividad política y gremial de los trabajadores del organismo, el disciplinamiento también incidió en las agendas de investigación y extensión rural.

Fue posible constatar la existencia de un ciclo represivo de largo plazo, que dejó como saldo al menos cinco casos de detenciones-desapariciones, tres asesinatos, alrededor de doscientas detenciones y 794 cesantías enmarcadas en persecuciones ideológico-políticas. La información disponible corroboró la presencia de tareas de inteligencia y espionaje político dentro del organismo. Permitió confirmar que buena parte de los miembros del instituto directamente afectados por las políticas represivas fueron antes objeto de seguimientos dentro del INTA. En este sentido, la práctica de terror fue implementada a partir de la introducción de nuevos mecanismos (las detenciones, los secuestros y desapariciones, la presencia militar directa), que se conjugaron con prácticas disciplinadoras pre-existentes (cesantías enmarcadas en persecuciones políticas, espionaje ideológico, traslados de personal como herramienta punitiva, pasaje de información entre el organismo y los servicios de inteligencia). Este acoplamiento permitió que, durante la intervención militar, fuera puesta en práctica la cartografía represiva, es decir, un mapa de datos sobre trabajadores del organismo elaborado con anterioridad al comienzo del golpe de Estado.

Además, si bien el operativo militar de gran envergadura -en términos de despliegue, presencia, realización de interrogatorios y detenciones en instalaciones del INTA- fue realizado en el CNIA ubicado en Castelar, el efecto aleccionador fue propagado en todo el organismo. Asimismo, en los primeros años de intervención, en las distintas estaciones experimentales las prácticas de trabajo incorporaron diversas rutinas -como controles militares en las entradas y salidas, utilización de sirenas en los horarios de ingreso, incremento del fichaje de jornadas laborales cumplidas- al paisaje cotidiano.

El análisis de algunos elementos ligados a la conformación de una identidad en el espacio del INTA, a partir de la construcción de la figura de “familia” (la familia

INTA), permitió indagar cómo el funcionamiento de estos mecanismos represivos fue articulado en el marco de su propia dinámica institucional. A partir de algunos testimonios de integrantes y ex integrantes del organismo, fue posible señalar cómo pesaron algunos de estos rasgos. Los vínculos entre directivos y técnicos, las particularidades del trabajo en estaciones experimentales pequeñas, donde el sentido de comunidad institucional se amalgamó a la proximidad que permitió identificar y “marcar” a trabajadores del organismo, el verticalismo y un funcionamiento corporativo, operaron en la instrumentación de la violencia estatal.

Al mismo tiempo, la distancia existente entre las normativas y su efectiva aplicación fue condición de posibilidad para la existencia de diversas experiencias de investigación y (sobre todo) de extensión rural, que, como señalamos, desbordaron los cauces institucionales. Esta característica, cuyo peso amplificó la propia dimensión territorial del INTA, fue un elemento de “doble filo”. Operó, en los años previos al golpe, permitiendo la existencia de posturas disidentes dentro de la misma estructura oficial, pero, también, fue la herramienta utilizada por los sectores más conservadores para resistirlas. Asimismo, durante la intervención militar, fue un elemento que permitió que existieran distintos márgenes de acción, y de reacción, en los distintos espacios de trabajo del instituto.

Junto a otras situaciones que también estuvieron presentes (enemistades de tipo personal y/o de tipo académica-profesional), el grueso de la actividad de espionaje, primero, y represiva, después, se dirigió a combatir la actividad política y gremial de los trabajadores. Las unidades que sufrieron el mayor impacto no casualmente fueron también las que al momento registraban una intensa movilización política y gremial. Asimismo, en estos casos (Pergamino, Castelar y Famaillá), también se identificaron experiencias significativas de investigación y extensión rural que fueron interrumpidas.

En este sentido, mediante el estudio simultáneo de áreas de trabajo del organismo de alcance nacional, con experiencias focalizadas de investigación y extensión rural, fue posible constatar que la introducción de mecanismos represivos también modificó el perfil y orientación de las tareas de extensión rural e incidió en la organización de las agendas de investigación del INTA.

En sintonía con el peso que alcanzó esta denominación en el período, la construcción de la figura de la “infiltración” al interior del INTA fue sostenida desde

afuera -visible, este aspecto, en algunos de los registros de la prensa y en posicionamientos de las corporaciones agropecuarias reproducidas en los mismos- y, también, desde adentro del instituto. Entre 1973 y 1974, la articulación entre el INTA y la Secretaría de Agricultura y Ganadería fue tan resistida como buena parte de las iniciativas impulsadas como parte de las políticas agropecuarias. Como señalamos, éste fue uno de los frentes a partir de los que se acusó al organismo de ser objeto de una infiltración, ligada a su rol como ejecutor y proveedor de datos necesarios para la implementación de iniciativas de la cartera agropecuaria.

Al mismo tiempo, al interior del INTA, sus directivos dieron cuenta de un “saneamiento”, expresado bajo un discurso imbricado al quehacer técnico, que configuró una depuración institucional entre sus filas. Las cesantías y los posteriores (y conflictivos) reingresos en democracia -en los casos en los que se produjeron- dejaron una huella profunda tanto en la comunidad institucional del organismo, como en sus líneas de acción.

### **1. 3. La dictadura en la trayectoria del INTA: continuidades y rupturas en la producción pública de ciencia y tecnología agropecuaria en Argentina**

Parte de los contenidos, objetivos y destinatarios de las tareas de investigación y extensión del INTA se vieron reorientados durante su intervención militar. Esta reestructuración operó asociada a los cambios registrados en el proceso de acumulación local en general, y en particular, a los producidos en el espacio rural. En este sentido, en sincronía con la creciente polarización social que experimentaba la estructura social agraria, las tareas del organismo intensificaron el contacto con los productores más capitalizados.

A partir de la intervención del organismo en 1976 se profundizó una tendencia, que ya estaba presente en la forma de organización del trabajo científico-tecnológico del INTA: la apropiación privada del conocimiento públicamente producido en el instituto. Este proceso, de híper fragmentación y de mercantilización del conocimiento producido, si bien supuso una continuidad con enfoques y orientaciones previas, implicó una ruptura significativa en áreas estratégicas del INTA.



Al mismo tiempo, la introducción de mecanismos represivos operó desmantelando las diversas iniciativas que, en un contexto de intensa movilización y expectativas de transformación social, estaban disputando cuál debía ser la orientación del INTA, sus objetos de estudio y objetivos de trabajo. La intervención militar iniciada con la dictadura fue, junto al impacto en otros planos más directos, también una ruptura epistemológica que selló la clausura de estos debates. Si en otros ámbitos, como el universitario, esta situación fue más directa y visible, en un organismo como el INTA tuvo secuelas que afectaron directamente tanto a su comunidad institucional, como a la población a la que estaban destinadas las acciones, y al diseño de herramientas de contacto e intervención en un área clave para el país como la agropecuaria.

La histórica centralidad del sector contribuyó a la estabilidad del INTA a lo largo del tiempo, situación que es remarcada por muchos de sus miembros como un alto grado de “adaptabilidad” del organismo a las diversas coyunturas nacionales. En este sentido, ¿es el mismo INTA el que emerge después de la dictadura? Si bien la identidad institucional continuó apelando a algunos de los mismos imaginarios, (la “camiseta del INTA” y la “familia rural”), su continuidad se sostuvo a costa de la expulsión de los sujetos y los debates críticos. Situación que, inevitablemente, dejó su marca en la trayectoria institucional.

Al mismo tiempo, el enfoque de las tareas de investigación y extensión rural estuvo signado por la orientación de las políticas sectoriales, agrarias y científico-tecnológicas, que aportaron los marcos regulatorios en los que se inscribió la liberalización del sistema científico-tecnológico y la desregulación del sector agropecuario. Sus implicancias tomaron mayor envergadura de la mano del incremento de la concentración que adquirió progresivamente el desarrollo capitalista del espacio rural.

Mientras que la oleada de regímenes dictatoriales producida en este período en América Latina ha sido profundamente estudiada, la producción de tecnología agropecuaria en estos contextos es una temática sobre la que restan indagaciones. En este sentido, en el plano regional, el caso chileno, país modelo en cuanto al nivel de implementación de las recetas provenientes de los economistas de la Escuela de Chicago, registró para el área agropecuaria algunas conexiones con la trayectoria local. En el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIA) chileno comenzó a

ganar terreno la idea de que éste “tenía que actuar como una empresa, vale decir que sus actividades debían ajustarse a una lógica de beneficio-costos” (Faiguenbaum, 2011: 74). Un punto de contacto entre ambas trayectorias institucionales fue el rol que asumió la “transferencia de tecnología”, el nuevo slogan. Mediante el accionar de “grupos de transferencia tecnológica”, destinados a agricultores de nivel empresarial, el INIA consiguió ganar prestigio entre los empresarios del medio y fortalecerse políticamente (Faiguenbaum, 2011). Los directores y coordinadores pasaron a denominarse “gerentes” y la necesidad de aumentar los recursos del organismo, debido al recorte presupuestario implementado, intensificó nuevos mecanismos. En un sentido similar al que adoptó la trayectoria del INTA, aunque con un alcance significativamente mayor, el INIA aumentó la venta de servicios y convenios con el sector privado. La mirada regional, como mencionamos, es un campo sobre el que restan futuras indagaciones para establecer puntos de contacto y contrapuntos, más aún considerando la relevancia del sector agropecuario en este espacio.

Finalmente, el análisis de los elementos de ruptura y continuidad presentes en la trayectoria del INTA ha permitido señalar las implicancias concretas de su intervención durante la última dictadura militar y la amplificación de una tendencia en vinculación con transformaciones económicas, sectoriales y sociales que protagonizaron el período. Asimismo, el profundo impacto registrado en la comunidad institucional del INTA a raíz de su intervención, permitió esbozar trayectorias e iluminar el modo en el que operaron las prácticas de disciplinamiento en un ámbito de investigación. Conocimientos científico-tecnológicos, políticas agropecuarias, testimonios ligados a la intervención militar y transformaciones económicas y sociales, fueron abordados en forma integral, contribuyendo a comprender la dinámica histórica del pasado científico y tecnológico reciente y sus implicancias.

#### **1.4. La apropiación privada de conocimiento como dinámica histórica: interrogantes pendientes**

Las dinámicas de investigación a partir de las cuales el conocimiento generado en instituciones públicas como el INTA operó al servicio del desarrollo y la acumulación de capital, posee un itinerario, rastreado en otras experiencias, vinculado

directamente a las relaciones sociales en las que se desenvuelve la producción científica y tecnológica. De la mano de la industrialización de la ciencia, de la imbricación creciente entre ciencia y técnica primero, y entre ciencia y tecnología después, el propio conocimiento fue convirtiéndose en mercancía. En este sentido, la tendencia registrada, hacia la apropiación privada de las investigaciones en materia agropecuaria efectuadas en el ámbito público, posee una trayectoria histórica.

En el caso del INTA y su trayectoria en el pasado reciente, las formas que asumió la apropiación del conocimiento registraron un avance cualitativo. Mediante diversos mecanismos, de cooptación y entrega, tanto los productos finales de investigaciones estratégicas (como las estudiadas en el área de fitotecnia), así como décadas de inversiones sostenidas en cooperación científico-técnica y formación de profesionales, fueron capitalizadas por el sector privado. En simultáneo, se produjo la retirada de los “agrónomos de terreno”, como eran llamados por los propios extensionistas del instituto, de la vida comunitaria rural. Asimismo, como señalamos, de la mano de políticas represivas se discontinuaron aquellas miradas económicas y sociales sobre la realidad agropecuaria nacional que apuntaban a incidir en problemáticas básicas e irresueltas del sector.

En este período, junto al desmantelamiento del sector público en sentido general, algunas instituciones y áreas de trabajo dentro de las mismas registraron una continuidad, expresada en líneas y planes de investigación, que en ocasiones formaron parte de la trama corporativa (Castellani, 2009; Pucciarelli, 2004) que el Estado generó, asociándose a grupos económicos concentrados y favoreciendo su accionar. En este sentido, resta aún profundizar el estudio de diversas áreas que en este período crecieron en términos presupuestarios, como el CONICET y la CNEA, donde también crecieron los consorcios público-privados. El vaciamiento estatal en general -y en las áreas de ciencia y técnica en particular- fue una de las caras de una dinámica cuyo reverso estuvo dado por el fortalecimiento del papel del Estado como instrumento de la amplificación de diversos mecanismos de cesión de productos, resultados y conocimientos generados en el ámbito público. Los destinatarios de los conocimientos producidos, junto a los objetos de estudio y los enfoques aplicados, no fueron ajenos a los cambios que en el período registró la dinámica socio-económica. La orientación de los conocimientos -en otras palabras para quién y para qué producir ciencia y tecnología- fue en muchos casos

supeditada a la promoción de capitales privados y clausurados los debates en torno a esta problemática estructural. En este sentido, en el caso del INTA fue posible identificar una trayectoria histórica, ligada al rol de mediador del sistema público de ciencia y técnica (y del Estado, a través de él), como canal de transferencia de inversiones y productos de investigación. Al mismo tiempo, fue observada la intensificación de esta tendencia. Este análisis, sobre uno de los principales organismos de ciencia y técnica del país, nos conecta también con otros interrogantes.

¿Qué cambios y qué continuidades registró la producción científica y tecnológica nacional en este período? ¿Qué conexiones mantuvo con las políticas sectoriales (nuclear, industrial, agropecuaria, científica) y con las transformaciones económicas? ¿Cómo fueron implementados los mecanismos represivos en otros ámbitos y qué impacto tuvieron en las agendas de investigación? ¿De qué manera la producción pública de conocimiento se vio modificada? Estos y otros interrogantes, (por ejemplo, cómo se articularon las memorias institucionales, las marcas en los *cuerpos* científico-técnicos y los retornos de personal en democracia), atraviesan la mirada sobre el complejo científico-tecnológico argentino durante la última dictadura. La ausencia de estudios en profundidad y de una mirada panorámica sobre el conjunto de las trayectorias institucionales para el período se presenta como una cuenta pendiente, tanto para abordar la dinámica histórica de la producción de CyT, como para analizar sus implicancias presentes.

Como señalamos, el rol del sector agropecuario ha sido históricamente relevante para Argentina, dado su marcado perfil agroexportador desde los inicios de su inserción en el mercado mundial. Abordar la producción de conocimiento en un organismo como el INTA, referente para sus pares latinoamericanos como el INTA y clave para el complejo argentino, buscó también aportar herramientas para pensar la organización científica y técnica actual, y los problemas vigentes en la apropiación y direccionamiento del conocimiento generado en el ámbito público. Uno de los resultados de la investigación permite observar, como marcamos, una intensificación cualitativa en la apropiación privada de los conocimientos públicos generados en el ámbito del INTA. Fuertes y sostenidas inversiones estatales en formación de profesionales, el establecimiento de redes de cooperación y la generación de capacidades técnicas, han migrado de la esfera pública. En un área vital para el

desarrollo del sector agropecuario como lo es la investigación en introducción de cultivares y mejoramiento de semillas, el INTA perdió el papel central que ostentó por años y fue enmarcado durante la última dictadura en la lógica de subsidiaridad del Estado. ¿Para quién se produce ciencia y tecnología desde el ámbito público? ¿En qué medida las inversiones redundan en beneficios colectivos? ¿Qué herramientas existen y cuáles deberían instrumentarse para favorecer la apropiación social del conocimiento? ¿Qué problemas se registran en un área de importancia socio-económica estratégica como la agropecuaria? Estos interrogantes subyacen en este trabajo y se despliegan a partir de él. Dentro de las políticas sectoriales, las iniciativas en materia de políticas agropecuarias y científico-tecnológicas concentran buena parte de estos problemas, tras los que existen numerosos sujetos y recursos en disputa. La competencia estatal, y su capacidad de injerencia en la definición de objetivos prioritarios de investigación, constituye una temática de suma actualidad y constante debate. De igual manera, la forma de explotación de los recursos naturales y la estructuración de la actividad agropecuaria es, también, un pilar fundamental que subyace en numerosas disputas económicas y políticas. Situada entre ambos ejes, la producción pública de conocimiento orientado al agro constituye un eslabón fundamental, sobre el que aún resta generar proyectos alternativos que prioricen la permanencia de las capacidades técnicas, los profesionales, las inversiones y los saberes. En este sentido, esta investigación expone las raíces históricas de conflictos vigentes en los actuales convenios de vinculación tecnológica del sector. Lejos de necesitar solamente asegurar fuertes inversiones en el área de ciencia y técnica, la investigación pública orientada al ámbito agropecuario carece aún de definiciones precisas que intervengan en la dirección y apropiación colectiva del conocimiento generado.

Nos cabe señalar, en esta línea, una inquietud, indivisible de este pasado reciente y de su conexión con nuestro futuro próximo. Junto a la necesidad de avanzar en el control de las firmas transnacionales involucradas en la explotación de los recursos naturales, y de las tasas de ganancia de los bloques agro-exportadores de la región, resulta necesario promover la gestación de herramientas que aborden la producción de conocimientos orientados al agro, trascendentes para la estructuración de su entramado productivo y la resolución de problemáticas vitales de las poblaciones implicadas. El análisis de la producción pública de conocimiento, y de las tensiones por su apropiación

en una situación histórica concreta, nos enfrenta a problemáticas pendientes de resolución. Y aboga por que éste permanezca en el ámbito público, se oriente a la satisfacción de necesidades sociales y redunde en beneficios colectivos.

## Anexo Documental: selección de imágenes y documentos



Extensionista de INTA recorriendo en lancha el Delta, s/f. Fuente: archivo fotográfico INTA.



Extensionista de INTA dictando capacitación. 1973.

Fuente: archivo fotográfico INTA.



Folletín de Divulgación de Extensión Rural (portada).  
Fuente: INTA (1970).





Guardería de la estación experimental Pergamino, abierta por accionar de la gremial en 1973.

Fuente: archivo personal Patricia O´ Duyer.

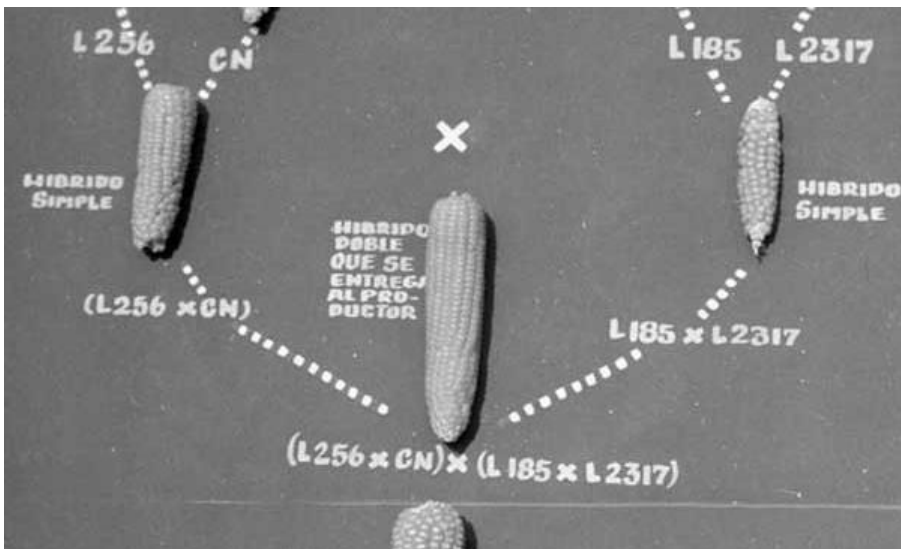


Primera reunión de Clubes 4-A del INTA, Pergamino.

Fuente: archivo personal Herman Zorzín.



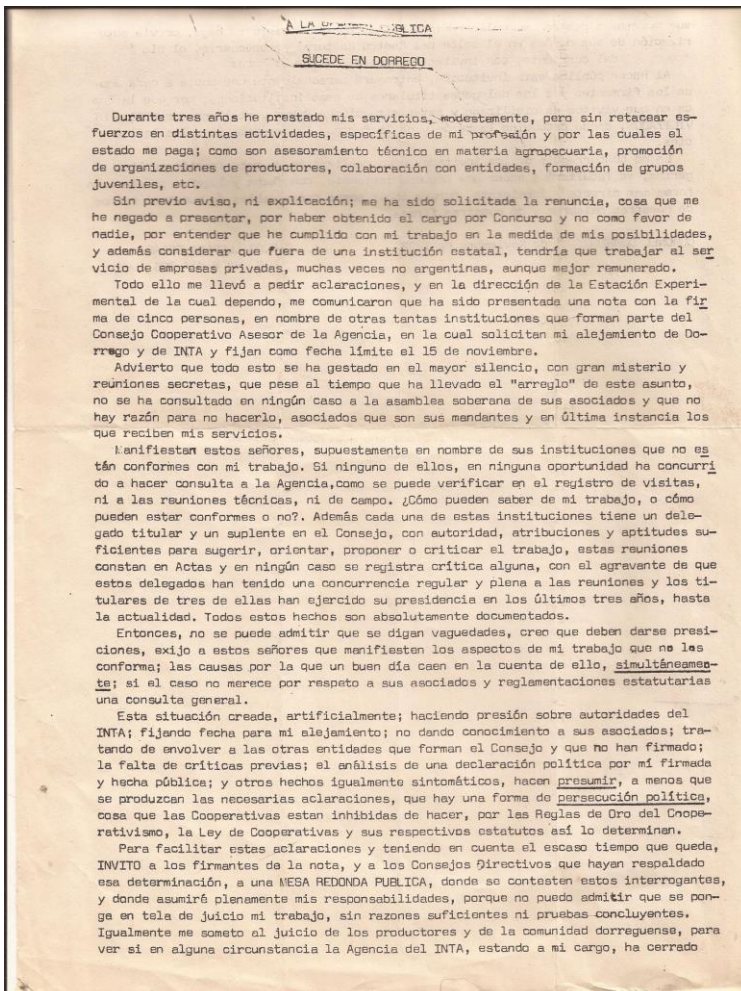
Bolsa de semillas de maíz híbrido doble “Abati 2” INTA, cosecha 1970/71. Estación experimental Pergamino. Fuente: archivo fotográfico INTA.



Demostración de la obtención de híbridos de maíz, s/f. Fuente: archivo fotográfico INTA.



Urbano Rosbaco. Genetista de INTA, ex director de la estación experimental Paraná hasta su cesantía en 1976. Fuente: archivo fotográfico INTA.



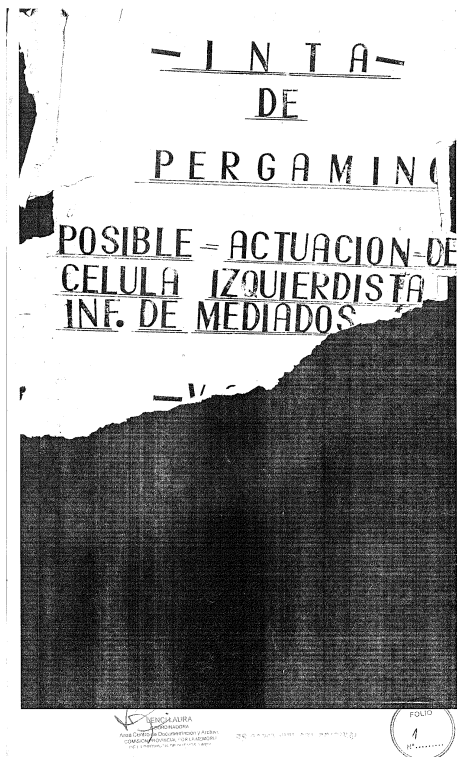
Carta abierta de la comunidad de Carlos Llerena Rosas, extensionista de INTA y militante del FIP, asesinado el 30 de octubre de 1974 por la Alianza Anticomunista Argentina. Coronel Dorrego, 1 de noviembre, 1972. Fuente: archivo personal de José Llerena Rosas.



### Secuestraron y Asesinaron a Carlos Llerena Rosas

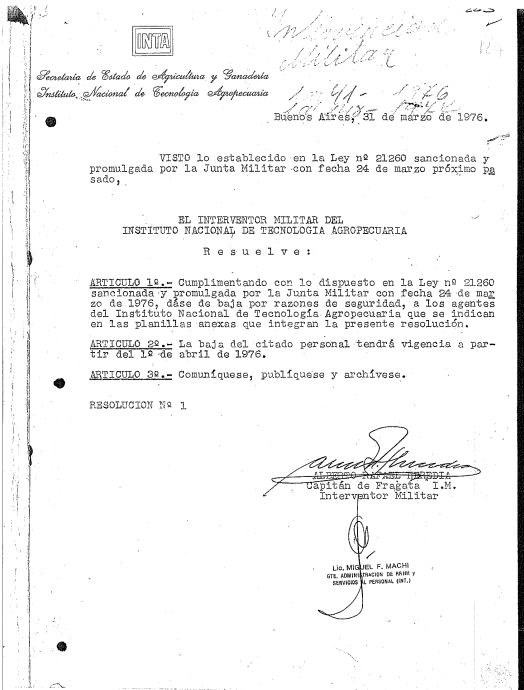
El miércoles 30 de octubre fue secuestrado y luego asesinado a balazos el Ingeniero Carlos Llerena Rosas Jefe de la Agencia de Extensión Rural INTA de Malpú, quien se desempeñaba como Secretario de Prensa de APINTA, gremio que reúne a todo el personal del INTA. Además Llerena era un conocido dirigente del FIP (Frente de Izquierda Popular) y por ende activo militante del mismo. El secuestro se produjo a las 14,40 horas cuando Llerena se encontraba en una reunión del gremio en el local del mismo, en la ciudad de Buenos Aires. Horas más tarde su cadáver fue hallado en Ezeiza, presentando numerosos impactos de bala. Los secuestradores y asesinos de Llerena no han sido aún identificados, sabiéndose que se trata de un grupo de siete hombres fuertemente armados que utilizaron para su huida dos automóviles Ford Falcon, sin patentes.

La Voz de General Guido, viernes, 8 de noviembre de 1974.



Informe de inteligencia sobre trabajadores de la estación experimental Pergamino.

Fuente: archivo DIPBA



Resolución de la intervención militar dictaminado cesantías de trabajadores del INTA. Fuente: actas del Consejo Directivo de INTA.



De derecha a izquierda: Enrique Gobee, (presidente de INTA), David Árias (interventor civil de INTA designado por las Fuerzas Armadas), Juan Rafael Llerena Amadeo (ministro de Educación) y Jorge Zorreguieta (secretario de Agricultura y Ganadería). 1980. Reanudación de las actividades del CD de INTA y “normalización” institucional. Fuente: archivo fotográfico INTA.

## **GLOSARIO DE ABREVIATURAS** (en orden alfabético)

AAA: Alianza Anticomunista Argentina

AAAS: American Association for the Advancement of Science

AACREA: Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación  
Agrícola

ACA: Asociación de Cooperativas Argentinas

AID: Agencia Internacional para el Desarrollo

AER: Agencia de Extensión Rural

AGA: Archivo General de la Armada

APINTA: Asociación de Profesionales del INTA

APRESID: Asociación Argentina de Productores de Siembra Directa

ATE: Asociación de Trabajadores del Estado

BID: Banco Interamericano de Desarrollo

BM: Banco Mundial

CAN: Consejo Agrario Nacional

CARBAP: Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa

CEPAL: Comisión Económica para América Latina

CD: Consejo Directivo

CIAAB: Centro de Investigaciones Agrícolas Alberto Boerger

CIAT: Centro Internacional de Agricultura Tropical

CIP: Centro Internacional de la Papa

CIMMYT: Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo

CNEA: Comisión Nacional de Energía Atómica

CNIA: Centro Nacional de Investigaciones Agropecuarias

CONADE: Consejo Nacional de Desarrollo

CONICET: Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas

CONINAGRO: Confederación Intercooperativa Agropecuaria

CRA: Confederaciones Rurales Argentinas

CVT: Convenio de Vinculación Tecnológica

DIPBA: Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires

EEA: Estación experimental agronómica

EMBRAPA: Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária

EPG: Escuela para Graduados en Ciencias Agropecuarias

ERP: Ejército Revolucionario del Pueblo

ESMA: Escuela de Mecánica de la Armada

FAA: Federación Agraria Argentina

FACA: Federación Argentina de Cooperativas Agrarias

FAO: Food and Agriculture Organization

FAP: Fuerzas Armadas Peronistas

FEN: Frente Estudiantil Nacional

FIP: Frente de Izquierda Popular

FOTIA: Federación Obrera Tucumana de la Industria Azucarera

IAPI: Instituto Argentino de Promoción Industrial

ICA: Instituto Colombiano Agropecuario

IICA: Instituto Interamericano de Cooperación Agrícola

ILPES: Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social

INCUPO: Instituto de Cultura Popular

INDEC: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos

INIA: Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria  
INTA: Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria  
INTI: Instituto Nacional de Tecnología Industrial  
INRA: Institut National de Reserch Agronomique  
IRNP: Impuesto a la Renta Normal Potencial  
JP: Juventud Peronista  
JTP: Juventud Trabajadora Peronista  
OEA: Organización de los Estados Americanos  
OCPO: Organización Comunista Poder Obrero  
ONU: Organización Naciones Unidas  
OUGT: Organización Única Trasvasamiento Generacional  
PC: Partido Comunista  
PCA: Partido Comunista Argentino  
PEN: Poder Ejecutivo Nacional  
PRODUSEM: Cooperativa Productores de Semillas Selectas  
SAyG: Secretaria de Agricultura y Ganadería de la Nación  
SENASA: Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria  
SRA: Sociedad Rural Argentina  
UBA: Universidad de Buenos Aires  
UNLP: Universidad Nacional de La Plata  
UPARA: Unión de Productores de la República Argentina  
UPOV: Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales  
UVT: Unidad de Vinculación Tecnológica  
WAAP: Asociación Mundial de Producción Animal





## Bibliografía

- Adler, E. (1987). *The power of ideology. The quest for technological autonomy in Argentina and Brazil*. Berkeley: University of California Press.
- Adorno, T. W. y Horkheimer, M. (2002). *Dialéctica del Iluminismo*. Madrid: Editora Nacional.
- Águila, G (2013). La represión en la historia reciente argentina perspectivas de abordaje, conceptualizaciones y matrices explicativas. *Contenciosa*, 1(1), 1-13. Recuperado de <http://www.contenciosa.org/Sitio/VerArticulo.aspx?i=7>
- Alapin, H. (2008). *Rastrojos y algo más. Historia de la siembra directa en Argentina*. Buenos Aires: Teseo.
- Althusser, L. (1984). *Ideología y aparatos ideológicos del Estado*. Buenos Aires: Nueva Visión.
- Albaladalejo, C. (2006). Le déclin institutionnel du «développement agricole» en Argentine: paroles d'agents en quête de identité». En J.F. Baré (Dir.) *Paroles d'experts. Études sur la pensée institutionnelle du développement* (pp. 161-201). París: Karthala.
- Albornoz, M. (1996). La ciencia política ignora la política de la ciencia.. En M. Albornoz, P. Kreimer y E. Glavich (Eds.) *Ciencia y sociedad en América Latina* (pp. 37-44). Buenos Aires: Universidad Nacional de Quilmes.
- Albornoz, M. (2004). Política científica y tecnológica en Argentina. *Temas de Iberoamérica Globalización, Ciencia y Tecnología*, 81, 83-92.
- Aleman, C. (2000). *La transición del Servicio de Extensión tradicional a un nuevo proyecto público-privado de Innovación tecnológica, Asistencia, Información y*

*Capacitación Regional. El caso del INTA Alto Valle* (Documento de Trabajo N.º 3). Río Negro: Ediciones INTA.

Alemaný, C. (2003). Apuntes para la construcción de los períodos históricos de la Extensión Rural del INTA. En G. Cimadevilla y R. Thornton (Eds.), *La Extensión Rural en debate: concepciones, retrospectivas, cambios y estrategias para el Mercosur* (pp.137-171). Buenos aires: Ediciones INTA.

Alemaný, C. (2012). *Elementos para el estudio de la dinámica y evolución histórica de la extensión rural en Argentina*. (Tesis doctoral) Universidad de Córdoba.

Alemaný, C y Sevilla Guzmán, E. (2007). ¿Vuelve la extensión rural?: Reflexiones y propuestas agroecológicas vinculadas al retorno y fortalecimiento de la extensión rural en Latinoamérica. *Realidad Económica*, 227, 52-74.

American Association for the Advancement of Science (1981). *Scientists and Human Rights in Argentina since 1976*. Washington: American Association for the Advancement of Science.

Anchou, Á. (2007, septiembre). *De marxistas a peronistas, los militantes del FEN y la conformación de la OUGT*. Ponencia presentada en XI Jornadas de Interescuelas Departamentos de Historia, Universidad Nacional de Tucumán.

Anchou, Á. (2012, septiembre). *Las mujeres de la Juventud Peronista Guardia de Hierro y la Rama Femenina del Movimiento Nacional Justicialista - Capital Federal (febrero 1967 - diciembre 1971)*. Ponencia presentada en Simposio "Militancia y vida cotidiana: los años '60 y '70 en el Cono Sur", Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires.

Anchou, Á. y Bartoletti, J. (2008, abril). *La Patria Peronista vs la Patria Socialista*. Ponencia presentada en IV Jornadas de Trabajo sobre Historia Reciente, Escuela

de Historia, Facultad de Humanidades y Artes, Universidad Nacional de Rosario, Rosario.

Anuch, M. B. (1979). *Breve reseña histórica de la extensión rural con énfasis en el área social*. Buenos Aires: Ediciones INTA.

Aparicio, S. (1982, diciembre). *Evidencias e interrogantes acerca de las transformaciones sociales en la zona extrapampeana*. Ponencia presentada en las III Jornadas de Actualización, ILEA, Buenos Aires, Argentina.

Arceo, E. (2003). *Argentina en la periferia próspera. Renta internacional, dominación oligárquica y modo de acumulación*. Buenos Aires: FLACSO-Universidad Nacional de Quilmes-IDEP.

Arceo, E. Basualdo, E. M. (1997). El impuesto inmobiliario rural en la provincia de Buenos Aires: del Modelo Agroexportador a la valorización financiera. *Realidad Económica*, 149, 69-99.

Archetti, E. (1988). Ideología y organización sindical: las ligas agrarias del norte de Santa Fe. *Desarrollo Económico* 28 (111), 447-461.

Ardilla, V., Reichart, N. y Rincón, A. (1980). *Sistemas nacionales de América Latina: análisis comparativo de recursos humanos en países seleccionados. El caso del INTA de Argentina* (Documento 48). Buenos Aires: Proyecto Cooperativo de Investigación sobre Tecnología Agropecuaria en América Latina (PROTAAL).

Arendt, H. (1999). *Eichmann en Jerusalén. Un informe sobre la banalidad del mal*. Barcelona: Lumen.

Arnon, J. (1972). *Organización y administración de la investigación agrícola*. Lima: Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas.

- Astori, D. (1984). *Controversias sobre el agro latinoamericano*. Buenos Aires: Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO).
- Azcuy Ameghino, E. y León, C. A. (2013). La sojización: contradicciones, intereses y debates. En G. Martínez Dougnac (Comp.) *De especie exótica a monocultivo. Estudios sobre la expansión de la soja en Argentina* (pp. 39-65). Buenos Aires: Imago Mundi.
- Azpiazu, D., Basualdo, E. y Nochteff, H. (1988). *La revolución tecnológica y las políticas hegemónicas*. Buenos Aires: Lagasa.
- Azpiazu, D., Basualdo, E. y Khavisse, M. (2004). *El Nuevo Poder Económico en la Argentina de los Años 80*. Buenos Aires: Siglo XXI Editores.
- Balsa, J. (2006). Los sujetos sociales de la expansión agrícola en las décadas de 1970 y 1980. En *El desvanecimiento del mundo chacarero. Transformaciones sociales en la agricultura bonaerense. 1937-1988* (pp. 133-161). Buenos Aires: Universidad Nacional de Quilmes.
- Balsa, J. (2013, octubre). Las políticas de colonización y regulación de los arrendatarios del peronismo clásico (1946-1955) y los posicionamientos de la SRA y la FAA. y SRA. *XIV Jornadas Interescuelas/ Departamentos de Historia*. Universidad Nacional de Cuyo. Recuperado de <http://interescuelashistoria.org/>
- Barrientos, M. (2002). Evolución de los servicios de extensión en nuestro país. Vinculación con los planteos pedagógicos vigentes. En *Compendio Bibliográfico. Asignatura Extensión Rural. Departamento de Desarrollo Rural. Facultad de Ciencias Agropecuarias. Universidad Nacional de Córdoba*. Recuperado de [http://campus.fca.uncu.edu.ar:8010/pluginfile.php/18252/mod\\_resource/content/1/HistoriaExt-Barrientos..pdf](http://campus.fca.uncu.edu.ar:8010/pluginfile.php/18252/mod_resource/content/1/HistoriaExt-Barrientos..pdf)

- Barrientos, M. y Bergamín, G. (1998). Metodología en extensión rural. Conceptos y elementos. En *Compendio Bibliográfico. Asignatura Extensión Rural. Departamento de Desarrollo Rural. Facultad de Ciencias Agropecuarias. Universidad Nacional de Córdoba* (pp. 13-23). Córdoba: Universidad Nacional de Córdoba.
- Barsky, O. y Dávila, M. (2008). *La rebelión del campo. Historia del conflicto agrario argentino*. Buenos Aires: Sudamericana.
- Barsky, O. y Piñeiro, M. (1985). *Evolución de la productividad y el cambio técnico en el sistema agropecuario de América Latina*. Buenos Aires: Centro de Investigaciones Sociales sobre el Estado y la Administración (CISEA).
- Barsky, O., Cirio, F., Del Bello, J. C., Gutiérrez, M., Huici, N., Jacobs, E., Obschatko, E. (1988). *La agricultura pampeana. Transformaciones productivas y sociales*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica- IICA- CISEA.
- Barsky, O., Gelman, J. (2001). *Historia del agro argentino. Desde la Conquista hasta fines del siglo XX*. Buenos Aires: Mondadori.
- Basco, M. y Soverna, S. (1975). ¿A quién representa la Sociedad Rural Argentina? *Realidad Económica*, 19, 52- 63.
- Basualdo, E. (1987). *Deuda externa y poder económico en la Argentina*. Buenos Aires: Nueva América.
- Basualdo, E. (1996). Los grupos de sociedades en el agro pampeano. *Desarrollo Económico*. 36(143), 807-828.
- Basualdo, E. (1998). La concentración de la propiedad rural en la Provincia de Buenos Aires: situación actual y evolución reciente. En Hugo Nochteff (Ed.) *La*

*economía Argentina a fin de siglo: fragmentación presente y desarrollo ausente*, (pp. 71-107). Buenos Aires: FLACSO/EUDEBA.

Basualdo, E. (2006). *Estudios de historia económica argentina*. Buenos Aires: Siglo XXI Editores.

Basualdo, E. (2010). Los propietarios de la tierra y las economías de escala, sustentos del paradigma sojero en Argentina. *Desarrollo Económico*, 50(197), 3-33.

Basualdo, E. y Khavisse, M. (1993). *El nuevo poder terrateniente. Investigación sobre los nuevos y viejos propietarios de tierras de la Provincia de Buenos Aires*. Buenos Aires: Planeta.

Bauman, Z. (1997). *Modernidad y Holocausto*. Madrid: Sequitur.

Bay, D. (1976). Cooperative Extension Service: Born form a Need of People. *Extension Service Review*, 47, 3-27.

Becerra, N., Baldatti, C. y Pedace R. (1997). *Un análisis sistémico de políticas tecnológicas. Estudio de caso: el agro pampeano argentino (1943-1990)*. Buenos Aires: Colección CEA, Universidad de Buenos Aires.

Beigel, F. (Ed.). (2013). *The Politics of Academic Autonomy in Latin America*. Londres: Ashgate Publishing.

Bekerman, F. (2013). The Scientific Field During Argentina's Latest Military Dictatorship (1976–1983): Contraction of Public Universities and Expansion of the National Council for Scientific and Technological Research (CONICET). *Minerva*, 1-17.

Bekerman, F. (2009). El campo científico argentino en los años de plomo: Desplazamientos y reorientación de los recursos. *Sociohistórica*, 26, 151-166.

- Bellini, C. y Rougier, M. (2008). *El Estado Empresario en la industria argentina. Conformación y crisis*. Buenos Aires: Manantial.
- Benjamin, W. (2002). Sobre el concepto de historia. *La dialéctica en suspenso. Fragmentos sobre historia*. Santiago de Chile: Lom- ARCIS.
- Benoir, D., Harriman, J. & Baxter, M. (1984). *Agricultural extension: The Training and Visit System*. Washington: World Bank.
- Bercovich, N. y Katz J. (1990). *Biotecnología y economía política: estudios del caso argentino*. Buenos Aires: CEAL.
- Bergamín, G. y Ferrer, G. (2002). Técnicas de trabajo en extensión rural. En *Compendio Bibliográfico. Asignatura Extensión Rural. Departamento de Desarrollo Rural. Facultad de Ciencias Agropecuarias. Universidad Nacional de Córdoba* (pp. 3-33). Córdoba: Universidad Nacional de Córdoba.
- Bertraux, D. (2005). *Relatos de vida. Perspectiva etnosociológica*. Barcelona: Ballterra.
- Bilbao, S. y Vessuri, H. (1986). La experiencia rural de Campo Herrera. F. Iturraspe (Ed.) *Participación, cogestión y autogestión en América Latina* (pp. 124-145). Caracas: Nueva Sociedad.
- Bisang, R. (1995). Libre mercado, intervenciones estatales e instituciones de Ciencia y Técnica en la Argentina: apuntes para una discusión. *REDES*, 3, 13-58.
- Bonavena, P. (2008, mayo). *El movimiento estudiantil universitario frente a la Misión Ivanissevich: el caso de la Universidad de Buenos Aires*. Ponencia presentada en las IV Jornadas de Trabajo sobre Historia reciente, Rosario.
- Bonavena, P. (2009). Guerra contra el campo popular en los '70. Juan Domingo Perón, la depuración ideológica y la ofensiva contra los gobernadores. Izaguirre, I.



- (comp.) *Lucha de clases, guerra civil y genocidio en la Argentina. 1973 – 1983* (143-235). Buenos Aires: EUDEBA.
- Bonneuil, C. & Thomas, F. (2009). *Gènes, pouvoirs et profits: Recherche publique et régimes de production des savoirs de Mendel aux OGM*. Versailles: Quae.
- Bordelois, G. (1966). *Causas de la creación del INTA y la labor cumplida*. Buenos Aires: Ediciones INTA.
- Bourdieu (1994). L' esprit de famille. *Raisons pratiques sur la théorie de l'action* (pp. 135-145). París: Seuil.
- Boy, A. (2005). Cambios productivos y sus repercusiones en el nivel agronómico. En N. Giarraca y M. Teubal (Orgs.) *El campo argentino en la encrucijada. Estrategias y resistencias sociales, ecos en la ciudad* (pp. 79-100). Buenos Aires: Alianza.
- Braverman, H. (1980). *Trabajo y capital monopolista*. México: Ed. Nuestro Tiempo.
- Brieva, S. (2007). *Dinámica sociotécnica de la producción agrícola en países periféricos: configuración y reconfiguración tecnológica en la producción de semillas de trigo y soja en Argentina, desde 1970 a la actualidad*. (Tesis doctoral). Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), Buenos Aires.
- Brown, T. G. (1981). Changing Delivery Systems for Agricultural Extension: The Extension Teacher- Changing roles and competencies. *American Journal of Agricultural Economics*, 63, 859-862.
- Browning, C. (2002). *Aquellos hombres grises. El Batallón 101 y la Solución Final en Polonia*. Barcelona: Edhasa.

- Buchbinder, P. (2005). *Historia de las universidades argentinas*. Buenos Aires: Sudamericana.
- Bustamante, M. (2011). Virajes en las políticas públicas de tierras. Continuidades y discontinuidades a partir de la segunda mitad del siglo XX, región pampeana. Argentina. *Terra. Nueva Etapa*, 27(41), 73-95.
- Calandra, M. G. (2009). El INTA y sus órdenes simbólicos en pugna. En C. Gras y V. Hernández (Comps.) *La Argentina rural. De la agricultura familiar a los agronegocios* (pp.193-214). Buenos Aires: Biblios.
- Caldas A. (2004). *La regulación jurídica del conocimiento tradicional: la conquista de los saberes*. Bogotá: IILSA.
- Calveiro, P. (1998) *Poder y desaparición. Los campos de concentración en Argentina*. Buenos Aires: Colihue.
- Calveiro, P. (2008). El testigo narrador. *Puentes*, 24, 50-55.
- Calveiro, P. (2008). La memoria como futuro. Actuel Marx Intervenciones (org.), *Memorias en busca de historia. Más allá de los usos políticos de la memoria* (pp.59-75). Santiago: Universidad Bolivariana-LOM Ediciones.
- Calvelo, A. J. (2000). Académico de Número Ing. Agr. Ramón Agrasar. *Anales de la Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria*, 54, 81-82.
- Camprubí, L. (2010). One grain, One Nation: Rice Genetics and the Corporate Estate in Early Francoist Spain (1939-1952). *Historical Studies in the Natural Sciences*, (40) 4, 499-531.
- Canelo, P. (2008). *El proceso en su laberinto. La interna militar de Videla a Bignone*. Buenos Aires: Prometeo.

- Canitrot, A. (1980). La disciplina como objetivo de la política económica. Un ensayo sobre el programa económico del gobierno argentino desde 1976. *Desarrollo Económico*, 19(76), 453-475.
- Canitrot, A. (1983). Teoría y práctica del liberalismo. Política antiinflacionaria y apertura económica en la Argentina. *Desarrollo Económico*, 21 (82), 131-189.
- Cantu, A. y Cimadevilla, G. (1997). Campos, medios y escritorios: del trabajo interpersonal a la terciarización extensionista en el INTA. *Cronía. Revista de investigación de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Río Cuarto*, 1(2), 9-15.
- Caracciolo de Basco, M. (1998). *Modalidades de asistencia técnica a los productores agropecuarios en la Argentina*. Buenos Aires: Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA).
- Carballo, C. (2002). *Extensión y transferencia de tecnología en el sector agrario argentino*. Buenos Aires: Editorial Facultad de Agronomía, Universidad de Buenos Aires.
- Carballo, C. (2007). Cincuenta años de agricultura familiar y desarrollo rural en el INTA. *Revista Interdisciplinaria de Estudios Agrarios*, 26-27, 63-93.
- Cardoso, F. H. y Faletto, E. (1969). *Dependencia y desarrollo en América Latina. Ensayo de interpretación sociológica*. Buenos Aires: Siglo XXI Editores.
- Carnovale, V. (2011). *Los combatientes: historia del PRT-ERP*. Buenos Aires: Siglo XXI Editores.
- Carnovale, V., Lorenz, F. G., y Pittaluga, R. (2006). *Historia, memoria y fuentes orales*. Buenos Aires: Memoria Abierta.

- Casalet, M. (1992). Recursos humanos de investigación en el Complejo Científico y tecnológico: evolución del empleo y políticas de recursos humanos del CONICET. En E. Oteiza (comp.) *La política de investigación científica y tecnológica argentina. Historia y perspectivas* (pp. 235-246). Buenos Aires: CEAL.
- Cascardo, A. y Pizarro, J. B. (2002). *Historia de la Estación Experimental Pergamino*. Buenos Aires: Ediciones INTA.
- Cataife, G. (2002). De la selección vegetal a la biotecnología: Economía del germoplasma. *Theomai*, 6. Recuperado de <http://revista-theomai.unq.edu.ar/numero6/artguidocataife6.htm>
- Castellani, A. (2009). *Estado, empresas y empresarios. La construcción de ámbitos privilegiados de acumulación entre 1966 y 1989*. Buenos Aires: Prometeo.
- Castelló Lobet, J. A. (1984). Real Escuela de Avicultura. *Selecciones Avícolas*, 12, pp. 192-197.
- Castiglione, M. (1992). *La militarización del Estado en la Argentina*. Buenos Aires: CEAL.
- Cavarozzi, M. (2006). *Autoritarismo y democracia (1955-2005)*. Buenos Aires: Ariel.
- Centro de Investigaciones en Administración Pública (1971). *Un análisis crítico del INTA*. Buenos Aires: Instituto Torcuato Di Tella- CIAP.
- Centro de Investigaciones en Administración Pública (1973a). *Programación de investigaciones en el INTA*. Buenos Aires: Instituto Torcuato Di Tella- CIAP.
- Centro de Investigaciones en Administración Pública (1973b). *La acción interinstitucional del INTA*. Buenos Aires: Instituto Torcuato Di Tella- CIAP.

- Centro de Investigaciones en Administración Pública (1973c). *Los mecanismos presupuestarios del INTA*. Buenos Aires: Instituto Torcuato Di Tella- CIAP.
- Cimadevilla, G. (2003). La naturaleza no natural de la extensión rural. En *La Extensión Rural en Debate. Concepciones, retrospectivas, cambios y estrategias para el Mercosur*. Buenos Aires: Ediciones INTA.
- Cimadevilla, G. (2004). *Dominios. Crítica a la razón intervencionista, la comunicación y el desarrollo sustentable*. Buenos Aires: Prometeo.
- Cimadevilla, G., Camiglia, E. (2004) *Comunicación, ruralidad y desarrollo: mitos, paradigmas y dispositivos del cambio*. Buenos Aires: Ediciones INTA.
- Cirio, F. M. (1990). *Retos para la investigación y extensión agropecuaria*. Buenos Aires: Ediciones INTA.
- Cirio, F. M. (1991). Desarrollo tecnológico y organización institucional. Algunas reflexiones en torno al caso del INTA. *Revista Rioplatense de Economía Agraria*, 3/4, 157-183.
- Cittadini, R. (1993). *Articulation entre les Organismes de Reserche et de Developpement et les collectivités rurales locales*. (Tesis doctoral). Université de Toulouse Le Miral, Toulouse.
- Chudnovsky, D. y López, A. (1996). Política tecnológica en la Argentina, ¿hay algo más que *laissez faire*? *Redes*, 3(6), 33-75.
- Cloquell, S. (coord); Albanesi, R., Propersi, P., Preda, G., De Nicola, M. (2007). *Familias rurales. El fin de una historia en el inicio de una nueva agricultura*. Rosario: Homo Sapiens.

- Crispiani, D. (1973). Impuesto a la renta normal potencial del suelo. *Realidad Económica*, 14, 37-54.
- CONADEP (1984). *Nunca Más. Informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas*. Buenos Aires: EUDEBA.
- Conde Aguiar, R. (1986). *Abrindo o pacote tecnológico. Estado e pesquisa agropecuaria no Brasil*. Sao Paulo: Editora Polis.
- Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (1989). *Informe sobre investigaciones de hechos ocurridos en el CONICET. Período 1976-1983*. Buenos Aires: EUDEBA.
- Cooperative Extension System (1986). *Revitalizing Rural America*. Madison: University of Wisconsin Extension.
- Coriat, B. (1976). *Science, Technique et Capital*. París: Seuil.
- Cucchetti, H. (2008). Aversión y parentesco: la construcción de una memoria política anti-montoneros en el peronismo. *Política y Gestión*, 1-41.
- Cucchetti, H. (2007). *Articulaciones religiosas y políticas en experiencias peronistas: memoria política e imaginario religioso en trayectorias de la Organización Única del Trasvasamiento Generacional* (Tesis doctoral). Universidad de Buenos Aires – EHESS, Argentina.
- Da Silva Catela, L. (2007). Etnografía de los archivos de la represión en Argentina. Franco, M. y Levín, F. (comps). *Historia reciente. Perspectivas y desafíos para un campo en construcción* (pp. 183-220). Buenos Aires: Paidós.

- Dagnino, R. (2009), A construção do Espaço Ibero-americano do Conhecimento, os estudos sobre ciência, tecnologia e sociedade eapolítica científica e tecnológica. *Revista CTS*, (4) 12, 93-114.
- Dagnino, R. y Thomas, H. (1999), La política científica y tecnológica en América Latina. *Redes*, 6(13), 49-74.
- Dagnino, R., Thomas, H., & Davyt, A. (1996). El pensamiento en ciencia, tecnología y sociedad en Latinoamérica: una interpretación política de su trayectoria. *Redes*, 3(7), 13-52.
- Daston, L. & Sibum, O. (2003). Introduction: Scientific Personae and Their Histories. *Science in Context*, 16, 1-8.
- De Amézola, G. (1999). El caso del realismo insuficiente. Lanusse, la Hora del Pueblo y el Gran Acuerdo Nacional. La primacía de la política. A. Pucciarelli (comp.) *La primacía de la política* (pp. 57-116). Buenos Aires: Eudeba.
- De Riz, L. (1981). *Retorno y derrumbe. La tercera presidencia de Perón*. Buenos Aires: Folio.
- De Riz, L. (2000). *La política en suspenso 1966-1976*. Buenos Aires: Paidós Ibérica.
- De Riz L. (2007). De la movilización popular al aniquilamiento (1973-1976). En Lida E. C., Crespo, P. y Yankelevich, P. (comps.), *Argentina, 1976. Estudios en torno al golpe de Estado* (pp. 35-59). Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
- De Sousa Santos, B. (2006). *Reinventar la democracia. Reinventar el Estado*. Buenos Aires: CLACSO.
- Delich, F. (1970) *Tierra y conciencia campesina en Tucumán*. Buenos Aires: Signos.

- Devoto, R. (2004). El INTA y sus iniciativas de vinculación tecnológica: hitos y propuestas. *Gerencia de vinculación Tecnológica - INTA*. Recuperado de <http://www.inta.gov.ar/uvt/info/intahitos.pdf>
- Díaz Ronner, L. (2013). Biotecnología y propiedad intelectual. En G. Martínez Dougnac (Comp.) *De especie exótica a monocultivo. Estudios sobre la expansión de la soja en Argentina* (pp. 65-115). Buenos Aires: Imago Mundi.
- Dickson, D. (1988). *The New Politics of Science*. Chicago: Chicago University Press.
- Di Tella, G. (1983). *Argentina under Perón, 1973-76: the nation's experience with a labour-based government*. Londres: Macmillan.
- Domínguez, N. (2007). El complejo avícola entrerriano y las relaciones en su interior. *Revista Brasileira de Gestao de Negócios*, 9 (25), 13-25.
- Dos Santos, T. (1998). La teoría de la dependencia un balance histórico y teórico. En *Los retos de la globalización, ensayos en homenaje a Theotonio Dos Santos*. 1, 1-52. Recuperado de: <http://www.reggen.org.br/midia/documentos/ateoriadependencia.pdf>
- Dosi, G. (1982) Technological paradigms and technological trajectories. A suggested interpretation of the determinants and directions of technological change. *Research Policy*. 11 (3), 147-162. Recuperado de [http://faculty.fuqua.duke.edu/~willm/Classes/PhD/PhD\\_2007-2008/Bocconi/S4\\_DemandSide/DosiRP1982.pdf](http://faculty.fuqua.duke.edu/~willm/Classes/PhD/PhD_2007-2008/Bocconi/S4_DemandSide/DosiRP1982.pdf)
- Douglas, M. (1986). *Como piensan las instituciones*. Madrid: Alianza Editorial.
- Duhalde, L. E. (1999). *El Estado terrorista argentino. Quince años después, una mirada crítica*. Buenos Aires: Eudeba.
- Ekboir, J. (2002). Sistemas de innovación y política tecnológica: siembra directa en el MERCOSUR. Buenos Aires. : PROCISUR, IICA. (Documentos de trabajo).



- Espíndola, C. J. (2008, abril). *A cadeia produtiva de frango de corte na América do Sul: considerações preliminares*. Ponencia presentada en Anais do 12º Encontro de Geógrafos da América Latina, Montevideo, Uruguay.
- Extension Committee on Organization and Policy, 4-H, Youth Subcommittee (1971). *4-H in the 70's*. Washington: Extension Service.
- Faiguenbaum Chame, S. (2011). *¿Ciencia o política pública? Cuatro décadas de investigación agropecuaria del INIA*. Santiago de Chile: Consejo Nacional de la Cultura y las Artes.
- FAO - Dirección de Producción y Sanidad Vegetal (1996, junio). *Informe sobre el estado de los recursos fitogenéticos en el mundo*. Ponencia presentada en la Conferencia Técnica Internacional sobre los Recursos Fitogénicos, Leipzig, Alemania.
- Feld A. (2009). Estado, comunidad científica y organismos internacionales en la institucionalización de la política científica y tecnológica argentina (1943-1966). Vessuri, H., Kreimer, P., Arellano, A. y Sanz Menéndez, L. (éds) *Conocer para transformar. Producción y reflexión sobre Ciencia, Tecnología e Innovación en Iberoamérica* (pp. 135-171). Caracas: UNESCO-IEASLC.
- Feierstein, D. (2007). *Genocidio como práctica social. Hacia un análisis del aniquilamiento como destructor y reorganizador de relaciones sociales (del nazismo al genocidio argentino)*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
- Fitzgerald, D. (1986). Exporting American Agriculture. *Social Studies of Science*, 16, 457-483.
- Flichman, G. (1978). Notas sobre el desarrollo agropecuario en la región pampeana (o por qué Pergamino no es Iowa). *Estudios CEDES*, 1(4), 5-52.

- Franco, M. (2009). La “seguridad nacional” como política estatal en la Argentina de los años setenta. *Antíteses*, 2(4), 857-885.
- Franco, M. (2012). *Un enemigo para la nación. Orden interno, violencia y “subversión”, 1973-1976*. Buenos Aires: FCE.
- Freire, P. (1969). *¿Extensión o Comunicación? Sobre los profesionales y el conocimiento en el (no) diálogo de saberes*. Santiago de Chile: Instituto de Capacitación e Investigación en Reforma Agraria.
- Freire Montysuma, M. F. (2006). Um encontro com as fontes em História Oral. *Estudos Ibero-Americanos*, 22(1), 117-125.
- Fuck, M. y Machado Bonaccelli, M. B. (2009). Institutions and Technological Learning: Public-Private Linkages in Agricultural Research in Brazil and Argentina. *Journal of Technology Management & Innovation*, (4), 2, 33-43.
- Funes, P. (2006). Secretos, confidenciales y reservados. Los registros de las dictaduras en la Argentina. El Archivo de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. En H. Quiroga y C. Tcach (Comps.) *Argentina 1976-2006 entre la sombra de la dictadura y el futuro de la democracia*. Rosario: Homo Sapiens.
- Galafassi, G. (2005). Rebelión en el campo. Las Ligas Agrarias de la región Chaqueña y la discusión del modelo dominante de desarrollo rural (1970-1976). En Lázaro y Galafassi (Comp.) *Sujetos, política y representación del mundo rural. Argentina 1930-1976*, (pp. 237-295). Buenos Aires: Siglo XXI Editores.
- Galafassi, G. (2007). La larga marcha del campesinado hacia la revolución. La visión clásica de Francisco Ferrara respecto a las ligas agrarias de los años 70. En Adrián Zarrilli (Comp.) *Clásicos del mundo rural. Relectura y análisis de textos* (pp. 65-80). Buenos Aires, Siglo XXI Editores.

- Galafassi, G. (2006) Conflicto por la tierra y movimientos agrarios en el nordeste argentino en los años setenta: la unión de las ligas campesinas formoseñas. *Perfiles Latinoamericanos*, 26, 159-184.
- Galison, Peter (1997). *Image and logic: a material culture of microphysics*. Chicago, University of Chicago Press.
- Gárgano, C. (2011). Ciencia, Tecnología y Dictadura: la reorganización de las agendas de investigación y extensión del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) durante la última dictadura cívico-militar argentina (1976-1983). *Realidad Económica*, 258, 120- 149.
- Gárgano, C. (2013). Ciencia y dictadura: producción pública y apropiación privada de conocimiento científico-tecnológico. Dinámicas de cooptación y transferencia en el ámbito del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) durante la última dictadura cívico-militar argentina (1976-1983). *Crítica y Emancipación. Revista latinoamericana de Ciencias Sociales*, N ° 10, pp. 10 131-170.
- Gárgano, Cecilia (en prensa). Experimentación científica, genética aviar y dictadura militar en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (1956-1976). *Mundo Agrario*.
- Giai, F. (1973). Pollos híbridos (parrilleros). Todas las etapas del proceso están monopolizadas. *Realidad Económica*, 12, 58-65.
- Giarraca, N. y Teubal, M. (Orgs) (2005). *El campo argentino en la encrucijada. Estrategias y resistencias sociales, ecos en la ciudad*. Buenos Aires: Alianza.
- Ginzburg, C. (2010). *El Hilo y las Huellas: lo verdadero, lo falso y lo ficticio*. Madrid: FCE.

- Girbal Blacha, N. (1988). *Estado, chacareros y terratenientes. Política agraria y relaciones de poder*. Buenos Aires: Biblioteca Política Argentina, CEAL.
- Gómez, A. y Canales, A. F. (Eds.) (2009). *Ciencia y Fascismo. La ciencia española de posguerra*. Barcelona: Laertes.
- González García, M., López Cerezo, J., Luján López, J. (1996). *Tecnología y sociedad. Una introducción al estudio social de la ciencia y la tecnología*. Madrid: Tecnos.
- Graham, F. (1980). El desarrollo de las cooperativas de trabajo en América Latina y en Argentina. *Cuadernos de Cultura Cooperativa* (N.º 59). Buenos Aires: Intercoop Argentina.
- Gresores, G. y Muro de Nadal, M. (2008). Las reacciones de las corporaciones terratenientes frente a políticas ‘productivistas’. En *Políticas, tendencias y problemas en el agro argentino, Documentos del CIEA*, 3, 133-148. Recuperado de: <http://web.econ.uba.ar/WAppFCE01/SendImageJPA01?Function=getFilexPOID&filePOID=2016>.
- Gunder Frank, A. (1970). *Capitalismo y subdesarrollo en América Latina*. Buenos Aires: Siglo XXI Editores.
- Gutiérrez, M. (1984). *Reflexiones sobre la legislación que regula el mejoramiento varietal y la industria de semillas en la argentina*. Buenos Aires: Centro de Investigaciones sociales sobre el Estado y la Administración (CISEA) - Proyecto organización de la Investigación Agropecuaria (PROAGRO).
- Gutiérrez, M. (1986). *Semillas mejoradas: Tendencias y rol del sector público*. Buenos Aires: Centro de Investigaciones sociales sobre el estado y la Administración (CISEA) - Proyecto organización de la Investigación Agropecuaria.

- Gutiérrez, M. (1991). Políticas en Genética Vegetal. En O. Barsky (Ed.) *El Desarrollo Agropecuario Pampeano* (pp. 669-694). Buenos Aires: INDEC/ Ediciones INTA /IICA, Grupo Editor Latinoamericano.
- Gutiérrez, T. V. (2009). Agro pampeano y roles familiares en la década de 1960. *Mundo Agrario*, 10(19). Recuperado de [http://www.scielo.org.ar/scielo.php?pid=S1515-59942009000200012&script=sci\\_arttext&tlng=en](http://www.scielo.org.ar/scielo.php?pid=S1515-59942009000200012&script=sci_arttext&tlng=en)
- Halbwachs, M. (2004). *La memoria colectiva*. Zaragoza: Prensas Universitarias de Zaragoza.
- Harries, A. y Ripoll, C. (1998). *Evolución del fitomejoramiento y la producción de semillas en nuestro país. Estructuras oficiales y su marco regulatorio desde comienzos de siglo*. Buenos Aires: SAGyPA.
- Hartmann, H. T. (1997). (Ed.). *Plant Propagation: Principles and Practices*. Nueva Jersey: Prentice HallInternational.
- Hernández, A. A., Kreimer, P, Ledesma, J. O., Vessuri, H. (Comps.) (2005) *Ciencias Agrícolas y cultura científica en América Latina*. Buenos Aires: Prometeo Libros.
- Herrera, A. (1995). Los determinantes sociales de la política científica en América Latina. Política científica explícita y política científica implícita. *REDES*, 2(5), 117-131.
- Hildreth, R. J. & Armbruster, W. J. (1981). Extension Program Delivery. Past, Present and Future: an overview. *American Journal of Agriculture Economics*, 63, 853-858.
- Howell, S. H. (1998). *Molecular Genetics of Plant Development*. Cambridge: Cambridge University Press.

- Hurtado, D. (2005). De "átomos para la paz" a los reactores de potencia: Tecnología y política nuclear en la Argentina (1955-1976). *Revista iberoamericana de ciencia tecnología y sociedad*, 2(4), 41-66.
- Hurtado, D. (2009). Periferia y fronteras tecnológicas. Energía nuclear y dictadura militar en la Argentina (1976-1983). *Revista Iberoamericana de Ciencia, Tecnología y Sociedad*, 13, 27-64.
- Hurtado, D. (2010). *La ciencia argentina. Un proyecto inconcluso (1930-2000)*. Buenos Aires: Edhasa.
- Hurtado, D. (2014). *El sueño de la Argentina atómica. Política, tecnología nuclear y desarrollo nacional (1945-2006)*. Buenos Aires: Edhasa.
- Hurtado, D. y Vara, A. M. (2007). Winding Roads to 'Big Science': Experimental Physics in Argentina and Brazil. *Science, Technology and Society*, (12), 27-48.
- Hurtado, D. y Mallo, E. (2012). Riesgos teóricos y agenda de políticas: el 'mal del modelo lineal' y las instituciones de CyT como cajas negras. Fressoli, M., Santos, G. (eds.) *Tecnología, desarrollo y democracia. Nueve estudios sobre dinámicas socio-técnicas de exclusión/inclusión social* (pp. 225-244). Buenos Aires: UNQ.
- Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (1959). *Una etapa en las realizaciones del INTA*. Buenos Aires: Ediciones INTA.
- Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (1966). *Principios que orientan el gobierno del INTA*. Buenos Aires: Ediciones INTA.
- Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (1971). *Breve descripción del INTA*. Buenos Aires: Ediciones INTA.

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (1989). *Conozca el INTA*. Buenos Aires: Ediciones INTA.

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (1991). *35 años de tecnología para el agro*. Buenos Aires: Ediciones INTA.

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (1996). *Historia documental 40 aniversario*. Buenos Aires: Ediciones INTA.

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (2009). *Banco activo Pergamino*. Pergamino: Ediciones INTA.

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (s. f.). *Concepción, Nacimiento y Juventud del INTA*. Recuperado de <http://www.biblioteca.org.ar/libros/150462.pdf>

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, Servicio Nacional de Programación y Evaluación (1964). *Características de la organización del INTA*. Buenos Aires: Ediciones INTA.

Instituto Nacional de Tecnología Industrial (2006). Dictadura y memoria en el INTI. Testimonios sobre desaparecidos y sobrevivientes del INTI '76. *Saber Cómo*, 39, 2.

Iñigo Carrera, J. (1998). *La acumulación de capital en la Argentina*. Buenos Aires: CICP. Recuperado de:

<http://www.cicpint.org/Investigaci%C3%B3n/JIC/Argentina/Assets/La%20acumulacion%20de%20capital%20en%20la%20Argentina.pdf>

Iñigo Carrera, J. (2007). *La formación económica de la sociedad argentina* (Vol. I). Buenos Aires: Imago Mundi.

- Isern, T. D. (1986). Between Science and Folklore: Images of Extension work from the Flint Hills of Kansas. *Agricultural History*, 60, 267-286.
- Izaguirre, I. (2009, octubre). *Universidad y Terrorismo de Estado. La UBA: la Misión Ivanissevich*. Ponencia presentada en IEM, Sala de Representantes. Recuperado de <http://webiigg.sociales.uba.ar/conflictosocial/publicaciones/la.uba-la.mision.ivanissevich.pdf>
- Izaguirre, I. (2011). La Universidad y el Estado terrorista. La Misión Ivanissevich. *Conflicto Social*, 4(5), 287-303.
- Jasinski, A. (2013). *Revolución obrera y masacre en La Forestal: sindicalización y violencia empresaria en tiempos de Yrigoyen*. Buenos Aires: Biblos.
- Josephson, P. (2005). *Totalitarian Science and Technology*. New York: Humanity Books.
- Katz, C. (1996). La concepción marxista del cambio tecnológico. *Revista Buenos Aires. Pensamiento Económico*, 1, 155-180.
- Katz, C. (1998a). Crisis y revolución tecnológica a fin de siglo. *Realidad Económica*, 154, 34-49.
- Katz, C. (1998b). Optimismo y pesimismo en la economía de la innovación. *Problemas del desarrollo*, 29(113), 53-74.
- Katz, C. (1999). La tecnología como fuerza productiva social: implicancias de una caracterización. *Quipu. Revista Latinoamericana de Historia de las Ciencias y la Tecnología*, 12(3), 371-381.
- Katz, C. (2000). Mercantilización y socialización de la información y el conocimiento. *Política y Sociedad. Revista de la Universidad Complutense*, 33, 207-216.



- Katz, C. (2012). Un jeu mondial d' échecs. *Imprecor*, 579, 7-14.
- Katz, J. M. y Bercovich, N. (1988). Innovación genética, esfuerzos públicos de investigación y desarrollo y la frontera tecnológica internacional: nuevos híbridos en el INTA. *Desarrollo Económico*, 28(110), 209-243.
- Kaufmann, C. (Dir.) (2003). *Depuraciones y vigilancia en las Universidades Nacionales Argentinas* (Tomo II). Buenos Aires: Miño y Dávila.
- Kingsbury, N. (2009). *Hybrid: The History and Science of Plant Breeding*. Chicago: University of Chicago Press.
- Kragh, H. (2007). *Introducción a la Historia de la ciencia*. Barcelona: Crítica.
- Kreimer, P. (2006). ¿Dependientes o integrados? La ciencia latinoamericana y la nueva división internacional del trabajo. *Nómada*, 24, 204-212.
- Kreimer P. (2009). *Ciencia y Periferia. Nacimiento, muerte y resurrección de la biología molecular en la Argentina. Aspectos sociales, políticos y cognitivos*, Buenos Aires: EUDEBA.
- Kreimer, P. (2010). La recherche en Argentine: entre l'isolement et la dépendance. *Cahiers de la recherche sur l'éducation et les savoirs*, 9, 115-138.
- Kreimer, P. y Rossini, P. (2005). La constitución de nuevos objetos de conocimiento como proceso socio-cognitivo: los organismos vegetales genéticamente modificados (OVGMS) en la investigación agrícola. En Arellano Hernández, A., Kreimer, P., Ocampo Ledesma, J. y Vessuri, H. (Comps.) *Ciencias agrícolas y cultura científica en América Latina* (pp. 97-119). Buenos Aires: Prometeo.
- Kreimer, P. y Thomas, H. (2006). Production des connaissances dans la science périphérique: l'hypothèse CANA en Argentine. Meyer J.-B., Carton M., La

société des savoirs. Trompe-l'œil ou perspectives (pp. 143-167). París: L'Harmattan.

Kreimer, P. y Zukerfeld, M. (2014) La explotación cognitiva: Tensiones emergentes en la producción y uso social de conocimientos científicos tradicionales, informacionales y laborales. Kreimer, P., Vessuri, H., Velho, L. y Arellano, A. (comps.) *Perspectivas latinoamericanas en el estudio social de la ciencia, la tecnología y el conocimiento*. Buenos Aires: Siglo XXI.

Krimsky, S. (1991). The profit of scientific discovery and its normative Implications. *Chicago Kent Law Review*, 75 (3), 15-39.

Laclau, E. (1973). Feudalismo y capitalismo en América latina. *Modos de producción en América Latina. Cuadernos de Pasado y Presente*, 40, 23-77.

Lacy, W., Kenneth E., Pigg & Busch, L. (1980). Clients, Colleagues and Colleges: Perceived Influences on Extension Agents. *Rural Sociology*, 45, 469-482.

Larrañaga G., Blanco, V. (2007). ¿Los agentes del sistema de extensión estatal pueden adaptarse a los nuevos paradigmas de desarrollo? Una reflexión crítica sobre el caso del INTA. *Agroecología*, 2(1), 1807-1811.

Lattuada, M. J (1986). *La política agraria peronista:(1943-1983)*. Buenos Aires: Centro Editor de América Latina.

Lattuada, M. J. (1988). *Política agraria y partidos políticos (1946-1983)*. Buenos Aires: Centro Editor de América Latina.

Lattuada, M. J. (2008). El debate impositivo sobre el sector agropecuario argentino. *Anuario del Centro de Estudios Históricos "Prof. Carlos SA Segreti"*, 8(8), 107-130.

- Lázzaro, S. (2008). La política y la reforma agraria en Argentina, 1940-1970. ¿Hacia la destrucción del mito terrateniente? En J. Balsa, G. Mateo y M. Ospital (Comps.) *Pasado y presente en el agroargentino* (pp. 361-379). Buenos Aires: Lumiere.
- Lázzaro, S. B. (2013). Acuerdos y confrontaciones: la política agraria peronista en el marco del Pacto Social. *Historia Crítica*, 51, 145-168.
- León, C. A. y Losada, F. (2002). Ciencia y tecnología agropecuarias antes de la creación del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. *Revista Interdisciplinaria de Estudios Agrarios*, 16, 35-90.
- León, C. A., Rossi, C. A. (2003). Aportes para la historia de las instituciones agrarias de la Argentina (I). La Junta Nacional de Granos. *Realidad Económica*, 196, 84-101.
- León, C. A., Rossi, C. A. (2003). Aportes para la historia de las instituciones agrarias de la Argentina (II). El Consejo Agrario Nacional. *Realidad Económica*, 198, 95-123.
- Linzer, G. A. (2008). Devenir de la generación y transferencia de conocimientos en el INTA. *ARBOR Ciencia, Pensamiento y Cultura*, 184(732), 701-717.
- Llovet, I., Fernández Besada, A. (1990). El rol de la Extensión Agropecuaria del INTA en el proceso de cambio tecnológico: una investigación evaluativa. *Revista Argentina de Economía Agraria*, 5(2), 551-558.
- Losada, F. (2003). La institucionalización de la extensión rural con la creación del INTA (1957). *Documentos del CIEA*, 1, 27-35.
- Losada, F. (2005). Los orígenes del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Análisis del período 1956-1961. *Realidad Económica*, 210, 21-40.

- Makler, C. (2008). Horacio Giberti: la pluma como arma (1918-2009). *Espacios de Crítica y Producción*, 37, 108-125.
- Makler, C. (2006). Las corporaciones agropecuarias ante la política agraria peronista (1973-1974). En O. Graciano y T. Gutierrez (Dir.) *El agro en cuestión. Discursos, políticas y corporaciones en la Argentina (1870-200)* (pp. 181-210). Buenos Aires: Prometeo.
- Manzanal, M. y Rofman, A. (1989). *Las economías regionales de la Argentina. Crisis y políticas de desarrollo*. Buenos Aires: Centro Editor de América Latina.
- Marini Ruy M. (1973). *Dialéctica de la dependencia*. México: ERA.
- Martin, A., Dupont, M., Husson, M. Samary, C. y Wilno, H. (2002). *Elementos de análisis económico marxista. Los engranajes del capitalismo*. Madrid: Los libros de la Catarata.
- Martínez, F.G. (2010). Crónica de la soja en la región pampeana argentina. En INTA EEA Oliveros (Org.) *Para mejorar la producción* (pp. 140-146). Buenos Aires: Ediciones INTA.
- Martínez, R. (1997). ¿Cómo se logró el cultivo de la soja en Argentina? En *Archivo Cátedra de Cereales y Oleaginosas de la Universidad Nacional de San Luis*, San Luis, Universidad Nacional de San Luis.
- Martínez, M. J. (2004). Paternidades contenciosas, un estudio sobre filiaciones, leyes y burocracia. Tiscornia, S. (Comp.) *Burocracias y violencia. Estudios de antropología jurídica*, (403-433). Buenos Aires: Antropofagia.
- Martínez Dougnac, G. (2013). De los márgenes al boom. Apuntes para una historia de la sojización. En *De especie exótica a monocultivo. Estudios sobre la expansión de la soja en Argentina* (Cap. I., pp.1-39). Buenos Aires: Imago Mundi.

- Martínez Nogueira, R. (1990). Análisis político y organizacional de la articulación entre investigación agrícola y extensión (La experiencia Latinoamericana). *Revista Rioplatense de Economía Agraria*, 3/4, 186-216.
- Martínez Nogueira, R. (1988). Las organizaciones corporativas del sector agropecuario. En O. Barsky (Comp) *La agricultura pampeana. Transformaciones productivas y sociales* (1° ed) (pp. 295-322). Buenos Aires: FCE/IICA/CISEA.
- Marx, K. (1982) Progreso técnico y desarrollo capitalista. Manuscritos 1861-1868, Cuadernos de Pasado y Presente, N° 93. México.
- Marx, K. (2003). *El Capital*. Tomo I, Vol. I, II y III. Buenos Aires: Siglo XXI Editores.
- Marzocca, A. (1985). *Proceso de formación y evolución del INTA*. Buenos Aires: Ediciones INTA.
- Massoni, S. (2002) Historicidad de la comunicación rural en la Pampa Argentina. *Revista de Investigaciones Agropecuarias*, 31(001), 139-158.
- McDonaldk M. B. y Copeland, L. O (1997). *Seed Production: Principles and Practices*. Nueva York: Chapman & Hall.
- McDowell, G. R. (1985). The Political Economy of Extension Program Design: Institutional Maintenance Issues in the Organization and Delivery of Extension Programs. *American Journal of Agricultural Economics*, 67, 717-25.
- Moscardi, E. (1988). *Historia, desarrollo y creación del INTA*. Buenos Aires: Ediciones INTA.
- Moscardi, E. (2007) *La política de vinculación tecnológica del INTA (1987-2006): hitos de una estrategia innovadora*. Buenos Aires: Ediciones INTA.

- Myers, J. (1992). Antecedentes de la conformación del Complejo Científico y tecnológico 1850-1958. En Oteiza (comp.) *La política de investigación científica y tecnológica argentina. Historia y perspectivas*, (pp. 87-115). Buenos Aires: CEAL.
- Navarro, R. F. (2005) Everett M. Rogers (1931-2004) y la investigación Latinoamericana de la comunicación. *Nueva época*, 4, 93-125.
- Nochteff, H. (1985). *Desindustrialización y retroceso tecnológico en Argentina (1976-1982); la industria electrónica de consumo*. Buenos Aires: GEL.
- Nochteff, H. (1994). Patrones de Crecimiento y Políticas Tecnológicas en el siglo XX. *Ciclos*, 4(6), 43-70.
- Noriega, R. F. y Perales, R. M. M. (1993). Aspectos socioeconómicos de la producción y consumo de huevo. *Los retos de la soberanía alimentaria en México*, 1, 269-304.
- Nowotny, H., Pestre, D., Schmidt-Assmann, E., Schulze-Fielitz, H. & Trute, H. H. (2005). *The public nature of science under assault. Politics, markets, science and the law*. Berlín: Springer.
- Nun, J. (1995). Argentina: El Estado y las actividades científicas y tecnológicas. *REDES*, 3, 59-98.
- Núñez, S. y Orione, J. (1993). *Disparen contra la ciencia. De Sarmiento a Menem, nacimiento y destrucción del proyecto científico argentino*. Buenos Aires: Espasa Calpe.
- Núñez Jover, J. (2001). Ciencia y cultura en el cambio de siglo. A propósito de C.P. Snow. En J. A. López Cerezo y J. M. Sánchez Ron (Eds.). *Ciencia, Tecnología,*

*Sociedad y Cultura en el cambio de siglo* (pp. 89-107). Madrid: Biblioteca Nueva.

O'Brien, P. (2007) Global economic history as the accumulation of capital through a process of combined and uneven development: an appreciation and critique of Ernest Mandel. *Historical Materialism*, 15 (1), 75-103.

Obschatko, E. S. de (1988). *La transformación económica y tecnológica de la agricultura pampeana. 1950-1984*. Buenos Aires: Secretaría de Cultura. Ediciones Culturales Argentinas.

Obschatko, E. S. de, Sola, F., Piñeiro, M., Bordelois, G. (1984). *Transformaciones en la agricultura pampeana: algunas hipótesis interpretativas*. Documento de Trabajo N.º 3. Versión Preliminar. Buenos Aires: Proyecto Alternativas de Política Agraria (PPA).

Obschatko, E. S. de (1988). *La transformación económica y tecnológica de la agricultura pampeana*. Buenos Aires: Ediciones Culturales Argentinas.

Obschatko, E. S. de, Sguiglia, E., Delgado, R. (1994). *Efectos de la desregulación sobre la competitividad de la producción argentina*. Buenos Aires: Fundación Arcor, Grupo Editor Latinoamericano.

O' Donnell, G. (1982). *El Estado burocrático autoritario. Triunfos, derrotas y crisis*. Buenos Aires: Belgrano.

Oteiza, E. (Comp.) (1992). Introducción. En *La política de investigación científica y tecnológica argentina. Historia y perspectivas* (pp. 11-77). Buenos Aires: CEAL.

- Oteiza, E. (1996). Dimensiones políticas de la política científica y tecnológica. En M. Albornoz, P. Kreimer y E. Glavich *Ciencia y Sociedad en América Latina* (pp. 75-87). Buenos Aires: Universidad Nacional de Quilmes.
- Oteiza E. (1996). Drenaje de cerebros. Marco histórico conceptual. *Redes*, 7, 101-120.
- Oszlak, O. (1977). Notas críticas para una teoría de la burocracia estatal. *Documento CEDES/G. E. CLACSO*, 8, 539-564.
- Oszlak, O. (1984). *El INTI y el desarrollo tecnológico en la industria argentina*. Buenos Aires: INTI.
- Palacio, J.M. (1996). Jorge Sabato y la historiografía rural pampeana: el problema del otro. *Entrepassados*, 10, 46-66.
- Peña, M. (1975). *Alberdi, Sarmiento y el 90*. Buenos Aires: Fichas.
- Pagano, N. (2004). Las ciencias sociales durante la dictadura (1976/1981). En F. Devoto y N. Pagano (Eds.) *La historiografía académica y la historiografía militante en Argentina y Uruguay* (pp. 159-170). Buenos Aires: Biblios.
- Palacios, P. (Comp) (2013). *Agroindustria aviar argentina. Organización de la producción, territorios y problemáticas*. Buenos Aires: Imago Mundi.
- Palladino, P. (2002). *Plants, Patients and the Historian: (Re)membering in the Age of Genetic Engineering*. Manchester: Manchester University Press.
- Palomino, M. (1988). *Tradición y poder: la SRA (1955-1983)*. Buenos Aires: CISEA.
- Paz, R. (1989). *Enfoques teóricos, modelos de desarrollos y prácticas de extensión*. Informe de CONICET (manuscrito inédito).



- Pengue, W. (2004). *La transnacionalización de la agricultura y la alimentación en América Latina. Informe regional*. Buenos Aires: Red de Formación Ambiental para Latina y el Caribe (RFA), Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).
- Pellegrini, P. (2013, octubre). *Etapas en la política de investigación agropecuaria en la Argentina: evolución del presupuesto y del personal del INTA entre 1958y 2010*. Ponencia presentada en VIII Jornadas interdisciplinarias de estudios agrarios e industriales, CIEA, Buenos Aires, Argentina.
- Penna, J. A. (2003). Los estudios económico-sociales agropecuarios en la década del 60: el rol del INTA y otras instituciones. *INTA*. Recuperado de <http://www.inta.gov.ar/ies/inst/historia.htm>
- Pestre, D. (1999). Commemorative practices at CERN: Between physicists' memories and historians' narratives. *Osiris* (2nd Series), 14, 203-216.
- Pestre, D. (2005). *Ciencia, dinero y política*. Buenos Aires: Buena Visión.
- Pierri, J. (2013). La influencia externa, del Estado y de las grandes empresas transnacionales en la sojización (1980-2007). En G. Martínez Dougnac (Comp.) *De especie exótica a monocultivo. Estudios sobre la expansión de la soja en Argentina* (pp. 243-280). Buenos Aires: Imago Mundi.
- Pizarro, J. B. (1989). Evolución histórica de los estudios Económico- Sociales en la Estación Experimental Agropecuaria Pergamino. En *Boletín de Divulgación Técnica N.º 76*. Buenos Aires: Ediciones INTA.
- Pizarro, J. B. (2013). Algunos dilemas que plantea el proceso de sojización. En *De especie exótica a monocultivo. Estudios sobre la expansión de la soja en Argentina* (pp. 161-210). Buenos Aires: Imago Mundi.

- Pizarro J. B. (2003). La evolución de la producción agropecuaria pampeana en la segunda mitad del siglo XX. *Revista Interdisciplinaria de Estudios Agrarios*, 18, 63-125.
- Perelmuter, T. (2011). Bienes comunes vs. mercancías: las semillas en disputa. Un análisis sobre del rol de la propiedad intelectual en los actuales procesos de cercamientos. *Sociedades Rurales de Producción y Medio Ambiente*, 11(22), 54-86.
- Pnina G, A. A. (1999). Introduction. *Osiris* (2nd Series), 14, 1-33.
- Poggi, M. (2010). Discursos y representaciones agrarias en la prensa escrita: La Nación 1973. *Theomai: estudios sobre sociedad, naturaleza y desarrollo*, (21), 11-27.
- Poggi, M. (2012). El desvanecimiento del discurso reformista. El rol de la prensa argentina en la cuestión agraria durante 1975 y 1976. *Global Media Journal México*. Recuperado de [http://www.gmjei.com/index.php/GMJ\\_EI/article/view/33](http://www.gmjei.com/index.php/GMJ_EI/article/view/33)
- Poggi, M. (2012). Estrategias discursivas en las representaciones del Proyecto de Ley Agraria (1974). Los casos de La Nación y Anales. *Oficios Terrestres*, 27(27), 1-33.
- Poggi, M. (2011). Estrategias discursivas y representaciones del proyecto de ley agraria (1974) en el diario La Opinión. *Revista Pilquen*, (15), 00-00. [Recuperado de http://www.scielo.org.ar/scielo.php?pid=S185131232011000200005&script=sci\\_arttext&tlng=pt](http://www.scielo.org.ar/scielo.php?pid=S185131232011000200005&script=sci_arttext&tlng=pt)
- Poggi, M. (2011). Strategies discursive and representations of the Project of Agrarian Law (1974) in La Tierra newspaper. *Intercom: Revista Brasileira de Ciências da Comunicação*, 34(1), 61-84.
- Pollak M. (2006). *Memoria, Olvido, Silencio. La producción social de identidades frente a situaciones límite*. La Plata: Al Margen.

- Portelli, A. (1996). A Filosofía e os Fatos. Narracao, interpretacao e significado nas memorias e nas fontes orais. *Tempo*, 1(2), 59-72.
- Pozzi, P. y Pérez, A. (2006). Entrevista a Guardia de Hierro. *Taller*, 8. Recuperado de [http://www.fcp.uncu.edu.ar/upload/Entrevista\\_a\\_Guardia\\_de\\_Hierro.pdf](http://www.fcp.uncu.edu.ar/upload/Entrevista_a_Guardia_de_Hierro.pdf)
- Pozzi, P. (2004). *Por las sendas argentinas: el PRT-ERP, la guerrilla marxista*. Buenos Aires: Imago mundi.
- Pucci, R (2007). *Historia de la destrucción de una provincia, Tucumán 1966*. Buenos Aires: Pago Chico.
- Pucciarelli, A. (Ed) (1999). *La primacía de la política: Lanusse, Perón y la Nueva Izquierda en tiempos del GAN*. Buenos Aires: Eudeba.
- Pucciarelli, A. (Ed) (2004). La patria contratista. El nuevo discurso liberal de la dictadura encubre una vieja práctica corporativa. En *Empresarios, tecnócratas y militares* (pp. 99-171). Buenos Aires: Siglo XXI Editores.
- Pyenson, L. & Sheets-Pyenson, S. (1999). *Servants of Nature. A History of Scientific Institutions, Enterprises, and Sensibilities*. Nueva York-Londres: W.W. Norton & Company.
- Ramírez, D. (2011). *Horacio Giberti: memorias de un imprescindible*. Buenos Aires: Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini.
- Rapoport, Mario. Historia económica, política y social de la Argentina (1880-2003). Buenos Aires.: Ariel, 2005.
- Ras, N. (1977). *El Desarrollo Agropecuario de la Argentina*. Buenos Aires: Hemisferio Sur.

- Ramussen, W. D. (1989). *Taking the University to the people. Seventy-five years of Cooperative Extension*. Iowa: Iowa State University Press.
- Reichart, N. (1957). El INTA y la realidad del campo argentino. Buenos Aires: Ediciones INTA.
- Reichart, N. (197?). *Extensión rural: reflexiones*. Córdoba: Ediciones INTA-EEA Manfredi.
- Reichart, N. (1982). Objetivos del INTA en relación con el mejoramiento de la comunidad rural. Buenos Aires: Ediciones INTA.
- Reichart, N. (1994). El modelo "Extensión Rural" en el proceso de transferencia de tecnología. N. Ras, R. Caimi, C. Fernández Alsina y Pastor, C. (comps.) *La innovación tecnológica agropecuaria. Aspectos metodológicos de la transferencia de tecnología* (pp. 342-365). Buenos Aires: Editorial Hemisferio Sur S. A.
- Renneberg, M. & Walker, M. (Eds.) (2001). *Science, Technology, and National Socialism*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Reta, M. A. (2009). El Frente Estudiantil Nacional (FEN): juventud y estudiantado en el proceso contestatario de los años sesenta en Argentina. *Antíteses*, 2(4), 1059-1093.
- Rocchi, F. (1996). En busca del empresario perdido. Los industriales y las tesis de Jorge Sabato. *Entrepassados*, 10, 67-87.
- Rodríguez, J. (2009). Análisis de los cambios en la dependencia externa proteica de Venezuela durante los años 1989-2006 y su impacto sobre la adecuación proteica. *Revista de la Facultad de Agronomía*, 35(1), 8-14.

- Rodríguez, L. G. y Soprano, G. (2009). La política universitaria de la dictadura militar en la Argentina: proyectos de reestructuración del sistema de educación superior (1976-1983). *Nuevo Mundo Mundos Nuevos, Cuestiones del tiempo presente* Recuperado de <http://nuevomundo.revues.org/index56023.html>.
- Rofman, A. y Romero, L. (1997). *Sistema socioeconómico y estructura regional en la Argentina*. Buenos Aires: Amorrortu.
- Rofman, A., Quintar, A., Marqués, N. y Manzanal, M. (1987). *Políticas estatales y desarrollo regional. La experiencia del gobierno militar en la región del NEA (1976-1981)*. Buenos Aires: CEUR.
- Rogers, E. (1971-1995). *Diffusion of Innovations*. New York: The Free Press.
- Rogers, E. y Svenning, L. (1973). *La modernización entre los campesinos*. México: Fondo de Cultura Económica.
- Röling, N. (1988). *Extensión Science. Information Systems in Agricultural Development*. Cambridge University Press.
- Rose, H. y Rose, S. (1976). *Economía política de la Ciencia*. México: Nueva Imagen.
- Rosenberg, N. (1982). *Inside the Black Box: Technology and Economics*. Cambridge University Press: Cambridge.
- Rossi, D. (2007). Evolución de los cultivares de maíz. *Revista Agromensajes de la Facultad, Publicación cuatrimestral de la Facultad de Ciencias Agrarias UNR*. Recuperado de <http://www.fcagr.unr.edu.ar/Extension/Agromensajes/22/1AM22.htm>
- Rostow, W. (1960). *The Stages of Economic Growth: A Non-Communist Manifesto*. Londres: Mcmillan.

- Rougier, M. y Fizbein, M. (2006). *La frustración de un proyecto económico. El gobierno peronista de 1973-1976*. Buenos Aires: Manantial.
- Rouquié, A. (1981). *Poder militar y sociedad política en la Argentina* (Tomo II). Buenos Aires: Hyspamérica Ediciones.
- Rousso, H. (2002). *The Haunting Past. History, memory and justice in contemporary France*. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
- Roze, J. P. (2011). *Conflictos agrarios en la argentina. El proceso liguista (1970-1976)*. Buenos Aires: Ediciones RyR.
- Sabato, J. F. (1975). *El pensamiento latinoamericano en la problemática ciencia-tecnología-desarrollo-dependencia*. Buenos Aires: Paidós.
- Sabato, J. F. (1980). *La pampa pródiga: claves de una frustración*. Buenos Aires: Ensayos y Tesis CISEA.
- Sabato, J. F. (1991). *La clase dominante en la Argentina moderna. Formación y características*. Buenos Aires: Imago Mundi.
- Sánchez Ron, J. M. (2007). *El poder de la ciencia. Historia social, política y económica de la ciencia (siglos XIX y XX)*. Barcelona: Crítica.
- Sanz Cerbino, G. (2010). Chacareros golpistas. La burguesía agraria pampeana y el golpe de estado contrarrevolucionario de 1976. *Izquierdas*, 3(7), 1-19.
- Saraiva, T. y Wise, N. (2010). Autarky/Autarchy: Genetics, Food Production and the Building of Fascism. *Historical Studies in the Natural Sciences*, 40(4), 419-428.
- Sarrabayrouse Oliveira, M. J. (1998). *Poder Judicial. Transición del escriturismo a la oralidad* (Tesis de Licenciatura). Universidad de Buenos Aires. Buenos Aires.

- Sarrabayrouse Oliveira, M. J. (2004). La justicia penal y los universos coexistentes. Reglas universales y relaciones personales. Tiscornia, S. (comp.) *Burocracias y violencia. Estudios de antropología jurídica* (pp. 203-233). Buenos Aires: Antropofagia.
- Sartelli, E. (1996). El enigma de Proteo. A propósito de J. F. Sabato, Larry Sawers y el estancamiento de la economía argentina. *Ciclos*, 4(10), 90-110.
- Sartelli, E. (2009). Adiós al maestro Horacio Giberti. *Crítica de la Argentina*. Recuperado de <http://www.criticadigital.com.ar/imprensa/index.php?secc=nota&nid=28249>
- Saumell, H. (1975). *Soja. Información técnica para su mejor conocimiento y cultivo* Buenos Aires: Hemisferio Sur.
- Saucede, M. C. (2009). El caso de Agronomía. En MINCyT (Org.) *Ruptura y reconstrucción de la Ciencia Argentina* (pp. 103-105). Buenos Aires: MINCyT.
- Schvarzer, J. (1996). *La industria que supimos conseguir*. Buenos Aires: Planeta.
- Schvarzer, J. (2006). La industria argentina en la perspectiva de la historia. En J. Gelman (Comp) *La historia económica argentina en la encrucijada* (pp. 333-350). Buenos Aires: Prometeo.
- SECONACYT (1970). *El sistema científico-técnico y su relación con el sistema socio económico*. Buenos Aires: SECONAYT.
- Senesi, S. y Palau, H. (2008). *Coordinación del agronegocio avícola en Argentina. Perturbaciones y adaptación organizacional*. Recuperado de [www.agro.uba.ar](http://www.agro.uba.ar)
- Servetto, A. (1998) *De la Córdoba combativa a la Córdoba militarizada (1973-1976)*. Córdoba: Ferreyra Editor.

- Shinn, T. (1982). Scientific disciplines and organizational specificity: the social and cognitive configuration of laboratory activities. *Sociology of the Sciences*, 4, 239-264.
- Shinn, T. (2002). Cohesion and Organizational Divisions in Science. *Revue Francaise de Sociologie, Supplement: An Anual English Selection*, 43, 99-122.
- Sidicaro, (2004). Coaliciones golpistas y dictaduras militares: el “proceso” en perspectiva comparada. Pucciarelli, A. (coord). Empresarios, tecnócratas y militares. La trama corporativa de la última dictadura (pp. 53-96). Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores.
- Slemenson, M. (1970). *Emigración de científicos argentinos. Organización de un éxodo a América Latina. Historia y Consecuencias de una crisis político-universitaria*. Buenos Aires: Mimeo.
- Solingen, E. (1996). *Industrial Policy, Technology, and International Bargaining: Designing Nuclear Industries in Argentina and Brazil*. Stanford, California: Stanford University Press.
- Spivak, A. De fondos públicos, proyectos tecnológicos y violencia de estado: memorias y dictadura militar en CNEA (manuscrito inédito).
- Spivak, A. y Gárgano, C. (en prensa). Las trayectorias de CNEA e INTA durante la última dictadura cívico-militar argentina: una revisión de sus memorias en disputa. En Kreimer, P., Vessuri, H. y Arellano, A. (comps.) *Perspectivas latinoamericanas en el estudio social de la ciencia, la tecnología y el conocimiento*. Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores.
- Starr, D. (1977). Scientists tortured in S. America. *Christian Science Monitor*, 20-21.



- Sztulwark, S. y Míguez, P. (2012). Conocimiento y valorización en el nuevo capitalismo. *Realidad económica*, 270, 11-32.
- Tarruella, A. (2005). *Guardia de Hierro. De Perón a Kirchner*. Buenos Aires: Sudamericana.
- Teubal, M. (2006). *Agro y alimentos en la globalización*. Buenos Aires: La Colmena.
- Thomas, H., Versino, M. y Lalouf, A. (2008). La producción de tecnología nuclear en Argentina: el caso de la empresa INVAP. *Desarrollo Económico*, 47(188), 543-576.
- Thompson, P. (2000). *The voice of the past. Oral History*, Oxford: Oxford University Press.
- Thornton, R. D. y Cimadevilla, G. (Eds.) (2003) *La extensión rural en debate. Concepciones, retrospectivas, cambios y estrategias para el Mercosur*. Buenos Aires: Ediciones INTA.
- Thornton, R. D. y Cimadevilla, G. (Eds.) (2008) *Grisas de la Extensión, la Comunicación y el Desarrollo* (1a ed.). Buenos Aires: Ediciones INTA.
- Tiscornia, S. (Comp). (2004). Introducción. *Burocracias y violencia. Estudios de antropología jurídica*, (1-11). Buenos Aires: Antropofagia.
- Torre, J. C. y Henault, M. (1983). *Los sindicatos en el gobierno: 1973-1976*. Buenos Aires: Centro Editor de América Latina.
- Tort, M. I. y Lombardo, P. (1993). *Las cooperativas de trabajo agropecuario en la Argentina. Algunos estudios de casos*. Buenos Aires: Instituto de Economía y Sociología Rural – Ediciones INTA.

- Traverso, E. (2008). La escritura de la historia. Entre literatura, memoria y justicia. En *Actual Marx Intervenciones Memorias en busca de historia. Más allá de los usos políticos de la memoria* (pp. 13-27). Santiago: LOM Ediciones.
- Trigo, E., Piñeiro, M. y Ardilla, J. (1982). *Antecedentes institucionales y formación de recursos humanos en el INTA*. Buenos Aires: Ediciones INTA.
- Trivelli, H. y Elgueta, M. (1960). *Estudio sobre evaluación de las funciones y programas del INTA*. Buenos Aires: Comisión Económica Para América Latina - Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas de la OEA.
- UNCATD (1980). *Legislation and Regulation on Technology Transfer: Empirical Analyses of Their Effects in Selected Countries*. Geneva: United Nations.
- Vaccarezza, L. S. (2004). El campo CTS en América Latina y el uso social de su producción. *CTS*, 2(1), 211-218.
- Valeiras, J. (1992). Principales instituciones especializadas en investigación y extensión. En Oteiza, E. (Comp.) *La política de investigación científica y tecnológica argentina. Historia y perspectivas* (pp. 168-182). Buenos Aires: CEAL.
- Varsavsky, O. (1971). *Proyectos nacionales. Planteo y estudios de viabilidad*. Buenos Aires: Ediciones Periferia.
- Vasen, F. (2013). *La construcción de una política científica institucional en la Universidad de Buenos Aires (1986-1994)*. Tesis doctoral, Universidad Nacional de Quilmes. Recuperado de <http://unq.academia.edu/FedericoVasen/Tesis-doctoral>

- Vázquez, P. (2010, junio). *Guardia de Hierro: Origen, desarrollo, autodisolución y resurrección*. Ponencia presentada en V Jornadas sobre Historia Reciente, Universidad Nacional de Gral. Sarmiento, Buenos Aires.
- Vence Deza, X. (1995). *Economía de la innovación y del cambio tecnológico*. Madrid: Siglo Veintiuno Editores.
- Vercellone, C. (2011). *Capitalismo cognitivo. Renta, saber y valor en la época posfordista*. Buenos Aires: Buenos Aires.
- Vessuri, H. M. C. (1974). *El obrero del surco tucumano. Ocupación y estratificación social en la finca cañera*. San Miguel de Tucumán: Facultad de Agronomía y Zootecnia, Universidad Nacional de Tucumán.
- Vessuri, H. (1977). Procesos de transición en comunidades de obreros rurales y articulación social. Hermitte, E. y Bartolomé, L. (comps.) *Procesos de articulación social* (pp. 196-237). Buenos Aires: Amorrortu.
- Vessuri, H. (1980). Technological Change and the Social Organization of Agricultural Production. *Current Anthropology*, 21(3), 315-327.
- Vessuri, H. (1987). Las ciencias sociales en la Argentina: diagnóstico y perspectivas. En E. Oteiza (Comp.) *La política de investigación científica y tecnológica argentina. Historia y perspectivas* (pp. 339-363). Buenos Aires: CEAL.
- Vessuri, H. (2005). La tecnología de la investigación en la temprana fitotecnia sudamericana: Horovitz, el maíz y la investigación agrícola. En A. Arellano, P. Kreimer, J. Ocampo Ledesma y H. Vessuri (Comps.) *Ciencias agrícolas y cultura científica en América Latina* (pp. 15-44). Buenos Aires: Prometeo.
- Vessuri, H. (2007). *O inventamos o erramos. La ciencia como idea-fuerza en América Latina*. Bernal: Universidad Nacional de Quilmes Editorial.

- Vitelli, G. (2003). Razones y raíces de la incorporación tecnológica en el agro pampeano. *Revista Interdisciplinaria de Estudios Agrarios*, 18, 127-145.
- Wade, N. (1976). Repression in Argentina: Scientists Caught Up in Tide of Terror. *Science*, 194 (4272), 1397-1399.
- Weinberg, Gregorio. (1987). Aspectos del vaciamiento de la universidad argentina durante los regímenes militares recientes. En UNAM *Universidad y política en América Latina* (pp. 15-27). México: UNAM.
- West, H. (2009). *Campo de Herrera. Tucumán, Argentina. Un pueblo cooperativo para el desarrollo rural y la economía social (1967-2009)*. Manuscrito inédito.
- West, H. (1989). *La vigencia de Campo de Herrera*. Ponencia presentada en Primeras Jornadas Regionales sobre Desarrollo Rural, Universidad nacional de Tucumán, San Miguel de Tucumán.
- Williams, R. (2001). *El campo y la ciudad*. Buenos Aires: Paidós.
- Williamson, G. (2013). Paulo Freire: ¿Extensión o Comunicación? Sobre los profesionales y el conocimiento en el (no) diálogo de saberes. *CROLAR - Critical Reviews on Latin American Research*, 4, 50-52.
- Zalazar, R. D. (1988). *Aportes a la estructura poblacional de Campo de Herrera*. Tucumán: Centro de Investigaciones Sociológicas, UNT.

## **Fuentes**

### **Actas de sesiones y resoluciones del Consejo Directivo del INTA (inéditas)**

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, Acta de sesiones del Consejo Directivo N° 588, 17-11-1972.

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, Acta de sesiones del Consejo Directivo N° 591, 06-02-1973.

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, Acta del sesiones de Consejo Directivo N° 597, 27-04-1973.

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, Acta del sesiones de Consejo Directivo N° 598, 08-05-1973.

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, Resolución del Consejo Directivo N° 919/73, Informe Preliminar, 1973.

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, Acta de sesiones del Consejo Directivo N° 599, 06-07-1973.

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, Acta de sesiones del Consejo Directivo N° 601, 31-07-1973.

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, Acta de sesiones del Consejo Directivo N° 613, 23-01-1974.

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, Acta de sesiones del Consejo Directivo N° 615, 05-03-1974.

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, Acta de sesiones del Consejo Directivo N° 616, 19-03-1974.

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, Acta de sesiones del Consejo Directivo N° 617, 02-04-1974.

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, Acta de sesiones del Consejo Directivo N° 621, 14-05-1974.

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, Acta de sesiones del Consejo Directivo N° 622, 28-05-1974.

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, nota del presidente del INTA, Horacio Figueiras, al secretario de Agricultura, Horacio Giberti, Libro de Actas N° 55, 17-06-1974.

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, Acta de sesiones del Consejo Directivo N° 623, 18-06-1974.

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, Acta de sesiones del Consejo Directivo N° 624, reunión extraordinaria, 01-07-1974.

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, Acta de sesiones del Consejo Directivo N° 625, 11-07-1974.

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, Acta de sesiones del Consejo Directivo N° 630, 17-09-1974.

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, Acta de sesiones del Consejo Directivo N° 631, 1974.

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, Acta de sesiones del Consejo Directivo N° 632, 15-10-1974.

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, Resolución del Consejo Directivo N° 882, [cambio de autoridades] 12-1974.

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, Resoluciones del interventor dispuesto por el Poder Ejecutivo [7-05 al 1-09-1975].

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, Resolución N° 7, 12-05-1975 [traslado de personal].

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, Resolución N° 33, 26-05-1975 [traslado de personal].

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, Resolución N° 48, 04-06-1975 [traslado de personal].

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, Resolución N° 59, 06-06-1975 [traslado de personal].

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, Resolución N° 109 bis, 30-06-1975 [traslado de personal].

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, Resolución N° 242, 18-08-1975 [designación de nuevo director de la Escuela para Graduados en Ciencias agropecuarias].

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, Resolución N° 280, 29-08-1975 [creación del Programa Soja].

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, Resoluciones de la intervención militar, 24-04-1976 al 27-11-1980.

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, Secretaría de Estado de Agricultura y Ganadería, capitán de fragata Alberto Rafael Heredia [interventor], Resolución N° 1/76 y Planilla Anexa, 31-04-1976 [cesantías].

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, Resolución /79, 27-11-1979 [cesión de recursos fitogenéticos].

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, Acta de sesiones del Consejo Directivo N° 1, 27-11-1980.

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, Acta de sesiones del Consejo Directivo N° 1, 11-12-1980.

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, Acta de sesiones del Consejo Directivo N° 9, 14-04-1981.

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, Acta de sesiones del Consejo Directivo N° 11, 21-05-1981.

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, Secretaría de Agricultura y Ganadería. *Informaciones actualizadas para el reingreso de personas*. Buenos Aires, 28 de noviembre de 1984.

#### **Otros documentos institucionales (éditos e inéditos)**

Figueiras, H. (1973) *A todo el personal del INTA*. Buenos Aires, agosto de 1973 (inédito).

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (1981). *Informe de Contenido*, octubre 1980 (Circulación interna).

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (1978). *Dos años de labor*. Buenos Aires: Ediciones INTA [informe de los primeros dos años de intervención militar].

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, Centro Nacional de Investigaciones Agropecuarias (1970). *Nómina del personal del equipo de Ecología Vegetal del CNIA*. Buenos Aires: Instituto de Botánica Agrícola. 24-10-1970.



Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, Centro Nacional de Investigaciones Agropecuarias (1969). Nota dirigida por Jorge Morello al director del Instituto de Botánica Agrícola. Castelar, 24/10/1969.

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, Centro Nacional de Investigaciones Agropecuarias (1972). Nota dirigida por Arturo Enrique Ragonese, [director del CNIA], a Walter Kugler, [director nacional del INTA], 29/12/1972.

### **Documentos de trabajo y difusión del área de Extensión**

Arroyo, R. y Rodríguez Pujol, L. (1961). La estación experimental informa sobre estudios de la comunidad rural y la labor de extensión. *Boletín de Divulgación*, 9, 7-15. Pergamino: Ediciones INTA.

Domínguez, J. A. y Hervás, A. (1973). *Cooperativas agropecuarias de trabajo. Una alternativa de solución para el problema tucumano*. Famaillá: INTA- Estación Experimental Agropecuaria Famaillá.

Domínguez, J. A. y Hervás, A. (1970). Cooperativas agropecuarias de trabajo. Una alternativa de solución para el problema tucumano. *Serie Estudios económicos y sociales*. Famaillá: INTA- Estación Experimental Agropecuaria Famaillá.

FAO-INTA (1972). Estudio analítico del Servicio de Extensión de la República Argentina. Proyecto de Investigación en Extensión Rural. *Serie Formación Técnica*, 18, 28-29. Buenos Aires: Ediciones INTA.

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (1962a). Amistad, noviazgo, matrimonio. *Serie Clubes 4-A Relaciones Humanas*. Buenos Aires: Ediciones INTA [Folleto destinado a los Clubes Juveniles Rurales 4-A y a grupos rurales del Movimiento Rural de la Acción Católica Argentina].

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (1962b). ¿Qué es un Club Juvenil Rural 4-A? *Hoja de divulgación N° 13*. Villa Ángela: Agencia de Extensión Rural Villa Ángela.

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (1964). Estatutos y reglamentos de clubes juveniles rurales 4-A. *Serie Clubes Juveniles Rurales 4-A, Grupo y Comunidad*. Buenos Aires: Ediciones INTA.

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (1967). *Desarrollo integral de jóvenes rurales*. Buenos Aires: Ediciones INTA.

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (1968a). *Ejemplo Integrado para Clubes 4-A*. Buenos Aires: Ediciones INTA.

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (1968b). Qué es eso...de Clubes 4-A. *Serie Clubes Juveniles Rurales. Grupo y Comunidad*. Buenos Aires: Ediciones INTA. [Folleto destinado a familias y a instituciones del área rural].

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (1969). Usted también es responsable. *Serie Clubes Juveniles Rurales 4-A, Grupo y Comunidad*. Buenos Aires: Ediciones INTA [Folleto destinado a padres e instituciones de la comunidad rural].

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (1970). El futuro es de los jóvenes. *Serie Clubes Juveniles Rurales 4-A- Grupo y Comunidad*. Buenos Aires: Ediciones INTA [folleto destinado a dirigentes de la comunidad. 3000 ejemplares].

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (s/f). *Esta es una respuesta: Clubes 4-A*. Buenos Aires: Ediciones INTA.

*Extensión Rural* (1975). Dirección Nacional Asistente de Extensión y Fomento Agropecuario, INTA, (1), 1.

*Extensión Rural* (1976). Dirección Nacional Asistente de Extensión y Fomento Agropecuario, INTA, (1), 2.

*Extensión Rural* (1976). Dirección Nacional Asistente de Extensión y Fomento Agropecuario, INTA, (1), 6.

*Extensión Rural* (1976) Dirección Nacional Asistente de Extensión y Fomento Agropecuario, INTA, año (1), 8.

*Extensión Rural* (1976). Dirección Nacional Asistente de Extensión y Fomento Agropecuario, INTA, (1), 9.

*Extensión Rural* (1976). Dirección Nacional Asistente de Extensión y Fomento Agropecuario, INTA, (1), 12.

*Extensión Rural* (1977). Dirección Nacional Asistente de Extensión y Fomento Agropecuario, INTA, (2), 1.

*Extensión Rural* (1977). Dirección Nacional Asistente de Extensión y Fomento Agropecuario, INTA, (2), 15.

*Extensión Rural* (1977). Dirección Nacional Asistente de Extensión y Fomento Agropecuario, INTA, (2), 16.

*Extensión Rural* (1978). Dirección Nacional Asistente de Extensión y Fomento Agropecuario, INTA, (3), 17.

*Extensión Rural* (1978). Dirección Nacional Asistente de Extensión y Fomento Agropecuario, INTA, (3), 18.

*Extensión Rural* (1979). Dirección Nacional Asistente de Extensión y Fomento Agropecuario, (4), 19.

*Integración y Extensión Rural* (1982), (7), 26.

*Integración y Extensión Rural* (1982), (8), 28.

Lemos, O. R. (1976). Editorial. *Extensión Rural*. Dirección Nacional Asistente de Extensión y Fomento Agropecuario, INTA, (1), 6, 1-7.

### **Documentos de investigación, difusión y circulación interna del área de Economía y Sociología rural**

Actis, J. J. (1986). *La incorporación del riesgo en modelos de decisión*. Buenos Aires: Ediciones INTA.

Bilbao, S. (1971). *Capacitación y organización de las cooperativas de trabajo agrícolas de la provincia de Tucumán*. Famaillá: Estación Experimental Agronómica Famaillá. (Circulación interna).

Bilbao, S. (1972). *Investigación sociocultural en una cooperativa agropecuaria de trabajo*. Informe de trabajo. Famaillá: Estación Experimental Agronómica Famaillá.

Bilbao, Santiago (1972, junio). *Estudios de caso de minifundio*. Seminario sobre identificación y análisis del problema del minifundio en la Argentina, IICA- Zona Sur, INTA- EERA Famaillá, Famaillá.

Bilbao, S. (1973). *Formas productivas de la provincia de Tucumán*. Documento interno de trabajo. Famaillá: Estación Experimental Famaillá.

Coscia, Adolfo (1983). La investigación de mercado y su relación con su desarrollo tecnológico agropecuario. *Boletín de Divulgación Técnica N ° 57*. Buenos Aires: Ediciones INTA.

Costa, José A. (1973). *Pobreza rural: el caso del minifundio algodonero*. Tesis de Magíster Scientiae, Programa de Economía Agraria, Escuela para Graduados en Ciencias Agropecuarias, Castelar.

Ferreira, C., Torchelli, J. C., Egea, A., Cascardo, A. (1974) *Diagnóstico de la región pampeana*, Grupo de Programación Regional de la Región Pampeana. Buenos Aires: Ediciones INTA.

Fernández de Ulivarri, R. (1973, diciembre). *Proyecto de asentamiento con asalariados agrícolas y trabajo comunitario de la tierra en Tucumán, República Argentina*. Ponencia presentada en Seminario Internacional Desarrollos en las Estructuras Agrarias de América Latina, Berlín.

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (1969). El minifundio cañero en la provincia de Tucumán. *Investigación de Mercados*. Famaillá: Ediciones INTA.

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (1974a). El Departamento de Economía en el marco institucional del INTA. Fundamento y naturaleza de sus actividades y contenido de su Programa de Investigaciones. Documento Interno Preliminar para discusión. *Reunión de Reprogramación, Programa de Estudios Económicos y Sociales*. Castelar: Ediciones INTA.

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (1974b). *Sistema de Información para el Plan Nacional de Abastecimiento de productos e insumos de origen agropecuario (SIPNA)*. *Lineamientos Metodológicos y Planteo Operativo del Proyecto*. Documento de Trabajo N ° 1. Castelar: Ediciones INTA.

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (1974c). El Plan Trienal y el subprograma trigo. Información General. *Economía Agrícola*, 33-47. Pergamino: Ediciones INTA.

Kugler, H. y Triccó H. (1969). Créditos bancarios para el productor agropecuario disponibles en diversos bancos del área agrícola del norte de Buenos Aires y el sur de Santa Fe. *Boletín de Divulgación*, 45, 23-34. Buenos Aires: Ediciones INTA.

Martínez, J. C., Trigo, E. y Costa, J. A. (1973). Bases para la política institucional del INTA en el NEA. Problemática Regional y prioridades sectoriales. Serie *Divulgación* 4, 3-32. Buenos Aires: Ediciones INTA.

Martínez, J. C. (1972). Un marco conceptual para el análisis económico del cambio tecnológico en la agricultura pampeana. Serie *Investigación* 10, Castelar: Ediciones INTA-Departamento de Economía, Escuela Para Graduados en Ciencias Agropecuarias.

Nocetti, J., Pizarro, J. y Pereyra, C. (1965). *Los estudios de Administración Rural en la Estación Experimental Agropecuaria Pergamino*. Pergamino: Ediciones INTA.

Piñeiro, M. E, Martínez, J. C. y Armelín, C. A. (1973). *Política tecnológica y problemática agropecuaria nacional: Región Pampeana y 'resto del país'*. Documento Interno, Borrador para discusión. Castelar: Departamento de Economía INTA Castelar.

Piñeiro, M. E. (1975). Propuesta de una metodología para el tratamiento de la renta de la tierra en el cálculo de costo de la producción agropecuaria. Serie *Investigación*, 17, 27-42. Buenos Aires: Ediciones INTA-Departamento de Economía,-Escuela para Graduados en Ciencias Agropecuarias.

Torchelli, J. C. (1973). *El minifundio en la región maicera*. Tesis de Magíster Scientae, Programa de Economía Agraria, Escuela para Graduados en Ciencias Agropecuarias, Castelar.

Triccó, H. (1973). Líneas de créditos bancarios para el productor agropecuario disponibles en la zona de Pergamino. *Boletín de Divulgación*, 21,15-19. Pergamino: Ediciones INTA.

Trigo, E., Quagliani, A. y Díaz Bonilla, E. (1975). El uso de variables no tradicionales en el análisis de la estructura de mercado. *Serie Investigación*, 21, 7-24. Buenos Aires: Ediciones INTA.

West. H. y Sarraceno, M. (1974, marzo). *Cooperativa Trabajadores Unidos Ltda. Campo de Herrera, una experiencia de desarrollo rural en Tucumán, Argentina*. Ponencia presentada en V Reunión Interamericana de Ejecutivos de Reforma Agraria. IICA, Asunción, Paraguay.

### **Documentos de investigación y difusión del área de Genética aviar**

Kraft. S. y M. Bonino (1966). *Sorghum in Poultry Nutrition*. Ponencia presentada en XIII Congreso Mundial de Avicultura. Acta 236. Kiev, URSS.

Kraft (1966). El sorgo en la nutrición aviar. *Boletín Técnico N ° 17*. Pergamino: Estación Experimental INTA Pergamino.

Kraftt, S *et al.* (1968). *La Genética Nutricional en el Desarrollo Regional*. Ponencia presentada en el II Congreso Mundial Zootecnia, Acta 413, Maryland, Estados Unidos.

Kraft. S. *et al.* (1970a). *Gallinas Araucanas y su susceptibilidad a Leucosis*. Ponencia presentada en el XIV Congreso Mundial de Avicultura, Madrid, España.

Kraft. S. *et al.* (1970b). *Genética Nutricional en la Adaptación de Estirpes de Aves para Regiones en Desarrollo. Antecedentes, experimentación, resultados y aplicaciones*. Ponencia presentada en el XIV Congreso Mundial de Avicultura, Madrid, España.

Kraft. S. (1973). The Development of Poultry Breeding in Argentina and its Future in Latin America. *FAO Expert Consultation on Animal Resources*. Nouzilly: FAO.

Kraft, S. (2004, septiembre). *La gallina (Gallus gallus), un caso de antigua complementación con el humano*. Ponencia presentada en el XV Congreso Nacional de Arqueología Argentina, Río Cuarto, Argentina.

### **Documentos de investigación y difusión del área de fitotecnia**

Coscia, A. (1964). Evolución económica de los híbridos en la producción de maíz. *Informe Técnico*. Buenos Aires: Ediciones INTA.

Coscia, A. (1972). Soja. Sus perspectivas económicas en la Argentina. *Informe Técnico*. Buenos Aires: Ediciones INTA.

Coscia, A. (1974). La soja. Evolución y perspectivas. *Informe Técnico N ° 124*. Buenos Aires: Ediciones INTA.

Coscia, A. (1980). ¿Por qué Argentina produce maíz Flint? *Boletín de Divulgación Técnica N ° 50*. Buenos Aires: Ediciones INTA.

Couretot, A. (1971). *Costos operativos y retornos por hectárea de los cultivos de maíz, girasol, sorgo granífero, trigo y lino*. Pergamino: Ediciones INTA.

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (1982). *Concurso Nacional de Soja. Guía para el cultivo de soja*. Buenos Aires: Ediciones INTA.

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (s/f). *Red de Bancos y colecciones de recursos fitogenéticos del INTA*. Buenos Aires: Ediciones INTA.

Moscardi, E. (2007). *La política de vinculación tecnológica del INTA (1987-2006): hitos de una estrategia innovadora*. Buenos Aires: Ediciones INTA.

Rath, J., Conta, H. C., Tombetta, E. E., Kugler, W. F y Moro, M. S. (1964). *Descripción de las variedades de trigo cultivadas en la Argentina*. Buenos Aires: Ediciones INTA.



Roquero, E. D. A. (1972). *Utilización de fardos de rastrojo de soja en la alimentación de ganado vacuno y en la producción de papel*. 3° Reunión Técnica Nacional de Soja. Posada, Misiones. Argentina.

Roquero, E. D. A. (1974). *Panorama del cultivo de soja en la Región Pampeana*. INTA. Casilda: Ediciones INTA Argentina.

Rossi, J. C., Coscia, A. y Pizarro, J. (1966). Maíz: informe preliminar de su producción y comercialización. *Informe Técnico* N° 52. Buenos Aires: Ediciones INTA.

Saumell, H. (1970). *Red Nacional de Soja: su importancia y resultados*. Segunda. Reunión Técnica Nacional de Soja, Buenos Aires, Argentina.

Saumell, H. (1975). *Soja. Información técnica para su mejor conocimiento y cultivo*. Buenos Aires: Hemisferio Sur.

### **Documentos de origen judicial**

Poder Judicial de la Nación, Causa Penal, querrela en autos caratulados N. N s/ Privación ilegal de la libertad, expediente N ° 14576/04, Juzgado Criminal Correccional Federal N° 3, Sec.6, sede del Tribunal Comodoro Py, 2002.

Benedetti, B. V. (2004). Declaración testimonial, N/N sobre privación ilegal de la libertad, expediente N 14.576/2004, Juzgado N 3, Sec. N 6, Tribunal de Comodoro Py. [Ex investigador del Instituto de Zoonosis y delegado gremial de ATE-INTA].

Cilley, C. E. (2004). Declaración testimonial, N/N sobre privación ilegal de la libertad” expediente N 14.576/2004, Juzgado N 3, Sec. N 6, Tribunal de Comodoro Py. [Presidente del INTA desde marzo de 1976 hasta el 24 de marzo de 1976].

Elicalbe, S. E. (2004). Declaración testimonial, N/N sobre privación ilegal de la libertad, expediente N 14.576/2004, Juzgado N 3, Sec. N 6, Tribunal de Comodoro Py, [Dibujante y auxiliar de investigación del Instituto de Botánica del CNIA del INTA].

Golberg, A. D. (2011). Declaración testimonial, Poder Judicial de la Nación, Poder Judicial de la Nación, Buenos Aires.

Platz, N. Z. (2004). Declaración testimonial, en N/N sobre privación ilegal de la libertad, expediente N 14.576/2004, Juzgado N 3, Sec. N 6, Tribunal de Comodoro Py. [Ex administrativa del CNIA].

Prividera, N. y Prividera, G. (2004). Declaración como querellantes, N/N sobre privación ilegal de la libertad, expediente N 14.576/2004, Juzgado N 3, Sec. N 6, Tribunal de Comodoro Py.

Moglie, A. (2004). Declaración testimonial, en N/N sobre privación ilegal de la libertad, expediente N 14.576/2004, Juzgado N 3, Sec. N 6, Tribunal de Comodoro Py. [Dirigente de ATE INTA, detenido en 1976].

Ramazoti, E. (2004). Declaración testimonial, N/N sobre privación ilegal de la libertad, expediente N 14.576/2004, Juzgado N 3, Sec. N 6, Tribunal de Comodoro Py. , [Investigador del CNIA desde 1968 hasta su cesantía en 1976].

Vitali, B. C. (2004). Declaración testimonial, N/N sobre privación ilegal de la libertad, expediente N 14.576/2004 tramitada ante el Juzgado N 3, Sec. N 6, Tribunal de Comodoro Py, 2004. [Docente del jardín maternal del CNIA entre 1973 y 1986].

### **Documentos del Archivo General de la Armada (AGA)**

Archivo General de la Armada, Legajo MR 016775, capitán de navío Alberto Rafael Heredia.

Archivo General de la Armada, Dirección General del personal Naval, Legajo de servicio de Alberto Rafael Heredia.

Archivo General de la Armada, Foja de conceptos, Alberto Rafael Heredia.

Archivo General de la Armada, nota dirigida por Mario Cadenas Madariaga [secretario de Estado de Agricultura y Ganadería de la nación] al capitán de navío Hugo Montagni [delegado naval de la Junta Militar en el Ministerio de Economía], en Legajo MR 016775, folio 132. Bs. As., 3 de septiembre, 1976.

**Documentos del archivo de la ex Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPBA)**

DIPBA (1972-1974). *INTA de Pergamino. Posible actuación de célula izquierdista. 1972-1974.* Mesa C, Carpeta Varios, Legajo N° 451, folios 1 a 30. Fechas extremas del legajo: 1972/1974.

DIPBA (1973). *Información sobre delegados gremiales de ATE INTA,* Mesa B, Carpeta 90, legajo 5.

DIPBA (1974). *Infiltración de Elementos Comunistas en el INTA,* Mesa C, Varios, Legajo 451.

DIPBA (s/f). Mesa DS, Varios, Legajo 3769 [Referencias al equipo de Ecología de INTA Castelar].

DIPBA (1974). *Informes sobre el Centro Nacional de Investigaciones Agropecuarias, INTA Castelar,* Mesa Ds, Carpeta Varios, Legajo N° 4082, folios 35.

DIPBA (1974). *Infiltración extremista en INTA Castelar y San Pedro,* abril-junio 1974, Mesa DS, Varios, Legajo 1785.

DIPBA (1975). *Se solicita actividades del Dr. Hugo Morello en Castelar,* Mesa DS, Varios, Legajo 3769.

DIPBA (1975). *Adoctrinamiento marxista en INTA Castelar,* Mesa DS, Varios, Legajo 4082, noviembre, 1975.

DIPBA (1976). *Asociación del personal del INTA, APINTA*”, Mesa B, legajo 156. [Registro de la nómina de la comisión directiva del sindicato APINTA].

DIPBA, Fichas personales de Gustavo Rodolfo Giombini, MESA “D(s)”, Carpeta Varios, Legajos N° 8460, 8260, 11656, 16261, 8050. 6558, 1425, 14412, 16883, 2224.

DIPBA, Fichas personales de Carlos Rafael Llerena Rosas, Mesa D, legajos 6558, 1425, 14412, 16883, 2224, Diario del Juicio a las Juntas.

DIPBA, Mesa A, Político, Legajo N ° 1

DIPBA, Mesa A, Estudiantil, Legajos N ° 54, 27, 20, 151,1.

### **Documentos desclasificados del Departamento de Estado de Estados Unidos**

Colección *State Argentina Declassification Project* (1975-1984). Recuperados de: <http://foia.state.gov/SearchColls/CollsSearch.asp>

#### *FIRINGS AND ARREST IN ARGENTINA TECHNOLOGICAL INSTITUTES*

Buenos Aires, 04-12-1976. Telegrama.

#### *REPORTED ARREST OF AGRICULTURAL RESEARCHES*

Buenos Aires, 04-09-1976. Telegrama.

#### *FORD FOUNDATION CALL RE EMPLOYEES AT CASTELAR*

Buenos Aires, 04-08-1976. [Memorándum del agregado agrícola James Rudbeck a la embajada estadounidense].

#### *DETENTION OF FORMER FORD FOUNDATION GRANTEES IN ARGENTINA*

Buenos Aires, 4-04- 1976.

### **Diarios y revistas**

*Clarín rural*, “Los objetivos iniciales fueron cumplidos”, sábado 28 de noviembre, 1981.

*El Cronista Comercial*, “Nuevas opiniones sobre la proyectada ley agraria”, 13 de agosto, 1974.

*El Cronista Comercial*, “Reportaje al Secretario de Agricultura y Ganadería Ing. Horacio Giberti”, 26 de julio, 1974.

*El Cronista Comercial*, “Opina La Rural sobre el anteproyecto de ley agraria”, 29/08/1974.

*El Economista*, “Cuestionario sobre el Proyecto de Ley Agraria”, Bs. As., 02/08/1974.

*El Cronista Comercial*, “Ley agraria”, 02/09/1974.

*El Cronista Comercial*, “UPARA se definió a favor del proyecto de ley agraria.”, 29/07/1974.

*El Cronista Comercial*, “Diputados de la APR piden un informe sobre la ley agraria”, 29/08/1974.

*El Cronista comercial*, “Las ligas agrarias formularon a Gelbard distintos pedidos”, 2/09/1974.

*El pueblo*, “El Ingeniero Arequipeño Carlos Llerena R. murió en Argentina víctima del terrorismo”, Arequipa, viernes 29 de noviembre, 1974.

*La Chacra*, “Normalización de organismos intervenidos”, N° 571, Buenos Aires, junio, 1978.

*La Chacra*, “Misión Cumplida”, en *La Chacra* N° 602, Buenos Aires, enero 1981.

*La Nación*, “La situación del INTA”, lunes 13 de octubre, 1975.

*La Nación*, “La recuperación del INTA”, viernes 29 de octubre, 1976.

*La Nación*, “Dos años de labor”, miércoles 19 de julio, 1978

*La Nación*, “Un nuevo espíritu en el INTA”, 12 de agosto, 1978.

*La Nación*, “El INTA 25 años después”, viernes 4 de diciembre, 1981.

*La Opinión* (1973a) “Intervinieron dos centros tecnológicos”, 25 de mayo, 1973.

*La Opinión* (1973b). “Trascienden posibles designaciones en el área económica”, 27 de mayo de 1973.

*La Opinión* (1973c). “El poder Ejecutivo mandó al Congreso 20 leyes de reforma económica”, 19 de junio, 1973.

*La Opinión* (1973d). “Gelbard analizó una serie de leyes para el sector agrario”, 20 de junio, 1973.

*La Prensa*, “El INTA amenazado”, sábado 9 de febrero, 1980.

*La Prensa*, “Asumieron los integrantes del Consejo Directivo del INTA”, viernes 21 de diciembre 1980.

*La voz de General Guido*, “La labor del INTA en Coronel Dorrego”, 17 de octubre de 1970.

*La voz de General Guido*, “Sucede en Coronel Dorrego.” [Carta abierta al INTA del Ing. Carlos Llerena Rosas], 3 de agosto, 1973.

*Mercado*, “La industria que nace en el campo”, 24 de marzo de 1977.

## Otras fuentes

Frente de Izquierda Popular (1974). *Hasta la Victoria Compañero Llerena*. [Comunicado del FIP, firmado por Gabriel Alberto Claverie (Secretario de Prensa) y Víctor Hugo López (Secretario General)]. Cnel. Dorrego, 31 de octubre de 1974.

Giberti, H. (1974). *Exposición sobre el anteproyecto de ley agraria, efectuada por el Ing. Giberti en la Facultad de Agronomía el 28-06-1974*. [Versión mecanografiada del audio de la exposición].

Junta Militar (1980). *Documentos Básicos y Bases Políticas de las Fuerzas Armadas para el Proceso de Reorganización Nacional*. Buenos Aires: Imprenta del Congreso de la Nación.

Ley Nacional N 23.058/84. [Restituye al INTA su autarquía institucional y financiera]. Buenos Aires, 16 de diciembre, 1983.

Llerena Rosas, C. (1972). *Sucede en Dorrego. Carta a la Comunidad*. Coronel Dorrego, 3 de noviembre, 1972.

Martínez de Hoz, J. A. (1981). *Bases para una Argentina Moderna 1976-1980* Buenos Aires: Compañía Impresora Argentina.

*Militancia* (1973). INTA Castelar... y Nunca Volverá..., *Militancia*, 30, 16-17.

COMPAÑERO NÉSTOR MOCOROA: SANGRE DERRAMADA NO NEGOCIABLE. ¡PRESENTE! *Militancia Peronista para la Liberación*, 21, 1973.

Recuperado en: <http://www.cedema.org/ver.php?id=2097>

Ministerio de Economía (s/a). Partidas presupuestarias nacionales del área de ciencia y técnica, período 1973-1983.

Rapela de Mangone, María José. Correspondencia. Archivo familiar. Buenos Aires, 5/3/77; 18/11/76; 23/9/76; 12/8/76; 17/6/76; 9/2/76; 5/12/75, 7/8/75. [Bibliotecaria del INTA, detenida-desaparecida].

### **Entrevistas realizadas:**

1. José Llerena Rosas, hermano de Carlos Llerena Rosas, extensionista del INTA asesinado el 39/10/1974. City Bell, 28/06/2011
2. Ex asesor técnico de las Ligas Agrarias (Santa Lucía). Buenos Aires, 9/06/2010.
3. Bióloga, integrante del área de Suelos de la estación experimental de Pergamino hasta su cesantía en 1974. Buenos Aires, 18/08/2011.
4. Ex integrante del área de Economía del INTA, cesante en 1976. Balcarce, 15/06/2010.
5. Hugo West, Cooperativa Agropecuaria de Trabajo Campo Herrera, Famaillá, Tucumán, 21/09/2010.
6. Socióloga, ex integrante del equipo de Economía de INTA Pergamino, cesante en 1976. Bs. As., 25/10/2012, 25/10/2010.
7. Ex supervisora de Hogar Rural, extensionista. 9 de Julio, 04/09/2011.
8. Extensionista, 9 de Julio, 02/09/2011.
9. Entrevista colectiva a ex integrantes de la estación experimental Pergamino, Pergamino, 17/07/2011.
10. Técnica en Suelos, hasta su cesantía y detención en 1976. Pergamino, 26/11/2010.
11. Investigadora del Programa Trigo, Instituto Recursos Biológicos, CNIA. Castelar, 25/07/2011.
12. Responsable Programa Cereales, fitomejorador de maíz. INTA- EEA Pergamino, Pergamino, 15/02/2012.
13. Fitomejorador de soja del INTA desde 1979. Estación Experimental INTA Oliveros, Santa Fe, Oliveros, 31/10/2011.
14. Curador del Banco de Germoplasma de Maíz de INTA Pergamino. Estación Experimental INTA Pergamino, 21/09/2011.



15. Ex director del Instituto de Genética "Ewald A. Favret" INTA, ex director interino del Centro Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INTA), ingresante como becario en 1977. Castelar, 06/06/2011.
16. Gerente del área Gestión de Convenios de Vinculación Tecnológica del INTA. INTA Central, Buenos Aires, 1/12/2011.
17. Hebe Vessuri, Buenos Aires., 30/07/2010 y 13-04-2011.
18. Ex jefe de agencia de extensión rural INTA Pergamino, Paraná, 28/10/2011.
19. Extensionista del INTA desde 1978. Río Cuarto, mayo, 2013.
20. Daniel Crispiani, ex asesor de la Secretaría de Agricultura y Ganadería 1973/1974. Buenos Aires, 3/12/ 2012.
21. Técnicos de Suelos, CNIA, Castelar, 14/09/2011.
22. Investigador del Instituto de Genética, ex becario del CNIA. CNIA, Castelar, 29/12/2010.
23. Ingeniero agrónomo. ex integrante de la Escuela para Graduados en Ciencias Agropecuarias. Buenos Aires., 13/08/2010.
24. Administrativa, delegada de ATE INTA, cesanteada en 1976, reincorporada en 1985. Castelar, 02/02/ 2011.
25. Miembro del área de Economía, estación experimental Pergamino. Bs. As., 15/12/2010.
26. Ingeniero agrónomo, ex investigador del Departamento de Economía de INTA Castelar y ex docente de la Escuela Para Graduados en Ciencias Agropecuarias hasta 1976. Bs. As., 27 /05/ 2010.
27. Martín Piñeiro, Dr. en Economía Agraria, investigador del Departamento de Economía de INTA Castelar y director del Posgrado en Economía Agraria de la Escuela para Graduados en Ciencias Agropecuarias hasta 1976, ex subsecretario de Asuntos Agrarios. Bs. As., 25/06/ 2010.
28. Socióloga, Mg. en Economía Agraria por la Escuela para Graduados en Ciencias Agropecuarias (INTA). Buenos Aires, 10/05/ 2010.
29. Egresada de la Escuela Para Graduados en Ciencias Agronómicas, ex integrante del Departamento de Economía de la estación experimental Balcarce. Balcarce, 11/11/ 2009 y 15/06/2010.

30. Ingeniero agrónomo, Mg. Economía Agraria (EPG-INTA), investigador del INTA Pergamino hasta 1976, reincorporado en 1987. Pergamino, 12/07/ 2010 y 26/11/2010.
31. Administrativa a cargo de la guardería de la estación experimental Pergamino hasta 1976. Pergamino, 12/06/ 2010.
32. Economista, investigadora del Departamento de Economía desde 1977. Balcarce, 11/11/ 2009 y 15/06/ 2010.
33. Ingeniero agrónomo. Ex extensionista en la década de 1970, investigador del INTA. Buenos Aires, 9/10/ 2009.
34. Ingeniero agrónomo., ex becario del CNIA desde 1979, investigador del INTA. Buenos Aires, 08/09/2009.
35. Ingeniera agrónoma, investigadora del INTA desde 1969, ex integrante del equipo de Ecología. Buenos Aires, 12/07/ 2010.
36. Ingeniero agrónomo, extensionista del INTA desde 1977. Bs. As., 10/10/2009.
37. Jorge Morello. Ex director del Grupo de Ecología del Centro de Investigaciones de INTA Castelar. Bs. As., FADU, 05/11/ 2009.
38. Veterinario, investigador del INTA desde 1960, ex director del Departamento de Producción Animal, estación experimental Balcarce. Balcarce, 11/11/2009.
39. Bibliotecario, estación experimental Balcarce. Balcarce, 11/11/ 2009.
40. Sociólogo, investigador del Instituto de investigación y desarrollo tecnológico para la Pequeña Agricultura Familiar (IPAF), INTA. Buenos Aires, 25/09/2009.
41. Ingeniero agrónomo, ex becario del equipo de Ecología de INTA Castelar. Bs. As., 5/08/ 2012.
42. Ex investigador del grupo de Ecología de INTA Castelar hasta su cesantía en 1975. Bs. As., 4/03/ 2010.
43. Técnico de la Estación Experimental Agronómica Famaillá desde 1972. Famaillá, 20/09/ 2010.
44. Integrante de la Cooperativa Agropecuaria de Trabajo, “Campo de Herrera”. San Miguel de Tucumán, 21/09/2010.
45. Productor de la Cooperativa Agropecuaria de Trabajo, “Campo de Herrera”. Famaillá, 21/09/ 2010.

46. Sociólogo, especialista en desarrollo rural, investigador del INTA desde 1982. Buenos Aires, INTA Central, 17/08/2010.
47. Ingeniero agrónomo, ex integrante del equipo de Física de Suelos, EEA Pergamino, hasta su cesantía 1976. Reincorporado en 1984. La Plata, 12/04/2010.
48. Alberto Golberg, Ecólogo, Bs. As, 15/09/2010, 15/11/2011.
49. Administrativa CNIA Castelar, familiar de Carlos Costa, detenido-desaparecido. Buenos Aires, 13/04/2011.
50. Becario del CNIA Castelar, familiar de Gustavo Giombini, detenido-desaparecido. Castelar, 03/04/2011.
51. Ex asesor de la Dirección Nacional de INTA entre 1973 y 1974. Comunicaciones personales, 2013.
52. Entrevista a técnicos e investigadores del IPAF NOA. Maimará (Jujuy), 17/09/2010.
53. Ingeniero Agrónomo, extensionista. Paraná, 12/05/2012.
54. Entrevista colectiva a graduados de la Escuela para Graduados en Ciencias Agropecuarias. INTA Chile, Buenos Aires, 13/05/ 2010.
55. Sociólogo, ex asesor de la Dirección Nacional de INTA entre 1973 y 1974. Buenos Aires,
56. Siegfriedo Kraft, Río Cuarto, Siegfriedo Kraft, ex investigador de la estación experimental INTA Pergamino desde 1959 hasta su cesantía en 1976. Ex docente de Producción Avícola de la Universidad Nacional de Río Cuarto y de Producción Animal V en la Universidad Católica de Córdoba. Río Cuarto, Córdoba, 15/11/2012; 5/12/ 2012; 02/01/ 2013, 6/04/ 2013.
57. Ex integrante de la Liga Agraria Correntina, entrevista, Corrientes, 13/12/2009.